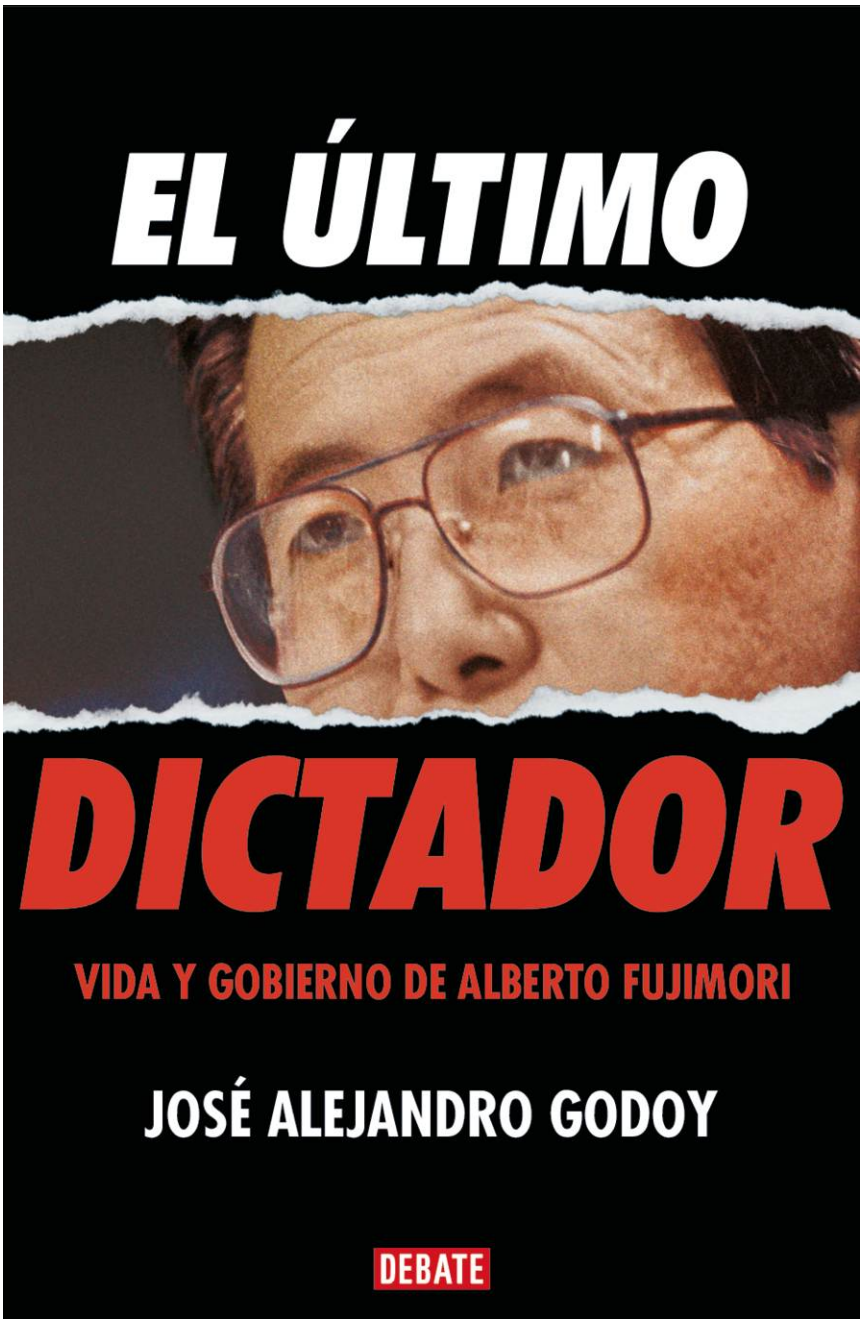
EL ÚLTIMO

DICTADOR

VIDA Y GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

JOSÉ ALEJANDRO GODOY

DEBATE



EL ÚLTIMO DICTADOR

EL ÚLTIMO DICTADOR

Vida y gobierno de
Alberto Fujimori

JOSÉ ALEJANDRO GODOY

DEBATE

A mis padres y su generación. Sobrevivientes de gobiernos militares, hiperinflación,
escasez, desempleo, subempleo, gobiernos corruptos,
pandemias y, por supuesto, la última autocracia de nuestra historia republicana.

A mis alumnos y sus pares. Para que, en medio de la democracia con crecimiento económico que les tocó vivir durante la mayor parte de su vida,
sepan que siempre hay que cautelar la libertad.

Y a las víctimas de nuestro último dictador.

«Here we are now, entertain us».
Nirvana. Smells like teen spirit

«¿Por qué vas lastimando
a quien se ve distinto?
Imponiendo posturas,
siempre con mano dura».
Los Fabulosos Cadillacs. Mal bicho

«Cada nación depende del corazón de su gente.
Y a un país que no se vende, nadie lo podrá comprar».
Rubén Blades. Prohibido olvidar

ÍNDICE

Presentación
Sorpresas te da la vida
Viaje a la semilla
Que Dios nos ayude
Luces y sombras de una política antisubversiva
El gobierno en los tiempos del cólera
Barrios Altos
Rumbo de colisión
Disolver, disolver
El año que vivimos en peligro
La Cantuta
Su misión cumplida
Los otros crímenes de Colina y sus exintegrantes
El apogeo
Susana y la familia
Campaña en guerra
Camino a la amnistía
La tregua falaz
Delineando la re-reelección
Rehenes
Annus horribilis
Aguas turbias
Con todo el apoyo
El mundo de abajo
Ni limpias, ni justas, ni transparentes
Cuatro suyos y muchos nuestros
El derrumbe
Últimas noticias
Bibliografía
Sobre el autor

Sobre el libro
Legales

PRESENTACIÓN

Hace poco más de treinta años que Alberto Fujimori apareció en la vida política nacional. Desde un primer momento se convirtió en una de las principales figuras de análisis para aquellos científicos sociales que tienen a nuestro país como principal objeto de investigación.

Para los politólogos, Fujimori ha sido motivo de estudio en varios niveles. Para comenzar, fue el pionero en establecer, luego del fin de la Guerra Fría, un tipo de régimen en América Latina que Steven Levitsky y Lucan Way han denominado, con precisión, autoritarismo competitivo[1]. Asimismo, resulta evidente que su elección y posterior mandato liquidó el sistema de partidos que tuvimos desde 1978 y, con posterioridad, pasamos a contar con coaliciones de independientes, como su original Cambio 90, que disputaron el poder en las elecciones para los distintos niveles de gobierno del Perú actual. Junto a Carlos Menem y Álvaro Uribe, Fujimori supo conjugar reformas de mercado y cercanía con sectores empresariales con amplias políticas populistas y de asistencialismo, a la par de sostener una tendencia a la permanencia en el poder por más tiempo que el previsto originalmente por la Constitución.

Otros estudiosos han enfatizado en la construcción de capacidades en algunas entidades del Estado durante el decenio de Fujimori, así como en la destrucción de determinadas entidades en el mismo periodo. El proceso que se le siguió por violaciones a los derechos humanos es visto como modélico para el procesamiento de gobernantes involucrados en este tipo de casos. La organización criminal que comandó en materia de corrupción es uno de los ejemplos clásicos de aparato de poder centralizado, el cual dio lugar a una red enquistada en distintas instituciones y actividades. Y podríamos seguir enumerando distintas aristas desde las que mi profesión ha buscado explicar y comprender al último gobierno autoritario de la historia peruana.

Sin embargo, este no es un libro de análisis, en tanto privilegia el relato antes que la explicación científica. En ese sentido, procura que cada lector pueda hacerse una idea sobre lo que fue el gobierno

de Alberto Fujimori y lo que implicó para la política peruana. Salvo algunos momentos de digresión, se centra más en la exposición de los hechos que en brindar un examen sobre los mismos.

También es cierto que muchos peruanos tenemos una opinión sobre lo que fue la década de los años noventa. Sobre todo, aquellos que estamos a punto de cruzar el umbral de los cuarenta años, así como las generaciones que nos precedieron. Para ser claros, es muy difícil ser neutral respecto a Fujimori y su decenio en el gobierno. Y, de hecho, este libro no lo es[2].

Aunque mi posición sobre Alberto Fujimori ha sido pública en redes sociales y columnas de opinión, conviene repetirla al inicio de este texto. Rechazo cualquier tipo de dictadura, sin importar su signo ideológico. Condeno cualquier violación a los derechos humanos, no importa quién haya sido el agente que la cometió. Y creo que la corrupción es uno de los grandes males de la sociedad peruana. Con ello, queda claro que no me encuentro entre los partidarios de nuestro último autócrata, sino más bien entre sus detractores. Y, añado, considero que las condenas que recayeron sobre el único inquilino del Establecimiento Penal Barbadillo fueron justas. En este libro, encontrarán los hechos que justifican el que Fujimori tenga bien ganados los membretes de autoritario, violador de derechos humanos y corrupto.

Por su parte, los partidarios de Fujimori enarbolan tres grandes argumentos para seguir defendiéndolo: la paz con Ecuador, las reformas de mercado y la lucha contra el terrorismo. Este texto expone claras diferencias de matiz sobre el impacto del decenio fujimorista sobre esos tres fenómenos.

Sin duda, el primero de ellos es, a criterio del autor, el logro más importante de los años noventa, dado que permitió llevar, finalmente, una buena relación con nuestro vecino del norte. Sin embargo, resulta polémica la forma como se condujo el proceso de paz, con secretismo, traiciones a personal de confianza y, finalmente, faltas a la verdad hacia la ciudadanía. Si bien cumplimos más de dos décadas de vínculo armónico con Ecuador, los métodos empleados por Fujimori para conseguir este propósito fueron, por decir lo menos, discutibles.

En relación con las reformas estructurales en la economía peruana, el lector podrá hallar evidencia sobre la necesidad e importancia de muchas de ellas, así como carencias y vacíos en la implementación de otras. Y también podrá advertir que Alberto Fujimori no era un liberal económico consumado. Fue un pragmático que adoptó un plan económico que otros le recomendaron seguir. Pero, puesto a elegir entre su proyecto reeleccionista y la necesidad de seguir emprendiendo reformas, el entonces presidente abandonó cualquier cambio y, peor aún, su administración no tuvo suficiente pericia política para manejar las crisis internacionales que llegaron en la segunda mitad de los años noventa, así como aquellas que su manejo económico generó. Recordemos que ese decenio acabó en una fuerte recesión.

Asimismo, estas páginas apuestan abiertamente por el rechazo a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, organizaciones subversivas y terroristas que generaron un grave daño al país: pérdida de vidas humanas, vulneración de diversos derechos fundamentales, disminución de la capacidad productiva, destrucción de infraestructura pública y privada, secuelas psicológicas y sociales profundas. Sin embargo, considero que las políticas pueden ser firmes frente a estos grupos armados, sin necesidad de cometer violaciones a los derechos humanos. Como se señala más adelante, el mejor esfuerzo para la pacificación, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), no tuvo un apoyo definido del gobierno, salvo por parte de algunos ministros. Y si bien se puede reconocer a Fujimori la continuidad sobre las políticas de apoyo a los comités de autodefensa, también cabe concluir que su única real obra sobre la materia, el destacamento Colina, no solo fue una empresa criminal que vulneró los derechos de los ciudadanos, sino que tampoco tuvo efecto alguno sobre la derrota militar de las dos organizaciones subversivas.

Este libro tiene una doble finalidad. En primer lugar, recordar a quienes vivieron la década fujimorista los eventos representativos del decenio, así como los principales aspectos biográficos del personaje central de la historia, a fin de que puedan hacerse un juicio de valor sobre ellos, independientemente de las

consideraciones arriba anotadas por el autor. Y, en segundo lugar, procura contar a los jóvenes lo que significó la última década del siglo XX para todos los peruanos. Sobre todo, a la Generación del Bicentenario, que salió en primera fila durante la segunda semana de noviembre de 2020 a defender la democracia. Algunos de sus integrantes han sido mis alumnos y varios de ellos llegan a las aulas —por las circunstancias actuales, en forma virtual— con ansias de conocer la historia política reciente del Perú.

El trabajo se sustenta en gran medida en lo que otros autores ya han escrito sobre Alberto Fujimori. Por tanto, se trata de una investigación enteramente bibliográfica, salvo algunas excepciones que son mencionadas en el texto. Asimismo, dejamos sentadas las discrepancias sobre determinados hechos, señalando los puntos de vista diferenciados en cada una de las secciones.

En lo que se refiere a la estructura, el intercalado de capítulos y escenas tiene su inspiración en lo que, con justicia, se llamó «la cartografía del poder», realizada por Mario Vargas Llosa en la mayor parte de sus novelas. Al mismo tiempo, el enciclopédico libro 78. Historia oral del Mundial (2018), del periodista argentino Matías Bausó, me atrajo para matizar los duros hechos políticos y de violencia relatados en este libro con alusiones a la cultura popular y el deporte, ámbitos que no fueron ajenos a Alberto Fujimori durante sus años en el poder. Sin embargo, cabe señalar que cualquier responsabilidad por el producto final de este trabajo corresponde única y exclusivamente a su autor.

Originalmente, este libro debió salir en 2020, cuando se cumplían treinta y veinte años exactos, respectivamente, de la llegada de Fujimori al poder y de la caída de su régimen. Como muchos planes que todos hicimos ese año, este también se vio frustrado por la pandemia que aún nos mantiene, en muchos casos, trabajando desde casa. Pero la demora sirvió para afinar el texto, agregarle algunos aportes bibliográficos y encontrar el ángulo final de esta presentación.

Es momento de entrar en la máquina del tiempo. Espero que el lector no se quede atrapado, como varias de nuestras radios musicales de la FM limeña, en los años noventa, sino que, a partir

de la revisión de este libro, pueda tomar posición sobre la última década de la pasada centuria y, sobre esa base, reflexionar sobre el Perú de hoy y del mañana.

---

1 Según Levitstky y Way, «los regímenes autoritarios competitivos son regímenes civiles en los que existen instituciones democráticas formales y son ampliamente considerados como el medio principal de obtener poder, pero en los que el abuso del Estado por parte de los gobernantes los coloca en una ventaja significativa frente a sus oponentes. Tales regímenes son competitivos en el sentido de que los partidos de oposición utilizan las instituciones democráticas para competir seriamente por el poder, pero no son democráticos porque el campo de juego está muy sesgado a favor de los gobernantes. La competencia es, pues, real pero injusta» (2010: 5. Traducción propia).

2 Solo una vez en mi vida vi a Alberto Fujimori en persona. Era 1991 y estudiaba el cuarto grado de primaria en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, donde sus hijos cursaban los estudios escolares. Era parte del grupo scout La Molina 1, que tenía su sede en dicho plantel. Nos invitaron a Palacio de Gobierno una mañana de sábado y, por deferencia especial, estuvimos en la puerta de la parte residencial de la sede del Poder Ejecutivo. Desde allí vimos al mandatario, junto a su hijo Kenji, saludarnos con aquella sonrisa con rictus que era su característica habitual.

SORPRESAS TE DA LA VIDA

(Julio, 1987 – Julio, 1990)

Domingo 10 de junio de 1990. En la habitación de su departamento en Barranco, Mario Vargas Llosa veía, como millones de peruanos, las incidencias de la Copa Mundial de Fútbol que se jugaba en Italia. Hacia la una de la tarde, su atención concentrada en las jugadas fue interrumpida por Mark Malloch Brown —el asesor británico de su campaña electoral— y Frederick Cooper, su primo y jefe de su postulación presidencial. Llegaban con las cifras que el escritor esperaba: había perdido las elecciones presidenciales, de acuerdo con los primeros resultados de las encuestas, por diez puntos de ventaja de su oponente: el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori.

—Hay aún un trecho por recorrer, todavía podemos esperar —le dijo Malloch.

—Lo siento de veras por el Perú —sentenció el escritor.

Dos horas más tarde, se cerraron las mesas de votación y se lanzó la acostumbrada encuesta a boca de urna. Un desconocido candidato presidencial había dado la mayor sorpresa electoral en la historia peruana[3].

—Ustedes tienen un gran problema. Han nacido al revés. Lo que hicieron en la Plaza San Martín es lo que un candidato debe hacer al final de su campaña, nunca al comienzo. Uno empieza aquí —e hizo un gesto hacia abajo— y termina aquí —y colocó su mano hacia arriba—. Ustedes han empezado arriba, ahora solo les toca bajar.

El 21 de agosto de 1987, en medio del optimismo por la exitosa manifestación contra la estatización de la banca, el veterano periodista Francisco Igartua, director de la revista Oiga, le manifestaba esta aguda observación al arquitecto Miguel Cruchaga, amigo personal de Vargas Llosa. Entre 50 000 y 60 000 personas habían copado la Plaza San Martín, en una manifestación encabezada por el escritor, en contra de lo que consideraba una «amenaza totalitaria» iniciada por el gobierno de Alan García.

Lo que el autor de La ciudad y los perros pensaba que podía ser el inicio del totalitarismo en el Perú, había comenzado apenas tres

semanas antes. En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente García había decidido anunciar una medida sorpresa:

—El sistema financiero hoy en el Perú es el más poderoso instrumento de concentración de fuerza económica y, por ende, de influencia política, y el mayor obstáculo a la democratización de la producción y la acumulación del excedente. Por eso, en este instante, propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Propongo reservar la actividad crediticia, financiera y de seguros al Estado como un primer paso para la democratización real de nuestra economía.

A pesar de que el anuncio era rumoreado en algunos círculos políticos, la noticia cayó como una bomba en los sectores más acomodados del país. Vargas Llosa departía con algunos de ellos en Punta Sal, un balneario en las soleadas costas de Tumbes, junto con Cooper y sus esposas. El escritor sentenció: «El Perú ha vuelto a la barbarie». Ese día, Vargas Llosa recibió una llamada de Cruchaga, con miras a iniciar un movimiento contra la medida. Cooper también fue contactado por Manuel Moreyra, director del Banco Central de Reserva, para dar a conocer un manifiesto de protesta.

Días más tarde, El Comercio, el diario más importante del Perú, publicó un comunicado con más de 100 firmas bajo el título «Frente a la amenaza autoritaria», redactado en casa de Vargas Llosa. Los movilizadores fueron Cooper, Cruchaga, el pintor Fernando de Szyszlo y el arquitecto Luis Miró Quesada Garland (miembro de la familia propietaria de El Comercio). El novelista creía, junto a los suscriptores del manifiesto, que la estatización era un paso para controlar los medios de producción y, paulatinamente, la libertad de expresión. En el pensamiento de Vargas Llosa, estaba la posibilidad de que García instalara un régimen parecido al mexicano, una dictadura perfecta.

Pero para Cooper, todo ello resultaba insuficiente. Era necesario salir a la calle y generar una movilización independiente de los partidos. Convocada la manifestación, llegó el apoyo económico de diversos gremios empresariales (en especial la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y la Asociación de

Bancos del Perú). El exjefe de Vargas Llosa durante los años cincuenta, Genaro Delgado Parker, convertido en un magnate de la televisión, brindó espacios publicitarios en Panamericana Televisión, por aquel entonces el canal de mayor audiencia del país[4]. El publicista Jorge Salmón creó el símbolo de Libertad, basado en el logo del movimiento anticomunista polaco Solidaridad. Cruchaga buscó al compositor Augusto Polo Campos para que, con la rapidez y genio que lo caracterizaba, pudiera armar un tema para la manifestación.

Perú, Perú, despierta ya, a defender tu libertad. Yo lucharé, tu lucharás, por la sagrada libertad.

La plaza San Martín estaba llena. Militantes de los centroderechistas Partido Popular Cristiano y Acción Popular, ciudadanos de clases altas y medias y estudiantes universitarios se habían movilizado en contra de la medida.

Los sectores populares estuvieron apenas representados por una dirigente vecinal, Agripina Urquizo. Incluso los medios a favor de la manifestación criticaron la forma como fue presentada ante los espectadores: una mujer humilde a la que había que escuchar con paciencia.

Posteriormente, hizo su aparición Hernando de Soto, economista y coautor de un libro clave para entender la informalidad en el Perú: El otro sendero. La revolución informal (1986). El texto postulaba la necesidad de liberalizar la economía, eliminar trabas burocráticas e incrementar la titulación de propiedades para incentivar la formalización de la política peruana. Este libro había sido apadrinado por el autor de La casa verde, quien escribió el prólogo de la primera edición[5].

Como orador de fondo, Vargas Llosa fue muy duro contra la estatización de la banca, habló de ideas liberales económicas y se sorprendió que las mismas fueran aplaudidas en una plaza pública de un país que, apenas dos años antes, había otorgado cerca de 70 % de sus votos a opciones políticas de izquierda y centro izquierda. Era el furor. La estatización de la banca recibió un golpe que hizo inviable su aplicación. Así comenzaba una aventura con miras a la Presidencia de la República.

En sus memorias póstumas, García admitió que la estatización fue un error[6] porque se terminó buscando más poder a través de la propiedad antes que por la regulación, y se abrió «un conflicto que, a la postre, reduciría nuestro margen de acción política»[7].

A partir de los años sesenta, el distrito de La Molina, ubicado al este de Lima, comenzó a congregar viviendas de clase media alta y sectores acomodados de la capital del Perú. Paulatinamente, terrenos que pertenecieron a haciendas y areneras se convirtieron en nuevas urbanizaciones. En medio del distrito, como un enclave, se ubica la Universidad Nacional Agraria, donde las aulas y centros de investigación se mezclan con campos destinados a las prácticas agrícolas, ganaderas y biológicas, principales puntales de dicha casa de estudios.

En septiembre de 1988, la cabeza de la UNALM y también presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Alberto Fujimori, convocó a una reunión en su despacho. Asistieron ocho profesores. Sus objetivos no eran académicos. Les propuso armar una lista para el Congreso de la República, por fuera de los partidos políticos establecidos. El grupo se mantuvo escéptico frente a dicha posibilidad. Semanas después insistió. Los docentes aceptaron. El núcleo «molinero» sería el primer círculo de confianza del político.

En paralelo, Fujimori se puso en contacto con el empresario nikkéi Ernesto Yoshimoto, cuyas hijas cursaban secundaria en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, donde también estudiaban sus hijos. Yoshimoto tenía una fundición en Zárate y allí conocía a un pastor evangélico, Pedro Vílchez. Así fue como el futuro candidato hizo su primer nexo con el mundo protestante. Vílchez admiraba el programa que Fujimori conducía, por aquel entonces, en el canal de televisión estatal. Pero, a diferencia de lo que ocurre hoy con las aventuras evangélicas latinoamericanas en política, el rector no buscaba financiamiento sino contactos.

Gracias a Vílchez, Fujimori pudo acercarse a Carlos García García, un personaje clave en ese mundo, pues había sido presidente del Consejo Nacional Evangélico (CONEP) y de World Vision, una organización no gubernamental protestante. Si bien la CONEP no se comprometió institucionalmente con el candidato,

García se convenció del proyecto político, con miras a una mayor presencia evangélica en política. Creía que el ingeniero no tendría intereses propios. De ese modo comenzó a movilizarse un contingente evangélico para la organización del futuro partido político que buscaría puestos en el Congreso de la República.

La dinámica era artesanal: Fujimori y Vílchez recorrían el país buscando activar a sus contactos profesionales y eclesiales, respectivamente. Cuando el pastor no lograba movilizar a sus pares, optaba por enfrentarlos públicamente sobre su falta de compromiso político. La estrategia daba resultados. Pero aún faltaba camino por recorrer.

Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones (aparece un mono vestido de burócrata, caminando sobre un escritorio). Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país (el mismo simio aparece comiendo y luego un sujeto le ofrece un soborno acompañado de una criolla frase: «agarra pa' las chelas pe', cuñao»). Hombres de una moral incorruptible (el mono juega con el fajo de billetes ofrecido en la escena anterior). Hombres que siempre dan la cara (el pequeño animal hace piruetas en el escritorio, de espaldas a la cámara). Y siempre se preocupan por los de abajo (el mono defeca desde arriba). Voz en off: Es hora de un gran cambio. Se escucha el jingle de la campaña de Vargas Llosa y el símbolo de la alianza política Frente Democrático (FREDEMO).

En 1989, los peruanos se sorprendían de ver en sus pantallas un spot que caricaturizaba de forma tan grotesca a los funcionarios públicos. Cruchaga pensó, la primera vez que lo vio, que había sido armado por Alan García. Pero la gaffe había sido creada en casa. Los publicistas Daniel y Ricardo Winitzky, empoderados por Cooper, habían planteado avisos creados por animales. De allí vino la idea del monito.

El jefe de campaña le llevó el spot a Vargas Llosa, quien lo aprobó, a pesar de que había detectado cierta vulgaridad en la pieza publicitaria. Peor aún, hubo gente del equipo de campaña, como Enrique Ghersi, que se divirtió mucho con el spot. Les costaría caro.

El monito meón llevaría a críticas públicas y privadas de aliados de la campaña, así como al aprovechamiento de los rivales de Vargas Llosa del error monumental, sobre todo, por parte de los apristas. El escritor arequipeño haría una tibia autocrítica por autorizar el spot. Aun así, los Winitzky permanecieron en el equipo de publicistas de la campaña electoral[8].

Para mediados de 1989, el principal rival de Vargas Llosa era un abogado cajamarquino, quien se encontraba en las antípodas ideológicas del escritor. Alfonso Barrantes ya había obtenido la alcaldía de Lima en 1983, quedó segundo en la elección presidencial que encumbró a Alan García y quedó a pocos votos de revalidar su cargo edil en 1986, pues perdió con Jorge del Castillo, el candidato aprista.

Izquierda Unida, la alianza de partidos que lideraba Barrantes desde su formación en 1980, tenía serias opciones de competir contra Vargas Llosa en segunda vuelta. Podía exhibir un buen trabajo parlamentario, un compromiso democrático por parte de la mayoría de los partidos del conglomerado y, además, varios de sus alcaldes —incluyendo a Barrantes— habían hecho una buena gestión.

Sin embargo, en su seno se labraba la fórmula de la derrota. El liderazgo de Barrantes comenzó a ser confrontado por parte de los sectores más radicales de IU. ¿La razón? La amistad que tenía con Alan García provocaba que el abogado no fuera tan confrontacional con el presidente aprista, el partido al que debía disputar el campo popular. En 1987, Barrantes renunció al cargo de presidente de Izquierda Unida, manteniendo su liderazgo, pero la alianza pasó a una dirección colegiada.

Al mismo tiempo, la IU pagaría el costo de apoyar la estatización de la banca, medida que no solo se volvió impracticable, sino también antipopular. Varios intelectuales de izquierda suscribieron dos comunicados a favor de la medida. Con ello, amarraron parte de su suerte al destino del infausto proyecto.

Pero, sin duda, fueron las tensiones internas las que terminaron de matar el proyecto. Existían sectores en Izquierda Unida que optaban por un «momento revolucionario» —incluyendo un brazo

armado— para enfrentar tanto al Estado como a Sendero Luminoso, la organización terrorista maoísta que había iniciado un conflicto armado contra el país. Otros sectores buscaban más bien que el frente se posicionara hacia el centro izquierda, para producir reformas que permitieran la derrota del senderismo y afrontar la crisis económica desde una perspectiva popular. Las diferencias eran feroces y se ventilaban en los medios de comunicación, tanto afines como críticos con este sector. Se convocó a un Congreso Nacional en enero de 1989, donde los moderados ganarían posiciones. Pero las declaraciones encontradas y con descalificaciones continuaron.

En agosto de 1989, se consumó el cisma. Barrantes formó el Acuerdo Socialista, que llevaría como candidato a la alcaldía de Lima al abogado Enrique Bernales. Mientras que Izquierda Unida tendría como postulante al sociólogo Henry Pease García. Sin embargo, en septiembre, él aún bregaba para que Barrantes fuera el candidato único de la izquierda. No lo consiguió. Acuerdo Socialista se transformaría en Izquierda Socialista. Pease, docente de la PUCP, se convirtió en el candidato presidencial de IU, luego de su postulación municipal.

Pero, en noviembre de 1989, el tiro de gracia llegaría desde el exterior: caía el Muro de Berlín. El mundo socialista real comenzaba a derrumbarse[9].

Para noviembre de 1989, Vargas Llosa era el gran favorito para ganar las elecciones presidenciales. No solo iba primero en las encuestas con considerable ventaja, sino que sus rivales parecían derrotados anticipados. La ruptura de la izquierda y su crisis global dejaba a Barrantes y a Pease con pocas opciones. Mientras que el candidato del Partido Aprista Peruano, Luis Alva Castro, no solo debía pagar el precio del desastre económico que dejaba la administración en la que él participó, sino que tampoco gozaba del favor de Alan García. Sin embargo, cualquier observador agudo se podría dar cuenta de que ya estaban labrados los signos de la derrota en la campaña del escritor.

A mediados de aquel año, Sawyer Miller, la empresa británica que asesoraba la campaña, señaló claramente varias cuestiones por las

que Vargas Llosa podría perder la presidencia de la República. Estas se podían resumir en cuatro: en una segunda vuelta, García intervendría en su contra; el mensaje liberal se había orientado demasiado a la derecha, sin posibilidad de diálogo con otros sectores; Barrantes tenía el atractivo de un hombre común y los temas colocados por Vargas Llosa en el debate público podían jugarle en contra durante la campaña.

Casi todo ello ocurrió. Es momento de detenerse en los errores de la campaña.

Frente al panorama crítico planteado, el equipo encabezado por Malloch Brown proponía que la elección se concibiera como un «mandato claro», en el que los peruanos fueran convencidos de las bondades de su programa. Para ello, Vargas Llosa debía ser didáctico, como en sus novelas. Y, sobre todo, menos ideológico.

Pero Vargas Llosa y su equipo eran muy rígidos en términos doctrinarios. Estaban convencidos de que «el mandato claro» debía estar alrededor de un programa de gobierno liberal. Partían de un espejismo: la gente no había salido a marchar contra la estatización de la banca porque creía automáticamente en las ideas de Friedman y Hayek, dos de los tótems intelectuales del novelista. Muchos ciudadanos aún querían (y necesitaban) la presencia del Estado. Y, justamente, FREDEMO proponía una reducción del aparato estatal que, llevada hasta sus extremos, podía debilitar aún más al poco presente imperio de la ley en el Perú. Se asumió un espíritu de cruzada propio de una Guerra Fría que ya estaba llegando a su fin, con la única excepción de la participación de Vargas Llosa en una marcha por la paz convocada por Pease y sectores de izquierda.

Allí minaron cualquier puente con otro sector que no sea el suyo. De hecho, personajes que luego estarían con su rival, como Víctor Honma y Máximo San Román, representantes del Perú informal al que la campaña de FREDEMO debió dirigirse, tocaron primero las puertas del Frente, sin éxito. Vargas Llosa admitió en sus memorias que él y su Frente nunca pudieron ser didácticos frente a los sectores populares y que, peor aún, el contacto con las masas no era algo que les atraía sobremanera.

Para complicar más las cosas, el candidato terminó aliándose con dos partidos que podían ser considerados como causantes de la crisis de los años ochenta. Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, que habían cogobernado el Perú en la primera mitad del decenio, eran las columnas vertebrales de FREDEMO junto a Libertad. Vargas Llosa justificó la alianza argumentando que la división del voto en el bloque de centro derecha sería contraproducente y que, en realidad, la renovación sería el programa liberal. Y, además, requería una base partidaria que no tenía en Libertad.

En la realidad, no obtuvo ni lo uno ni lo otro. El programa liberal no fue discutido con Fernando Belaúnde y Luis Bedoya Reyes, los dos líderes de sus partidos aliados. Peor aún, tanto la alianza como el programa liberal fueron duramente fustigados por políticos de renombre dentro de sus agrupaciones, como el diputado acciopopulista Valentín Paniagua. Asimismo, las bases mostraron ser díscolas, no solo porque ambas organizaciones políticas no eran tan sólidas como se pensaba, sino por el hecho de que el escritor nunca pudo comprometer a Belaúnde y Bedoya para dejar de lado sus intereses partidarios. Incluso, una disputa con ambos por la candidatura a la alcaldía de Lima motivó una breve renuncia del escritor a su postulación presidencial, en junio de 1989, tres semanas después del inicio formal de la alianza. Su retorno a la lid electoral era esperado por muchos, pero, a diferencia de lo que le dijeron sus asesores de campaña, no rompió con sus aliados.

FREDEMO también estuvo conformado por el pequeño movimiento tecnocrático Solidaridad y Democracia (SODE), que aportó a figuras clave para la formación del programa de gobierno, como Raúl Salazar, Manuel Moreyra y Javier Silva Ruete. SODE había colaborado con García hasta la estatización de la banca[10].

Meses más tarde, el candidato de FREDEMO a la alcaldía de Lima, Juan Incháustegui, favorito hasta días antes de la elección, mordería el polvo de la derrota. Triunfaría Ricardo Belmont Cassinelli, empresario y conductor de televisión, que terminaría aplicando intuitivamente —sin conocerlo— el manual de Sawyer Miller: mensaje sin ideología, candidato independiente, basado en

un lenguaje popular, con el atractivo de un hombre común que había incrementado la fortuna familiar y que postulaba la necesidad de empresas con participación popular, como su propia televisora. Signo de los tiempos: la campaña se había hecho casi por entero desde el canal del candidato[11].

Si los molineros y los evangélicos habían sido el germen de la agrupación política de Fujimori, su movimiento terminaría de redondear su formulación original con la llegada de pequeños empresarios. Hombres y mujeres que se habían forjado desde abajo, muchos de ellos migrantes o hijos de quienes partieron del campo a la ciudad, en busca de un futuro mejor.

Uno de ellos era Máximo San Román, cusqueño que había hecho una pequeña fortuna gracias a su negocio de equipos para panificación. Era, además, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales. Entre junio y agosto de 1989, Fujimori había sostenido reuniones con él sobre posibles negocios, que luego derivaron en conversaciones sobre el proyecto político que el docente universitario estaba construyendo. San Román no le dio mucha importancia.

Semanas antes de la inscripción de las postulaciones a la presidencia de la República, Fujimori reveló sus planes, que había ocultado a sus aliados evangélicos: para que el nuevo movimiento pudiera obtener su objetivo de colocar parlamentarios era necesario contar con un candidato presidencial. Quién más que el exrector de la Universidad Nacional Agraria para encabezar la lista. Si bien hubo una inicial oposición evangélica basada en cuestiones morales, Vílchez y García convencieron a los suyos.

Para la formación de la fórmula presidencial resultaron decisivas dos mujeres. La esposa de Máximo San Román logró convencerlo para que postulase a la primera vicepresidencia, mientras que la cónyuge de García aceptó que el pastor evangélico fuera en la segunda vicepresidencia a condición de que no postulara al Congreso. Otra versión sugiere que San Román fue la segunda opción, pues Fujimori pensó en la arquitecta Lidia Gálvez Arévalo, quien no aceptó la candidatura.

Quedaba un flanco pendiente: la propia familia Fujimori. Su esposa Susana se mostró sorprendida por la postulación, que desconocía —según testimonio de San Román—, al mismo tiempo que pensaba que podía ser una pérdida de dinero. Ya en ese entonces se veía que la pareja no estaba bien avenida y los cercanos a la campaña especularon con una separación doméstica, sin romper la convivencia en casa, a la usanza japonesa. Aunque, finalmente, Higuchi se plegó a los esfuerzos de su esposo. Mutsue Fujimori y sus otros hijos se opusieron, aunque las barreras de varios de ellos se vieron rápidamente disueltas. El único que mantuvo reservas hasta la segunda vuelta fue Santiago, abogado de profesión, quizás la persona más cercana a la comunidad nikkéi de la familia, a tal punto que estaba trabajando en la embajada de Japón en Lima cuando su hermano decidió postular.

El partido se inscribió de forma apresurada. Según el propio Fujimori, solo poseía 70 000 dólares para invertir en la aventura electoral. Gracias a cada uno de los grupos que lo rodeaba, pudo juntar las 100 000 firmas de adherentes necesarias para inscribir a su agrupación. El Jurado Nacional de Elecciones convalidó las mismas. Sin embargo, una versión sugiere un regalo en forma de calculadora japonesa al funcionario encargado de validar las firmas, a cambio de que la revisión no fuese tan rigurosa.

Para Fujimori, el objetivo final era obtener una bancada parlamentaria en senadores y diputados que le permitiera ser el fiel de la balanza entre, por un lado, los fredemistas y, por el otro, los apristas e izquierdistas.

Había nacido el flamante partido Cambio 90[12].

La elección municipal no había dejado tan inquieto a Vargas Llosa. FREDEMO se había hecho de casi la mitad de las alcaldías provinciales y distritales del país. Asimismo, Belmont le había asegurado su apoyo para la campaña presidencial de 1990. Había tenido, meses antes, una importante gira por Asia, donde había obtenido compromisos para ayuda social y, además, había apreciado de cerca el crecimiento económico de países a los que se veía como productos de «milagros económicos». Además, estaba

cerca su momento anhelado: mostrar el plan de gobierno por el que tanto había bregado.

El escenario era ideal. La Conferencia Anual de Ejecutivos, organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). Una cita a la que acuden políticos, empresarios y gerentes. Junto con el networking, se trata de una ocasión importante para hacer anuncios en materia económica o escuchar a ponentes internacionales. En años electorales, sus invitados suelen ser los principales postulantes a la Presidencia de la República, quienes exponen sus planes de gobierno.

La exposición de Vargas Llosa comenzó con la lucha antisubversiva: se armaría a las rondas campesinas y se empoderaría a las Fuerzas Armadas, sin descuidar el campo de los derechos humanos. Para ello, se nombraría a un comisionado sobre la materia con rango de ministro, para lo que se sondeó al abogado de izquierda Diego García–Sayán, quien no estuvo en desacuerdo con la propuesta.

Pero era en lo económico donde la propuesta era central y crítica: privatización de setenta empresas públicas en un proceso encabezado por Javier Silva Ruete —economista, amigo de Vargas Llosa desde la adolescencia y miembro del SODE—, el fin de la gratuidad indiscriminada de la enseñanza, una reforma laboral consistente en la flexibilización de la normativa vigente para los nuevos trabajadores, la reducción del aparato público y, finalmente, el cese del control de cambios y de precios. En suma, un programa de ajuste estructural de la economía, desde una perspectiva liberal.

La propuesta fue aplaudida por los empresarios, pero no por sus aliados. Para Valentín Paniagua: «Después del discurso de CADE, Mario Vargas Llosa no podía ganar la elección (…) hizo anuncios impopulares. En un país pobre, iba a eliminar la estabilidad laboral de los pocos que tenían empleo». Otros acciopopulistas protestaron por el cambio del régimen de la gratuidad de la enseñanza.

Pero el programa de FREDEMO fue además un festival para Alan García. El gobierno avivó el fantasma del despido masivo de empleados públicos. Un sindicato afín al APRA terminó presentando un recurso judicial para evitar esta medida antes de la primera

vuelta, lo que fue rápidamente resuelto por un abogado y candidato a senador, el conservador Enrique Chirinos Soto. Ministros y funcionarios apristas divulgaron la especie que Vargas Llosa evadía impuestos, lo que fue respondido por sus abogados. Y, en no pocas ocasiones, el escritor salió a responder directamente los infundios. Mientras que, en el canal del Estado, se leían los párrafos más subidos de tono de Elogio de la madrastra, novela erótica de Vargas Llosa publicada en 1988.

Para complicar más las cosas, los candidatos a senadores y diputados de FREDEMO iniciaron una profusa campaña de spots televisivos para difundir sus candidaturas. Esta andada de publicidad televisiva era incentivada por un sistema electoral para el Congreso en el que, además de la lista parlamentaria, se tiene la opción de escribir hasta dos números de la lista como voto preferencial, lo que puede cambiar el orden presentado por los partidos y alianzas. Varios de los postulantes recurrían a promesas que se contradecían con el programa liberal de Vargas Llosa. Otros apostaban por cualquier tipo de recurso llamativo. Pero lo peor era que, en conjunto, el Frente Democrático copaba la pauta electoral, forjando la imagen de derroche. A pesar de los esfuerzos de Vargas Llosa, pocos postulantes redujeron o anularon su publicidad. Preferían asegurar su ingreso al Congreso antes que la campaña de su candidato presidencial.

Por si fuera poco, otro spot puso a Vargas Llosa en nuevos problemas. Imágenes de desastre, alternadas con las secuencias más apocalípticas de The Wall, la película basada en el álbum conceptual de Pink Floyd, eran acompañadas por este texto, leído con una locución sensacionalista:

Perú: 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder: inflación al 30 000 %, fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar.

El spot terminaba con una firma: Contra esta amenaza, Luis Alva Castro presidente. Marca las 3 estrellas[13].

Fujimori afrontaba una campaña austera, pero también desordenada. Los choques entre los pequeños empresarios y los evangélicos eran pan de cada día. La lista se armó en la academia preuniversitaria Wisconsin, un emprendimiento educativo que Fujimori y su esposa tenían desde la década de los ochenta. No existían filtros para la postulación de candidatos. Solo así se puede explicar que se les colara una adivina con antecedentes por narcotráfico en la lista, por mencionar un ejemplo.

Los primeros roces entre Fujimori y San Román se produjeron cuando el candidato presidencial le negó encabezar la lista a la Cámara de Diputados, pues el puesto había sido prometido a Víctor Paredes, uno de los molineros originales. San Román fue convencido de no renunciar cuando se le otorgó el número 2 de la lista al Senado. El estilo autoritario de Fujimori también comenzó a generar problemas con los evangélicos, pero estos fueron resueltos cuando el ingeniero delegó el orden de las listas en el CEN de Cambio 90.

Paredes logró convencer a una corajuda empleada de administración de la UNALM, Luz Salgado, a incorporarse al naciente movimiento. Si bien la dura dirigente sindical había tenido roces con Fujimori por reclamos salariales, comenzó a participar en la campaña de su exjefe, tanto en el manejo de voluntarios como personera.

Al mismo tiempo, Fujimori inició una campaña hormiga. Todos los días se paseaba por radios evangélicas y aquellas que tenían programas con música andina para dejar mensajes a sus seguidores, a tempranas horas de la mañana. Posteriormente, recorría mercados y otros espacios públicos en espacios populares, tanto en Lima como en el interior del país. A partir de febrero de 1990, los recorridos eran acompañados por un tractor, que fue rápidamente bautizado como Fuji Móvil. Se aprovechaba el estilo campechano de Fujimori, las conexiones de los evangélicos, el imaginario popular sobre lo trabajadores que son los descendientes

de japoneses, y volantes entregados directamente en las manos de las personas.

Para redondear la imagen de austeridad, un artesanal spot comenzó a circular en el canal del Estado. El lema de la campaña —«honradez, tecnología y trabajo»— era acompañado de un conjunto de imágenes donde Fujimori aparecía en actividades agrarias o escuchando a los ciudadanos, papeles en mano.

La estrategia empezó a dejar sus frutos. Para febrero, Fujimori ya tenía 1 % en las encuestas. Había dejado de estar en la sección «Otros». Comenzó a pensar que podía ganar.

Si bien la campaña electoral se concentró en los aspectos económicos, el segundo problema que inquietaba más a los peruanos era la violencia subversiva. El 17 de mayo de 1980, cinco personas atacaron la vivienda del registrador Florencio Conde Núñez, en la localidad de Chuschi (provincia de Cangallo, región Ayacucho). Luego de amarrarlo y amenazarlo, incineraron el material electoral que Conde custodiaba. Al día siguiente, se producirían las elecciones presidenciales que proclamarían como ganador a Fernando Belaúnde. Horas después del ataque, cuatro de los atacantes fueron capturados y las cédulas de sufragio fueron repuestas. Esa sería la primera acción armada del autodenominado Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso.

Sendero Luminoso era una agrupación de inspiración maoísta. Su líder, el filósofo Abimael Guzmán, había iniciado un movimiento fundamentalista basado en las ideas de Mao Tse Tung. Guzmán había estado en Beijing durante la Revolución Cultural, un periodo en la historia de la República Popular China en que el principal líder del régimen instalado en 1949 decidió hacer una gran depuración de la «línea revisionista» del Partido Comunista, a sangre y fuego. Guzmán importó esta idea al Perú, junto con la necesidad de hacer la guerra desde el campo a la ciudad, en un país que, según su lectura, era mayoritariamente agrario y rural. El filósofo era profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde captó a sus primeros cuadros.

Los senderistas estaban dispuestos a pagar una «cuota de sangre» por el triunfo de la revolución, a la par que manifestaban un

fuerte culto a la personalidad de Guzmán. Los militantes de la agrupación suscribían cartas de sujeción al líder, en las que subordinaban su propia humanidad. Estas características explican por qué este grupo causó tantas muertes en tan poco tiempo y cómo, a diferencia de otros grupos armados en América Latina, generó más víctimas que las ocasionadas por el Estado peruano.

Desde 1982, en paralelo, operaba otro grupo subversivo denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuya inspiración era castrista. Tenían dos frentes: acciones guerrilleras en la selva alta del país, así como atentados terroristas y secuestros de empresarios para generar fondos en la ciudad de Lima. Aunque el MRTA tenía menos hombres y era menos sanguinario que Sendero Luminoso, su presencia y acciones de alto impacto generaban zozobra en la vida de los peruanos.

El Estado peruano no sabía cómo enfrentar estas amenazas. Al inicio de la década de los ochenta, se pensaba que el mayor peligro interno a la seguridad podía provenir de un movimiento guerrillero de inspiración castrista o guevarista, parecido a los grupos que se alzaron en armas en el Perú en 1963 y 1965, y que fueron fácilmente derrotados. Sendero Luminoso tenía características muy distintas. Si bien el Estado tenía el derecho y el deber de enfrentar a un peligroso enemigo que atentaba contra la democracia y los derechos humanos, no contaba con un diagnóstico claro sobre cómo enfrentarlo. Por ello, durante varios años, agentes del Estado optaron por prácticas que vulneraban los derechos humanos. Estas, incluso, llegaron a ser sistemáticas o generalizadas en determinados lugares y momentos. Recién en 1989, el Ejército había mejorado su política sobre la materia, con un nuevo Manual de Guerra Contrasubversiva.

Pero donde hubo más aprendizajes fue en la Policía Nacional del Perú. En particular, a través de una iniciativa individual del director de la Policía Técnica, el general Fernando Reyes Roca. El 5 de marzo de 1990, Reyes recibió al mayor Benedicto Jiménez, quien pedía su traslado de la Dirección Contra el Terrorismo (DINCOTE) hacia una delegación del norte del país. Luego de descartar rápidamente la partida del oficial hacia Piura, Reyes escuchó las

ideas del mayor sobre cómo enfrentar a la subversión. El diagnóstico de Jiménez fue claro: dado que Sendero Luminoso era un grupo fundamentalista, era necesario llegar a la cabeza: Abimael Guzmán. Y había que cambiar los métodos: inteligencia antes que captura rápida. Reyes se convenció. Así nació el Grupo Especial de Inteligencia, cuyas siglas, GEIN, resonarían por años en los pasillos policiales y en la historia peruana[14].

La estrategia de Alan García se concentraba en evitar que Mario Vargas Llosa ganara las elecciones presidenciales. Había cuestiones de ego personal —que en García siempre fue elevado—, debido a que el escritor arruinó sus planes de estatizar los bancos. Pero también de conveniencia política: el saliente presidente buscaba convertirse en próximo candidato presidencial en 1995.

García no podía dejar de lado al candidato de su partido, Luis Alva Castro, si bien no guardaba ninguna simpatía por él. Los desencuentros entre ambos se desencadenaron cuando el economista, quien fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, dejó solo al mandatario cuando se venía el tramo más complicado de los efectos del programa heterodoxo que ambos habían instalado. Pero García tenía un plan secreto: Hugo Otero, quien fue su publicista en todas sus campañas electorales, trabajaría en secreto con Barrantes. Sin embargo, este se negó. En las pocas reuniones que tuvo, Otero vio displicencia en el líder izquierdista. Alan concluyó: «Este no puede ser presidente porque no tiene huevos».

Así, García y Otero buscaron nuevos candidatos atractivos con los que pudieran cosechar. Observaron entre quienes no salían en las encuestas y destacaban dos nombres: Ezequiel Ataucusi, líder de un culto denominado Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, cuyos seguidores se vestían a la usanza hollywoodense de las películas bíblicas. Su proyecto se concentró en tener presencia en comunidades agrícolas en la sierra y, sobre todo, en la selva, así como en las periferias de las ciudades, incluyendo Lima. Su brazo político se denomina Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) y, durante muchos años, ha oscilado

entre un voto simbólico, una pequeña presencia parlamentaria y un trabajo de bases muy discreto.

El otro era Alberto Fujimori.

«Nosotros apoyamos a Fujimori», dijo Otero, quien señaló que la idea de García consistía en polarizar entre él y Vargas Llosa para que Fujimori apareciera como el candidato de centro. El entonces presidente lo juzgó como calculador. «Podría resultar buenísimo», afirmó. Pero García conocía relativamente bien a Fujimori. En 1984, participó en la elaboración de la sección agraria del plan de gobierno del APRA, que era dirigido por Alva Castro, así como en alguna reunión partidaria. Fue parte del consejo consultivo de la gestión del controvertido ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez, ya durante la gestión aprista. También lo nombraron delegado gubernamental para intermediar en un conflicto agrario en Tarapoto.

El nexo más notorio, sin embargo, era un diario: Página Libre fue un periódico fundado por Guillermo Thorndike, exfundador de La República y quien, antes y después del tabloide que circuló en la campaña de 1990, asumió compromisos políticos controvertidos. Era un diario que tenía por encargo ir contra la candidatura de Vargas Llosa. Y fue el primer medio que registró el alza paulatina de Alberto Fujimori en las encuestas. No era casualidad. Como mencionó el propio García una década después: «Cuando constatamos la fuerza que tenía Vargas Llosa en los medios, nos dimos cuenta de que la única forma de hacerle frente era poner un periódico y le encargamos al gordo Guillermo Thorndike que lo dirigiera». En esa misma confesión, García, no con poca vanidad, concluiría:

—Oiga, señor Ortiz, hágame el favor: ¿quién cree usted que inventó a Fujimori?

Salvo esa entrevista con el periodista Beto Ortiz, García nunca reconocería abiertamente su injerencia en la campaña electoral de 1990[15].

Los spots de la campaña del FREDEMO tuvieron un efecto contraproducente. Vargas Llosa había bajado a 41 % de los votos. Y quien había subido era Alva Castro, con un margen de 20 %. El candidato escritor continuó sus viajes al interior del país. Y, en

medio, se armó un evento con un conjunto de pensadores y escritores liberales, que buscaban darle un bálsamo intelectual a su candidatura, pero para algunos miembros del FREDEMO el evento terminó siendo contraproducente, tanto porque se hablaba a los ya convencidos como por marcar una imagen de élite.

Al mismo tiempo, la campaña se enfrentaba a la violencia. Julián Huamaní Yauri, candidato al congreso en Ayacucho por el FREDEMO, fue asesinado por Sendero Luminoso. Vargas Llosa voló de inmediato a las exequias. Pocas semanas más tarde, Jaime Bayly, un joven periodista que había trabajado con Álvaro Vargas Llosa a inicios de los años ochenta, alertó en su programa de televisión sobre un supuesto informe de Inteligencia Naval en torno a un posible atentado contra el candidato, aparentemente provocado por el APRA. Pero nada de ello hacía pensar al escritor en que se vendría algo distinto a la victoria en una segunda vuelta frente a Alva Castro.

El 29 de marzo de 1990, Vargas Llosa se encontraba en Cusco y su hijo en Lima. El comando de campaña estaba reunido y Mark Malloch Brown fue claro en su mensaje: El líder del FREDEMO seguía bajando y Fujimori subiendo, sobre todo en los sectores populares limeños. De hecho, ya estaba segundo en la capital. La situación se vio con desesperación: el escritor se negó a cortar mítines en provincia, pero accedió a hacer más actividades en la periferia de Lima. Se buscó la forma para que el candidato pudiera realizar un gesto público de corte publicitario a los postulantes al Congreso, pero fue imposible. Se acudió a Ricardo Belmont para que endosara su respaldo al novelista, cuestión que hizo tanto en la casa barranquina de Vargas Llosa como en el cierre de campaña en Lima. Los mítines de cierre en ciudades importantes hicieron creer a varios —incluyendo al futuro Premio Nobel de Literatura— que se había detenido la amenaza. Incluso la animadora más popular de la televisión peruana, Gisela Valcárcel, hizo público su voto en su programa, difundido en un canal hostil a FREDEMO.

Pero era tarde. Fujimori era un fenómeno nacional. Y Vargas Llosa ya meditaba la idea de renunciar a la segunda vuelta electoral.

Mientras tanto, en los predios de Cambio 90, continuaba la campaña de hormiga, esta vez por todo el país. Fujimori buscaba hablar en un lenguaje llano, evitaba los compromisos de un plan de gobierno detallado y, sobre todo, se comenzó a convertir en el candidato del «no shock». Esa sola promesa marcaba una diferencia con quien había hecho campaña durante tres años predicando esa medida económica.

Al mismo tiempo, Fujimori comenzaba a sacarle provecho a su identidad como descendiente de japoneses. Aparecía disfrazado con traje tradicional, posaba con una katana y se lucía con elementos nikkéis. No era un recurso al que había sido ajeno: ya lo había utilizado para potenciar la academia preuniversitaria que tenía con su esposa. Y la estrategia le estaba dando resultado. Si bien la difusión de encuestas, de acuerdo con la legislación electoral de la época, estaba prohibida durante las dos últimas semanas antes de las elecciones, las empresas de investigación de mercado y opinión pública las seguían haciendo, sobre todo, para público extranjero. Dos días antes de la primera vuelta electoral, la conclusión era clara: Fujimori seguía subiendo. Era nítidamente tercero y con serias posibilidades de pasar a segunda vuelta. Una cuestión que nadie esperaba, incluso dentro de su propio equipo. Carlos García y García estaba en Puerto Rico cuando se produjo la primera vuelta. De hecho, había renunciado discretamente a finales de marzo. Salgado llegó a decir que al pastor evangélico «le daba vergüenza» el postulante nikkéi.

Y todo ello sin hacer mítines de cierre de campaña.

El domingo 8 de abril fue una jornada complicada. Sendero Luminoso convocó a un «paro armado» en sectores populares para buscar reducir la cantidad de votantes. A pesar de ello, los ciudadanos fueron en masa a votar.

Vargas Llosa y Fujimori esperaron los resultados en dos hoteles del centro de Lima, de distinto perfil. Mientras el candidato de FREDEMO se hospedó en el Sheraton, considerado para la época como uno de los hoteles más exclusivos, el postulante de Cambio 90 optó por el Crillón, escenario de conciertos para los pocos artistas que venían a Lima.

Las noticias llegaron rápido al escritor. Hacia la una de la tarde, Malloch, Álvaro y Lucho Llosa —primo y cuñado del escritor, involucrado en su equipo de comunicaciones— fueron a la suite presidencial. Le anunciaron que le proyectaban 40 % de intención de voto y Fujimori estaba en 25 %. Malloch le indicó a Vargas Llosa que podían subir a 45 %, pero, en su fuero interno, el escritor no le creyó. Bajaron a almorzar con la familia, sin decir nada.

Hora y media más tarde, el optimismo ya no estaba ni en la voz ni en el rostro de Malloch. Vargas Llosa estaba en 36 % y con tendencia a la baja. Fujimori se hallaba en 25 %. Pero lo significativo era que Alva Castro había conseguido un sorprendente 20 % y las izquierdas, 10 %. No había que ser un matemático experto para saber lo que eso significaba en términos de la segunda vuelta.

—Esto se fue a la mierda —sentenció Álvaro.

Vargas Llosa convocó a Enrique Elías Larrosa, exministro de Justicia y personero legal de la alianza. Preguntó si era posible renunciar. El abogado le dijo que sí, pero le sugirió más bien que le ofreciera a Fujimori dos ministerios para que declinara sus aspiraciones presidenciales. El escritor no pensaba en esa fórmula: iba a renunciar, a cambio de que Fujimori hiciera la reforma económica con sus técnicos. Era claro que su inflexibilidad teórica no había sido bien recibida por los electores, pero no deseaba un gobierno manejado por el APRA. Vargas Llosa y varios de sus partidarios consideraban que Fujimori devendría en un títere aprista. El escritor pensaba que, para que su renuncia fuera un servicio al país, debería colocar algunas condiciones programáticas a su rival.

A las 6.00 p. m., luego de que el flash electoral le indicaba que las cifras eran peores a las esperadas —29 % para su candidatura—, Vargas Llosa bajó a la sala de conferencias del Sheraton. Su mensaje era claro: era mejor ahorrarle al país una segunda vuelta y negociar una fórmula de gobierno en forma inmediata. Indicó que esto debía hacerse «sin condiciones».

En paralelo, Fujimori llegaba al Sheraton. Antes, había sostenido que debía haber una segunda vuelta. Vargas Llosa le propuso una conversación al día siguiente. El ingeniero eludió la invitación:

—Los peruanos tienen ya suficiente madurez cívica y política, y ellos, por sí mismos, van a decidir[16].

No obstante, al día siguiente, Vargas Llosa obtuvo la cita que deseaba. Por la noche, se reunieron en la casa de Tomás Higuchi, el suegro de Fujimori, en el distrito de San Luis, cerca de la zona industrial del este de Lima. Allí le hizo la propuesta formal, frente a dos vasos de whisky: el ingeniero era el encargado de hacer un acuerdo nacional con FREDEMO y la izquierda más moderada, a cambio de lo cual el escritor le ofrecía su equipo para implementar la reforma económica. La cita terminó en apenas 45 minutos, con el compromiso de Vargas Llosa de hacer pública su dimisión al día siguiente.

Aquel martes 10 de abril de 1990 sería largo. Vargas Llosa redactó una carta de renuncia en la que describía su compromiso con Fujimori y sus inquietudes. Y expresaba algo de autocrítica por los defectos de la campaña: no poder convencer a los aliados de las bondades de un programa liberal, la presencia de políticos tradicionales, la excesiva publicidad y su incapacidad para transmitir su mensaje. Él y su hijo decidieron que la renuncia se haría pública en una edición grabada del programa de Jaime Bayly.

Pero la renuncia nunca se concretó, por cuatro hechos que cambiaron todo.

Luego de la coordinación con Bayly, Vargas Llosa se reunió con sus compañeros de fórmula: Eduardo Orrego (Acción Popular) y Ernesto Alayza Grundy (Partido Popular Cristiano). Ambos rechazaron la renuncia: Alayza por temas legales y Orrego le añadió un dato preocupante: Belaúnde lo había llamado desde Moscú, consternado porque Alan García le había comentado sobre la posibilidad de renuncia de Vargas Llosa. El arquitecto y el escritor concluyeron que Fujimori había sido la fuente del chisme.

La cita se vio interrumpida por la llegada de Fujimori a la casa de Barranco. Allí le expresó sus dudas a Vargas Llosa sobre la legalidad de la renuncia, pero la reunión fue corta y sin un resultado a la vista.

El candidato de FREDEMO les leyó la carta de renuncia a los miembros de la Comisión Política de Libertad. Los pedidos para que

no renunciara fueron unánimes. Algunos, como los de Enrique Chirinos Soto, contuvieron argumentos racistas contra Fujimori, que luego el abogado repitió en público, lo que obligó a una desautorización pública de Álvaro.

Pero esa reunión no concluyó. Patricia Llosa, la entonces esposa del postulante, había convencido al arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, para que convenciera a su marido de no declinar a la candidatura. Los argumentos de peso eran que la renuncia podía llevar a un indeseado golpe de Estado y que un reconocido sacerdote del ala izquierda de la Iglesia Católica, el teólogo Gustavo Gutiérrez, estaba de acuerdo con la continuidad de la postulación. Era curioso que un prelado acudiera donde un confeso agnóstico para pedirle que no renunciara a su postulación. Sucesos misteriosos ocurren en épocas de miedo, como comprobamos cada cierto tiempo los peruanos.

Luego de esas reuniones y de tomarse unos días en la playa, aprovechando la Semana Santa, Vargas Llosa llegó a la conclusión de que no podía eludir la segunda vuelta[17].

Mientras tanto, Fujimori debía medir sus siguientes pasos. En una segunda vuelta, ya no podía eludir un asunto fundamental: no tenía un plan de gobierno. No tenía nada. Gracias al economista Jorge Chávez Álvarez, contactó a un reconocido profesor de ESAN, la principal escuela de negocios del país en aquellos años. Santiago Roca se comprometió a elaborar un esbozo de plan de gobierno, que no contemplara la posibilidad de un shock y que, al mismo tiempo, resultara viable.

Sin embargo, existía una complicación. Fujimori se había comprometido a presentar públicamente el plan de gobierno el lunes 16 de abril, inmediatamente después de Pascua de Resurrección. Era obvio que Roca y Chávez no iban a cumplir. Le pidieron a Fujimori que postergara la conferencia de prensa.

A la hora de la cita con los periodistas, Fujimori no dio la cara. Fue su esposa Susana quien se presentó y excusó a su esposo. Según su versión, se había intoxicado con bacalao, un pescado de moda en las clases altas y medias peruanas durante la Semana Santa. Según Higuchi, su esposo era un hombre valiente. Pero no sería la

primera vez que Fujimori eludiría dar la cara en una situación complicada.

Ganaron tiempo. Roca reclutó a más personas para su equipo, todos provenientes de una línea heterodoxa: Fernando Villarán, Esteban Hnyilicza, Adolfo Figueroa, Daniel Schydlowsky y Oscar Ugarteche. El equipo de campaña también se vio reforzado desde la familia. Santiago Fujimori dejó sus dudas iniciales, pidió licencia a la embajada del Japón y comenzó a asumir labores de asesoría en la campaña[18].

Mientras tanto, Vargas Llosa tomaba decisiones. Acotó las apariciones de su familia, criticada por su posible injerencia en la campaña. Se hablaría mucho más del Programa de Ayuda Social antes que de los aspectos críticos del ajuste económico. Al mismo tiempo, Sawyer Miller proponía una confrontación directa con Fujimori. En particular, incidir en señalar los vínculos que tenía el APRA con el candidato y que fueron exhibidos, con fruición, por los medios más cercanos al postulante de FREDEMO. Al mismo tiempo, se buscaría una bajada al llano en comunidades campesinas y barrios de la periferia de Lima.

Los medios de comunicación tomaron posición. El canal del Estado, Panamericana Televisión, la evangélica Radio del Pacífico, diarios como Página Libre, La República y El Nacional optaron por Fujimori. América Televisión era controlada en la práctica por un grupo de acreedores empresariales —que incluía al diario El Comercio— y se inclinó por Vargas Llosa, sobre todo, a través de los programas televisivos de Jaime Bayly y de César Hildebrandt, este último, el periodista más influyente de las últimas cuatro décadas en el Perú. Los diarios de centro derecha como Expreso y el ya mencionado periódico de la familia Miró Quesada eran partidarios de la candidatura del autor de La guerra del fin del mundo.

El programa de Hildebrandt fue el más llano en hacer denuncias. Algunas fueron absolutamente desproporcionadas y conservadoras, como un reportaje del periodista Nicolás Lúcar sobre la orientación sexual de Oscar Ugarteche, fundador del Movimiento Homosexual de Lima. Pero otras sí daban en el blanco. Primero, se difundieron

los pingües negocios inmobiliarios de los Fujimori Higuchi. Pero lo más complicado era una denuncia esgrimida por el diputado electo Fernando Olivera, tenaz enemigo de Alan García, quien había obtenido documentos sobre la subvaluación de la venta de una propiedad. A ello se sumó la polémica sobre la obtención discutida del fundo Pampa Bonita, en Sayán (departamento de Lima), durante el gobierno aprista.

Estas últimas acusaciones llevarían a la asociación que definiría la siguiente década.

Francisco Loayza era un sociólogo que había trabajado desde los años setenta con los militares. Formó parte del cuerpo de asesores de Edgardo Mercado Jarrín, presidente del Consejo de Ministros durante la época de la dictadura de Juan Velasco Alvarado y el forjador de la política exterior peruana en aquellos años. Loayza continuaría su vínculo con los organismos de Inteligencia durante los años siguientes. Gracias a ellos, pudo llegar a Alberto Fujimori. El Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Edwin Díaz, fue encargado por el gobierno aprista para acercarse a Fujimori. El enlace sería Loayza, quien se convertiría en asesor político del candidato, convocado originalmente para colaborar con él sobre materia antisubversiva. Pero cerca de él estaba un personaje que, hasta hacía poco tiempo, era un apestado.

Vladimiro Montesinos Torres también había formado parte del equipo de Mercado Jarrín. A diferencia, de Loayza, él había sido miembro del Ejército, hasta que fue dado de baja en 1976 por supuestos cargos de espionaje que presuntamente lo vinculaban con la venta de información al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, país al que viajó sin autorización pretextando una invitación académica. Durante la década de los años ochenta, ejerció como abogado —sobre todo, de narcotraficantes— y era informante de medios de comunicación. Luego de la reactivación de su proceso por traición a la patria en 1983, el cual terminó con su huida a Ecuador y, posteriormente, a Argentina, fue impedido de ingresar a instalaciones militares. Sin embargo, a finales de esa década, había salvado a altos oficiales del Ejército de una acusación común en aquellos años: una matanza ocurrida en la localidad de Cayara en

1988, en medio de la lucha contra la subversión. Esto permitió a Montesinos regresar a la Comunidad de Inteligencia, pero con restricciones. Allí volvió a hacer contacto con Loayza.

Montesinos comenzó a acompañar al asesor a la puerta de la casa de Fujimori. Él se quedaba afuera durante las reuniones que se realizaban de madrugada. Loayza no lo dejó entrar hasta que la denuncia por defraudación tributaria le estalló a Fujimori. El asesor lo vendió como el abogado que tendría la solución perfecta a su problema, por los contactos que tenía en el Ministerio Público, que le habían facilitado sus acciones en el caso Cayara.

El exmilitar arequipeño apareció en la casa de Fujimori. Le ofreció una solución rápida a su dilema. Pero rápidamente se precipitó en buscar una conversación más política. El candidato lo miró con su rostro desconfiado de siempre y cortó la reunión.

Tres días más tarde, Montesinos aparecería con la resolución salvadora. Ahora sí, Fujimori estuvo dispuesto a hablar de política con él. El abogado aludió a una antena cercana al domicilio del candidato, en Surco, como una supuesta prueba del espionaje que la Marina de Guerra habría estado haciendo contra él. Montaron medidas de seguridad y un cuarto en la casa contigua de su hermana para conversar. Formaron un círculo cerrado en el que, originalmente, estarían Fujimori, Montesinos y Loayza.

La relación que marcaría al Perú contemporáneo había comenzado[19].

La campaña electoral cobró trazas aún más complicadas. La religión comenzó a ser un tema de discusión, como en pocas ocasiones en la política peruana, usualmente distanciada de las conexiones con la fe de las personas. Varios obispos católicos estaban alterados por la irrupción de los evangélicos, pues temían que estos les quitaran aún más adeptos de los que ya habían conseguido en sectores populares.

Si bien muchos de los diputados y senadores electos por Cambio 90 pertenecían a aquellas iglesias menos recalcitrantes, aún existían en algunas de estas denominaciones evangélicas un anticatolicismo militante. Esto fue aprovechado por militantes de

FREDEMO para repartir volantes contrarios a la Iglesia Católica, haciéndolos pasar como elaborados por Cambio 90.

El Arzobispado de Lima convocó a una procesión extraordinaria de la imagen del Señor de los Milagros, el símbolo religioso más popular de Lima, que tradicionalmente sale en octubre. Esta vez, la manifestación de fe se realizaría en mayo. Con prudencia, pero también con mucha discusión, el equipo de Vargas Llosa declinó presentarse en la procesión. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica hizo patente sus divisiones políticas: los sectores más cercanos al progresismo optaban por Fujimori, mientras que los más conservadores defendían a muerte al escritor agnóstico.

Mientras tanto, la campaña de Fujimori aprovechaba la visita del predicador portorriqueño Paul Edwin Finkenbinder —conocido por sus microprogramas televisivos como el Hermano Pablo— para su publicidad electoral. Al mismo tiempo, el ingeniero se vendía como un escrupuloso católico, a pesar de que no era conocido por ser practicante.

Otro factor que resultó decisivo fue la discriminación racial. Desde FREDEMO, algunos voceros —como Chirinos Soto y el propio Belaúnde— terminaron esgrimiendo diatribas contra Fujimori, apelando a su condición de hijo de migrantes japoneses. Por su parte, el candidato de Cambio 90 aludió a la posibilidad de acceso a créditos y donaciones desde la tierra de sus ancestros. A la búsqueda de un delicado equilibrio, la Asociación Cultural Peruano Japonesa y la embajada nipona en Lima desmintieron cualquier vínculo con alguna de las dos candidaturas. Aunque Fujimori tenía un hándicap desconocido para el público: nunca se integró del todo, por decisión propia, a la comunidad nikkéi. Supo además aprovechar la composición étnica de su fórmula presidencial para venderse como «un presidente como tú». La fórmula le funcionó frente a un Vargas Llosa que era visto, al igual que su equipo, como un representante de las élites, lejano de las necesidades populares. La imagen de derroche, la cercanía de empresarios y políticos tradicionales y la poca flexibilidad del programa de gobierno, hicieron el resto. Por solo citar dos ejemplos: Miguel Vega Alvear, alfil del Grupo Romero en la década de los ochenta, y Ricardo Vega

Llona, expresidente de CONFIEP, habían sido elegidos parlamentarios bajo las filas del FREDEMO.

La imagen de cercanía de los grupos de poder más establecidos con Vargas Llosa se terminó de configurar con una serie de respaldos públicos de deportistas y actores cómicos, además de las ya conocidas simpatías de Bayly e Hildebrandt. La más sonada de estas adhesiones fue la de Augusto Ferrando, el más popular animador de la televisión peruana de la época, quien anunció que se retiraría de su sintonizado programa Trampolín a la fama si Vargas Llosa perdía las elecciones. Según el escritor, Ferrando insinuó una posible compensación económica por el anuncio, que el candidato evitó brindar.

Durante sus primeros meses de vida, en los pasillos policiales se apodaba a los miembros del GEIN como los «Cazafantasmas». A diferencia de otros grupos de la institución, estos no se caracterizaban por las capturas rápidas. De hecho, hasta finales de mayo de 1990, no habían detenido a nadie.

El 1 de junio de 1990, nueve días antes de la segunda vuelta electoral, el grupo hizo su primera gran acción. Se intervinieron cuatro viviendas en distintos puntos de Lima: Miraflores, Surquillo, Chorrillos y San Borja. Gracias a las capturas, cayó Sybilla Arredondo, la viuda del escritor José María Arguedas, que había devenido en miembro de Sendero Luminoso y ya había sido capturada en una ocasión.

El golpe mayor ocurrió en San Borja. La casa intervenida en la urbanización Monterrico Norte era la cubierta perfecta: un barrio de clase media alta limeña, donde era poco probable que se ubicaran miembros de Sendero Luminoso y que, además, estaba cerca del Cuartel General del Ejército. En dicha vivienda se ubicaron cientos de documentos correspondientes al Primer Congreso de Sendero Luminoso, realizado entre 1988 y 1989, incluyendo una lista de contactos con direcciones y teléfonos que sería clave para las siguientes capturas.

En esa primera intervención, se logró desarticular al Departamento de Apoyo Organizativo de Sendero Luminoso, un aparato clave para la retransmisión de las órdenes de la cúpula.

Según Elena Iparraguirre, número dos de la organización subversiva, esta derrota se debió al hecho de que sus integrantes eran personas que ya tenían antecedentes penales por terrorismo. También se desarticuló el Grupo de Apoyo Partidario, encargado de conseguir el alojamiento para los cabecillas senderistas y vinculado a labores de propaganda.

En la sede del Ministerio del Interior, Agustín Mantilla felicitaba a los miembros del GEIN. Sabía que el gobierno aprista no obtendría los méritos de su trabajo. Tampoco es que hubiera hecho mucho. Si bien Reyes Roca era cercano al viejo partido, el Grupo Especial de Inteligencia no fue parte de una política antisubversiva de la administración García. Tampoco lo sería de su sucesor.

—Celebro, doctor Mario Vargas —dijo Fujimori—, poder debatir con usted esta noche. Su conocida renuencia a debatir durante la primera vuelta, sin más razón que la seguridad, entonces, del triunfo, y luego su decisión de renunciar a la segunda vuelta para retirarse a su soledad londinense, lejos de los problemas del Perú y la turbidez de la política nacional, me había persuadido de que en el fondo no quería continuar la carrera electoral y menos debatir.

—Veo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, que es siempre muy necesario en un debate. Pero también es importante que en un debate haya ideas y propuestas concretas y no que se lean generalidades —para no decir banalidades— como las que acaba de leer mi adversario.

—No es únicamente mediante la medida represiva como se puede luchar contra la subversión y el terrorismo. La democracia, todo el pueblo lo conoce, ya no puede ser la defensa de la plutocracia, y por eso es que alrededor del Movimiento Cambio 90, el pueblo unido ha conformado una gran fuerza que ha derrotado a los partidos políticos tradicionales y a estos grupos subversivos.

—Los aliados del ingeniero Fujimori tienen una responsabilidad terrible en el incremento de la violencia en el Perú. En estos cinco años, la política desarrollista para combatir a la violencia del presidente Alan García, ¿ha traído menos muertos? Tenemos

dieciocho mil muertos hasta ahora, quince mil millones de pérdidas por culpa del terrorismo.

—Tenga usted la certeza, doctor Vargas, de que nuestra propuesta de pacificación no puede soslayar el caso Uchuraccay, hecho en el cual usted tuvo una protagónica participación y donde se vulneró la Constitución, interfiriendo conscientemente la acción de la justicia.

—Los asesores económicos del ingeniero Fujimori han sido asesores y funcionarios del gobierno aprista: el doctor Esteban Hnyilicza ha sido asesor del ministro Saberbein que no es el peor ministro de Economía que ha tenido este gobierno y quizás el país, porque existe siempre, claro, el doctor Vásquez Bazán para batir el récord.

—Revise usted, doctor Mario Vargas, usted que tiene un sentimiento tan antipartido, tan antiaprista, revíselos y usted tendrá allí destacados miembros entre sus filas. Permítame mencionarle algunos nombres: Ricardo Vega Llosa, Javier Silva Ruete, Enrique Chirinos (su exvocero), miembros del SODE y la lista es larga.

—El shock es lo que estamos viviendo. El shock es lo que nos deja el gobierno del presidente Alan García: un país que retrocedió treinta años, un país donde quienes reciben un sueldo tienen que vivir con la mitad de lo que vivían.

—Nosotros no estamos proponiendo la modernidad al estilo europeo, hacer, como lo dijo el doctor Mario Vargas alguna vez, del Perú una Suiza.

—¿Qué pasó con las vacas de La Molina? Las vacas de La Molina daban 2400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fujimori y cuando él se fue, solo 400. ¿Qué les hizo usted a esas pobres vacas molineras, ingeniero Fujimori? No me va a decir que eran derechistas o que tenían prejuicios raciales las vacas molineras.

—Y si usted habla de cuestiones personales, hace tres años, en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República.

—¿Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía catorce años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputada del Cusco y condenada por el Poder Judicial a diez años de cárcel por narcotráfico?

—Bueno, hemos leído muchos libros. Creo también que los lectores a nivel nacional han leído el Elogio de la madrastra, que ha merecido —no sé por qué razones— la exoneración de los impuestos por tratarse de una obra aparentemente de interés educativo.

—Para cambiar una propuesta, hay que tenerla. Como el ingeniero Fujimori carece de ella, está exonerado de ese riesgo. No puede cambiar su propuesta porque no tiene ninguna.

—Doctor Mario Vargas, no soy ateo, no soy agnóstico, no soy evangélico: soy católico y respeto la libertad religiosa, la libertad de culto contemplada en nuestra Constitución y no discrimino a ningún peruano por razones de raza o religión.

—Nosotros dijimos, desde el primer momento, que no iba a haber ese tipo de transacciones que se presta, como se ha prestado en estos últimos cinco años, como lo sabe el ingeniero Fujimori, no puede desconocerlo porque lo sabe el país entero, a muchos negocios dudosos y turbios.

—Bueno, nosotros defendemos a los empleados públicos porque son tan conciudadanos, tan compatriotas, como todos. Y usted cree que los peruanos son monos.

—Denme ese voto con la voluntad de que haga esas reformas necesarias, saque al Perú de la pobreza, saque al Perú del subdesarrollo, saque al Perú de la violencia y trabajando con ustedes, con todos ustedes sin ninguna excepción, construyamos ese país del que nos sentiremos orgullosos todos los peruanos.

—Tengo aquí una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, que ha sido impresa, hasta donde sabemos, en número de quinientos mil ejemplares para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate que aún

no se termina. ¡Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo!

Era la primera vez que se desarrollaba un debate electoral presidencial en el Perú. Las negociaciones estuvieron a cargo de San Román, Paredes y Loayza por parte de Cambio 90, mientras que FREDEMO tenía en su equipo a Álvaro Vargas Llosa, Alberto Borea y Luis Bustamante Belaúnde.

El diálogo entre ambos partidos no estuvo exento de asperezas. Los fujimoristas buscaron que la campaña de Vargas Llosa retirara spots que vinculaban a su candidato con Alan García. Luego buscaron que el debate sea en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a lo que el escritor se negó porque pensaba que sería agredido físicamente. Al final, se optó por la colaboración de la Universidad del Pacífico, que ya había organizado debates municipales en 1983 y 1986. El freno final fue la propuesta de cuatro debates por parte de Cambio 90, pero, al final, solo se realizó una contienda.

Vargas Llosa entrenó en una casa campestre de Chosica con tres periodistas afines: Fernando Viaña, director del tabloide popular Ojo; Alfonso Baella Tuesta, exeditor de Política de El Comercio y Hildebrandt. Mientras que Fujimori recibía, en secreto, la ayuda de Otero y del propio Alan García, quienes le sugirieron que llamara «señor o doctor Vargas» a su contendiente.

Pero el ingeniero dudaba de sus opciones, pues se había acortado la diferencia con Vargas Llosa en las encuestas. Una semana antes del debate, el jefe del SIN, Edwin Díaz, contactó a Otero para que forzara un apagón antes de la contienda argumentativa. El publicista se negó. Ante la insistencia del militar, consultaron con Alan. La respuesta presidencial fue contundente: «Dígale al Chino que tiene que tener huevos si quiere ser presidente».

Para provocar más a Vargas Llosa, Fujimori colocó como invitadas suyas, en primera fila, a las viudas y madres de los ocho periodistas asesinados en la localidad ayacuchana de Uchuraccay, el 26 de enero de 1983. El escritor había encabezado una polémica comisión investigadora, que concluyó que los hombres de prensa

habían sido asesinados por error por los comuneros, quienes los confundieron con senderistas, además de dar una interpretación controvertida sobre las costumbres de la comunidad. Los familiares de los periodistas estaban convencidos de que el asesinato había sido instigado por miembros de las Fuerzas Armadas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, años más tarde, confirmaría que la comisión Vargas Llosa corroboró adecuadamente los hechos, pero discrepó de la visión occidentalista sobre los ciudadanos de Uchuraccay. Para 1990, el caso seguía motivando pasiones.

Finalmente, la portada de Ojo que mostró Fujimori al final de la polémica se convertiría en uno de los grandes misterios de la historia contemporánea peruana. Tanto Viaña como la familia Agois, propietaria de la empresa que editaba el diario, negaron que la pieza periodística fuera auténtica. El Ministerio Público revisó las instalaciones y no encontró un ejemplar aún impreso. Pero la primera página del día siguiente en el diario popular sería muy parecida a la que presentó el ingeniero. Ambos postulantes se sintieron confiados.

Faltaba una semana para la decisión final[20].

La última semana fue agotadora. Fujimori incrementó sus paseos por mercados. Vargas Llosa recibió los endosos públicos de Cecilia Martínez, viuda de Rodrigo Franco, mártir aprista asesinado por Sendero Luminoso, y Alicia de Sedano, esposa de uno de los periodistas ultimados en Uchuraccay.

El candidato de FREDEMO optó por refugiarse en la familia, fuera del ojo público, el día previo a los comicios. Mientras que el postulante de Cambio 90 prefirió la pesca con sus hijos, con las cámaras de todas las televisoras. Las encuestas que no podían ser difundidas daban un empate entre los candidatos.

Pero los resultados del día siguiente fueron otros. La distancia inicial fue de diez puntos, como se lo indicaron Malloch y su hijo Álvaro al candidato escritor. El flash electoral dio una cifra similar. Para las seis de la tarde, las proyecciones arrojaban 15 % de diferencia. Todo había terminado: Alberto Fujimori era el nuevo presidente del Perú.

Vargas Llosa felicitó al ganador. Horas más tarde, volaba a París para participar en un programa de televisión cultural. Volvía, como diría su hijo Gonzalo, a su escritorio, para reintegrarse a la literatura.

Mientras que Fujimori auguraba que, durante su gobierno, «habría menos politiquería» y se defenderían «los intereses del pueblo». Sin embargo, pronto ocurriría un giro que revelaría el pragmatismo del mandatario electo.

Entre el 10 de junio y el 28 de julio de 1990, Fujimori cambió. Y uno de los artífices de su mutación fue un personaje que había sido cobijado por Vargas Llosa, pero que luego adquirió un perfil propio.

Habíamos dejado a Hernando de Soto como ponente del mitin contra la estatización de la banca, en 1987. Sin embargo, se había alejado de Vargas Llosa y comenzado a trabajar en propuestas de formalización para el gobierno de García. De acuerdo con la versión del novelista peruano, de Soto comenzó a hablar mal de él en foros internacionales. Y se dedicó a promocionar a su think tank, el Instituto Libertad y Democracia, en varios medios de comunicación.

El ingeniero Fujimori convocó a de Soto a pocas horas de ganar. Este vio la oportunidad de brindarle un programa de gobierno, que comenzó a preparar de inmediato. Lo apoyó Carlos Rodríguez Pastor, exministro de Economía en el segundo periodo de Belaúnde y que trabajaba como banquero de inversión en Estados Unidos. Y este, a su vez, consultó a Luis Valdivieso, Felipe Morris y un economista establecido en Connecticut llamado Carlos Boloña. Sin embargo, los economistas heterodoxos se resistieron, en particular, Adolfo Figueroa.

De Soto también se volvió el principal asesor de Fujimori. Le recomendó que hiciera una gira por Estados Unidos, para visitar a las instituciones multilaterales más importantes —Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo — con el fin de buscar la reinserción económica y financiera del Perú. Para ello, tuvo el apoyo de su hermano Álvaro, brazo derecho del entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar. Aún dubitativo sobre el rumbo a tomar, Fujimori presentó primero el plan gradualista y luego el elaborado por De Soto. Cuando enunció el

segundo, los miembros de los organismos multilaterales pusieron más atención e insinuaron que ese debía ser el camino a seguir. El director del ILD comenzaba a pesar más que Figueroa —presente en el viaje— y su equipo económico.

Fujimori voló desde Estados Unidos a la tierra de sus ancestros. Se trataba de una visita protocolar donde la preocupación económica por obtener créditos se mezcló con la añoranza paterna y la visita a Kawachi, la aldea originaria de sus progenitores, así como con una audiencia especial con el emperador Akihito. Sin embargo, la visita no era oficial, los miembros del gobierno japonés fueron muy cautelosos en sus promesas de nuevos créditos y, al igual que los organismos multilaterales, comprometieron cualquier ayuda a reformas de mercado. Otro motivo de cautela era evitar enojos en Washington, dado que Japón basa su defensa exterior en el apoyo estadounidense y América Latina era la natural área de influencia de la principal potencia mundial.

A su regreso del Japón —a donde había acudido solo con Figueroa—, Fujimori hizo una escala en Miami. Allí tuvo una reunión con de Soto, Rodríguez Pastor, Morris, el economista heterodoxo y Boloña. Este último le expuso la necesidad de un plan ortodoxo. Por primera vez, el presidente electo estuvo de acuerdo abiertamente con la necesidad de un ajuste.

La siguiente preocupación sería el gabinete. De Soto presionó por la presencia de un ministro de Economía y Finanzas dispuesto a hacer el ajuste estructural a fondo. Se discutió la posibilidad de que fuera Boloña, pero Fujimori no lo nombró. Sobre las razones para ello, hay versiones contradictorias. Para algunos, Boloña había declinado el puesto. Para otros, Fujimori no quería correr el riesgo de hacer una reforma estructural tan fuerte, dado que el shock era inevitable. La versión del economista egresado de Oxford es que Fujimori le ofreció el puesto, pero el rechazo se debió a que este no estaba convencido de nombrar a Luis Valdivieso al frente del Banco Central de Reserva. El presidente electo y Valdivieso —quien sería ministro de Economía en 2008— habían tenido un enfrentamiento verbal en New York.

En este punto, Fujimori priorizaría la necesidad de concertación. Llamó a un compañero de aula en la UNALM, Juan Carlos Hurtado Miller, militante de Acción Popular, quien había sido ministro de Agricultura en la segunda gestión de Belaúnde. Hurtado aceptó el encargo y renunció a su partido. Con ese nombramiento, el equipo encabezado por Figueroa y Roca dimitió.

Sin embargo, el gabinete ministerial tendría una cuota de izquierda. Inicialmente, Fujimori llamó a un excontendiente suyo, Henry Pease, para ofrecerle el Ministerio de Educación, cartera que su padre había ejercido en la Junta Militar que gobernó entre 1962 y 1963. El sociólogo rechazó el cargo, al considerar que no se tenía un rumbo claro, sobre todo en dos sectores que él consideraba claves en los siguientes años: Defensa y Economía. El presidente electo no le contó nada sobre el shock. Sin embargo, gracias a las conversaciones entre ambos, Izquierda Unida acordó que sus profesionales pudieran aceptar cargos a título personal en el nuevo gobierno. Así surgió el nombre de Gloria Helfer, reconocida educadora, como reemplazo de Pease. Al mismo tiempo, Fernando Sánchez Albavera, proveniente de la Izquierda Socialista de Barrantes, fue convocado para Energía y Minas.

Aunque Carlos Amat y León venía también de las canteras de la izquierda, su llegada no se debió a la apertura de los partidos. Amat era molinero, amigo personal de Hurtado y, sobre todo, alguien recomendado por Santiago Fujimori, quien comenzó una carrera de influencia en el reclutamiento de personal y la formulación de políticas públicas. Para ese entonces, Santiago ya había dejado la embajada nipona y se dedicaría a asesorar a su hermano.

Fujimori quería convencer a de Soto para que fuera presidente del Consejo de Ministros. Pero este se negó. No deseaba tanta exposición pública, pero sí mantener su influencia. En la práctica, se convertiría en un asesor importante hasta inicios de 1992. Así, Hurtado Miller pudo ocupar, junto con el MEF, la PCM.

¿Y Montesinos? Primero convenció a Fujimori de que podía ser envenenado, con lo que el desconfiado mandatario no comió nada en su cena de celebración de triunfo, en un restaurante de comida china. Luego le indicó que había una amenaza terrorista para

matarlo, con lo que logró ubicarlo como residente temporal en el Círculo Militar, un club del Ejército donde el ingreso es restringido. Allí logró ubicar a Alberto Pinto, un coronel de su confianza —estudiaron juntos en la Escuela Militar de Chorrillos y ambos eran arequipeños—, como custodio informal de Fujimori. Montesinos consiguió, además, que se levantaran las restricciones para acceder a instalaciones militares, contándole a Fujimori una versión más amigable de sus líos de espionaje. A la par, comenzó a revisar los posibles nombramientos castrenses del nuevo gobierno y preparó la salida de Loayza del entorno presidencial, bajo el pretexto de un supuesto negociado. Iniciaba así su juego en las sombras[21].

---

3 Mario Vargas Llosa cuenta, al final de su libro de memorias *El pez en el agua* (2005: 582), que veía un partido de fútbol correspondiente al Mundial Italia 90 cuando llegaron los primeros resultados. Por la hora señalada, se trataba del partido Estados Unidos vs. Checoslovaquia. El diálogo entre Malloch y MVLL es una reconstrucción a partir de lo señalado por Álvaro Vargas Llosa (1991: 210), su bitácora de la campaña presidencial. Ambos textos son la base para la narración de las incidencias de campaña del hoy Premio Nobel de Literatura.

4 Genaro Delgado Parker (1929-2017) dirigía Radio Panamericana, emisora de propiedad de su padre, en la década de los cincuenta. Como ha relatado en su novela *La tía Julia y el escribidor* y en sus memorias *El pez en el agua,* Vargas Llosa fue contratado como jefe de informaciones de dicha emisora, en uno de los tantos trabajos que tuvo al inicio de su matrimonio con Julia Urquidi.

5 *El otro sendero. La revolución informal* está basado en una investigación del Instituto Libertad y Democracia *think tank* fundado por de Soto, en la que también intervinieron el abogado Enrique Ghersi y el periodista Mario Ghibellini. Estos últimos ganaron una disputa legal a de Soto por la publicación de una nueva edición del libro que excluía sus nombres como coautores.

6 A pesar de que las normas de estatización del sistema financiero fueron emitidas por un Congreso bicameral de mayoría aprista, la ley nunca pudo ser aplicada en la práctica, tanto por amparos judiciales como por jugadas empresariales. Por ejemplo, Dionisio Romero, principal accionista y CEO del Banco de Crédito del Perú, vendió sus acciones a sus trabajadores, con lo que evitó que el Estado se apropiara de la entidad.

7 La frase de Igartua ha sido reconstruida a partir del relato de Jeff Daeschner (1993: 58) —el texto más completo sobre la campaña electoral de 1990 y que nos sirve como base para este capítulo—, así como por declaraciones de Cruchaga al periodista José Carlos Requena (2010: 84) sobre el Movimiento Libertad. Los preparativos para el mitin contra la estatización de la banca se han reconstruido a partir de Requena (59-80), Daeschner (37-55) y Vargas Llosa (2005: 45-50). La autocrítica de Alan García —una de las pocas que hizo en su carrera política— aparece en su texto póstumo *Metamemorias* (2019:

253-254).

8 El *spot* del monito puede verse en https://youtu.be/dNawLtBc4H0. El relato de trastienda del *spot* se basa en Daeschner (1993: 113-117) y Vargas Llosa (2005: 407-409).

9 El relato más distanciado y acabado de la ruptura de la izquierda es el de Tanaka (1998: 125-140).

10 El informe de Sawyer Miller está resumido en Daeschner (1993: 117-120), mientras que la rigidez de Libertad está planteada en Requena (2010: 97-105, 112-115) y Planas (2000: 218-229). Vargas Llosa y Daeschner plantean tanto las razones de formación de FREDEMO como las limitaciones de la alianza.

11 Para entender mejor el fenómeno Belmont, son claves el libro de Planas (2000: 259-265), así como Jara (2018). Este último da cuenta de las claras limitaciones del proyecto político y empresarial de Belmont, quien llegó al poder sin programa de gobierno definido y cuyo canal, en la práctica, nunca pudo consolidarse como una empresa de accionariado difundido.

12 El proceso de formación de Cambio 90 es descrito con lujo de detalles en Daeschner (1993: 88-91, 94-98, 137-139, 143-144, 166-173, 179-183), Jochamowitz (2018: 275-312) y Degregori y Meléndez (2007: 23-33). Otros aspectos, como el supuesto soborno en forma de calculadora para no revisar exhaustivamente las firmas de Cambio 90 o los cálculos electorales de Fujimori, son contados por Murakami (2018: 213-218).

13 Un resumen del plan de Vargas Llosa está en (2005: 385-407). García-Sayán confirmó la oferta de ser comisionado de derechos humanos en su libro autobiográfico (2017: 34-35). Los fustigamientos de Paniagua aparecen en Daeschner (1993: 104-105, 133-134). Los textos de Vargas Llosa (2005: 449-462) y de su hijo (1991: 66-73) son profusos en detalles sobre la guerra sucia iniciada por Alan García. El *spot* del *shock,* elaborado por el publicista aprista Alfonso Salcedo, puede verse en https://youtu.be/DQ79qbKpMCw

14 Para la descripción de Sendero Luminoso y del MRTA, nos basamos en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003: tomo I: 55- 69) y en Zapata (2017: 162-182). Sobre los hechos de Chuschi y la formación del GEIN, véase Paredes (2017: 11-17, 49-57). Asimismo, los libros de Zapata (2017: 221-224) y Paredes (59-78) nos ayudaron a perfilar las primeras acciones del Grupo Especial de Inteligencia.

15 La versión de Otero sobre el apoyo de Alan García a Barrantes y Fujimori consta en Daeschner (1993: 193-194) y es confirmada por Bowen (2000: 21-22). Planas resume bien los nexos entre García y Fujimori (2000: 296-301). Vargas Llosa le dedica tres largos párrafos (2005: 346-348) a Thorndike, quien hizo trabajos por encargo de diversas tiendas políticas y dirigió medios controlados por Velasco y Fujimori. Beto Ortiz, periodista a quien no se puede acusar de animadversión hacía García, contó en 2000 para el desaparecido portal Terra la confesión de García sobre su nexo con *Página Libre.* El artículo de Ortiz se titula «Yo trabajé para Alan García». *Las Metamemorias* de Alan García no contienen ningún desmentido ni tampoco aceptación de su papel en la campaña electoral. Sin embargo, el personaje más atacado a lo largo del texto es Mario Vargas Llosa.

16 Los entretelones de la jornada electoral del 8 de abril y los diálogos posteriores a la

primera vuelta aparecen en Vargas Llosa (2005: 486-500, 523-537), en el libro de su hijo Álvaro (1991: 127-160), en Daeschner (1993: 218-234) y en Bowen (2000: 24-28).

17 Los aspectos sobre la segunda vuelta se basan, sobre todo, en Vargas Llosa (2005: 537-583, 161-217), Daeschner (1993: 231-272) y Bowen (2000: 25-30). Sobre la posición de los medios en la segunda vuelta de 1990, ver Planas (2000: 301-305), Vargas Llosa (1991: 50-60) y Vivas (2008: 502-503).

18 El reclutamiento de Roca en el equipo de Fujimori es descrito por Daeschner (1993: 238-240, 249-250); mientras que el resto del equipo es señalado por Reyna (2000: 252 y 255).

19 El encuentro con Montesinos se basa en Daeschner (1993: 194-196), Jara (2017: 39-47), Uceda (2018: 263-264) y Jochamowitz (2019a: 61-65).

20 Los diálogos del debate presidencial entre Vargas Llosa y Fujimori fueron extraídos de la transcripción oficial de *El Debate* (1990): http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/399. Los entretelones están en Vargas Llosa (2005: 569-572), Vargas Llosa (1991: 195-204), Daeschner (1993: 262-268) y Bowen (2015: 111-112).

21 Bowen describe el proceso de cambio entre la primera y la segunda vuelta en (2000: 33-49). Vargas Llosa recuerda la problemática relación con de Soto en (2005: 194-197). El economista respondió a lo dicho por el escritor, en 1993, con una mentada de madre en el programa *Panorama,* emitido por Panamericana Televisión. Otros detalles de la conformación del equipo ministerial y del nuevo rumbo del gobierno son presentados por Murakami (2018: 237-244). La reunión con Pease es contada en (1994: 61-63). El inicial poder de Montesinos se describe en Rospigliosi (2000b: 18-19, 24-25), Jara (2017: 47-50) y Uceda (2018: 265-266). Boloña detalló sus conversaciones con Fujimori y de Soto, incluyendo la reunión en Miami, en (1993: 21-26).

VIAJE A LA SEMILLA

(Abril, 1899 – Mayo, 1989)[22]

El 3 de abril de 1899 llegó, por primera vez al puerto del Callao, un barco con migrantes japoneses. Bajo el nombre de Sakura Maru, la embarcación arribó con 790 personas, quienes venían a trabajar a las haciendas azucareras de la costa peruana.

La migración masiva de japoneses a varias partes del mundo fue producto del proceso de occidentalización que tuvo la potencia asiática a partir de 1868. La agricultura se reformó, dejando de lado el régimen feudal y pasando a la redistribución de la propiedad de la tierra, que terminó siendo acaparada por grandes propietarios. Al mismo tiempo, se produjo un fuerte desempleo en el campo, debido a la introducción de nuevas tecnologías y al alto crecimiento de la población durante los primeros años de la Era Meiji.

Los destinos favoritos de los japoneses fueron China, Corea, Hawái, Canadá, México y Estados Unidos. Cuando comenzaron a cerrarse las puertas de estos países, se incentivó la salida de ciudadanos nipones hacia Sudamérica, en particular, a Brasil y Perú.

¿Por qué nuestro país se convirtió en un destino atractivo para los migrantes? Durante el periodo conocido, gracias al historiador Jorge Basadre, como la «República Aristocrática», las haciendas costeñas requerían mano de obra y se buscó en Asia la solución a su escasez. En 1898, un diálogo entre los empresarios Teikichi Tanaka y Augusto B. Leguía —quien luego sería presidente del Perú en dos oportunidades— motivó que nuestro país fuera incluido en los destinos de migración japonesa, a la par que el gobierno peruano autorizaba esta llegada masiva.

Entre 1899 y 1923, la migración japonesa arribó bajo la modalidad de un contrato: los trabajadores eran reclutados por una compañía autorizada por el gobierno japonés, que señalaba cuáles eran las condiciones, las posibilidades de ahorro y el clima que se encontrarían en la costa peruana. La expectativa de los migrantes era quedarse un tiempo en Sudamérica y luego retornar a su país con lo ahorrado. Varios decidieron quedarse y establecer, terminados sus contratos, negocios independientes.

Para 1923, esta modalidad de migración culminó, tanto por los bajos salarios ofrecidos como por la extensión de la práctica del enganche de trabajadores provenientes de la sierra peruana. Sin embargo, la llegada de japoneses al Perú continuó. La modalidad del «llamado» fue la predominante. Aquellos migrantes que habían tenido buena fortuna en nuestro país y habían decidido quedarse más tiempo del previsto —o para siempre— convocaron a sus parientes y amigos para hacer fortuna en Perú. A diferencia de la modalidad de contrato, la migración por llamado se concentró en las ciudades, donde los japoneses habían podido hacer negocios[23].

Naoichi Minami nació en 1899 en Kawachi, un pueblo ubicado dentro de la prefectura de Kumamoto, en Japón. En 1927, llegó al Perú bajo la modalidad de llamado —su hermano llegó antes—, luego de ejercer en su país el oficio de sastre. Buscaba ahorrar dinero y volver a su patria, como miles de sus compatriotas. De acuerdo con la historia familiar, se empleó en varios oficios, tanto en labores agrícolas como en zonas urbanas.

Luego de cinco años en nuestro país, Minami regresó a Kawachi. Su intención era casarse y ya contaba con un capital. En su aldea, se le arregló un enlace con Mutuse Inomoto, nacida en 1912, cuya familia estaba a las órdenes de un hombre que había comenzado su fortuna como trabajador del azúcar en Hawái y era, para la época, un millonario con acciones en la bolsa de valores de Tokio. Este hombre rico se llamaba Kintaro Fujimori.

El arreglo entre Minami y Fujimori comprendía una fórmula vigente en el Japón de la época: Naoichi adoptaría el apellido de la casa y, en principio, aceptaría trabajar bajo sus órdenes. Sin embargo, como excepción, Kintaro consintió que el nuevo integrante de su familia viajara a Perú con su flamante esposa. El matrimonio se realizó a inicios de 1934.

Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto viajaron al Perú en el barco Bokuyu Maru en agosto de 1934. Al mes, arribaron al puerto del Callao. Se instalaron en Huacho, donde, para efectos prácticos, él adoptaría el nombre castellanizado de Alberto. En este lugar ejercería su oficio original de sastre. Al año siguiente, nacería la primera hija del matrimonio, Juana Hatsumi.

En 1937, los Fujimori se trasladaron a Lima, como subarrendatarios de una parcela en una hacienda ubicada en las afueras de la capital del Perú. Allí cambiaría su destino.

Para la década de los años treinta, la situación de los migrantes japoneses en Perú comenzó a sufrir complicaciones. La empresa migratoria nikkéi había sido identificada en demasía con Leguía. Al ser derrocado por Luis Sánchez Cerro, el nuevo gobernante comenzaría a colocar trabas a la migración, así como al empleo de japoneses en empresas familiares.

Tras el fallecimiento de Sánchez Cerro, víctima de un magnicidio, gobernaría el general Oscar R. Benavides. Durante su periodo, creció la campaña antimigratoria. En diarios como La Prensa, se alertaba sobre el «peligro amarillo».

En 1936, el gobierno emitió un Decreto Supremo para restringir la migración asiática y limitó el número de extranjeros por nacionalidad para su residencia en el país. También se prohibió el traspaso de los negocios a otros extranjeros, lo que motivó una nacionalización masiva judicial de nikkéis. Incluso, miembros del Partido Aprista Peruano, que tenían posiciones progresistas en varias materias, se pronunciaron en contra de la migración japonesa.

En particular, los discursos contra los japoneses migrantes aludían a la nueva posición que tenían en la economía nacional, sobre todo, en el comercio y en la adquisición de tierras agrícolas. Dentro de las cuestiones que se enunciaban, se llegó a mencionar que los japoneses llegarían a superar a los peruanos en población, debido a las redes de cooperación de la colonia, así como a sus mejores hábitos de salud e higiene.

La historia oficial de la familia Fujimori señala que Alberto, el segundo de los hijos del matrimonio conformado por Naoichi y Mutsue, nació el 28 de julio de 1938, a la 1.20 horas, en la hacienda La Calera, entre los actuales distritos limeños de Surco y Surquillo. Como ya mencionamos, los padres del futuro mandatario arrendaban unas tierras en dicha área aún rural de la capital del Perú. Fue Naoichi quien inscribió a su hijo en el registro civil peruano con estos datos, teniendo como testigos al albañil Bernardo Maita y al peluquero Oishi Kishimoto.

Sin embargo, de acuerdo con el registro japonés (koseki) de la familia, en realidad, Alberto Fujimori nació en Lima el 26 de julio de 1938, dos días antes de la fecha que aparece en sus documentos peruanos. De acuerdo con lo señalado por la familia Fujimori al politólogo japonés Yuzuke Murakami, fue uno de los testigos quien propuso a Naoichi inscribir a su hijo ante las autoridades peruanas como nacido en Fiestas Patrias. La inscripción ante el consulado japonés en nuestro país también fue hecha por el padre del expresidente.

Si la fecha más probable del nacimiento de Fujimori es la indicada en el registro nipón, ¿por qué se le inscribió como nacido en el día que se recuerda la proclamación de la independencia peruana? Según registra el periodista Luis Jochamowitz, para 1937 se emitieron normas que complicaban la inscripción de hijos de extranjeros, en momentos en que existía un creciente clima xenofóbico en el Perú, en particular, contra los japoneses. Ese año, la legación japonesa en Lima emitió un memorándum en el que señalaba que los niséis — hijos de japoneses— nacidos en Perú tenían la nacionalidad peruana.

El koseki señala claramente que Alberto Fujimori no nació en el barco en el que sus padres arribaron al Perú, como fue producto de especulaciones durante varios años. De hecho, en el registro del barco Bokuyu Maru, en el que Naoichi y Mutsue arribaron al puerto del Callao, no figura que el matrimonio tuviera hijos.

El lugar de nacimiento o una posible doble nacionalidad por parte de Fujimori fue materia de indagaciones durante la campaña electoral de 1990. Miembros de Inteligencia de la Marina de Guerra le reportaron a Mario Vargas Llosa la presunta existencia de documentos que comprobarían que Fujimori no habría nacido en territorio peruano. El escritor decidió no utilizar este elemento por razones éticas, pues consideraba que, si había un fraude a la legislación migratoria peruana o al registro civil, lo cometieron los padres de su oponente, en circunstancias adversas hacia los migrantes en el Perú.

No fue la única versión que arribó al entorno del Frente Democrático. En los días previos al debate electoral, llegó al cuartel

general de FREDEMO el rumor sobre la existencia de un pasaporte japonés de Fujimori. El abogado y personero Alberto Massa fue a la embajada de Japón a hacer una averiguación formal sobre la materia, sin obtener respuesta. Para Murakami, quien trabajó en la década de los noventa en la delegación nipona en Lima, el gobierno japonés hizo las averiguaciones y determinó que dicho pasaporte no existía.

La conclusión es clara. Alberto Fujimori nació en Lima el 26 de julio de 1938, siendo inscrito por su padre en los registros de Perú y Japón. Por tanto, siempre tuvo doble nacionalidad. No sería hasta noviembre de 2000 que activaría los documentos vinculados a la tierra de sus ancestros[24].

Los primeros años de vida de Alberto Fujimori transcurrieron en un periodo difícil para los nikkéis. Cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, en la que Japón formaba parte de las potencias del Eje, se incentivó la propaganda antinipona. Se temía que la presencia numerosa de ciudadanos japoneses y sus descendientes pudiera convertir al Perú en un nuevo escenario del conflicto internacional, sobre todo, pensando en un posible enfrentamiento con Estados Unidos. Aunque nunca se llegó a demostrar su validez, circularon diversas versiones sobre un supuesto armamento escondido en tierras agrícolas o sobre la presencia de espías.

Esta situación se complicó cuando en algunas asociaciones cercanas a parte de la comunidad nikkéi se difundió propaganda del gobierno japonés y se asumieron actitudes férreas de defensa de la política exterior del país oriental.

El 13 de mayo de 1940, los alumnos del colegio Nuestra Señora de Guadalupe organizaron una marcha contra los japoneses, a la que se adhirieron otros ciudadanos. Las protestas terminaron con el apedreamiento de locales y viviendas y saqueos en el Cercado de Lima, La Victoria, Rímac y Jesús María.

El 7 de diciembre de 1941, Japón ingresó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, al atacar la base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en Hawái. El gobierno de Manuel Prado Ugarteche, de inmediato, dispuso la inamovilidad de fondos de sociedades e individuos japoneses. En enero de 1942, Perú abandonó la

neutralidad que había mantenido en el conflicto global y rompió relaciones diplomáticas con los países del Eje.

Prado viajó a Estados Unidos en mayo de 1942, para entrevistarse con su homólogo Franklin Roosevelt. En la cita, se acordó una deportación masiva de japoneses hacia campos de internamiento ubicados en el oeste de Estados Unidos. Se estima que una cifra cercana a mil seiscientas personas fue llevada a estos campos desde el Perú. También se confiscaron sus bienes. Se trata del mayor baldón xenofóbico de la política exterior peruana en toda su historia. Y que es más difundido en museos y fuentes estadounidenses que en nuestro país.

La niñez y adolescencia de Alberto Fujimori transcurrieron entre los años de la guerra y los constantes cambios de trabajo y domicilio del padre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Naoichi tendría una reencauchadora de llantas con la que se mantendría su familia y luego regentaría una ferretería. En sus primeros años, además del castellano, el infante Alberto tendría el japonés como lengua materna en casa. Durante los años cuarenta, nacerían sus hermanos Pedro (1940), Rosa (1942) y Santiago (1946).

Fujimori estudiaría la primaria en tres colegios: un establecimiento para niños niséis, Nuestra Señora de la Merced y la escuela fiscal 402, conocida como La Rectora. Estas instituciones educativas estaban en Barrios Altos, una zona tradicional de Lima. Desde niño, Fujimori mostraría su predilección por los estudios, aunque no dejó de participar en algunos partidos de fulbito a escondidas de su padre. En 1952, pasó a estudiar la secundaria en el colegio estatal Alfonso Ugarte, que inauguraba su nueva sede en San Isidro, construida durante el gobierno del general Manuel A. Odría. Allí acentuaría su afición por el estudio, su carácter introvertido y su vocación por el secreto. Varios de sus condiscípulos cuentan que escribía en taquigrafía, para evitar que sus compañeros copiasen sus anotaciones. Su punto débil, como varios escolares del mismo perfil, era Educación Física.

En esa misma época, la familia Fujimori se mudó a San Isidro, donde estableció su negocio más estable: una florería. Una vez que culminaban las clases escolares, el adolescente Alberto estaba

encargado de entregar los pedidos de flores en su bicicleta. También acudía a la Biblioteca Nacional para estudiar. Fue uno de los alumnos más destacados de su promoción escolar. Dos de sus compañeros escolares, Antonio Paucar y Óscar de la Puente Raygada, serían ministros de Estado durante su gobierno. No eran amigos cercanos suyos.

A partir de la década de los cincuenta, ocurre un cambio en la visión que se tenía de los japoneses en el Perú, producto de factores políticos y, sobre todo, sociales. Con posterioridad a la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón iniciaría el gran proceso de despegue económico e industrialización que, en pocas décadas, lo convertiría en una de las grandes potencias mundiales, con el apoyo de Estados Unidos.

Si bien durante los años de gobierno de Manuel A. Odría, el Perú restablecería relaciones diplomáticas con la nación asiática, sería recién en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche que se recobraría el impulso de las relaciones. El mandatario viajó en 1961 a Tokio, se buscó una fórmula de indemnización por los daños causados durante la guerra y se reanudó la migración en forma limitada.

Mientras este proceso transcurría, la comunidad decidió afianzar sus lazos con el Perú. Se fundaron nuevas agrupaciones —como la Asociación Estadio La Unión— y, además de los pequeños negocios, los nikkéis entraron a la industria, el gran comercio y la avicultura. Ello les dio un poder económico importante, lo que se sumó a la imagen de recuperación luego de la conflagración mundial. Así se fue consolidando la imagen de laboriosidad y trabajo de los descendientes de japoneses que se tendría en las siguientes décadas.

La reconciliación definitiva se dio durante la primera administración de Fernando Belaúnde Terry. Como compensación global por la confiscación de los colegios japoneses, se otorgó un terreno en Jesús María para edificar el Centro Cultural Peruano Japonés, inaugurado en 1967 por los entonces príncipes herederos —y emperadores entre 1989 y 2019— Akihito y Michiko. En los años

del primer belaundismo, llegaron ensambladoras de automóviles japoneses, inversiones mineras y amplia cooperación técnica.

La situación no cambiaría mucho durante la dictadura nacionalista de Juan Velasco Alvarado, periodo en que Japón colaboró con la construcción del oleoducto norperuano y apoyó las labores pesqueras. A la par, la comunidad nikkéi comenzaría a incursionar en campos como el arte, la cultura, el periodismo y el deporte, lo que ayudó a su integración definitiva en la vida social nacional.

Paradójicamente, quien se convirtió en el primer nikkéi en gobernar un país extranjero no se integró a las actividades de la colonia. El Museo de la Inmigración Japonesa —ubicado en el Centro Cultural Peruano Japonés desde 1981— solo dedica un pequeño panel en su exposición permanente a Fujimori, donde se consigna su abrupta salida del poder y sus condenas, en un lenguaje neutro y escueto. No hay mayores alusiones a su periodo como gobernante.

Fujimori ingresó en 1957 a la Escuela Nacional de Agronomía en el primer puesto de su promoción. Era el tránsito natural del hijo del dueño de una florería quien, durante sus años de trabajador retirado, tendría una granja en Ate Vitarte. Su padre adquirió parcelas de cultivo de flores en zonas poco urbanizadas de la ciudad por aquellos años, como Surco o La Molina, distrito en el que solitariamente estaba el campus adonde Alberto se trasladaba todos los días.

Sin embargo, Fujimori no se decantaría por el negocio familiar ni, menos aún, por las actividades agrícolas o las tareas de la granja de Naoichi. Al final de sus estudios encontró su verdadera vocación: las matemáticas. Nuevamente, se hicieron patentes los rasgos de su carácter: vocación fuerte por el estudio, necesidad de pasar desapercibido y laconismo en sus expresiones. Su vida social era escueta y continuaba apoyando a su padre en la florería.

Eran los años en los que la matrícula en la Escuela se había expandido a sectores populares, además de los hijos de agroexportadores y de la clase media a la que, con mucho esfuerzo, los Fujimori habían llegado. El tránsito natural se dio en el penúltimo

año de estudios del futuro ingeniero: la Escuela se transformó en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Luego de graduarse en 1961, Fujimori no dejó la UNALM. En abril de 1962, se convirtió en jefe de prácticas en el Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias. También realizó cursos libres de ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y se dio tiempo para los negocios familiares, dado que la salud de su padre comenzó a deteriorarse en la década de los sesenta, producto de una arterioesclerosis.

Entre 1964 y 1965, Fujimori pasó una temporada en Francia, para hacer estudios en matemáticas en la Universidad de Estrasburgo. No se conoce mucho de su estancia en ese país, salvo que, como cualquier estudiante becado de posgrado, conoció países cercanos como España y Gran Bretaña. A su regreso, fue nombrado docente estable de la UNALM. Paulatinamente, dejó los cursos más teóricos y pasó a las materias destinadas a los alumnos de primeros ciclos.

Poco se sabe de la vida personal de Fujimori durante esos años, salvo breves romances con una descendiente de alemanes y una nikkéi. A finales de 1968, conoció a Walter Gilbert, docente de la Universidad de Wisconsin, de quien se hizo amigo. Cuando Gilbert dejó el país, el profesor de matemáticas comenzaría su camino para estudiar una maestría en la mencionada casa de estudios. Para ello, finalmente hizo su tesis sobre variedades del camote y se tituló como ingeniero agrónomo.

Fujimori viajó en septiembre de 1970 a Wisconsin, donde permanecería dos años. Durante su estancia en Estados Unidos, fallecería Naoichi. Cuando volvió al Perú, la UNALM se hallaba en medio de las disputas políticas que caracterizarían a las universidades nacionales durante los años de Velasco. El magister en Ciencias, recién llegado, decidió mantenerse en medio de los grupos en disputa. Una vez que retomó los cursos básicos de matemática como docente, se hizo de buena fama entre los alumnos, tanto por sus virtudes pedagógicas como por su bajo índice de desaprobados.

En octubre de 1974, dos hechos marcaron su porvenir. Asumió la dirección del Programa Académico de Ciencias y trajo la idea para la construcción de aulas provisionales luego del terremoto que devastaría el campus de la Agraria. Nacería, a la vez, el germen del futuro burócrata-político universitario y del empresario constructor.

Si bien Alberto Fujimori se presentó, ante la opinión pública, como un neófito en la política, en realidad ocultó que había tenido un gran entrenamiento en uno de los espacios más politizados: la universidad pública. En los años sesenta, las universidades nacionales experimentarían un fenómeno de expansión de su matrícula y número, para aumentar la posibilidad de que los jóvenes contaran con un título que les brindara mayores ingresos y ascenso social. Sin embargo, este crecimiento no se vio acompañado de presupuesto ni de mejora en la calidad de la enseñanza. Todas las tendencias políticas buscaron representación y nuevos adeptos entre los docentes y, sobre todo, los alumnos. En ese contexto, quienes se convertían en autoridades universitarias debían llegar a delicados equilibrios con todas las facciones u optaban por transformarse en pequeños autócratas dentro de sus campus.

En 1977, Fujimori postuló al vicerrectorado de la UNALM. Su estrategia buscó que la Facultad de Ciencias fuera el factor clave en las luchas por el poder, tradicionalmente disputadas entre Agronomía y Zootecnia. Para ello, aplicaba sus apreciadas matemáticas. Negoció sus votos con el favorito al rectorado, Mario Zapata, agrónomo como él. Zapata fue elegido. Pero la sesión de la Asamblea de Docentes se interrumpió y, cuando se reanudó, Fujimori perdió el vicerrectorado por dos votos. Le quedó claro que le habían jugado sucio. Sus colegas de Ciencias le hicieron un almuerzo de desagravio.

Luego de la derrota, Fujimori alternaría sus labores académicas con la compañía constructora familiar, licencias con goce de haber e incluso un viaje a Cuba. También comenzó a hacer nexos con los representantes estudiantiles, que serían claves para la nueva elección de rector en 1984.

Aquel año, Fujimori se propuso ser decano de la Facultad de Ciencias. Cuatro votaciones le dieron el empate frente a un colega

aprista. Luego descubrió sus cartas: le dijo a su rival que competiría por el rectorado. En paralelo, convenció a una facción disidente de los profesores para que lo apoyase, a cambio de mejorar las condiciones laborales.

Fujimori se lanzó oficialmente al rectorado un mes antes de las elecciones. Sus promesas a todos los grupos dieron resultado: ganó en primera vuelta el 12 de mayo de 1984.

Su estilo como rector forjaría parte de los rasgos que veríamos en la Presidencia de la República durante una década. Invirtió sus alianzas, dejando de lado a los docentes y prefiriendo el trato directo con los estudiantes y el personal administrativo. Comenzó a preocuparse por la mejora de servicios básicos como biblioteca, cafetería y transporte de estudiantes. Al mismo tiempo, se rodeó de un grupo de leales y hacía las veces de maestro de ceremonias en todas las celebraciones de la UNALM.

Al fin descubrió su vocación. Y la potenció al máximo. En 1987, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Y luego daría otro salto en sus aspiraciones.

En 1987, Fujimori tuvo la oportunidad de aparecer durante dos años seguidos en el canal estatal como conductor de un espacio político. Las versiones sobre su debut como moderador en la pantalla chica difieren en algunos aspectos, pero concuerdan en lo medular. Jeff Daeschner, Sally Bowen y Luis Jochamowitz coinciden en que existió una versión sobre una presunta recomendación sobre las dotes de Fujimori como host televisivo por parte de Alan García a la televisora estatal, presidida en aquel momento por Carlos Guillén, una persona de confianza del mandatario. Es cierto que, en los primeros años de la administración aprista, el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina había brindado consejos a García sobre materias de su especialidad. Pero existe otra versión sobre la aparición de Fujimori en la señal televisiva del Estado.

Fernando Vivas refiere que Concertando apareció como un programa destinado a la defensa de la gestión de Remigio Morales Bermúdez como ministro de Agricultura, con la posibilidad de que luego se ampliara a otros problemas nacionales. Las productoras Doris García y Luisa Uzátegui fueron las encargadas de conseguir

un conductor que no fuera conocido y pensaron en que, dado que la primera emisión tendría que ver con agricultura, sería una buena idea contactar al rector de la UNALM.

A Fujimori se le llamó inicialmente para un único programa. García y Uzátegui le dieron las indicaciones generales y, en la prueba de cámara, lo hizo bastante bien. Fue un sobrio moderador que sorprendió a todos al señalar, al final de la primera emisión, cuáles eran las principales coincidencias entre los invitados. El estilo de conducción les gustó a todos en el canal. El rector aceptó continuar, a condición de que el espacio sea semanal, para que pueda estudiar cada tema.

Durante dos años, Fujimori apareció los lunes por la noche en vivo en el canal estatal, dirigiendo un programa de debates que congregaba a técnicos, políticos, líderes gremiales y expertos. Él y sus productoras decidían los temas del espacio, a veces con algunas sugerencias de Guillén. Esto no era poca cosa en un país donde, en varias localidades alejadas, la señal de la televisora estatal era la única que se captaba —en algunos casos esto sigue hasta el día de hoy—, por lo que el rostro del ingeniero agrónomo comenzó a ser familiar para algunos. Aunque los ratings no eran abundantes, la audiencia era suficiente para que Fujimori comenzara a hacerse conocido a escala nacional[25].

Casi al mismo tiempo que terminaba su ciclo televisivo, Fujimori culminó su periodo como rector. No pudo ser capaz de colocar a un sucesor afín en su puesto. Tampoco pudo presidir la asamblea donde se eligió a su reemplazo. Su último día de mandato, en mayo de 1989, culminó con la inauguración de obras de infraestructura en la UNALM, sin pena ni gloria. Sin despedirse, acabó su mandato y pidió su jubilación. Empezaba, formalmente, su carrera política nacional.

---

22 La mayor parte de datos biográficos de Alberto Fujimori se encuentra en la biografía no autorizada de Jochamowitz (2018: 19-272). Hemos completado algunos elementos en base a la lectura de Murakami (2018: 193-199 y 2019: 117-123).

23 En torno a la migración japonesa, consultamos Fukumoto (1997) y Morimoto (1999).

24 Sobre el koseki japonés de la familia Fujimori, consultamos la edición del 20 de junio de

2001 de *La República,* donde se presentó este documento por primera vez al público peruano en forma completa. Las intrigas en torno a la nacionalidad del presidente durante la campaña de 1990 se consignan en Vargas Llosa (1991: 204-205) y Vargas Llosa (2005: 556-559). Otros datos se aportan en «Los Patriotas», de Mario Vargas Llosa, publicado el 10 de agosto de 1997 en *El País* y que puede leerse en https://elpais.com/diario/1997/08/10/opinion/871164007_850215.html.

25 La información sobre el programa televisivo de Alberto Fujimori se construyó sobre la base de Vivas (2008: 494-497), Bowen (2000: 12-13), Daeschner (1993: 89), Jochamowitz (2018: 286) y Murakami (2018: 198).

QUE DIOS NOS AYUDE

(Julio, 1990 – Febrero, 1991)

Un tumulto de cámaras lo espera. Ya no tiene la banda presidencial. Alan García camina por el hemiciclo de la Cámara de Diputados para dar su mensaje final. Sus compañeros aplauden, batiendo las palmas apristas. Antes de subir al estrado, da la mano y abraza a Patricio Aylwin, Jaime Paz Zamora, Fernando Belaúnde, Luis Alberto Sánchez y al presidente de los diputados, Víctor Paredes. Detrás, cual fiel escudero, Jorge del Castillo acompaña sus pasos.

Sube y saluda a Máximo San Román, presidente del Senado. Allí ve que las bancadas de FREDEMO, Frente Independiente Moralizador, Izquierda Unida e Izquierda Socialista no lo aplauden. Ni siquiera se han puesto de pie. Suena el Himno Nacional, ahora sí, todos se paran. Culminada la canción patria, García saluda a Virgilio Barco y a Carlos Menem. Por fin, sube a dirigir su último mensaje como presidente del Perú. Se escucha el grito de «¡ladrón!», que presagia lo que vendrá.

Comienza el ruido de carpetazos en el hemiciclo. Provienen de la bancada de FREDEMO. Al frente, responden con las palmas apristas y gritando «Alan presidente». García sonríe nervioso. Toma valor.

—Señor presidente…

Vuelven los carpetazos desde FREDEMO. Se toca el timbre. Vienen los gritos. «¡Ladrón!». «¡Callen, mierdas!» Las alusiones maternas continúan. García se suma a las mismas, sin expresarlas en el micro. Los apristas vociferan: «La derecha no gobernará». San Román llama al orden. Finalmente se callan.

—Señor presidente…

Nuevos carpetazos, pero esta vez, los parlamentarios de Libertad, el SODE y el Partido Popular Cristiano, se levantan y se van. Los apristas responden con sus consignas. Finalmente, García puede hablar.

—Una cosa es soñar y otra es gobernar.

García reconoció en su breve alocución que el modelo que aún consideraba como oligárquico no podía ser cambiado por decreto.

Como el único gran logro aparecía el proyecto de descentralización que el saliente mandatario había iniciado, paradójicamente, por decreto y desde arriba.

García terminó su discurso. Sacó de una caja una banda presidencial hecha para la medida de San Román y que este trasladaría a Fujimori. En medio de gritos de «Alan presidente», que provenían de su bancada, se despidió de los altos dignatarios extranjeros, Belaúnde y Sánchez. Esta vez, sus custodios eran Armando Villanueva y Luis Negreiros Criado. Hizo un saludo militar a la guardia de honor y se marchó. Volvía a ser un ciudadano más[26].

—Es para mí un alto honor haber sido elegido con la más alta votación histórica.

Fujimori iniciaba su mensaje presidencial con una inexactitud. El ingeniero olvidaba que, en primera vuelta, había obtenido 29.09 % de los votos. El respaldo de la segunda vuelta electoral, que se aplicaba por primera vez en 1990, no implicaba necesariamente el mandato amplio que el exmandatario quería tener. Curiosamente, incurrió en aquello que criticó a Vargas Llosa durante la contienda presidencial. En esa línea, continuó con las alusiones a su antiguo adversario:

—El electorado peruano consagró un mandato de unidad nacional y de rechazo a las propuestas alternativas fundadas en la confrontación, polarización y conflicto abierto como estilos políticos de gobierno.

El presidente hizo una promesa que, luego de su decenio de mandato, resonaría como un compromiso incumplido:

—Atendiendo a ese mandato proclamo que desde hoy la palabra moralización dejará de ser un vocablo de rutina de los discursos de 28 de Julio, para convertirse en la gran palanca que dará inicio al verdadero cambio que cada peruano alberga en su corazón.

Más aún cuando aludió al gobierno anterior:

—Acusaciones muy graves y que comprometen a figuras públicas en casos de contratos lesivos al interés nacional, enriquecimiento ilícito, complicidad en millonarias defraudaciones a inocentes ahorristas se vuelven frecuentes y comunes.

Fujimori también anunció un Comité contra la Corrupción, a cargo de un comisionado presidencial, figura que nunca se creó.

Quedó claro que de Soto no había sido un colaborador más. Dentro de los primeros anuncios estaba una ley de participación popular hecha en coordinación con el Instituto Libertad y Democracia, el think tank presidido por el economista.

Si bien Fujimori había llegado con los votos apristas, el presidente no dejó de fustigar a su antecesor:

—Heredamos, pues, un desastre. Remontar la crisis primero y sentar luego las bases de desarrollo integral de nuestro país son nuestros objetivos centrales. Esta es una tarea gigantesca de la cual debemos tomar entera conciencia o perderemos el rumbo de la historia. Nadie debe sustraerse a ella.

Las ofertas del primer mensaje de Fujimori fueron ambiguas: reducir los trámites aduaneros, evaluar la situación de las empresas públicas sin que ello condujera necesariamente a una privatización y la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria. En uno de sus pocos anuncios concretos, indicó que presentaría una iniciativa para derogar la Ley de Estatización del Sistema Financiero.

Hacia el final de su alocución, Fujimori dijo otras palabras que hoy, a la luz de lo que conocemos, fueron una trágica ironía:

—La violencia terrorista que enfrenta actualmente nuestra joven democracia no puede justificar de manera alguna la violación sistemática o esporádica de los derechos humanos. La lucha antisubversiva que emprenderá mi gobierno se enmarcará y ejecutará conforme a los principios consagrados por la Constitución y las leyes de la República.

Todos aplaudieron.

—Dios ilumine al pueblo del Perú y me ilumine para emprender esta tarea gigantesca, pero hermosa, que hoy se inicia.

Así acabó el mensaje. Fujimori se fue entre aplausos, pero también entre las dudas que habían generado sus vagas palabras.

Una vez que llegó a Palacio de Gobierno, Fujimori juramentó en pleno Patio de Honor a todo su gabinete. Allí comenzó una tradición

de su década en el poder: la celebración informal de su cumpleaños, con tortas y canciones incluidas.

Por debajo del discurso, sin embargo, las primeras acciones del gobierno serían las que hablarían[27].

Terminadas las celebraciones, el ministro de Defensa Jorge Torres Aciego comenzó a despachar en su oficina. Vladimiro Montesinos lo conocía muy bien desde la época de Velasco y, además, había sido el director general de Contribuciones en el Gobierno de García. De hecho, fue él quien lo recomendó a Fujimori.

Montesinos entró al despacho, donde se encontraba el entonces comandante general de Ejército, Jorge Zegarra, ratificado en el cargo y quien también conocía al asesor desde la época en que trabajaron juntos para Mercado Jarrín. Entraba con la resolución de pase al retiro del almirante Alfonso Panizo Zariquiey, comandante general de la Marina de Guerra del Perú y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Era una venganza.

Panizo había recibido una «Hoja Informativa» elaborada por el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Rafael Córdova, en la que se consignaban todos los antecedentes penales y políticos de Montesinos. El documento señalaba la desconfianza que tenía sobre su lealtad. Con Córdova, el asesor ajustaría cuentas un mes después, cuando la filtración de la «Hoja Informativa» generó una llamada de atención del jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional, Edwin Díaz, lo que a la postre acabó con su carrera.

El marino ingresó a la oficina de Torres Aciego y le anunciaron su despido. Lo mismo ocurrió, minutos más tarde, con el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Germán Vucetich Zevallos. El pretexto para el relevo de ambos era un supuesto movimiento inusual de tropas. A Fujimori, el SIN le vendió la idea de que se venía un golpe de Estado.

Y la idea continuó al día siguiente, cuando Montesinos indicó al gobierno que el general Carlos Mauricio había preparado una asonada para evitar el desfile militar del 29 de julio. Lo cierto era que Mauricio aparecía como supuesto ministro de Defensa en una «Hoja de Coordinación» para un presunto golpe contra García, un día antes de dejar el mando, a fin de forzar a Fujimori a aplicar un Plan

Verde, elaborado en los dos años anteriores por mandos militares que querían destituir al mandatario aprista. Los rumores sobre la ausencia de la Marina de Guerra en el desfile militar, ante la destitución abrupta de Panizo, se multiplicaron en las últimas horas del 28 de julio.

Pero en la mañana del 29 de julio, toda especulación fue disipada. El desfile se hizo con normalidad y los comandantes generales fueron a brindar con Fujimori en Palacio de Gobierno, para el tradicional almuerzo por Fiestas Patrias. Montesinos anotó sus primeros avances en su estrategia de control castrense[28].

A las 8.00 p. m. del jueves 8 de agosto de 1990, los peruanos se sorprendieron al ver una claqueta de color naranja que anunciaba el «Mensaje del señor presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Hurtado Miller». Algunos compatriotas se percataron de que se venía algo fuerte. El shock que se había prometido no hacer.

—Es así que la lata de leche evaporada, que costaba 120 000 intis, costará a partir de mañana 330 000 intis. El kilo de azúcar blanca, que se conseguía a 150 000 intis, costará desde mañana 300 000 intis. El pan francés, que costaba hasta esta tarde 9000 intis, costará a partir de mañana 25 000 intis.

Con estas frases, nos enteramos de que el sistema de control de precios y subsidios a los alimentos se había terminado. En ese mismo mensaje, Hurtado anuló el tipo de cambio controlado —denominado como Dólar MUC—, y redujo los aranceles y el Impuesto General a las Ventas (que se cobra a todas las transacciones comerciales). También eliminó las exoneraciones arancelarias. A cambio, se brindó una bonificación de un sueldo a los trabajadores.

Hurtado Miller fue bastante efectista: mostró un billete de 500 000 intis. Y declaró:

—Con el que hace cinco años se hubiera podido comprar una casa de cuarenta mil dólares, hoy solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes.

Pero el remate del mensaje quedaría resonando en la memoria de todos los peruanos, para siempre. Al culminar su alocución, Hurtado

no se despidió con un «buenas noches» tradicional, sino con una frase que generó inquietud:

—Que Dios nos ayude.

Aunque el shock había sorprendido a la mayoría de los peruanos, estaba en elaboración desde que Fujimori desechó a su primigenio equipo económico. De Soto primero y Hurtado Miller después convencieron al mandatario de que no existía otra salida para comenzar a andar la economía. El pragmático mandatario se terminó de convencer cuando las reacciones de los organismos multilaterales a un programa de ajuste estructural eran favorables.

Se trazó una doble estrategia. Desde el punto de vista de la seguridad, se había convocado a las Fuerzas Armadas para apoyar la acción de la Policía Nacional en algunos puntos clave de la ciudad a la espera de grandes saqueos. En el imaginario de muchos en el gobierno, se encontraban las escenas de destrucción de la propiedad privada ocurridas en Caracas en 1989, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez anunció medidas de ajuste estructural en Venezuela. Aún no se tiene idea exacta de cuántas personas murieron en el denominado «Caracazo». En el Perú, El Comercio informó de tres personas fallecidas en incidentes en las colas para adquirir alimentos y un amago de saqueo. No hubo protestas masivas de magnitud, en parte porque muchos peruanos consideraban que había que intentar una medida de este tipo, en parte por el miedo al terrorismo.

Desde el punto de vista político y económico, Hurtado Miller fue hilvanando todos los detalles. Encargó a su viceministro Alfredo Jalilie a realizar los cálculos exactos de los precios de productos de primera necesidad que subirían. El presidente de CONFIEP, el ingeniero y empresario constructor Jorge Camet, fue informado de la medida. El presidente del Consejo de Ministros encargó a los economistas Ricardo Lago y Tomas Hardy, representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional respectivamente, que convencieran a los miembros disconformes del gabinete de la necesidad del anuncio. El único subsidio que se mantuvo fue el de los pasajes de transporte urbano, en medida acordada con los sindicatos.

El mensaje de impacto fue elaborado entre Hurtado, el empresario Augusto Bedoya y el ingeniero Felipe Ortiz de Zevallos. Este último era propietario del Grupo Apoyo, un espacio de consultoría empresarial e información económica bastante recurrido por las principales corporaciones del país. Ellos fueron los autores del remate del mensaje. Ortiz de Zevallos hizo la redacción final e incluyó referencias a las diferencias de precios de primera necesidad. La transmisión de Hurtado Miller fue lanzada desde Panamericana Televisión, la principal televisora del país en aquel momento.

De acuerdo con las actas del Consejo de Ministros, las medidas fueron aprobadas por el gabinete en la sesión del 7 de agosto de 1990. En esa misma sesión, Amat y León, Sánchez Albavera y el ministro de Industria, Guido Pennano, debatieron sobre la posibilidad de establecer la paridad entre el dólar y el inti, como se contempló en el plan de recuperación económica de Argentina. Prevaleció la idea de dejar flotar el dólar.

Más allá de los iniciales intentos de saqueo, el shock no generó mayores protestas. Para la mayoría de nuestros compatriotas, quedaba claro que no había otra salida al problema inflacionario generado durante el gobierno de García[29].

Sin embargo, era claro también que la implementación de un programa de ajuste severo debía ser acompañado con algún tipo de soporte social articulado desde el Estado. El gobierno planteó un Programa de Emergencia Social, dirigido por el ingeniero Percy Vargas y que tuvo una comisión coordinadora donde estaban presentes CONFIEP, la Iglesia Católica, instituciones asistenciales de las iglesias evangélicas y organizaciones creadas por los propios ciudadanos pobres para su autosubsistencia, como los comedores populares.

Si bien Vargas señaló que se habían cubierto necesidades básicas muy rápidamente, diversos medios de comunicación constataron que esto no era necesariamente así. El propio Fujimori tuvo que reconocer a fines de agosto de 1990 que los alimentos no estaban siendo distribuidos en la forma esperada. Recién en septiembre, a partir de la acción de las organizaciones de las

iglesias, el PES comenzó a tener mejoras para el reparto de bienes de primera necesidad.

Vargas solo duró un mes en el cargo. Fue reemplazado por una persona de confianza de Fujimori: Vidal Bautista Carrasco, docente de la UNALM.

Un mes después de su designación, a cargo del Programa de Emergencia Social, Bautista constituiría la asociación APENKAI, junto con Rafael Espinoza Mosqueira (físico y docente universitario), Alberto Sato Abe (ingeniero forestal), Leoncio Ruiz Ríos (ingeniero pesquero), Absalón Vásquez Villanueva (ingeniero agrónomo y docente molinero) y Rosa Fujimori de Aritomi. Esta última era hermana del presidente y su esposo, Víctor Aritomi, había sido un personaje de suma confianza en la campaña electoral: era secretario de Prensa de Cambio 90 y, en la práctica, manejó los fondos del partido durante la contienda. APENKAI se armaría, en teoría, para canalizar las donaciones provenientes de privados japoneses para la mejora de la situación económica y social en el Perú[30].

Las críticas al PES no amainaron. Durante los meses siguientes, Carlos García y García, segundo vicepresidente de la República, fue muy duro con este programa del gobierno. Todos los diarios señalaban que lo poco que funcionaba el programa tenía que ver con los esfuerzos de las entidades benéficas privadas.

Un sector que mostró duramente su inconformidad con la forma como se llevó a cabo el Programa de Emergencia Social fue la Iglesia Católica. El cardenal Juan Landázuri Ricketts expresó que el gobierno debía tener una opción preferencial por los pobres. Para octubre de 1990, Cáritas, la organización de ayuda social de la Iglesia Católica, señalaba que los alimentos donados al PES se habían agotado.

Frente a ello, Fujimori planteó un tema en el que sabía que la Iglesia Católica tendría una posición polémica. El presidente señaló que implementaría un programa de planificación familiar sobre la base de la entrega de métodos anticonceptivos. La reacción fue la esperada: desde el conservador obispo del Callao Ricardo Durand hasta el progresista prelado de Chimbote Luis Bambarén se

manifestaron en desacuerdo con la medida. La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en contra de una «campaña antinatalista». El mandatario retrucó que se favorecían opiniones «medievales y recalcitrantes» y pudo aparecer como un liberal en materia sexual.

El debate continuó durante un mes. Los problemas del PES salieron de las primeras planas[31].

Las acciones del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) continuaron con el nuevo gobierno, a pesar de los cambios en la Policía Nacional[32]. Se nombró ministro del Interior a Adolfo Alvarado Fournier, un general del Ejército, cuestión que no ocurría desde el fin del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1980. Alvarado Fournier encabezaría una poda de altos mandos policiales.

El Grupo le seguía la pista al administrador de la academia preuniversitaria César Vallejo, Luis Alberto Arana Franco. Ya se había detectado que se trataba de una persona clave para el financiamiento de Sendero Luminoso. Sin embargo, decidieron dejarlo libre. Pensaban que Arana los llevaría a más dirigentes de la organización. Así que no solo lo seguían, también interceptaban sus llamadas telefónicas.

A quien sí decidieron capturar fue a Deodato Juárez Cruzat, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, y encargado del Departamento de Propaganda. Para muchos, era una persona en la que Abimael Guzmán pensaba como posible sucesor. Lo capturaron el 19 de septiembre de 1990, luego de cuatro días de perderle el rastro. Fue la primera vez que los integrantes del GEIN detectaron una posible fuga de información.

Una siguiente evidencia fue una mujer que se contactó con Arana Franco a fines de noviembre de 1990. La siguieron desde Lince hasta, nuevamente, San Borja. Una casa en la avenida Buenavista, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, una zona residencial exclusiva a pocas cuadras del Cuartel General del Ejército, era el nuevo centro de las operaciones de observación, vigilancia y seguimiento.

El operativo resultó ser más complicado, dado que la zona era bastante solitaria y, además, los senderistas comenzaban a tomar

mayores precauciones. La evidencia más valiosa resultó la basura de la casa: los cigarros, cuyas marcas correspondían a los gustos tabacaleros de Guzmán e Iparraguirre, medicamentos para la psoriasis —enfermedad detectada al líder terrorista a fines de la década de los setenta— y papeles con documentos con línea senderista. Luego advirtieron que una de las mujeres que custodiaba la casa había comprado un perfume caro en Chacarilla, un día antes del cumpleaños de Guzmán.

Pese a todo, no estaban seguros de que el líder senderista estuviera allí. Pero, a fines de enero de 1991, repararon en una posible mudanza en la casa de Buenavista y, luego, ningún signo de vida. Entonces decidieron entrar: no había nadie.

Existen varias hipótesis sobre lo que ocurrió entre los últimos días de 1990 y los primeros de 1991. Iparraguirre señaló al historiador Antonio Zapata que la casa de Buenavista era una oficina de Guzmán y que decidieron abandonar la vivienda porque detectaron movimientos extraños. Gustavo Gorriti refirió en un artículo publicado en 2008 que, debido a órdenes superiores policiales, se frustró un ingreso en diciembre de 1990, lo que él atribuye a Fujimori o Montesinos. Por su parte, los miembros del GEIN sospechan que fue el asesor presidencial, quien tenía hombres infiltrados en la DINCOTE, quien alertó a los senderistas colocando un papel debajo de la puerta.

Si bien Guzmán se les escapó, el GEIN obtuvo un botín valioso: videos del Primer Congreso de Sendero Luminoso. En estas cintas, se apreciaban partes del velorio de Augusta La Torre «Norah», la primera esposa de Guzmán, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas. Y, también, una celebración amena donde Guzmán, barbado y visiblemente bajo los efectos del alcohol, baila con Iparraguirre el sirtaki final de la película Zorba, el griego, rodeado por el Comité Central de su agrupación.

Toda la cúpula senderista fue identificada. Benedicto Jiménez mostró los videos al nuevo jefe de la DINCOTE, Héctor John Caro. El 7 de febrero de 1991, Fujimori exhibiría la cinta como parte de un mensaje a la nación. El Perú vería, al fin, el rostro del criminal más peligroso del país. El mandatario resaltó la nueva estrategia de su

gobierno. Y pronunció una frase cuyo tenor recién se entendería, en toda su magnitud, años más tarde:

—Nuestro enemigo era invisible y había que enfrentarlo de la misma manera. Seguiré manteniendo reserva en los casos que ello amerite. No se resuelven estos problemas de otra manera.

La Iglesia Católica no era el único sector con el que Fujimori se había ganado pleitos. En su primer mensaje a la nación, Fujimori enfrentó directamente a los jueces del país:

—No puedo dejar de mencionar la crisis del Poder judicial que tanto afecta la administración de justicia, desde hace muchas décadas. Es muy doloroso repetir aquí lo que el pueblo piensa de nuestro Poder Judicial y del mal llamado Palacio de Justicia. El pueblo lo llama simplemente Palacio de la Injusticia. Esto ciertamente no alcanza a los magistrados probos, que hay. Los procesos judiciales no solo son lentos y engorrosos, sino que muchos están viciados por la manifiesta deshonestidad.

Desde la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Magistrados, calificaron las declaraciones presidenciales como injustas. Era claro que Fujimori había acertado con el sentir popular, pero los problemas del sistema de justicia eran más profundos y complejos en sus causas que la descripción brindada por el mandatario.

En octubre de 1990, Fujimori visitaría por primera vez el establecimiento penitenciario Santa Mónica, destinado para presas en el distrito limeño de Chorrillos. Allí se había instalado un estrado, un podio y un micrófono. Invitó a Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, una organización no gubernamental regional que se encargaba de temas vinculados a justicia y derechos humanos, para que se colocara a su lado. El mandatario comenzó a leer un discurso furibundo donde indicaba que había jueces que abusaban de sus cargos y no dudó en llamarlos «canallas» y «chacales».

Luego de la ceremonia, algunos magistrados se molestaron con García Sayán. Pensaron que había tenido que ver con el discurso. El jurista desmintió cualquier conexión con esos pronunciamientos,

pues se había enterado de las palabras de Fujimori en pleno establecimiento penal. Eran los primeros pasos de un plan mayor[33].

Otro campo de confrontación fue el Congreso de la República. Fujimori lanzaba provocaciones contra el parlamento bicameral, que buscaba defender sus fueros. Así se fue iniciando un camino de mutuas desconfianzas entre ambos poderes del Estado. Cuando presentó su política general de gobierno a fines de agosto, Hurtado Miller pidió una delegación de facultades legislativas «para iniciar la transformación del Estado y evitar la catástrofe nacional». Desde el hemiciclo, Manuel Moreyra del SODE retrucó que era necesario especificar más las materias para los decretos legislativos que quería expedir el Poder Ejecutivo. Al final, se otorgó la delegación para normar sobre materia tributaria.

En octubre de 1990, se suscitó el primer enfrentamiento grave. Se impidió que Fujimori viajara a la reunión del Pacto Andino —hoy Comunidad Andina— en Venezuela, pues no se le otorgó el permiso solicitado. La moción para el viaje se planteó luego de un debate sobre un crédito suplementario vinculado al presupuesto aprista. Esto hizo que los parlamentarios, que no eran fujimoristas ni del APRA, se manifestaran en contra del viaje, pero la moción nunca se votó. Varios parlamentarios y analistas pensaron que era una maniobra del propio mandatario para alentar la confrontación.

Diciembre fue un mes problemático. Fujimori criticó a senadores que «habían regateado su voto» para los ascensos de algunos generales del Ejército. La Constitución de 1979 indicaba que los ascensos de altos grados militares debían ser ratificados por el Senado. Claro está, Fujimori no había indicado a la opinión pública que los militares ascendidos con una votación ajustada eran José Valdivia Dueñas, sindicado como el principal responsable de la masacre de Cayara, a quien Montesinos había ayudado; y Jorge Rabanal Portilla, involucrado en ejecuciones extrajudiciales durante y después del develamiento de motines senderistas en los penales de Lima en 1986.

Posteriormente, Hurtado Miller tuvo que hacer un alza de gasolina de urgencia. La medida mereció que lo criticaran desde la izquierda hasta los parlamentarios electos bajo el paraguas de FREDEMO.

El 1 de enero de 1991, Fujimori promulgó la Ley de Presupuesto General de la República, pero con quince artículos observados por él mismo. Algo sin precedentes y ciertamente irregular. El mandatario dijo a su favor, ante la opinión pública, que el Congreso no había querido someterse a las normas de austeridad que el Poder Ejecutivo había planteado. La confrontación subió más cuando el Congreso se autoconvocó para una legislatura extraordinaria para ver este tema, con diez votos a favor de parlamentarios de Cambio 90. Se anuló la promulgación parcial de la Ley de Presupuesto. Al final, tuvieron que llegar a un acuerdo.

Las tormentas internas fueron síntoma de los cambios en el entorno fujimorista, lo que refleja las tensiones al interior de un gobierno donde varias agendas propias se cruzaban y el rumbo aún no se definía[34].

Gerardo López fue el primer diputado expulsado de la bancada de Cambio 90. Su salida se produjo por reclamar que, luego del shock, el salario mínimo debería ser de 60 dólares.

Sorpresivamente, en septiembre de 1990, Jorge Chávez Álvarez, fue nombrado presidente del Banco Central de Reserva. Se trataba de uno de los economistas heterodoxos que habían rodeado a Fujimori en la segunda vuelta electoral.

Para octubre de 1990, llegaría la primera baja ministerial. Carlos Amat y León renunció luego de señalar la necesidad de financiar la campaña agrícola y otorgar mayores créditos al agro, aunque otras versiones lo colocan como discrepante del estilo fujimorista.

En diciembre se iría Gloria Helfer. La ministra de Educación se marchó porque no pudo cumplir la promesa de no recortar los sueldos a los docentes de escuelas públicas. Como consta en el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 7 de diciembre, Fujimori explicó a su gabinete que la salida de Helfer se debió a diferencias sobre las homologaciones y bonificaciones del personal docente y administrativo de su sector.

En enero de 1991, se concretarían más cambios: la Cancillería, el Ministerio de Pesquería y la cartera de Transportes y Comunicaciones serían objeto de modificaciones. A este último puesto arribó otro nikkéi: Jaime Yoshiyama Tanaka, quien se había

desempeñado en los primeros meses de la era Fujimori como presidente de la empresa estatal Electrolima, que proveía de luz a la ciudad. Yoshiyama había llegado al gobierno gracias a Aritomi, pues ambos procedían de Huancayo. Se volvió rápidamente aliado de Santiago Fujimori.

A su vez, a Aritomi se le recompensó con la embajada en Tokio. En diciembre de 1990, Fujimori había comunicado a Japón que cualquier coordinación sobre una cuenta abierta por él en el Banco de Tokio, para donaciones «para el bienestar de los niños del Perú», sería coordinada por su cuñado.

Por su parte, Montesinos hacía lo suyo. Dado que Jorge Zegarra pasaba a retiro en diciembre de 1990, debía colocar a un comandante general del Ejército afín a sus intereses. Para ello, filtró denuncias sobre supuestos malos manejos en el alquiler de tractores contra Juan Fernández Dávila, candidato natural para suceder a Zegarra. La estrategia dio resultados y lo invitaron a retiro a fines de noviembre. Así, el nombrado fue Pedro Villanueva. Y también alejó a un posible comandante general para el futuro: el general Jaime Salinas Sedó fue nombrado representante en la Junta Interamericana de Defensa, un puesto que tradicionalmente es un primer paso para alejar a un alto mando de un futuro promisorio. Alberto Pinto continuó con las labores de custodia de Fujimori en forma informal, gracias a la anuencia de Montesinos y de su jefe directo, el general Víctor Malca Villanueva.

A fines de 1990, Montesinos traicionaría a su mentor. Edwin Díaz, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el hombre que lo había puesto en el camino de Loayza y Fujimori, tendría que dejar el cargo. Se había armado una comisión investigadora en el Congreso para indagar sobre unas denuncias en torno a espionaje telefónico durante el gobierno de García a políticos de oposición. Díaz había ejercido el puesto durante casi toda la administración aprista. Se filtró información a la prensa que confirmaba que, durante ese periodo, las líneas telefónicas de diversos políticos habían sido interceptadas. Montesinos le dijo a su supuesto jefe que Fujimori iba a despedirlo. Díaz dimitió. Entonces, fue nombrado el general Julio Salazar Monroe como jefe del SIN. Salazar había sido salvado del

retiro por Montesinos, quien, en la práctica, se terminó de apoderar del Servicio.

Sorpresivamente para todos, el siguiente en irse fue Hurtado Miller, ocupado en viajes para la reinserción económica del Perú en la comunidad internacional luego del anuncio del shock. En febrero de 1991, se filtró un plan gradualista de la reforma económica, elaborado por el ministro de Industria Guido Pennano, también economista. La idea de Pennano era reactivar el sector industrial que dependía de su cartera. Desde hacía meses, la relación entre Hurtado y su colega era mala. Fujimori cortó por lo sano: los sacó a los dos. Décadas más tarde, el saliente presidente del Consejo de Ministros le diría al periodista Fernando Vivas que su relación con su jefe había quedado resentida por la popularidad adquirida luego del shock. Señal de que Fujimori no permitía que nadie brillara a sus expensas.

---

26 El portal *La Mula* hizo un rescate de imágenes de archivo de América Televisión y TV Perú sobre el último mensaje de Alan García. Puede verse en: https://youtu.be/B3utzv3vSrM. Un resumen de su mensaje está en las páginas finales del libro de Reyna (2000: 261), uno de los pocos textos completos e imparciales sobre el primer gobierno aprista. Pedro Cateriano cuenta en *El caso García* (2017: 21-23) el incidente, planeado el mismo 28 de julio de 1990. Los parlamentarios de Acción Popular no intervinieron.

27 Los mensajes a la nación de Fujimori con ocasión de las Fiestas Patrias se encuentran en la web del Congreso de la República.

28 Los cambios militares producidos el primer día de gobierno de Fujimori son descritos por Rospigliosi (2000b: 11-12, 14-15), así como la sentencia contra Fujimori por los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE. Rospigliosi también muestra secciones de la «Hoja de Coordinación» del supuesto plan de golpe contra García, y del Plan Verde (74-86). El libro de Reyna sobre el primer gobierno aprista (2000: 170-171) y las propias *Metamemorias* de García (2019: 257-259) dan cuenta de planes golpistas contra el mandatario entre 1987 y 1989. Estos también son mencionados en la novela de Cisneros, *La distancia que nos separa* (2015: 223-229), sobre su padre, el general Luis Cisneros Vizquerra, involucrado en estos planes. Otros detalles se cuentan en Uceda (2018: 258).

29 El mensaje de Hurtado Miller se puede encontrar en la edición del 9 de agosto de 1990 de *El Comercio.* Una entrevista hecha por la periodista Mariella Balbi a Hurtado Miller, en el mencionado diario, el 9 de agosto de 2015, precisa algunos de los entretelones del mensaje y también la nota de Fernando Vivas «Un *shock* de verdad», publicada en el referido periódico el 10 de agosto de 2000. Otros datos aparecen en el video *Shock*

económico en el Perú, elaborado por el archivo histórico de *El Comercio:* https://youtu.be/WKHd3bc3HSg.

30 Sobre los datos en torno a APENKAI, consultamos el *Informe Final* de la Comisión Investigadora de los casos de corrupción ocurridos en la década de 1990–2000, encabezada por el parlamentario Ernesto Herrera: http://www4.congreso.gob.pe/historico/ciccor/index.html.

31 Sobre lo ocurrido con el Programa de Emergencia Social, el Poder Judicial y las relaciones Ejecutivo-Legislativo, nos basamos en la cronología política de Pease (1994: 259-289, 290-295, 323-341, 357-379).

32 Los textos de Paredes (2017: 71-131) Zapata (2017: 225-227) y el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003, tomo II: 09-220; tomo III: 98-99) dan luces sobre las acciones del GEIN durante los primeros meses del gobierno de Fujimori. Los dos primeros textos, junto al artículo de Gorriti «El caso de Buenavista», publicado por *Caretas* en enero de 2008, permiten reconstruir las hipótesis en torno a la frustrada captura de Abimael Guzmán entre fines de 1990 o inicios de 1991. Asimismo, revisamos Jara (2017: 107-108).

33 El episodio en que Fujimori llama «chacales» y «canallas» a jueces y fiscales es reconstruido por García–Sayán (2017: 36-38).

34 Las tensiones internas en el gobierno son descritas por Pease (1994: 74-87), Bowen (2000: 83), Rospigliosi (2000b: 26-28), Uceda (2018: 267-269) y Murakami (2000: 256-258). También nos apoyamos en la Cronología 1978–2000 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Anexo II del *Informe Final* (2003) y en el ya mencionado informe de Vivas sobre el *shock.*

LUCES Y SOMBRAS DE UNA POLÍTICA ANTISUBVERSIVA

(1989 – Octubre, 1991)

1989 fue un año clave para la lucha antisubversiva en el Perú. Tanto el Estado como Sendero Luminoso tomarían, en aquel tiempo, acciones decisivas para lo que sería el curso del conflicto armado interno que padecía el país desde 1980.

Entre 1988 y 1989, Sendero Luminoso realizó su denominado Primer Congreso Nacional, en varias sesiones. En una de ellas, falleció la primera esposa de Abimael Guzmán y número dos de la organización, Augusta La Torre, conocida como camarada «Nora». El deceso de La Torre sigue siendo uno de los misterios históricos sin resolver del Perú contemporáneo. Las versiones sobre su fallecimiento oscilan entre la muerte natural —por enfermedad cardiaca, como señala oficialmente Sendero, o por cáncer de útero —, el suicidio —ahorcada, según señaló Guzmán—, el asesinato sentimental y las discrepancias internas sobre el curso del conflicto. Su lugar fue ocupado por Elena Iparraguirre, quien además se convirtió en la pareja oficial de Guzmán.

En el congreso senderista se tomaron varias decisiones. La primera, consagrar a la organización el «pensamiento Gonzalo» como dogma partidario. Y la segunda, que sería la más importante, Guzmán indicó que se había alcanzado el «equilibrio estratégico» con el Estado. En otras palabras, un empate. En su visión, Sendero Luminoso ya controlaba el campo peruano y, por tanto, la siguiente fase era ir hacia la toma de las ciudades. Es decir, buscó vender una nueva ilusión a sus huestes, pero sobreestimó sus fuerzas. No era capaz de ver que buena parte de su aparato militar estaba muerto o en la cárcel. Y que, en realidad, desde que, entre 1986 y 1987, las Fuerzas Armadas habían ampliado sus bases militares en la sierra y la selva para custodiar a los ciudadanos y comenzó la entrega de armas a los comités de autodefensa, el Estado comenzó a ganar el conflicto en la zona rural.

Por ello, Sendero Luminoso decidió incrementar sus acciones en Lima. En la periferia y las universidades nacionales, insistió en captar a sectores radicalizados desencantados de las demás

alternativas políticas. Y en las zonas más modernas, a la par que se guarecían en sus casas, practicaban atentados y asesinatos selectivos de gran impacto en los ciudadanos.

A pocas cuadras del lugar donde se realizaba el primer congreso senderista, el Ejército Peruano aprobaba el Manual ME-41 sobre Guerra No Convencional y Contrasubversión, un documento que tenía luces y sombras. Mediante el Manual, el Ejército decidió mejorar las condiciones de los comités de autodefensa, tanto con la entrega de armas, así como con una consolidación del respaldo logístico y militar a través de unidades más pequeñas. Cuando el Manual alude a la mayor cercanía con los ciudadanos, es evidente que se refiere a este tipo de apoyo y a las acciones cívicas que procuraban reducir la anterior distancia con los ciudadanos, producto de las tácticas de guerra sucia que se habían ejecutado durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Estas acciones consistían en izamientos de la bandera nacional, distribución de medicinas y alimentos, provisión de consultorios médicos, cortes de cabello en forma gratuita y, en algunos casos, también se acompañaban con música.

Asimismo, el Manual incluía la necesidad de afinar las labores de Inteligencia. En la línea de lo antes mencionado, se prohibió expresamente las acciones que buscaran hacer ejecuciones extrajudiciales masivas. Sin embargo, el Manual contempló que se pudiera «neutralizar o destruir a los elementos subversivos».

Este último punto explicaría por qué, entre 1989 y 1993, Perú fue uno de los países en los que se registraron más desapariciones forzadas en el mundo. Y también sería el marco general para lo que ocurriría durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien adoptó el Manual, aunque luego él mismo, Montesinos y los militares a su cargo le añadirían elementos de su cosecha propia[35].

La existencia de escuadrones militares o paramilitares de aniquilamiento selectivo de presuntos miembros de organizaciones subversivas no nació en 1990. Hubo algunos antecedentes que fueron tomados en cuenta para formar un destacamento permanente como Colina. En especial, porque, en algunos de ellos, intervinieron personas que luego participarían en este grupo.

Un caso no esclarecido hasta el día de hoy es la presunta existencia del autodenominado «Comando Rodrigo Franco». El nombre de este grupo alude al presidente del directorio de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), asesinado el 29 de agosto de 1987, a manos de Sendero Luminoso. A pesar de que durante años se discutió si Franco fue ultimado por miembros del Partido Aprista Peruano —debido a que, para muchos, el joven funcionario denunció actos de corrupción dentro de su agrupación—, la Comisión de la Verdad y Reconciliación zanjó el debate y estableció que, dada la evidencia, lo más probable es que la autoría del crimen fuera senderista.

Sobre el comando que tomó inconsultamente el nombre de un mártir aprista, existen dos hipótesis. La Comisión de la Verdad y Reconciliación refiere que existió un grupo paramilitar con este nombre al que se le atribuyen tres asesinatos y un fallido atentado contra el local del periódico de Sendero Luminoso. Este grupo habría sido dirigido por el viceministro —y luego ministro— del Interior Agustín Mantilla Campos e integrado por militantes apristas, apoyados por algunos efectivos policiales. Para la CVR, esta fue una iniciativa del controvertido exministro, fallecido en 2015, sin comprometer directamente al APRA como organización.

La segunda hipótesis, esgrimida por el periodista Ricardo Uceda, refiere que el grupo formado por Mantilla solo realizó acciones de análisis de inteligencia y, a lo sumo, detección en el campo de presuntos subversivos para que miembros de la Policía o las Fuerzas Armadas los eliminen. En esta línea, el atentado fallido contra el local de El Diario —el vocero senderista, a cuyo local se intentó poner una bomba, sin éxito— sería la única acción operativa del grupo, cuyo fiasco determinó que no realizaran más este tipo de actuaciones. Los crímenes atribuidos al comando, según Uceda, habrían sido cometidos por miembros de la Policía o del Ejército.

Más definida fue la existencia de otros grupos operativos. En 1988, el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Oswaldo Hanke, habría encargado la formación de un grupo de «operaciones especiales», liderado por Santiago Martín Rivas. El entonces capitán había sido contactado por el técnico Jesús Sosa

Saavedra, quien había hecho trabajos de desaparición de personas en 1988, supuestamente por encargo de Hanke. Ambos hombres tenían experiencia en ejecuciones extrajudiciales y torturas en su servicio, en zona de emergencia y, además, compartían una misma línea de pensamiento sobre el combate a la subversión y la supuesta debilidad de los gobiernos frente a la misma.

El grupo liderado por Martín y Sosa estaba integrado además por otras personas que luego pertenecerían a Colina, como Ángel Pino, Nelson Carbajal, Hugo Coral y Fernando Lecca. Se le denominó Escorpio. Harían acciones de análisis y, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales y acciones de amedrentamiento entre 1988 y 1989.

Otro grupo formado desde el SIE, ya en 1990, se encargó de acciones de amedrentamiento a organizaciones de defensa de derechos humanos y a ajustes de cuentas al interior del Ejército. Martín Rivas y Sosa participaron en estas acciones. Posteriormente a la asunción de Fujimori, el Puesto de Inteligencia Lima del SIE activó otra modalidad: el envío de cartas bomba a abogados vinculados con defensa de derechos humanos y periodistas. El abogado Augusto Zúñiga, quien defendía a un enemigo de Montesinos, el mayor en retiro José Fernández Salvatecci, salió herido a causa de una de estas misivas. Zúñiga tuvo que partir a Suecia para recuperarse. Para mediados de año, Fujimori mismo se pondría en contra de las organizaciones de derechos humanos, calificándolas de «tontos útiles que serán desenmascarados».

Peor suerte corrió la periodista Melissa Alfaro, quien trabajaba en el semanario Cambio, cercano al MRTA: falleció al abrir uno de los sobres con explosivos. Uceda indica, en base a los testimonios de los ex-Colina, al militar Víctor Penas como el presunto líder de este comando.

Para 1991, el Ejército encargó una serie de asesinatos en diversas partes del país a distintos grupos de oficiales y suboficiales. Pero el cambio real sucedería, precisamente, en ese año[36].

En términos discursivos, la nueva estrategia que Fujimori trazó ante la subversión enfatizaba, sobre todo, que no se trataba de una lucha únicamente militar. Ante la Sala Penal Especial que lo procesó, el mandatario señaló que buscó «la reversión de las

condiciones sociales de extrema pobreza y marginación que sufrían las mayorías nacionales, sustento de la violencia armada».

En esa línea, la actuación de las Fuerzas Armadas y Policiales no solo era nueva, sino que buscaba el máximo contacto con los ciudadanos, en pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, estos puntos no eran ciertos. En la práctica, Fujimori asumió como suyos los cambios de estrategia emprendidos por las Fuerzas Armadas en 1989. A la par, aunque dejó trabajar a la Policía Nacional, la creación del Grupo Especial de Inteligencia se realizó hacia el final del gobierno de Alan García, como iniciativa estrictamente policial, carácter que se mantuvo durante su periodo.

Como concluye la sentencia que lo condena, el discurso fujimorista priorizó la estrategia de Inteligencia que, por su propia naturaleza, era oculta. Y elevó casi a categoría de héroes nacionales a Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos. Desde nuestro punto de vista, esto explica las disputas en el poder que se produjeron entre 1997 y 1998, las cuales derivaron en la caída del más longevo comandante general del Ejército en la historia republicana.

Pero la Sala Penal Especial resultó aún más explícita en señalar cuáles fueron los elementos de la oculta estrategia del fujimorismo. En primer lugar, el control del Servicio de Inteligencia a cargo de Montesinos. Fujimori llegó a reconocer que le delegó todo el control en esta materia y que dirigía el SIN en la práctica, sin cortapisas. En julio de 1990, se le pensó nombrar jefe de la institución, pero Fujimori fue disuadido por Hurtado Miller para que colocara a Montesinos como subjefe o asesor de la alta dirección de la entidad. De hecho, se le designó como número dos de la institución, pero ante las primeras críticas, su nominación fue ocultada. Como reconoció el propio Julio Salazar Monroe, jefe formal del SIN durante buena parte de la década fujimorista, Montesinos dirigió la entidad sin cargo alguno en 1991, hasta que en diciembre de ese año se le designó asesor de la alta dirección.

Una segunda característica fue el otorgamiento de amplias partidas monetarias y ampliación de personal al SIN durante toda la década, una práctica que terminó en malos manejos del erario y

corrupción. Esto se completó con el control efectivo de las Fuerzas Armadas por parte de Hermoza Ríos, como presidente del Comando Conjunto. Como señalan los antecesores del hoy encarcelado general, el CCFFAA era, antes de 1991, un organismo colegiado, cuya cabeza no era la que mandaba a los otros dos. Todo ello cambió con el Decreto Legislativo 743, que terminó siendo la norma que, en la práctica, otorgó un poder mayor a Hermoza Ríos.

Añadiríamos que los cambios emprendidos por Montesinos en los puestos más altos de las Fuerzas Armadas hicieron que la cúpula en el poder se hiciera aún más fuerte con el control castrense. Y, como veremos, esto llevó a la formación estable de un comando de aniquilamiento dependiente de la Presidencia de la República y el SIN, con integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército y pleno conocimiento de la Comandancia General de dicha entidad castrense.

Luego de su participación en los grupos encargados por el Servicio de Inteligencia del Ejército, Santiago Martín Rivas viajó a Colombia para formar parte en un curso de la Escuela de Inteligencia de ese país. Según su versión, allí se graduó con el primer lugar y fue invitado a convertirse en instructor, con la anuencia de su comando. Sin embargo, fue convocado en diciembre de 1990 a reportarse a Lima.

Una vez allí, Martín Rivas se dio con la sorpresa de que sería llevado al SIN, para entrevistarse con Vladimiro Montesinos. No era la primera vez que ambos hombres se conocían. El capitán fue, en 1988, el nexo entre el entonces abogado y los mandos militares, con el fin de estar al tanto de los avances de las maniobras de Montesinos para sepultar judicialmente el caso Cayara.

Montesinos fue claro: quería emplear mecanismos de guerra de baja intensidad —léase, ejecuciones extrajudiciales selectivas— para combatir a la subversión. Consideraba que Martín Rivas era el hombre para iniciar esta tarea. En la versión del hoy encarcelado mayor en retiro, nunca fue amigo de Montesinos, pero aceptó trabajar con él por orden de su comando.

En enero de 1991, Montesinos convocó a Salazar Monroe, el director de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, el director de

la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Héctor John Caro y los jefes del GEIN, Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Según Rivero Lazo, fueron Jiménez y Miyashiro quienes plantearon la formación de un Grupo de Análisis para examinar los documentos obtenidos en las operaciones que habían desarticulado casas donde se había alojado la cúpula de Sendero Luminoso y sus comités de apoyo. Otra versión, la del coronel Víctor Silva Mendoza, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, refiere que fue John Caro quien solicitó la formación del Grupo.

Jiménez y John Caro negaron haber pedido la formación del Grupo de Análisis. El primero señaló ante la Sala Penal Especial que los análisis del GEIN eran propios y que consideraba que el Grupo de Análisis conformado por militares tenía la misión de enviar información al SIN y a Fujimori. Miyashiro indicó que el trabajo del Grupo de Análisis nunca sirvió para las labores del GEIN, lo que fue confirmado por John Caro.

Para Jiménez, la presencia castrense resultó forzada, aunque tolerada en la esperanza de formar una Comunidad de Inteligencia, que nunca se forjó. Por el contrario, policías y militares recelaban los unos de los otros, actitud tradicional entre ambos cuerpos. Carlos Morán, entonces miembro del GEIN, pensó que algunas filtraciones de información sobre sus actividades provenían del Ejército. Mientras que Martín Rivas indicó que su trabajo era importante, pero no adecuadamente valorado desde las filas policiales.

Días más tarde, el comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa convocó a Santiago Martín Rivas y a Carlos Pichilingüe Guevara para que formaran parte del Grupo de Análisis, donde también había otros oficiales del Ejército y la Marina. El trabajo fue encargado directamente por Montesinos, reconoció Pichilingüe, a tal extremo que nombró un comandante de confianza como enlace: Roberto Paucar Carbajal.

Según los oficiales que luego serían miembros principales del destacamento Colina, entregaron la información que recogieron a Pedro Villanueva, comandante general del Ejército, así como a Montesinos y, finalmente, prepararon un Manual de Inteligencia Estratégica empleando la guerra de baja intensidad. El manual

nunca fue compartido al GEIN, sostiene Miyashiro. Según Pichilingüe, solo se hicieron cuatro copias del documento, cuyos destinatarios eran Fujimori, Montesinos, Villanueva y Rodríguez Zabalbeascoa.

El 25 de junio de 1991, Fujimori envió un memorándum a Torres Aciego, recomendando extender una felicitación formal a Martín Rivas, Pichilingüe Guevara, Rodríguez Zabalbeascoa, Paucar Carbajal, así como a otros militares como Roberto Huamán Azcurra, Luis Cubas Portal, Alberto Pinto Cárdenas, Ronald Robles Córdova, Antonio Ríos Rodríguez y Marco Flores Alván. Para los integrantes del Grupo de Análisis, la inclusión de Paucar, Huamán, Cubas Portal y Pinto solo obedecía a una razón: ayudar a los ascensos del personal militar cercano a Montesinos. Cubas Portal era cuñado del asesor presidencial y los otros tres oficiales pertenecían al entorno de confianza de Montesinos. Robles y Ríos sí eran parte del Grupo, al igual que Flores Alván, secretario de actas[37].

En paralelo a estas acciones, en abril de 1991, el general Villanueva había aprobado el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia ME 38-20. Se trataba de la pauta general para las denominadas «operaciones especiales de inteligencia», que serían planeadas y decididas desde el SIN, mientras que su ejecución corría a cargo del SIE.

Las operaciones especiales no solo tuvieron como centro la recolección de información y su análisis, sino que también podían comprender la realización de operaciones de sabotaje, secuestro y cualquier otra acción que pudiera causar daño al enemigo.

Ese mismo mes, se aprobó el Manual de Equipos Básicos, elaborado desde la Dirección de Inteligencia del Ejército, a cargo de Rivero Lazo. Era bastante explícito en su contenido, al señalar que las operaciones especiales no solo estaban centradas en «en prevenir, detectar, localizar e identificar, sino también neutralizar y/o eliminar personas, redes, u organizaciones que realizan actividades contra la seguridad militar». En forma explícita, se señalaba la eliminación de personas como una posibilidad.

Para junio de 1991, la periodista Cecilia Valenzuela reveló en el programa En Persona la existencia de una directiva del Comando

Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las operaciones de Inteligencia. Allí se refería que las mismas debían tener un carácter ofensivo y agresivo, sin toma de prisioneros. La existencia del documento nunca fue negada y se confirmó en la investigación de Ricardo Uceda para el libro Muerte en el Pentagonito (2018). El reportaje de Valenzuela precipitaría el cierre del programa para el que trabajaba, dirigido por César Hildebrandt. En su informe, junto con las páginas de la directiva, Valenzuela había alternado escenas de La boca del lobo, película de Francisco J. Lombardi donde se denunciaban las tácticas de guerra sucia empleadas por las fuerzas del orden entre 1983 y 1985.

Ese mismo mes de junio de 1991, el Grupo de Análisis había culminado un texto original inicial de su Manual de Inteligencia Estratégica. Por ello, se convocó para el día 26 una reunión en la que se expondría su contenido al alto mando castrense, convocada por Pedro Villanueva. El comandante general del Ejército le indicó a Rodríguez Zabalbeascoa que era indispensable la designación de los miembros del equipo que harían la exposición. El oficial encomendó a Martín Rivas y Pichilingüe Guevara que se encargaran de la exposición.

La reunión se llevó a cabo en el quinto piso del Pentagonito. Fueron convocados todos los altos oficiales de alta graduación con rango de generales de División y de Brigada. Sería la primera vez que Hermoza Ríos vería a Martín Rivas, quien haría la exposición central.

Villanueva inició la reunión señalando que, en la cita, se tomarían acuerdos importantes para la lucha contrasubversiva, por lo que ninguno de los altos oficiales podría abandonar la sala hasta que se llegase a una decisión unánime. Luego cedió el micrófono a Rivero Lazo quien, tras una breve intervención, dio la palabra a Martín Rivas.

El capitán refirió que se basó en la experiencia que habían tenido las Fuerzas Armadas en materia contrasubversiva, así como en el conocimiento que había adquirido sobre la ideología senderista y sus tácticas armadas. Su conclusión era clara: resultaba necesario pasar a un método de guerra de baja intensidad, en el que cada

intervención armada del terrorismo sea respondida con acciones que generen temor en Sendero Luminoso. La idea era quebrar la voluntad de un grupo fundamentalista como el senderista, así como hacerles llegar el mensaje de que sabían dónde se ubicaban.

Las fases en la lucha contrasubversiva, de acuerdo con la exposición de Martín Rivas, serían la formación de equipos especiales de Inteligencia para la búsqueda de información con miras a operativos de eliminación selectiva y clandestina, a la par que se buscaría tener un plan de acción cívica como rostro visible. Los operativos de eliminación se concentrarían, en principio, en el área metropolitana de la ciudad de Lima y en las provincias del norte y sur del departamento de Lima.

En términos generales, la exposición fue bien recibida por los generales, quienes coincidieron con el diagnóstico y respuesta enunciados por Martín Rivas. Sin embargo, hicieron algunas observaciones sobre las acciones militares, por lo que el documento inicial debió ser ajustado. A pesar de estas reflexiones, Villanueva preguntó si existían objeciones de fondo al texto. Nadie se opuso.

Para agosto, el Grupo de Análisis dejó las oficinas de la DINCOTE y se fue a culminar su trabajo en un local del SIE, ubicado al lado de la sede del Servicio de Inteligencia Nacional. Llegaría también otro tipo de preparativos.

El 22 de agosto de 1991, Rivero Lazo suscribió el Memorándum Nro. 5775–B–4.a/DINTE, que ordenaba al coronel Víctor Silva Mendoza, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, poner a disposición del comandante Rodríguez Zabalbeascoa a nueve agentes, quienes se apersonarían al local del SIE de Las Palmas. Así empezó la formación del destacamento Colina.

Días antes, Santiago Martín Rivas había hablado con Jesús Sosa para la formación de un equipo de operaciones especiales. Este le brindó doce nombres, entre ellos, los antiguos integrantes del Grupo Escorpio. Sin embargo, los planes de Martín pasaban por la formación de un equipo más grande. Durante agosto y septiembre, se destacaron a más agentes hasta llegar a un total de treinta y seis. Martín y Pichilingüe eran los oficiales operativos a cargo.

Sosa recién se pudo integrar al grupo a mediados de septiembre. Sin embargo, estuvo en desacuerdo con la formación de un equipo tan extenso y, además, donde había seis mujeres. Martín dividió al personal en tres grupos, para facilitar el control administrativo. Los grupos serían liderados por los agentes Sosa, Juan Supo y Julio Chuqui.

Según el testimonio de varios agentes que integraron el destacamento, se les hizo varias promesas de beneficios a su sueldo: quinientos dólares adicionales, seguro médico, pasaportes para ellos y sus familias en caso de que tuvieran que salir del país. Solo se cumplió con los temas médicos.

A partir de octubre de 1991, los miembros del destacamento Colina serían conducidos a La Tiza, una playa ubicada en el distrito de Pucusana, al sur de Lima. Se trataba de un balneario controlado por el Círculo Militar, donde hoy se encuentra una sede de veraneo para personal del Ejército. Allí se harían ejercicios de adiestramiento físico, lucha cuerpo a cuerpo, tiro y simulación de toma de locales.

En La Tiza, esperarían su primera oportunidad de matar.

---

35 Sobre la estrategia antisubversiva en tiempos de Fujimori, analizamos tanto el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003, tomo II: 285-345), como la sentencia que condenó al exmandatario a 25 años de prisión. También nos basamos en Zapata (2017: 210-214) y Burt (2011: 279-284).

36 Sobre la existencia de grupos operativos destinados a la eliminación selectiva de personas, consultamos Uceda (2018: 204-225, 230-257, 269-270, 274-279), y el *Informe Final* (2003, tomo III: 141-164; tomo VII: 202-217). Para el caso Zúñiga, véase Youngers (2003: 214).

37 Sobre el trabajo de Martín Rivas y su conexión con Montesinos, revisamos Jara (2017: 88-93, 114-124, 128-129, 137-141), Uceda (2018: 285-290) y la sentencia contra Fujimori por violaciones a los derechos humanos. En estos textos también se basa el relato sobre la formación del destacamento Colina.

EL GOBIERNO EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

(Febrero – Noviembre, 1991)

La salida de Hurtado Miller dejó dos puestos vacantes en el gabinete: la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas. Las elecciones tomadas por Fujimori en febrero de 1991 fueron disímiles, pero marcarían el rumbo de la década.

Para la PCM, Fujimori optaría por alguien que ya formaba parte de su equipo. El abogado Carlos Torres y Torres Lara era, antes de su incursión en la política, docente universitario —incluso fue decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima—, fundador de un bufete especializado en la asesoría de cooperativas —una forma asociativa de financiamiento fuera de la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros hasta 2019—, y especialista en temas laborales. Fue en esta última calidad que lo convocaron para ser ministro de Trabajo y Promoción Social en 1990.

Cuando Hurtado Miller dimitió, Torres y Torres Lara fue llamado para encabezar el equipo ministerial. Pero, además, se le encargó ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuestión en la que el abogado no tenía experiencia alguna. Desde ambos puestos, comenzaría a enunciar el perfil que se le notaría durante el resto de la década: tono contemporizador y dialogante, pero capaz de justificar cualquier medida, por controvertida o desacertada que fuere.

Hernando de Soto llamó a Carlos Boloña para que acudiera a Palacio de Gobierno. Ambos estaban trabajando en el plan antidrogas. Allí le volvieron a ofrecer el puesto de ministro de Economía y Finanzas. Aceptó bajo una condición: libertad absoluta para hacer reformas estructurales de fondo, más audaces que las planteadas durante el periodo de Hurtado Miller. Y no demoraría mucho en hacerlo. El 15 de febrero, Torres y Torres Lara juramentó con el gabinete que encabezaría.

Días más tarde, de Soto sufriría un primer revés. El Instituto Libertad y Democracia había preparado un Anteproyecto de Ley de

Democratización de las Decisiones, con miras a que se incremente la participación ciudadana en las decisiones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Consejo de Ministros encabezado por Torres y Torres Lara rechazó la propuesta. De Soto renunció, pero luego retiró su dimisión.

Mientras tanto, el gobierno tendría que afrontar uno de los serios problemas de la pauperización del país intensificada durante los años anteriores[38].

Todo comenzó en Chancay, el 23 de enero de 1991. Una bacteria intestinal aguda producida por el virus conocido como Vibrio Choleare ingresó a territorio nacional. Aún no queda claro si es que llegó desde otra región del mundo o si fue producto de la contaminación marina. Lo cierto es que, una semana después, aparecieron casos en Chimbote y luego en buena parte de la costa norte y centro del país.

El cólera es una enfermedad que aparece en zonas pobres y que puede adquirir características de pandemia si es que existe un deficiente sistema de agua y alcantarillado, y un manejo de alimentos en condiciones insalubres. Ambos factores confluían en América Latina en 1991. Peor aún, Perú era un país que ya tenía una elevada presencia de enfermedades gastrointestinales en la infancia, como producto del deterioro de las condiciones de salubridad y, sobre todo, del saneamiento y el agua. Incluso, contar con el servicio, como se demostró en el norte del país, no implicaba necesariamente tener agua limpia.

A ello se sumó el calentamiento de las aguas en la costa peruana, en forma leve, en aquel año. En el litoral peruano confluyen dos corrientes: en las regiones Tumbes y Piura se encuentra la corriente El Niño, de aguas cálidas, mientras que en el resto del mar peruano se halla la corriente de Humboldt, cuya temperatura es más fría. Cuando El Niño se extiende a otras zonas del país, la temperatura de la zona costera se eleva sustancialmente, lo que genera precipitaciones y huaicos cuando se presenta de forma fuerte. En 1991, el fenómeno no afectó tanto a las ciudades en destrucción de infraestructura, pero sí abonó a las condiciones en las que se presentó el cólera.

Esta enfermedad presenta como síntomas la alta recurrencia de evacuación estomacal, deshidratación y, en sus grados más altos, acidosis y colapso circulatorio. Cuando se tienen estos últimos dos síntomas, el riesgo de muerte es bastante elevado.

Durante todo el año, se registraron más de 320 000 casos de cólera en todo el país. Fallecieron 2909 personas producto de esta enfermedad. El riesgo bajó considerablemente una vez que se expandieron las cuatro medidas básicas para contrarrestar los efectos de este mal: brindar sales rehidratantes para quienes ya tenían el mal o abundante líquido, hervir el agua para consumo humano, lavar los alimentos y no consumir carnes crudas. El contagio fue mayor en las personas que almorzaban fuera de su casa, sin los debidos cuidados.

A pesar de que la transmisión de la enfermedad se inició en la costa, fue en el departamento de Cajamarca, que no tiene zona costera, donde se tuvo el mayor número de víctimas. Esta situación se produjo debido a la lejanía de los centros de salud, los pésimos servicios viales y una mayor desconfianza hacia la medicina tradicional.

Además, el manejo del gobierno durante esta crisis no fue del todo profesional. En marzo de 1991, en plena epidemia, renunció el ministro Carlos Vidal Layseca. Vidal había entrado al MINSA con ganas de propiciar cambios importantes, sobre todo, en la difusión de medicamentos genéricos, lo que le costó varios enemigos al interior del sector. La estrategia del Ministerio de Salud fue incidir en las medidas de aseo personal y de los alimentos, así como en las terapias de rehidratación oral. También sirvió mucho la colaboración entre centros de salud y hospitales: la solidaridad se vio incrementada debido a la escasez de recursos. A ello se sumó la colaboración de las redes de apoyo ya existentes en la sociedad peruana, sobre todo, iglesias y comedores populares. Estas medidas fueron clave para que la enfermedad, a pesar del alto número de casos registrados, cobrara un relativamente bajo número de víctimas mortales.

Pero el respaldo político hacia Vidal fue escaso. La preocupación inicial de Fujimori, de acuerdo con el acta de la sesión del Consejo

de Ministros del 20 de febrero de 1991, no era el costo en vidas producido por el cólera, sino la imagen del país y los productos de exportación peruanos. Se demoró dos meses y medio en constituirse un comité multisectorial destinado a controlar la enfermedad y, en la práctica, no funcionó. Según funcionarios del MINSA, las presiones de grupos empresariales sobre Fujimori hacían que el ministro de Salud pasara a ser, a ojos del presidente, una persona que daba mala imagen del país. Lo mismo ocurría con otros miembros del gabinete. Por ello, no le quedó otra que renunciar en marzo.

Para complicar más las cosas, se desató una huelga del personal médico del Ministerio de Salud, que duró cuatro meses. Fue el trabajo médico entre quienes se escalonaron en la huelga, así como las redes de autogestión, los factores centrales para que la epidemia no se expandiera más aún. Sin embargo, no hubo una gran inversión pública para la mejora de la infraestructura sanitaria en los siguientes años del periodo fujimorista[39].

La coyuntura de la epidemia del cólera fue aprovechada para ejecutar un primer ensayo del Servicio de Inteligencia Nacional para la colocación de temas en los medios de comunicación que pudieran servir de distracción a la ciudadanía.

Abril de 1991. Un curandero brasileño conocido como João Teixeira llegó a Lima, traído por un promotor de espectáculos. Los medios de comunicación expandieron la versión de que el sujeto, que se hacía denominar como «enviado de Dios», curaba cualquier tipo de mal solo con una imposición de manos.

En el complejo deportivo Mama Ocllo, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, Teixeira se instaló para hacer sus «curaciones». Esperaba recibir a 30 000 personas. El Ministerio Público interrumpió las «sanaciones» por ejercicio irregular de la profesión médica. Miles se quedaron sin ver al santón.

Pero Fujimori sí lo pudo ver. El mandatario recibió a Teixeira en Palacio de Gobierno y este supuestamente lo sanó de una luxación de un dedo. Fujimori testificó a favor del milagro. Pero el curandero tuvo que dejar rápidamente el país, por ejercer actividades lucrativas cuando había ingresado a territorio nacional con visa de turista.

Casi dos décadas más tarde, el curandero brasileño se encuentra en una prisión de su país, sentenciado a diecinueve años por comprobarse que violó a cuatro mujeres y practicó actos sexuales no consentidos realizados con el pretexto de sus dotes curativas. Más de 500 personas acusaron al santero como abusador.

En mayo de 1991, en el distrito chalaco de Carmen de la Legua, se presentó el caso de una pequeña estatua de la Virgen María que supuestamente derramaba lágrimas verdaderas. Rápidamente, cientos de fieles hacían cola ante la imagen, esperando que repitiera el fenómeno que, para los creyentes, era considerado como una manifestación divina. Cundió el paroxismo cuando el propio Fujimori fue a visitar dicha vivienda, para pedirle a la efigie que «ayudara al país».

Pocos días más tarde, ante la evidencia científica de que era imposible que una estatua pudiera derramar lágrimas reales, la atención de la prensa disminuyó sustancialmente frente al «milagro», y la pequeña imagen fue llevada a la iglesia de Carmen de la Legua. La versión más verosímil sobre lo ocurrido es que se aplicó un truco químico aprendido en inteligencia colombiana, por parte del Servicio de Inteligencia Nacional.

Sin duda, el realismo mágico de García Márquez se quedaba corto frente a las maniobras de Montesinos en los tiempos del cólera[40].

Mientras Lima se convertía en una sucursal de Macondo, Boloña empezaba a implementar su plan económico, bastante más ortodoxo y duro que lo avanzado por Hurtado Miller.

Durante 1991, paulatinamente, en varias entidades del Estado, se comenzaron a brindar sistemas de «incentivos» para que miles de empleados públicos pudieran renunciar a sus puestos. Se trataba de sumas de dinero adicionales a los beneficios sociales, que buscaban que las personas que ya no tenían cabida en la administración pública decidieran abandonar sus ubicaciones. Los ofrecimientos se hicieron en casi todas las entidades estatales. Aunque la iniciativa vino de la gestión de Hurtado Miller, Boloña la implementó con mayor intensidad.

Muchas personas optaron por este sistema. El destino del dinero fue diverso: capital para pequeños negocios, compra de unidades vehiculares al amparo de una norma diseñada por Boloña para liberalizar el transporte urbano en la capital —regulado hasta agosto de 1991 por la Municipalidad Metropolitana de Lima— o la colocación de dinero en empresas de intermediación financiera que no estaban reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. La más célebre de estas últimas era el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), dirigido por el matemático Carlos Manrique Carreño, que pagaba buenos intereses a sus ahorristas, quienes desconocían que estaban entrando a un esquema piramidal. Pero, por aquella época, el sueño del dinero fácil era boyante.

En marzo de 1991, Boloña presentó su nuevo plan económico, que constituiría un «cambio de rumbo» en la economía. Se eliminaron todos los subsidios que habían quedado vigentes luego del shock de agosto de 1990. Se redujeron más los aranceles. Las tasas de intereses no serían controladas. Se simplificaron los impuestos en el país. Y, en la práctica, se eliminó la estabilidad laboral absoluta. También se lograron liberalizar las importaciones, restringidas en el país desde la época del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las principales reformas del GRFA, la agraria, era liquidada en la práctica con la reintroducción de la gran propiedad privada en el campo.

En esa línea, el gobierno pidió facultades delegadas para expedir decretos legislativos sobre servicios públicos, empresas del Estado, sector agrario, relaciones laborales, recursos naturales, inversión privada y reorganización del Estado. El Congreso le concedió al gabinete de Torres y Torres Lara la posibilidad de legislar. Así, el gobierno pudo liberalizar el transporte urbano e interprovincial de pasajeros, promover la inversión privada en empresas estatales, modificar el régimen de propiedad de la tierra agraria, flexibilizar la contratación de trabajadores extranjeros, incentivar la inversión privada en diversos sectores. También se emitieron las primeras normas de defensa del consumidor. Con ello, cambiaba en muy poco tiempo el panorama económico peruano.

Era cierto que muchas de estas reformas eran indispensables para que el país se introdujera en un proceso de libre mercado y se lograra reinsertar en el sistema financiero internacional. No obstante los decretos legislativos tenían pros y contras. En términos técnicos, muchas de estas normas eran acertadas. Sin embargo, dado que eran preparadas en el gabinete de asesores del MEF, donde se encontraban economistas ortodoxos, no existía mucho debate público al respecto, que podría haber mejorado su contenido.

No fue un camino exento de dificultades para Boloña. En mayo de 1991, subió la gasolina. Fujimori criticó en público a Boloña y este, por primera vez, presentó su renuncia. Sin embargo, la retiró cuando el presidente lo respaldó en público: «Es mi ministro favorito».

Al mismo tiempo, se comenzaba a instaurar un sistema de legislación delegada que sería clave en las tres décadas siguientes: paulatinamente, el Poder Ejecutivo se reservaría las normas más importantes para que sean emitidas por decretos legislativos. Poco a poco, el Congreso de la República iría perdiendo parte de su rol legislativo, en la práctica[41].

Cambio 90 se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno. Paulatinamente, la bancada oficialista dejó de responder a los designios de Fujimori. El mandatario optaba por el pragmatismo para tratar de sacar adelante sus iniciativas: para temas económicos, recurría a los parlamentarios electos por las filas de FREDEMO. Para algunos temas políticos sensibles, miraba a los apristas. Sin embargo, esta política no era permanente. Las reuniones de Fujimori con su propio grupo parlamentario eran escasas.

En particular, las disidencias evangélicas fueron las más complicadas de procesar al interior del gobierno. Carlos García y García no tenía contacto con Fujimori desde octubre de 1990. Al segundo vicepresidente ni siquiera le destinaron una oficina. Asimismo, la rebeldía fue combatida. Cinco parlamentarios evangélicos fueron expulsados de Cambio 90 en marzo de 1991. Algunos de ellos ya habían señalado sus discrepancias con el gobierno, comenzando por el programa de ajuste económico. Siete congresistas más, pertenecientes a confesiones protestantes,

dejarían voluntariamente la agrupación. Y aunque se intentó hacer un bloque entre los disidentes, la iniciativa no tuvo mayor efecto, salvo la de disminuir el peso del oficialismo en el Congreso.

Y ello le costó caro al gobierno, que perdió la presidencia de ambas cámaras en julio de 1990. Los parlamentarios del Partido Popular Cristiano, Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villar, fueron elegidos presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

San Román, por su parte, trataba de tejer buenas relaciones con las demás bancadas. Gracias a ello, Cambio 90 pudo tener una vicepresidencia en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Pero su relación con Fujimori, simple y llanamente, estaba rota. En la práctica, el partido de gobierno estaba dejando de existir, a solo un año de su sorprendente triunfo[42].

Los éxitos iniciales del GEIN llevaron a que diversas personas e instituciones comenzaran a respaldar su trabajo. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a entregar dinero en efectivo, a través de la CIA, para que los agentes del Grupo pudieran tener viáticos. Asimismo, se brindó apoyo para contar con equipos electrónicos y la mejora de las oficinas, inauguradas en agosto de 1991. Los estadounidenses también contactaron a expertos extranjeros para capacitar a los miembros del equipo especial.

El GEIN se vio reforzado por la llegada de Marco Miyashiro, otro experto en lucha contrasubversiva. Por su antigüedad, terminó siendo el jefe formal y logístico, pero Jiménez continuó encargándose de los operativos y la estrategia general.

Miyashiro fue clave para otros apoyos. De un lado, por parte de la comunidad nikkéi, que brindó calzado y ropa para los agentes. De otro lado, hizo contactos con Jaime Yoshiyama y, a través de ellos, con Santiago Fujimori y Carlos Boloña, quienes comprometieron presupuesto importante para el trabajo.

A la par, la Policía le seguía el rastro al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Y comenzó a obtener éxitos importantes. El 1 de junio de 1991, capturaron en Magdalena del Mar a Alberto Gálvez Olaechea, encargado de la administración de fondos de la agrupación, junto a Rosa Luz Padilla, otra alta dirigente

de la institución. Se intervino, además, una casa en Pueblo Libre, donde se encontró documentación que daba cuenta de las pugnas internas al interior del grupo terrorista. Dada la exitosa experiencia del GEIN, se conformó un grupo similar, el BREDET, para hacer la misma estrategia con el MRTA[43].

Un tema preocupante en términos de política exterior era el combate al narcotráfico. Desde la década del setenta, Perú se había convertido en el principal productor mundial de hoja de coca, una planta empleada para usos tradicionales en el mundo andino, pero que también era la materia prima de la cocaína, una de las drogas más codiciadas y, a la vez, más letales. Durante los años ochenta y noventa, Colombia fue el principal centro de exportación de este narcótico, concentrando a grandes bandas de narcotraficantes.

Así, la región andina se convirtió para los Estados Unidos en una prioridad en su política exterior para América Latina. El gobierno estadounidense consideraba necesario un fuerte apoyo militar para erradicar forzosamente los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, la mayoría de los políticos peruanos pensaba que era prioridad, ante todo, resolver el problema de la demanda de la droga en Estados Unidos.

Luego de varias idas y venidas, en mayo de 1991, los gobiernos de Fujimori y George H. W. Bush firmaron un convenio de ayuda militar para la erradicación de la hoja de coca. A inicios del gobierno, el mandatario peruano, con ayuda de de Soto, había planteado su propia doctrina: era necesario tener cultivos alternativos a la coca, pues la mera represión no bastaba. En Estados Unidos, paulatinamente, lo entendieron y se suscribió el acuerdo. Al mismo tiempo, ello permitía destrabar algunos aspectos de la reinserción económica peruana en el terreno internacional. Sin embargo, buena parte de la ayuda económica estadounidense se condicionó a la mejora de la actuación de las Fuerzas Armadas peruanas en el respeto a los derechos humanos, en el marco de la lucha contra la subversión.

Lo que pocos sabían era que el gobierno tenía un doble juego sobre el tema de las drogas.

Versiones periodísticas apuntan a que Montesinos le pidió un millón de dólares a Pablo Escobar, el mayor capo de la droga en Colombia, para la campaña de Fujimori en la segunda vuelta de 1990. Roberto Escobar, hermano del fallecido narcotraficante, señala que entregó el dinero en cajas de televisores y que incluso recibió una llamada de Fujimori saludando el aporte. El mandatario negó esta versión y Escobar no se ratificó en la misma ante la justicia peruana.

Al mismo tiempo, Montesinos comenzaba a convertirse en un hombre importante para la operación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En 1991, hizo tratos con Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido bajo el alias de «Vaticano». Chávez operaba desde 1987 su propia firma en el valle del Alto Huallaga, una de las dos zonas de producción de hoja de coca en el país. Montesinos y Chávez se reunieron varias veces en Lima y Campanilla, la localidad donde operaba el narcotraficante.

«Vaticano» ha confirmado que le dio, varias veces, altas sumas de dinero en efectivo al asesor presidencial, a cambio de que pudiera maniobrar sin que los operativos militares lo afectaran. Asimismo, el narcotraficante, como otros hombres dedicados al mismo negocio, cooperó con las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso. Una alianza que, por obvias razones, nunca se reconoció en público[44].

Hacia la segunda mitad del año, las noticias económicas empezaron a ser buenas, tanto en el ámbito interno como en el externo.

Sin duda, una de las reformas más exitosas del periodo se vinculó con la recaudación tributaria. En enero de 1991, el propio Fujimori nombró a Manuel Estela, economista que había trabajado en el Banco Central de Reserva, como la cabeza de la nueva Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, un reemplazo de la antigua e ineficiente Dirección General de Contribuciones. Estela ya había reformado el organismo supervisor del mercado de valores durante los primeros meses del gobierno, con buenos resultados. Así que llegó al cargo con nuevas ideas y se las manifestó a Fujimori. El compromiso era que tendría

independencia total, no habría interferencias políticas y se le dejaría trabajar.

En principio, el economista logró cambiar el régimen laboral de los trabajadores de la entidad mediante una Ley, con miras a que, al igual que otras instituciones vinculadas a la regulación económica, pudiera atraer a personal calificado a la SUNAT. La flamante entidad asumió más autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas, incluyendo un cambio de local. Al mismo tiempo, Estela reclutó a varios funcionarios que habían trabajado con él en el BCR, así como a otros que provinieron gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer las capacidades de la entidad. Este último mecanismo sería muy solicitado por el Estado peruano durante las décadas siguientes.

Con estas nuevas facultades, Estela montó operativos de recaudación y fiscalización de entrega de comprobantes de pago. Esto le confirió una imagen ruda y férrea a la SUNAT, que llegó a clausurar locales en los que no se entregaban boletas o facturas. Estas acciones fueron claves para mostrar que existía un cambio fundamental respecto al pasado, en el que la administración tributaria era bastante laxa. Los resultados fueron notables: se logró duplicar la recaudación en 1991 frente al año anterior.

En abril de ese mismo año, representantes de las principales potencias económicas que tenían acreencias con el Perú se reunieron para conformar el denominado Grupo de Apoyo. Se trataba de una iniciativa que Fujimori había propuesto para que, a cambio de continuar con las reformas, estos países se hicieran cargo de los atrasos por mil millones de dólares que el Perú tenía pendientes con el Fondo Monetario Internacional.

En junio, luego de varias idas y venidas internas, Estados Unidos y Japón anunciaron sus contribuciones. Pero los europeos estaban aún dubitativos. Boloña hizo una gira por varios países del viejo continente en agosto, para reforzar las labores de convencimiento

Para septiembre, el Grupo de Apoyo se había conformado con una contribución de 1094 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, aprobó el programa económico peruano. También se reestablecieron las buenas relaciones con el Banco

Interamericano de Desarrollo, otro organismo multilateral. Ese mismo mes, el Club de París —donde estaban los países acreedores de préstamos bilaterales— reprogramó el pago de la deuda peruana. La inflación se encontraba en un dígito.

Sin embargo, el destino le tenía preparado al gobierno dos zozobras de distinto tipo[45].

Desde el 25 de agosto de 1990, quedó conformada la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar sobre las operaciones financieras, en el Perú y en el exterior, realizadas por Alan García como funcionario público. Esta fórmula permitía indagar sobre las finanzas del expresidente desde que ejercía como miembro de la Asamblea Constituyente en 1978. El grupo de trabajo era presidido por Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador, quien se había convertido desde 1987 en el principal acusador contra el exmandatario sobre posibles hechos de corrupción.

García había acudido a este grupo de trabajo para explicar sus ingresos como funcionario y como abogado, así como el ritmo de compras y ventas de bienes inmuebles entre 1978 y 1987. Según Pedro Cateriano, integrante de la comisión investigadora, hubo irregularidades en la presentación de declaraciones juradas.

El 8 de noviembre de 1990, García había salido librado de la acusación constitucional que lo comprendía como presunto autor intelectual de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el penal San Juan Bautista, ubicado en la isla El Frontón, durante el develamiento de motines senderistas en 1986. Fueron los votos de Cambio 90 los que salvaron al expresidente. Esta sería una acusación que cada cierto tiempo le traería problemas al exmandatario, aunque la Comisión de la Verdad y Reconciliación no encontró evidencia concluyente sobre una posible responsabilidad penal, aunque sí política. Algunos diputados fueron citados a Palacio de Gobierno y, según el testimonio de uno de ellos, Fujimori los felicitó por su voto.

La comisión que indagaba sobre las finanzas de García encargó a dos empresas de rastreo de fondos ubicar dinero presuntamente vinculado al exmandatario en Estados Unidos. La firma Kroll consiguió un par de pistas interesantes, pero la compañía Larc

aparentemente señalaba cuestiones más comprometedoras. Sin embargo, el prestigio de esta segunda empresa fue rápidamente demolido por informes periodísticos.

Todo cambió cuando una investigación en Estados Unidos apuntó hacia los irregulares manejos del Banco de Crédito y Comercio Internacional, una entidad financiera cuestionada por sus prácticas ligadas al lavado de dinero. Aunque la pista inicial era buscar cuentas de García en el BCCI, se reveló que esta entidad había sobornado a dos altos funcionarios del Banco Central de Reserva, Leonel Figueroa y Héctor Neyra, para que la entidad monetaria peruana colocara parte de nuestras reservas internacionales en el referido banco extranjero, durante el gobierno aprista. Para la comisión, dado el manejo político de García en la entidad (en teoría autónoma), este hecho comprometía al exmandatario.

Se encontró más evidencia: viajes de funcionarios apristas y cuentas en bancos extranjeros. Asimismo, se cuestionó la renegociación del contrato de adquisición de aviones Mirage, originalmente comprados durante la segunda administración de Belaúnde. Para agosto de 1991, se tenía un informe final.

Aparentemente, la comisión no las tenía todas consigo. Víctor Paredes había conseguido inicialmente que los parlamentarios de Cambio 90 unieran su suerte a la del APRA, pues los apristas los habían apoyado en momentos difíciles y, además, no consideraban que los informes de Kroll y Larc fueran contundentes. Sin embargo, la alianza García-Fujimori en la votación final se quebró. El informe de la comisión Olivera fue aprobado por 88 votos contra 76. Los parlamentarios que habían renunciado o habían sido expulsados del oficialismo fueron clave para la aprobación.

Luego se vio la acusación constitucional contra García por enriquecimiento ilícito y delito contra la fe pública. Se aprobó por un extenso margen en la Cámara de Diputados. Los diputados de Cambio 90 se abstuvieron. Días más tarde, fue difundido en un programa periodístico televisivo dominical el audio de una conversación telefónica interceptada donde García, Jorge del Castillo y Humberto Carranza Piedra coordinaban los votos de

parlamentarios de izquierda y del oficialismo para salvar al expresidente.

En la Cámara de Senadores, la situación resultó compleja. Esa vez, Máximo San Román les señalaba a los impulsores de las investigaciones que votarían «por la moralización». El senador cusqueño afirmó que Fujimori no había conversado con ellos sobre este tema. García acudió a defenderse y negó cualquier acusación. En la sesión del 19 de octubre de 1991, Beatriz Merino se acercó a Cateriano para advertirle:

—Fujimori está llamando a los senadores de Cambio 90 para que no voten por la acusación.

Buscaron a San Román, quien señaló:

—Voy a cumplir con mi conciencia, los senadores de Cambio 90 también.

El resultado final era claro: 38 de los 60 senadores votaron por acusar a García.

San Román había firmado su independencia de Fujimori[46].

Pero si la defensa a García resultó infructuosa para el gobierno, más frustrante sería un conflicto internacional. Más aún, si en el lado contrario estaba un país que tenía muy malas relaciones con el nuestro en aquel entonces.

Cuando Ecuador surgió a la vida independiente en 1830, como producto de la separación de la Gran Colombia, se inició un intenso conflicto por la frontera terrestre con Perú. En particular, el vecino del norte reclamaba que las regiones de Tumbes, Jaén y Maynas serían, en realidad, territorios ecuatorianos. Lo que se buscaba era algún tipo de salida hacia el Río Amazonas, con el fin de incentivar el comercio con Brasil y tentar una salida fluvial hacia el océano Atlántico.

Luego de tratados, mediaciones y un conflicto armado externo de mediana intensidad en julio de 1941, Perú y Ecuador suscribieron en enero de 1942 un Protocolo de Paz, Amistad y Límites en Río de Janeiro (Brasil), que fijó la frontera terrestre entre ambos países. Sin embargo, desde la década del cincuenta, el país norteño paralizó la demarcación y declaró la inejecutabilidad del Protocolo. En 1981,

una escaramuza militar volvió a colocar a las tropas peruanas y ecuatorianas en enfrentamientos armados.

En julio de 1991, militares ecuatorianos instalaron puestos militares entre los hitos Cuzumasa–Bumbuisa y Yaupi–Santiago. En particular, colocaron una base denominada Teniente Ortiz en territorio peruano. Del lado ecuatoriano, se aducía que Perú había instalado la base Pachacútec en territorio que se consideraba suyo. Una vez conocido el hecho en Perú, al mes siguiente, Torres y Torres Lara, en su calidad de canciller, conversó vía telefónica con su homólogo ecuatoriano Diego Cordovez, para evitar cualquier acción bélica. Se estableció una zona de distensión entre ambos países. A esta llamada se le conocería como «Pacto de Caballeros».

Conocido el hecho, las críticas recaerían sobre el abogado y presidente del Consejo de Ministros. Para varios expertos diplomáticos y militares, el «Pacto de Caballeros» no había resuelto el problema, dado que las tropas del vecino del norte permanecían en territorio nacional y no se había desalojado el puesto denominado Teniente Ortiz. Mientras que, en la versión de Torres y Torres Lara, se había logrado apaciguar la frontera, sin que ello comprometiera mayores esfuerzos económicos en un país con finanzas públicas precarias y que, además, enfrentaba las acciones subversivas y terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Torres y Torres Lara fue citado al Congreso de la República para informar sobre el tema. Según su versión, en la sesión secreta que se tuvo, hubo insinuaciones sobre la posibilidad de destituir a Fujimori. Pero ello no contó con la adhesión de la mayoría. Según el entonces diputado Pedro Cateriano, la conclusión que sacó de aquella sesión fue que el «Pacto de Caballeros» se debió al déficit de equipamiento y a la falta de decisión de Fujimori para enfrentar una invasión ecuatoriana.

Sin embargo, quien tendría que irse sería el presidente del Consejo de Ministros y canciller. La revista Caretas señalaba que el entorno cercano a Fujimori en materia de relaciones exteriores, encabezado por Luis Silva Santisteban —secretario de Palacio de

Gobierno y diplomático—, así como el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Paredes, habían sido hostiles a su gestión. Torres y Torres Lara dimitió en los primeros días de noviembre de 1991. Como veremos, no se alejaría de la administración fujimorista[47].

---

38 Algunos de los datos biográficos de Torres y Torres Lara son tomados de Degregori y Meléndez (2007: 57-59). En torno a Boloña, ver Bowen (2000: 84-85) y Murakami (2018: 258-263), así como su propio libro Cambio de Rumbo (1993: 28). La propuesta de de Soto sobre democratización de las decisiones está resumida en Bromley (1998): https://www.sociologicamexico.azcuam.mx%2Findex.php%2FSociologica%2Farticle%2Fdownload%2F553%2F526%2F&usg=AvVaw1qIvBjAVth14mpX95XDQyw. La cronología política de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ubica los hechos en el tiempo.

39 Sobre la epidemia de cólera, consultamos el artículo del médico epidemiólogo Eduardo Gotuzzo «El cólera en el Perú», publicado por la *Revista Médica Herediana* de la Universidad Privada Cayetano Heredia en 1991. También revisamos un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la epidemia de cólera en el Perú, que puede verse en http://www.fao.org/3/ab416s/ab416s.htm. Se consultó, además, un texto del blog Huellas Digitales, manejado por el archivo del diario *El Comercio*: https://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2011/03/la-pandemia-del-colera-20-anos/. El dato de la huelga médica lo consignan Gotuzzo y Murakami (2018: 602). El texto más completo sobre lo ocurrido es un capítulo del libro del historiador Cueto (2020: 187-232).

40 Sobre «la Virgen que llora», revisamos Bowen (2000: 339-340), Jara (2017: 198-200) y las noticias sobre el tema aparecidas en *La República* y *El Comercio.* En torno a João Teixeira, un informe del suplemento «Domingo» de *La República* aparecido el 15 de diciembre de 2018 recuerda la estancia en Lima del personaje. Puede leerse en https://larepublica.pe/domingo/1376993-joao-teixeira-santero-abusador/. También consultamos dos crónicas del periodista Eloy Jáuregui sobre la presencia de Teixeira en el Perú, que se encuentran en su blog: https://cangrejonegro.wordpress.com/2013/09/11/joao-texeira-1-cuando-dios-visito-miraflores/ y https://cangrejonegro.wordpress.com/2013/09/12/joao-texeira-2-el-mediun-con-el-bisturi-de-dios/.

41 El sistema de incentivos se amparó en el Decreto Supremo 004-91-PCM. El relato sobre este tema se basa en los recuerdos del autor, hijo de dos empleados públicos que vieron de cerca cómo se desarrolló este mecanismo de «renuncia voluntaria», así como en el documento de trabajo de Cortázar (2002: 43-45). Las medidas de Boloña aparecen en su libro (1993: 53-90), y también en Bowen (2000: 86-91, 105-108) y Murakami (2018: 259-264). Los decretos legislativos emitidos en el gabinete Torres y Torres Lara están reseñados en Pease (1994: 401-439).

42 Para observar las broncas producidas al interior de Cambio 90, ver Daeschner (1993: 290-291), Degregori y Meléndez (2007: 41-42) y Murakami (2018: 286-287)

43 En torno al GEIN y las acciones contra el MRTA, tomamos en cuenta el *Informe Final* (2003, tomo II: 220-226, 408-413), Paredes (2017: 136-146) e Hidalgo (2017: 19-33).

44 Sobre la relación antidrogas entre Perú y Estados Unidos nos basamos en Bowen (2000: 98-99) y McClintock y Vallas (2005: 193-203). En torno a los vínculos entre Fujimori, Montesinos y el narcotráfico, revisamos Bowen y Holligan (2003: 114-115, 167-174), así como Coya (2018: 69-74), para el caso de Demetrio Chávez Peñaherrera, el gran capo de la droga en el Perú a inicios de los años noventa. El dato final sobre la acusación de Roberto Escobar contra Fujimori se encuentra en Uceda (2020: 25).

45 La reforma de la SUNAT es reseñada por Bowen (2000: 87-89), así como por el propio Estela en su artículo «Fortaleciendo la honestidad en la administración de impuestos: el caso de la SUNAT en el Perú», aparecido en la revista *Moneda* del Banco Central de Reserva en 2000. También se tomó como base Cortázar (2002: 47-50). El proceso de reinserción internacional es descrito en Murakami (2018: 264-266, 269-271).

46 El mejor relato sobre las investigaciones parlamentarias a Alan García está en Cateriano (2017). El expresidente hace algunos descargos en sus *Metamemorias* (2019: 277-279). Luego del suicidio de Alan García en abril de 2019, surgió la versión del exhombre de confianza del expresidente, Luis Nava Guibert, un supuesto soborno para encubrir la presunta responsabilidad de García en el caso El Frontón en 2006. Allegados a García niegan lo dicho por Nava. Este último dato aparece en https://www.idl-reporteros.pe/garcia-el-fiscalel-fronton-y-el-archivo/

47 Sobre el «Pacto de Caballeros» con Ecuador consultamos Bákula Patiño (2002: 1310-1327), Bruce St. John (1999: 222), Torres y Torres Lara (1995) y Blacker Miller (1993: 82-150). La versión ecuatoriana aparece en Carrión Mena (2008: 37-44). Sobre la caída de Torres y Torres Lara, nos basamos en Murakami (2018: 292-293) y en un reportaje de la revista *Caretas*. La versión de Cateriano aparece en su reciente libro de memorias (2021: 46-47).

BARRIOS ALTOS

(Noviembre, 1991)[48]

Sábado 3 de junio de 1989. A las 10.30 a. m., el taxista Julio Centeno Callanahupa transitaba por el cruce de las avenidas Guardia Civil y Javier Prado cuando una mujer elevó el brazo para requerir sus servicios. «Hacia el colegio Túpac Amaru, en San Luis», le indicó.

Apenas el vehículo llegó al centro educativo, dos hombres subieron al auto de Centeno. Lo encañonaron y lo hicieron manejar a la espalda del plantel. Allí, la mujer lo sedaría y los tres lo harían bajar del vehículo.

Dos horas más tarde, dos ómnibus del Ejército salieron del cuartel Barbones hacia Palacio de Gobierno, con integrantes del regimiento de caballería Húsares de Junín, encargados de la custodia de la casa presidencial. Ninguno de los vehículos contaba con custodia de seguridad, ni medios de comunicación para seguir su ruta. Producto del tráfico regular del sábado al mediodía, ambos ómnibus se distanciaron una cuadra.

Cuando el primero de los buses estaba en la decimoprimera cuadra del jirón Junín, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, el taxi robado a Centeno le cerró el paso. Un sujeto hizo disparos. Otros arrojaron un explosivo que se alojó en la parte central del bus. A las 12.40 p. m., la dinamita explotó.

Seis militares fallecieron. Veinticinco quedaron heridos. Varios oficiales, en privado, prometieron venganza.

Ese mismo año, el técnico del Ejército, Douglas Arteaga Pascual, logró infiltrarse en Sendero Luminoso. El Servicio de Inteligencia del Ejército le encargó originalmente averiguar sobre una vieja obsesión militar: establecer si existían conexiones entre organizaciones no gubernamentales, partidos legales de izquierda y la organización terrorista.

Arteaga Pascual logró hacer el contacto en Villa El Salvador, al sur de Lima, donde Sendero Luminoso buscaba debilitar la férrea organización social que había logrado generar una comunidad autogestionaria que se había transformado en distrito en 1983.

Cuando Arteaga reportó que había sido captado e instruido en la ideología senderista, sus jefes le indicaron que dejaría su misión inicial para dedicarse a obtener información de la organización subversiva. Su nombre clave sería «Abadía».

A partir de 1990, «Abadía» reportó a sus superiores en el SIE que en Barrios Altos existía un grupo de personas que, bajo la fachada de ambulantes y heladeros, estaba involucrado supuestamente en acciones subversivas. Hacia 1991, como parte de lo que se conocería como Plan de Operaciones Ambulante, el SIE señalaría que una vivienda ubicada en el jirón Huanta 840, en Barrios Altos, era el punto de reunión de los supuestos senderistas.

En octubre de 1991, Arteaga contactó a Martín Rivas, quien le indicó que en la vivienda de Barrios Altos se realizaría una pollada, el domingo 3 de noviembre. Lo que se conoce como una fiesta tradicional en lugares de escasos recursos donde las personas pagan un ticket para colaborar con una causa justa, a cambio de una presa de pollo y abundantes papas. Además, la cerveza se vende con los mismos fines recaudatorios.

La pollada, según Arteaga, tenía como fin supuesto arreglar el desagüe de la quinta del jirón Huanta. A su criterio, serviría para obtener financiamiento de algunas actividades senderistas. Gracias a la información de «Abadía», se decidió hacer un operativo especial para la noche del 3 de noviembre.

A criterio de Martín Rivas, la acción tenía un objetivo fundamental: enviarle el mensaje a Sendero Luminoso de que habían ubicado un supuesto centro de operaciones. Para el mayor, la vivienda de Barrios Altos era el lugar donde se habían ocultado quienes cometieron el atentado a los Húsares de Junín en 1989. Por lo tanto, desde su posición, se estaba ejecutando una venganza y, a la vez, un instrumento de disuasión para que más gente abandonase la organización.

Sin embargo, «Abadía» no podía reconocer los nombres de los senderistas y los datos que brindó a Jesús Sosa no fueron tan exactos. Peor aún, un miembro de Sendero Luminoso le indicó a Uceda que nunca hubo un comando de heladeros y que, ante las bajas que habían tenido en 1991, extremaron sus medidas de

seguridad, por lo que las personas sospechosas a las que vio Arteaga eran ayacuchanos de lenguaje radical, pero no senderistas, dado que los auténticos subversivos habían cortado toda comunicación con él.

Los eventos que desencadenarían la matanza de Barrios Altos comenzaron el sábado 2 de noviembre. Ese día, quince personas del destacamento Colina, a las que se comisionó labores de contención y seguridad, estuvieron recorriendo las inmediaciones de la vivienda de jirón Huanta. Vigilaron la zona hasta el mediodía del día siguiente, y avisaron que la situación estaba bajo control.

Por la tarde del domingo 3, en dos camionetas, llegaron los miembros de Colina que se encargarían de la eliminación de los sospechosos de terrorismo. Sería Arteaga quien señalaría a las personas que iban a ser asesinadas. En la fiesta, «Abadía» indicó a un miembro del destacamento que se había infiltrado en la pollada que había detectado a, por lo menos, dos senderistas. También refirió que en la vivienda había dos fiestas: una en el primer piso y otra en el segundo. Era la primera la que les interesaba.

Hacia las diez de la noche, cuando notaron que algunos asistentes a la pollada comenzaban a retirarse, decidieron ingresar. Los fusiles iban en dos maletines largos que colocaron en el piso del callejón de entrada. Los hombres entraban con pasamontañas y tomaron una a una las armas. Para despistar, empezaron a decir que venía más cerveza. Luego alguien gritó: «Tírense al piso, terrucos conchadesumadre».

Un miembro del equipo subió el volumen del equipo y la música andina invadió el lugar. «Abadía» comenzó a señalar a los supuestos sospechosos de terrorismo. Comenzaron los disparos. Un niño que estaba escondido en uno de los cuartos, Javier Ríos Rojas, vio cómo maltrataban a su padre y salió a buscarlo. Las balas cayeron sobre el menor de ocho años. En el segundo piso, nadie escuchó nada. Más de un centenar de casquillos de bala quedaron en el piso. Los integrantes del destacamento arrojaron unos ejemplares del diario senderista.

Aquel 3 de noviembre fueron asesinados Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo

León León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Núñez, Benedicta Yanque Churo y Javier Manuel Ríos Rojas. Los heridos fueron Natividad Concorcahuana Chicana, Felipe León León, Alfonso Rodas Alvitres y Tomás Livias Ortega.

Al terminar el operativo, los integrantes de Colina se dirigieron a la playa La Tiza. Una torta esperaba a la medianoche, pues era el cumpleaños de Santiago Martín Rivas. Comenzaron a destaparse las cervezas.

Aunque Martín y Pichilingüe afirman que nunca hubo un bautizo oficial del grupo, informalmente el escuadrón se conocería como Colina, en homenaje a un capitán de infantería, José Colina Caige, asesinado en 1984 por sus propios compañeros de armas antes de que se pudiera identificar como un infiltrado en Sendero Luminoso.

El lunes 4 de noviembre, todos los diarios de la ciudad informaban sobre las atrocidades cometidas la noche anterior.

Santiago Martín Rivas y Jesús Sosa volvieron a Lima. Se dirigían hacia Las Palmas. Sosa pensó que iban a la sede del destacamento. Pero Martín le dijo que se dirigirían al Servicio de Inteligencia Nacional. Sosa no bajó del auto, del que descendió el capitán. Allí se encontró con el comandante Rodríguez Zabalbaescoa. Montesinos apareció en la entrada y los tres hablaron por cinco minutos. Terminado el diálogo, volvieron a La Tiza. Ninguno de los dos hombres dijo nada. En la playa, continuó la rociada celebración por el cumpleaños de Martín.

Un segundo testigo le afirmó al periodista Ricardo Uceda que Alberto Pinto fue a ver a Montesinos esa misma mañana. Allí el asesor presidencial le daría sus quejas a su hombre de confianza:

—Estos imbéciles han venido hasta aquí a darme cuenta. ¿Por qué tienen que venir?

No estaban en Lima ni Pedro Villanueva ni Juan Rivero Lazo, quienes estaban en un viaje en el exterior. Por tanto, Rodríguez y Martín intuyeron que debían rendir cuenta a uno de los padres del destacamento.

Héctor John Caro, director de la DINCOTE, ordenó una investigación policial de los hechos. La indagación concluyó que los eventos de Barrios Altos no fueron cometidos por organizaciones terroristas. La hipótesis más probable era la existencia de un supuesto escuadrón paramilitar, por lo que era necesaria una investigación interna en los institutos armados.

Tal investigación nunca ocurrió. Villanueva fue cesado a los pocos días y reemplazado por Nicolás Hermoza Ríos. A John Caro lo sacaron de la DINCOTE, pretextando una pérdida de dinero en la que nunca estuvo implicado. Desde el Congreso de la República, se intentó formar una comisión investigadora, pero el golpe del 5 de abril de 1992 cortó cualquier indagación parlamentaria.

Diez días después de la matanza, se constituyó la empresa de fachada Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima (COMPRANSA), cuyos accionistas eran Martín Rivas, Pichilingüe Guevara, Rivero Lazo y Rodríguez Zabalbaescoa. La empresa arrendó un local en la avenida Paseo de la República, en Miraflores, para reunirse sin problemas con los coordinadores de grupo.

Otro cambio se produciría antes de fin de año. Con la llegada de Hermoza, el destacamento dejaría la sede de Las Palmas y se trasladaría al Pentagonito. Rivero Lazo adquiriría un papel logístico mayor y Rodríguez Zabalbaescoa dejaría de ser el coordinador, rol que sería asumido por el coronel Federico Navarro.

Martín Rivas tendría algo más en su haber: fue ascendido a mayor a fines de 1991.

---

48 La narración del caso Barrios Altos se basa en Jara (2017: 145-181), Uceda (2018: 290-310), Rospigliosi (2000b: 31, 204-205), Vargas Llosa (2000: 76-150), el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 87-89; tomo VII: 485-503) y la sentencia contra Alberto Fujimori por las acciones del destacamento Colina.

RUMBO DE COLISIÓN

(Noviembre, 1991 – Marzo, 1992)

Alfonso de los Heros Pérez–Albela era el segundo ministro de Trabajo que llegaba a la Presidencia del Consejo de Ministros en menos de un año. Fue el propio Carlos Torres y Torres Lara quien lo llevó como su reemplazo en el despacho ubicado en la avenida Salaverry. Meses más tarde, terminaría siendo su sucesor en el PCM.

Abogado ligado al estudio Echecopar, de los Heros era un convencido de hacer una reforma del Estado en el Perú. En particular, a partir de los cambios en la estructura del Poder Ejecutivo y la mejora del proceso de descentralización que se venía implementando desde los años finales del periodo de García.

Para ello, de los Heros convocó a una Comisión Especial para estudiar el tema. Reclutó para ello a tres abogadas que habían trabajado en el Instituto Libertad y Democracia: Pierina Pollarollo, Leonie Roca y Rosa María Palacios. Su mirada de la reforma, aunque liberal, era más amplia que la de Boloña, más centrada en disminuir el aparato estatal para reducir el déficit fiscal. Se centraron en el análisis del gobierno central durante los siguientes meses.

La llegada del nuevo presidente del Consejo de Ministros supuso otros cambios. Jorge Torres Aciego, cuyo paso por el ministerio de Defensa fue discreto, fue reemplazado por Víctor Malca Villanueva, quien había estado en el sector Interior desde abril de 1991. El reemplazo de Malca en Interior era Juan Briones Dávila. Malca y Briones fueron nombrados gracias a la influencia de Alberto Pinto, quien mencionó sus nombres a Montesinos y, este, a su vez, se los recomendó a Fujimori. Malca había aceptado ser ministro del Interior luego que le concedieran, por algunos meses, ser jefe de la Primera Región Militar. En el caso de Briones, Pinto le dijo a Montesinos que se trataba de un «buen soldado».

Malca se quedaría durante casi cinco años como ministro de Defensa. Es la persona que más tiempo ha ocupado el cargo hasta el día de hoy. En 1996, fue nombrado, por breve tiempo, embajador

en México. Al terminar el gobierno, se le incautaron 17 millones de dólares, atribuidos a actos de corrupción.

Al ingeniero mecánico Augusto Blacker Miller se le asignó la Cancillería. En tal calidad, fue el encargado de transmitir la nueva propuesta peruana a Ecuador para resolver los impases. Se planteó un tratado de comercio y navegación que le otorgara al país del norte posibilidad de entrar a la cuenca del Amazonas, así como otros mecanismos de integración. Esta iniciativa estaba contenida en una carta dirigida por Fujimori a su homólogo ecuatoriano Rodrigo Borja, que el propio Blacker se encargó de entregar. El presidente peruano hizo pública la propuesta en su viaje a Quito en enero de 1992. Sin embargo, los resultados serían infructuosos.

No sería el único terreno en el que Fujimori sumaría dificultades[49].

Habíamos dejado a Alan García acusado por el Senado por enriquecimiento ilícito y delito contra la fe pública. A partir de ese momento, el exmandatario comenzó a atacar a todos los partidos que lo habían acusado constitucionalmente: los grupos de izquierda, los partidos de derecha que habían formado parte del Frente Democrático y, por supuesto, el gobierno de Fujimori.

En aquellos meses finales de 1991, García lanzó El nuevo totalitarismo: poder sin contrapeso, un alegato contra las reformas de mercado que el gobierno fujimorista estaba emprendiendo, a partir de la crisis económica que vivía Estados Unidos en aquel año. El libro fue editado por el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana, entidad que García fundó junto a un colaborador de su primer gobierno: Enrique Cornejo Ramírez. En dicha institución, fueron reclutados como investigadores dos personas que cobrarían mayor peso político quince años más tarde: Jorge Cuba Hidalgo y Roxanne Cheesman.

Mientras tanto, en el ámbito judicial, García comenzaría a cosechar victorias. El 22 de noviembre de 1991, el Fiscal de la Nación Pedro Méndez Jurado había emitido su dictamen contra García, pero había excluido los casos de los aviones Mirage y del BCCI. En la Corte Suprema de Justicia, había la certeza de que el caso se iba a cerrar, dado que varios de los magistrados verían que el caso del expresidente había sido hecho por García y el senado

aprista del periodo 1985–1990. Roger Salas Gamboa, magistrado y maestro del exmandatario, señaló que no había lugar a iniciar instrucción y archivó el caso. Todo en apenas una quincena.

Los acusadores de García en el Congreso, previendo que una segunda instancia confirmaría la decisión de Salas Gamboa, idearon una posible salida: declarar los últimos días de 1991 como no laborables, para que, en enero de 1992, con las salas recompuestas, se pudiera tomar una decisión contraria a la emitida por el magistrado. Lourdes Flores Nano, diputada por el Partido Popular Cristiano, logró ubicar a Fujimori por teléfono, en plena Navidad. El presidente le dijo que lo pensaría. Por la noche, de los Heros diría lacónicamente:

—El asunto no prospera.

A fines de 1991, el caso García había sido archivado, sin que el expresidente hubiera sido exculpado[50].

Mientras tanto, los últimos meses de 1991 resultaron en cambios acelerados en el entorno de las Fuerzas Armadas.

El 12 de noviembre apareció el Decreto Legislativo 752, la nueva Ley de Situación Militar. La norma tenía un artículo clave, el quinto: «Con el objeto de asegurar la aplicación de las estrategias políticas para la Pacificación Nacional y mantener la continuidad de los Comandos de las respectivas Instituciones, los Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú son designados por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas entre uno de los Generales de División, Vicealmirantes o Tenientes Generales en sus respectivos Institutos. El tiempo de permanencia en el empleo es determinado por el Jefe Supremo en las Fuerzas Armadas».

Con ese artículo, Fujimori era el único que podía decidir cuánto tiempo podía permanecer un comandante general de cualquiera de los institutos armados. En la práctica, podía colocarlo en forma indefinida.

El artículo no se aplicaría a Pedro Villanueva. El comandante general del Ejército se negó a firmar 45 solicitudes de pase al retiro en blanco que le habían sido presentadas por Montesinos el 18 de diciembre de 1991. Para Villanueva, este acto era demasiado, ya

que sabía que el asesor presidencial aprovecharía para realizar una depuración fuerte de oficiales de alta graduación con reconocimiento en la institución.

Montesinos actuó de inmediato. Convocó al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, a una reunión en casa de un hombre de confianza: Jorge Whittermbury. Allí le ofreció la Comandancia General del Ejército, bajo el pretexto de una insubordinación de Villanueva. Hermoza aceptó. Por la tarde, el comando lo confirmó como su nuevo jefe.

Hermoza Ríos era el número ocho de su promoción. En principio, nunca debió ser comandante general. Pero quienes lo antecedían en el cuadro de honor tuvieron suertes disímiles: acusaciones por violaciones a los derechos humanos, muertes en accidentes o simples carreras truncas. Así llegó al puesto más alto de su institución. A ello se sumó el deseo de Montesinos de tener a un hombre absolutamente bajo su control. Ya veremos que, paulatinamente, Hermoza se ganó su propio espacio de poder.

Lo primero que hizo Hermoza Ríos, apenas fue reconocido como comandante general, fue cesar a brillantes oficiales que podrían haber sido sus sucesores: Jaime Salinas Sedó, Luis Palomino Rodríguez, Víctor Obando Salas, Luis Soriano Morgan y José Pastor Vives. Pastor y Palomino ya sabían, para inicios de 1991, que había irregularidades en los contratos suscritos por Hermoza como jefe del Comando General de Logística del Ejército (COLOGE). Cambios de colocación de ambos oficiales evitaron una investigación mayor.

Años más tarde se sabría que cuando Hermoza fue jefe del COLOGE continuó su sistema de robos sistemáticos al Ejército Peruano que había iniciado en la década anterior[51].

El Decreto Legislativo que permitiría la permanencia indefinida de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas en sus puestos constituía parte del paquete de normas dictadas en virtud de la delegación de facultades que había conseguido el gabinete Torres y Torres Lara. Además de cuestiones ligadas a la economía, un rubro en el que el gobierno había puesto especial énfasis era la lucha antisubversiva.

Aparentemente, este era un tema en el que, a diferencia de otros tópicos, podría haber más consenso. El rechazo a Sendero Luminoso era casi unánime en todos los sectores sociales y desde todos los sectores del espectro político. Por tanto, parecía que las medidas pasarían por un control poco exhaustivo de parte de las bancadas no opositoras.

Sin embargo, Fujimori presentó en noviembre de 1991 una serie de decretos legislativos bastante polémicos y, además, emitidos en la parte final del plazo para dictar legislación delegada. De acuerdo con las reglas de aquel entonces, si estas normas no eran derogadas o modificadas en un plazo de un mes, entraban plenamente en vigencia. Y ese plazo coincidía con el final de la legislatura ordinaria, un periodo usualmente recargado de trabajo para los parlamentarios.

Los decretos legislativos fueron planteados desde distintos estamentos militares: los institutos armados, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, el Servicio de Inteligencia Nacional. Precisamente, la primera revisión de decretos derogó una nueva Ley del sistema de espionaje, que le otorgaba un poder muy fuerte al SIN para recabar información de organismos públicos y privados, así como instauraba que su presupuesto era secreto.

Dado que el lapso era muy pequeño para analizar las normas, el Congreso convocó a una legislatura extraordinaria para enero de 1992. Allí derogó y modificó otros decretos legislativos. Entre las medidas derogadas estaban una ley de movilización que prácticamente convertía a todos los peruanos en sujetos de requisa, lo que motivó una serie de protestas del empresariado, así como una norma que penalizaba con cárcel cualquier revelación vinculada a las actividades del SIN.

Los ataques de ambos lados eran previsibles. La oposición acusó a Fujimori de militarizar aún más a un país en pleno conflicto armado interno, lo que podría agravar la situación de violencia nacional. Mientras tanto, el presidente acusaba a los parlamentarios de «paquidérmicos» e «inmaduros»[52].

No obstante, el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no se circunscribía a la lucha contrasubversiva.

Algunos congresistas opositores impulsaron una Ley de Control de los Actos Normativos del presidente de la República. Esta norma buscaba que el Congreso pudiera revisar e, incluso, derogar los decretos supremos de urgencia, los tratados suscritos por el propio mandatario y la declaración de estados de emergencia.

La lógica era evitar que Fujimori pudiera generar una crisis parecida a la ocurrida a fines de 1990 con la aprobación y suspensión simultánea de la Ley de Presupuesto. Pero el mandatario consideraba que, en realidad, buscaban atarlo de manos, en prerrogativas que sus antecesores habían tenido.

La norma fue aprobada entre octubre y diciembre de 1992, en ambas cámaras. Fujimori la observó y, finalmente, en la legislatura extraordinaria, fue aprobada por insistencia.

La respuesta del presidente se configuró en la Conferencia Anual de Ejecutivos de 1991. Allí atacó a los parlamentarios, ante un auditorio que lo aprobaba ampliamente debido a las medidas económicas y que consideraba que el Congreso se había convertido en un lastre. Incluso Fujimori llegó a afirmar que «convendría que haya un emperador y que pase por lo menos diez años resolviendo problemas». La frase era provocadora y, para algunos, resultó premonitoria.

Desde el Congreso le contestaron. Los parlamentarios habían aprobado una Ley de Emergencia Agraria que implicaba un fuerte desembolso de dinero para apoyar a pequeños agricultores. Fujimori fustigó la norma. Dado que él no podía pagar el precio político de sus declaraciones, lo hizo el ministro de Agricultura, Enrique Rossl Link, quien tenía un año en el puesto. Fue censurado. Era la primera vez que, al amparo de la Constitución Política promulgada en 1979, un ministro salía del puesto por este mecanismo.

Pero el último golpe provino desde dentro: Hernando de Soto se alejaba del gobierno. ¿La razón? En su misiva de renuncia indicaba que los oficiales peruanos estaban cooperando con los narcotraficantes y que no habían variado su política frente a los derechos humanos en la lucha contrasubversiva. Y tampoco sentía que Fujimori lo apoyara en este aspecto, así como en las cuestiones vinculadas a la democratización de sus decisiones[53].

Febrero de 1992. Suenan las palmas apristas en el coliseo Gran Chimú. Se realizaba un nuevo Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano. Por aclamación, Alan García era proclamado secretario general de la agrupación política.

Era una reivindicación al mandatario que, gracias a fiscales y jueces venales, se había salvado de un proceso judicial. Y también constituía un golpe de fuerza del viejo partido, que se veía envalentonado al ver que, pese al mal gobierno y las acusaciones, García tenía cerca de 30 % de aprobación a su desempeño político como presidente. La idea de los apristas era que Alan fuera el candidato presidencial en 1995, esperando un natural desgaste de Fujimori.

García señala en su texto póstumo que tuvo un sueño en el que el propio Haya de la Torre le pedía no asumir el puesto. Por ello viajó a Trujillo dispuesto a declinar. Sin embargo, aceptó. Y a los pocos días, convocaba a un frente amplio «para enfrentar al modelo neoliberal y plantear alternativas en la política antisubversiva».

Por esos días, Montesinos lo convocó al Servicio de Inteligencia Nacional. Allí hablaron de diversos temas, aderezados por los erizos que eran la predilección de García. Este le comentó la cita a su viejo amigo y compañero Luis Alberto Sánchez. Invidente ya, el tótem intelectual aprista le manifestaría su lectura del diálogo con Montesinos: se venía una nueva época de persecución contra la añeja agrupación política.

María Elena Moyano Delgado había nacido en Barranco, en 1958. Llegó con su madre y sus hermanos a las invasiones que dieron origen a Villa El Salvador en 1971. Rápidamente se incorporó a organizaciones vecinales vinculadas a programas de alfabetización y, posteriormente, cuando la situación económica del país empeoró, a los comités de Vaso de Leche.

Moyano era afrodescendiente y de izquierda. Pertenecía al Partido Unificado Mariateguista, en sus vertientes más moderadas. Fue una de las fundadoras de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, que encabezó desde 1984, y buscó siempre la separación entre la organización vecinal y la política. Su ascendiente social la llevó a postular como teniente alcaldesa de su

distrito en 1989, puesto que obtuvo al ganar Jhony Rodríguez la elección bajo las filas de Izquierda Unida. Para ese entonces, Moyano ya estaba más cerca de los sectores católicos de izquierda.

En 1989, Sendero Luminoso comenzó a intensificar sus acciones en Lima. En particular, conseguir adeptos en los sectores más radicalizados de la periferia de la capital. Sin embargo, allí tenía un obstáculo: las organizaciones sociales ya existentes. Y lideresas como Moyano, que eran directas en confrontar a la subversión. Desde allí, los senderistas buscaron hacer de todo para acabar con la FEPOMUVES y con Moyano: amenazas, intentos de desacreditación con falsas acusaciones de corrupción, sabotaje.

Debido a los panfletos de muerte que le enviaban a casa de Moyano, una amiga en común, la activista feminista Diana Miloslavich, la ayudó a salir del país con destino a México. Pero la lideresa permaneció en ese país apenas seis semanas, pues volvió al Perú para continuar con su lucha. Moyano se atrevió a decir en plena conferencia de empresarios que, para combatir al terror, también se debía hacer frente al hambre de los sectores populares. El diario La República la nombró personaje del año 1991. Las amenazas prosiguieron.

El 14 de febrero de 1992, Sendero Luminoso convocó a un paro armado en Villa El Salvador. Los ciudadanos, atemorizados, no salieron a las calles. Solo un puñado de personas, encabezado por Moyano, se enfrentó al terrorismo con una «Marcha por la Paz». Ni los partidos de izquierda con los que la lideresa había contado antes la apoyaron, debido a consideraciones políticas de corto plazo. Según le confesó a Miloslavich, planeaba irse a España como asilada, junto a su familia.

Al día siguiente, Moyano debía acudir a una pollada para obtener fondos destinados a los implementos de un comedor popular. Los senderistas ingresaron y se impuso la confusión. La lideresa popular le dijo a una amiga suya que pusiera a sus hijos a buen recaudo. Y en un último acto de valentía, les gritó a los demás asistentes a la reunión:

—Corran, carajo, ellos vienen por mí.

Un hombre y una mujer ingresaron al lugar y le dispararon en el pecho y la cabeza. Luego la llevaron afuera y le colocaron una carga de dinamita en su cuerpo.

Sus restos fueron sepultados en medio de una de las mayores manifestaciones públicas que vio la historia de Villa El Salvador. El asesinato de Moyano conmovió al país, mientras que su viudo y sus hijos partieron a España. Sin embargo, los dirigentes de izquierda seguirían abandonados, a la par que la dirigencia de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador comenzaba a ser desplazada por Sendero Luminoso. Sería por poco tiempo[54].

El 15 de marzo de 1992, Fujimori partió a la tierra de sus ancestros. En Japón, obtuvo un crédito importante por 122 millones de dólares. Sin embargo, era una suma menor a la que pensaba que podría obtener. En Tokio, un funcionario del gobierno le preguntó qué haría con respecto a sus malas relaciones con el Congreso peruano. La lacónica respuesta fue:

—Las empeoraré aún más.

Nadie sabría a qué se referiría Fujimori hasta semanas más tarde. Llegó a Lima el 21 de marzo de ese año.

Tres días más tarde, Susana Higuchi, la esposa del presidente, brindó una inusual conferencia de prensa. Era una bomba en la línea de flotación del gobierno de su marido. Acusaba directamente a su cuñada Rosa Fujimori y a su concuñada Clorinda Ebisui —la esposa de Santiago— de apoderarse de la ropa donada por empresas y particulares desde Japón para las personas más pobres del país.

—Se cogen lo mejor para ellas. Lo demás lo venden a un bazar de caridad. Y reparten estropajos. Y utilizan mi nombre. Eso me indigna.

En la práctica, Susana echaba por la borda un matrimonio de 18 años, que ya estaba quebrado desde hacía tiempo. De hecho, Fujimori comenzaba a ingresar abruptamente a las actividades de ayuda social de su esposa, que tenía una buena popularidad.

La primera dama lanzaba la primera acusación fuerte por corrupción a un gobierno que decía que la honradez era su bandera. Un fiscal con fama de incorruptible, Víctor Cubas Villanueva, fue

comisionado inicialmente al caso, pero lo terminó archivando por falta de pruebas. Varios parlamentarios señalaron que, apenas regresara el Congreso a sus labores el martes 7 de abril, se buscaría formar una comisión investigadora por las denuncias de Higuchi.

Por su parte, Alfonso de los Heros buscaba reducir las tensiones con el Congreso de la República. Había logrado convencer a un sector de la centro-derecha para impulsar una serie de medidas que redujeran el clima de confrontación: normas contrasubversivas que admitieran algunos de los puntos planteados por el gobierno pero dentro del cauce constitucional, rechazaran una moción de censura que se había interpuesto contra Boloña, y comenzaran a discutir la salida de los vocales de la Corte Suprema más cercanos a Alan García. Las propuestas, inicialmente, se presentarían el 7 de abril.

En los primeros días de ese mes, llegó a Lima Bernard Aronson, subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos interamericanos. Iba a tratar con Fujimori asuntos vinculados con la cooperación militar en la lucha contra las drogas. Según algunas versiones, Aronson venía con una lista de más de 100 oficiales involucrados en el narcotráfico, con miras a que Fujimori los sacara. La cita se iba a producir el lunes 6 de abril.

Ninguno de ellos sabía lo que vendría. Y tampoco la mayoría de los peruanos[55]

49 Sobre de los Heros, varios de los datos sobre su rol en el gobierno se ubican en una entrevista brindada a la revista *Somos* de *El Comercio,* hecha por Ana Núñez. Puede verse en https://elcomercio.pe/politica/gobierno/heros-claro-golpe-me-412644-noticia/?ref=ecr. El tema de la reforma del Estado se basa en el texto de Cortázar (2002: 60-62), para el que declararon Palacios y Roca. Mientras que el problema con Ecuador se basa en Bruce St. John (1999: 222) y Blacker Miller (1993). Sobre los nombramientos de Malca y Briones, consultamos Uceda (2018: 271-272). Sobre Malca, además, revisamos un artículo aparecido en *Caretas* en 2015, a propósito de su fallecimiento, víctima de cáncer a la piel: https://web.archive.org/web/20160519191302/http://caretas.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1259&idSTo=0&idA=75496

50 Lo ocurrido con García se basa, sobre todo, en Cateriano (2017), así como en las memorias del expresidente. Enrique Cornejo cuenta la formación del Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana en su libro *La Segunda Oportunidad* (2013). Pude revisar en 2017 los «Cuadernos» editados por el IDEL, donde aparecen textos escritos por Jorge Cuba —quien fue viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno de García y luego estuvo involucrado en una coima por la Línea 1 del Metro de Lima— y Roxanne Cheesman, madre del último hijo del expresidente y su pareja hasta el final de sus días. Esta revisión aparece en https://josealejandrogodoy.wordpress.com/2017/01/29/libros-con-historia/. La elección de García como secretario general del APRA en 1992 se basa en Murakami (2018: 301-302) y las *Metamemorias* (2019: 281-282).

51 El relato sobre la llegada de Nicolás Hermoza Ríos al poder se basa en los libros de Uceda (2018: 311-312), Rospigliosi (2000b: 29-30) y Gamarra (2007: 35-39). En este último, Gamarra consigna la biografía más completa sobre Hermoza, el hombre que más tiempo ha ocupado la Comandancia General del Ejército en la historia del Perú.

52 Sobre los polémicos decretos legislativos en torno a la lucha antisubversiva, conviene revisar Rospigliosi (2000b: 110-118) y Bowen (2000: 108-110).

53 En torno a la Ley de Control de los actos presidenciales, nos basamos en Murakami (2018: 293-296). Los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo están bien explicados por el politólogo japonés (289-298), así como en la biografía que Bowen hizo sobre el mandatario (2000: 109-110). Sobre la salida del gobierno de de Soto, son fuente confiable Bowen (2000: 111) y McClintock y Vallas (2005: 114-115).

54 El relato sobre María Elena Moyano se basa en lo señalado por el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 639-650), así como en Burt (2011: 230-255) y Starn y La Serna (2019: 157-170, 215-223, 286-304).

55 El clima previo al golpe de 1992 se basa en Murakami (2018: 300-303) y Bowen (2000: 111-113). La periodista británica reseña las denuncias de Susana Higuchi sobre ropa donada, a las que el politólogo japonés no da mayor crédito (2018: 303). Uceda (2020: 51) brinda el dato sobre el archivamiento de la denuncia de Higuchi. Otros detalles sobre la esposa de Fujimori se cuentan en el reportaje de Marco Sifuentes para *La Ventana Indiscreta* llamado «Ma», y que puede consultarse en

https://youtu.be/ozzsZP_PHhk.

DISOLVER, DISOLVER

(Abril – Mayo, 1992)

Hasta las 8.00 p. m. del domingo 5 de abril, no había noticia de interés alguna. El torneo peruano de fútbol, cuyas incidencias eran las que ocupaban a las redacciones de la prensa los domingos, se iniciaría recién en la siguiente semana. Ese día de 1992 transcurría sin ninguna novedad.

La única entrevista de fondo en los programas dominicales fue concedida por Alfonso de los Heros, quien manifestó que el martes 7 de abril se presentarían los resultados de un diálogo nacional, que buscaba cerrar los conflictos con el Congreso de la República[56].

Abruptamente, cuando miles de peruanos estaban ya por apagar sus televisores, hacia las 10.30 p. m. apareció un cintillo: «Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori».

Vestido con terno oscuro y corbata negra, acompañado de una pequeña bandera nacional y un fondo del mapa del Perú, el ingeniero comenzaría la alocución que cambiaría la política del país.

La posibilidad de un golpe de Estado en el Perú se había conversado desde 1987 en estamentos militares. Personal en actividad y altos oficiales en retiro evaluaron el escenario y arribaron a dos conclusiones claras: Alan García está haciendo un mal gobierno y se requiere enfrentar tanto a la crisis económica como al terrorismo. Para esta última misión, era necesario instalar un gobierno castrense de largo aliento.

A partir de 1988, un sector de militares preparó un Plan Verde, que sería ajustado durante los dos años siguientes. Sus líneas matrices eran bastante nítidas. En lo económico, se tendría un plan destinado a la atracción de la inversión privada y el capital extranjero, la creación de un sistema privado de pensiones similar al instaurado en Chile durante la dictadura de Pinochet y, sobre todo, se buscaría la reducción de la inflación para legitimar al gobierno.

El diagnóstico poblacional era sumamente racista: era necesario detener el crecimiento demográfico en el país, sobre todo, «de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados».

El remedio propuesto eran programas de esterilización masiva. A la par, se hablaba abiertamente de la eliminación física de terroristas y narcotraficantes.

Políticamente, el plan planteaba un gobierno de facto, con el control de los medios de comunicación, a través de campañas psicológicas, censura e invitación a la autocensura a los empresarios. A diferencia de lo ocurrido con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, no se planteaba la expropiación como salida.

Montesinos conocía a varios de los autores del plan. Lo que hizo fue adaptarlo a la nueva situación, de modo que su Servicio de Inteligencia Nacional cobraría mayor importancia[57].

Con voz cadenciosa y semblante serio, Fujimori señalaba que su gobierno era «la última oportunidad» que tenía el Perú para encontrarse con su destino. Aseguraba que ya había obtenido algunos logros como la reinserción en el sistema financiero internacional y el control de la inflación. Pero existía un gran obstáculo:

—A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.

El mensaje continuaba con su mensaje antipartido que lo había caracterizado durante los veinte meses de su gestión. Señalaba como ejemplos de la obstrucción del parlamento la derogación de un decreto sobre lavado de activos, la Ley de Control de los Actos Normativos del presidente de la República, la imposibilidad de observar la Ley de Presupuesto, y la no adopción de normas de austeridad en el Congreso.

Los jueces merecieron capítulo aparte en su mensaje. Aunque varias de sus críticas eran justas, terminaba haciendo generalizaciones gruesas:

—Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o

el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia.

Fujimori también consideraba que se habían generado nuevos «centralismos regionales». Dicho esto, habló de la reconstrucción nacional que él encabezaría. Y señaló que tomaría las «siguientes trascendentales medidas»:

—Primero: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.

Mientras tanto, las tanquetas y tropas salían a la calle. El golpe de Estado se había consumado.

Fujimori tomó la decisión del golpe de Estado en noviembre de 1991. Tres fuentes ratifican esta conclusión.

La primera es el propio mandatario, quien había publicado en 1999 unas memorias serializadas en un diario japonés. En esta publicación periódica, Fujimori indicó que la derogación de los decretos legislativos sobre pacificación había sido la causa para ello. Sin embargo, el golpista sostuvo ante la Sala Penal Especial que recién tomó la decisión del golpe a inicios de 1992.

Una segunda fuente es Vladimiro Montesinos, quien le había dicho a Francisco Loayza —con quien aún mantenía amistad— y al general Edgardo Mercado Jarrín, de quien había sido secretario, que existía la idea de un golpe cívico militar. Loayza escribió sobre esta versión, recogida por varios autores.

La tercera fuente es un colaborador cercano de Fujimori, quien le dijo al asesor político de la embajada japonesa en Lima, Yuzuke Murakami, que su jefe iba continuamente a la Comandancia General

del Ejército en San Borja. El pretexto era hacer ejercicios. Pero, en realidad, en el Pentagonito—apelativo de la sede militar, en comparación con la sede central del Departamento de Defensa de los Estados Unidos— lo que se ultimaba era la interrupción del orden constitucional.

Una vez que Hermoza fue elegido comandante general del Ejército, se sumó a los preparativos. Para febrero, intervino en una reunión en Palacio de Gobierno con miras a preparar los detalles del golpe. Fujimori dividió las tareas: el mantenimiento del orden público estaría a cargo de Hermoza, mientras que la parte política correspondía a Montesinos. A Rafael Merino Bartet, un veterano colaborador del SIN encargado de vestir con ropaje legal y elegante las órdenes más draconianas, se le encargó la elaboración del mensaje de Fujimori, así como la redacción del comunicado de la cúpula militar respaldando el golpe. Según Merino, Montesinos le indicó que el Congreso buscaba vacar a Fujimori y que, por ello, se tomaba esta medida excepcional.

La decisión sobre el día exacto del golpe fue tomada el 3 de abril y se les comunicó a los comandantes generales de los institutos armados. Al día siguiente, ellos harían lo propio con sus estados mayores.

El domingo 5 de abril por la mañana, Fujimori y Montesinos corrigieron el texto final del mensaje. En la tarde, grabó el discurso. Para el anochecer, las tropas solo esperaban la señal de Hermoza para salir a la calle.

Iniciada la noche, fueron convocados al Pentagonito los representantes de los principales canales de televisión: Manuel Delgado Parker (Panamericana), Nicanor González (América) y Samuel y Mendel Winter (Frecuencia Latina). Allí les comunicaron la medida. Los Winter fueron los más entusiastas. Delgado Parker y González expresaron su preocupación por la libertad de prensa. Fujimori dio una respuesta vaga e indicó que esperaba que los canales pasaran el mensaje. Así se hizo.

Solo a las 9.00 p. m. fueron convocados los miembros del gabinete ministerial, de forma tan sorpresiva que algunos tuvieron que ir en el mismo auto con el único chofer disponible. De los Heros

venía de la ya mencionada entrevista donde anunciaba un acuerdo con un sector de la oposición y se pensaba que se anunciaría la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Fujimori les pasó el video del mensaje. El presidente del Consejo de Ministros lo vio y quedó descolocado. Llegó a la conclusión de que estábamos ante un golpe de Estado y renunció en el acto. Lo mismo hizo el ministro Gustavo González Prieto, titular de la cartera de Agricultura. Todos los demás ministros tuvieron que poner sus cargos a disposición de Fujimori, pero no se fueron.

El más entusiasta fue Blacker Miller:

—Todo se puede manejar sin problema y ya he hecho gestiones internacionales para que todo se haga sin problemas.

Otro ministro bastante animado con la decisión golpista era Augusto Antonioli, ministro de Trabajo y muy cercano a Montesinos.

Boloña estaba en duda: sabía que era una medida inconstitucional, pero pensaba que al irse se ponían en riesgo los avances económicos. Optó por quedarse. Lo mismo hizo la mayoría del gabinete.

Fujimori citó a de los Heros a Palacio a primera hora del 6 de abril. Trató de convencerlo de quedarse. No pudo. El abogado cogió sus cosas y se fue. Lo mismo harían las abogadas de su equipo de reforma del Estado[58].

Dado que la noticia se produjo cuando los programas periodísticos dominicales habían concluido sus emisiones, no hubo mayores reacciones inmediatas al golpe de Estado. El único programa en vivo era Goles en acción, un programa deportivo transmitido por Global Televisión, conducido y dirigido por el abogado y periodista Alberto Beingolea. Fue la única voz que, en solitario, protestó por la medida de interrupción del orden democrático en la televisión nacional aquella noche.

En una radio en particular, las protestas se hicieron sentir. Antena 1 era una estación cercana al APRA y, desde allí, diversos políticos de oposición se pudieron expresar:

Felipe Osterling, presidente del Senado:

—Estoy indignado ante el golpe de Estado. Repudio lo que ha hecho Alberto Fujimori. Estoy con arresto domiciliario y algunos

colegas senadores han sido detenidos. Este es un hecho repudiable y por eso convoco a los peruanos y a los hermanos de América frente a este latrocinio, que pisotea la Constitución y la Ley Estoy detenido y han rodeado la manzana de mi casa. Los peruanos tienen el derecho de insurgencia, porque esto es un golpe de Estado.

Henry Pease, senador de Izquierda Unida:

—Quiero expresar mi absoluto repudio a la decisión del presidente de la República. El señor Fujimori ha perdido legitimidad porque ha violado la legalidad y los términos en los que fue elegido. Quiero expresar mi adhesión al presidente del Senado, quien se ha expresado a pesar de estar detenido. La izquierda en particular no va a aceptar que se nos imponga otra dictadura. Esta democracia costó mucha lucha y esfuerzo del pueblo.

Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú:

—Felicito la valentía de Antena 1 por propalar esta protesta ante la afrenta a la Constitución. Expresamos nuestra protesta y nuestra condena, por esta actitud.

Gustavo Mohme, principal accionista de La República:

—Tenemos intervención militar. También han entrado a la impresora. Vamos a tratar de sacar el diario. Hay una censura en este momento.

Luego de la intervención de Mohme, Antena 1 tuvo que interrumpir su transmisión por orden militar. El locutor Henry Aragón lanzó al aire el Himno Nacional. La única radio que pudo transmitir en contra del golpe durante unos días más fue Radio Santa Rosa, una radio pastoral que transmite desde el Convento de Santo Domingo, que nunca pudo ser ubicada.

La República salió al día siguiente con algunos espacios en blanco, producto de la censura. El Comercio pudo salir a circulación, a pesar de que hubo una ocupación de las tropas. El diario expresó su rechazo al golpe de Estado, en su tono contemporizador. La revista Caretas también fue ocupada brevemente. Sus periodistas protestaron. Su portada, al salir poco después, fue clara: el rostro de

Fujimori con una gran X encima, y un titular que era un editorial en sí mismo: Tachado internacionalmente[59].

En su versión original, el Plan Verde tenía planteado el arresto de diversas personas allegadas al APRA, comenzando por Alan García. Fueron apresados los exministros del Interior Abel Salinas y Agustín Mantilla, quienes no tenían poder alguno para 1992. Lo mismo ocurrió con policías en situación de retiro que habían ocupado puestos de mando durante la administración aprista. La lectura del plan original contemplaba que el viejo partido tenía fuerzas de choque armadas que podrían contrarrestar la interrupción del orden democrático. Para el 5 de abril de 1992, ese escenario no existía.

Esto explica por qué el intento de arresto de Alan García fue tan rocambolesco. Cientos de soldados se trasladaron a la vivienda del expresidente, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, a pocas cuadras del Pentagonito. García fue alertado de lo ocurrido y escapó por los techos de las viviendas vecinas. Mientras tanto, el diputado y leal abogado de García, Jorge del Castillo, disparaba al aire y luego salió a hablar con los militares.

A del Castillo se lo terminarían llevando a las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos. Allí estuvo retenido contra su voluntad durante cinco días.

El expresidente García encontró refugio a pocas viviendas. Juan Carlos Hurtado Miller, expresidente del Consejo de Ministros, le dio cabida unas pocas noches. Luego pudo ir a la casa de un amigo suyo, Carlos Montoya y, posteriormente, estuvo alojado en la vivienda de su compañera de partido, Judith de la Mata. Desde la clandestinidad, aseguraba que iniciaría una resistencia contra la dictadura.

Sin embargo, 56 días después, García entraría escondido en el auto de del Castillo a la embajada de Colombia en Lima. Solicitó asilo diplomático. Se le concedió la salida dos noches más tarde. A partir de ese momento, inició una estancia prolongada entre Bogotá y París que se prolongaría durante cerca de ocho años[60].

A unos pocos kilómetros de la casa de García, en Miraflores, el periodista Gustavo Gorriti se preparaba para escribir una crónica

para el extranjero sobre el golpe de Estado. Sonó el timbre. Anticipando a qué venían, encerró a sus dos perros, llamó a una persona para que difundiera la noticia sobre su posible arresto y, finalmente, abrió la puerta. Sujetos con ametralladoras y pistolas entraron a su casa. Para él, era claro que eran miembros del Servicio de Inteligencia.

La orden de detención genérica había sido firmada por Hermoza el 5 de abril y fue redactada por Merino Bartet. Hermoza firmó la detención de Gorriti frente a Montesinos, con la anuencia de Fujimori.

Con poco más de cuarenta años, Gorriti era uno de los periodistas más importantes del país. Sus informes de investigación habían revelado grandes casos de narcotráfico —incluyendo el caso Langberg, que generó un quiebre generacional en el APRA y permitió el rápido ascenso de Alan García a la secretaría general del partido en 1982— y violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. También había escrito un libro sobre Sendero Luminoso que era consultado por expertos en subversión. No menos importante: había sido la persona que, en 1983, dio a conocer al país las acciones pasadas de un exmilitar y oscuro abogado llamado Vladimiro Montesinos.

Con rapidez, los militares le hicieron notar para qué habían ido: lo querían a él y a su computadora. Lo trasladaron al Cuartel General del Ejército y lo internaron en un área clandestina y bastante sucia. Gorriti se puso en huelga de hambre y optó por no dormir. Le pidieron la clave de la computadora. Se negó a entregarla. Un día después, finalmente decidieron ponerlo en custodia de Seguridad del Estado, con lo que su secuestro se terminó convirtiendo en detención y, pocas horas más tarde, en liberación. Intervinieron los buenos oficios del embajador de España en el Perú y de Aronson, el diplomático estadounidense que aún estaba en Lima.

Mientras se hallaba detenido en Seguridad del Estado, lo llamó el general Antonio Ketín Vidal, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. Le dijo que Montesinos había insistido para que el periodista fuera acusado por terrorismo y le dio a entender que Fujimori conocía su detención.

Cuando Gorriti salió en libertad, el 7 de abril de 1992, reseñó que había sido invitado por militares para dar conferencias sobre su libro Sendero y que, en ningún momento, nadie le había reprochado por su texto. Con cierta sorna, se quejó de que no le habían devuelto ni sus pasadores, ni su computadora, ni su disco duro. «La legitimidad democrática es uno de los bastiones firmes para tener un principio sólido en la guerra política contra Sendero. Al haberse autosaboteado, le ha dado una gran arma a Sendero», declaró el periodista en su domicilio a la prensa nacional y extranjera.

Fujimori brindó una conferencia de prensa en torno al golpe de Estado horas más tarde, el 8 de abril. Gorriti acudió y lo confrontó con estas palabras:

—Quisiera preguntar, ingeniero, ¿con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Con qué derecho se arrebata y se secuestra su computadora, el material y los archivos de años de trabajo? ¿Esa es la forma en la que se va a tratar a la prensa en general o solo a algunos periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen?

El ingeniero, visiblemente incómodo por la pregunta —y por el hecho de que no lo llamaran presidente—, atinó a responder lo siguiente:

—En el caso suyo, sé que se le ha retenido su computadora y los archivos. Entiendo que esto está en manos de Seguridad del Estado. Espero que la investigación culmine lo antes posible, señor Gorriti, y le sea devuelta su computadora y sus documentos en un plazo menor de siete días. En cuanto a la libertad de prensa, ha habido un paréntesis en este derecho elemental. Se va a respetar totalmente, como lo pueden ver en estos momentos.

Nunca le fue devuelta la computadora a Gorriti. De hecho, recién fue remitida el 14 de abril de 1992 a Seguridad del Estado, según documentación reconocida por Merino Bartet. Fujimori había mentido[61].

Dos días después del golpe de Estado, la revista Caretas captó una imagen sintomática de los tiempos. Por la puerta lateral de Palacio de Justicia, ubicada en la calle Miguel Aljovín, se veía a un grupo de personas que estaba sacando subrepticiamente un

conjunto de expedientes judiciales. Las rumas de documentos eran subidas a una camioneta. Nunca se supo de qué documentos se trataba. Tampoco se conoció su destino final.

No era lo único que ocurría en el clausurado sistema de justicia. Para el 8 de abril, el gobierno emitió el decreto ley 25423, que cesó a trece vocales supremos. Posteriormente, el decreto ley 25425 implicó la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado.

El 23 de abril de 1992, el gobierno dictó el decreto ley 25446, que tenía dos grandes medidas. Se cesó a 133 magistrados en Lima y Callao de distintas instancias judiciales y fiscales. Había magistrados destacados entre los despedidos, como César San Martín Castro, Luis Vargas Valdivia, Avelino Guillén e Inés Tello, así como otros nombres que durante años fueron ligados al APRA, como César Vega Vega. Curiosamente, entre la lista, se encontraban personajes que luego serían funcionales al régimen, como Alejandro Rodríguez Medrano.

Esta norma también creaba una Comisión Evaluadora del Poder Judicial, integrada por tres vocales de la Corte Suprema de Justicia. Dos de los magistrados que la integraron, Luis Almenara Bryson y David Ruelas Terrazas, habían sido designados vocales supremos ese mismo día. El otro vocal supremo integrante era Luis Serpa Segura, quien presidía la Corte Suprema. De acuerdo con el Informe de la Comisión Investigadora de la influencia del gobierno fujimorista en la administración de justicia, Santiago Fujimori, Jaime Yoshiyama y el ministro de Justicia Fernando Vega Santa Gadea intervinieron directamente en la depuración y selección de magistrados. La Comisión Evaluadora fue cuestionada por sus arbitrariedades y, peor aún, se emitió una norma para evitar cualquier tipo de demanda de amparo por vulneración de derechos.

Así empezaba el control del sistema de justicia[62].

A diferencia de lo que había dicho Blacker Miller, la reacción internacional frente al golpe de Estado no fue favorable. A inicios de la década de los noventa, estábamos ante una comunidad internacional más proclive a defender los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La Guerra Fría había terminado y aquellas instituciones enunciadas por Estados Unidos y el mundo

occidental se expandían en buena parte del mundo. Al menos en el papel.

Para el Perú, la situación era más complicada por dos razones internas. El país recién se estaba reinsertando en la comunidad financiera internacional, por lo que su credibilidad estaba en pleno proceso de reconstrucción. Y, al mismo tiempo, en medio de la lucha contra la subversión y el narcotráfico, existían serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos y tolerancia al tráfico ilícito de drogas contra miembros de las fuerzas del orden.

En la región, Venezuela asumió la actitud más férrea, al romper relaciones diplomáticas con el gobierno peruano. De hecho, el embajador peruano en Caracas, el diplomático y excanciller Allan Wagner, decidió asilarse en ese país junto a su familia. Colombia suspendió relaciones diplomáticas y Argentina llamó a consulta a su embajador, a modo de protesta. El Perú fue suspendido en su participación del Grupo de Río, un foro de consulta de los países latinoamericanos.

Desde las primeras horas de la interrupción del orden constitucional, Mario Vargas Llosa se pronunció en contra de la medida. El escritor, que residía entre Madrid y Berlín en 1992, condenó el golpe de Estado. En su columna habitual en El País, distribuida en diversos países del mundo, el excontendor de Fujimori señaló que: «Clausurando un Congreso representativo y fabricando uno ad hoc, fantoche, como hacen todas las dictaduras y como el ingeniero Fujimori promete hacer, no van a mejorar las costumbres ni la cultura democrática del Perú: van a empeorar». En otras declaraciones, indicó que debía retirarse la ayuda internacional al Perú, en tanto el país fuera gobernado por un dictador. En Europa, Alemania y España decidieron suspender dicho apoyo económico.

El presidente estadounidense George H. W. Bush llamó a Fujimori por teléfono al día siguiente del golpe. El dictador le aseguraba al mandatario de la principal potencia mundial que estábamos ante «una situación transitoria que no durará más de doce meses». Bush le remarcó que, si bien querían mantener la cooperación para la lucha contraterrorista, la batalla contra el narcotráfico y la recuperación económica, «sus acciones me hacen muy difícil si no

imposible continuar con nuestros programas». Desde Washington, el presidente le quería hacer notar a Fujimori que, desde fuera, el golpe se veía muy mal y que las relaciones no serían normales, en tanto la democracia no se restaurara. El gobernante peruano adelantó un cronograma preliminar: un referéndum sobre las medidas tomadas para junio de 1992, un debate sobre las reformas constitucionales que propondría una comisión de expertos en septiembre, un referéndum modificatorio de la Constitución en noviembre y, finalmente, un nuevo Congreso que sería elegido en marzo de 1993. Bush cerró la llamada, esperando los anuncios de Fujimori.

Estados Unidos hizo sentir su presión. Aronson se fue rápidamente del país y se suspendió la ayuda económica, con excepción de la humanitaria. Sin embargo, Washington reconoció a Fujimori como el gobernante a cargo. Tampoco se impusieron embargos internacionales como había ocurrido con Haití en 1991. Dando cuenta de las diferencias entre las agencias de ese país frente al régimen, los funcionarios de la DEA en el Perú permanecieron en sus puestos. Para el gobierno estadounidense, el cronograma de Fujimori y los pasos enunciados para la supuesta normalización democrática no eran del todo aceptables, dado que no se había consultado a la oposición sobre los mismos.

En Japón no hubo oficialmente una reacción desfavorable. De hecho, los diarios japoneses recibieron cartas apoyando las medidas tomadas por Fujimori. Sin embargo, en la práctica, Japón suspendió toda ayuda al Perú, incluyendo la humanitaria. Las declaraciones oscilaban entre la búsqueda de la normalización y la condena a la salida autoritaria. El gobierno japonés le envío cartas a Fujimori señalando que las relaciones estaban condicionadas al retorno de la democracia.

Era claro que Fujimori no esperaba esta respuesta internacional[63].

No obstante, Fujimori tenía algo más sosegado el frente interno. Para comenzar, la mayor parte de peruanos aprobó el golpe de Estado. De acuerdo con una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado —hoy Ipsos Perú—, 80 % de peruanos estaba a favor de la disolución del Congreso y 81 % aprobaba el cese de la Corte

Suprema. Fue la única vez que la empresa encuestadora publicó un deslinde con los resultados, pues estaba en contra de la medida.

Sin embargo, otra encuesta realizada por la mencionada empresa indicaba que si Fujimori no retornaba al régimen constitucional la desaprobación pasaría a ser de 71 %.

¿Por qué existió este consenso a favor del golpe de Estado? La hipótesis más plausible la tiene la politóloga estadounidense Jo–Marie Burt. A su criterio, el factor fundamental no reside tanto en lo que algunos podrían caracterizar como la histórica tradición autoritaria peruana, sino más bien en la crisis de autoridad que se generó con el conflicto armado interno. El Estado peruano fue visto como incapaz, los políticos como ineficientes y corruptos y, en general, la sociedad peruana optó por el orden y la eficacia a cualquier costo. Estos fueron los valores que se instalaron a fines de la década de los ochenta, permanecieron durante la década de los noventa en un sector que apoyó a Fujimori y hoy aparece por temporadas en distintos sectores de la ciudadanía.

Para legitimarse, Fujimori echaba mano de diversas manifestaciones públicas. Miles en las calles vitoreaban al mandatario. Varios eran espontáneos. Otros no lo eran tanto. El 8 de abril, hizo su primera aparición con gremios empresariales. El presidente de la Asociación de Exportadores, Eduardo McBride, había convocado a una reunión para amparar al golpista. Fujimori dijo como frase saltante de su discurso: «Hay que buscar otro nombre para bautizar al sistema que hemos eliminado. Le llamamos la coimacracia». Los empresarios aplaudieron entre risas. Fujimori también dijo: «Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza: Chino, sigue adelante, no retrocedas. Juicio a los corruptos». Había llegado el Pinochet que varios de los dirigentes empresariales querían para el Perú. De hecho, eso le dijo un dirigente empresarial al politólogo y experto en grupos económicos, Francisco Durand, en 1994.

Un día antes, la CONFIEP emitió un comunicado oficial. Si bien «rechazaba un acto de gobierno que vulnera la Constitución» —ni siquiera se atrevió a llamarlo golpe de Estado—, acto seguido compró por entero la justificación dada por Fujimori para el legicidio.

El pronunciamiento indica que los empresarios no dejarían de trabajar, priorizando los intereses por el Perú. Al final, pedía a «los países amigos y a los organismos internacionales» que no cesen su ayuda económica. Según declaró Alfredo Tello, gerente de CONFIEP, a Durand, «con el golpe, le dimos a Fujimori apoyo masivo a través de un comunicado publicado en la prensa manifestando nuestra posición».

La mayor demostración de masas hecha por Fujimori se produjo el 20 de abril de 1992 en la Plaza San Martín, lugar de grandes concentraciones políticas durante el último siglo. Convocó a un mitin con aproximadamente 20 000 personas. Luego de la animación de cómicos y músicos de diversos géneros —algo constante en su periodo de gobierno—, Fujimori prometió que el Congreso reduciría su tamaño y que los nuevos parlamentarios ganarían sueldo mínimo. En un país donde los congresistas son percibidos como autoridades que no hacen mucho por las necesidades concretas de las personas, la perorata fujimorista fue aclamada por la multitud.

El gabinete que Fujimori armó después del golpe estuvo encabezado por Óscar de la Puente Raygada, abogado y compañero de promoción escolar de Fujimori en el colegio Alfonso Ugarte. Todos los ministros del gabinete de de los Heros, salvo él y González, decidieron quedarse en sus puestos. Pero el equipo no estaba exento de pugnas internas.

Carlos Boloña consideraba que el programa económico estaba en peligro, al mismo tiempo que era apoyado por los empresarios. Luego de un viaje a Estados Unidos, creía que la comunidad internacional no respaldaría al Perú. Y, además, tenía la oposición interna de Blacker Miller y del ministro de Industrias, el empresario peruano de descendencia china Víctor Joy Way. Luego de presentar una carta de renuncia el 20 de abril de 1992, sustentando la inviabilidad de su programa ante el posible aislamiento internacional provocado por el golpe, Boloña negoció con Fujimori: o se iban los ministros en su contra o se marchaba él. El titular de Economía y Finanzas ganó la partida: de la Puente Raygada asumió la Cancillería y el expresidente de CONFIEP, Jorge Camet,

reemplazaba a Joy Way. Este último relevo sería una señal del apoyo empresarial al golpe[64].

La resistencia opositora, como ya hemos visto, comenzó el mismo 5 de abril. Esa noche, Fernando Olivera se dirigió al Congreso, aunque no pudo ingresar debido al resguardo militar. Los miembros del movimiento Libertad firmaron un comunicado en contra del golpe, al igual que el APRA y los partidos de izquierda.

Al día siguiente, Roberto Ramírez del Villar, desde su domicilio, protestaba por la medida. Un intento de concentración de diputados en la puerta de la casa del presidente de la disuelta Cámara de Diputados, ubicada en San Isidro, fue rápidamente acallado entre chorros de agua y bombas lacrimógenas. Mientras tanto, Fujimori le decía a la prensa internacional que «no era un golpe tradicional ni militar».

Ese mismo día, cerca del anochecer, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima y senador disuelto, Raúl Ferrero Costa, procuró abrir las puertas de la institución para que se reunieran los parlamentarios legítimos. Hubo forcejeos con la Policía y, nuevamente, se repitieron las escenas de la mañana. Con el veterano líder aprista Armando Villanueva pasó lo mismo.

Para el 7 de abril, los parlamentarios pudieron sesionar inicialmente en la iglesia Virgen del Pilar. Decidieron esperar el regreso del primer vicepresidente, Máximo San Román, quien estaba fuera del país.

En forma clandestina, en la casa de Lourdes Flores Nano, varios de los parlamentarios disueltos se reunieron el 10 de abril, de manera que Carlos García y García, segundo vicepresidente, asumiera la Presidencia del Perú, en tanto San Román estaba fuera del país. Aunque la mayoría de los peruanos y los gobiernos extranjeros reconocían que Fujimori tenía el mando, el gesto era una forma de presión internacional. Sin embargo, el vicepresidente evangélico se asiló al día siguiente en la embajada de Argentina en Lima.

El 13 de abril, se celebró una reunión especial de los ministros de relaciones exteriores de los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos. Acudieron representantes de la oposición

como Javier Diez Canseco, Pedro Cateriano, Ántero Flores–Aráoz, entre otros. Blacker Miller asistió por el gobierno. La OEA decidió condenar la interrupción del orden constitucional, exigió al gobierno la recuperación del orden democrático y el inicio del diálogo con la oposición. Se decidió enviar a una comitiva de alto nivel a Lima para facilitar el intercambio entre Fujimori y sus opositores democráticos. Pero en ningún momento se reconoció la existencia de dos gobiernos paralelos o de un presidente distinto a Fujimori.

Para Semana Santa, llegó San Román a Lima. El 26 de abril, en la sede del Colegio de Abogados, juró ante los senadores y diputados como presidente constitucional. Fernando Belaúnde le dio una banda presidencial. En los días siguientes, San Román tendría luces y sombras en su accionar: pidió a los militares que desconocieran a un gobierno usurpador, pero estos se negaron. La única excepción fue el mayor PNP Juan Briceño, quien desde España envió una carta poniéndose a disposición de los congresistas, lo que le valió su baja de la institución[65]. San Román también convocó a manifestaciones que fueron bastante concurridas, aunque sin despertar grandes pasiones. Y, para inicios de mayo, los medios que habían respaldado el golpe de Estado comenzaron a ridiculizarlo.

En paralelo, Hernando de Soto fue de nuevo convocado por Fujimori. El enlace fue Carlos Boloña, preocupado por la posibilidad de que su plan de reinserción internacional se desvanezca por la ruptura del orden constitucional. El 13 de abril ya se había reunido con él para señalarle que la comunidad internacional rechazaba el golpe. En sus versiones, dadas durante varios años, este sería el diálogo:

—Este es un éxito nacional.

—Sí, pero es un fracaso internacional. Su legitimidad como presidente depende de otros países.

—¿Cómo salimos de esto?

Allí comenzó a urdirse un plan inicial: de Soto sería comisionado por Fujimori para viajar a las principales capitales del mundo con el fin de convencer a los funcionarios internacionales de que la medida

tomada por Fujimori era excepcional y que se restablecería la democracia.

Cuando la OEA anunció sus medidas, Fujimori estableció un cronograma, muy parecido al que le indicó a Bush. Sin embargo, Estados Unidos consideró que el plazo era muy largo. Aronson volvió a Lima en los primeros días de mayo. Allí le reiteró que el lapso de retorno a la democracia era extenso y le dejó un consejo: convocar a una asamblea constituyente.

La misión de la OEA estuvo en Lima entre el 3 y el 5 de mayo. La oposición exigió que, a cambio de la asamblea constituyente, Fujimori renunciara. El gobernante de facto insistió en el cronograma inicial. Desde Tokio fue enviado el diplomático Terusuke Terada, quien le indicó a Fujimori que, si no se normalizaba la situación democrática peruana, no solo se interrumpiría la ayuda económica, sino que probablemente vendrían sanciones al Perú. Fujimori acusó recibo del mensaje y le indicó a Terada que estaba evaluando otras opciones.

Fujimori viajó a Nassau, capital de Bahamas, donde se desarrollaría la asamblea de la OEA. El 18 de mayo, inició un mensaje en el que fustigaba las reglas de juego existentes, así como a la partidocracia. Pero esa parte del discurso, supuestamente escrito por de Soto, no era del todo original.

En 1996, el politólogo Charles Kenney, experto en América Latina, indicó en un artículo académico que varias de las frases de esa parte del discurso eran un plagio de una disertación doctoral del también politólogo Michael Coppedge sobre Venezuela. Coppedge había hecho algunas consultorías para el Instituto Libertad y Democracia. Según le indicó al periodista Gustavo Gorriti en 2011, de Soto no utilizó los insumos que le dio, sino su tesis doctoral. «Me siento traicionado por la forma en que se lo mal utilizó», refirió el académico estadounidense[66].

Más allá de la sección plagiada, Fujimori llegó con una propuesta concreta: un Congreso Constituyente Democrático que sería elegido en 1992, para elaborar un nuevo texto fundamental que debería ser ratificado mediante referéndum. Este CCD haría las veces de parlamento regular hasta 1995 y tendría una sola cámara. La

comunidad internacional terminó aceptando la salida. La oposición se dividió: el APRA, buena parte de las izquierdas y Acción Popular decidieron no participar en el CCD. Mientras que el Frente Independiente Moralizador, un sector moderado de las izquierdas, el Partido Popular Cristiano, Solidaridad y Democracia y otros pequeños grupos decidieron intervenir.

Este es el motivo que explica por qué Fujimori no pudo prolongar un gobierno de facto abierto más allá de diciembre de 1992. Pero también las razones por las que, a la larga, sería el fundador latinoamericano de un régimen híbrido que no podría calificarse como democrático. Un tipo de gobierno al que Steven Levitsky y Lucan Way bautizarían como autoritarismo competitivo.

---

56 El dato sobre la entrevista brindada por de los Heros aparece en Conaghan (2005: 27).

57 El Plan Verde es reseñado por Rospigliosi (2000b: 73-86). Murakami considera que Fujimori no había adoptado el Plan Verde (2018: 299-300). Sin embargo, la plantilla central es muy parecida a lo que vino después del 5 de abril de 1992.

58 Los preparativos para el golpe de Estado se encuentran en los libros de Murakami (2018: 298-300), Bowen (2000: 113-115) y Rospigliosi (2000b: 87-89). Vivas (2008: 526) menciona el anuncio del golpe a los dueños de los canales de televisión. Una versión complementaria de la reunión con los *broadcasters* aparece en *Genaro,* de Coya (2011), libro sobre Genaro Delgado Parker, polémico pionero de la televisión y la telefonía celular en el Perú. La reacción de de los Heros es reseñada por él mismo en la ya mencionada entrevista de Ana Núñez para *Somos,* así como en Cateriano (2017: 307-310). Otros detalles aparecen en la sentencia contra Fujimori por violaciones a los derechos humanos.

59 La protesta de Beingolea es recordada por el autor y me fue confirmada por él mismo años más tarde. Lo ocurrido en Antena 1 aparece al inicio del documental *Su nombre es Fujimori,* una cinta crítica contra el fujimorismo dirigida por el cineasta Fernando Vílchez, que puede verse en internet (https://vimeo.com/168694171). El dato sobre Radio Santa Rosa lo han contado Rosa María Palacios y Abel Ángeles, conductora y productor periodístico, respectivamente, de la estación de la Orden de Predicadores, en el programa *A Pensar Más,* emitido el 5 de abril de 2019, donde estuve como invitado: https://youtu.be/_tngyRL304g.

60 Sobre la huida y posterior asilo de Alan García, nos basamos en sus *Metamemorias* (2019: 285-286), así como en Rospigliosi (2000b: 92-93), Bowen (2000: 117) y Cateriano (2017: 310, 315-317).

61 El arresto de Gorriti es relatado por él mismo en una crónica publicada días más tarde en *El País* (http://elpais.com/diario/1992/04/08/internacional/702684001_850215.html). También hemos consultado el video de la conferencia de prensa que brindó una vez que

fue liberado (https://youtu.be/PxHRnr2yCEU) y el diálogo con Fujimori luego de su arresto (https://youtu.be/DDk25NInixs). Asimismo, recurrimos a la sentencia contra el exmandatario por este caso.

62 La intervención en el Poder Judicial y el Ministerio Público inmediatamente después del golpe de Estado se encuentra en el tomo III del *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (262-264), así como en los textos de de Belaúnde, «Justicia, legalidad y reforma judicial en el Perú (1990-1997)», incluido en *El Perú de Fujimori* (1999: 311), y de Dargent (2006: 145). También se consultó a Pease (2003: 287-290, 303-304).

63 La reacción internacional al golpe es descrita en Bowen (2000: 118-119), McClintock y Vallas (2005: 236-241) y Murakami (2018: 308-317). Este último proporciona datos de primera mano sobre la reacción japonesa, pues trabajaba en la embajada nipona en Lima. La columna de Vargas Llosa, «Regreso a la barbarie», publicada el 14 de abril de 1992, puede consultarse en https://elpais.com/diario/1992/04/14/opinion/703202409_850215.html. Una nota de RPP Noticias hizo público el diálogo entre George H. W. Bush y Fujimori post golpe, proporcionado por el Instituto Libertad y Democracia, en 2019: https://rpp.pe/politica/historia/la-conversacion-entre-fujimori-y-george-h-w-bush-tras-el-5-de-abril-noticia-1042719.

64 Las encuestas de Ipsos Perú sobre el 5 de abril aparecen en el libro de su presidente, Alfredo Torres (2010: 100-102). La explicación a sus datos la recogimos de Burt (2011: 284-285, 328-332). Un buen recuento de lo que pasó en el Perú post golpe se encuentra en un informe de Marco Sifuentes para el programa *La Ventana Indiscreta,* que puede verse en: https://www.dailymotion.com/video/x1mcv9. Otros detalles aparecen en Bowen (2000: 118-119), Cateriano (2017: 311-313) y Murakami (2018: 305). En estos tres últimos también se relata el camino hacia la salida anunciada por Fujimori en Nassau. Asimismo, revisamos el documental de Vílchez. La renuncia de Boloña es detallada por él mismo (1993: 98-100). Su negociación para quedarse la documentan Bowen (2000: 122-123) y Murakami (2018: 317). El comunicado de CONFIEP está en Durand (2003: 415-416). La cita de Tello pertenece al mismo texto (380).

65 El gesto de Briceño lo cuenta Gorriti en una columna de *Caretas* en marzo de 2013 (https://www.idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-120/).

66 El plagio en el discurso de Bahamas preparado por de Soto para Fujimori aparece relatado en dos informes de Gustavo Gorriti para *IDL–Reporteros,* publicados en 2011: https://idl-reporteros.pe/calco-y-copia/ y https://idl-reporteros.pe/memoria-de-plagios/.

EL AÑO QUE VIVIMOS EN PELIGRO

(Mayo – Diciembre, 1992)

Para una organización tan fundamentalista como Sendero Luminoso, las cárceles se convirtieron en un reducto más de su conflicto contra el Estado peruano. Su idea era convertir a las prisiones en que se encarcelaban a los investigados o sentenciados por terrorismo en zonas liberadas, donde ellos mandaban, hacían política y provocaban al aparato estatal. Para ello, contaban con que muchos establecimientos penitenciarios en el Perú suelen terminar siendo tierra de nadie, y también con que para la mayoría de los ciudadanos, una celda es un lugar en el que se alojan a personas de las que no se quiere saber más.

Sendero Luminoso ya había demostrado que podía hacer acciones de fuerza en las cárceles para provocar una reacción descontrolada del Estado. En 1986, tres motines simultáneos en establecimientos penales de Lima y Callao terminaron en ejecuciones extrajudiciales en Lurigancho —por parte de miembros de la Guardia Republicana— y El Frontón —por integrantes de la Marina, con la salvedad de que hubo un combate previo durante horas—. Las acusaciones por estos hechos persiguieron a Alan García hasta el final de sus días.

En el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, habían sido encerrados hombres y mujeres que militaban o simpatizaban con Sendero Luminoso. Controlaban claramente una zona de la cárcel —los pabellones 1A y 4B—, a tal punto que, en 1991 y 1992, periodistas peruanos y británicos habían podido captar imágenes de operetas en las que ensalzaban a Guzmán, copiando himnos que los senderistas habían captado de la Revolución Cultural maoísta.

En las primeras semanas de su gobierno de facto, Fujimori comenzó a crear o modificar normas de lucha contra la subversión. En el caso específico de los penales, decidió que fuera la Policía y no el Instituto Nacional Penitenciario —una entidad civil dependiente del Ministerio de Justicia— la que custodiaría los establecimientos penales. A un mes del golpe de Estado, el gobierno decidió trasladar

a las mujeres que se encontraban en el pabellón 1A de Castro Castro a la cárcel de mujeres ubicada en Chorrillos.

A las 4.00 a. m. del 6 de mayo de 1992, se inició el operativo. Los agentes policiales entraron con armas de fuego y bombas lacrimógenas. Entrada la mañana, los presos del pabellón 4B comenzaron a pasar por una entrada subterránea a la zona 1A, para enfrentarse a los policías. Las reclusas que iban a ser trasladadas hacían el camino inverso. Por la tarde, habían logrado capturar a algunas detenidas y llevarlas al penal de Chorrillos.

Fujimori estaba en el Cuartel General del Ejército y desde allí tomaba las decisiones. Las órdenes para el segundo día de operativo fueron claras: ninguna presencia de organismos de defensa de derechos humanos, corte de luz y agua y, además, se intensificarían los ataques con armas de fuego. Al final del día, ya había fallecidos. El 8 de mayo, los ataques continuaron, incluyendo disparos desde helicópteros. Un grupo de heridos pidió ser trasladado a un establecimiento de salud, lo que fue negado.

Para las 6.00 p. m. del 9 de mayo, la resistencia senderista terminó. Los presos señalaron que iban a salir sin armas, aunque los más veteranos suponían que podían desatarse ejecuciones extrajudiciales. Apenas salieron, los miembros del Ejército dispararon. Posteriormente, algunos senderistas fueron separados de sus compañeros y ejecutados extrajudicialmente. Entre ellos, varios altos mandos que habían sido capturados por el GEIN, como Deodoro Juárez, Yovanka Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño o Janet Talavera. En total, fallecieron 41 senderistas y un policía.

Según el testimonio brindado por el exjefe operativo del destacamento Colina Santiago Martín Rivas, fueron miembros de este escuadrón del Ejército los encargados de hacer las ejecuciones extrajudiciales. El plan, según Martín Rivas, se aprobó en el SIN y fue puesto en conocimiento de Fujimori para que brinde su autorización. En su versión, se decidió no ejecutar a Osmán Morote Barrionuevo, líder senderista histórico, para dar un mensaje a Abimael Guzmán: ambos terroristas estaban peleados. Solo se le hirió en una nalga. Martín confesó esta participación al periodista Umberto Jara.

Cuando terminó todo, los presos sobrevivientes fueron obligados a estar echados. Alberto Fujimori paseó por sus costados. Aunque la escena era ciertamente humillante, la mayoría de los peruanos la respaldó. Eran presos y eran senderistas, lo que hacía que, en la mente de muchos, no tuvieran derecho alguno[67].

Luego de ser liberado por la Policía el 7 de abril de 1992, Gustavo Gorriti continuó haciendo su trabajo. Buscaba demostrar las conexiones entre Montesinos y sus tratos con narcotraficantes. En mayo, viajó a Estados Unidos para testificar ante una audiencia del Congreso sobre el golpe de Estado cometido por Fujimori. Y continuó publicando: en Caretas, en artículos para El País de España, y en diarios estadounidenses como Los Angeles Times o The New York Times.

Para fines de mayo, Gorriti recibió una llamada a su domicilio. El mensaje fue claro:

—Vas a morir, hijo de puta.

Frente a ello, la familia de Gorriti tomó previsiones. Su esposa lo convenció de continuar con su trabajo. Su suegra se llevó a su casa varios de sus archivos más sensibles. El periodista contrató a dos miembros de la Marina en situación de retiro para custodiar a su familia y tomó la decisión de pelear si es que pretendían volver a tomarlo prisionero.

En junio, cuando arreciaba la ola de atentados senderistas en Lima, Gorriti declaraba que solo un gobierno honesto y democrático podría parar la violencia. Entonces llegó otra llamada, que fue atendida por el personal de servicio:

—Mira la televisión, perra. Ese hijo de puta de Gorriti no llegará a casa. Lo mataremos y luego haremos lo mismo con su esposa y sus hijas.

Para julio, las cosas se complicaron. Ocurrió el atentado de Sendero Luminoso en Tarata y los asesinatos de La Cantuta. A Gorriti dejaron de llamarlo como fuente para informes en Perú y, con la situación de violencia, pensó que las amenazas en su contra no demorarían mucho en concretarse. Una entidad internacional le ofreció una beca a tiempo completo en Washington. Por su seguridad y la de su familia, el periodista decidió irse del país[68].

Permanecería en Estados Unidos y luego en Panamá durante buena parte de esa década.

El 25 de abril de 1992, se nombraron a varios vocales de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos, la abogada Blanca Nélida Colán Maguiño, quien se había desempeñado como fiscal y jueza en Lima y Callao. En esta última plaza, había conocido a fines de la década del setenta a un exoficial del Ejército Peruano que ejercía como abogado: Vladimiro Montesinos. Para ese entonces, gracias a una eficiente estructura de conexiones sociales —fiestas, partidos de fútbol, cumpleaños y almuerzos—, Montesinos había comenzado a establecer sus nexos al interior de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Hasta antes de entrar a las altas esferas judiciales y fiscales, Colán tenía fama de ser una magistrada inflexible en temas de corrupción, y no había tenido ninguna denuncia ante control interno. A tal punto que, según comentan en pasillos judiciales, la forma como Montesinos pudo acercarse a ella fue a través del regalo de una efigie religiosa. Colán, cada octubre, vestía hábito morado, emblema de la devoción al Señor de los Milagros.

Pero el paso de Colán por la Corte Suprema fue breve. El 3 de mayo de 1992, el gobierno la nombró fiscal suprema, con lo que la destinaba al Ministerio Público. Apenas veinte días más tarde, fue designada como fiscal de la Nación, el más alto cargo en la mencionada institución. Aunque los vínculos con Montesinos ya eran claros para ese momento, otros sugieren que fue Yoshiyama quien la recomendó para el cargo a Fujimori.

El 5 de junio de 1992, se creó la Comisión Evaluadora del Ministerio Público, presidida por Colán e integrada también por dos fiscales supremos provisionales. Tenía el mismo encargo que su par en el Poder Judicial. Sin embargo, para septiembre, varias de las funciones de evaluación de los fiscales estarían a cargo exclusivamente de la fiscal de la Nación.

El control del Ministerio Público había comenzado[69].

Frecuencia Latina emitió por primera vez su señal en las pantallas peruanas el 23 de enero de 1983. La empresa se formó en 1982, a partir de un conjunto de empresarios de origen judío. La idea original

del canal correspondió a Bernardo Batievski, quien había sido productor y director de cine en los años setenta. Para ello, convocó a otros empresarios de la colonia judía limeña, acotada en número de personas, pero importante en dinero y contactos. Se sumaron los hermanos Samuel y Mendel Winter, dueños de una fábrica de chocolates, así como Baruch Ivcher Bronstein, un ciudadano israelí dedicado al negocio de los colchones que se nacionalizaría peruano. Al cabo de un tiempo, Ivcher se convertiría en el inversionista principal.

El canal empatizaría con los sectores populares. Apostó por programas de entretenimiento de gusto masivo, a tal punto que su puntal humorístico, Las mil y una… de Carlos Álvarez, fue el primer espacio cómico que le dio cabida a un ignoto candidato llamado Alberto Fujimori, quien llegó con katana incluida al set de la televisora. Sus películas y series importadas desde el extranjero eran digeridas —a pesar de sus constantes repeticiones— por público de todos los sectores sociales. Era un canal en donde se podía ver desde cintas de Woody Allen y Bernardo Bertolucci a medianoche hasta la repetición ad nauseam de Despedida de soltero, una comedia pícara protagonizada por un bisoño Tom Hanks, convertida en filme de culto por adolescentes.

En términos informativos, Frecuencia Latina apostó por una línea que, sin abandonar el sensacionalismo aplicado a temas populares y policiales, era duro y sin concesiones frente al terrorismo. Contrapunto, el espacio periodístico dominical del canal, se encargaba de difundir noticias de los operativos policiales y militares contra Sendero Luminoso y el MRTA, así como de ensalzar a los comités de autodefensa.

Ya hemos dicho que los Winter fueron los más entusiastas en la reunión en la que Fujimori anunció a los dueños de los canales de televisión el golpe del 5 de abril de 1992. Ivcher estaba en Estados Unidos, recuperándose de un aparatoso accidente de tránsito en Israel. Sin embargo, una vez de retorno en Lima, no varió en nada la línea de apoyo al gobierno de facto. Esto hacía que el canal se convirtiera en posible blanco de los terroristas.

A las 11.00 a. m. del jueves 4 de junio de 1992, fue asaltado un camión marca Mitsubishi, que pertenecía a la Marina de Guerra del Perú, y servía para el transporte de alimentos y carga. El hecho recién fue denunciado doce horas más tarde.

A las 12.04 a. m. del viernes 5 de junio, ese mismo camión, con una mezcla de anfo y dinamita, fue arrojado por la avenida San Felipe para que estallara en la puerta de Frecuencia Latina. Antes de que el vehículo explosionara, se desató una balacera entre los terroristas y el personal de seguridad. Uno de los encargados de la vigilancia, Javier Requis, quien había servido antes en la Marina, hizo disparos al aire para que el personal se refugiara y para que los periodistas que aún se encontraban en el canal se guarecieran. Requis murió al momento de la explosión. Otro agente de seguridad, Teddy Hidalgo, también falleció. Lo mismo ocurrió con el periodista Alejandro Pérez.

Aún se estaba transmitiendo El Especial de 90 Segundos, el noticiero estelar de la estación de televisión. El locutor Mario Duarte sintió lo que parecía ser un terremoto. Posteriormente, vio a sus compañeros en el switcher heridos. Comenzó a caer polvo. El local se hallaba semiderruido. Los autos estaban con las lunas destrozadas y varios tenían los fierros retorcidos. Ricardo Muller, director periodístico de la televisora, señaló: «Esto sobrepasa todos los límites. Pero no nos van a vencer».

Al día siguiente, el canal transmitió con equipos de emergencia. Y continuó con su misma línea editorial. Aunque años más tarde, Ivcher comentó la posibilidad de que el atentado pudiera haber sido obra del Servicio de Inteligencia Nacional, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la autoría había sido de Sendero Luminoso[70].

Cuando el calendario marcó el inicio de 1992, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru estaba en una fuerte crisis. La agrupación terrorista había sido forjada sobre la fusión de dos pequeños partidos. Para 1990, una de las facciones del MRTA consideraba que era necesario dejar las armas y optar por una salida política, dado que el contexto internacional empujaba hacia un repliegue de la izquierda favorable a la lucha armada. La otra

facción, encabezada por Víctor Polay Campos, señalaba que ese repliegue solo sería posible si Fujimori reconocía a la agrupación como «fuerza beligerante», para lo cual era necesario continuar con la violencia. Esta última ganó posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional.

En junio de 1991, Orestes Dávila y Andrés Sosa Chanamé formaron una escisión del MRTA denominada Fuerzas Guerrilleras Populares. Ambos fueron asesinados en agosto de 1991 y enero de 1992, respectivamente. Los dos habían sido críticos del liderazgo de Polay, quien resolvió zanjar cualquier disidencia por la fuerza. La crisis de la agrupación era total. Desde la cárcel, Alberto Gálvez Olaechea presentó su renuncia a la agrupación. También se marchó Sistero García, otro de los mandos militares. Antes de que pudiera ser víctima de los ajusticiamientos internos, decidió acogerse a una novedosa norma: la Ley de Arrepentimiento. Este fue un dispositivo legal que apuntaba a que miembros de las organizaciones subversivas pudieran dejar las armas y no ser sancionados, a cambio de entregar información que permitiera la desarticulación de los terroristas.

Pocos días después del golpe de Estado, el 9 de abril de 1992, el BREDET logró la captura de Peter Cárdenas Schulte, quien dirigía la célula del MRTA en Lima, encargada de los secuestros contra empresarios. Cuando lo presentaron en la DINCOTE, apareció vociferando ante cámaras.

Dos meses después, en un café de San Borja, fue capturado Víctor Polay Campos, junto a un lugarteniente. En su presentación, profirió algunas arengas, pero era acallado por los gritos de los policías. En una declaración al paso, captada por una periodista de Frecuencia Latina, Polay dijo: «No me arrepiento de nada. Ninguna cadena perpetua va a parar la lucha del pueblo peruano».

Con esta captura, muchos pensaron que el MRTA había terminado[71].

Tres semanas después del atentado contra Frecuencia Latina, los miembros del GEIN decidieron, luego de dos años de investigación, capturar a Luis Arana Franco. Así, el 20 de junio de 1992, Arana y su esposa fueron detenidos en Pueblo Libre.

Durante los días siguientes, los miembros del Grupo interrogaron al contador de Sendero Luminoso, sin emplear los métodos que otros agentes policiales habían utilizado en el pasado, como la tortura. Más bien, decidieron quebrar emocionalmente a Arana.

Se emplearon dos líneas. De un lado, ahondar en el futuro de su hijo, quien tenía un año y podía quedar con sus dos padres en la cárcel. Por otro lado, remarcar que había sido identificado como una de las personas que asistió al velorio de Augusta La Torre y, por tanto, pertenecía al círculo más íntimo de la agrupación subversiva.

Arana decidió colaborar. Contó cómo, sin tener simpatía ideológica alguna, se convirtió en el cajero de la Academia César Vallejo, utilizada como fachada para obtener recursos económicos de la dirección senderista. Pero la información más valiosa fue la reunión que había tenido con Abimael Guzmán el 4 de abril de 1992, un día antes del golpe. Arana relató, con lujo de detalles, cómo había llegado a una casa en Miraflores. Los policías pudieron corroborar dos datos clave: la casa había sido alquilada por un arquitecto egresado de la Universidad Ricardo Palma, Carlos Incháustegui, y su pareja. Y que luego ambos se habían trasladado a vivir a una vivienda en Surquillo. Todas las pistas comenzaron a apuntar a Calle 1 (hoy Varsovia) 459, urbanización Los Sauces.

Arana y su esposa fueron las primeras personas que se acogieron a los beneficios de la Ley de Arrepentimiento. Su paradero actual es desconocido.

En su afán de seguir golpeando a la ciudad de Lima, la dirección central de Sendero Luminoso decidió realizar un atentado más duro. Ya habían destruido varias agencias del Banco de Crédito, la entidad bancaria más importante del país. Pero esta vez instalarían un coche bomba en la sede de Miraflores, ubicada en el corazón del distrito.

El 16 de julio de 1992, miembros del Comité Zonal Metropolitano de Sendero Luminoso cometieron atentados y ataques en Villa María del Triunfo y La Victoria. Su intención era distraer la atención de la Policía. A las cuatro de la tarde, prepararon el vehículo para la explosión. Tres horas más tarde, llegaría el segundo vehículo, que les serviría para la huida.

Los terroristas no pudieron estacionarse en el Banco de Crédito, así que dejaron el auto en la cuadra 2 de la calle Tarata, una pequeña vía en la que había varios edificios residenciales y pequeños negocios.

A las 9.00 p. m., se escuchó una gran explosión en buena parte de Lima.

Minutos más tarde, lo que se veía era incendios, cadáveres en el piso de los departamentos o en la calle, heridos que buscaban salir de los escombros. Dolor, solidaridad, muerte, indignación.

Ese día, murieron veinticinco personas, cinco quedaron en calidad de desaparecidas y hubo más de 150 heridos. Las pérdidas materiales alcanzaron más de tres millones de dólares. También ese día, muchos comenzaron a saber lo que estaba pasando en el Perú desde hacía doce años.

Para los limeños, la violencia ocupaba su vida cotidiana en 1992. Aquel año, las averías generadas por el derrumbe de torres de alta tensión llevaron a que Electrolima hiciera un programa general de racionamiento de energía eléctrica en la ciudad, cuyo cronograma era difundido por los medios de comunicación.

De este modo, continuó la costumbre de estudiar, trabajar y hacer labores cotidianas a la luz de las velas, como ya venía ocurriendo desde hacía varios años. Los sectores más pudientes pudieron adquirir grupos electrógenos para continuar con su vida habitual.

En la periferia de la ciudad, Sendero Luminoso buscaba captar a los sectores más radicalizados. De acuerdo con un estudio del antropólogo Dynnik Asencios, muchos jóvenes limeños se adhirieron a la agrupación por dos factores clave: la búsqueda de hacer algo a favor de la justicia social, y de un proyecto de vida individual que les permitiera alcanzar cierta identidad. Sendero Luminoso les ofrecía respuestas sencillas y fundamentalistas. Pero también los llevaría, en muchos casos, a la cárcel, a la muerte o al estigma social.

Cada vez que ocurría un apagón por la noche, se encendían los radios a pilas en la ciudad. La suave voz de Miguel Humberto Aguirre, locutor chileno que había huido de su país luego del golpe de Augusto Pinochet, tranquilizaba a las personas que llamaban a Radio Programas del Perú, la emisora más importante del país.

Cientos de limeños telefoneaban a la estación para reportar si en su vivienda había o no luz o preocupados porque un familiar no llegaba a casa. La sobria locución de Aguirre lograba tranquilizar a las personas hasta que llegaba el fluido eléctrico a sus viviendas o sus negocios[72].

Un día antes de las Fiestas Patrias de 1992, el empresario Samuel Dyer Ampudia llegó al aeropuerto Jorge Chávez, pues se disponía a viajar a Estados Unidos junto a uno de sus hijos por vacaciones. Sin embargo, nunca llegó a abordar el vuelo. En el control de Migraciones, le dijeron que existía una orden de captura en su contra. Dyer no tenía requisitoria ni impedimento de salida del país. Tampoco se le mostró una orden de detención en su contra.

Luego de una hora, arribó al aeropuerto Carlos Domínguez Solís, director de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional, quien había recibido una orden telefónica de Vladimiro Montesinos para llevar a Dyer al Servicio de Inteligencia del Ejército. Según Domínguez, el asesor presidencial le indicó que el empresario estaba involucrado supuestamente en narcotráfico y tráfico de armas para organizaciones terroristas.

El empresario fue llevado al SIE con engaños y bajo los efectos de un narcótico. Una vez que arribaron al Pentagonito, Domínguez entregó a Dyer a Alberto Pinto, cabeza de la institución.

Dyer fue golpeado y, posteriormente, se negó a recibir alimentos. Todo ello generó un deterioro en su salud. Días más tarde, Pinto buscó involucrarlo con Alan García y con presuntas vinculaciones con Sendero Luminoso, pero negó ambas acusaciones. Cuando Pinto accedió a que no sea llevado a una celda, el empresario finalmente aceptó comer. Asimismo, también pudo quedarse con su teléfono celular y hacer llamadas a Antonio Ketín Vidal y Gustavo Mohme Llona, para indicarles su situación.

Vidal asumió la investigación contra Dyer por supuestos cargos de colaboración con la subversión, a pesar de lo cual Pinto se negó a entregar al detenido hasta el 5 de agosto de 1992. Dos días antes, la DINCOTE había establecido que el empresario no tenía ningún vínculo con el terrorismo. El detenido finalmente pudo fugar.

En septiembre de 1992, Fujimori acusó a Dyer de vínculos con el narcotráfico y de pagar un millón de soles para salir en libertad. Él le mandó una carta desmintiendo dicha versión. Se desató contra el empresario una persecución judicial, esta vez, por supuestos cargos de evasión tributaria. Tuvieron que pasar varios años para que pueda acabar con los cargos en su contra.

Años más tarde, Domínguez y Pinto reconocieron que la orden la había brindado Montesinos. El segundo de los nombrados aseguró que este le indicó que la detención de Dyer había sido un mandato del propio Fujimori. El empresario dijo haber visto a Fujimori pasar por los calabozos del SIE junto a una comitiva, por lo que gritó para llamar su atención, sin que le hicieran caso[73].

Mientras el terror era moneda corriente para los limeños por esos años, Fujimori buscaba ultimar las condiciones de la elección del Congreso Constituyente Democrático, que fue como bautizó a su propuesta de asamblea constituyente. El 1 de junio de 1992, hizo anuncios importantes: el CCD estaría compuesto por ochenta congresistas, la Constitución que sería el producto final sería ratificada mediante referéndum y las elecciones para elegir a esta asamblea se realizarían el domingo 18 de octubre.

Sin embargo, Fujimori tuvo que ceder a los pedidos de la Iglesia Católica, dado que el día previsto para los comicios, tradicionalmente, es el mismo en que sale la procesión del Señor de los Milagros en Lima. Por tanto, la fecha de las elecciones sería el 22 de noviembre.

Desde la oposición, se criticó el cronograma unilateral, así como las menciones a las funciones del CCD, sin que ello hubiera sido materia del diálogo facilitado por la OEA. Recién a fines de junio se inició el diálogo, que Fujimori delegó a su presidente del Consejo de Ministros.

Las conversaciones se entramparon debido al sistema de elección: Fujimori pensaba que era mejor un sistema de elección por mayoría, mediante el cual el país se dividiría en tantas circunscripciones como congresistas sean elegidos. Así, el parlamentario electo sería quien obtuviera la más alta votación. Para el mandatario, el sistema acercaría a los electores, pero también

reduciría las opciones de la oposición. Como era previsible, la oposición buscó que se mantuviera el distrito electoral único, al mismo tiempo que bregaba por la no postergación de las elecciones municipales.

Pero Fujimori quería imponer su cronograma. En el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, el gobernante dijo:

—Por otro lado, para asegurar la transparencia de los actos en la decisión que conduzca a la aprobación de las enmiendas constitucionales surgidas de las propuestas del Diálogo Nacional para la Paz y el Desarrollo, o de las determinaciones propias del Congreso Constituyente Democrático, el gobierno ha propuesto que los miembros que resulten electos no podrán participar en las dos elecciones generales subsiguientes. Teniendo en cuenta que las elecciones para Representantes del Congreso Constituyente Democrático se efectuarán el 22 de noviembre próximo y habiéndose previsto su instalación para el 2 de enero de 1993, hemos considerado conveniente que el proceso electoral municipal se lleve a cabo el primer domingo de febrero del año venidero.

Ante las protestas de la oposición, Fujimori evitó los cambios para el sistema electoral. Pero, a la larga, el diálogo no fructificó. El gobierno promulgó un Decreto Ley para las elecciones del Congreso Constituyente Democrático, donde se indicaba que el parlamento continuaría como Poder Legislativo luego de la promulgación de la Constitución, hasta el 28 de julio de 1995. Para la comunidad internacional, las reglas eran claras. El régimen había ganado otra batalla[74].

Pocos días antes de Fiestas Patrias, el GEIN decidió hacer un seguimiento mayor a la casa de Surquillo, donde vivían Carlos Incháustegui y su pareja. Se presumía que allí estaba Abimael Guzmán. El Grupo consiguió una habitación en un inmueble de un miembro de la Policía Nacional, que tenía vista hacia la vivienda, que era materia de vigilancia.

El Grupo se percató de que, algunas tardes, niñas y madres se acercaban a la casa, pues allí funcionaba una academia de baile. También comenzó a seguir a pie a Incháustegui y notó que compraba más pan de lo necesario para una pareja que vivía sola. A

fines de agosto, comenzó a examinar la basura. Si bien el arquitecto y su novia habían tomado algunas precauciones, el Grupo halló basura ligada a medicinas para el agotamiento que se condecían con males achacados a una persona mayor, así como algún documento senderista.

En los primeros días de septiembre de 1992, Marco Miyashiro, jefe del GEIN, observó con detenimiento una foto de la pareja de Incháustegui. Llegó a la conclusión de que era Maritza Garrido Lecca, una bailarina a la que él había investigado en el pasado por sus posibles nexos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Una anterior pareja de la bailarina, Rafael Dávila, había tenido nexos con la organización. ¿Cómo llegó ella, exsimpatizante del MRTA, a una organización con la que había enfrentamientos armados? La exmonja Nelly Evans, capturada en el operativo de enero de 1991 donde se encontró el video de Zorba el Griego, era su tía[75]. Ambas cumplían la misma función: custodiar a Abimael.

Las pistas que recogieron los siguientes días los llevaban a una conclusión: allí estaba Guzmán. Era momento de golpear.

Mientras que en las redacciones periodísticas la noticia principal era una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el GEIN preparaba el operativo final. Los planes eran claros: intervenir en una vivienda de Balconcillo (La Victoria) donde estaba un enlace de Arana Franco, luego ocuparse de una vivienda en La Molina y, finalmente, intervenir lo que ya llamaban «El Castillo».

Cuando Universitario ya iba por delante en el marcador, gracias a un gol del chileno Juan Carlos Letelier que enmudeció el estadio de su tradicional rival, los policías detuvieron a cuatro senderistas en la casa de Balconcillo, donde también encontraron armas. Los terroristas estaban viendo el clásico. Minutos después del partido, detuvieron a Zenón Vásquez Cárdenas, quien era el coordinador nacional de Sendero Luminoso.

Mientras tanto, llegó al GEIN un enlace de la Central de Inteligencia Americana, entidad que apoyaba logísticamente al Grupo. También se acercó el director de la DINCOTE, Antonio Ketín Vidal, quien no conocía el operativo y quería saber quién lo había

autorizado. Jiménez asumió la responsabilidad. Entre tanto, Miyashiro y los demás agentes estaban en Surquillo, esperando la orden para entrar.

A las 5.30 p. m. llegó a la casa de Calle 1 el músico Celso Garrido–Lecca, tío de Maritza, junto a su entonces pareja, la también bailarina Patricia Awapara. Iban a visitar a la pareja. Llevaban un vino chileno en una caja. La Policía decidió que intervendrían una vez que la visita saliera de la casa.

A las 8.00 p. m., el teniente Julio Becerra y la suboficial Cecilia Garzón, conocidos como «Ardilla» y «Gaviota», advirtieron que la visita se iba. Entonces entraron a la casa. Garrido Lecca e Incháustegui se fueron contra Becerra. Garzón dio un tiro al aire que distrajo a los guardianes de Guzmán. Mientras sus compañeros controlaban a los dos senderistas y a sus ocasionales visitas, «Ardilla» subió hacia el segundo piso, vio a una mujer e ingresó tras una puerta de triplay. Divisó finalmente a Guzmán:

—Soy de la Policía. Si te mueves, te mato, carajo.

—Tranquilo, muchacho, ya perdí.

—Positivo, ¡cayó el Cachetón!

Guzmán había sido capturado junto a su mujer, Elena Iparraguirre, y dos miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, María Pantoja y Laura Zambrano. Según la versión de Iparraguirre, ellas estaban en la casa para una reunión del buró político de la organización.

Frecuencia Latina interrumpió su transmisión para que Mario Duarte anunciara al país la noticia:

—Probablemente la noticia que van a escuchar enseguida es una de las más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú: Abimael Guzmán. Se trata de una información esperada por la civilidad entera y que llena de satisfacción al Perú entero. Repetimos: Abimael Guzmán ha sido capturado.

La historia del Perú había cambiado.

Aunque en las décadas siguientes, Alberto Fujimori buscaría atribuirse cualquier mérito sobre la captura de Abimael Guzmán, lo cierto es que ninguna de las personas de más alto poder en el país

sabía sobre la Operación Victoria. Y menos aún tuvo participación en la captura.

La mayor parte de las versiones periodísticas coincide en señalar que Fujimori estaba en Loreto, pescando con su hijo Kenji. Este último buscó desmentir esta versión, al señalar que él y su padre estaban por partir a provincias cuando se enteraron de la captura en el aeropuerto y destaparon un champagne. En el afán de encubrir al papá, terminó dando cuenta de que no sabía nada del operativo. De hecho, quien se enteró primero fue George H. W. Bush, gracias al enlace de la CIA que estaba junto a Jiménez en el GEIN.

Vladimiro Montesinos no se encontraba en Lima. Una vez que llegó, envió a Alberto Pinto Cárdenas, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, a la DINCOTE, para intentar llevarse a Guzmán. Pero el general Vidal se negó.

Al mismo tiempo, Vidal filtraba a la periodista Cecilia Valenzuela, quien estaba trabajando como productora para un equipo de la BBC en Lima, un video con las imágenes de él conversando con Guzmán, una hora después de la captura. La cinta dio la vuelta al mundo. Fujimori y Montesinos encolerizaron, dado que pretendían controlar la difusión de las imágenes de Guzmán ya capturado.

Esa noche, mientras se producía la Operación Victoria, la mayor parte del gabinete se encontraba en una recepción en la Embajada Británica, pues el ministro del Interior del Reino Unido estaba de visita en el país. Recién supieron de la captura de Guzmán camino a sus casas.

Sin embargo, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos fueron exitosos en apoderarse rápidamente del éxito policial. Y fue sobre esa base que la corriente política que se fundó en 1990 tiene, tres décadas después, adeptos fieles. Cuando se ha explorado en trabajos sobre la identidad fujimorista, sin duda, una de las respuestas más recurrentes para la adhesión al movimiento es «la victoria contra el terrorismo», que hoy tiene su correlato en los pedidos de «mano dura» sobre inseguridad ciudadana.

Al día siguiente de la captura, domingo 13 de septiembre, Fujimori dio un prolongado mensaje a la nación para arrogarse el éxito del operativo. El mandatario colocó a Guzmán como un genocida

siniestro que había acumulado una importante cantidad de dinero proveniente del narcotráfico. Aseguró que se juzgaría a Guzmán en forma sumaria ante un tribunal militar y se le impondría la máxima pena. Mientras el gobernante hablaba, se colocaron imágenes del líder terrorista con el torso desnudo y luego brindando arengas junto a la mayoría de los capturados junto con él.

El plan original de Fujimori y Montesinos era imponer la pena de muerte a Guzmán. La versión del asesor legal del SIN, Rafael Merino Bartet, es que ambos le encargaron la preparación de un decreto ley —una norma dictada en gobiernos de facto— para que se pudiera fusilar al líder senderista. La misma pena se impondría a Elena Iparraguirre y a otros tres miembros del Comité Central de Sendero Luminoso.

Sin embargo, una vez que se debatió el decreto ley en el Consejo de Ministros, no tuvo aceptación. La mayoría de los ministros arguyó que la imposición de la pena de muerte a Guzmán podría acarrearles problemas a Fujimori y al gobierno en su conjunto, debido a que podía afectar el retorno a la democracia. El mandatario y su asesor tuvieron que retroceder.

La realidad es que, jurídicamente, la posición de Fujimori y Montesinos era insostenible: el Perú forma parte —hasta hoy— de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado señala que los países no pueden aumentar los supuestos para la pena de muerte que existían al momento de ratificar dicho documento internacional. Cuando nuestro país lo hizo, el único delito para el que se permitía la pena capital era la traición a la patria en caso de conflicto armado internacional.

De manera que el gobierno se encargó de profundizar dos cuestiones: continuar con la humillación pública de Guzmán y darle un proceso sumario. Sobre lo primero, se decidió presentarlo el 24 de septiembre de 1992 en una jaula y con traje a rayas, mientras este brindaba una arenga acallada por gritos y mentadas de madre de los presentes. Sobre lo segundo, el 29 de septiembre se inició el proceso judicial con jueces militares sin rostro, el 1 de octubre se realizó la única audiencia y el 7 de octubre, Abimael Guzmán fue

condenado a cadena perpetua. Su primera cárcel estaría ubicada en la Isla San Lorenzo, frente al distrito chalaco de La Punta.

Montesinos buscaría sacar provecho político de Guzmán, por lo que inició una serie de conversaciones que duraron un año, cuyo fin era lograr que este firmara un documento de rendición. El asesor pretendía que el terrorista generara confianza con él, a partir de concesiones carcelarias e intelectuales. Lo llamó operación «Tormenta en los Andes». Merino sería su aliado, dado que el veterano hombre de Inteligencia era una de las personas que mejor manejaba las diversas diferencias políticas e ideológicas dentro de la izquierda peruana. Sin embargo, sería Montesinos quien terminaría llevando buena parte del diálogo, una vez que Merino descubrió aquello que hoy nos parece una verdad de Perogrullo: el basamento intelectual de Guzmán era tan sólido como un castillo de naipes[76].

La campaña para el Congreso Constituyente Democrático fue bastante corta. Como ya indicamos, Izquierda Unida, el Partido Aprista Peruano y Acción Popular decidieron no participar. Desde la oposición democrática, el Partido Popular Cristiano, el Frente Independiente Moralizador, Solidaridad y Democracia y el Movimiento Democrático de Izquierda eran las agrupaciones más fuertes. Cada uno de estos grupos tenía figuras bastante importantes: Lourdes Flores Nano, Fernando Olivera, Manuel Moreyra y Henry Pease. Sin embargo, partían con desventaja frente a un Fujimori con alta aprobación.

Rafael Rey, un ingeniero industrial que había sido animador juvenil de Libertad, decidió fundar su movimiento propio luego de que rompiera con la agrupación fundada por Mario Vargas Llosa. Así se forjó Renovación, un grupo con una fuerte impronta conservadora, proveniente de sectores de clase alta limeña. Rey, quien hasta el día de hoy es numerario del Opus Dei, respaldó abiertamente el golpe del 5 de abril de 1992, pero presentaba a Renovación como un grupo «ni fujimorista ni antifujimorista».

Dentro de la lista de Renovación estaban el abogado internacionalista Francisco Tudela, el conocido constitucionalista conservador Enrique Chirinos Soto y Virgilio Levaggi Vega, quien

había sido dirigente del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica muy poderosa entre los sectores altos peruanos. Años más tarde, Levaggi sería sindicado por varios testimoniantes e incluso por un informe de la misma institución como responsable de vejámenes físicos, psicológicos y sexuales al interior de dicha institución. El exlíder religioso ha negado los cargos en su contra.

Mientras tanto, el fujimorismo inscribió otro membrete electoral: Nueva Mayoría, en que se incorporaban los independientes que habían sido parte del gobierno durante los últimos dos años. Aunque se presentó a Carlos Boloña la posibilidad de postularse como cabeza de lista, este declinó. Quien estaba dispuesto a asumir ese papel era el ministro de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama.

Inicialmente, serían dos listas las que presentaría el gobierno. Cambio 90 se había quedado en manos de los molineros. En particular, Luz Salgado y Andrés Reggiardo, este último secretario general de la agrupación desde inicios del gobierno. Y Nueva Mayoría, donde estaban los técnicos. Sin embargo, cuando se inscribieron los partidos para postular, se hizo una alianza entre las dos agrupaciones, debido a que los electores identificaban al fujimorismo con su membrete auroral, pero el mandatario necesitaba de los técnicos de NM para darle mayor organicidad a su bancada.

El grueso de los primeros nombres de la alianza oficialista provenía de los funcionarios que habían sido seleccionados por Santiago Fujimori y Víctor Aritomi. Yoshiyama había sido reclutado por el cuñado del presidente y él mismo había llevado a Demetrio Patsías, viceministro de Minas, y Jaime Freundt, pediatra de sus hijos. Santiago consiguió que la lista incluyera a Víctor Joy Way, amigo personal y quien había sido ministro de Industrias hasta su pelea con Boloña, así como a la abogada Martha Chávez, su compañera en una maestría cursada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en ese entonces secretaria del Consejo de Ministros.

Salgado, quien había trabajado en FONCODES, era la segunda de la lista. Uno de los pocos evangélicos que le quedaron a Fujimori luego de la fuga masiva de 1991 era Gilberto Siura, un empresario y

administrador, a quien le dieron uno de los diez primeros puestos de la lista. También llamaron al expresidente del Consejo de Ministros, Carlos Torres y Torres Lara.

El 13 de noviembre de 1992, el país amaneció con una noticia: Alberto Fujimori fue llevado fuera de Palacio de Gobierno. Había habido un intento de golpe de Estado en su contra. En realidad, el mandatario terminó en la residencia del embajador del Japón en San Isidro y el golpe nunca se realizó. ¿Qué ocurrió?

Pocos días después del 5 de abril de 1992, los generales en retiro, Luis Soriano Morgan y Jaime Salinas Sedó, intercambiaron impresiones por teléfono sobre lo ocurrido. Ambos habían sido dados de baja debido a los intentos de Vladimiro Montesinos por controlar el Ejército, y rechazaron la interrupción del orden democrático.

Soriano y Salinas comenzaron a captar seguidores: primero compañeros en retiro como Luis Palomino y José Pastor Vives. Luego convencieron a personal en actividad de los tres institutos armados. Y, durante el mes de junio, se comunicaron con políticos civiles como Abel Salinas, Javier Diez Canseco, Mercedes Cabanillas, Gustavo Mohme y Roberto Ramírez del Villar. Ellos estaban convencidos de acabar con la dictadura, pero no necesariamente mediante vía militar. Quienes sí se plegaron al intento fueron el abogado Alberto Borea Odría, exsenador de la República, y el empresario Julio Vera Gutiérrez, dueño de Andina de Televisión, uno de los principales canales del país.

El plan original era capturar a Fujimori y trasladarlo a la base militar de Pisco. Hermoza Ríos y Montesinos también serían apresados. Posteriormente, los militares repondrían al Congreso disuelto irregularmente y se convocaría a elecciones parlamentarias. Máximo San Román culminaría, como manda la Constitución, el periodo por el que Fujimori había sido elegido.

Sin embargo, la asonada nunca se llegó a realizar. El general que iba a estar a cargo, Luis Alcántara, no llegó a aparecer en el taller de mecánica que se había convertido en el centro de operaciones militares. Salinas Sedó decidió aplazar todo. Pero, a la medianoche del 13 de noviembre de 1992, Montesinos y Hermoza coordinaban

para que el jefe de la División de Fuerzas Especiales, Luis Pérez Documet, pudiera sofocar cualquier intento de contragolpe.

¿Cómo se enteró el gobierno de la operación? Dos fueron las fuentes centrales. De un lado, José Graham Ayllón, oficial del Ejército, quien reportó directamente a Hermoza la reunión que había tenido con Salvador Carmona, militar en retiro, sobre la asonada. Por otro lado, José García Castaños, quien refirió al comandante general de la Marina sobre la cita que había tenido con el vicealmirante en retiro Augusto Vargas Prada. Los oficiales en actividad estaban en desacuerdo con la medida encabezada por Salinas Sedó.

A las 3.00 a. m. del 13 de noviembre, los miembros de la DIFE incursionaron en el taller de mecánica donde estaban los golpistas. Algunos lograron escapar, pero luego se entregaron, como el caso de Salinas Sedó. Otros fueron detenidos en dicho lugar. Vera Gutiérrez y Borea lograron escapar y asilarse en Costa Rica. Finalmente, los detenidos fueron llevados al fuerte Real Felipe en el Callao. Algunos fueron torturados.

El gobierno montó un operativo psicosocial para dar a entender que Fujimori iba a ser asesinado por los golpistas. Incluso se presentó «un arma como la que se utilizó en el asesinato de John F. Kennedy», como una prueba del presunto intento de asesinato. Pero nunca existió evidencia del plan para ultimar al mandatario.

Nueve días más tarde, los peruanos acudieron a las urnas. El fujimorismo se convertía en la nueva mayoría en el Congreso Constituyente Democrático[77].

Pedro Huilca Tecse nació en Cusco en 1949 y, desde temprana edad, se convirtió en obrero de construcción civil. Desde los años setenta asumió labores como dirigente sindical y, durante los años ochenta, se convirtió en secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Su actitud siempre se caracterizó por el diálogo con los grandes gremios empresariales. Para 1992, se había convertido en el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Huilca asumió una actitud opositora frente al gobierno, denunciando su carácter autoritario y lo que consideraba eran

vulneraciones a los derechos de los trabajadores, como los cambios de la legislación laboral. Al mismo tiempo, su visión de izquierda democrática lo hacía un blanco potente para Sendero Luminoso, que no transaba con este tipo de dirigentes. Durante 1992, Huilca encabezó protestas contra las normas laborales emitidas por el gobierno.

Entre el 3 y 6 de diciembre, Huilca fue invitado a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) como secretario general de la CGTP. En su intervención, hizo alusión a la necesidad de un acuerdo nacional, tanto en lo laboral como en otros aspectos importantes para el país. Frente a ello, Fujimori respondió: «Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o del SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o las cúpulas de los partidos tradicionales». Con ello, descartaba cualquier tipo de diálogo.

El 18 de diciembre de 1992, Huilca salió de su casa junto al hijo de su pareja, Julio César Flores y una de sus hijas, Flor Huilca Gutiérrez. Cuando llegó a su vehículo, un grupo de hombres comenzó a dispararle. Llegó cadáver al hospital Cayetano Heredia.

Dos son las hipótesis que se tejieron sobre el crimen. De un lado, la autoría senderista. Inicialmente, el crimen fue revindicado por Sendero Luminoso en su vocero El Diario. La investigación policial se ocupó de demostrar que el comité metropolitano de SL había ejecutado el asesinato. Algunos miembros de la organización terrorista señalaron tanto a la Comisión de la Verdad y Reconciliación como al periodista Ricardo Uceda que el crimen fue cometido por ellos. Sin embargo, Abimael Guzmán no aprobó la orden desde la cárcel —aunque algunos senderistas señalan que se cometió sin su consentimiento, debido al desorden posterior a la captura de Guzmán— y quienes fueron sentenciados niegan la autoría. Ellos tampoco fueron reconocidos por la familia durante el juicio como los atacantes del líder sindical.

De otro lado, está la hipótesis que apunta al Ejército como autor. La familia Huilca y la CGTP resaltan la actitud beligerante de Fujimori hacia el dirigente sindical. Asimismo, otros agentes de Inteligencia sindicaron que integrantes del destacamento Colina habrían cometido el crimen. La principal objeción contra esta

hipótesis es que, para diciembre de 1992, el grupo había sido disuelto y algunos de los denunciantes no gozarían de credibilidad. Sin embargo, como se verá en este libro, los agentes podrían haber cometido el crimen sin necesidad de conformar un grupo permanente, como ocurrió en otros casos. De hecho, uno de los miembros de Colina admitió ante la CVR que habían hecho un seguimiento al líder de la CGTP.

Aunque la Comisión de la Verdad y Reconciliación no señaló cuál de las hipótesis era la más plausible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, en su sentencia sobre el caso, que «hay indicios suficientes para concluir que la ejecución extrajudicial del señor Pedro Huilca Tecse tuvo una motivación política, producto de una operación encubierta de Inteligencia militar y tolerada por diversas autoridades e instituciones nacionales»[78].

Si el paso de Óscar de la Puente Raygada por el Ministerio de Relaciones Exteriores merece ser recordado, no será precisamente por un suceso feliz. El entonces canciller fue uno de los grandes responsables del momento menos brillante de un sector que, en términos generales, se ha caracterizado por su neutralidad y su capacidad de elaboración de una política pública de largo plazo.

El 29 de diciembre de 1992, apareció en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Suprema Nro. 453/RE-92, que dispuso el cese de 117 miembros del Servicio Diplomático de la República, casi un tercio de su número total.

Cuando se consultó a Fujimori por el cese, el mandatario arguyó que los motivos iban desde la incompetencia hasta la existencia de «prácticas sexuales dudosas» y «homosexualidad escandalosa, después de algunos tragos». Esta declaración motivó la protesta pública del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), una de las principales entidades de defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Además de la homofobia, la resolución vulneraba los derechos de los diplomáticos destituidos.

En 2003, ante una Comisión Especial nombrada por la Cancillería para investigar este cese irregular, de la Puente Raygada confesó la orden para realizar una reunión en Washington para tratar este tema y elaborar las listas de cese. La cita se realizó el 27 de noviembre

de 1992, en la residencia del embajador del Perú en Estados Unidos. En ese entonces, el puesto era ocupado por el diplomático Ricardo Luna. Este último negó cualquier intervención en esa cita e incluso señaló que se retiró de su domicilio.

Quienes sí participaron en la reunión fueron los embajadores Hugo Palma, Alfonso Rivero, Jaime Stiglich, Alejandro León Pazos y Jorge Valdez Carrillo. A ellos, de la Puente les encargó la elaboración de una primera lista de ceses. Otra parte de los funcionarios cesados sería establecida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Roberto Villarán Koechlin. Si bien en las listas se asignaron claves para que se pongan calificaciones numéricas, aparecieron varios adjetivos calificativos. A la cita, no sin sorna, se le puso el mote del «consenso de Washington», en clara alusión al programa de medidas de liberalización de la economía.

Algunos de los involucrados en este tema —León y Villarán— fueron cesados y otros presuntos implicados culminaron su carrera con puestos de importancia. Buena parte de los diplomáticos cesados fueron reincorporados, una vez que retornó la democracia al Perú. Se conoce que Fujimori quería un cese masivo de diplomáticos desde el inicio de su gestión, pero sus dos primeros ministros de Relaciones Exteriores —Luis Marchand Stens y Raúl Sánchez— se negaron.

La poda de diplomáticos generó pronunciamientos en contra de diplomáticos en retiro, internacionalistas y diversas personalidades. Asimismo, el historiador Aurelio Miró Quesada Sosa, el abogado Fernando de Trazegnies y los embajadores Julio Ego Aguirre y Alfonso Arias Schreiber se apartaron de la Comisión Consultiva de la Cancillería, en protesta por la decisión[79]

.

---

67 Sobre el operativo Mudanza 1 y el uso de las cárceles por parte de Sendero Luminoso, nos basamos en el *Informe Final* (tomo VII: 674-693), Rénique (2003: 72-91), Starn y La Serna (2019: 307-310) y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este evento (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf). El testimonio de Martín Rivas está en Jara (2017: 190-198).

68 La versión sobre las amenazas y posterior salida de Gorriti del país son relatadas en Starn y La Serna (2019: 318-321).

69 Sobre Blanca Nélida Colán, el mejor perfil biográfico se encuentra en Gamarra (2007: 109-135). En torno al inicio del control del Ministerio Público, revisamos el tomo III del *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (264). También Jochamowitz (2019a: 213, 227-228), Bowen y Holligan (2003: 308-309). Murakami sugiere que Yoshiyama promovió el nombramiento de Colán como fiscal de la Nación (2018: 456).

70 La historia de Frecuencia Latina se reconstruye a partir de lo señalado por Vivas (2008: 506-508), así como de los recuerdos personales del autor. Sobre el atentado contra el canal, tomamos en cuenta el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 517), y el informe del programa *Contrapunto,* emitido en 1992, que puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=02s75oyfag0.

71 La crisis en el MRTA y la captura de sus principales líderes es narrada en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo II: 227, 413-418). Un video sobre la captura de Polay se puede ver en https://youtu.be/oK1jtEmAfWY

72 Los días finales de la cúpula de Sendero Luminoso en libertad se basan en Paredes (2017: 155-209), Zapata (2017: 228-234) y el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo II: 111-113, 227-233). Este último nos permitió reconstruir el atentado de la calle Tarata. El estudio de Asencios (2017) se basa en testimonios, recogidos sobre todo en las prisiones, de personas captadas en su juventud por Sendero Luminoso.

73 Sobre el secuestro de Samuel Dyer, nos basamos en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 611-620), así como en la sentencia de la Sala Penal Especial contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos.

74 Los preparativos para la elección del CCD se basan en Bowen (2000: 128-129, 207-209) y Murakami (2018: 323-325). La formación de Cambio 90–Nueva Mayoría aparece en Murakami (2018: 325-326, 330-333) y Degregori y Meléndez (2007: 53-61).

75 Según refirió el diario *El Comercio* en enero de 2021, Evans era la titular de una cuenta en Suiza que tenía depósitos por un millón de dólares. La cuenta tenía como otra beneficiaria a Elena Iparraguirre. Se trata del mayor monto de dinero vinculado a Sendero Luminoso ubicado en el exterior. El Ministerio Público anunció que dicho dinero sería incautado y repatriado al Perú. El informe se puede ver en https://elcomercio.pe/lima/judiciales/la-historia-secreta-de-la-cuenta-en-suiza-de-sendero-luminoso-noticia/?ref=ecr/.

76 Lo ocurrido con posterioridad a la caída de Abimael Guzmán se basa, sobre todo, en Bowen y Holligan (148-152), así como en Bowen (2000: 150-158) y Jochamowitz (2019a: 113-115). Sobre la identidad fujimorista y su vínculo con las necesidades ciudadanas en torno a la lucha contra el terrorismo y la seguridad, recomiendo Meléndez (2019: 90-92), así como los artículos «Que la Fuerza esté con Keiko: el nuevo baile del fujimorismo» (2011) de Adriana Urrutia, incluido en *Postcandidatos. Guía analítica de supervivencia hasta las próximas ediciones* (2011: 105-108) y «¿El despertar de la Fuerza Popular? Keiko Fujimori y el partido de las paradojas» de Paolo Sosa, del libro *Anticandidatos. El thriller político de las elecciones 2016* (2016: 20-22), ambos compilados por Meléndez.

77 La reconstrucción de lo ocurrido el 13 de noviembre de 1992 se basa en Bowen (2000:

129-132), así como en los artículos «Secretos del 13 de noviembre» de Mineo y Cabrera para *IDL-Reporteros* (https://idl-reporteros.pe/secretos-del-13-de-noviembre/), «La Última Batalla de los militares que se levantaron contra el autogolpe de Fujimori» de Rodrigo Cruz publicado por *El Comercio* (https://elcomercio.pe/politica/ultima-batalla-militares-rebelaron-autogolpe-alberto-fujimori-443250-noticia/) y «Danza General» en *Caretas* (https://web.archive.org/web/20010523125221/http:/www.caretas.com.pe/2001/1670/articulos/generales.phtml).

78 La reconstrucción del caso Pedro Huilca se basa en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 656-674), Burt (2011: 338–339) y Uceda (2018: 395-400). También consideramos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf).

79 Sobre el cese masivo de diplomáticos nos hemos basado en las notas de Edmundo Cruz (https://larepublica.pe/politica/336483-ex-canciller-fujimorista-oscar-de-la-puente-y-6-embajadores-en-la-conspiracion-canciller/), Amanda Gonzales (https://larepublica.pe/politica/353829-ex-canciller-de-la-puente-confeso-como-ceso-a-117-diplomaticos/) y Ricardo Uceda (https://larepublica.pe/politica/581769-los-embajadores-y-los-golpes/) aparecidas en *La República* en 2003 y 2011. La versión de Ricardo Luna aparece en un perfil elaborado por Fernando Vivas (https://elcomercio.pe/politica/gobierno/ricardo-luna-diplomacia-anestesia-perfil-148052-noticia/?ref=ecr) para *El Comercio.* También consultamos Bákula (2006: 196-200).

LA CANTUTA

(Julio, 1992 – Diciembre, 1993)[80]

Si el caso Barrios Altos surge como una venganza al atentado contra el destacamento Húsares de Junín, la génesis del caso La Cantuta se puede dividir en dos momentos.

Los miembros del destacamento Colina han señalado que la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se originó como reacción al atentado de la calle Tarata en Miraflores, ocurrido el 16 de julio de 1992.

Al día siguiente del coche bomba, el agente José Tena fue llamado a COMPRANSA para brindar información sobre la universidad, donde estaba infiltrado. El reporte de Tena era contundente: los presuntos culpables estaban en dicha casa de estudios.

Martín Rivas añade otro elemento. Ese mismo día, hubo una reunión a la que asistió y en la que estuvieron Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. Era necesario realizar un operativo militar como respuesta al atentado. La jerarquía de la orden exacta vino de este modo: Rivero Lazo le indicó al jefe de la División de Fuerzas Especiales, general Luis Pérez Documet, que un grupo especial del Ejército ingresaría a La Cantuta, por lo que debía ordenar al jefe de la base militar instalada en la universidad que franquee el ingreso al destacamento. La orden de Lazo fue dictada por Hermoza, quien la recibió de Fujimori y Montesinos. A su vez, Hermoza dio la orden a Martín para hacer el operativo.

Pero había una historia menos inmediata que también estaba detrás del crimen.

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tuvo su origen en la transformación de la Escuela de Preceptores en Escuela Normal Superior de Varones, cuya sede se trasladó a la urbanización La Cantuta (Chosica) en 1951. Durante la década, ya se comenzaba a percibir a la casa de estudios como cercana a movimientos de izquierda. Para 1965, la Escuela se transformaría

en la UNE y, efectivamente, los grupos de dicha posición política tenían gran influencia.

Abimael Guzmán tuvo allí nexos desde los años sesenta con dos docentes: Víctor Zavala Cataño y Nilda Atanasio. Ambos comenzaron a captar alumnos para Sendero Luminoso. Zavala devendría en dirigente del comité metropolitano senderista en 1980, mientras que Atanasio seguiría cercana a la agrupación hasta 1986, cuando dejó el país y se separó de su esposo, el docente Hugo Muñoz. Otros partidos de izquierda y el APRA también buscarían captar cuadros en la UNE con cierto éxito.

En 1977, el gobierno cesó las actividades en La Cantuta y nombró un comité interventor. Las protestas de los estudiantes sin clases persistieron. Para 1980, el nuevo gobierno encabezado por Fernando Belaúnde reabrió la UNE. Y allí comenzarían las disputas entre los distintos grupos de izquierda por el poder. A la par, Sendero Luminoso seguía buscando militantes, bajo la promesa de hacer la lucha armada que los otros partidos no hicieron y, también, como parte de un proceso de movilidad social prometida.

Para 1987, desapareció la representación estudiantil tradicional y la dirigencia estudiantil empezó a ser presionada por Sendero Luminoso. Los senderistas comenzaron a controlar espacios como el comedor y las viviendas, así como a tener cierto control administrativo de los servicios básicos. En 1987 y 1989, la policía y las Fuerzas Armadas incursionaron en la UNE, con varios detenidos. Sin embargo, estas medidas acrecentaron el crecimiento de los sectores más radicales.

El 21 de mayo de 1991, Fujimori buscó ingresar a La Cantuta. Lo recibió el rector Alfonso Ramos Geldres. El mandatario dio la orden a las tropas militares para que hagan limpieza de pintas. Las protestas de los estudiantes fueron instantáneas. Fujimori fue pifiado y debió abandonar el campus.

Al día siguiente, las tropas militares de la Dirección de Fuerzas Especiales entraron a controlar la UNE. Se instaló una base militar, se borraron las pintas y los soldados se hicieron control del comedor. En la residencia universitaria, se impuso el toque de queda. Las tropas hicieron pintas directamente para provocar a los

senderistas. Comenzaron a hacerse presentes más agentes de Inteligencia. Buena parte de los alumnos toleró la intervención, con la esperanza de concluir sus estudios.

Varios de los estudiantes que fueron secuestrados el 18 de julio de 1992 tenían simpatías por movimientos radicales y habían participado tanto en la manifestación contra Fujimori como en otras marchas contra la intervención militar. En el caso de Hugo Muñoz, pertenecía a este mismo bloque. En ningún caso se comprobó que tenían vínculos con el atentado de la calle Tarata.

Las versiones sobre lo que ocurrió en las horas previas al crimen de La Cantuta difieren en detalle, pero coinciden en casi todo lo esencial. En la noche del 17 de julio, Martín Rivas citó a los jefes de equipo en el parque central de Barranco. Allí los esperaba el coronel Navarro. Él les dijo que Hermoza había ordenado una operación en La Cantuta para supuestamente capturar a quienes cometieron el atentado en Miraflores. Navarro indicó que la orden era detener e interrogar a los detenidos, para luego llevarlos al cuartel La Pólvora, ubicado en el distrito de El Agustino.

Martín Rivas y Navarro fueron a un local a conversar, comer y tomar unas cervezas. Sosa creyó que ese día no se eliminaría a nadie y no cargó con el equipo que siempre llevaba para entierros clandestinos.

La discrepancia entre versiones es la siguiente. Según Sosa, fue Martín Rivas quien dijo que habría ejecuciones, por lo que le increpó que no cargara con picos, palas y cal. En la versión del mayor, quien ordenó las ejecuciones fue Pérez Documet. Para Martín, de acuerdo con su relato, era necesario sacar información previa a los detenidos. Sea como fuere, Sosa tuvo que agenciarse el material en el almacén de La Cantuta.

Pérez Documet autorizó al teniente Aquilino Portella para ayudar en la identificación de los detenidos. Otro funcionario de la universidad participó en la operación, oculto con un pasamontañas. En la madrugada del 18 de julio, ingresaron a la vivienda universitaria y detuvieron a los alumnos Marcelino Rosales, Roberto Espinoza, Juan Mariños, Luis Ortiz Perea, Heráclito Meza, Armando Amado Cóndor, Felipe Flores, Bertila Lozano y Dora Oyague. En un

pequeño chalet dentro del campus, tomaron a Hugo Muñoz. Terminaron su labor a las 3.00 a. m.

En la autopista Ramiro Prialé, los vehículos se detuvieron. Sosa encontró un campo de tiro donde podían hacerse las ejecuciones extrajudiciales y los entierros. Allí los mataron y los enterraron provisionalmente. Era casi el amanecer. Y allí comenzaría otra historia.

El 18 de julio de 1992, por la mañana, Martín Rivas reunió a los jefes del grupo en COMPRANSA. Allí ordenó estar atentos a las reacciones de la prensa frente al caso. Sosa propuso ver el delicado tema de los entierros, que habían sido improvisados. Cuando fue a inspeccionar el lugar con otros dos agentes, resultaba claro que la escena era complicada. Martín y Sosa decidieron hacer un nuevo entierro en el mismo lugar, ya con las previsiones del caso, el lunes por la noche.

Al día siguiente, La República fue el primer diario que informó sobre el caso. El titular decía «Detienen a catedrático y nueve estudiantes en campus de la Universidad La Cantuta». Allí aparecían los nombres de los ultimados por el destacamento Colina. El rector Ramos Geldres hizo suyos los reclamos de los familiares.

El 20 de julio, Martín Rivas le dio parte de lo ocurrido a Rivero Lazo. Según Sosa, solo le informó sobre la muerte de seis detenidos. Ambos fueron donde Hermoza. Por la noche, hicieron el entierro nuevo planteado. Sin embargo, las relaciones entre el jefe operativo del grupo y uno de sus principales agentes era tirante. Sosa aprovechó un almuerzo con Martín para transmitirle sus inquietudes centrales: el trato con los miembros del equipo, descontento por el manejo del dinero suministrado y las relaciones que Martín mantenía con dos agentes del destacamento. Sin embargo, tres días más tarde, un incidente entre ambos culminó en la salida de Sosa del grupo, por propia voluntad. Navarro lo apoyó para ello.

Poco a poco, todo se deterioró. Hermoza Ríos suspendió las acciones del destacamento. Rivero Lazo fue sacado de su puesto como jefe de la DINTE debido a que no supo de las acciones golpistas de Jaime Salinas Sedó previstas para el 13 de noviembre

de 1992. Su reemplazo era el general Willy Chirinos. A la par, Alberto Pinto perdió su puesto en el SIE, pues las relaciones con Montesinos se habían agriado. El reemplazo de Pinto era Enrique Oliveros, estrechamente ligado al asesor presidencial.

Sin embargo, Chirinos se fue distanciando de Hermoza. La desconfianza era mutua, pues el jefe de la DINTE comenzaba a tener mayores detalles de las acciones del destacamento Colina. No duró mucho en su cargo. Lo relevaron en diciembre.

El 7 de diciembre de 1992, la revista Sí publicó el reportaje «Sociedad para el crimen», donde se identificó por primera vez al destacamento Colina y se indicó que gozaba de la protección de la cúpula gubernamental. El ministro de Defensa Víctor Malca amenazó con querellar al director de la revista, Ricardo Uceda. La fuente del reportaje era Arnaldo Alvarado, un veterano exagente de Inteligencia, opuesto a Montesinos y quien se había entrevistado con Martín Rivas el día siguiente a los sucesos de Barrios Altos en La Tiza. Alvarado y Uceda se habían contactado gracias a los militares golpistas del 13 de noviembre, encerrados en el cuartel Real Felipe, ubicado en el centro del Callao.

Caretas continuó, a la par que Sí, con sus propias indagaciones sobre Colina. Ello le valió amenazas a su director, Enrique Zileri, así como a la reportera que se encargó del caso, Cecilia Valenzuela. A ella le llegaron a mandar coronas de flores mortuorias a su domicilio.

A fines de marzo de 1993, la indiferencia en la que se había movido el caso La Cantuta comenzaría a cambiar. En el cuartel Real Felipe, Jaime Salinas Sedó tenía una conversación con uno de los militares involucrados en su fallida intentona golpista. A la mañana siguiente, Salinas reunió a su gente. Redactaron un documento que tenía una firma en clave: León Dormido.

El 28 de marzo, Salinas Sedó le entregó el documento a un general en situación en retiro. La orden era que llegara al despacho de Henry Pease, miembro del CCD, dirigente del Movimiento Democrático de Izquierda, docente universitario y reconocido por partidarios y adversarios como un hombre serio y ponderado.

Dos días más tarde, el congresista Carlos Cuaresma, perteneciente a la bancada del Frente Independiente Moralizador,

interpuso una moción de orden para solicitar a los ministros de Defensa y del Interior que informen sobre las desapariciones de La Cantuta, así como para otorgar a la comisión de Derechos Humanos del Congreso la posibilidad de estudiar este caso.

En la sesión del 2 de abril, se iba a debatir la moción de Cuaresma, cuando Henry Pease presentó una cuestión de orden. Tenía el documento anónimo de León Dormido, que acusaba directamente a Montesinos, Hermoza Ríos y Pérez Documet por el crimen. Pease decidió ser prudente al momento de su alocución: «Yo tengo que cuidar la imagen porque tengo que convencer que tiene que haber una investigación», le dijo al periodista Edmundo Cruz, años más tarde. Por ello, su intervención tuvo el siguiente tenor:

—Este es un documento sobre el que no tengo los elementos de juicio para juzgar la fuente o para juzgar la verdad de lo que dice; y voy a tener tal cuidado, señor presidente, que ni siquiera voy a leer los nombres, porque aquí hay más de quince oficiales implicados con nombres y apellidos y lo que se afirma en este documento, señor, es que los universitarios de La Cantuta han sido ejecutados. Se señala el lugar donde han sido enterrados, cómo han sido desenterrados y llevados a otro lugar. No voy a mencionar ni la institución, dentro de las fuerzas del orden, a la que se refiere.

Luego del anuncio de Pease, las lágrimas de los familiares de los desaparecidos comenzaron a caer por sus rostros, al igual que se escucharon los gritos de indignación. Estaban presentes en el hemiciclo por la moción de Cuaresma. «Me enteré de todo lo ocurrido por Pease», diría Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor.

Ese día, se aprobó la creación de una comisión investigadora, que sería presidida por el veterano parlamentario Roger Cáceres Velásquez. Junto a Cáceres estarían Cuaresma y la congresista de izquierda Gloria Helfer, así como los oficialistas Jaime Freundt y Gilberto Siura.

El 17 de abril, el Consejo Supremo de Justicia Militar abrió instrucción «contra todos los que resulten responsables» por los sucesos de La Cantuta. Era evidente que, desde las Fuerzas

Armadas, buscaban repetir un modus operandi tradicional: enviar un proceso por violaciones a los derechos humanos al fuero militar, para que los responsables sean absueltos o condenados a una pena por delito menor.

Por su parte, el Ejército se negó a enviar a sus oficiales ante la Comisión Investigadora. El 20 de abril, luego de dos negativas, acudió el propio Hermoza Ríos. No solo negó la participación de su institución en los hechos, sino que llegó a decir que el documento presentado por Pease era «apócrifo». Al final de la sesión, acusó a los parlamentarios opositores de coludirse con las acciones terroristas y, para cerrar, señaló que esta era una campaña de agravio a la institución. «Esa campaña no la voy a tolerar», remató.

Como si no fueran suficientes las malcriadeces de Hermoza, a la mañana siguiente, los limeños se sorprendían de ver un desfile de tanques y blindados desde el Cuartel Rímac hacia la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, atravesando el centro de la ciudad. Allí se leyó un comunicado de respaldo a Hermoza. Mientras que Fujimori declaraba a la prensa que «no hay derecho que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país». El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Bernard Aronson, llamó a Fujimori y le dijo que la demostración de tanques era un intento inaceptable de amedrentamiento al Congreso de la República. Por ello, el mandatario tuvo que dar un mensaje a la nación, colocando paños fríos a la crisis.

Pero la tormenta estaba lejos de amainar.

Cuando Willy Chirinos tuvo que dejar la DINTE, fue destinado al Comando de Instrucción del Ejército. Su jefe sería el general Rodolfo Robles Espinoza. El veterano militar escuchó atentamente lo que sabía su subordinado y lo fue corroborando con otras fuentes al interior de la institución.

El 17 de abril de 1993, Robles citó en su casa al general José Picón Alcalde, el presidente del Juzgado Militar, de quien era compadre y amigo. Allí le confío sus indagaciones. Picón fue claro:

—Inspectoría ha llegado a la conclusión de que el Ejército no tiene participación en este caso. Yo voy a hacerla larga hasta que la gente se olvide de este asunto.

A lo máximo a lo que accedió Picón es a atender a Robles nueve días más tarde, reunión en la que el general le brindó nombres de los implicados.

El 28 de abril de 1993, a las 10.00 p. m., Hermoza Ríos citó a Robles para comunicarle que debía dejar el Comando de Instrucción del Ejército. Se le enviaba a la Junta Interamericana de Defensa, tradicionalmente conocida por ser una plaza a la que se destinaba a los oficiales cuya carrera estaba próxima al final. Ese día, la oficina de Hermoza tenía mayor despliegue de seguridad. El comandante general del Ejército le dijo a Robles que viajara con urgencia. El alto oficial atinó a decir que no entendía su cambio, pero lo acataría.

El general sabía que su carrera estaba terminada. Y probablemente también la de dos de sus hijos, Rodolfo y José, quienes habían seguido sus pasos. Ellos pidieron su baja voluntaria el 30 de abril, pero el comando se las negó. Robles se decidió a actuar en los siguientes días.

Para el 4 de mayo de 1993, la casa de Robles en Surco —distrito residencial de Lima— estaba bajo vigilancia a cargo de un grupo dirigido por Jesús Sosa. Para ese entonces, las líneas telefónicas del general estaban intervenidas y se sabía que estaba preparando la posibilidad de asilarse políticamente. Un auto salió de la casa del militar, pero era un señuelo.

En realidad, Robles había ingresado a la embajada de Estados Unidos el 3 de mayo, junto con toda su familia, con el pretexto de obtener una visa de turista. Dado que la principal potencia mundial no otorga el asilo, la delegación diplomática estadounidense hizo el puente con su par argentina. Los rioplatenses aceptaron.

El 5 de mayo, la esposa de Robles, Nelly Montoya, se presentó en una conferencia de prensa con un documento firmado por el general. En el mismo, Robles acusaba directamente al destacamento Colina del crimen de La Cantuta, bajo las órdenes de Montesinos y el conocimiento de Hermoza Ríos. El general daba los nombres de varios de los integrantes de Colina, así como el rol cumplido por Pérez Documet, Rivero Lazo y Federico Navarro.

Dos días después, los Robles viajaron a Buenos Aires.

Justo Arizapana se dedicaba al reciclaje de cartones y latas desde que salió de la cárcel, en 1991. Había tenido un pasado azaroso como un hombre de izquierda que, en su momento, había creído en la lucha armada. Para 1993, se dedicaba a un oficio que le daba para comer y no le traía mayores complicaciones.

En abril de aquel año, Arizapana estaba en La Quebrada, una zona cercana a Cieneguilla, vigilando un cargamento de basura que había recolectado durante toda una jornada. El ruido de dos camionetas de una cabina lo despertó. Bajaron hombres con ametralladoras y linternas. El reciclador subió a un cerro cercano y vio cómo los sujetos comenzaron a cavar la tierra. En los huecos depositaron unas cajas de cartón.

A la mañana siguiente, Arizapana se acercó al lugar. Tanteó que había cenizas y se topó con un hueso. Inmediatamente pensó que se trataba de los restos de los desaparecidos de La Cantuta. Por el momento, solo atinó a pensar en posibles aliados. Días más tarde, se encontró con Guillermo Catacora, otro expresidiario dedicado a la artesanía. Le confió su secreto. Catacora le dijo que podía contactar a Roger Cáceres Velásquez, quien era su paisano.

Días más tarde, el congresista Cáceres recibió a los dos hombres, quienes le contaron su relato y le llevaron una bolsa de papel que contenía un hueso y un poco de carne quemada. El parlamentario les recomendó enviar una carta anónima, entregar los restos humanos que tenían y elaborar un mapa del lugar donde se ubicaban las fosas. Cáceres llamó al periodista Edmundo Cruz, quien trabajaba en la revista Sí y con quien mantenía una buena relación. Cruz sabía que el presidente de la comisión investigadora del caso La Cantuta podía contar con buena información. Se reunieron en tres ocasiones. En la segunda cita, el parlamentario le entregó una bolsa con restos humanos y, en la tercera, el mapa para llegar al sitio de entierro.

Cáceres, Cuaresma y Helfer entregaron un informe en mayoría donde se señalaba que el crimen de La Cantuta había sido cometido por el destacamento Colina y recomendaba una investigación penal contra Hermoza Ríos y Montesinos Torres. El dictamen en minoría, suscrito por Freundt y Siura, señalaba que no había responsabilidad

del Ejército y deslizaba la hipótesis de la desaparición voluntaria. El oficialismo impuso su número para impulsar este último dictamen. A Siura le dieron la presidencia de la comisión de Defensa y a Freundt lo nombraron ministro de Salud.

En la revista Sí, se debatía cómo y cuándo publicar la noticia sobre los huesos y el mapa. Cruz y José Arrieta, quien cubría fuentes policiales y trabajaba varios informes con su veterano colega, presionaron por su inmediata publicación. Ricardo Uceda, director de la revista, y Santiago Pedraglio, el segundo a bordo, preferían esperar un poco para hacer las comprobaciones del caso. Cruz habló con Cáceres Velásquez y lo convenció. Arrieta tuvo que calmar a sus fuentes, agentes de Inteligencia femeninas del Ejército que le brindaron información.

Quienes no se calmaron fueron Arizapana y Catacora. Acudieron donde el periodista Juan Jara, periodista de Radio Comas, para entregarle una segunda copia del mapa. Pero Jara, quien había tenido algunos nexos con Sendero Luminoso, decidió ir a El Diario para que se difundiera la copia. Pero el día que fue a entregar el material al vocero senderista, así como unas fotos que había tomado en Cieneguilla, fue capturado junto al hombre que le hacía el servicio de taxi, Juan Mallea. Jara prefirió la cárcel antes que delatar a sus fuentes.

—Preferimos producir el hecho jurídico y hacer que todos los medios publicaran, a publicarlo nosotros.

Esta fue la máxima que utilizó Ricardo Uceda para lo que sería el acto de revelación final de lo ocurrido en La Cantuta. Luego de disuadir a Cruz y Arrieta para demorar la publicación, logró contactar a un amigo arqueólogo para dar con la ubicación exacta de las fosas, consultó a un pool de abogados para la estrategia legal y llamó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para trabajar en el impacto político. La Coordinadora, liderada en ese momento por Rosa María Mujica, se encargó de hablar con la prensa para asegurar que el trabajo no se pierda.

En la madrugada del 8 de julio de 1993, Uceda, Cruz y Arrieta se dirigieron a la fosa, hicieron una breve excavación y dieron con restos humanos. Lo anunciaron a los medios de comunicación.

Inmediatamente, se hizo presente el fiscal de turno, Víctor Cubas Villanueva, quien mantenía su fama de hombre recto y honesto. Junto a Cubas estuvieron varios políticos —entre ellos, Cáceres y Helfer— así como miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Aunque Sosa y Oliveros pensaron inicialmente que no eran los restos de La Cantuta, la realidad es que Hermoza Ríos ordenó desenterrar los cadáveres para desaparecerlos por completo. Pero los encargados de la tarea, exmiembros de Colina, solo sacaron algunos de los restos y los incineraron a medias.

Para completar el desastre para el gobierno, en esos días estaba en Lima Peter Archard, jefe para América Latina de Amnistía Internacional, lo que amplió más la repercusión de los hechos.

Entre los restos hallados, se encontraron dos manojos de llaves. Uno de ellos pertenecía a Juan Mariños, cuyo ropero de la residencia pudo ser abierto. El otro era de Armando Amaro Cóndor. Cuando la llave encajó en la reja del domicilio de su madre en La Victoria, doña Raida solo atinó a llorar.

El gobierno buscó desacreditar la historia con la captura de Jara y Mallea, pretendiendo que se trataba de una maniobra de propaganda senderista. A Mallea lo torturaron y lo presentaron como el autor del mapa. Recién en 1994, debido a las pericias grafotécnicas efectuadas, pudo ser liberado.

Cubas prosiguió con su investigación. Encontró una fuente clave en el maxilar superior de Bertila Lozano, que tenía algunas piezas en metal. El círculo se cerró cuando Sí dio a conocer el lugar de los asesinatos: el campo de tiro en Huachipa. Allí encontró algunos de los restos. La fuente había sido un miembro del destacamento Colina, cuya identidad se desconoce hasta hoy.

El 26 de noviembre de 1993, Fujimori anunció en una entrevista a The New York Times que Santiago Martín Rivas había sido detenido. Pero, en realidad, todo era una farsa. Hermoza había convencido a Martín para que asumiera cierto grado de responsabilidad para salvar al gobierno. Desde su cumpleaños, tres semanas antes de dichas declaraciones, el mayor se había dirigido al batallón de Pisco, donde nadie podía verlo.

Mientras tanto, las coacciones llegaron a Sí. Al dueño de la revista, Carlos Maraví, comenzaron a presionarlo con amenazas a su familia. Habló con Uceda sobre la posibilidad de bajar el tono sobre Montesinos. El director de la publicación se tomó un mes de vacaciones. Al volver, presentó su renuncia. Cruz se iría a La República y Arrieta arribaría a la unidad de investigación de América Televisión. Poco tiempo después, Maraví traspasaría la revista, que se volvería oficialista con sus nuevos dueños.

El 16 de diciembre de 1993, el fiscal Víctor Cubas envío al juez instructor Carlo Magno Chacón su acusación contra once personas —todos militares— por el asesinato, secuestro y desaparición forzada de los fallecidos de La Cantuta. Chacón, quien era cercano a Montesinos, avisó al Consejo Supremo de Justicia Militar que, apenas al día siguiente, reclamó el caso. Hizo rápidamente el expediente sobre la contienda de competencia y procuró que esta se resolviera antes de Año Nuevo.

En paralelo, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Enrique Oliveros, citó el 20 de diciembre a Sosa, Chuqui, Coral y Carbajal. Allí les indicó que, dado que Fujimori y Malca habían declarado la existencia de detenidos por el caso La Cantuta, debían quedarse en las instalaciones del SIE. Sosa buscó entrevistarse con Martín, Pichilingüe y Navarro, así como con Rivero Lazo, a fin de deliberar sobre esta decisión.

Dos horas más tarde, pudieron hablar con Pichilingüe. Allí supieron que Martín estaba en un cuartel en Pisco. Los suboficiales y el mayor acordaron solicitar precisiones sobre su detención, averiguar si había la posibilidad de ir a una instalación militar con libertad de movimientos, y obtener una cantidad de dinero adicional para ellos y sus familias.

Al día siguiente, Oliveros les tendría mayor precisión sobre los miembros del destacamento. Traerían a Supo, que estaba haciendo un curso en Rusia, de inmediato. A Rivero Lazo lo mandarían al cuartel Bolívar en Pueblo Libre. Navarro, Pichilingüe y los agentes volarían a Pisco, para encontrarse con Martín. El único libre sería Coral, porque su nombre había sido mal escrito en el expediente. Oliveros les indicó que las cuestiones crematísticas las discutiría

con Hermoza, pues este lo había nombrado interlocutor ante el grupo.

El 22 de diciembre, los agentes se encontraron con Rivero Lazo en el Pentagonito. El general les aseguró que había un apoyo económico de mil soles para cada uno, además del sueldo. Se les prometió que continuarían con sus carreras. Rivero se fue a cumplir su retiro dorado a Pueblo Libre, con la promesa de que su carrera podría continuar con una absolución en el fuero castrense. Los demás hombres llegaron a Pisco y fueron recibidos con cordialidad, que incluyó una importante dosis de alcohol.

---

80 Para este capítulo, tomamos como fuentes el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 107-112, 236-237; tomo V: 608–616; tomo VII: 626-639), la sentencia de la Sala Penal Especial contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, los libros de Uceda (2018: 328-349, 389-391, 401-405, 406-426, 428-428, 468-484), Jara (2017: 204-217, 231-251), Youngers (2003: 283-284) y Vargas Llosa (2000: 15-49, 73-123). También revisamos Rospigliosi (2000b: 129–135, 247–251), Robles Espinoza (1996: 26-71) y el documental *La Cantuta en la Boca del Diablo* de Amanda Gonzales (https://youtu.be/_R8AZ-cmmS4).

SU MISIÓN CUMPLIDA

(Diciembre, 1992 – Diciembre, 1993)

Durante muchas temporadas, el fin de año significaba para los ministros de Estado la entrega simbólica de sus cartas de renuncia. La idea era que, con ello, el presidente de la República pudiera tener las manos libres para decidir cualquier cambio de cara al año siguiente.

Para 1992, esa norma no escrita estaba vigente. Y todos firmaron sus cartas de dimisión, durante un ágape que se brindó a todos los ministros en Palacio de Gobierno, el 30 de diciembre.

Al culminar la celebración, Oscar de la Puente Raygada, presidente del Consejo de Ministros, le dijo a Alfredo Ross Antezana —ministro de Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción— y a Carlos Boloña que se quedaran unos minutos más.

—Se ha decidido no continuar con sus servicios para 1993. Viene una coyuntura crítica para el gobierno, donde sus sectores son los más complicados. No tenemos problema alguno en que sigan colaborando en puestos en el exterior. En su caso, doctor Boloña, le podría esperar un alto cargo en el Fondo Monetario Internacional.

—Agradezco que usted, doctor de la Puente, me indique en forma directa que no desean contar con mis servicios. Sobre lo segundo, vine sin pedir nada y me voy sin pedir nada.

—Piénselo de todas maneras, doctor Boloña.

Pasaron las fiestas de fin de año y Boloña salió de la ciudad con su familia. No se filtró nada a la prensa. Recién el 2 de enero, Fujimori reconoció en un programa radial que podrían venir cambios. Para el día 4, de la Puente citó a Boloña en la Escuela Militar de Chorrillos. Allí estaba Fujimori y también Ross. El presidente fue claro:

—Va a haber mucha presión en sus sectores y, por estrategia política, no van a continuar.

—Señor presidente, me hubiera gustado que usted, en forma directa, me comunicara, luego de casi dos años de trabajo, que no voy a seguir en el cargo. Me gustaría saber cuál es su evaluación

política. El gobierno tiene mayoría en el Congreso Constituyente Democrático, la oposición no está en buen pie. ¿Las presiones son de los gremios empresariales? Yo puedo capearlas.

—Por estrategia política, usted no puede continuar.

—Bueno, usted tiene la libertad de escoger con quien trabaja. Pero los términos de la renuncia están en esta carta que le entrego.

—Doctor Boloña, aún tenemos vigente el ofrecimiento de un puesto en el Fondo Monetario Internacional.

—Se lo agradezco, presidente, pero me dedicaré a mis actividades privadas.

—Solo una cuestión final, doctor Boloña. ¿Usted apoyará lo que haga este gobierno?

—Dependerá de lo que se hiciera.

—Bueno, pues, buenas noches.

—Buenas noches, presidente.

El reemplazo de Boloña fue el ingeniero Jorge Camet, quien se venía desempeñando como ministro de Industria.

Como ya hemos anotado, el nuevo ministro había sido presidente de CONFIEP, el principal gremio empresarial del país. Boloña temía que su sucesor pusiera un freno a las reformas. Ello no se produjo tanto por los compromisos internacionales asumidos por el Perú, como por el hecho de que el nuevo ministro mantuvo a buena parte del equipo de asesores de Boloña, con las adiciones de Roberto Abusada —quien había trabajado en el plan económico del FREDEMO— y el exministro de Industrias Iván Rodríguez.

Pero Camet le imprimiría un sello más mercantilista al MEF, conforme avanzara la década[81].

Si bien el gobierno era popular y había conseguido mayoría parlamentaria, una prueba adicional de su posibilidad competitiva eran las elecciones municipales, que se debieron haber realizado en noviembre de 1992 y finalmente se llevarían a cabo el 29 de enero de 1993.

Dentro del gobierno hubo una disputa sobre los comicios. Para Alberto Fujimori, esta era la oportunidad para expandirse a otros ámbitos de gobierno. Sin embargo, Santiago Fujimori consideró que era mejor no competir, pues los cuadros eran escasos y, además, se

podían terminar eligiendo a alcaldes bajo el membrete del gobierno que pudieran ser corruptos. Los hermanos llegaron a una fórmula de transacción: no se presentarían en todas las provincias, pero procurarían participar en aquellas donde sintieran que tendrían opciones de ganar.

Para la alcaldía de Lima, Fujimori presentó como candidato a Pablo Gutiérrez, alcalde del distrito de Chorrillos. Gutiérrez era un independiente que tenía la hegemonía en un distrito que había transformado su perfil de balneario tradicional para dar cabida a miles de migrantes de varias zonas del país. Sin embargo, no logró calar en el electorado limeño, debido a su escasez de ideas en la ciudad y su poco carisma. A pesar de que Fujimori quiso trasladarle su popularidad, no pudo. Catorce días antes de la elección, Gutiérrez fue retirado de la contienda. El anuncio lo hizo el propio mandatario en el sintonizado programa radial Enfoque de los sábados, transmitido en Radio Programas del Perú:

—Decidimos el retiro en una conversación aquí en el Salón Grau (de Palacio de Gobierno).

—Pero la doctora Martha Chávez decía ese mismo día que no sabía nada.

—En realidad, fue una reunión de lo que vulgarmente se llama la cúpula. Nuestra organización no es tan perfecta, no tenemos esa comunicación. Cambio 90 no es un partido tradicional. No queremos serlo tampoco.

Así, la contienda quedó entre dos postulantes. De un lado, el exalcalde de Arequipa, Luis Cáceres Velásquez, miembro de una familia política con gran ascendiente en el sur del país, con modales ásperos, quien representaba el voto más popular. Cáceres postulaba con el movimiento Lima al 2000.

De otro lado, Ricardo Belmont Cassinelli, quien se presentaba a la reelección por Obras, empleando los mismos recursos de campaña: a la notoriedad mediática y la ausencia de un plan de gobierno, contraponía el hecho de que podía exhibir infraestructura construida durante su gestión. La obra más importante era el Intercambio Vial Sur, que inauguró en diciembre de 1992 junto a Fujimori.

A Belmont la estrategia le brindó resultados. En apenas catorce días, con una masiva exhibición de sus obras en su canal de televisión y un endoso al vuelo de Fujimori, buscando un «segundo tiempo» como alcalde, ganó con 47 % de los votos.

Pero la real ganadora sería una abogada, electa como regidora en las filas de Lima al 2000 —movimiento en el que había escalado posiciones rápidamente—, pero que, tres días después de la juramentación de regidores, ya había sido nombrada presidenta de la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad Metropolitana de Lima y pasaría a las filas de Obras. La regidora, quien había trabajado en el Instituto Nacional de Cultura en el primer gobierno aprista, respondía al nombre de Laura Bozzo Rotondo[82].

En enero de 1993, se instaló el Congreso Constituyente Democrático. Con facilidad, Jaime Yoshiyama fue elegido presidente de la institución, mientras que Carlos Torres y Torres Lara ocupó la presidencia de la Comisión de Constitución, el grupo de trabajo clave para armar el proyecto que se presentaría al país vía referéndum.

Con Yoshiyama a la cabeza, el grupo parlamentario Cambio 90-Nueva Mayoría rápidamente haría sentir su estilo. Los debates fueron bastante acotados en tiempo, sobre todo, para la oposición. Era notoria la imposición de la mayoría en número, a tal punto que no se respetó la proporcionalidad para el reparto de presidencias de comisiones, que quedaron todas en manos de los fujimoristas. Además, se instauró el uso del bíper para llamar al orden a la bancada oficialista, que comenzó a reunirse por separado en lo que se conocía como «plenito».

El gobierno no solo tenía a la bancada oficialista de su lado. Tradicionalmente, Renovación, el grupo conservador encabezado por Rey, terminaba votando con el fujimorismo, con la solitaria excepción del constituyente y exfiscal de la Nación Gonzalo Ortiz de Zevallos. Asimismo, se fueron sumando al bloque gobiernista dos parlamentarios electos en las filas del Frente Independiente Moralizador (César Larrabure y Julio Chu Meriz), Pablo Cruz Arrunátegui que había sido electo por el PPC y los dos parlamentarios del FREPAP (Mario Paredes Cueva y Eusebio

Vicuña Vásquez). El bloque opositor estaba conformado por el PPC, el SODE, el MDI, el FIM, Coordinadora Democrática y el FRENATRACA.

Para el fujimorismo, eran cuatro los temas clave de la Constitución: la aplicación de la pena de muerte a los sentenciados por terrorismo, la modificación del capítulo económico, la reforma educativa y la posibilidad de la reelección presidencial inmediata.

Sobre el primer punto, el gobierno era el más interesado en aprobar la norma. No solo se buscaba reafirmar una línea dura frente al terrorismo, sino que aún se evaluaba la posibilidad de mandar a algún cabecilla de las organizaciones subversivas al paredón.

En este punto, la oposición tuvo aliados en la sociedad civil. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización paraguas de las ONG comprometidas con este tema, inició una campaña cuestionando esta medida. En junio, la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en contra de la pena de muerte, por cuestiones de principio.

La única excepción eclesial fue Juan Luis Cipriani, obispo de Ayacucho, quien dijo en su homilía por Fiestas Patrias que «No podemos permitir que por el miedo, temor y cobardía de unos cuantos el país no apruebe la pena de muerte». Ya Cipriani se había pronunciado a favor de la condena a la pena capital a Abimael Guzmán en octubre de 1992. La voz del obispo del Opus Dei era la única a favor de la medida en la cúpula de la Iglesia Católica en el Perú.

En la práctica, la inclusión de esta cláusula fue inocua. Se colocó una fórmula que incluía el delito de terrorismo para la aplicación de la pena capital «conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada». Con ello, en la práctica, dado que nuestro país era parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se podría aplicar nunca esta sanción[83].

En marzo de 1993, el Congreso Constituyente Democrático aprobó una norma que creó el Jurado de Honor de la Magistratura. Se trataba de un organismo provisional que se encargaría de la revisión de casos de los magistrados cesados luego del golpe de

Estado de 1992, la ratificación de los vocales y fiscales supremos designados inmediatamente después de la ruptura del orden constitucional y el nombramiento de magistrados titulares en diversas instancias judiciales y fiscales. Estas decisiones debían ser ratificadas por el CCD.

El Jurado de Honor de la Magistratura estuvo conformado por cinco abogados de reconocida trayectoria: Miguel de Althaus, Manuel de la Puente y Lavalle, Jorge Ramírez Díaz, Fernando de Trazegnies y Guillermo Velaochaga Miranda. Diversas fuentes coinciden en señalar que fueron Santiago Fujimori y Jaime Yoshiyama quienes los convocaron.

La evaluación sobre la actuación de la entidad es mixta. Algunos juristas señalaron que, en términos generales, las decisiones tomadas por los cinco abogados convocados fueron despolitizadas. Sin embargo, otros expertos dicen que se ratificaron a magistrados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que resultaron funcionales al régimen.

A pesar de sus esfuerzos, el Jurado no pudo resolver el problema de la provisionalidad, que marcaría el resto de la década en el sistema de justicia. Resultó evidente que, dada su precariedad en el puesto, los jueces y fiscales provisionales estarían más sujetos a recibir presiones políticas[84].

Copa América de 1993. Mientras los hinchas peruanos esperan una actuación decorosa de una selección de fútbol que andaba en tumbo tras tumbo, la publicidad se concentra en un rubro que resulta novedoso: las administradoras privadas de fondos de pensiones.

El torneo subcontinental —en el que Perú llegó a los cuartos de final, en forma sorpresiva— se convirtió en la pasarela de ensayo para que se mostrasen los anuncios televisivos de las AFP, que comenzarían a captar a sus primeros clientes en aquel año. En uno de ellos se veía a periodistas, animadores, actores y cómicos proclamando el nombre de su elegida, utilizando la técnica de morphing que caracterizó al video Black and White de Michael Jackson. Otro apostaba por sus socios internacionales, que le daban seguridad y confianza. Y no faltó quien hizo animaciones para mostrarse amigable con los trabajadores. Todo un festival de

spots para captar nuevos asociados. Al inicio, surgieron ocho AFP en el mercado, pero apenas tres años después se habían producido tres fusiones.

Al final de su periodo como ministro de Economía, Carlos Boloña logró aprobar, mediante decreto ley, la norma que traía al país el sistema de administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), creado por José Piñera durante la dictadura de Pinochet en Chile. La idea era que cada persona aporte un porcentaje de sus ingresos a un fondo de capitalización individual, que se incrementaría con las inversiones que hicieran las AFP en diversas empresas.

Las administradoras de fondos de pensiones comenzaron a invertir en empresas grandes y tuvieron asesoría chilena, dado que nuestro vecino del sur ya había ensayado el modelo con relativo éxito. La polémica se instaló cuando Boloña terminó de directivo de una de las nuevas entidades. Solo un año después, Boloña salió de ese negocio.

Sin embargo, las AFP tuvieron un techo complicado: 70 % de la fuerza laboral peruana era informal, cifra que no se movería durante las dos décadas y media siguientes. Por tanto, la mayor parte de los peruanos no tenía un ahorro para su vejez, en forma de fondo de capitalización. Asimismo, la norma tampoco contempló la posibilidad de una pensión mínima en el sistema privado de pensiones y, además, otra crítica desde los usuarios se encuentra en las altas tasas de la comisión que cobran estas empresas por administrar los fondos. Hasta el día de hoy, muchos peruanos dependerían del apoyo familiar para poder contar con una situación digna en el tramo final de sus días. La reforma del sistema pensionario peruano es un hito pendiente, a pesar de que ya existen informes serios que la recomiendan desde hace varios años[85].

Sin duda, el gran debate de la Constitución de 1993 fue la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Desde el inicio de la discusión constitucional, los congresistas oficialistas colocaron como uno de los puntos centrales la posibilidad de otorgar un mandato adicional a Fujimori, quien tampoco ocultaba la esperanza de poderse reelegir para completar una década en el poder.

De hecho, en febrero de 1993, Martha Chávez había señalado que se propondría la reelección presidencial inmediata e, incluso, la posibilidad de que fuera indefinida. Esta última opción solo fue votada a favor por ella y por Joy Way en la comisión de Constitución. Para Torres y Torres Lara y la mayoría parlamentaria, la posición congruente con los estándares internacionales era permitir una sola reelección inmediata.

Pocas fueron las constituciones peruanas que reconocieron la reelección inmediata. La Constitución de 1826, promulgada por Simón Bolívar, establecía que el presidente pudiera ser electo en forma indefinida hasta su muerte. Sin embargo, tuvo una corta vigencia. Su sucesora de 1828, estableció la posibilidad de una reelección inmediata, al igual que las cartas de 1834 y 1856.

Inicialmente, la Constitución de 1920, promulgada durante el periodo de Augusto B. Leguía, tampoco la contemplaba, pero la bancada oficialista modificó dos veces la carta para permitir que el dictador se pudiera perpetuar en el poder. De hecho, la reelección inmediata terminó siendo, junto con la Gran Depresión, causa de la caída de Leguía. Esta experiencia hizo que las constituciones de 1933 y 1979 prohibieran esta posibilidad para el presidente de la República.

De allí que pudiéramos ver discusiones y frases de este tipo en el Congreso Constituyente Democrático:

Fernando Olivera:

—Por eso es que nosotros venimos a denunciar, una vez más, que aquí está la verdadera causa de la convocatoria de este Congreso Constituyente, el reconocer, el dar viso de legalidad a un proyecto personal, autoritario: es la reelección del actual mandatario y la concentración del poder en la persona del actual mandatario.

Carlos Torres y Torres Lara:

—La democracia más representativa de América Latina está en Costa Rica, allí hay un secretario general de un partido de la oposición. Esa persona que está allá en Costa Rica, que se dice es donde existe la mayor democracia, sabe que dicho país tiene una sola cámara. Y la Constitución de ese país democrático fijó la

reelección. Aprovecho para saludar a Costa Rica, que es distinguido como un país generalmente democrático.

Julio Castro Gómez:

—Además, creemos que con la figura de la reelección presidencial se está haciendo, evidentemente, una Constitución para un proyecto personal.

Roger Cáceres Velásquez:

—Estoy, señor presidente, definitivamente en contra de que haya reelección. Creo que la reelección lleva a la necesidad, en el hombre que gobierna, de tener que buscar por todos los medios posibles la reelección.

Anastasio Vega Asencio:

—Nosotros, señor presidente, estamos por la reelección presidencial inmediata, porque esto implica cortar de plano con lo tradicional y con lo histórico de grupos, de cúpulas, de familias, que se distribuían, integrando en diferentes partidos, para estar presentes siempre en el poder y obtener beneficio para sus intereses personales y sus intereses subalternos, lejos de preocuparse de las grandes mayorías, de los pueblos y de las comunidades campesinas olvidadas del Perú profundo.

Manuel La Torre Bardales:

—Voy a decir algunas cosas de por qué la reelección inmediata: para darle a la democracia la verdadera expresión, la auténtica expresión de democracia; para que el pueblo peruano tenga la oportunidad de ver al que ha sido presidente nuevamente de candidato, si así lo requiere; y si es candidato, el pueblo peruano tenga la oportunidad, con su voto, libremente de elegirlo o de no elegirlo. Esa es la auténtica y verdadera democracia.

Juan Carpio Muñoz:

—Y, sin ningún tipo de hipocresía, señor, corriendo el riesgo que me corro porque todo político corre el riesgo, señores, al fundamentar o al emitir un voto y soy consciente del riesgo al que me adscribo, tomo la carta, señor, de que es necesaria la reelección del presidente Fujimori, y es necesaria que se le autorice para que el pueblo dé su palabra, por la siguiente razón: el presidente Fujimori hoy personifica a la nación, pero con disculpas de tan

elevada magistratura principalmente personifica la reforma en curso en el Perú; y esa reforma recién está empezando, necesita consolidarse, señor.

Manuel Moreyra:

—La redacción pareciera decir que es por una sola vez; sin embargo, lo que este artículo dice, por lo menos como está redactado aquí, es «por una vez más». Por lo tanto, si esta norma se va a aplicar de ahora en adelante para todos sin excepción, resulta evidente que también para el actual presidente de la República habrá una oportunidad para una próxima reelección adicional. O sea que, por lo pronto, tiene derecho a dos períodos adicionales, por lo menos como está redactado.

Frente a la (profética) intervención de Moreyra, Torres y Torres Lara debió aclarar, el 4 de agosto de 1993, que el primer periodo computable para la reelección inmediata, en caso sea aprobada, sería el iniciado en 1990. Una declaración que sería recordada tres años más tarde.

La reelección presidencial inmediata fue aprobada en el pleno del Congreso Constituyente Democrático por 51 votos de 80 posibles.

El otro gran cambio político del proyecto de Constitución era que el Congreso de la República dejaría de tener dos cámaras, como había sido la tradición histórica peruana. A partir de 1993, el parlamento sería unicameral y tendría un número reducido de parlamentarios: 120 (hasta 2011, que se amplió a 130). La idea que se vendió a los ciudadanos es que habría mejores leyes, en forma más rápida, con un poder del Estado menos costoso y no se perdería tiempo en debates. A la par, se permitía que el presidente de la República estuviera facultado para disolver el Congreso de la República constitucionalmente, a condición de que se hayan censurado dos gabinetes completos[86].

Si bien es cierto que la captura de Abimael Guzmán consiguió que las acciones de Sendero Luminoso disminuyeran, no llegaron a desaparecer del todo. Para ello, se buscaron otros instrumentos, algunos controvertidos, otros no tanto. En lo policial, la DINCOTE continuó con las capturas, aunque el GEIN fue finalmente desarticulado.

La Ley de Arrepentimiento fue una norma emitida durante el periodo de facto que buscaba ayudar a la desarticulación de las organizaciones terroristas. La idea de este dispositivo era que las personas que habían sido mandos medios, bases o simples colaboradores de Sendero Luminoso y el MRTA dejaran la organización, sin posibilidad de sanciones por parte del Estado, a cambio de que entreguen información clave para capturar a otros terroristas.

Aunque buena parte de los expedientes se tramitaban en privado, el gobierno hacía ceremonias públicas con arrepentidos quemando las banderas de Sendero Luminoso y el MRTA con un doble mensaje: el terrorismo está siendo desarticulado y es el gobierno el responsable.

Sin embargo, existían dos problemas con la norma. De un lado, el contexto autoritario en el que se emitió y aplicó, lo que hacía que cualquier tipo de control fuera ineficiente. Y, de otro lado, la existencia de «cuotas» de arrepentidos y condenados, que marcaban la necesidad de pedir información que no necesariamente era corroborada. En muchos casos, se acusó a personas inocentes, por venganza personal, familiar o por mera confusión. En otros, también se incluyó a personas que habían colaborado con la subversión, bajo amenaza. Y, como ocurrió durante todo el periodo de violencia, los afectados fueron las personas más excluidas del país.

En 1993, una Comisión de Juristas Internacionales presidida por el abogado Robert Goldman —expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— presentó un informe bastante duro contra varias de las normas para el procesamiento de la subversión en el Perú. La Comisión señalaba que había una tipificación similar entre los delitos de terrorismo y traición a la patria que hacían que el segundo tuviera que ser derogado, pues su único propósito era que se llevaran a civiles ante tribunales militares. Al mismo tiempo, se cuestionaba la medida de colocar jueces sin rostro, es decir, magistrados cuya identidad no se conocía y que, en varios casos, eran militares. Para el grupo de trabajo, la consecuencia era lógica: la revisión de las condenas y nuevos

juicios ante tribunales civiles. También se cuestionaba las condiciones carcelarias, así como la tipificación de la apología del terrorismo.

Como era de suponer, la reacción del gobierno de Fujimori fue furibunda. Sin embargo, el informe Goldman era respaldado por la administración Clinton, que tenía cierto énfasis mayor en la expansión de la democracia y los derechos humanos[87].

Habíamos dejado a Abimael Guzmán ya condenado a cadena perpetua, en proceso de ser trasladado desde la Isla San Lorenzo —su prisión primigenia— a una cárcel de máxima seguridad que se estaba construyendo en la Base Naval del Callao. La prisión no solo era inexpugnable de ataques externos, sino que, virtualmente, cualquier intento de fuga estaba controlado.

Como habíamos señalado, Montesinos tejió una relación de trabajo con Guzmán. Y para ello comenzó a dar una serie de concesiones al supuestamente duro líder terrorista. El asesor permitía que Guzmán tuviera reuniones y paseos permanentes con Elena Iparraguirre, interna en el mismo penal, así como le remitía tortas de cumpleaños para ambos. Al mismo tiempo, se trasladaba a algunos líderes de Sendero Luminoso a conversar con Guzmán. Hacia afuera, sin embargo, se buscaba dar una imagen de dureza con el terrorismo y con las condiciones carcelarias del criminal más despiadado de la historia contemporánea.

Para el primer aniversario de la captura de Guzmán y su cúpula, Fujimori exhibió una serie de videos en los que se apreciaba la supuesta dureza en el tratamiento del líder terrorista, a quien se le veía en su hora de salida al patio de la prisión de la Base Naval.

Posteriormente, en las semanas cercanas al referéndum para aprobar la Constitución de 1993, Fujimori y Montesinos comenzaron a jugar una carta arriesgada. Ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a fines de septiembre de 1993, el mandatario anunció que Guzmán estaba dispuesto a firmar un Acuerdo de Paz con el Estado peruano.

Pocos días después, ya en octubre de 1993, se propaló un video en el que Guzmán aparecía solo con bigote y con menos peso, junto a Elena Iparraguirre. Allí el líder senderista leía una carta

proponiendo el famoso Acuerdo de Paz. La mano de Montesinos apareció en el encuadre por breves segundos, entregando el documento. A partir de la exhibición de la cinta, Fujimori señaló que era un éxito de su gobierno que los líderes de la organización terrorista se sentaran a la mesa.

Una semana después, Fujimori apareció con un nuevo video. Aquí Guzmán era aún más sorprendente. Reconocía las reformas hechas por el régimen, así como los logros del gobierno, sobre todo, en materia de lucha contrasubversiva, a la que calificó como «sistemática y coherente». El discurso había sido elaborado, en realidad, por Rafael Merino.

Sin embargo, Sendero Luminoso terminó partiéndose en dos. Una facción «acuerdista», encabezada por Guzmán, donde estaba la mayoría de encarcelados. Y un grupo que buscaba proseguir la lucha armada, que era liderado por el único miembro del comité central que estaba en libertad: Oscar Ramírez Durand. Precisamente, la facción de «Feliciano», como era conocido este último, comenzó una ola de atentados en Lima durante las semanas siguientes al anuncio de Abimael[88].

«Nunca tuvimos la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad». Esa fue la tonada del spot que lanzó el gobierno con un doble objetivo: difundir sus logros y empatarlos con la campaña para aprobar la nueva Constitución, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático. Un segundo aviso televisivo elaborado por el oficialismo tenía otra melodía pegajosa: «Al Perú que quieres dile Sí». Ambos spots fueron bastante difundidos en todos los canales durante el mes de octubre de 1993. La elaboración estuvo a cargo de Daniel Borobio, un publicista argentino, experto en jingles, que se convirtió, durante muchos años, en el principal asesor de imagen y marketing político de Fujimori.

Por su parte, la oposición no pudo comprar ningún espacio televisivo por el No, limitándose a pronunciamientos y espacios en prensa escrita.

A las 5.00 p. m. del domingo 31 de octubre de 1993, las encuestas a boca de urna indicaban una ventaja de 10 puntos a favor del Sí. Sin embargo, la diferencia se acortó hasta que la

victoria fue bastante ajustada. La Constitución solo fue aprobada por 52.3 % de los peruanos. Desde la oposición, se señalaron acusaciones de fraude, concentradas en Lima, principal bastión del Sí. Años más tarde, el exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones, Juan Chávez Molina, publicó un libro en el que insinuaba que las versiones opositoras eran ciertas.

¿Por qué se dio un resultado tan ajustado? Una cuestión estrictamente coyuntural estuvo en la serie de atentados de la facción «Proseguir» de Sendero Luminoso, que tuvo un impacto fuerte en Lima y en algunas ciudades grandes del país. Al mismo tiempo, el uso de las cartas de Abimael Guzmán pidiendo un «acuerdo de paz» al gobierno tampoco cayó bien. Según una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado, el 56 % de peruanos rechazaba la presentación de las misivas del líder senderista en vísperas del referéndum.

Pero se puede achacar la mayor responsabilidad del resultado del referéndum al triunfalismo del gobierno, que pensaba que su alta popularidad le daría, por añadidura y sin esfuerzo, la victoria. Peor aún, Fujimori condicionó su permanencia en el poder a que el referéndum le sea favorable:

—Quiero ser franco. Lo que está en juego, en corto, es la aprobación o desaprobación del presidente —dijo el mandatario.

Fujimori era bastante duro con la oposición. Llegó a decir que la desaprobación a su constitución conllevaría la resurrección de viejos políticos de la alianza «apro-comunista» y que la oposición buscaría provocar una intervención militar. La campaña oficialista buscó, por primera vez, asustar a los peruanos con los supuestos peligros que llevaría no votar por ellos, entre ellos, el retorno del terrorismo y la inestabilidad económica.

Yoshiyama también apelaba en sus intervenciones públicas a las promesas del texto constitucional en materia económica: vendrán nuevos negocios, industrias y trabajos, sostuvo el presidente del CCD. El texto constitucional reducía el rol del Estado en la economía, en particular, en materia empresarial. Asimismo, se reforzó el derecho de propiedad, se equiparó los derechos entre empresas nacionales y extranjeras y, antes que prohibir monopolios,

se penalizaba el abuso de posición de dominio. Asimismo, se eliminó la estabilidad laboral absoluta en los puestos de trabajo y el derecho de huelga debía «ser ejercido en armonía con el interés social».

Para reforzar la campaña, el gobierno difundió por la televisión Tres años que cambiaron la historia, un documental encargado a la empresa Edimovie, donde el régimen construyó su narrativa: Fujimori había vencido a una clase política corrupta e ineficiente, que no daba resultados, frente a la cual, el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 constituía una liberación y traía resultados, como la captura de Abimael Guzmán, la recuperación económica y el impedimento de una «república cocalera». El propio Fujimori intervino en la presentación final de la cinta, propalada en varias partes. Era un producto destinado a establecer un relato predominante en la sociedad peruana: el cambio versus el inmovilismo, como señalaría el biógrafo de Fujimori, Luis Jochamowitz[89].

Desde la oposición, la campaña se inició en mayo, cuando el texto final de la Constitución había sido aprobado por el CCD. La incidencia mayor se dio fuera de Lima, donde los temas más criticados fueron el diseño centralista de la nueva carta —cuestión alertada por los principales dirigentes de la Asociación de Municipalidades del Perú, pertenecientes a Acción Popular y al APRA—, los cambios alrededor de los derechos sociales —en particular, la gratuidad de la enseñanza y los derechos laborales— y, en menor medida, temas como la pena de muerte y la reelección presidencial. También se incidió mucho en demandas regionales puntuales.

Para ello, se formó el Comité Cívico por el No, donde se reunieron la mayoría de los partidos opositores, así como sindicatos y grupos regionales. El Partido Popular Cristiano hizo campaña por su cuenta.

Al mismo tiempo, diarios como El Comercio y La República señalaron los problemas del texto: para el diario de la familia Miró Quesada, las preocupaciones estaban en una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo. Mientras que el periódico de

la familia Mohme enfatizaba, además de los problemas institucionales, el modelo económico y social de la Constitución como excesivamente liberal.

Si bien 1993 terminaba con una victoria, comenzaba a quedar claro para el gobierno que no tenía una figura de reemplazo para Fujimori. Pero, por ahora, no la necesitaban. La reelección inmediata quedó aprobada[90].

---

81 La salida de Boloña está retratada por él en *Cambio de rumbo* (1993: V-VIII). Sobre el historial de Camet, consultamos Murakami (2018: 348-350), Bowen (2000: 188-189), el artículo de Durand «Dinámica política de la corrupción y participación empresarial» en Portocarrero Suárez (2005: 311) y Dargent (2014: 99).

82 Lo ocurrido en las elecciones municipales de 1993 se basa en Murakami (2018: 350-351), Planas (2000: 271-274), el artículo de Barr y Dietz «Fujimori and the mayors of Lima, 1990–2001: The impact and legacy of neopopulist rule» en Carrión (2006: 69-70) y Tanaka (1999: 16). Sobre Bozzo, nos basamos en la crónica «La Candidata» de Juan Manuel Robles, en Gamarra (2007: 196-204). El diálogo sobre la salida de Pablo Gutiérrez aparece en el número 4 de *Argumentos,* boletín de coyuntura política y económica del Instituto de Estudios Peruanos (https://argumentos-historico.iep.org.pe/noventas/1993-no-4/).

83 Sobre el funcionamiento del Congreso Constituyente Democrático, nos basamos en Bowen (2000: 209-210), Murakami (2018: 351-356) y Pease (1995: 36-45). En torno a la pena de muerte para terroristas, el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 112–113) y Youngers (2003: 280-282) son claves para entender el debate.

84 En torno al Jurado de Honor de la Magistratura, revisamos Dargent (2006: 145-146) y de Belaúnde (1999: 313-315). Pease, por su parte, es bastante duro con esta entidad (2003: 291-292). Murakami (2018: 456) y Pease (2003: 290) coinciden en indicar la influencia de Santiago Fujimori y Yoshiyama en el nombramiento de sus miembros. Sobre la provisionalidad y, en general, sobre los problemas de la reforma de justicia, conviene revisar Pásara (2019: 21-26).

85 En torno a las AFP, nos basamos en el conocimiento propio del sistema y en Bowen (2000: 202-204) También revisamos los *spots* de las entidades que se encuentran en YouTube.

86 Los antecedentes sobre la reelección presidencial inmediata se encuentran en Rubio Correa (1999: tomo IV: 267-273). Sobre la discusión, nos basamos en el *Diario de Debates* del Congreso Constituyente Democrático. También consultamos Conaghan (2005: 56-59).

87 Sobre el enfrentamiento de lo que quedaba de Sendero Luminoso y la legislación para procesar al terrorismo nos basamos en Burt (2011: 294–303), Bowen (2000: 162-180), McClintock y Vallas (2005: 235-236), Youngers (2003: 253-256, 294-296) y en el Informe

de la Comisión de Juristas Internacionales de 1993. También revisamos el texto de Dargent «Hijos de un dios menor. Cifras, súbditos e inocentes», en Dargent y Vergara (2000: 111-176).

88 El camino hacia el Acuerdo de Paz enunciado por Guzmán y delineado por Montesinos es descrito en Bowen y Holligan (2003: 152-159) y Jochamowitz (2019a: 115-123), así como en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo II: 119-126).

89 El dato sobre el documental *Tres años que cambiaron la historia* está en Burt (2011: 335) y la versión completa puede verse en YouTube. Datos complementarios aparecen en Jochamowitz (2018: 352-353) y en «The last peasant war in the Andes» de Rénique y Lerner, en Soifer y Vergara (2019: 47-48).

90 Sobre el referéndum, revisamos Bowen (2000: 210), Conaghan (2005: 59-66), Murakami (2018: 356-361), Pease (1995: 46-51), y Degregori (2012: 43-44). También consultamos el texto de Maxwell Cameron «From oligarchic domination to neoliberal governance», en Soifer y Vergara (2019: 91-94).

LOS OTROS CRÍMENES DE COLINA Y SUS EXINTEGRANTES

(Enero, 1992 – Diciembre, 1993)[91]

El 29 de enero de 1992, los integrantes del destacamento Colina cometerían su segunda acción criminal. En diciembre del año anterior, se habían recibido informaciones sobre supuestas acciones terroristas en Pativilca, distrito de la provincia de Barranca, ubicado en el norte del departamento de Lima. En efecto, entre 1991 y 1992 se produjeron más de cien acciones senderistas en el Norte Chico.

Pero, en realidad, más allá de la actividad subversiva, lo que existía en este caso en particular era una disputa de tierras. Un empresario que mantenía un diferendo por terrenos en los anexos Caraqueño y San José acusó a pobladores de la zona de pertenecer a Sendero Luminoso y solicitó ayuda a un familiar para que lo conecte con Nicolás Hermoza Ríos y este lo pueda ayudar. Martín Rivas acudió con sus hombres en tres portatropas junto a un listado de nombres predefinido por agentes de Inteligencia. Recogió a un colaborador para que señale las casas de las personas a las que iban a detener. Entraron a las viviendas a la fuerza. Sacaron a un maestro, líderes campesinos y un adolescente de diecisiete años.

Una vez detenidos, las seis personas fueron conducidas a un cañaveral, donde fueron interrogadas por los integrantes del destacamento, con torturas. Acto seguido, fueron ejecutados extrajudicialmente. Se les encontró boca abajo, amarrados. Algunos de los cuerpos tenían quemaduras hechas con soplete y muestras de tortura. Dos de los cuerpos tenían evidencias de vejaciones sexuales.

Las víctimas fueron César Olimpio Rodríguez, Ernesto Arias Velásquez, Pedro Agüero Rivera, Felandro Castillo Manrique, Toribio Ortiz Aponte y Jhon Calderón Rivas.

Para dar la apariencia de que los crímenes fueron cometidos por Sendero Luminoso, los miembros del destacamento comenzaron a hacer pintas con las frases «Así mueren los soplones. Viva el PCP-SL».

El caso Pativilca se conoció gracias a la confesión del exintegrante del destacamento Jorge Ortiz Mantas, quien se acogió

a la colaboración eficaz en 2007. En 2017, la Corte Suprema de Chile amplió la extradición por este caso. Al cierre de este libro, Fujimori está a punto de acudir a un nuevo juicio oral por él[92].

En enero de 1992, Colina iba a ejecutar un asesinato de alto perfil. La víctima sería Javier Diez Canseco, un combativo senador de izquierda. Nacido en una familia acomodada y con las secuelas de una poliomielitis infantil, el político había comenzado su carrera como dirigente universitario en la Pontificia Universidad Católica y pasó a integrar las filas de Izquierda Unida como parte del Partido Unificado Mariateguista, uno de los grupos más radicales de ese sector político.

Diez Canseco era uno de los fundadores de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una organización no gubernamental dedicada a la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos. Tanto APRODEH como Diez Canseco eran considerados por los militares como supuestos aliados de la subversión, a pesar de que la entidad y el parlamentario siempre fueron claros en deslindarse de Sendero Luminoso. Esta actuación ya le había costado actos de amedrentamiento, como un lanzamiento de dinamita a la puerta de su casa en 1990.

Precisamente, Diez Canseco había hecho suya la denuncia sobre el caso Barrios Altos y la venía impulsando desde el Congreso de la República. Ello hizo que el destacamento Colina planteara su asesinato. Comenzaron a seguir sus rutinas. Martín Rivas y Sosa coincidieron en que el mejor lugar para el crimen sería la última cuadra del jirón Conde de Superunda, en el centro de Lima. Sin embargo, al mediodía del día planeado para el magnicidio, Martín Rivas abortó la misión.

Otro político de izquierda, Yehude Simon, fue objeto de seguimiento meses más tarde. Simon lideraba el movimiento Patria Libre, un grupo de la izquierda al que se le imputaban supuestas simpatías con el MRTA. Simon reconoce en la actualidad que, en sus años como diputado, usaba un lenguaje muy radical, pero niega cualquier vínculo con grupos subversivos.

El exparlamentario había estado fuera del país durante un mes, durante el cual se produjo el golpe de Estado encabezado por

Fujimori. Una vez que retornó, los miembros de Colina fueron enviados a vigilar el local de Patria Libre, que se ubicaba en la cuadra siete del jirón Cañete, en el centro de la ciudad.

Un grupo de integrantes del destacamento fue posicionado en un hostal cercano al local de Patria Libre para hacer la vigilancia y, en principio, sería desde dicho local que dispararían a Simon. Sin embargo, la operación se frustró por una discusión entre las agentes Iris Chumpitaz y Mariella Barreto quienes, alentadas por el consumo de algunas cervezas, discutieron por Martín Rivas, de quien Barreto era pareja y con quien Chumpitaz había tenido encuentros ocasionales. Esta pelea hizo que el plan no se ejecutara.

Semanas más tarde, el 11 de junio de 1992, Simon fue detenido por supuestos vínculos con el terrorismo. Recién lo sentenciaron en abril de 1993[93].

El Santa se encuentra a diez kilómetros de la ciudad de Chimbote, en el departamento de Áncash. Se trata de una zona donde las actividades predominantes eran la agricultura y la pesca. Y donde, al igual que en todo el Norte Chico, las actividades senderistas se incrementaron entre 1991 y 1992.

Sin embargo, la historia del crimen que puso en el mapa a esta localidad no tiene que ver con la lucha antisubversiva. En El Santa se ubicaba la Molinera San Dionisio, dedicada a labores vinculadas al azúcar y al algodón. La fábrica pertenecía a la familia Fung López. A fines de 1991, el colectivo Campesinos Sin Tierra protestó por los abusos en las compañías agrícolas y reclamó por el otorgamiento de parcelas a quienes no las tenían. En medio de las protestas, hubo un incidente con Jaime Fung, quien se acercó a los manifestantes y amenazó a algunos con una pistola.

En marzo de 1992, Molinera San Dionisio sufrió un atentado. Fueron afectadas las oficinas administrativas, máquinas y 50 fardos de algodón. Se sospechó que la autoría era senderista.

El 30 de abril de 1992, Martín Rivas y los jefes de los grupos del destacamento Colina se reunieron con los Fung en una casa en Miraflores. La orden de los empresarios era clara. Cinco personas les darían, en Casma, los datos de presuntos subversivos a los que habría que eliminar. Dos de los empleados de los Fung en la fábrica

serían sus guías en la zona. Cuando le preguntaron a Martín por qué se hacía un trabajo particular, él indicó: «Es un pedido del comandante general».

La alusión a Hermoza Ríos no era en vano. De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los Fung habían pedido a Hermoza que los ayudara con un problema en la empresa.

En la noche del 1 de mayo, los miembros de Colina ya estaban en Casma. A las 10.00 p. m., Martín Rivas hizo salir a todos a las barriadas Javier Heraud, La Huaca, San Carlos y San Andrés. Allí capturaron a Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López González, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More. En cada una de las intervenciones, hicieron pintas senderistas para dar la apariencia de un operativo de rastrillaje.

Luego de un percance con uno de los autos, la comitiva se dirigió a la Panamericana Norte, con dirección a Trujillo. En un lugar del valle del Chao, descendieron a los capturados y los ejecutaron extrajudicialmente.

Según la versión de Jesús Sosa Saavedra, el pago que les llegó por este trabajo fue exiguo.

Casi un mes antes de los sucesos de La Cantuta, el 24 de junio de 1992, el destacamento Colina perpetró su penúltimo crimen. Nuevamente, el blanco se ubicaba en el Norte Chico del país.

Pedro Yauri Bustamante, sociólogo y periodista, era conductor y director del programa Punto Final, transmitido en Radio Universal, en la ciudad de Huacho. El espacio era nítidamente de denuncia: actos de corrupción, vulneraciones a los derechos humanos en el marco de la lucha antisubversiva y una línea opositora al régimen de Fujimori.

Yauri se había pronunciado a favor de la liberación de Rafael Ventocilla Rojas y sus hijos Alejandro y Simón Ventocilla Castillo, quienes habían sido detenidos y torturados en mayo de 1992. La intervención de Yauri rindió frutos y estas personas fueron liberadas.

En 1989, el periodista había sido obligado a pasar una proclama del MRTA, lo que motivó una breve detención suya, en la que fue torturado por miembros de la Policía Nacional.

Todos estos eventos hacían que Yauri se convirtiera en un blanco para el destacamento Colina. Los miembros del escuadrón de la muerte partieron desde Las Palmas hacia Huaura. En la madrugada del 24 de junio, entraron por una vivienda vecina a la casa donde Yauri vivía con su padre, Anastasio Yauri. Los miembros del destacamento estaban con ropas de comando y aprovecharon la oscuridad para que sus rostros no se vieran. Su padre fue golpeado con una pistola y se llevaron al periodista.

Según exmiembros de Colina, Yauri fue llevado a una playa de Huacho. Allí lo esperaba Martín Rivas y una fosa a medio cavar. Luego de un infructuoso interrogatorio, comenzaron las torturas. Posteriormente, obligaron a Yauri a cavar aún más su propia sepultura. Sería Jorge Ortiz Mantas, por orden de Martín, quien daría muerte al periodista, con un disparo en la cabeza. Los restos del hombre de prensa no se han encontrado hasta el día de hoy.

El trabajo no se completaría allí. Los miembros del destacamento fueron por la familia Ventocilla. Esta vez, detuvieron al padre, sus tres hijos, uno de sus nietos y su hermano. Los seis fueron asesinados en un fundo. Cuando encontraron los cuerpos, presentaban signos de tortura y balas en la cabeza.

Entre los sucesos de Huacho y La Cantuta, ocurrió un hecho singular. El 27 de junio de 1992, Hermoza Ríos brindó un almuerzo de camaradería a los miembros del destacamento Colina.

El ágape fue coordinado por Martín Rivas. Asistieron, además de los agentes involucrados, Navarro y Rivero Lazo. Lo más importante del evento fue el discurso de Hermoza Ríos:

—Ustedes tienen todo nuestro respaldo. Pertenecen a la élite del Ejército. Todo lo que hacen tiene conocimiento del más alto nivel. No se preocupen por nada.

Hermoza llegó a calificar al destacamento como «la parte no visible de la institución que cumple un objetivo estratégico de la política de pacificación en el campo militar».

Varios de los miembros del destacamento Colina han reconocido estar en dicha reunión.

Como ya hemos visto, el caso La Cantuta y las diferencias sobre el manejo del destacamento Colina hicieron que el grupo se quebrara a fines de julio de 1992. Sosa volvió a su trabajo habitual de seguimientos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el Servicio de Inteligencia del Ejército.

Para julio de 1993, Sosa perseguía a un sospechoso de pertenecer a Sendero Luminoso, Justiniano Najarro Rúa, quien trabajaba como panadero en San Juan de Miraflores. El SIE lo responsabilizaba por la muerte de uno de sus agentes, sin mayor evidencia sobre su participación en el crimen, pero sospechaba de él por su pasado como docente de Filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la misma época en que Guzmán formaba la organización terrorista.

El 6 de julio de 1993, Najarro fue secuestrado por agentes del SIE cuando se dirigía hacia su domicilio. El grupo liderado por Jesús Sosa lo llevó hacia el Pentagonito, por órdenes del Puesto de Inteligencia Lima. Najarro fue encerrado en el calabozo del Cuartel General del Ejército e interrogado durante diez días. No le pudieron arrancar una declaración sobre la muerte del agente del SIE de la que lo acusaban. Fue asesinado por un balazo a quemarropa y sus restos fueron incinerados en el horno que tenía el Pentagonito para esos menesteres y la eliminación de documentos.

El 5 de octubre de 1993, el estudiante de la Universidad Técnica del Callao, Martín Roca Casas, fue intervenido por un equipo del SIE dirigido por Sosa. Según Uceda, en este caso en particular varias historias se cruzan: el presunto colaborador externo que habría seguido a Roca era Jesús Ríos Sáenz, supuesto jefe operativo del mal llamado Comando Rodrigo Franco. Roca fue detenido y llevado al Pentagonito. Sufrió exactamente la misma suerte de Najarro.

El último trabajo de Sosa para el SIE se realizó el 16 de diciembre de 1993. Ese día, secuestró a Kenneth Anzualdo, otro estudiante de la universidad nacional chalaca. Este alumno se había ofrecido como testigo en la desaparición de Roca. Fue detenido en un

ómnibus junto a otras dos personas, bajo la fachada de una investigación por robo. Al igual que Najarro y Roca, fue asesinado a bocajarro y sus restos fueron incinerados en el Pentagonito.

Por esos días, el fiscal Víctor Cubas emitió la acusación por el caso La Cantuta. Al mismo tiempo, la justicia militar buscaría una contienda de competencia por ello. Sosa fue llamado al SIE, por encargo del jefe Enrique Oliveros. Allí se acabarían sus diez años de labores de Inteligencia operativa clandestina, eufemismo para describir una carrera de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y encubrimiento.

---

91 Esta sección se basa, sobre todo, en Uceda (2018: 313-315, 319-324, 326-327, 411-413, 417-418, 421-422, 425-427), el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 577-593, 693-701) y la sentencia contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos.

92 Sobre el caso Pativilca, se consultó el informe de David Gómez Fernandini para el espacio periodístico dominical *Cuarto Poder* en 2018, así como el reportaje de Juana Avellaneda para el programa *Beto a saber* en 2017.

93 Datos adicionales sobre Simon aparecen en el perfil «Yehude Simon. El esclavo de las palabras» de Valencia (2009: 26-39).

EL APOGEO

(Enero – Diciembre, 1994)

12 de enero de 1994. Es un día caluroso en Cali. Demetrio Chávez Peñaherrera llama a su secretaria. Desde hacía algunos días notaba presencias sospechosas en la ciudad en la que residía. Pidió que empacaran sus cosas. No sabía que su llamada estaba siendo grabada por la policía colombiana.

El narcotraficante conocido como «Vaticano» había dejado Perú en julio de 1992. Las relaciones con Montesinos —que habían superado incluso un rechazo sexual por parte del narcotraficante— se complicaron cuando el asesor presidencial le pidió duplicar el cupo que pagaba mensualmente, para evitar las operaciones que el gobierno peruano hacía en conjunto con la agencia estadounidense antidrogas (DEA). Por un militar cercano, se enteró de que el socio de Fujimori le puso precio a su cabeza. Y voló hacia Colombia.

Aquel 12 de enero de 1994, Chávez Peñaherrera llegó a su vivienda en Los Arrayanes, una zona acomodada de Cali. La policía colombiana dejó que todo transcurriera con normalidad. El narcotraficante esperaba a su secretaria y a su piloto, Eduardo Ramírez Saavedra. Su plan era volar hacia Bogotá. Por la tarde, irrumpió la policía. Fue capturado junto a varios de sus colaboradores.

Durante su permanencia en Colombia, «Vaticano» había sido resguardado por el Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela. Sin embargo, ello no evitó que los oficiales de investigación en el país norteño tuvieran forma de infiltrarse en el mundo de lujo en el que los narcotraficantes podían lavar su dinero y dedicarse a exhibir su riqueza. Cuando el capo peruano supo que estaba perdido, intentó sobornar a los agentes que lo capturaron. No tuvo éxito.

Entre los documentos que la policía colombiana obtuvo, se hallaron libretas personales con anotaciones de números telefónicos y nombres como «Rasputín–Inte» o «Rasputin–Montecristo–Inte, Lima». Meses más tarde, en la agenda de otro narcotraficante, aparecieron anotaciones similares e incluso se ubicó el nombre de

Montesinos con la anotación «Jefe de Inte». Aunque los colombianos pasaron la información a la DEA, sus intentos fueron infructuosos.

El 14 de enero de 1994, «Vaticano» fue repatriado al Perú. De inmediato, se le abrió un proceso por traición a la patria, por supuestos nexos con Sendero Luminoso, a pesar de que el narcotraficante señaló que había combatido a la subversión. Con ello se le condenó a cadena perpetua y Montesinos consumó su venganza.

Como señuelo para la prensa, fueron convocados a las instalaciones de la Dirección Antidrogas de la Policía (DINANDRO) artistas como Susan León, Susy Díaz, Andrés Hurtado y Marilú Montiel, así como el estilista Segundo Gonzales «Chocco» y la exreina de belleza Lucila Boggiano. Todos estos personajes habían tenido contactos con la identidad de fachada de Chávez Peñaherrera: el empresario maderero Camilo Ferrer Picasso. Luego de una semana de indagaciones, el caso bajó de perfil. León y Montiel fueron vejadas durante su periodo de detención. Hurtado y León aludieron a supuestas presiones para no hacer las denuncias respectivas por el maltrato policial.

Si bien el caso se acallaría por unos años, «Vaticano» volvería a aparecer en la vida de los peruanos[94].

Para inicios de 1994, eran cuatro los miembros de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público: Blanca Nélida Colán, Miguel Aljovín Swayne, Pedro Pablo Gutiérrez Ferreyra y Nelly Calderón Navarro. Dado que la nueva Constitución ordenaba la elección del fiscal de la Nación a cargo de esta entidad, se procedió a hacer lo ordenado por el texto fundamental del país.

Y entonces, ocurrió lo inesperado. Colán y Aljovín empataron en la contienda. Y no había forma de dilucidar quién podría ser el fiscal de la Nación. Así, el oficialismo recurrió a una carta que sería cada vez más socorrida: una ley especial para favorecer sus intereses, con nombre propio.

Martha Chávez presentó un proyecto de Ley que establecía que «El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos en votación secreta. En caso de empate se procede a

una segunda votación. Si el empate se repite corresponde asumir el cargo de Fiscal de la Nación al Fiscal Supremo con mayor antigüedad en el cargo».

El proyecto también definía los criterios de prevalencia: fecha de juramentación en el cargo y, en caso dos personas hayan jurado el mismo día, el más antiguo sería quien desempeñó más tiempo el cargo anterior o, en su defecto, quien tenga más tiempo como abogado colegiado.

Aprobada la norma, Colán pudo quedarse en el puesto. No en vano se bautizaría popularmente a la norma con su apellido[95].

Fujimori y Yoshiyama tenían especial fascinación por las encuestas y los focus groups. Estos últimos eran encargados al socio de Borobio, Saúl Mankevich, también argentino, experto en relaciones públicas y que, paradójicamente, había tenido un breve matrimonio con Maritza Garrido Lecca, antes que la bailarina pasara a ser la lugarteniente de Abimael Guzmán.

De acuerdo con las cifras y datos obtenidos, el gobierno llegó a dos conclusiones. La primera era que, derrotado militarmente el terrorismo, las principales preocupaciones de los peruanos se encontraban en la economía y la falta de empleo. Para inicios de 1994, el manejo económico del gobierno era respaldado únicamente por el 40 % de los peruanos.

La segunda era que el triunfo de Fujimori no estaba totalmente garantizado. Los resultados del referéndum de 1993 indicaban que, en varias regiones del país, el gobierno estaba teniendo serios problemas de rechazo, sobre todo, por ausencia de actividad estatal y cierto descontento económico. Por tanto, los esfuerzos gubernamentales debían concentrarse en estos sectores.

En 1992, Fujimori había restaurado el Ministerio de la Presidencia, una invención del gobierno de García donde se concentraban organismos encargados de programas sociales y obras públicas. Luego de dos años con presupuesto acotado, para 1994, esta entidad estatal aumentó drásticamente sus partidas.

Así, se implementaron nuevos programas de lucha contra la pobreza, ayuda alimentaria, programas temporales de empleo público y supervisión de construcciones, la mayor parte de los

cuales se focalizaron en las regiones donde perdió el referéndum. En particular, Fujimori hizo la oferta de inaugurar «un colegio por día», para la mejora de la infraestructura educativa nacional.

Se iniciaría un estilo de trabajo en el que buena parte de la jornada sería destinada por el mandatario a recorrer barrios pobres de la ciudad de Lima, así como localidades en diversas partes del país. Fujimori llegaba con una pequeña obra de infraestructura por inaugurar, computadoras por regalar a escolares y, por supuesto, cámaras. Su discurso era simple y claro: ¿estuvo algún otro presidente antes? ¿Quién está llevando el Estado al país? Las respuestas espontáneas eran favorables a él. Más aún, cuando se colocaba cada uno de los trajes típicos o sombreros de las zonas del país a las que acudía.

El mejor ejemplo de lo que hizo Fujimori durante 1994 ocurrió en Puno. El mandatario visitó esa región quince veces. Era allí donde había obtenido los peores resultados del referéndum de 1993. Y allí, según propia confesión, operaba un viejo conocido de Fujimori y Montesinos: Alberto Pinto Cárdenas. Las Fuerzas Armadas, según Pinto, eran quienes transmitían las demandas de los ciudadanos, las cuales eran remitidas a Fujimori, quien llegaba para hacer inauguraciones de obras. La estrategia le daría buenos resultados.

El mandatario dejaba el terno solo para las ceremonias en Palacio de Gobierno, o para acudir a eventos de corte económico. Allí el estilo era solemne, para proclamar los avances económicos del gobierno. Los empresarios estaban cautivados. Y los ciudadanos comenzaron a respaldar al presidente, conforme la economía crecía y las pequeñas obras de infraestructura se multiplicaban[96].

En noviembre de 1993, Ricardo Belmont hizo un anuncio que dividió su periodo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima en dos: estaba pensando en postular a la Presidencia de la República en 1995.

Belmont hizo este anuncio cuando recién tenía pocos meses de su segundo mandato municipal y habían transcurrido pocas semanas de la ajustada victoria del gobierno en el referéndum. El cálculo del alcalde era simple pero efectivo: tendría grandes obras que exhibir para inicios de 1995, cuando se iniciaría la campaña

electoral y existía la posibilidad de que los ciudadanos prefirieran a una figura que no fuera tan controvertida como Fujimori.

Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rápida. En los últimos días de diciembre de 1993, se emitió el Decreto Legislativo 776, que cambiaba los términos de la tributación municipal. La norma establecía que el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) —un subsidio para las zonas más pobres del país— sería destinado a las municipalidades distritales y no a las provinciales. Asimismo, los términos de establecimiento del FONCOMUN variarían: se tomaría en cuenta, además del tamaño de la población, los índices de mortalidad infantil.

El efecto para la Municipalidad Metropolitana de Lima fue instantáneo: el cambio en el régimen del FONCOMUN hacía que la comuna perdiera el 80.7 % del monto obtenido por este subsidio en 1993. En otras palabras, fue un recorte sustancial a los fondos de la comuna limeña. En una de las analogías futbolísticas de las que tanto gustaba, Belmont diría ante los medios que el Decreto Legislativo 776 «le había cortado las piernas».

Para Belmont fue el inicio del fin. Su capacidad de gestión, que había sido regular en el primer gobierno, se recortó drásticamente en el segundo periodo. No pudo inaugurar ninguna de las obras que había prometido para su segundo mandato. Sus ausencias por salud se incrementaron durante 1994. Y optó por la confrontación directa contra un presidente cuyos índices de popularidad iban en ascenso a la par que los suyos descendían. Además de sus declaraciones en diversos medios, el Concejo Metropolitano declaró a Fujimori como «persona non grata».

Pero los mayores golpes de Belmont vinieron desde su canal. Destinó RBC para que sea su trinchera de batalla frente a un gobierno que, a su criterio, le había hecho un daño irremediable a la ciudad. No solo destinó largas peroratas en el espacio de llamadas «Habla el Pueblo», sino que convirtió a su canal en un medio estrictamente informativo, a cargo de Guillermo Thorndike, el periodista que había contribuido a la invención mediática de Fujimori. Para el invierno de 1994, comenzaron a lanzarse programas periodísticos y de análisis donde, además de darle

cabida a Belmont, se daba tribuna a las figuras de oposición. El problema es que el canal no solo tenía poca audiencia, sino que el alcalde era cada vez más impopular. Y así se lo recordaban las llamadas que llegaban a los espacios creados o relanzados.

Uno de los espacios más recordados se llamaría Las mujeres tienen la palabra. Era conducido por tres regidoras de obras: Juanita Calvo, Soledad Barreda y alguien que había llegado desde las filas opositoras, Laura Bozzo. Se trataba de un espacio nocturno de entrevistas y debates. La línea opositora era clara. Luego de algunas semanas, Bozzo consiguió ser la conductora exclusiva, y desde allí emitiría calificativos bastante duros contra Fujimori.

En una de las tantas entrevistas que la regidora le haría al alcalde-broadcaster, un diálogo se destacaría en el tiempo:

—Fujimori solo llama a sus sobones para que lo entrevisten.

—Por supuesto, a ti no te van a llamar, a menos que te pases al lado de la dictadura.

—Eso nunca va a pasar[97].

Martes 28 de febrero de 1994. El auditorio del Museo de la Nación estaba repleto. Con música de ópera, se daba inicio al proceso de privatización más ambicioso de la historia peruana: el control de las fusionadas Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú, que juntas tenían el monopolio de las líneas fijas de telefonía en el país. Se había puesto un precio base de 535 millones de dólares por ambas empresas.

Se abrieron los sobres económicos, con los que terminaría el proceso. Telefónica de España ofrecía 2002 millones de dólares. Casi cuatro veces más de la suma base. Los consorcios rivales, encabezados por GTE y South Western Bell, ofrecieron mucho menos. Los españoles continuaban la expansión de sus negocios en América Latina.

Telefónica obtuvo un monopolio por cinco años en línea fija y larga distancia, a cambio de un compromiso de inversión de 1,5 mil millones de dólares. Dado que la meta de inversión fue obtenida con un año de antelación, se resolvió acortar el periodo de monopolio.

La empresa ha tenido una relación bastante compleja con el Perú durante un cuarto de siglo. Resulta evidente que la compañía

española ha hecho grandes esfuerzos en la expansión de las telecomunicaciones en el país, así como en el apoyo a la difusión de la cultura, el deporte y la historia de nuestros más importantes héroes. Sin embargo, para el ciudadano común y corriente impactaron negativamente cuestiones vinculadas a la atención oportuna de los reclamos a los clientes —un problema global en el ramo, pero de alto impacto en la vida cotidiana—, a lo que se sumaban contingencias tributarias y laborales, así como cierta desconfianza frente a una inversión española en un país que otrora fue parte de sus colonias.

En términos generales, el proceso de privatización tuvo activos y pasivos importantes. Se consiguió que el Estado pudiera desprenderse de activos empresariales que administraba mal, a la par que se aseguró el ingreso de empresas de primer orden al mercado peruano y el crecimiento de algunos otros mercados. Así, inversiones en la compra de empresas estatales de minería, banca y pesca fueron importantes para dinamizar estos sectores.

Sin embargo, demoró la consolidación de los organismos reguladores, se incrementó la posibilidad de «puertas giratorias» —pasar de altos puestos en el sector privado a los reguladores del sector público sin restricciones— y, como veremos, parte del dinero de la privatización terminó en asuntos poco santos. En otros casos, la privatización arrojó resultados negativos, como los graves pasivos laborales alrededor de Hierro Perú, adquirida por la empresa china Shougang, y el mal diseño y posterior quiebra de la venta de Aeroperú, vendida a un grupo empresarial mexicano. Para otros ciudadanos, el alza de tarifas en servicios públicos fue un elemento que los predispuso en contra de las empresas vendidas.

En contados casos, se buscó incentivar un esquema de participación ciudadana, que tenía dos objetivos: identificar a los ciudadanos con el proceso de privatización —en particular, a los trabajadores de las empresas que eran vendidas— y mejorar el mercado de capitales nacional. Gracias al programa, 410 000 personas pudieron convertirse en tenedores de acciones[98].

Las zonas de producción de hoja de coca y procesamiento de cocaína se convirtieron, a partir de 1993, en los principales reductos

de los remanentes de Sendero Luminoso. De un lado, estaba el valle de los ríos Apurímac y Ene. Del otro, la cuenca del alto Huallaga, en San Martín y Huánuco.

Para 1993, el Ejército Peruano indicaba que Sendero controlaba las zonas conocidas como Bolsón Primavera y Bolsón Cuchara e incluso suponían que allí se encontraba Óscar Ramírez Durand «Feliciano», quien había quedado como el principal líder de las bases senderistas aún en armas.

En los últimos días de marzo de 1994, seis ciudadanos que habitaban el caserío de Cayumba Chico fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército, con disparos en la cabeza. Entre los fallecidos estaba un anciano de ochenta años y una niña de apenas seis años. El operativo se conoció como «Paraíso».

Días más tarde, en el caserío de Moyuna, se volvieron a producir ejecuciones extrajudiciales, así como tortura y bombardeos indiscriminados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hizo públicas las denuncias. Se encontraron los cuerpos de cinco personas con signos de haber sido ejecutadas extrajudicialmente, aunque se presume que el número de víctimas era aún mayor.

En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló que Aries fue una iniciativa preparada en tres compañías especiales asentadas en Lima, Tarapoto y Tingo María, que fue respaldada con armamento sofisticado, municiones e incluso la asesoría de un experto israelí. Un testigo militar indicó a la CVR que los entrenamientos fueron presenciados por Hermoza y Fujimori. No se pudo precisar el número de víctimas, pero sí se confirmó la existencia de ejecuciones extrajudiciales de trabajadores del campo dedicados a la cosecha de coca, así como actos de violencia sexual contra mujeres. Para el grupo de trabajo, se trataron de prácticas generalizadas, que se iniciaron en 1989.

Entre las denuncias presentadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se indicó que hubo fuego de artillería indiscriminado, disparado desde helicópteros del ejército con una ametralladora RPG. Los casos eran tan evidentes que el congresista fujimorista Gilberto Siura, uno de los más recalcitrantes

negacionistas de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado, llegó a decir: «esta vez sí se les ha pasado la mano». A pesar de ello, la comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático encarpetó la investigación e incluso se condenó en el pleno legislativo mediante una moción a la CNDDHH, lo que motivó el respaldo de la Iglesia Católica a la organización civil, a través del cardenal Augusto Vargas Alzamora.

Las acciones de encubrimiento no solo quedaron en el CCD. La fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, se desplazó a la zona. Luego de escuchar al jefe de la región militar y sobrevolar la zona, descartó cualquier acusación por este caso. Nombró a un fiscal ad hoc, pero una investigación de la revista Caretas reveló que se trataba de un oficial en retiro del Ejército. Al final, el caso quedó en la absoluta impunidad.

Otras investigaciones señalan que, para 1994, el peligro senderista en el Alto Huallaga había disminuido sustancialmente y que, por tanto, se buscó revivir el fantasma del terrorismo con fines electorales. Una práctica que ya había ocurrido en el referéndum de 1993[99].

Triciclos con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj, camisas, chucherías, de todo en las calles y en montón. Persigna la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú.

Con música de Los Mojarras, la dupla conformada por Michel Gómez (productor y director) y Eduardo Adrianzén (escritor y guionista) hicieron un fresco de la época del apogeo del fujimorismo, en formato de telenovela: Los de arriba y los de abajo.

Como nunca, los protagonistas de una telenovela, transmitida por Andina de Televisión, encarnaban lo que años más tarde se conocería como clase media urbana emergente, basada en emprendimientos y negocios propios, en la que la carrera individualista sería la regla, antes que el proyecto colectivo solidario que había sido, brevemente, la salida peruana durante los años setenta y ochenta.

Ellos forjaron aquí otras generaciones, del cual salimos, muy orgullosos de esta nuestra tierra y de nuestros padres. No somos

limeños de sangre, mas tenemos su cultura. No hemos nacido en provincia, mas es nuestra sangre.

Aunque la pareja protagonista encarnada por Mónica Sánchez y Óscar Carrillo se mostraba crítica del gobierno, y los guiones se burlaban de sus intentos continuistas—la actriz Gabriela Velásquez personificaba a la «doctora Chacón», una nada sutil burla de la obsecuencia de Martha Chávez con las trampas de Fujimori—, Los de arriba y los de abajo presentaba varios de los valores que el fujimorismo promulgaba. La empresa informal era glorificada, el populismo liberal se presentaba como una salida, la posibilidad del arribismo mediante matrimonio o migración al exterior resultaba una alternativa éticamente válida y el marketing político hacía sus pininos en una agencia llamada, con socarronería, Mermet. En este último caso, la alusión era a la mermelada, sinónimo de dinero por informaciones favorables en el mundo periodístico peruano.

La telenovela duró casi un año y abarcó también la campaña electoral de 1995, así como otros sucesos de coyuntura, introducidos el mismo día de emisión al aire. Como señalaría el propio Adrianzén: «Apareció en un momento histórico preciso para tener éxito. Todavía se glorificaba el poder ser un país con personalidad propia y a la vez con cierta esperanza y prosperidad. Hoy no podríamos hacer una telenovela mostrando simpáticas las campañas de Susy Díaz o las mentiras del Chino»[100].

Durante varias décadas, la deuda externa —créditos y préstamos solicitados a gobiernos extranjeros, bancos privados u organismos multilaterales— fue un problema inquietante en América Latina. Para 1982, varios países de la región, comenzando por México, admitieron que no podían pagar sus compromisos internacionales. Se habían sobreendeudado, en parte por el exceso de préstamos otorgados por los bancos privados, en parte por irresponsabilidad fiscal.

A partir de la liberalización de los mercados a fines de la década de los ochenta e inicios de los noventa, América Latina comenzó a tener nuevas condiciones para su deuda externa. A partir de un plan ideado por Nicholas Brady, secretario del Tesoro de Estados Unidos durante el gobierno de George H. W. Bush, se redujo la deuda con

la banca privada internacional, a cambio de garantías para repagar la deuda restante y, además, adoptar las reformas de mercado.

En 1993, Perú inició las negociaciones para adoptar el Plan Brady, a fin de mejorar el perfil crediticio externo del país. Pero, a la par, el gobierno peruano comenzaría a comprar en secreto bonos de la deuda, cuyo valor se incrementaría paulatinamente, dado que Perú empezaría a cumplir con sus compromisos internacionales bajo estas nuevas condiciones.

El principal problema es la serie de conflictos de intereses que se tejió alrededor de la operación. El Banco de Crédito del Perú y otros bancos del extranjero constituyeron el Perú Privatization Fund, una entidad que pudo comprar papeles de la deuda externa y utilizarlos posteriormente en la compra de acciones de empresas privatizadas. Esta última cuestión fue permitida por una norma impulsada por Jorge Camet, el todopoderoso ministro de Economía y Finanzas.

Existía un nombre que coincidía en varios lados del mostrador: Francisco Moreyra García Sayán, asesor externo de Camet, y abogado de uno de los bancos internacionales miembros del PPF, al que también asesoraba legalmente. García Sayán fue miembro del directorio de una empresa textil del Grupo Romero, propietario del Banco de Crédito del Perú. Para quienes han investigado esta operación, existía una grave dificultad, dado que García Sayán pudo tener acceso a información privilegiada. El abogado hoy se encuentra retirado de la vida pública, debido a su estado de salud y nunca fue procesado por este caso.

Otro conflicto similar encontrado en este caso fue el hallado a Jorge Peschiera, a quien Camet nombró como «negociador oficial de la deuda con la banca privada». En este caso, el funcionario había trabajado en el Atlantic Security Bank, empresa ligada al Grupo Romero y fundó una empresa con actividades en el mercado financiero internacional.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía asesores que provenían del Banco de Crédito del Perú. La comisión Herrera identificó a Sergio Málaga (privatizaciones), David Saettone (electricidad) y Claudia Cooper (política monetaria). Cuando Camet dejó el Ministerio de Economía y Finanzas, cuatro años más tarde,

terminaría siendo convocado por el propio Dionisio Romero Seminario para ser parte del directorio del BCP. Romero Seminario negaría ante el Congreso cualquier posibilidad de contar con información privilegiada a partir de estas conexiones. Sin embargo, reconocería en algunos pasajes de sus intervenciones que algunos funcionarios que laboraron en el MEF eran «prestados» por el Banco[101].

Javier Pérez de Cuéllar era el diplomático peruano más renombrado de todos los tiempos. Había sido embajador del Perú en Suiza, Unión Soviética, Polonia y Venezuela. Desde la década de los setenta, estuvo ligado a la Organización de las Naciones Unidas, institución de la que se convirtió en secretario general entre 1982 y 1991. Allí fue un actor importante durante la última fase de la Guerra Fría, así como en la pacificación del conflicto entre Irán e Irak. Su renombre internacional lo hacía estar entre los peruanos más admirados. Al culminar su periodo como principal cabeza de la ONU, se trasladó a París.

Para agosto de 1993, en una entrevista brindada a El Comercio, Pérez de Cuéllar indicó que tenía disposición de postular a la Presidencia de la República en 1995. Lo mismo repitió a la revista Sí. Al mes siguiente, un conjunto de personalidades políticas de diversas tendencias comenzaron a contactarlo para cuajar una posible candidatura presidencial. En los primeros meses de 1994, el embajador y Fujimori estaban empatados en las encuestas.

¿Cuáles eran las ventajas y las desventajas de Pérez de Cuéllar? A su favor se encontraba su prestigio internacional, una posición favorable a las reformas de mercado y una apuesta mayor por la democracia y los programas sociales que la de Fujimori. Sin embargo, la propia naturaleza de su profesión le hizo vivir muchos años fuera del país, frente a un presidente que hacía giras todas las semanas por todo el territorio nacional, a la par que la edad del diplomático —setenta y cuatro años— podía jugarle en contra.

Durante buena parte del año, el debate se concentró en si Pérez de Cuéllar debía ser el candidato único de la oposición. Luis Bedoya Reyes, ya convertido en patriarca del Partido Popular Cristiano, buscó impulsar una fórmula: el embajador sería el candidato único

de la oposición, pondría a sus vicepresidentes y el programa —que sería respaldado por todos los partidos durante tres años—, pero no presentaría candidatos propios al Congreso, pues el respaldo sería de las bancadas no fujimoristas. Sin embargo, ni Acción Popular, ni el APRA ni Izquierda Unida coincidieron en esta fórmula, tanto por consideraciones personales como políticas. Por su parte, el diplomático consideraba que era mejor tener una bancada propia.

En agosto de 1994, Pérez de Cuéllar anunció formalmente su candidatura presidencial y regresó al Perú por el Lago Titicaca. Allí se pronunció sobre la postergación de la descentralización y la necesidad de generar empleo.

En septiembre, logró inscribir su propio partido político, Unión Por el Perú, una confluencia de personalidades de distintas tendencias. Había personas de izquierda como Henry Pease, Daniel Estrada (alcalde del Cusco), Gustavo Mohme Llona (director y dueño de La República), Nicolás Lynch (sociólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Diego García Sayán (director de la Comisión Andina de Juristas) o Roger Guerra García. También participaron militares en retiro opuestos a Fujimori como el polémico exministro de Guerra Luis Cisneros Vizquerra, Carlos Mauricio, Alfonso Panizo o José Pastor Vives. Se incluyó a periodistas como Anel Townsend, Pedro Planas y María Ofelia Cerro. Asimismo, intervinieron personalidades que iban desde el centro hacia la derecha como Alfonso Grados Bertolini, el abogado Jorge Avendaño, el empresario Francisco Pardo Mesones, el abogado especialista en derechos humanos Carlos Chipoco o los embajadores excluidos Harold Forsyth y Hugo de Zela.

Con ello, se iniciaba oficialmente la campaña presidencial 1995[102].

¿Cuándo decidió postular Fujimori a la reelección? De acuerdo con las fuentes consultadas por el politólogo japonés Yuzuke Murakami, fue luego de obtener una mayoría en el Congreso Constituyente Democrático, a fines de 1992. Varios signos llevan a pensar en esta hipótesis: la destitución abrupta por «razones políticas» de Boloña, el interés señalado por el entorno de Fujimori en la reelección presidencial y las altas inversiones sociales posteriores al ajustado referéndum de 1993.

Para inicios de 1994, Fujimori comenzó a indicar a sus principales asesores que comenzaría el camino de la reelección. En su convicción, ninguna otra persona podría proseguir los avances que había obtenido su gobierno. Montesinos estaba de acuerdo con los planes reeleccionistas, en parte por convicción en las reformas, en parte para evitar cualquier tipo de castigo por el golpe de 1992 o por graves violaciones a los derechos humanos.

Pero no todos los miembros del entorno presidencial estaban convencidos de la decisión. Santiago Fujimori consideraba inoportuna la reelección. En su convicción, las reformas que debían emprenderse a partir de 1995 requerían otro estilo. Para él, era mejor retirarse en olor de multitud con un primer gobierno exitoso e intentar volver en 2000. Sin embargo, su poderoso hermano no pensaba lo mismo.

En realidad, Santiago comenzaba a estar aislado en el esquema de poder de Palacio de Gobierno. De un lado, su hermano se había ido a vivir al segundo piso del Servicio de Inteligencia Nacional, en Chorrillos, lo que lo acercó aún más a Montesinos, con quien podía despachar a cualquier hora del día o de la noche. Ese hecho enfrió las relaciones entre hermanos, al igual que su rechazo a la reelección. Al culminar 1994, presidente y asesor con lazos consanguíneos solo hablaban por teléfono.

Años más tarde, Santiago Fujimori diría lo siguiente a la revista Caretas:

—Le recomendé descansar, buscar nuevos equipos y que tal vez para 2000 se podría entrar con mayor decisión para hacer el programa de largo plazo. Pero más pudieron otras influencias.

Santiago comenzó a tener roces continuos con Yoshiyama. Diferencias por la aprobación de un proyecto de ley que le quitaba facultades administrativo–tributarias a la Policía, la contratación de encuestas encargadas por el gobierno y críticas a un ministro perteneciente al entorno del presidente del Congreso Constituyente Democrático empezaron a agriar la relación. La cuestión se complicó más cuando Yoshiyama asumió en la práctica la dirección de la campaña reeleccionista y, frente a unas discrepancias de Santiago, le respondió agriamente.

Aun así, Fujimori continuó escuchando algunos de los consejos de su hermano. Mientras su presidente del CCD confirmaba los afanes reeleccionistas de varios de los parlamentarios de Cambio 90-Nueva Mayoría, así como sumaba a personas de altas esferas limeñas, Santiago propuso convocar una lista más descentralizada. El criterio del abogado se impuso al del ingeniero.

El 8 de octubre de 1994, en medio de una inauguración de obras, Fujimori indicó que se lanzaría a la reelección y presentó su nuevo símbolo: un número 95 con tipografía similar a la del 90 de su primera campaña electoral.

La fórmula presidencial fujimorista era integrada por Ricardo Márquez, empresario cercano a las pequeñas y microempresas, y César Paredes Canto, exrector de la Universidad Nacional de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores[103].

Durante todo el año 1994, los partidos opositores a Fujimori comenzaron a trazar estrategias propias, a la vez que discutían con Javier Pérez de Cuéllar la posibilidad de una candidatura propia[104].

El año anterior, mientras era profesor visitante en la Universidad de Waseda, el economista Alejandro Toledo —docente regular en la escuela de negocios ESAN— convocó al escritor Luis Jochamowitz al conocido café Haití, un establecimiento clásico en Miraflores donde no pocos políticos, periodistas y spin doctors dialogan, a la vista de todo el mundo. Toledo había quedado admirado por el esfuerzo biográfico hecho por el periodista sobre Alberto Fujimori y le propuso escribir su biografía, pues quería presentarse a la Presidencia de la República en 1995. Jochamowitz aceptó un pago consistente en un pequeño estipendio económico y un viaje a Tokio, donde Toledo estaba haciendo su estancia académica. A cambio, sería el escritor fantasma de lo que aparecería, en 1994, como la biografía oficial de Toledo: Las cartas sobre la mesa.

Mientras tanto, en enero de ese año, se iniciaron algunos esfuerzos de posible unidad opositora. Agrupaciones tan disímiles como el Movimiento Democrático de Izquierda, el Partido Comunista del Perú —Unidad—, y el Movimiento Libertad comenzaron a ver la posibilidad de contemplar un candidato único y un programa de

consenso. Al mes siguiente, varios dirigentes de izquierda fueron invitados al mitin por el Día de la Fraternidad aprista.

Sin embargo, para abril, los esfuerzos de unidad habían amainado. El APRA había decidido ir con candidata propia a la Presidencia de la República: la exministra de Educación Mercedes Cabanillas. Desde Bogotá, Alan García declaraba que el posible ganador de las elecciones sería Pérez de Cuéllar. El acuerdo fue ratificado en agosto, cuando Agustín Mantilla, polémico exministro del Interior, fue elegido secretario general. Por su parte, la izquierda comenzó a alistar planes de unidad, convocando nuevamente a Alfonso Barrantes.

En el ámbito de la derecha, el Partido Popular Cristiano tenía posiciones divididas. Aunque Ricardo Amiel y Luis Bedoya Reyes aún bregaban por apoyar la candidatura de Pérez de Cuéllar, la congresista Lourdes Flores Nano expresaba su deseo de ser postulante presidencial en 1995. A la par, sufrían dos bajas: Alberto Borea dejó de militar, pues consideraba que la agrupación había adoptado una posición demasiado morigerada frente a Fujimori. Y el exitoso alcalde de Miraflores, Alberto Andrade, dejaba las filas de la agrupación para formar un movimiento propio. En agosto de 1994, Libertad decidió disolverse.

En octubre, se confirmó la candidatura de Flores Nano a la presidencia por el Partido Popular Cristiano. Sin embargo, Lourdes no prendió en las encuestas. Para fin de 1994, el PPC decidió excluir su postulación y solo presentar lista parlamentaria.

Izquierda Unida indicó que su fórmula presidencial sería encabezada por Barrantes, acompañado por Agustín Haya de la Torre y el médico Max Cárdenas. Sin embargo, en diciembre, el veterano líder de izquierda dimitió a la candidatura, debido a disputas en torno a las candidaturas al Congreso. La fórmula solo se presentó con los restantes postulantes, encabezada por Haya.

Finalmente, Toledo logró inscribir a su movimiento País Posible y rápidamente hizo una alianza con el movimiento Convergencia Democrática, encabezado por el disidente aprista José Barba Caballero. Y, en octubre, comenzó a aparecer tercero en las encuestas, posición que mantendría en lo que quedaría de 1994.

En diciembre, Fujimori, Pérez de Cuéllar y Toledo se presentaron en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Los tres coincidieron en defender el modelo económico. Pero la presentación de Toledo fue decepcionante por lo genérico. El exsecretario general de la ONU buscó convencer a los empresarios de su compromiso con el sistema económico. Mientras que Fujimori destacó sus logros, ante un auditorio que lo respaldaba.

La preocupación por la limpieza del proceso electoral empezó a ser evidente para varios ciudadanos, no solo para los políticos opositores que competían contra Fujimori. El sociólogo Rafael Roncagliolo comenzó a indagar en experiencias de observación electoral en el exterior. Convenció a su colega Federico Velarde para impulsar una iniciativa de este tipo en el Perú y empezaron a sondear a diversas personalidades para ello.

Quien inmediatamente estuvo de acuerdo con la posibilidad de una entidad independiente de observación fue el sacerdote Felipe McGregor, rector emérito de la PUCP. Dado que era imposible, por su perfil eclesial, que presidiera la nueva entidad, convocó al reconocido filólogo y docente universitario Luis Jaime Cisneros Vizquerra para que asumiera dicho rol.

El 18 de junio de 1994, en la sede del Colegio de Abogados de Lima, se presentó al país la Asociación Civil Transparencia. Junto a los ya nombrados, participaron en el núcleo fundador Alberto Giesecke Matto, Fernando Rospigliosi, Francisco Miró Quesada Rada, Graciela Fernández Baca, Raúl Valenzuela, Salomón Lerner Ghitis y Luis Felipe Valdivieso Belaúnde. La entidad se formaba para dos cuestiones centrales: educación cívica y observación del proceso electoral.

Transparencia se forjó sobre dos principios centrales: neutralidad de sus integrantes y una red de voluntariado en base a participación de miembros de organizaciones sociales y estudiantes universitarios. Rápidamente obtuvo el apoyo técnico y económico de organizaciones internacionales con miras a preparar las labores de observación electoral para 1995.

La neutralidad de Transparencia hizo que, rápidamente, Fernández Baca tuviera que pedir licencia a la asociación, pues

participó como postulante al Congreso de la República en Unión Por el Perú. La entidad, por su parte, mantuvo un tono objetivo y cauto en sus pronunciamientos públicos.

La realidad demostraría la necesidad de la observación electoral independiente. Desde mediados de 1994, la oposición reclamó alguna forma de «bajada al llano» de Fujimori que evitara que utilizara recursos públicos en su campaña, o la necesidad de regulación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de las facultades del «presidente–candidato». Esta cuestión se volvió más escandalosa cuando en septiembre de 1994, la edición regional del diario Correo captó al general Howard Rodríguez, comandante de la Primera Región Militar, repartiendo calendarios con la imagen de Fujimori. Henry Pease señalaría que otros oficiales participaban abiertamente a favor del mandatario, mientras que Pérez de Cuéllar denunció la existencia de militares con libreta electoral, cuando para ese entonces no tenían derecho a voto.

Mientras tanto, Fujimori continuaba inaugurando obras. «Prefiero inaugurar un colegio antes que un local partidario. Eso diferencia a mi gobierno de lo tradicional», indicó frente a las protestas opositoras.

En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones propuso en diciembre un borrador de normas electorales que prohibía cualquier inauguración de obras hasta pasadas las elecciones y establecía la posibilidad de retirar a postulantes a la Presidencia o al Congreso por tres violaciones de la ley electoral. Fujimori protestó en varios lugares del país y el Congreso Constituyente Democrático nunca aprobó la propuesta original.

Al final, el JNE se resignó a que únicamente existieran restricciones a «alusiones a rivales» durante la inauguración de obras públicas. Y, además, el CCD añadió que los postulantes presidenciales tendrían su foto en la cédula de votación, lo que beneficiaba al candidato más difundido, a través de los calendarios.

Como parte de sus actividades, Transparencia impulsó la suscripción de un Pacto de Honor entre los postulantes a la Presidencia de la República. Acción Popular y el APRA declinaron firmarlo por considerar que no era suficientemente duro con las

actividades del «presidente–candidato» y las autoridades electorales. A nombre de Cambio 90–Nueva Mayoría, Martha Chávez dijo que no firmarían el documento porque la asociación civil no era más que «un frente de los opositores al gobierno». Los demás postulantes, incluyendo a Pérez de Cuéllar y Toledo, suscribieron el Pacto. Las reacciones dejaban clara la neutralidad de la entidad.

Todo hacía suponer que vendría una campaña dura y muy fuerte.

---

94 Sobre «Vaticano», nos basamos en Coya (2018: 75-78, 123-134, 139-152) y Bowen y Holligan (2003: 174-175).

95 Revisamos exhaustivamente la Ley 26288, conocida como la «Ley Colán I». Asimismo, el relato sobre la coyuntura que se emitió se basa en Conaghan (2005: 80).

96 En torno al estilo Fujimori, consultamos Bowen (2000: 252), Conaghan (2005: 78-80) y Degregori (2012: 48-51, 65-67). Los datos sobre Puno aparecen en Rénique (2016: 455-459).

97 Respecto a Belmont y su confrontación con el gobierno fujimorista, revisamos Jara (2018), Murakami (2018: 383-384, 388), Vivas (2008: 360, 394-395), los ya citados artículos de Barr y Dietz (2006: 70-73) y Robles (2007: 222-227). Otros datos sobre Laura Bozzo aparecen en Vivas (2018: 75-77) y en el cómic de Marco Sifuentes, Hernán Migoya y Ricardo Montes, *Señorita Laura* (2015: 24-28, 37-41, 52-55).

98 Sobre la privatización, consultamos Bowen (2000: 189-202), así como el libro conmemorativo de Telefónica del Perú *20 historias, 20 momentos* (https://www.telefonica.com.pe/documents/142094031/142190596/20_historias_20_momento2.pdf/c50d28bd-a5c8-c4c8-834a-23bf40f2e9e3) y Ruiz Caro (2007: 130-143).

99 La Operación Aries es relatada en el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 404-410). Otras versiones están en Youngers (2003: 286-290).

100 Sobre *Los de arriba y los de abajo,* revisamos el texto de Vivas (2008: 287-291) y nos basamos también en nuestros recuerdos personales de la telenovela.

101 En torno a la deuda externa, consultamos Parodi (2019b: 67-95). Sobre las operaciones vinculadas a la misma en tiempos de Jorge Camet, revisamos el informe de la comisión parlamentaria presidida por Ernesto Herrera. También los artículos de Zapata (263) y Durand (318-319) en Zapata (2006). Estos fueron asesores de la Comisión investigadora de delitos económicos y financieros, encabezada por Javier Diez Canseco al caer el régimen fujimorista. Francisco Moreyra García Sayán aparece como asesor y abogado clave en varias de las decisiones tomadas por Pedro Pablo Kuczynski como funcionario público, como relata Sifuentes (2019: 125 y 234). Sobre las conexiones entre el BCP y Camet, conviene leer Durand (2013: 350-351, 384-385).

102 La aparición de Pérez de Cuéllar en política es relatada en Murakami (2018: 387-393), Bowen (2000: 250-251) así como en Pérez de Cuéllar (2013: 137-138). Como cuenta

Murakami, fue Acción Popular el partido que más se opuso a la posibilidad de apoyar a JPC, debido a las posibles aspiraciones de Belaúnde, la desconfianza en las alianzas electorales y la poca empatía personal con Pérez de Cuéllar, quien no renunció a su puesto como embajador una vez producido el golpe de Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968. También consultamos el artículo de Schmidt (1999: 99-129).

103 Los prolegómenos de la campaña de reelección de Fujimori son detallados en Murakami (2018: 379-382). Bowen y Holligan confirman la versión de Santiago Fujimori sobre su recomendación para no ir a la reelección en 1995 y el alejamiento de su hermano en paralelo (2003: 302-303). La entrevista a Santiago Fujimori en *Caretas* apareció en enero de 2001 y puede leerse en https://web.archive.org/web/20071231060647/http://www.caretas.com.pe/2001/1653/articulos/santiago.phtml

104 El relato de la campaña electoral de 1994 se basa en Murakami (2018: 387-396), Conaghan (2005: 78-80, 89-92), Schmidt (1999) y la cronología política de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sobre Toledo, los datos consignados aparecen en Vivas (2018: 130-138) y en «Confesiones» de Jochamowitz, en *Caretas* (2017).

SUSANA Y LA FAMILIA

(1974–1994)

Su nombre japonés, Shizuko, quiere decir «tranquilidad». Aquello que su matrimonio de veinte años no tendría, sobre todo, en el último tramo.

Susana Higuchi Miyagawa nació en 1950. Sus padres migraron desde Fukuoka y se convirtieron en comerciante y enfermera. Tomás Higuchi conocía a Naoichi Fujimori desde aquellos años. Tomás puso una reencauchadora, pero, a diferencia de su futuro consuegro, su negocio fue boyante y le permitió tener rápidamente una mejor posición económica. Hizo sus estudios en el colegio Mercedes Cabello de Carbonera, destinado a mujeres, y se graduó como ingeniera civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Al igual que Alberto, tenía un pie en su profesión y otro en el negocio familiar.

El acercamiento entre ambos fue matemático. El tímido Alberto comenzó a conversar sobre números y problemas aritméticos con su colega. En cada cita, fue llevando problemas más difíciles. Susana había sufrido la pérdida de su hermano en 1972 y encontró algunas características de él en su nuevo novio. Sobre todo, parquedad y sobriedad.

Luego de un corto noviazgo, Alberto y Susana se casaron el 25 de julio de 1974 en la capilla de la Virgen de la O, un templo anexo a la iglesia de San Pedro, perteneciente a la Compañía de Jesús. Este templo, desde tiempos remotos, es dedicado a matrimonios religiosos bajo el rito católico. Según testigos de la ceremonia, la novia lucía enamorada mientras que el flamante esposo se encontraba bastante nervioso. La recepción se realizó en el Centro Cultural Peruano Japonés y la comida estuvo a cargo de Humberto Sato, cocinero nikkéi cuyo restaurante, años más tarde, sería uno de los favoritos de la escueta vida personal de Fujimori. Ambos habían sido escolares en La Rectora, con dos años de diferencia.

Durante varios años, circuló la versión de que los Higuchi no habrían estado de acuerdo con el enlace, por las diferencias económicas entre la pareja y la aparente escasa vocación de

Alberto por los negocios. De hecho, le auguraron cinco años al matrimonio y, de acuerdo con algunas fuentes consultadas, la familia de la novia no le hizo un regalo monetario a la pareja, como era la usanza nikkéi de la época. Normalmente, ese regalo implicaba un capital para colocar un pequeño negocio.

La pareja tendría cuatro hijos: Keiko Sofía (1975), Hiro Alberto (1977), Sachi Marcela (1978) y Kenji Gerardo (1980). Pero un quinto hijo sería la empresa familiar: Construcciones Fuji.

Su germen sería las aulas prefabricadas que Alberto y Susana idearían para la Agraria, afectada por las secuelas del terremoto de 1974. Es allí donde el germen comercial del profesor de matemáticas despertaría, a partir de una idea de su esposa. Construcciones Fuji compraría terrenos para diseñar casas y luego venderlas, en particular en San Borja y Surco, zonas de la ciudad de Lima que se estaban urbanizando en los años setenta.

La empresa sería manejada principalmente por Susana y ayudaría a que la pareja tuviera importantes recursos. En varios momentos, la ingeniera le pediría a Alberto que se apartara de la Agraria, sin éxito. Aunque el docente universitario dedicaría buena parte de su tiempo, a través de licencias y salidas, a la empresa familiar. Fujimori también se encargaba de buena parte de las tareas domésticas del hogar, según recuerdan personas allegadas al matrimonio. Otras versiones, más cercanas a Fujimori y críticas con Susana, hablan de situaciones embarazosas para los hijos mayores, como declaraciones desatinadas o castigos físicos por parte de ella.

A la par, el negocio familiar de los Fujimori continuaba. Su madre seguía vendiendo flores, pero también pinos para Navidad en casas acomodadas. En el terreno ubicado en la urbanización Perinolo, en la frontera entre Surco y La Molina, se construyó la casa familiar.

Mientras, los Fujimori Higuchi idearon otro negocio: una academia preuniversitaria especializada en números, a la que colocaron como nombre Wisconsin, ubicada en el distrito clasemediero de San Borja. El atractivo de los apellidos japoneses de sus dueños atrajo a cientos de alumnos. De hecho, en las vacaciones escolares, sus hijos serían alumnos de la academia. Cuando eran más pequeños, el propio Fujimori les explicaba problemas matemáticos y les

sonreía cuando los resolvían. El mismo método que usó para enamorar a Susana.

Sin embargo, para fines de los años ochenta, las relaciones entre los esposos eran frías. Alberto no le confesó sus planes políticos a Susana hasta el final. Se especuló que permanecían casados bajo un régimen japonés de separación bajo el mismo techo. Cuando Higuchi, como primera dama, hacía actividades como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú, Fujimori aparecía sorpresivamente para quitarle protagonismo.

La denuncia que hizo sobre la ropa donada supuestamente vendida en forma subrepticia por sus cuñadas, realizada en marzo de 1992, hundió su matrimonio en la práctica. Y las cosas se pondrían peor.

En la Navidad de 1800, en plena Revolución Francesa, el sacerdote Pierre Coudrin y la hermana Henriette Aymer fundaron la Congregación de los Sagrados Corazones, en un local de la calle Picpus, en París. Desde sus primeros años, tendrían una doble vocación: misionera y educativa.

El personaje más conocido de la orden religiosa sería un sacerdote belga, José Damián de Veuster, hoy santo de la Iglesia Católica. El cura fue destinado a las misiones que existían en la isla de Molokai (Hawái), donde existía un leprosorio. Allí hizo su apostolado y también su martirio, pues se terminó contagiando del mal de Hansen.

En 1848, la Congregación de los Sagrados Corazones llegó al Perú, a través de la rama de las hermanas, para fundar el colegio Belén, originalmente destinado a mujeres, que existe hasta el día de hoy. En 1884, en plena época de la reconstrucción post Guerra del Pacífico, se solicitó a la orden que estableciera un colegio para varones en Lima, dirigido a las élites. Los padres llegaron al año siguiente al Perú, haciéndose cargo de la iglesia de la Recoleta, ubicada en las afueras del centro de Lima.

Recién en 1893, el padre Engelberto Blum fundaría el colegio de varones, que sería conocido como Recoleta, pues estaba ubicado al lado del templo regentado por la congregación, en el centro de Lima. Otro sacerdote de la orden, Jorge Dintilhac, fundaría en 1917 la

Universidad Católica, junto a un grupo de laicos. En 1932, se formaría un grupo scout que hoy es conocido como el más antiguo entre los vigentes en el Perú. En 1961, el plantel se mudaría a La Molina, donde se encuentra su actual local. En 1974, vendrían dos cambios: el inicio de la educación mixta y la supresión del segundo piso, debido a los daños producidos por el terremoto de ese año. Al igual que la Agraria, durante muchos años el colegio tendría aulas prefabricadas.

Por la Recoleta han pasado alumnos de distintas tendencias políticas. Apristas (Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, Javier Valle Riestra), izquierdistas (Alberto Adrianzén, Marisa Glave), socialdemócratas (Carlos Basombrío, Francisco Miró Quesada Rada), socialcristianos (Ernesto Alayza Grundy, Felipe Osterling Parodi), conservadores (José de la Riva Agüero, Pedro Beltrán). El colegio se precia de tener a un héroe nacional (José Abelardo Quiñones), a uno de los historiadores más destacados (Raúl Porras Barrenechea) y, aunque no concluyeron sus estudios en el plantel, Fernando Belaúnde Terry y Alberto Andrade pasaron por sus aulas.

En 1982, Keiko Sofía Fujimori Higuchi sería la primera integrante de su familia en ingresar al colegio. Sus hermanos harían lo propio en forma paulatina durante la década de los ochenta, aunque Kenji cursó sus tres primeros años de primaria en el San Agustín. También estudiarían en el plantel algunos de sus primos, como los hijos de sus tíos Rosa y Santiago. Había varios nikkéis estudiando en el colegio durante el tiempo en que los Fujimori Higuchi cursaron sus años en la Recoleta. Por esa época, algunos hijos de altos funcionarios del gobierno también estuvieron en dicho plantel: el más notorio fue Miguel Ángel «Miki» Torres, hijo de Carlos Torres y Torres Lara. Miki llegó a ser presidente de su promoción, donde fue condiscípulo de Kenji[105].

—Sufrí tortura con electroshock en dos oportunidades: una en el año 1992 y otra en el año 2000. El electroshock fue luego de la denuncia de la ropa donada, luego del autogolpe, y dentro de esos cuatro meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito (Cuartel General del Ejército), en el Servicio de Inteligencia del

Ejército (SIE), me torturaron con electroshock. Todavía pueden ser visibles ciertas huellas de quemadura hasta en la cara y en todo el cuerpo.

Este es parte del testimonio que brindó Susana Higuchi a una comisión investigadora del Congreso de la República en octubre de 2001. Según confesó a la prensa extranjera en pleno mandato de su esposo, ella se opuso a la interrupción del orden constitucional. «Lo que ocurrió fue que me silenciaron». Versiones periodísticas dieron cuenta de que Fujimori le llegaría a cortar la electricidad en Palacio cuando estaba a solas. Higuchi señaló que fue secuestrada días antes del golpe del 5 de abril de 1992. Un exoficial del Ejército corroboró que, en efecto, la aún primera dama había sido retenida contra su voluntad.

—Nunca tuve noticia de que mi madre haya sido secuestrada... Siempre estuvo con nosotros, pendiente de nuestras obligaciones escolares, y de ser así (que la secuestraron), nosotros lo habríamos notado fácilmente. Esto ocurrió por las ambiciones políticas que mi madre tenía y también por los problemas psicológicos que ella padece.

Esta fue la declaración que brindó Kenji Fujimori en 2006 a la justicia chilena, cuando su padre estaba en pleno proceso de extradición. Las presuntas torturas a su madre eran parte de uno de los cuadernillos de extradición presentados para repatriar al autócrata. Kenji fue aún más duro: «Mi madre tenía una enfermedad que afectaba su estado de ánimo y era difícil la convivencia con ella». El menor de los Fujimori Higuchi sostuvo que las supuestas marcas de electroshock eran producto de un extraño tratamiento chino llamado moxibustión. Sachi Fujimori fue igual de tajante:

—Debo señalar que mi madre nunca fue secuestrada, lo que sí era muy inestable emocionalmente.

De hecho, la supuesta inestabilidad emocional de Susana fue el argumento esgrimido por la prensa cercana al régimen para tratar de desestimar sus denuncias. Ella, en su momento, responsabilizó a Vladimiro Montesinos por ello. Es probable que, con la mayor sensibilidad existente en torno a la violencia contra la mujer, sobre todo en ámbitos domésticos, la reacción de la opinión pública hoy

hubiera sido distinta a la frialdad con la que se procesó públicamente la separación de la pareja presidencial.

En 1993, las apariciones públicas de Higuchi fueron escasas. En sus pocas intervenciones, criticaba el autoritarismo de su esposo. Los rumores sobre una separación de hecho volvieron a circular. A fines de ese año, Fujimori e Higuchi liquidaron la sociedad de gananciales de su patrimonio. Según el periodista argentino Juan Gasparini, firmó los papeles en una madrugada, delante de Montesinos. Fujimori reconoció que a su esposa le correspondían tres inmuebles en San Borja y La Victoria, así como el fundo Pampa Bonita, ubicado en las afueras de Lima[106].

FUJIMORI HIGUCHI, Keiko Sofía. - Nuestra responsable «Chinita» nos acompaña desde 1er Grado; le encanta estar haciendo dieta y vive loca por ir a fiestas, es una gran amiga y le encantó su salón (?). Por su in-ma-durez le gusta Matemática y Física por lo que estudiará Ciencias en el exterior. ¡Suerte!

En los años ochenta y noventa, la Recoleta fue un híbrido de varias tradiciones. Los sacerdotes tenían un perfil progresista en materia social y cierta notoriedad, como era el caso de Hubert Lanssiers, capellán en los penales de Lima, y Gastón Garatea, cercano a la Teología de la Liberación. El legendario director del colegio durante un cuarto de siglo, el polaco Estanislao Kasprzak, era presidente de las Aldeas Infantiles SOS, un conjunto de hogares temporales para niños y adolescentes en abandono, algunos de los cuales eran becados por el plantel. El padre Hervé Thomazo, también residente en el colegio, era el fundador de la Asociación de Colegios Religiosos (ADECORE), cuyos campeonatos han sido cantera para deportistas de distintas disciplinas por décadas.

Aunque en materia sexual los curas franceses y los docentes distaban de discursos conservadores, lo cierto es que la enseñanza en la Recoleta en aquellos años era, por momentos, masificada, poco personalizada e, hija de su tiempo, poco preocupada de problemas como el acoso escolar, cuestión de la que se quejaría en alguna entrevista Kenji, víctima de bromas crueles por parte de algunos de sus compañeros. En contraparte, el nivel académico era alto en términos generales, tanto en cursos de ciencias como de

letras. Buena parte de los exalumnos de la época recuerda con cariño a sus compañeros de promoción, así como a varios profesores, algunos de los cuales ya fallecieron.

FUJIMORI HIGUCHI, Kenji Gerardo-. Nuestro querido amigo Kenyo nos viene acompañando desde 4to grado de Primaria. Se caracterizó por fregar a todo el mundo en la clase y luego poner su cara de yo no fui. Super hincha de Alianza Lima. Piensa estudiar Biología en el exterior. Suerte, cara de plato.

Mientras los Fujimori Higuchi estudiaron en la Recoleta, tenían un cuerpo de seguridad a su disposición. Los Mercedes Benz asignados a los hijos del mandatario estaban estacionados, para mayor espacio, en la ubicación destinada a las movilidades escolares. Normalmente, llegaban al plantel minutos antes de la hora oficial de entrada, lo que se notaba con las sirenas de la escolta policial que los acompañaba. Si bien algunos agentes de seguridad permanecían en el colegio, la mayoría del cuerpo policial se encontraba afuera.

Pocas veces se vio a Alberto y Susana en el colegio. En 1991, durante una visita del grupo scout del colegio a Palacio de Gobierno, Kenji permitió como deferencia especial el ingreso a la entrada de la zona residencial, desde la cual el mandatario saludó a los niños y adolescentes presentes. Al año siguiente, a un mes del golpe de Estado, Higuchi acudió a la actuación por el Día de la Madre, pero apenas intercambió palabra con el padre Estanislao, quien durante buena parte de la ceremonia le dio la espalda. Los padres de familia más politizados que estuvieron en dicha ceremonia interpretaron que el sacerdote daba una protesta silenciosa ante la ruptura del orden constitucional. De los hijos, se conoció en el plantel que fue Kenji quien aprovechó más la oportunidad de hacer fiestas de adolescentes en la casa de gobierno, junto a sus compañeros de promoción, en particular en 1996, su año de egreso de las aulas recoletanas.

Una pequeña paradoja. Alejandra Alayza, una de las lideresas de las manifestaciones juveniles contra Fujimori en 1997 y hoy una reconocida socióloga, es integrante de la promoción 1992, de la cual también es integrante Keiko. Marisa Glave, quien participó en las

protestas contra Fujimori en 2000 —y quien años más tarde sería regidora metropolitana, congresista y también socióloga—, estudió en la promoción 1998[107].

En junio de 1994, Higuchi rompería su silencio. Acusó directamente a dos ministros del gobierno de su esposo de presuntos actos de corrupción. Uno de los acusados, semanas más tarde, saldría del cargo por otro evento que lo vinculaba a un personaje del gobierno de Alan García involucrado en malos manejos de fondos públicos. Ella también se quejaría de que la Fundación Por los Niños del Perú, que aún presidía, no estaba recibiendo fondos a tiempo.

Por aquellas semanas, la esposa del presidente anunció que formaría el movimiento Armonía Siglo XXI. Invitó al entonces congresista Rafael Rey a sumarse a las filas de su movimiento. La movida de Fujimori fue rápida: gracias a la mayoría parlamentaria, se hizo una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones para evitar que los familiares directos del presidente pudieran postular a cualquier cargo público. El pretexto era más o menos atendible: evitar el nepotismo y el mal uso de fondos públicos. Sin embargo, este último argumento también podía aplicarse a un mandatario reeleccionista.

Susana se manifestó a través de un comunicado público, señalando que una norma no podía sobreponerse frente a la Constitución. Sin embargo, no existía aún un Tribunal Constitucional que evaluara la pertinencia de la norma.

En las Fiestas Patrias, el matrimonio se dejó ver en la misa solemne, donde se saludaron con frialdad. Luego del discurso presidencial, Higuchi lanzó un dardo: «No me ha impresionado lo que he escuchado». Ese hervidero de rumores que es la ciudad de Lima estalló en habladurías.

El 3 de agosto de 1994, Higuchi abandonó Palacio de Gobierno y se mudó a la casa de su asistente personal, en forma temporal. Ese día, había buscado interponer recursos ante el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación, para buscar anular lo que ya se conocía en los medios como la «Ley Susana». Once días más tarde, quiso ingresar a la residencia presidencial para sacar sus cosas,

pero había orden de no admitirla. Luego de algunos minutos, la dejaron entrar, pero ya no podía salir. «Han puesto rejas en la salida», dijo Higuchi por celular a los periodistas que se acercaron a la puerta posterior de la casa de gobierno. Según el periodista Juan Subauste, Higuchi se acercó a Frecuencia Latina, donde trabajaba, para dar cuenta de sus denuncias y grabaron su testimonio. La cinta no salió al aire en su momento, pues el departamento general de prensa del canal tenía simpatías por Fujimori.

Fujimori buscó minimizar el incidente. Entre risas, les dijo a los periodistas: «Si quieren los llevo a Palacio para que comprueben que mi esposa no está encerrada». Ya más serio, reconoció que había disentimientos «como en cualquier pareja». Las encuestas de intención de voto para 1995 mantenían su sólido respaldo, pero Higuchi apareció con 6 %.

El 23 de agosto de 1994, Fujimori reconoció finalmente la gravedad de la crisis. Por la noche, emitió un mensaje a la nación donde fue drástico con Susana. La acusó de desleal, así como de la supuesta manipulación de su entorno con fines políticos. «No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan». También calificó a su esposa como «inestable e influenciable». El mensaje remató con el anuncio: su aún esposa era destituida como primera dama. Un evento sin precedentes en la historia peruana.

La separación fue dura. A inicios de septiembre, finalmente Higuchi pudo sacar sus cosas. Y fue a la comisaría de Monserrate, la más cercana a Palacio, para señalar que: «La señora Susana Higuchi de Fujimori deja constancia que se retira voluntariamente del domicilio conyugal por motivos de hostilización permanente y violencia psicológica contra su persona, indicando que lleva consigo sus pertenencias personales únicamente, para dirigirse a San Borja. Solicita dejar constancia de que tenía la voluntad de llevarse consigo a sus menores hijos para residir con ellos, pero no puede hacerlo porque ellos no se encuentran en la residencia del Palacio».

Susana se terminaría mudando al local de la academia Wisconsin.

Hasta 1990, el local central del Servicio de Inteligencia Nacional era un edificio vetusto y en malas condiciones, lo que daba cuenta

de la poca importancia que se le daba a esta institución en la práctica. Apenas Montesinos asumió como jefe real, remodeló las instalaciones. En particular, prestó atención al segundo piso de la casa.

En la remodelación, creó dos alas relativamente independientes. En la suya había colocado la oficina del jefe nominal del SIN, donde se grabaría la mayor parte de los videos que luego lo harían célebre. Contaba con una sala de monitoreo de cámaras de distintos lugares de la ciudad de Lima, un salón grande para eventos y otro para reuniones con ministros y congresistas. A pesar de que tenía un departamento en un edificio confortable en San Isidro, Montesinos se mudó en la práctica al local en Chorrillos. En su vivienda, seguirán viviendo su esposa y sus hijas, a quienes dedicará pocas visitas familiares al año y una cantidad importante de dinero para su mantención.

Aprovechando el distanciamiento de Fujimori e Higuchi, Montesinos montó otra ala del segundo piso del SIN para que sirviera, en la práctica, de vivienda presidencial. Para 1993, Fujimori comenzó a pernoctar en el ala que le tocaba, donde había instalado una oficina, dos cuartos para los hijos adolescentes —uno para los chicos, otro para las chicas— y un dormitorio para él. Se habilitó un gran jacuzzi para el presidente, así como un gimnasio para Kenji y un minidepartamento para Mutsue, viuda de Fujimori.

El segundo piso se convirtió en un espacio donde los hijos adolescentes de Fujimori le pedían propinas a su «tío Vladi», recibían a sus amigos o entraban —sobre todo Kenji— a las oficinas de los altos funcionarios de Inteligencia. Cuando todos los hijos dejaron el colegio y se fueron a vivir a Estados Unidos para seguir sus estudios universitarios, Fujimori volvió a Palacio de Gobierno. Solo cuando Kenji venía de vacaciones o en pocas ocasiones especiales, volvía al segundo piso.

Este fue el espacio donde, finalmente, los cuatro hijos del mandatario decidieron apartarse de su madre. Kenji dijo a la justicia chilena:

—Mi madre tenía una enfermedad que afectaba su estado de ánimo y era difícil la convivencia con ella. Cuando se fue, pasaron

como cuatro o cinco años en que no tuve contacto con ella, no porque me obligaran sino porque no me era agradable el contacto con ella. En ese aspecto, yo tuve una reacción más severa que el resto de mis hermanos.

Si bien Keiko y Sachi se dejaron ver en público con su madre en algunas oportunidades, ante la opinión pública, los Fujimori Higuchi tomaron partido por su papá, el presidente de la República. Según personas cercanas a Keiko, ella asumió el rol de puente entre su madre y sus hermanos, Sachi se mudó con su madre producto del acuerdo de la separación, mientras que los hijos varones fueron quienes tomaron mayor distancia de su madre.

Separada de Fujimori, Susana buscó un futuro político. Continuó con sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción y, además, sobre las malas prácticas del Servicio de Inteligencia Nacional. Acudió a una misa en memoria de las víctimas de los estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, ultimados por el destacamento Colina. Y luego entabló una denuncia por maltrato contra su esposo, que no prosperaría en el Poder Judicial.

El 12 de septiembre de 1994, Higuchi anunció formalmente su candidatura a la Presidencia de la República. Su plataforma era escueta: generación de puestos de trabajo, lucha contra la corrupción, programas sociales y mejora de los servicios educativos.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones le negó postular a la Presidencia, invocando la «Ley Susana». Posteriormente, buscó presentarse al Congreso de la República en alianza con un movimiento de militares y policías en situación de retiro, pero a Armonía Siglo XXI no se le permitió participar, pretextando que no había presentado la lista completa. Intentó hacer una huelga de hambre que la llevó a una clínica. Luego de ese episodio, optaría por el perfil bajo durante el resto del gobierno de su esposo.

A fines de 1994, Fujimori señaló oficialmente que Keiko Sofía, su hija mayor, era la nueva primera dama. Tenía diecinueve años. Según Keiko, accedió a ocupar ese puesto con el consentimiento de su madre. Debía alternar sus estudios de administración de empresas en Estados Unidos con las funciones protocolares de su nuevo puesto. Entre 1994 y 1997, estuvo entre Lima y Boston,

alternando su vida de adolescente, a caballo entre los estudios y las fiestas de su edad, con las citas en las que debía acompañar a su padre dentro y fuera del Perú.

En junio de 1995, Fujimori inició los trámites de divorcio, alegando que su esposa había cometido «injuria grave». Un mes más tarde, Higuchi aceptaría la ruptura de su matrimonio, pero por mutuo disenso. El Poder Judicial le dio la razón a Fujimori en noviembre de 1995. A fines de ese año, con su salud resquebrajada, aceptó ceder la presidencia de la Fundación por los Niños del Perú a Keiko. Higuchi no reestablecería la relación con sus hijos en forma plena hasta la primera década del siglo XXI. A ella nunca se le conoció ninguna relación posterior a su matrimonio.

Hiro y Sachi tendrían un perfil bajo durante el resto de la década. Tan pronto como acabaron sus estudios escolares, se fueron a estudiar a Estados Unidos y no tenían ningún aprecio por la política. Kenji se quedaría con su padre hasta 1997, cuando partió al mismo destino que sus hermanos.

Durante el resto de su presidencia, a Alberto Fujimori, no se le conoció pareja alguna. Si bien llegó a dar declaraciones que hoy serían censurables —como que buscaba una nueva esposa «con buenas piernas»—, su vida privada se limitó al contacto con sus hijos, único refugio lejos de su presidencia. Algunos medios cercanos al régimen alentaban versiones sobre la supuesta coquetería de Fujimori con algunas invitadas internacionales —como Chabeli Iglesias y Cecilia Bolocco—, pero estas no pasaron de ser una leyenda. Fue una elección deliberada del mandatario, que guardaba el equilibrio entre la imagen de mandatario trabajador durante las 24 horas del día y su propio carácter, negado para cualquier vínculo social que no fuera el protocolar y aquel que tenía con sus vástagos.

---

105 La vida familiar de los Fujimori Higuchi se relata en Jochamowitz (2018: 218-223, 227-239, 245-252) y (2019a: 75-81, 187-191), y Bowen (2000: 8-10, 19, 216-222). Asimismo, la vida pública de Susana Higuchi se sintetiza en «Ma» de Sifuentes para *La Ventana Indiscreta,* que puede verse en: https://youtu.be/ozzsZP_PHhk y en Gasparini (2002: 193-229). Datos complementarios aparecen en el capítulo sobre la familia del libro de Daneri (2004: 131-153) y en el artículo de Vásquez de Velasco en el volumen colectivo

Señora K (2020: 18-39).

106 Sobre las denuncias de presuntas torturas a Higuchi, pueden revisarse los materiales arriba citados, así como el reportaje de Edmundo Cruz publicado por *Ojo Público* en 2016, con testimonios de Kenji y Sachi Fujimori. Véase en: https://ojo-publico.com/221/kenji-y-sachie-acusaron-su-madre-por-ambiciones-politicas-ante-juez-chileno. También puede verse el reportaje de Gerardo Saravia y Patricia Wiese «La niña de sus ojos», para *Ideele*: (https://revistaideele.com/ideele/content/la-ni%C3%B1a-de-sus-ojos)

107 La vida en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta se basa en los recuerdos del autor, quien estudió en dicha institución educativa, así como en la revisión de distintas ediciones del *Boletín Escolar Recoletano,* publicación anual que presenta fotos y actividades de las distintas promociones, así como artículos de alumnos y docentes. También revisamos el completo libro *K.O. P.P.K.* de Sifuentes, sobre todo, en la sección correspondiente a la biografía de Kenji Fujimori (2019: 176–182) y la crónica de Dongo (69, 79-80) en el libro colectivo *Yo presidente. Cinco políticos en su ruta al poder* (2009).

CAMPAÑA EN GUERRA

(Enero – Abril, 1995)

La historia de ascenso social de Alejandro Toledo podía devenir en dos posibles resultados: la identificación con una narrativa de éxito instantáneo a tal punto que podría encumbrar al economista como presidente, o una breve empatía que se diluiría conforme otros aspectos del postulante salieran a relucir. Para llegar a lo primero, faltarían aún algunas temporadas. El segundo resultado se presentó en 1995.

Fue durante su primera postulación presidencial que comenzamos a conocer los rasgos centrales de su biografía ante el público: nacido en 1946 en la localidad de Cabana (provincia de Pallasca, región Áncash), miembro de una familia extensa que migró a Chimbote cuando el puerto costero ancashino era uno de los centros importantes para la pesca industrial, en boga en la década de los sesenta. Tuvo varios oficios, entre ellos, los de lustrabotas y vendedor de tamales. Fue en Chimbote donde conoció a dos miembros del Cuerpo de Paz —una agencia federal estadounidense de voluntariado—, quienes hicieron los contactos para que pudiera estudiar en la Universidad de San Francisco. Allí se graduó de economista, hizo una carrera como consultor y docente universitario y obtuvo dos maestrías y su doctorado en la Universidad de Stanford. Y también tuvo un paso por la Universidad de Harvard.

Precisamente, este camino desde Cabana hacia dos de las universidades más prestigiosas del mundo fue lo que lo colocó en la mira de los medios de comunicación. Aunque Toledo dijo inicialmente que fue docente en Harvard, lo cierto es que había sido investigador en uno de los institutos de dicha casa de estudios. A pesar de la imprecisión, la conexión Toledo–Harvard–Stanford era ganadora, tanto en términos de prestigio, como material para los programas cómicos, donde el candidato se presentaba junto a sus imitadores.

El inicio de 1995 fue el apogeo de Toledo como postulante debutante. Comenzó a robarle puntos a Javier Pérez de Cuéllar, no encaraba directamente a Fujimori, pero criticaba sus políticas

sociales y buscaba empatizar con los ciudadanos a través de su fenotipo.

Sin embargo, una denuncia liquidó aquella campaña presidencial. Diversos medios de comunicación sindicaron a Toledo como asesor económico de Carlos Manrique Carreño, el fundador del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE).

Ya habíamos mencionado que, para 1991, CLAE era una entidad piramidal en la que miles de personas depositaron ahorros de toda una vida o los incentivos económicos con los que dejaron un puesto en el Estado. Para 1992, la Superintendencia de Banca y Seguros le exigió documentación a Manrique para que la empresa se pudiera formalizar. Nunca lo hizo y, además, CLAE comenzó a perder liquidez.

En abril de 1993, la SBS intervino CLAE y, para 1994, se le declaró en liquidación. Si bien Manrique, en un inicio, dijo que devolvería el capital a los ahorristas en mítines bastante concurridos, pocos vieron, en aquel momento, la recuperación de su dinero. Quedó claro que había ocurrido la mayor estafa de la historia peruana.

Según la investigación del periodista Umberto Jara, Manrique había señalado que Toledo era parte integrante de un presunto comité de asesores económicos de CLAE. En 1993, Jara había recibido fotografías de ambos personajes en Harvard, que servían para que el estafador pudiera vanagloriarse de sus contactos con perfil internacional.

En pleno proceso electoral de 1995, cualquier vinculación con el presidente de CLAE implicaba un fuerte costo político. Toledo lo pagó, al aceptar que conoció a Manrique, pero no tuvo que ver con la estafa. Incluso llegó a señalar que buscó la recuperación de lo invertido en la controvertida entidad financiera por sus hermanos. Suficiente para liquidar sus aspiraciones presidenciales. El resto de la campaña electoral lo pasó por debajo del 5 % de aprobación[108].

Luego del fiasco del «Pacto de Caballeros» en 1991, Fujimori viajó a Ecuador en enero de 1992. Era la primera vez que un presidente peruano visitaba oficialmente al vecino del norte. Allí, el mandatario propuso una propuesta integral para cerrar cualquier

diferendo limítrofe: seguir con la labor de la Comisión Demarcadora con asistencia de los países garantes, otorgar a Ecuador navegación libre y gratuita en el Amazonas y sus afluentes, suscribir un Acuerdo de Integración Fronteriza y reducir conjuntamente armamento militar. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Borja no aceptó la oferta.

Durante los años noventa, las Fuerzas Armadas ecuatorianas ganaron amplio poder económico. De un lado, gracias a la Dirección Nacional de Industrias del Ejército, tenían importantes intereses en diversas empresas, lo que les brindaba una fuente de ingresos. De otro lado, el 15 % de los ingresos por venta de petróleo pasaba a la Junta Nacional de Defensa. Ello le permitió tener a los militares del vecino del norte los suficientes recursos para renovar sus equipos y armamento, sobre todo, aéreo. Mientras que Perú venía con un fuerte desgaste económico y humano, debido a que su equipo castrense había sido enviado a combatir a la subversión y, además, no se contaban con armas y equipos suficientes para custodiar la zona de frontera.

Desde mayo de 1994, se produjeron escaramuzas entre los ejércitos ecuatoriano y peruano. Aunque en ambos lados de la frontera aún se discute sobre quién inició el fuego, lo cierto es que Ecuador había instalado tres puestos fronterizos dentro de territorio peruano bastante bien fortificados: Tiwinza, Cueva de los Tayos y Base Sur. Para noviembre, la situación motivó una reunión del Consejo de Defensa Nacional en el SIN. Fujimori ordenó a Hermoza Ríos que sacara a las tropas ecuatorianas en pocos días, pues podía afectar sus planes reeleccionistas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo que ser franco en explicarle al presidente la ventaja que había sacado Ecuador en términos de armamento militar.

Aunque los enfrentamientos armados más fuertes se iniciaron al comenzar 1995, no sería sino hasta el 26 de enero de aquel año que se reconocería claramente que estábamos ante un conflicto armado internacional[109].

Mientras el verano electoral calentaba, bajo el ardiente sol de Piura se producía uno de los más importantes golpes contra el

narcotráfico. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA detectó 3.5 toneladas de cocaína en un taller de mecánica de la norteña ciudad.

Manuel López Paredes estaba en el negocio de la droga desde inicios de la década de los setenta, en que su hermano José Tito comenzó a trabajar para su firma. El clan liderado por ambos, conocido como «Los Norteños», contaba con una fortuna estimada en 250 millones de dólares. De acuerdo con una versión recogida por las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan, Montesinos habría solicitado a López Paredes una contribución de 500 000 dólares para la campaña de reelección de Fujimori. El narcotraficante habría abonado 450 000 dólares en efectivo.

Según las mencionadas periodistas, con posterioridad a la detención de los López Paredes, Montesinos envió a un abogado de confianza, Javier Corrochano, a hablar con ellos para ofrecer los servicios del asesor para favores judiciales. Sin embargo, el clan fue sentenciado a altas penas de prisión. Corrochano reconoció años más tarde que defendió a un miembro del clan López Paredes, Herless Díaz, y que, en efecto, recibió 400 000 dólares de parte de su cliente para que el asesor presidencial los ayudara. Sin embargo, Montesinos recibió el dinero, sin hacer ningún favor, aduciendo que la agencia antidrogas estadounidense —la DEA— lo presionaba. Corrochano devolvió a Díaz la parte del dinero que había cobrado y una cantidad adicional.

Quien no fue incluido en la investigación fue el entonces viceministro del Interior, Edgar Solís Cano, cuyo nombre apareció en la agenda de uno de los miembros de la banda. Solís Cano era una persona ligada al hombre de confianza de Fujimori, a tal punto que trabajó con él en su estudio durante los años ochenta.

Manuel López Paredes falleció en la Navidad de 2019, víctima de un cáncer de páncreas[110].

Los primeros días del conflicto, desde el lado peruano, se vivieron con una mezcla de sentimientos. Para comenzar, incertidumbre y asombro, debido a que el gobierno peruano no brindaba informaciones claras sobre lo que ocurría en la zona de frontera. Los medios de comunicación solo presentaban escenas de desfiles

militares en varias partes del país, izamientos de bandera y el alistamiento voluntario de varios jóvenes. Sin embargo, en los sectores más altos limeños, la lejanía del conflicto era física y mental, pues el verano proseguía sin parar. Por aquel año, comenzaban a ser habitados los primeros condominios privados en la costa de la provincia de Cañete, al sur de Lima, en la zona que comenzaría a conocerse paulatinamente como Asia, por extensión de una pequeña localidad ubicada en el kilómetro 97 de la Panamericana Sur.

Recién el 1 de febrero de 1995, Fujimori brindaría un mensaje a la nación en horas de la noche. El mensaje tenía dos puntos centrales: Ecuador había invadido territorio nacional y Perú había respondido a «una violación de la soberanía nacional» y proponía la creación de una zona desmilitarizada. No brindó el número de bajas o detalles militares, cuestión de la que se encargó Hermoza al día siguiente: 6 soldados peruanos habían fallecido, 43 ecuatorianos habían sido ultimados y se había logrado capturar Base Sur.

Las posiciones de los personajes centrales del poder en el Perú sobre la guerra eran disímiles: Fujimori no tenía, a diferencia de muchos peruanos de su generación, un sentimiento de animadversión hacia Ecuador y procuraba ver las relaciones internacionales en términos de cooperación económica. Sí le preocupaba que el rumbo del conflicto afectara sus posibilidades de ganar la reelección. Montesinos compartía esa preocupación, pero su formación castrense hacía que entendiera la necesidad de aprovechar la guerra a su favor. Mientras que Hermoza Ríos era el «halcón» del trío, dispuesto a dar una lección a los ecuatorianos.

Dos hechos complicaron el conflicto. De un lado, Ecuador tenía mejores posiciones militares, pues contaba con la altura de la Cordillera del Cóndor a su favor, así como mejor armamento y personal más profesional. Mientras que las tropas peruanas eran, con excepciones, noveles en el combate en la selva y tenían pocos recursos de comunicaciones.

Asimismo, Ecuador recibió una importante dotación de armas por parte del traficante Jean–Bernard Lasnaud. De acuerdo con Bowen y Holligan, Montesinos supo del cargamento y habría chantajeado al

intermediario para no dar a conocer la noticia. Cuando estalló el caso en marzo, y las acciones bélicas habían terminado, el escándalo fue mayúsculo. Clarín, el más importante diario de Argentina, daba a conocer que el tráfico de armas había pasado por ese país, garante del Protocolo de Río de Janeiro.

La campaña electoral peruana desapareció del radar noticioso en medio de la guerra[111]. Y ello fue perjudicial para Javier Pérez de Cuéllar. El veterano diplomático había señalado que no dudaba en sumarse a la voz oficial, para defender los intereses del Perú. Su propio oficio lo condenó inicialmente a la cautela y mesura en sus intervenciones públicas durante las semanas que duró el conflicto del Cenepa. Y generó que desapareciera prácticamente de las noticias. Una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado marcó que su desempeño había sido regular y no hubo mucha diferencia en su intención de voto.

Al mismo tiempo, el entorno de Pérez de Cuéllar era bastante diverso en intereses e ideología. Durante toda la campaña, incluyendo el periodo en que se paralizó en la práctica por el conflicto, Unión Por el Perú era criticado por ser demasiado heterogéneo en los mensajes de sus candidatos al Congreso, donde convivían abogados y tecnócratas de derecha, políticos de izquierda y militares en retiro.

Alfredo Barnechea (pariente político del embajador, exdiputado aprista —renunció por la estatización de la banca— y próximo a ciertas corrientes socialdemócratas) fue el principal asesor político del candidato. Desde allí, se le apreciaba como un personaje más cercano a la discusión política intelectual antes que a decisiones prácticas. En un inicio, la periodista Susana Villarán se encargó de las comunicaciones de la campaña, pero dejó el puesto cuando en febrero fue convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para ser su nueva secretaria ejecutiva.

Lo cierto es que, cuando acabó la guerra, quedaba poco tiempo para que una postulación con varias fallas estructurales pudiera calar en el electorado.

Quien sacó partido del conflicto fue Alberto Fujimori. Su estilo de presencia en el terreno se extendió al teatro de operaciones, al que

acudía supuestamente para dar fuerza moral a las tropas. Sin embargo, lo que terminaba ocurriendo era que usaba el conflicto para aparecer constantemente en la televisión, con fines electorales. En la práctica, la guerra suplió a la inauguración de obras.

La imagen más triunfalista de Fujimori fue cuando el Ejército había logrado desarticular la base de Cueva de los Tayos. Allí, junto a un grupo de sus reporteras favoritas, se dio un baño en una de las lagunas de la zona. La acción fue calificada de temeraria. Horas más tarde, dos morteros ecuatorianos cayeron a 100 metros del campamento donde estaba el mandatario.

En privado, algunos militares criticaban al presidente. Para el comandante de la región militar Vladimir López Trigoso, resultaba complicado que Fujimori se llevara helicópteros que eran claves para las operaciones militares, con miras al aprovechamiento político. El jefe de informaciones del Ejército, Daniel Mora, estaba molesto por las pobres condiciones logísticas y económicas a las que estaban sometidos los soldados.

El 13 de febrero de 1995, Fujimori anunció en un mensaje a la nación que finalmente se había logrado tomar el puesto de Tiwinza, convertido en el principal símbolo del conflicto y, con ello, se había obtenido el desalojo de las tropas ecuatorianas. Por ello, señaló al final de su mensaje que las hostilidades militares cesarían al día siguiente. Todos los diarios dieron como cierto el anuncio presidencial, con fervor patriótico.

Pero la verdad era otra. Si bien Ecuador aceptó el cese al fuego, declaró que la base de Tiwinza estaba bajo su control. Desde Perú, la revista Caretas publicó un informe donde desmentía a Fujimori, en base a fuentes militares. En marzo de 1995, la publicación semanal dirigida por Enrique Zileri publicaría una carta de López Trigoso, en la que el alto oficial reconoció que Tiwinza no era controlado por tropas peruanas. Mora reconoció años más tarde que eso era verdad. En realidad, las hostilidades no acabaron hasta fines de febrero, cuando se instaló una zona desmilitarizada.

Todos los analistas militares independientes a ambos lados de la frontera reconocen que el conflicto, en términos militares, no fue un triunfo peruano. El analista político Fernando Rospigliosi, un

sociólogo ya ubicado a la derecha y que se había especializado en temas militares, calificó a la guerra del Cenepa como «la peor derrota desde 1879», cuando Perú se vio inmerso en la Guerra del Pacífico, que finalmente perdió. Según sostiene el excanciller Eduardo Ferrero Costa, la avanzada ecuatoriana le permitió hacer concesiones diplomáticas que en otros tiempos hubieran sido inaceptables, como reconocer la legitimidad del Protocolo de Río de Janeiro en la Declaración de Paz de Itamaraty.

Durante los primeros meses del año, el diario La República había reportado el uso de fondos públicos para la campaña electoral: cuadernos con el rostro de Fujimori eran distribuidos gracias a las acciones del jefe del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Loreto, Tomás Gonzales Reátegui. El caso pasó al Ministerio Público, donde Blanca Nélida Colán lo puso en «la congeladora». Pérez de Cuéllar entregó a la misión de observación electoral de la OEA otras denuncias sobre presidentes de CTAR actuando a favor de la reelección. Martha Chávez sentenció que las denuncias de «fraude» se daban porque la oposición no tenía propuesta. El jefe de la misión de la OEA, Santiago Murray, señaló que los casos presentados no configuraban un «fraude», sino irregularidades.

Pérez de Cuéllar trató de reubicarse rápidamente en el escenario político. Comenzó a cuestionar el cierre intempestivo de las hostilidades con Ecuador, sin que el gobierno pudiera aclarar si se habían expulsado a las tropas invasoras. Al mismo tiempo, comenzó a enunciar algunas propuestas sobre medidas vinculadas a empleo —llegó a prometer dos millones de nuevos puestos de trabajo entre 1995 y 2000— y lucha contra la pobreza, pero en forma bastante genérica. Continuaba sus giras en provincia, pero era sentido como demasiado lejano a las demandas concretas de los ciudadanos.

A Belmont no le iba mejor. Su popularidad como alcalde era exigua y su porcentaje de votación en las encuestas nunca despegó. Buscó hacer una campaña abiertamente opositora y confrontativa, llevando como vicepresidente y cabeza de lista al Congreso a Máximo San Román. Su impopularidad era su principal

ancla. Las demás candidaturas opositoras, en la práctica, buscaban que sus partidos pudieran obtener representación parlamentaria.

Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Nacional hacía lo suyo. Con la venia de Fujimori, Montesinos montó el denominado Plan Emilio, consistente en el espionaje de conversaciones telefónicas, que duró varios años. Quienes hacían esta labor ilegal eran miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, al mando de Roberto Huamán Azcurra, quien se convirtió en el experto en temas tecnológicos de la cúpula en el poder. Entre las personas cuyas conversaciones estaban interceptadas se encontraban Javier Pérez de Cuéllar y su hijo; políticos de oposición como Lourdes Flores Nano, quien encabezaba la lista del Partido Popular Cristiano; y periodistas y analistas críticos como Rospigliosi, César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Mirko Lauer y Gustavo Mohme Seminario. Incluso se llegó a montar una central en Palacio de Gobierno llamada «Casablanca».

Fujimori fue afinando la campaña. Del efectista spot «El Perú no puede parar», ideado por Borobio, pasó a la necesidad de afirmar las reformas y logros emprendidos por su administración. Durante las semanas finales de campaña, el mandatario continuó con sus viajes a provincia para inaugurar obras y comenzó a hacer campaña a favor de su lista parlamentaria. Fujimori indicaba que solo con una mayoría amplia en el Congreso podrían cumplirse los objetivos de su segundo mandato.

Para fines de marzo, la intención de voto de Fujimori seguía alta, pero había caído, producto de las críticas frente a su actuación en el conflicto con Ecuador. Mientras que Pérez de Cuéllar había levantado un poco su popularidad. Alfredo Torres, cabeza de Apoyo Opinión y Mercado, pronosticó que era probable una segunda vuelta. Sin embargo, para muchos, lo más probable era que Fujimori ganara la elección.

El 5 de abril de 1995, RBC Televisión difundió lo que, cronológicamente, sería el primer «vladivideo». Se trataba de un ágape en el que Fujimori, Montesinos, Hermoza y parte de la cúpula militar celebraban el segundo aniversario del golpe de Estado, un año antes. Todos ataviados con ternos participaron en una cena en

la residencia del comandante general del Ejército en Chorrillos. La imagen más impactante del video colocaba a Montesinos haciendo un guiño a la cámara oculta, mientras Fujimori y los demás militares se alistaban para la foto oficial de rigor.

El 7 de abril de 1995, los medios de comunicación revelaron una trama de fraude a mediana escala. Alrededor de veinte personas —incluyendo a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones— fueron detenidas en Huánuco, departamento que tiene localidades en la sierra y la selva peruana. Se habían robado 3024 actas electorales, los documentos en los que se registra el número de votos contados en cada mesa de sufragio.

De las actas sustraídas, 360 ya habían sido llenadas. Era evidente quiénes eran los favorecidos: en el caso de la presidencia, Alberto Fujimori. Para las listas al Congreso, Horacio Cánepa, abogado y candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano, así como los fujimoristas Víctor Joy Way y Pablo Tello, quienes iban a la reelección. Se sindicó a Tello como el operador central. Los tres postulantes beneficiados al Congreso eran huanuqueños. Cánepa se dio a la fuga y, años más tarde, fue absuelto.

El presidente del Consejo de Ministros, Efraín Goldenberg, buscó reducir la magnitud del evento. En sus palabras, se trataba de «un incidente aislado» que no comprometía la integridad de las elecciones. Joy Way deslindó de la maniobra que lo favorecía. Para el secretario general de la OEA, el expresidente colombiano César Gaviria, el caso era un escándalo bastante serio.

Todos los candidatos opositores denunciaron la maniobra como una clara evidencia de fraude. Pérez de Cuéllar y otros de los postulantes hablaron con Gaviria para contemplar la posibilidad de postergar las elecciones e incluso presentaron una misiva para ello. Sin embargo, el gobierno y el Jurado Nacional de Elecciones no estaban dispuestos a aplazar la elección. El sábado previo a los comicios, Goldenberg anunciaba que la investigación del Ministerio Público concluía que se trataba de una banda de tramposos que había hecho un tipo de maniobras en elecciones anteriores. Los candidatos opositores dialogaron sobre la posibilidad de boicotear

las elecciones, sin llegar a un acuerdo. Pérez de Cuéllar pensó en retirarse, pero al final sus asesores lo persuadieron de continuar.

La jornada electoral del 9 de abril de 1995 transcurrió con normalidad. Aquel día, Fujimori inauguró una perniciosa tradición periodística: tomó desayuno con sus hijos y aprovechó que todas las cámaras estaban ante sí para enviar mensajes políticos. Durante el siguiente cuarto de siglo, todos los candidatos apelarían a esta misma fórmula, al igual que los productores de los programas electorales. La cobertura no contempló, salvo excepciones, alusiones a los incidentes de Huánuco. Ningún candidato se retiró.

A las tres de la tarde, la campaña presidencial más anodina de las últimas décadas culminó con una sorpresa, no por el resultado, sino por la magnitud. Las encuestas a boca de urna señalaban que Fujimori había sido reelegido con el 64 % de los votos. Pérez de Cuéllar había quedado con apenas 22 %. Mientras, en un mundo paralelo, RBC Televisión señalaba la posibilidad de una segunda vuelta entre Fujimori y Belmont, así como que se había producido un fraude masivo.

Fujimori indicó a la prensa que estaba sorprendido por el margen de su victoria. A pesar de lo impresionante del triunfo, no hubo celebraciones masivas ni manifestaciones. El presidente–candidato se dio un paseo por todos los medios de comunicación para festejar su triunfo. En cada entrevista, manifestó que la partidocracia había sido derrotada. Y no le faltaba razón: ninguno de los partidos que habían dominado la escena política en la década anterior había obtenido más de 5 % de votación presidencial. Apenas habían obtenido representación parlamentaria. Fujimori también se negó a formar una estructura política tradicional.

Pérez de Cuéllar aceptó la derrota rápidamente. Indicó que los peruanos habían decidido premiar la derrota del terrorismo y de la hiperinflación, pero consideró que las libertades democráticas seguían en peligro. El embajador partió meses más tarde al extranjero. No le faltaba razón en nada de lo que decía, pero habría que añadir que el alto gasto social y el estilo de Fujimori consolidado el año anterior contribuyeron al triunfo abultado.

Años más tarde, Pérez de Cuéllar hizo un balance sobre su derrota. En su opinión, no fue un buen postulante y no logró congregar tanto a los partidos de oposición como a sectores empresariales que pudieran respaldar su candidatura. Para el embajador, otro factor importante fue el aparato gubernamental entregado al control del poder. El exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas concluyó su balance con una frase que, en retrospectiva, daba cuenta de lo titánico de la tarea que hubiera tenido que emprender: «Y aun si hubiera ganado, sabía de la dificultad de poner fin al ambiente de corrupción que entonces prevalecía en el país».

Tanto la OEA como Transparencia coincidieron en que los incidentes durante el proceso electoral fueron mínimos. El conteo rápido hecho por la organización no gubernamental, sobre la base de actas de votación, arrojó resultados parecidos a los difundidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Los informes de ambas entidades coincidieron en señalar a los incidentes de Huánuco como un hecho criminal, a baja escala.

La otra gran sorpresa se presentó en la elección parlamentaria: Cambio 90–Nueva Mayoría había obtenido 67 curules, contra lo que pronosticaban la mayoría de las encuestas, que apenas le concedían un tercio del Congreso de la República. La oposición sería encabezada por Unión Por el Perú, con apenas 17 escaños.

La nota anecdótica fue la elección de la vedete Susy Díaz como congresista. La conocida bailarina y actriz cómica había hecho una campaña basada en sus atributos físicos —colocó su número de voto preferencial en una nalga—, así como en el reparto de condones y cierta ingenuidad política. Díaz fue la única parlamentaria electa por el Movimiento Independiente Agrario. El FREPAP volvió a obtener representación parlamentaria, con un único nombre: Javier Noriega. Parte de los resultados se explicaron por el elevado número de votos nulos —40 %— en la elección parlamentaria.

Se detectaron otras irregularidades en el interior del país que llevaron al recuento de un porcentaje de actas. Al final, los resultados se confirmaron.

En algunas agrupaciones quedó la sospecha de la manipulación de los votos preferenciales a favor de ciertos candidatos. El general Luis Cisneros Vizquerra, candidato por Unión Por el Perú, denunció que Montesinos —a quien se había opuesto públicamente en varias oportunidades— había manipulado los resultados en su contra. En privado, sospechó que otra posibilidad es que su no elección fuera producto de maniobras al interior de su agrupación. Cisneros fallecería tres meses más tarde, víctima de cáncer[112].

Terminada la campaña electoral de 1995, Fujimori concedió una entrevista a la periodista Sally Bowen, quien para ese entonces escribía para Financial Times, un medio británico especializado en temas económicos y políticos. Allí, el reelecto presidente no ocultó su poca humildad: «Hay muchos pueblos en el mundo que quisieran tener un presidente como yo. Y muchos jefes de Estado que me guardan cierta admiración».

En el diálogo, Bowen insistía en algún tipo de crítica sobre los rudimentarios modales democráticos de Fujimori, pero el mandatario señalaba que continuaría con un liderazgo fuerte y asociaba su propia idea de democracia a «resultados concretos». Se vendía a sí mismo como un pragmático que escuchaba, pero que, cuando tomaba una decisión, no dudaba en ejecutarla.

Pero el pasaje más revelador de aquel diálogo fue el final:

—¿Acaso no se trata su gobierno, como alguna vez lo dijera su contrincante Javier Pérez de Cuéllar, de «una banda con un solo músico»? ¿Qué pasaría si es que mañana cae el helicóptero presidencial o es ultimado por una bala asesina?

—No se preocupe. Yo seguiré gobernando el Perú desde el otro mundo[113].

---

108 Sobre la historia política y personal de Alejandro Toledo, el mejor recuento se encuentra en Vivas (2018). Las denuncias sobre los vínculos entre Toledo y Carlos Manrique se presentaron en varios medios, pero el relato más completo se encuentra en Jara (2005). Manrique fue capturado en 1995 en Estados Unidos y posteriormente fue extraditado y condenado por estafa. Luego de cumplir su pena por el caso CLAE, volvió a caer en la cárcel por otra estafa parecida, pero de menor escala. Hasta hoy, Manrique sostiene que no estafó a nadie y que la SBS intervino la empresa por un pánico financiero provocado por otros grupos financieros.

109 El relato del conflicto del Cenepa se basa en Bowen (2000: 225-239), Bowen y Holligan (2003: 223-237), Murakami (2018: 389-401). También consultamos Rospigliosi (2000a: 275-284) y Ferrero Costa (2018: 30-35).

110 La historia de los López Paredes tiene como fuente principal Bowen y Holligan (2003: 181-182). También revisamos el artículo de Mariano de Andrade: «Los reyezuelos del oro blanco» http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/36/158.pdf y la columna de Miguel Ramírez: «El triste final de los narcos» (https://trome.pe/actualidad/historias-nunca-contadas-triste-final-narcos-manuel-lopez-paredes-noticia/?ref=tr). La versión de Corrochano aparece en Uceda (2020: 115 -117, 127-130). Según el abogado, con este caso terminó su vínculo con Montesinos y fue el caso central que sostuvo su colaboración eficaz con el Estado, concluida la década fujimorista, al aportar pruebas contra el exasesor y su operador en el Poder Judicial, el exvocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano.

111 Sobre la campaña electoral, revisamos Bowen (2000: 252-254), Bowen y Holligan (2003: 232-234), Conaghan (2005: 92-104) —quien tiene la mejor descripción del «Huanucazo»—, Degregori (2012: 46-52), Murakami (2018: 397-399, 401-408), Youngers (2003: 316-318) y Schmidt (1999). En torno a la interceptación telefónica contra Pérez de Cuéllar, tuvimos a la mano la sentencia contra Fujimori por este caso y el informe de Rossana Cueva para el programa *La Ventana Indiscreta*: https://youtu.be/o8t61wLa8tA. También revisamos *Memorias. Recuerdos personales y políticos* del propio Pérez de Cuéllar (2013: 137–142).

112 Con los añadidos de la ficción, Renato Cisneros cuenta en *La distancia que nos separa* (2015: 247-253) el acto político casi final de su padre, el general Luis Cisneros Vizquerra.

113 El diálogo entre el mandatario y Bowen posterior a la reelección en 1995 es uno de los grandes pasajes de *El Expediente Fujimori* (2000: 257-258).

CAMINO A LA AMNISTÍA

(Diciembre, 1993 – Junio, 1995)[114]

Las condiciones de los miembros del destacamento Colina que estaban en Pisco eran inmejorables. En el Batallón de Municiones 513 eran tratados con especial deferencia: tenían acceso a diarios y televisión, podían entretenerse a sus anchas y, además, los fines de semana recibían a sus familiares.

Poco a poco, tuvieron más libertades: el Año Nuevo de 1994 pudieron salir a celebrar y, paulatinamente, varios de ellos iban a Lima en forma subrepticia.

Formalmente, eran detenidos. Suscribieron una serie de documentos en los que aceptaban que estaban siendo investigados con privación de su libertad con fecha atrasada. Para que los miembros de Colina firmaran, tuvo que ir a Pisco una comitiva con varios miembros de la justicia militar e incluso un alto mando del SIE. Los suboficiales —en particular, Sosa— eran los menos proclives a suscribir este tipo de papeles, pues consideraban que su situación legal era la más complicada, debido a su posición en el escalafón del Ejército.

Sin embargo, la particular condición que tenían los miembros del destacamento en Pisco no era del agrado de otros estamentos militares, que presionaron para mantener detenidos a los oficiales y suboficiales, con todas las formalidades y rigor del caso. Tuvo que intermediar el propio Hermoza Ríos para dejar en claro que allí no había detenidos, más allá de las formas.

En paralelo, las cosas se complicaban en el ámbito judicial. El fiscal Cubas denunció por inconducta funcional al juez Carlo Magno Chacón, a quien separaron del caso en enero de 1994 y, posteriormente, lo destituyeron. La contienda de competencia para que el caso La Cantuta fuera derivado ante el fuero militar no había podido avanzar al ritmo requerido.

El 3 de febrero de 1994, la sala de la Corte Suprema que debía ver el caso había llegado a una situación complicada: tres votos de cinco estaban a favor de mandar el caso al fuero militar. Para obtener una resolución, se debían obtener cuatro votos. Y los dos

magistrados que, por prelación, debían ver el caso, eran contrarios a los intereses del gobierno. Carlos Giusti Acuña y Manuel Sánchez Palacios tenían fama de jueces probos y rectos, incapaces de sucumbir a cualquier presión.

Giusti tendría que exponer su voto el 10 de febrero, pero tres días antes se produjo un ataque con dinamita en el jardín de su casa, sin causar heridos. El ataque generó que el congresista Julio Chu Meriz —un disidente del Frente Independiente Moralizador que había pasado a las filas oficialistas— presentara una iniciativa para alterar los procedimientos de voto de la Corte Suprema en casos de contienda de competencia. Joy Way era de la misma opinión y así lo manifestó a la prensa.

La norma se aprobó de madrugada. Con ello, se logró modificar la obligación de los cuatro votos para dirimir una contienda de competencia a una mayoría simple. Con ello, ni Giusti ni Sánchez Palacios tuvieron que emitir su voto. El caso La Cantuta podía pasar al fuero militar. El único voto disidente fue el de Carlos Ferrero Costa, abogado quien comenzaría una larga carrera de votos singulares al interior del fujimorismo. Para el Colegio de Abogados de Lima, la ley 26291, que sería conocida como «Ley Cantuta», era un golpe de Estado contra la Corte Suprema.

Un último obstáculo estaba en el Poder Ejecutivo. Alfonso Bustamante, ingeniero agrónomo devenido en empresario, había asumido la Presidencia del Consejo de Ministros en agosto de 1993, a la par que la cartera de Industrias. Sus propias convicciones le marcaban que el caso La Cantuta debía ser visto en el fuero civil. No firmó la norma y renunció al puesto. Fue el único ministro que dimitió por un caso de violaciones a los derechos humanos.

El 11 de febrero, la Corte Suprema aplicó la Ley Cantuta al caso para el que había sido creada.

Una vez que se aprobó la contienda de competencia, era necesario que los miembros del destacamento Colina dejasen su cómodo retiro. Hermoza Ríos sabía que debía hacerse un juicio que, al menos en apariencia, no fuera una pantomima. Sin embargo, cuando fueron a trasladarlos, Martín y Sosa encabezaron un intento de rebelión, pues consideraban que eran los eslabones más débiles

de la cadena y que, en último caso, serían los sacrificados por parte de la institución.

Tuvo que mediar una llamada de Hermoza Ríos para asegurar a los miembros de Colina que la orden no implicaba un arresto tradicional, como lo querían ejecutar los integrantes del prebostazgo del Ejército, sino que era un traslado militar. Solo así aceptaron subir al helicóptero. Aterrizaron en el cuartel Bolívar, donde ya estaba Rivero Lazo desde fines de 1993. Las condiciones eran muy distintas a Pisco: era una prisión militar y no tendrían prerrogativas de salida. El descontento cundió.

Aunque Rivero Lazo tenía la situación clara —habría un juicio militar, luego una condena y finalmente una salida política— sus argumentos no bastaron para calmar a los hombres del destacamento. Esa noche, hubo una fuerte discusión entre Martín Rivas y Enrique Oliveros, el jefe del SIE. El jefe operativo, en medio de los gritos, comenzó a enunciar:

—Empiecen a preparar los cuartos para Fujimori, Montesinos y Hermoza.

De acuerdo con la versión de Martín Rivas, llegó a tener una reunión con Rivero Lazo para plantearles una salida precisamente a los hombres del triunvirato: ir a un juicio civil con todas las garantías para que allí, con lo que consideraban eran pocas pruebas, los absolvieran. Montesinos se negó, según Martín, porque temía que en un escenario no controlado pudieran acusarlo.

El proceso se inició el 19 de febrero de 1994 y fue sumamente expeditivo. Se asignaron abogados de oficio para todos. Primero se interrogó a los oficiales de alta graduación, en una sesión que duró apenas quince minutos. Posteriormente, pasaron Martín y Pichilingüe, con quienes estuvieron cuatro horas conversando sobre el terrorismo y el caso La Cantuta.

Un día antes de la sentencia, todos fueron informados de que las penas serían altas: a los mayores se les impondría veinte años, los agentes serían condenados a quince años y los altos oficiales recibirían penas de entre dos y cinco años. Martín y sus hombres reaccionaron. No confiaban en que les dieran una amnistía y las sentencias, en la práctica, liquidaban sus carreras. Sin embargo,

ese no era el criterio del gobierno, que consideraba necesaria la imposición de una pena alta para poder acallar las críticas por llevar un caso como La Cantuta ante el fuero militar.

Martín y sus hombres apelaron. En la sentencia, buscando salvar responsabilidades, se indica explícitamente que el Comandante General del Ejército y el personal del SIN no ordenaron ni intervinieron en el operativo. Sin duda, Montesinos y Hermoza buscaban cubrirse las espaldas. Y con ello, se las cubrían a su jefe.

Las reacciones a la sentencia fueron mixtas. Mientras que Carlos Torres y Torres Lara saludó lo alto de las sentencias como el signo de una nueva era en la justicia militar, el arzobispo de Lima Augusto Vargas Alzamora indicó que eran penas benignas para la magnitud de lo ocurrido.

Una vez que se emitieron las sentencias contra los miembros del destacamento Colina, quien se convirtió en el enlace con los detenidos fue el jefe del SIE, Enrique Oliveros. Tenía la extraña condición de ser, a la vez, un representante oficial de Hermoza Ríos y un hombre de confianza de Montesinos. En esa medida, terminaba siendo el depositario de los reclamos de los miembros del escuadrón de la muerte.

Desde marzo de 1994, los reos presionaron por obtener una fecha concreta de una Ley de Amnistía que los dejaría libres. Oliveros les señaló que la fecha más probable era julio de 1995, sea que Fujimori logre su reelección o tenga que dejar el poder. En su concepto, se vendería como una «norma de concordia nacional». De acuerdo con sus fuentes, el general Rivero Lazo informó al grupo que el caso no se vería antes, debido a que se aproximaban las elecciones, y la amnistía sería general para todas las Fuerzas Armadas.

En efecto, así fue. El 13 de junio de 1995, en forma inesperada, la bancada Cambio 90–Nueva Mayoría presentó un proyecto de Ley de Amnistía. El artículo central del proyecto indicaba: «Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación Militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o

Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley».

Tal como dijo Rivero Lazo, se trataba de una norma de carácter general, por lo que metieron a cualquier agente del Estado que hubiera cometido violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia. Se trataba de la amnistía más amplia que se había aprobado en América Latina hasta la fecha.

Para dar un guiño a la oposición, en los siguientes artículos de la norma introdujeron la amnistía a los militares que buscaron la restauración democrática el 13 de noviembre de 1993, así como a los militares en retiro que habían sido condenados por sus opiniones en torno al conflicto con Ecuador.

¿Cuáles fueron los argumentos brindados por el oficialismo y sus aliados para emitir una norma de este tipo? A continuación, presentamos una selección de declaraciones:

Gilberto Siura:

—Hubo excesos de ambas partes, porque en una guerra no se puede saber cuándo ni cuántos pueden ser los excesos; excesos que hoy dividen a los peruanos y que de alguna manera no permiten que podamos trabajar con fluidez por la reconstrucción nacional, por la búsqueda de la pacificación verdadera y de la democratización real para nuestro pueblo. El país y los peruanos más necesitados son los más perjudicados hasta este momento.

Enrique Chirinos Soto:

—Señor, don Manuel Azaña, presidente de la segunda república española, en un discurso trágico, cuando ya había estallado la guerra civil, dijo: «España necesita paz, piedad y perdón». No fue escuchado por sus propios partidarios ni por los partidarios de Franco; y España se hundió en una guerra civil de tres años, con un millón de muertos. No se escuchó tal reclamo que yo me permito, a mi vez, hacer al Perú. El Perú también necesita paz, piedad y perdón, disparados a todos los lados, concretados en una Ley de Amnistía, que será la primera.

Andrés Reggiardo:

—Se crítica mucho a quienes en época de guerra pudieron haber cometido excesos. Pregunto ¿quién de nosotros hubiera puesto el pecho para combatir a un enemigo que no daba la cara y que operaba en la oscuridad? Se critica muy rápidamente a quienes, en defensa del pueblo, están posibilitando que podamos salir de nuestra casa con la seguridad de que vamos a retornar a ella. Esa seguridad que hoy tenemos se la debemos a un puñado de peruanos de toda índole. Muchos de ellos han dado sus vidas por nosotros, muchos de ellos han cometido excesos por nosotros, muchos de ellos están condenados por nosotros, pero todo esto se ha hecho con el único fin de dar paz, tranquilidad y seguridad a la población. Somos a veces muy rigurosos en la crítica y en el enjuiciamiento.

Francisco Tudela:

—Mi posición personal es que debemos olvidar políticamente los crímenes individuales en aras del bien de toda la colectividad. Eso no significa que vamos a olvidar históricamente, tampoco significa que debemos olvidar. ¡No vamos a olvidar!

Víctor Joy Way:

—Este es un paso sucesivo, lógico y necesario para afianzar el proceso de pacificación que permitirá reintegrar a algunos ciudadanos a una vida pacífica y útil para nuestra sociedad; objetivos del más alto interés nacional.

Martha Chávez:

—Tal seguridad se logró en el contexto de una guerra, que ha costado muchas vidas; es cierto. Siempre que se actúa es posible equivocarse. Para aquellos que nada hacen y dejan pasar la vida, no hay equivocaciones. Tal no es la actitud que nosotros queremos. Por tales razones, hoy, sin dejar de decir que ellos se equivocaron, les estamos dando el perdón que ellos merecen; porque fueron a luchar por nosotros en el contexto de una guerra que fue más sucia del lado de los terroristas.

El proyecto fue aprobado por 47 votos, a las 3.00 a. m. del 14 de junio de 1995. Nuevamente, Carlos Ferrero Costa fue excepción dentro del oficialismo y votó en contra. Otro parlamentario del

gobierno que se opuso fue Carlos Fernández Arce, exmagistrado y docente de Derecho.

Los miembros del destacamento Colina salieron del cuartel Bolívar el 15 de junio de 1995, por la puerta trasera, utilizando los vehículos fúnebres del Ejército. El único que se quedó fue Santiago Martín Rivas, quien vivió en la instalación militar, según su versión, hasta marzo de 1997. Pero sus carreras militares se terminaron. A los suboficiales les dieron de baja en agosto de 1995. Los oficiales comprometidos fueron pasados a retiro en noviembre de 1995.

Mientras los miembros del destacamento Colina cumplían su pena por el caso La Cantuta, el camino judicial sobre la matanza de Barrios Altos siguió su propio curso. En abril de 1995, la fiscal Ana Cecilia Magallanes, una magistrada con fama de probidad y rectitud, denunció a Julio Salazar Monroe, Santiago Martín Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Nelson Carbajal García y Hugo Coral Goycochea por estos hechos. Con ello, formalizó la denuncia ante el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza Antonia Saquicuray.

El Ejército se negó a que los miembros del destacamento Colina presten declaración alguna a Magallanes y a Saquicuray, pretextando que se encontraban bajo el fuero militar. Salazar Monroe buscó utilizar su puesto como jefe nominal del SIN para evitar cualquier investigación, señalando que tenía las mismas prerrogativas que un ministro, es decir, derecho a antejuicio, lo que era falso.

Con la investigación de Saquicuray, la justicia militar inició una contienda de competencia. Sin embargo, dado que se promulgó la Ley de Amnistía, ya no sería necesaria.

La magistrada del Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima tenía claro que la norma en cuestión vulneraba derechos fundamentales y, sobre todo, las obligaciones de investigación, juzgamiento y sanción sobre violaciones a los derechos humanos que el Perú había asumido ante la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el 16 de junio de 1995, dos días después de expedida la Ley de Amnistía, Saquicuray emitió una resolución señalando que, por control difuso de la Constitución, la norma en

cuestión no se aplicaba al caso Barrios Altos. Era una clara rebeldía frente al gobierno, con un buen sustento legal.

Los miembros de Colina apelaron y el caso debía llegar a la Décimo Primera Sala Penal de Lima, donde se realizaría una audiencia el 3 de julio de 1995. En paralelo, el 17 de junio de 1995, el Congreso de la República aprobó la Ley 26492, donde se señalaba que la norma de amnistía no vulneraba las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y que no era revisable en sede judicial. Por ello no sorprendió que el colegiado judicial decidiera archivar definitivamente el caso Barrios Altos, en aplicación de la polémica norma.

El 30 de junio de 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos. A la par, buscó impulsar un referéndum contra la Ley de Amnistía, aprovechando que la norma tenía el rechazo del 75 % de peruanos, le había costado 10 puntos de popularidad a Fujimori y se habían desarrollado algunas movilizaciones. Sin embargo, esta última iniciativa no cuajó, debido al miedo existente frente a posibles represalias del régimen. Sería el camino de la jurisdicción internacional el que, empleando los recursos legales de la Coordinadora y mediante un grupo de abogados bastante solventes en el sistema interamericano de derechos humanos, generaría resultados luego de varios años.

Ya habíamos mencionado antes la posición solitaria de Juan Luis Cipriani en materia de derechos humanos frente a sus pares de la Conferencia Episcopal Peruana. Ocurría lo mismo en torno a los casos vinculados del destacamento Colina y, posteriormente, frente a la Ley de Amnistía.

En Ayacucho, durante la misa por el día del Ejército en 1993, Cipriani llegó a decir en su sermón que «el caso La Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos se está dando el último intento de atropellar la libertad del pueblo peruano. Esa libertad que ya la hemos consolidado todavía encuentra pequeñas voces de peruanos que no tienen cariño a su pueblo y siguen creando dudas acerca de la

integridad moral del Ejército y las autoridades que gobiernan el país. Y esas dudas son una traición a la patria. Por lo tanto, no debemos permitir que se siga discutiendo, bajo pretexto de los derechos humanos, lo que no es otra cosa que un último intento de atropellar lo que la mayoría de los peruanos gozamos en este momento: la libertad».

Esta posición contradictoria se hizo patente nuevamente a fines de 1993. Mientras el obispo de Chimbote, Luis Bambarén, pedía una investigación por los casos La Cantuta y El Santa, Cipriani confrontaba con las organizaciones de defensa de los derechos humanos diciendo que «bajo la fachada de defender los derechos humanos se ocupan del uno por ciento de estos casos».

En 1994, Cipriani seguirá agitando la polémica. En una extensa entrevista en Caretas llegó a calificar como «cojudez» a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y como «excesos» a violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Para 1995, la brecha será aún más evidente. La Conferencia Episcopal Peruana indicó que la amnistía solo podía fundamentarse sobre la verdad y la justicia y no podía ser indiscriminada. Mientras que Cipriani llegó a decir que esta era una decisión apropiada «porque es necesario perdonar para alcanzar la reconciliación», a la vez que rechazaba las marchas contra la norma impulsadas desde las organizaciones no gubernamentales.

A la luz de lo que conocemos hoy, resulta evidente que la Ley de Amnistía fue un intento claro de cubrir las espaldas judiciales a Alberto Fujimori y la cúpula en el poder. Al mismo tiempo que cubrían una demanda que, en su tiempo, era requerida por cientos de militares que combatieron al terrorismo. En este último caso, las cosas parecen haber cambiado, dado que hoy, en los estamentos castrenses, la mayoría considera que la Ley de Amnistía fue un error.

Pero volvamos al exmandatario. Fujimori fue condenado por, entre otros eventos, el caso La Cantuta, que fue el gran disparador de la Ley de Amnistía. Por ello, conviene recordar su responsabilidad en estos eventos.

Fujimori construyó una estructura centralizada de poder desde el inicio de su gobierno, lo que se agudizó aún más desde el 5 de abril de 1992. En dicha organización de poder, Vladimiro Montesinos ocupó un lugar central y clave. El asesor, como hemos visto, le resolvió problemas judiciales, armó una cúpula castrense a su medida y, en adelante, le encargó la conducción de los aspectos militares de su gobierno. Quienes estaban en el centro de poder de los institutos armados —ministros de Defensa e Interior, jefe nominal del SIN, comandantes generales, directores y jefes— terminaron debiendo sus puestos a su lealtad con los dos hombres que concentraron las decisiones, así como a la aquiescencia con las decisiones que tomaron.

Este núcleo de dos hombres en el poder se tejió en base a una relación de confianza. Fujimori encontró en Montesinos a alguien que le resolvió obstáculos judiciales y castrenses, ámbitos en los que su experiencia era nula. Mientras que el asesor presidencial confió, a su modo, la historia azarosa de su paso por el Ejército peruano, lo que fue comprendido por un hombre que, en muchos sentidos, no quería adscribirse a ninguno de los grupos vigentes en el país, comenzando por aquel que representaba sus raíces. Y, de hecho, cuando comenzaron a salir las acusaciones contra Montesinos por violaciones a los derechos humanos, Fujimori siempre lo defendió. Y también lo hizo con Hermoza Ríos, a quien mantuvo por varios años como comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aun cuando cometió actos que podrían ser presiones sobre el poder civil.

Pero Fujimori no estaba pintado en la pared. Como presidente de la República, era jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y no se trata de un cargo que conlleve cuestiones estrictamente protocolares. Organiza, distribuye y dispone el empleo de los miembros de las fuerzas militares y policiales y, sobre todo, ejerce un mando efectivo sobre ellas. El mandatario toma decisiones políticas sobre la estrategia militar y, además, tiene un poder discrecional en el ámbito de la defensa nacional. Sus órdenes pueden ser escritas o verbales. En una entrevista en Radio Programas del Perú en 2000, Fujimori llegó a decir que «el

presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerzas Armadas; ¿qué quiere decir jefe supremo de las Fuerzas Armadas?, manda las Fuerzas Armadas y las manda de manera vertical, esa es la relación». Por tanto, Fujimori no podía alegar desconocimiento de lo que su asesor hacía ni tampoco de las acciones de Hermoza para impedir las investigaciones por los casos que involucraban al destacamento Colina. Ni tampoco ellos podían hacer lo que querían sin el respaldo del presidente de la República.

Esto se aprecia en mayor medida con los secuestros de Gorriti y Dyer, en los que la orden vino desde el Servicio de Inteligencia Nacional, que dependía funcional y estructuralmente de una sola persona: el presidente de la República. Montesinos, además, siempre alegó que cualquier orden la hacía en cumplimiento de lo mandado por Fujimori.

Esto se hizo más patente sobre la estrategia militar vinculada a la lucha contrasubversiva. Fujimori no solo emitió decretos legislativos y directivas para centralizar acciones y decisiones en el SIN y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sino que también fue uno de los escasos receptores finales del manual preparado por el Grupo de Análisis encabezado por Santiago Martín Rivas. Asimismo, aprobó los acuerdos tomados en la llamada Mesa Redonda donde el futuro jefe operativo del destacamento Colina expuso sobre la guerra de baja intensidad y los altos mandos militares tomaron decisiones que se reñían con la legalidad. La estrategia militar estatal pasaba por operaciones especiales de Inteligencia que involucraban la eliminación de sospechosos de terrorismo a través de ejecuciones extrajudiciales. Esta estrategia clandestina fue advertida por la embajada de Estados Unidos en el Perú en agosto de 1991, como consta en un documento desclasificado del Departamento de Estado de la principal potencia mundial.

Por estas razones se explica que el SIN —que solo obedecía a la Presidencia de la República— haya dado las órdenes para la mayor parte de acciones del destacamento Colina, que fue integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Como también encuentran sustento todos los actos de encubrimiento posteriores,

frente a los cuales Fujimori guardó silencio o terminó expresando su respaldo a Montesinos, Hermoza y las Fuerzas Armadas. Solo con la presión pública se pudo obtener una sentencia contra algunos de los miembros del destacamento en el fuero militar, que no era el indicado para estos casos y, además, bajo la promesa de una futura Ley de Amnistía.

Además, Fujimori atacó públicamente a víctimas como Samuel Dyer —o les mintió abiertamente, como en el caso de Gustavo Gorriti— así como a denunciantes públicos como Rodolfo Robles.

Por ello, se puede concluir con certeza que ninguno de estos eventos pudo ocurrir sin la aquiescencia de Alberto Fujimori. Y, por tanto, se puede inferir que, en el fondo, la Ley de Amnistía terminó siendo un autoperdón.

---

114 Este capítulo se basa en los libros ya mencionados de Burt (2011: 301-303, 343-344), Conaghan (2005: 73-76, 105-108), Jara (2017: 233-251), Murakami (2018: 368-370), Rospigliosi (2000b: 135-137), Uceda (2018: 438-467) y Youngers (2003: 328-332), así como en la sentencia contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf) y el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 115-117).

LA TREGUA FALAZ

(Mayo, 1995 – Abril, 1996)

Si alguien pensaba que el gobierno daría una tregua a la oposición luego de un triunfo tan holgado en abril de 1995, estaba muy equivocado.

El primer golpe vino desde el plano castrense. Dos semanas después de las elecciones generales, tres generales en situación de retiro del Ejército peruano —Walter Ledesma, Carlos Mauricio y Luis Mellet Castillo— fueron procesados por el Consejo Supremo de Justicia Militar, debido a que emitieron críticas ante la actuación del alto mando durante el conflicto contra Ecuador. Ledesma llegó a señalar que habíamos perdido la guerra. La situación era doblemente agraviante: estas tres personas habían expresado sus opiniones en perfecto ejercicio de su libertad de expresión y, peor aún, no debían ser procesadas en el fuero militar, por estar en situación de retiro. El CSJM condenó a Ledesma a 40 días de prisión y a Mauricio a un año de cárcel.

El caso tenía sabor a revancha política y castrense. Ledesma y Mauricio habían colaborado activamente con la campaña de Javier Pérez de Cuéllar. El primero de los nombrados tenía altas credenciales en el Ejército y la posibilidad de ser, en algún momento, comandante general de su institución, por lo que lo pasaron a retiro a fines de 1994. El segundo fue postulante al Congreso de la República en las filas de Unión Por el Perú. Era un auténtico escándalo. Ledesma y Mauricio solo pudieron salir en libertad por la Ley de Amnistía de 1995, que hemos reseñado en el capítulo anterior, a la que se le añadió un artículo especial por los casos de los militares antes mencionados.

Los siguientes embates vinieron desde el Congreso Constituyente Democrático en sus últimos días. El 25 de mayo, de madrugada, se aprobó la Ley 26457, que establecía la intervención directa del gobierno en seis universidades públicas: San Marcos, La Cantuta, Federico Villarreal, San Luis Gonzaga de Ica, Faustino Sánchez Carrión de Huacho y Hermilio Valdizán de Huánuco. El gobierno tomó como pretexto un atentado contra el Hotel María Angola en

Miraflores —donde fallecieron cuatro personas— para justificar una supuesta intervención para ir contra los rezagos terroristas en las universidades. En realidad, las comisiones interventoras solo sirvieron para dos cosas: completar el paulatino retiro de cursos de marxismo teórico del currículo y control político interno en estas casas de estudio. Asimismo, continuó la imagen de ciertas universidades públicas como centros de estudio donde la radicalidad y la violencia eran cuestión de todos los días, lo que era falso y ayudó a generar estigmas que persisten hasta hoy.

En ese mismo mes, el CCD aprobó una modificación a la legislación electoral que elevaba los requisitos para la inscripción de nuevos partidos. La norma fue presentada por Martha Chávez. Antes que se aprobara la modificación legal, se requerían 100 000 firmas de adherentes para inscribirse como grupo político válido ante la autoridad electoral. Luego de ello, se requerían 500 000 firmas. Esto perjudicó a varios de los partidos tradicionales, que habían perdido su inscripción electoral, así como a los grupos nuevos.

Finalmente, casi al concluir sus funciones, el CCD aprobó un nuevo regalo para la doctora Blanca Nélida Colán. En julio de 1995, se publicó una norma que interpretaba que el mandato de la fiscal de la Nación «comienza a regir desde la fecha en que este presta juramento como consecuencia de la elección por la Junta de Fiscales Supremos o haya asumido el cargo de titular». Con ello, en la práctica, se extendía el periodo de la abogada en un puesto clave para el gobierno[115].

El nuevo mandato de Fujimori se inició con la presencia de nueve presidentes de la región: Carlos Menem (Argentina), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Ernesto Samper (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Juan Carlos Wasmosy (Uruguay), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Rafael Caldera (Venezuela). Por razones obvias, no asistió el mandatario ecuatoriano Sixto Durán Ballén. Fujimori recibió la banda presidencial por parte de Martha Chávez, quien había sido elegida presidenta del Congreso de la República.

El mensaje de Fujimori fue bastante breve y se centró en cuatro puntos principales. Para comenzar, la equiparación de democracia con construcción de obras de infraestructura, lo que llevó a un conjunto de ofertas en esa línea. En segundo término, aseguró la continuidad del programa de privatizaciones. En tercer lugar, el acceso a métodos de planificación familiar para las mujeres de escasos recursos. Y, finalmente, la necesidad de resolver los problemas con Ecuador con la pacificación del país producto de la derrota militar del terrorismo.

Fujimori estuvo particularmente optimista en este mensaje:

—Que nadie se eche para atrás, que nadie hable de dificultades y de imposibles, porque venimos de lograr una hazaña: reconstruir el Perú en apenas cinco años. Somos el país de la esperanza. Si hace poco decíamos «el Perú no puede parar», ahora podemos afirmar, con toda convicción: «ya nadie nos para».

El mandatario no hizo alusión alguna a los temas más complejos de su primera administración: programas sociales, institucionalidad democrática y respeto a los derechos humanos. Simple y llanamente, evitó tratarlos[116].

El estilo fujimorista en el Congreso de la República que inició su mandato en julio de 1995 fue aún más drástico que durante el periodo del Congreso Constituyente Democrático. Se negó que las presidencias de comisiones ordinarias correspondieran a algún miembro de la oposición. Y se afianzó un núcleo duro en el fujimorismo parlamentario.

Por propia decisión, Jaime Yoshiyama quedó fuera de la lista parlamentaria. De los parlamentarios representativos, quienes lograron reelegirse fueron Martha Chávez, Luz Salgado, Carlos Torres y Torres Lara, Víctor Joy Way, Miguel Velit, Carlos Blanco Oropeza, Oswaldo Sandoval y Gilberto Siura.

Chávez y Salgado eran ya, para 1995, las dos mujeres fuertes del fujimorismo parlamentario. Aunque ambas defendían a Fujimori hasta desbordar límites impensables en otras agrupaciones que fueron gobierno antes y después, sus estilos eran distintos. Chávez era más áspera en sus declaraciones, poco proclive a brindar declaraciones a favor del respeto de los derechos humanos y con un

entendimiento de la democracia reducido al mero gobierno de la mayoría. Además, la nueva presidenta del Congreso había sido en su momento bastante cercana al Opus Dei, organización conservadora católica que tenía fuerte presencia en sectores altos y medios. Salgado era algo más contemporizadora y dialogante, dispuesta a declarar en algunos medios opositores y, si bien tenía cierto conservadurismo, no tenía una línea tan dura como su colega.

A ambas, se sumaron dos parlamentarias de bronco estilo en la defensa del régimen. De un lado, Carmen Lozada de Gamboa, quien había sido miembro del CCD. Lozada había llegado al fujimorismo recomendada por Tito Chocano, alcalde de Tacna que se había adherido a las filas fujimoristas. Poco a poco, tuvo un perfil propio y cultivó una amistad con Chávez. Aunque disminuyó su votación preferencial, el arrastre de la votación por Cambio 90–Nueva Mayoría la favoreció. De otro lado, la lingüista Martha Hildebrandt se había sumado a la bancada. La filóloga, conocida defensora de la normativa castellana encarnada en la Real Academia Española de la Lengua, había sido directora del Instituto Nacional de Cultura durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, por lo que no sorprendía que otro gobierno fuerte la convocara a sus filas. En el caso de Hildebrandt, la paradoja era que su hermano por parte de padre, César, era uno de los periodistas más críticos con el régimen.

Otros jales de la bancada eran Luis Delgado Aparicio, abogado laboralista y difusor de la salsa en el Perú, quien había sido diputado por Libertad entre 1990 y 1992; Alfonso Baella Tuesta, veterano periodista conservador que había sido, en los años ochenta, jefe de Política de El Comercio; el abogado Jorge Muñiz, dueño de uno de los principales estudios de Lima, y el empresario educativo Jorge Trelles.

La estrategia emprendida por Santiago Fujimori había emprendido resultados: 41 de los 67 parlamentarios electos por Cambio 90–Nueva Mayoría provenían de provincia. Varios habían dirigido proyectos especiales en sus departamentos y otros habían sido alcaldes. Durante el periodo, este bloque comenzaría a cobrar mayor importancia en las pujas internas por presidencias de

comisión. Quien observaría, además, con especial interés a este grupo sería un exaprista que, desde el 5 de abril de 1992, ocupaba la cartera de Agricultura: Absalón Vásquez Villanueva[117].

Dante Córdova Blanco había llegado al entorno presidencial en febrero de 1993, cuando fue convocado por Santiago Fujimori para que sea ministro de Transportes y Comunicaciones. En esa cartera, el abogado y empresario se quedó un año y medio.

En las postrimerías del primer mandato, pasó a ocupar el ministerio de Educación. Santiago logró convencer a su hermano para que, a partir de julio, fuera el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Córdova tenía un talante más dialogante que otras cabezas de gabinete de Fujimori. Sin embargo, no lograba neutralizar el bronco estilo del presidente.

Los planes del hermano-asesor para el segundo quinquenio estaban centrados en hacer una gran reforma del Estado, para reorganizar los ministerios, así como para incentivar la mejora del sistema de justicia y la Policía Nacional. Estos dos últimos sectores eran de máximo interés de Montesinos, razón por las que las hostilidades entre ambos se acrecentaron.

Otro enemigo que se hizo Santiago fue Jorge Camet, debido a que la reforma planteada también comprendía quitarle facultades al todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas.

Dos novedades del equipo ministerial se dieron en carteras importantes. Relaciones Exteriores estaría a cargo de Francisco Tudela, un conservador abogado egresado de la PUCP, usual comentarista en temas internacionales y que había sido miembro del Congreso Constituyente Democrático por Renovación. Su preocupación estaría centrada en las negociaciones con Ecuador. Mientras que el Ministerio de Trabajo sería ocupado por Sandro Fuentes, abogado tributarista que había sido sucesor de Manuel Estela al frente de la SUNAT y había continuado, en líneas generales, las reformas del economista en el organismo tributario.

En congruencia con el mensaje presidencial de inicio del segundo mandato, la mayoría oficialista aprobó un proyecto de Ley para modificar la Ley Nacional de Población en septiembre de 1995. Se buscaba facilitar la política nacional de planificación familiar que se

aprobaría para el periodo 1996–2000. Dentro de lo contemplado por la norma, se incluyó la posibilidad de establecer cirugías de esterilización.

Desde la oposición, la parlamentaria Beatriz Merino (Frente Independiente Moralizador) indicó que la norma se aprobó sin que varias congresistas mujeres estuvieran presentes, debido a que se encontraban en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que se realizaba en Beijing.

Precisamente, Fujimori viajó a China para dar un discurso en la Conferencia. Fue el único jefe de Estado varón que brindó una ponencia en el evento. Su alocución estaba dirigida a presentarse como un defensor de la planificación familiar y la autonomía de la mujer. El mandatario buscó posicionarse en contra de los sectores más conservadores en esa materia. Si bien algunas organizaciones defensoras de derechos de la mujer tenían observaciones sobre la inscripción de esa política dentro de un espectro de «lucha contra la pobreza», le dieron el beneficio de la duda al gobierno.

Sin embargo, el gobierno no era tan progresista como se podía pensar. En Beijing, el Estado peruano se opuso a la despenalización del aborto y adscribió la noción de derechos sexuales únicamente a las relaciones heterosexuales. Esto último era congruente con las declaraciones homofóbicas de Fujimori para expulsar a diplomáticos en 1992. Estos eran temas en los que las organizaciones no gubernamentales disentían con el régimen.

En general, el movimiento de mujeres vivió una situación compleja frente al régimen de Fujimori. Varias de sus integrantes y dirigentes eran, claramente, críticas de los atropellos a la democracia y los derechos humanos e incluso de su programa económico. Pero algunas entidades que impulsaban la agenda feminista prefirieron tener una actitud más cauta, esperando que la coyuntura de la Conferencia de Beijing pudiera ayudar a impulsar algunos puntos de su agenda[118].

El primer escándalo producido alrededor del Congreso se generó desde Frecuencia Latina. El programa Contrapunto difundió una serie de reportajes en torno a la presunta participación de Javier Noriega, el único parlamentario electo por el FREPAP, en una trama

que implicaba supuestamente asesinatos de disidentes de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

A la luz de varios analistas, las pruebas presentadas contra Noriega no resistían el mayor análisis. Una versión periodística sostiene que, en realidad, fue un operativo del Servicio de Inteligencia contra Ezequiel Ataucusi, líder del grupo religioso, debido a la disputa por unos terrenos ubicados en Cieneguilla, donde su Asociación tiene su sede central en Lima. Otros atribuyeron la denuncia a presiones para que Noriega terminara votando en varios temas con el gobierno. Esto parece ser plausible dado que el congresista, cuando volvió a sus funciones, pasó a la bancada de Cambio 90–Nueva Mayoría.

Otras versiones, que no excluyen las anteriores, sostienen que las pruebas contra Noriega fueron enviadas en medio de los casi cotidianos conflictos del grupo religioso fundado por Ezequiel Ataucusi. La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal Carlos Torres Caro.

El 30 de noviembre de 1995, mientras un grupo del MRTA se enfrentaba a balazos con la Policía en La Molina, el Congreso de la República decidió que se levantara la inmunidad parlamentaria a Noriega, para que pudiera ser procesado por estas acusaciones. Sin embargo, el Poder Judicial declaró su inocencia en abril de 1997. El caso Noriega llevó a que Baruch Ivcher, principal accionista de Frecuencia Latina, relevara a Luis Vargas, vicepresidente del canal, a quien había confiado el manejo cotidiano de la parte periodística. Si bien el abogado Javier Valle Riestra había emitido un informe jurídico a favor del canal —indicando que no hubo ánimo de injuria y difamación—, Ivcher no había quedado convencido de la pulcritud ética de los informes. Al director general de prensa, Julián Cortez, se le envío dos meses de vacaciones y, posteriormente, se le relevó del puesto.

El ciudadano peruano–israelí comenzó a pensar que la línea política que había mantenido su canal, bastante cercana al fujimorismo, debía virar[119].

El 5 de mayo de 1995, Alberto Andrade, alcalde de Miraflores que había renunciado el año anterior al Partido Popular Cristiano, anunció la creación del movimiento independiente Somos Lima, con miras a postular a la alcaldía de la capital del Perú en las elecciones que se realizarían en noviembre.

Andrade era un abogado y empresario que había tenido un éxito importante en Miraflores, un distrito de clases altas y medias de la ciudad. Había conseguido ordenar el comercio ambulatorio, afrontó con éxito la limpieza de los escombros de los atentados en la calle Tarata, remodeló el Parque Central del distrito y, en general, le devolvió orden a dicha comuna. A la par, había preferido ponerse de perfil en las disputas políticas. Estas características le conferían a Andrade una imagen atractiva a un elector que estaba cansado de un alcalde poco eficaz, con perfil demasiado opositor durante el apogeo de Fujimori y que terminaba su gestión con graves problemas.

Mientras tanto, en el gobierno existía un debate arduo para definir qué hacer frente a las elecciones municipales. Santiago Fujimori consideraba que el gobierno arriesgaría demasiado capital político en una elección, que los esfuerzos debían concentrarse en hacer una buena gestión gubernamental y que, además, se tenían pocos cuadros para los puestos de alcalde. En 2001, le expresaría a la revista Caretas:

—Pensaba que el gobierno no debía meterse. El trabajo del gobierno central era ya inmenso. Yo me opuse a la candidatura de Cambio 90-Nueva Mayoría. Le dije a mi hermano que el pueblo apoyaba a Alberto Andrade, que lo más probable era que ganara.

Sin embargo, Alberto Fujimori y Jaime Yoshiyama coincidieron en sus agendas: el presidente no quería un potencial rival político que saliera de una alcaldía y el expresidente del CCD quería postular a la alcaldía de Lima, pues creía que desde ese puesto podría cimentar una candidatura presidencial oficialista en 2000.

Ambos se impusieron al criterio de Santiago, con algunas concesiones. El presidente acordó que solo se presentarían candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la alcaldía de la provincia Constitucional del Callao. Yoshiyama fue lanzado en

agosto por el propio Fujimori, con el lema «Con todo el apoyo». En el primer puerto, presentaron al alcalde en ejercicio Kurt Woll, otro disidente del PPC.

Andrade partió con ventaja. Había preparado su postulación con anticipación y, además, por adhesión, tenía el voto opositor a Fujimori a su favor. Asimismo, se mostró como un hombre de acción y, por añadidura, con simpatía personal, que traducía en su conocimiento del repertorio de la música criolla.

El equipo de campaña de Yoshiyama estaba encabezado por Fujimori, Montesinos y Daniel Borobio. Nuevamente recurrieron a los focus groups. Pero la estrategia tuvo varios errores. El lema «Con todo el apoyo» no fue bien visto por los electores, quienes consideraban que un alcalde oficialista equivalía a demasiado control de poder en una sola mano. Al mismo tiempo, entre las mujeres, el estilo machista de un Fujimori divorciado que buscaba «una mujer con buenas piernas» no caló y lo endosaron a Yoshiyama. Los focus también mostraron que el origen nikkéi del candidato no le jugó a favor.

Pero el problema central de Yoshiyama era él mismo. Esto quedó en evidencia durante el debate municipal organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En su intervención inicial, el candidato oficialista respondía a las críticas hechas por Ricardo Belmont sobre el decreto legislativo 776, a la vez que reafirmaba el apoyo de la Presidencia a su postulación. Mientras que Andrade jugó bien sus cartas: enfatizaba su ejecución en Miraflores, apostaba a la seriedad de su plan, anunciaba la creación de un Serenazgo en Lima para apoyar la lucha contra el crimen y, en general, apostaba por reformas, así como por la necesidad de un metro para la ciudad.

Yoshiyama no pudo sortear bien las preguntas de un panel plural, sobre todo, las del exparlamentario Aurelio Loret de Mola, quien le sacó en cara las declaraciones de Jorge Camet y el expresidente del Consejo de Ministros Alfonso Bustamante sobre los recursos que le faltaban a la ciudad y que, como era obvio, el gobierno le había mezquinado a Belmont.

Finalmente, las alocuciones finales fueron disímiles. Andrade apostó por señalar que «Un buen alcalde, ante todo, es un buen vecino. Entonces, no confundamos. Estas son elecciones vecinales, no políticas». Y terminó entre aplausos. En cambio, Yoshiyama apostó por hacer preguntas retóricas, ante una audiencia que ya le tenía hostilidad:

—Se ha criticado que el jefe fundador de la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría y actual presidente de la República me ha prometido todo su apoyo. Ese apoyo total significa que nuestro equipo va a hacer el trabajo municipal con la garantía de una coordinación estrecha entre el Consejo Provincial y el gobierno Central. ¿Es esto realmente malo? ¿Es malo?

—¡Siiiiiiiií! —decía el público.

—Pero, bromas aparte, nunca ha sido un secreto que esa coordinación estrecha y ese apoyo son lógicos, porque este equipo y el presidente Fujimori piensan igual, comparten una misma filosofía de gobierno. Nuevamente pregunto: ¿Eso es malo?

—¡Síiiiiiiii! —le volvían a responder al postulante oficialista.

Alberto Andrade ganó las elecciones con 52.1 %. En el primer puerto del país, Woll perdía frente a otro expepecista, Alexander Kouri, quien había fundado el movimiento Chimpum Callao. Era la peor derrota del fujimorismo en cinco años.

Fujimori no soportó el desastre de las elecciones municipales de 1995. Pocos días después del triunfo de Andrade, convocó a Yoshiyama como titular del Ministerio de la Presidencia, que tenía un importante presupuesto en programas sociales. Era claro el mensaje: lo que no podrá hacer Andrade, lo hará mi excandidato.

Peor aún, en 1996, el gobierno demoró la autorización de un préstamo a la Municipalidad Metropolitana de Lima y el MEF de Camet le bloqueó una solicitud de crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, mediante dispositivos legales, se trasladó la competencia del programa del Vaso de Leche a las alcaldías distritales, se paralizó la privatización del servicio de limpieza de la ciudad para que pasara por el gobierno central y, además, se incrementaron las facultades del Ministerio de la Presidencia.

Para completar el desplante, cuando Andrade asistió a su primera misa conmemorativa por el aniversario de la capital, el 18 de enero de 1996, las sillas de los representantes del gobierno central estuvieron vacías.

El alcalde de Lima no usó una estrategia de confrontación tan dura como la hecha por Belmont. Aunque no dejó de expresar su desacuerdo con las medidas, Andrade se concentró en la mejora del Centro Histórico de Lima, con el ordenamiento del comercio ambulatorio y la mejora de varias de las principales plazas del centro de la ciudad. A la vez, concluía varias de las obras iniciadas a trompicones en la segunda gestión de Belmont. El público limeño lo recompensaba con una alta aprobación en las encuestas[120].

Aunque la economía peruana mantenía importantes indicadores macro, el entorno internacional la complicaba. A fines de 1994, México tuvo una salida brusca de capitales, lo que tuvo un fuerte efecto en la cotización del peso frente al dólar. El país azteca conoció un periodo de iliquidez, que se denominó «efecto tequila».

En el Perú, el déficit en cuenta corriente era bastante alto en 1994 y 1995. Para varios expertos, era necesario reducir esa cifra. Sin embargo, la campaña reeleccionista aumentó fuertemente el gasto social, a la par que se incrementó la inflación en 1995 y 1996. Para los expertos de los organismos multilaterales, era necesario un ajuste.

Así, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una serie de políticas para disminuir la demanda interna, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Camet dijo, en términos coloquiales, que se buscaba «enfriar la economía». ¿Cómo se hizo? Se elevó la gasolina de acuerdo con la inflación, se redujo el gasto social y se buscó la reducción de las importaciones. Ello afectó claramente al sector construcción, que decreció 5,3 % en el segundo semestre de 1995.

Hacia fines de año, era claro que el Perú comenzaba a entrar en una situación complicada. Y lo sería más en los siguientes años[121].

A inicios de 1996, Sally Bowen asumió el cargo de presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera, una entidad que agrupa a los periodistas peruanos y foráneos que trabajan para medios

internacionales en el país. Quienes trabajaban para estos diarios, revistas, radios y canales tenían la ventaja de acceder a mayores fuentes que sus colegas peruanos. Ello les permitía ser testigos de excepción de situaciones que no eran vistas o registradas en los medios locales.

En febrero de 1996, Bowen continuaba trabajando para Financial Times, que preparaba un especial sobre la buena marcha de la economía peruana. Se requería una entrevista con Fujimori, para lo que se comisionó a la periodista, junto a Steve Fidler, editor para América Latina del medio económico británico. Luego de varias discusiones con la secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, dirigida por el escritor Carlos Orellana, fueron llamados para acompañar al presidente a una gira en Puno.

La entrevista a Fujimori se hizo en una sala del Grupo Aéreo Nro. 8, la base militar desde la cual parten los vuelos oficiales más importantes. Posteriormente, Bowen y Fidler pudieron conocer una flamante adquisición del gobierno peruano: un Boeing 737, que había sido adquirido para ser el avión presidencial. Fueron con destino a Juliaca, desde donde emprenderían camino a Puno. En el trayecto por tierra, Fujimori hablaría de alpacas y de sus dotes culinarias.

Los periodistas británicos notaron que Fujimori estaba acompañado por un conjunto de reporteras de canales de televisión que le decían sí a todo. El presidente incluso les ofreció vino y les contó chistes. Todos apreciaron parte de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se celebra en los primeros días de febrero. Fujimori subió a un bote en el lago Titicaca junto a la reina de la festividad, las reporteras peruanas y los periodistas británicos. A todos les dio whisky para el frío. Llegaron a la isla de los uros y allí pernoctaron. El presidente dispuso que tres de las reporteras peruanas lo acompañaran en su cabaña.

A la mañana siguiente, Fujimori haría entrega de paneles solares. Ataviado con un poncho de la zona y con el fondo del lago, las solícitas reporteras «prepararían» la entrevista con el presidente en estos términos:

—Presidente, ¿con qué podemos empezar la entrevista? ¿Con privatización?

—No, no quiero hablar sobre ello. Pregúntenme sobre planificación familiar.

Las escenas antes descritas eran lo suficientemente potentes como para ubicarlas en el informe especial del Financial Times. El artículo de Fidler se llamó «La política del poncho en los Andes» y dejó en claro cómo Fujimori manejaba a parte de la prensa adscrita a Palacio de Gobierno. A las reporteras televisivas que acompañaban al mandatario se les comenzó a apodar «geishas» en los círculos críticos a Fujimori. Bowen no recibiría nuevas invitaciones desde la Presidencia de la República. Y el presidente no volvería a dar una conferencia a la Asociación de Prensa Extranjera[122].

Para marzo, el gobierno tendría que afrontar una crisis importante. Se reveló que el segundo vicepresidente de la República, César Paredes Canto, había enviado una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones, Manuel Vara Ochoa, a favor de la empresa Express Air, que había tenido previamente problemas por supuesto tráfico de influencias. El vicepresidente dijo ante la comisión de Fiscalización del Congreso que había enviado misivas similares por otras empresas, pero mencionó que no había cometido ningún delito.

Si bien Paredes Canto no fue condenado, era claro que había cometido una inconducta. Fueron contadas las voces en el oficialismo que lo defendieron. En la práctica, quedó apartado de cualquier función pública. Fujimori se las arregló solo con Ricardo Márquez, quien gozaba de su confianza y había armado su propio juego con la promoción de las pequeñas y microempresas.

A inicios de abril, se acabó el juego para Dante Córdova. Fujimori decidió relevarlo del cargo y presentó su renuncia. Si bien se especuló que la causa era la marcha de la economía, la ratificación de Jorge Camet como titular del MEF terminó con esa posibilidad. El presidente tomó esta decisión en consulta con Montesinos y Yoshiyama. Pero obvió a Santiago Fujimori. Peor aún, los ministros recomendados por el hermano-asesor también fueron despedidos.

Esta situación precipitó una decisión que Santiago ya contemplaba desde septiembre de 1995. En ese momento, Córdova y los demás recomendados del gabinete lo disuadieron de apartarse del gobierno. Pero la salida de todos ellos hizo que renunciara. Entendió que no había reformas de segunda generación ni su gran proyecto de reforma del Estado. Camet se quedaba. Todo estaba cancelado.

Con ello, el camino de Montesinos para ser el único asesor presidencial estaba despejado[123].

---

115 En torno al caso de los generales Ledesma y Mauricio, conviene revisar los textos de Bowen (2000: 256-257) y Conaghan (104-105). Sobre la intervención de las universidades públicas, resulta pertinente el artículo de Dargent y Chávez «Impact and legacies of political violence in Peru's public universities», en Soifer y Vergara (2019: 143-145). Bowen también enfatiza en la norma que elevaba los requisitos para inscribir partidos políticos, así como en la «Ley Colán II» (2000: 254-255).

116 El mensaje de Fujimori se encuentra en la página web del Congreso de la República.

117 Sobre la bancada Cambio 90–Nueva Mayoría, varios datos son extraídos del libro de Degregori y Meléndez (2007: 65-93).

118 En torno a la conferencia de Beijing y los anuncios sobre planificación familiar, nuestra principal fuente es Rousseau (2012: 116-117, 203-205).

119 Sobre el caso Noriega, nos basamos en informaciones periodísticas de la época consultadas en el archivo Ivcher, así como en Vargas Llosa (2000: 222-225).

120 La campaña municipal en Lima de 1995 y la reacción del oficialismo frente al triunfo de Alberto Andrade es reseñada a partir de Barr y Dietz (2006: 73), Bowen (2000: 262-265) y Murakami (2018: 434-437). El debate municipal entre Andrade y Yoshiyama se encuentra en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (1995), organizadora del evento. Se puede acceder a su versión electrónica en el siguiente enlace: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625257.

121 Sobre la situación económica entre 1995 y 1996, consultamos Bowen (2000: 259-261) y Parodi (2019a: 110-121).

122 El episodio de las geishas en el Titicaca es descrito en Bowen (2000: 348-349) y (2015: 211-217).

123 El caso del vicepresidente Paredes Canto es contado en *Caretas* durante el mes de marzo de 1996. La caída de Córdova y de Santiago Fujimori se basa en Murakami (2018: 456-457) y la cronología política de la CVR.

DELINEANDO LA RE-REELECCIÓN

(Abril – Diciembre, 1996)

Una de las novedades de la Constitución Política de 1993 fue la creación de la Defensoría del Pueblo, una institución cuyo origen remoto estaba en Suecia. Se trata de una institución que tenía un campo de actuación en temas que eran incómodos para el régimen: derechos humanos, servicios públicos y atención del Estado al ciudadano. Tan es así que el Congreso Constituyente Democrático decidió no aprobar la Ley Orgánica de la entidad, a pesar de que ya estaba lista, lo que dejó como tarea para el parlamento electo en 1995. La norma fue aprobada el 8 de agosto de ese año.

Sin embargo, transcurrieron varios meses para que el Congreso pudiera elegir a un Defensor del Pueblo. Se encargó a una comisión especial presidida por Carlos Torres y Torres Lara para que pudiera presentar a las personas más adecuadas para desempeñar esta tarea.

El escogido fue el abogado Jorge Santistevan de Noriega, quien venía de una experiencia como consultor para la Organización de las Naciones Unidas en el extranjero. No haber tenido posiciones ni a favor ni en contra del gobierno, así como su importante trayectoria profesional confluyeron como factores para que fuera electo sin problema alguno.

La actuación de Santistevan logró que la Defensoría pudiera ser una institución respetada e independiente, en tiempos difíciles para la democracia peruana. La entidad fue una de las pocas que se salvó de cualquier intento de cooptación por parte del régimen. Al mismo tiempo, el estilo del propio Santistevan buscó mantener un equilibrio entre la independencia y la prudencia, sabiendo escoger los momentos en los que sería más crítico con el régimen y aquellos en los que debía replegarse. Además, la Defensoría buscó diversificar sus fuentes de financiamiento, para evitar que su labor pudiera quedar afectada por cualquier intento del gobierno para cortarle su presupuesto.

Rápidamente, la Defensoría del Pueblo asumió una mirada descentralizada, lo que hizo que muchos casos fuera de Lima sean

visibles a escala nacional. Al mismo tiempo, congregó a un grupo importante de profesionales que tuvieron una actuación destacada. Desde su formación, la Defensoría fue una cantera importante de nuevos cuadros para la administración pública, así como el aliado estatal más visible de las organizaciones de defensa de derechos humanos para su labor[124].

Donde hubo más problemas fue en la creación e instalación del Tribunal Constitucional, sucesor del Tribunal de Garantías Constitucionales. En mayo de 1996, se eligieron a dos de sus miembros: Francisco Acosta Sánchez y Manuel Aguirre Roca. Este último ya había sido magistrado del TGC. Se descartó, por falta de votos, a Augusto Antonioli, quien había sido ministro de Justicia y Trabajo del gobierno y, además, muy cercano a Montesinos. Para mayor agravante, Antonioli había sido parte del gabinete que respaldó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Los demás postulantes no alcanzaron los votos.

A inicios de junio, se aprobó una norma que modificaba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de recortar el periodo sobre el que podría haber demandas de inconstitucionalidad. La norma original señalaba que el TC podía revisar leyes —y normas con ese rango— hasta seis años después de su promulgación. Con la modificación, solo podía revisar normas con una antigüedad no mayor de seis meses. En la práctica, la mayoría oficialista buscó evitar que se revisaran los decretos ley emitidos durante el periodo de facto, comprendido entre abril y diciembre de 1992.

Al mismo tiempo, el Tribunal nacía con una falla de origen en su Ley Orgánica. Para declarar una norma como inconstitucional, se requerían seis votos de siete magistrados integrantes. Bastaba, por tanto, que se controlara a dos miembros para evitar que el TC cumpliera con su función. Ya habían conseguido el nombramiento de Acosta Sánchez, quien era cercano al gobierno. Por ello, les faltaba un voto.

El 15 de junio de 1996, el Congreso finalmente escogió a los cinco magistrados faltantes: Ricardo Nugent y Guillermo Rey Terry provenían del Jurado Nacional de Elecciones; Delia Revoredo era una reconocida catedrática y abogada dedicada al derecho privado;

Guillermo Díaz Valverde era otro magistrado que había estado en el TGC y, finalmente, el abogado José García Marcelo. Este último era la ficha del gobierno. No solo había apoyado el golpe de abril de 1992, también había postulado por el oficialismo al Congreso Constituyente Democrático y al mismo Congreso de la República que lo eligió, sin éxito en ambas ocasiones. Y, aunque pocos lo sabían en aquel entonces, era amigo personal de Montesinos[125].

A inicios de 1996, el gobierno decidió iniciar la privatización de Petroperú, la empresa petrolera estatal. Se trataba de uno de los procesos más complejos de este tipo que debía enfrentar el Estado peruano. Las implicancias eran económicas, administrativas y políticas. La venta —en todo o en parte— de la empresa brindaría grandes ingresos al Estado peruano. Pero también era necesario definir si es que la compañía sería vendida en su totalidad o por partes.

Asimismo, los anteriores procesos de privatización, que habían supuesto un sinceramiento de tarifas en servicios públicos, predisponían a un sector de peruanos en contra del proceso de venta de Petroperú, dado que muchos suponían que podría implicar el alza en el precio de la gasolina. A ello se sumaba un sector nacionalista, cuyo propósito era mantener en manos nacionales un recurso que denominaba como «estratégico». Para enero de 1996, las encuestas de opinión pública marcaban un 70 % de desaprobación a la privatización de la petrolera estatal.

Con esas cifras, congresistas del APRA y de la izquierda, así como la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), anunciaron que buscarían un referéndum sobre una ley para impedir la privatización de Petroperú. De acuerdo con la legislación vigente en dicha época, se requería las firmas de 10 % de electores para presentar una ley que fuera sometida a referéndum.

En abril de 1996, el legislador fujimorista Gilberto Siura presentó un proyecto de Ley inmediatamente aprobado por la mayoría. Con esta norma, se adicionó como requisito para la realización del referéndum que la iniciativa, además de las firmas, fuera aprobada

por 48 congresistas o más. En la práctica, esto suponía que quedaba en manos del oficialismo cualquier iniciativa en esta línea[126]. El gobierno mantuvo el statu quo sobre Petroperú durante el resto de la década.

En mayo de 1996, el periodista Carlos Paredes presentó en el programa Panorama, uno de los más sintonizados espacios dominicales, un informe que pegaba en la línea más oculta del gobierno. Se trató del primer informe sobre irregularidades en la compañía estatal de seguros Popular y Porvenir, cuyo presidente del directorio era un amigo personal de Fujimori: Augusto Miyagusuku Miyagi.

El reportaje de Paredes alentó a que se desarrollaran otras investigaciones desde distintos medios. El cuadro encontrado era bastante complicado e involucraba a personajes del entorno más cercano del presidente de la República.

Habíamos señalado en un capítulo anterior que las donaciones japonesas se concentraron a través de organizaciones no gubernamentales. Ya hemos hablado de APENKAI, donde intervino Rosa Fujimori de Aritomi, hermana del mandatario. Otro de sus hermanos, Pedro, fue asesor general entre 1993 y 2000. Asimismo, otra ONG constituida para estos fines fue la Asociación Ken (AKEN), donde el principal impulsor y manejador era Miyagusuku. Sus prácticas contables eran bastante laxas y, hasta el día de hoy, se desconoce el destino de buena parte del dinero que fue donado a ambas entidades. Durante varios años, APENKAI y AKEN terminaron funcionando en las oficinas de Popular y Porvenir.

En las denuncias periodísticas, Miyagusuku fue acusado de ser el principal responsable de que la empresa de seguros vendiera pólizas sobrevaluadas a las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, así como transacciones irregulares de alquiler y venta de propiedades inmuebles de la entidad. Asimismo, se llegaron a hacer contratos con empresas vinculadas a los miembros del directorio de la empresa de seguros y con una compañía perteneciente a uno de los hijos de Juana Fujimori, hermana del presidente.

Tal fue la cantidad de denuncias que, en 1997, Fujimori tuvo que pedirle a Miyagusuku su dimisión. A pesar de que la empresa buscó

privatizarse, nunca pudo ser vendida y, en 2001, en las postrimerías del gobierno de Valentín Paniagua, se decidió liquidarla. El paradero del amigo de Fujimori es desconocido hasta la fecha[127].

A fines de 1995, el Congreso de la República aprobó un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo para la creación de una Comisión Ejecutiva encargada del gobierno del Poder Judicial, durante el plazo de un año. De acuerdo con el mensaje del gobierno, lo que se buscaba era concentrarse en una de las «reformas de segunda generación». Al menos, ese era el deseo de Santiago Fujimori.

La Comisión Ejecutiva estaba dirigida por tres magistrados supremos. Pero, en la práctica, un fuerte poder se concentraba en el Secretario Ejecutivo, quien manejaría el presupuesto del Poder Judicial. Para este puesto, se convocó al marino en retiro José Dellepiane. En la práctica, él estaría a cargo de la reforma. Y, bajo su mando, los cambios se concentrarían, sobre todo, en el ámbito de los procedimientos y los procesos administrativos.

En junio de 1996, el Congreso aprobaría la Ley 26623. Esta norma tendría dos componentes fuertes. De un lado, se otorgaban mayores funciones a la Comisión Ejecutiva y al Secretario Ejecutivo. Estas entidades comenzarían a ver temas de despacho judicial, carrera judicial e incluso podrían separar a magistrados que no cumplan con su función. De otro lado, se creó una Comisión Ejecutiva en el Ministerio Público, donde se puso como cabeza a la propia Blanca Nélida Colán, a pocos meses de que, en teoría, venciera su mandato como fiscal de la Nación.

Ese mismo mes, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial creó las Salas Especializadas en Delitos Tributarios y Aduaneros. En principio, parecía un ala más de especialización de dicho poder del Estado. Sin embargo, en realidad era un mecanismo para controlar casos con alto perfil político, donde se quisiera someter a personas críticas al gobierno a mecanismos de presión o chantaje. Un juez supremo, Alejandro Rodríguez Medrano, se volvió un personaje emblemático de estos colegiados, así como otro operador de Montesinos en el sistema de justicia. Con el mismo objetivo, al año siguiente, se crearon las salas especializadas en narcotráfico y derecho público.

Para diciembre de 1996, las funciones de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial sobre despacho y carrera judicial se ampliaron más. En la práctica, los dos grupos ad hoc creados aparentemente para la reforma de la administración de justicia solo se centraron en aspectos estrictamente informáticos y de procedimiento y, a la vez, sirvieron para que el gobierno paulatinamente controle ambas instituciones. En el caso del Ministerio Público, esto se dio de modo más abrupto[128].

Para las Fiestas Patrias de 1996, el tono del mensaje presidencial fue distinto al de años anteriores. Fujimori optó por una autocrítica inusual en alguien que había declarado que gobernaría desde el otro mundo en caso de fallecimiento. Apenas en el tercer párrafo de su alocución al país, llegó a decir:

—No puedo, como en años anteriores, afirmar que hemos crecido a una velocidad récord. Ha sido este un periodo que ha conocido dificultades, ciertamente coyunturales, que han desacelerado momentáneamente nuestra economía.

Posteriormente, sin dejar de enunciar datos positivos, el mandatario indicó:

—Existe déficit en la balanza comercial y hacia él volcamos nuestra permanente atención. Es cierto que hay importaciones de bienes de capital en mayor porcentaje —maquinaria, equipos, tecnología, etc.—, lo cual es natural en un entorno de crecimiento como el experimentado por el Perú en los últimos años. Pero nuestra meta es buscar un nivel manejable en nuestra balanza comercial y de pagos.

De igual manera, el presidente tuvo que reconocer varios problemas: pobreza extrema, deuda externa con pagos altos, pagos pendientes a la seguridad social y seguridad ciudadana. También propuso modificaciones al examen de ingreso a las universidades, que nunca fueron aplicadas, ni supusieron un debate nacional como él mismo planteó.

Fujimori tampoco pudo eludir dos escándalos fuertes que su gobierno había tenido que afrontar:

—Somos los primeros en reconocer la gravedad de los hallazgos de drogas en un avión de la Fuerza Aérea y en barcos de la Marina

de Guerra, pero igualmente somos enfáticos en señalar que los comandos de estas instituciones y sus órganos de control han actuado rápidamente para dejar al descubierto este tráfico y hacer posible la intervención de las autoridades judiciales.

Sin embargo, esta fue una declaración para la tribuna. En el caso del «narco avión», un año después, Fujimori terminaría brindando un discurso casi absolutorio para los tripulantes, que incluían a uno de sus edecanes y solo se sentenció al personal subalterno. Montesinos y altos mandos de la FAP fueron procesados y absueltos en 2012, por su presunta vinculación con este caso. Existe evidencia sobre embarques en la nave desde 1992. El caso «narco buques», que implicó el hallazgo de droga en los barcos Matarani e Ilo de la Marina de Guerra, recién tuvo una sentencia condenatoria en 2007.

Fujimori no se pronunció por ninguna de las situaciones de deterioro democrático reseñadas en esta sección[129].

16 de agosto de 1996. Era un día casi sin novedades hasta que, por la tarde, estalló el escándalo.

Demetrio Chávez Peñaherrera era finalmente procesado por narcotráfico. El juicio tenía una importante cobertura televisiva. Y, frente a las cámaras, «Vaticano» involucró en su caso a Vladimiro Montesinos Torres.

El narcotraficante indicó ante la sala que lo procesaba que, entre 1991 y 1992, había pagado cupos por 50 000 dólares a Montesinos para que su firma pudiera seguir con sus operaciones desde Campanilla sin que las autoridades intervinieran en su ilícito negocio. También relató que huyó a Colombia cuando el asesor presidencial le quiso subir la tarifa. La audiencia quedó impresionada. El tribunal levantó la audiencia. Los titulares del día siguiente fueron exclusivamente sobre este tema.

De inmediato, la defensa a ultranza de Montesinos fue feroz. El director general de la Policía, general Antonio Ketín Vidal, considerado por muchos un héroe nacional por ser el jefe de la DINCOTE durante la captura de Abimael Guzmán, acudió al programa Contrapunto en Frecuencia Latina y salió en defensa del asesor:

—El señor Vladimiro Montesinos, como todos sabemos, es asesor en asuntos de Inteligencia en la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Me resulta difícil creer que alguien con tanta responsabilidad en el país esté involucrado con un delincuente.

Vidal y Montesinos estudiaron juntos en la escuela de precadetes del Ejército y, años más tarde, el asesor lo defendió como abogado en un juicio para que Vidal fuera repuesto en la Policía, lo que finalmente consiguió.

Pero la defensa más ardorosa fue nada menos que la de la fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, la cabeza de la institución que debía investigar el delito. Ante el periodista Nicolás Lúcar, en el programa La Revista Dominical de América Televisión, dijo:

—El doctor Vladimiro Montesinos, que ha sido la persona que ha ideado, el artífice de cómo se le debe capturar, dónde se le debe capturar, un trabajo de inteligencia paciente, resulta inconcebible, inaudito, de que el nombre que propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos, sea la persona de que ahora, en una declaración, se pueda dañar su reputación, su carrera, el prestigio del Perú, de las instituciones.

Colán llegó a reconocer que conocía al asesor.

La defensa también fue asumida por Camet, Hermoza Ríos, el ministro del Interior Juan Briones Dávila y varios congresistas. Fujimori remató diciendo:

—Al parecer, existen algunos resentidos.

Días más tarde, Chávez Peñaherrera reapareció ante el tribunal. Era visible que había estado débil y que se mostraba incoherente. En esas condiciones, se retractó de las acusaciones contra Montesinos.

Caído el régimen, «Vaticano» acusó al gobierno de torturas, e incluso, de haber sido sometido a descargas eléctricas. También refirió que, antes de la audiencia en la que se retractó de lo señalado sobre el asesor presidencial, había ingerido alimentos que, presume, estuvieron envenenados. A ciencia cierta, el narcotraficante ha perdido el 30 % de su capacidad visual y tiene un agujero en el cráneo. Hoy no recuerda ambas audiencias[130].

Frecuencia Latina fue uno de los pocos canales que difundió las declaraciones de «Vaticano», en su noticiero estelar, 90 Segundos. De hecho, pidió el video a Andina de Televisión, porque no tenían imágenes propias del juicio. Sin embargo, horas antes de que se propalara el testimonio de Chávez Peñaherrera, una visita llegó a las instalaciones del canal, en el mesocrático distrito de Jesús María.

Víctor Alberto Venero era un empresario que tenía negocios con el Ejército. Poseía un negocio de venta de colchones, y compraba espuma a la fábrica del propietario de la televisora, Baruch Ivcher, Productos Paraíso, que también se dedicaba a ese negocio. Venero tenía también intereses en la Caja de Pensiones Militar Policial, cuyos fondos se utilizaban para la construcción y venta de inmuebles. Pero pocos sabían que, en realidad, el empresario no solo era un hombre de confianza de Montesinos —de lo que se jactaba en privado—, sino también uno de sus testaferros.

El mensaje transmitido por Venero a Ivcher fue claro: «Ha dicho una serie de cosas sobre el tío. Te pido que veas cómo tratan esa información». El accionista principal de Frecuencia Latina le dijo que Montesinos no debería preocuparse, pues era el testimonio de un delincuente. Las declaraciones se propalaron en horario estelar.

Al día siguiente, Venero propuso que Colán se presentara en Contrapunto, el programa dominical del canal, para defender a Montesinos. Para el empresario, esto rayó en el ridículo. Luego, Venero insistió en que acudieran Antonio Ketín Vidal y otros oficiales de las Fuerzas Armadas para hacer lo propio. El dueño del canal aceptó. La defensa de Vidal, como ya vimos, fue tibia. Días más tarde, el canal emitió un reportaje con grabaciones de la Marina donde miembros del Ejército discuten con los miembros de la firma de «Vaticano» sobre cupos y horas de aterrizaje. En represalia, el canal dejó de tener resguardo permanente de las fuerzas de seguridad, como había sido desde el atentado de junio de 1992.

¿Qué había pasado? Ivcher decidió cambiar el tono oficialista de los espacios informativos de su canal a inicios de 1996. Despidió al editor general de prensa, Julián Cortez, y lo reemplazó por Fernando Viaña, quien había sido el director de Ojo y de un nuevo

diario popular, Ajá. Como nuevo director de Contrapunto, colocó a Luis Iberico, reportero del canal que había tenido antes varias primicias vinculadas a la guerra contrasubversiva. El nuevo conductor del programa dominical era el abogado Gonzalo Quijandría. Y los noticieros estaban a cargo de Iván García, nieto e hijo de apristas, opositor a Fujimori desde el golpe de Estado de 1992 y que había sido editor de La República. La unidad de investigación fue encargada a José Arrieta, uno de los miembros del equipo de la revista Sí que dio a conocer el caso La Cantuta y que había trabajado en América Televisión entre 1994 y 1995.

Los primeros resultados se vieron a mitad de año, cuando Contrapunto sacó los reportajes sobre el «narco avión» presidencial y los «narco buques» Matarani e Ilo, a los que Fujimori tuvo que hacer referencia en su mensaje de Fiestas Patrias.

Ivcher comunicó a los congresistas de la oposición que no habría vetos en su canal —en la práctica, se había evitado invitar a parlamentarios de izquierda— y que serían nuevamente contemplados en la pauta de los programas periodísticos de Frecuencia Latina. Mientras que Arrieta, a través de sus fuentes de Inteligencia, supo que Montesinos ya tenía a la estación de televisión en la mira[131].

Como ya hemos visto, los hijos de Alberto Fujimori estudiaron la primaria y la secundaria en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, un colegio religioso que, en materia social, era bastante progresista. En los años de la crisis económica, uno de los codirectores del plantel fue el sacerdote peruano Gastón Garatea, cercano a la Teología de la Liberación, una corriente del catolicismo a la que se le atribuye ser el ala izquierda de esta religión en América Latina. El docente del curso de Filosofía para los alumnos de quinto año de secundaria durante varias décadas fue el sacerdote belga Hubert Lanssiers, un hombre que podía ser duro en el trato con sus alumnos o en sus reflexiones en clase y en sus textos, pero que desarrolló un sentido humano que marcó a todos quienes lo conocieron.

Lanssiers no solo era docente en la Recoleta. Desde los años setenta, acudía al menos dos veces por semana a algunos de los

penales de la ciudad de Lima, donde brindaba asistencia espiritual. Allí conocía los problemas de la cárcel y de sus inquilinos, a los que el resto de la sociedad ignoraba consuetudinariamente. Para muchos peruanos, la comisión de un delito suponía que el responsable perdiera sus derechos. El sacerdote no lo comprendía así. Y en sus escritos y en la práctica bregaba por la mejora de las condiciones carcelarias en el Perú. Varias personas fueron liberadas gracias a su intervención y, además, desde 1993, impulsó la Obra Recoletana de Solidaridad, para permitir un espacio en el colegio donde enseñaba, en el que se vendían artesanías y adornos hechos por los internos de distintos penales de Lima y Callao.

En sus visitas a las cárceles, Lanssiers llegó a hablar con varios condenados por terrorismo. Allí pudo contrastar, en vivo y en directo, que las denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre afectaciones al debido proceso eran ciertas. Y que existía un número importante de personas que habían sido sentenciadas sin prueba alguna, salvo algún dicho no corroborado. En otras palabras, inocentes condenados.

Desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos, se había logrado documentar cientos de casos de inocentes y, además, registraron ante varias entidades internacionales las vulneraciones al debido proceso que se registraron a raíz de la legislación antisubversiva emitida durante el periodo de facto. A partir de 1995, las ONG hicieron mayor incidencia ante la opinión pública peruana y consiguieron sensibilizarla: en parte, por lo desgarrador de los testimonios; en gran medida, porque lo peor de la época de violencia había pasado.

Lanssiers logró convencer a Fujimori sobre la materia, con datos de primera mano. Desde 1992, integraba un comité gubernamental, que había logrado la salida de poco más de un centenar de personas. Para las Fiestas Patrias de 1996, el presidente señaló en su mensaje a la nación que «En la lucha contra el terrorismo se cometieron errores, entre ellos, detenciones y sentencias injustas, el gobierno conformó un comité gubernamental de defensa de los derechos humanos y gracias a la tesonera labor de este comité se ha logrado liberar aproximadamente a 150 ciudadanos. Para llevar

adelante este proceso de rectificación, con otros grupos de ciudadanos injustamente detenidos, se presentará al honorable Congreso de la República un proyecto de ley, debidamente coordinado entre el ejecutivo y la Defensoría del Pueblo». Era la primera vez que Fujimori reconocía abiertamente los errores en materia de lucha antisubversiva y que, además, tomaba la iniciativa sobre ello.

La propuesta inicial del gobierno era presentar una Ley de Amnistía. Desde la comunidad de derechos humanos, resultaba inaceptable, porque equiparaba a los inocentes con aquellos agentes del Estado que, siendo responsables de graves violaciones a los derechos humanos, habían sido eximidos de responsabilidad.

La propuesta final fue la formación de una comisión ad hoc, integrada por el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y un representante del presidente, que propondría al mandatario casos para el indulto. Aunque no era la salida jurídica idónea, primó la necesidad de liberar a estas personas. Esto se plasmó en una Ley promulgada el 17 de agosto de 1996.

Lanssiers devino en el representante presidencial ante la comisión ad hoc. El grupo de trabajo logró la salida de 502 personas entre 1996 y 2000. Otras personas consiguieron su absolución durante el mismo periodo, por la revisión de sus condenas. El sacerdote belga logró hasta 1999 que Fujimori estuviera sensibilizado sobre la materia. En el último año de gobierno, perdió el interés sobre el tema y las liberaciones se redujeron[132].

De acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas por Murakami, Alberto Fujimori mostró interés en reelegirse en 2000 al día siguiente que ganó su segundo mandato, en abril de 1995. Le pidió a un colaborador que comenzara a sondear la forma de interpretar la Constitución para forzar un tercer mandato. Ante una comisión del Congreso, Montesinos corroboró que las intenciones del proyecto de la «re-reelección» fueron tempranas.

En enero de 1996, varios parlamentarios fujimoristas empezaron a expresarse sobre la «esperanza» de que el líder de su agrupación se presentara a las elecciones del año 2000. Víctor Joy Way habló de la posibilidad de que Fujimori gobernara el país por quince años

más, completando dos décadas en el poder. Ante la reacción opositora, el parlamentario tuvo que decir que, en realidad, buscaba más la prolongación de un sistema de gobierno antes que de su cabeza. Quienes respaldaron a Joy Way fueron Luis Delgado Aparicio y Gilberto Siura.

Más cautos fueron Martha Chávez y Carlos Ferrero Costa, quienes indicaron, desde su punto de vista como abogados, que un tercer mandato de Fujimori requería una reforma constitucional. Sin embargo, el gobierno no tenía los votos suficientes para hacerla —a pesar de que había ampliado la bancada oficialista con nuevos jales y, además, normalmente Renovación votaba con ellos— y las primeras encuestas sobre la materia mostraban que la mayoría de los peruanos estaba en desacuerdo con la medida.

En agosto de 1996, cuando el Congreso era presidido por Joy Way, se presentaron dos iniciativas legales que buscaban permitir la reelección de Fujimori. La primera era indirecta: se modificó la Ley General de Procedimientos Administrativos, para señalar que, para interpretar una norma, no se tomara en consideración en el periodo anterior a su publicación. Se llegaba a indicar que el periodo anterior a la puesta en vigencia de una Ley no se consideraría como parte de su validez. Esta fue una iniciativa presentada por el congresista oficialista Oscar Medelius, cercano a Montesinos.

El segundo proyecto fue presentado por Siura: una Ley de «interpretación auténtica» del artículo 112° de la Constitución, vinculado a la reelección presidencial. La norma señalaba que no se contaría como el primer periodo de Fujimori el comprendido entre 1990 y 1995, con fines de reelección. Era una interpretación bastante forzada de la Constitución. Las protestas opositoras parlamentarias fueron fuertes y, al final, decidieron abandonar el hemiciclo del Congreso al momento de la votación. La norma fue convalidada con 70 votos el 23 de agosto de 1996.

La norma presentada por Siura había tenido la anuencia de Fujimori. En una reunión previa, el mandatario había señalado que asumiría el costo político de emitir una norma controvertida, con miras a llegar al año 2000 con buen pie para el proyecto reeleccionista.

El único parlamentario oficialista que se negó a votar a favor fue Carlos Ferrero. En una breve intervención, indicó:

—Cuando se debatió y se aprobó la Constitución, para mí estaba absolutamente claro que se aceptaba un mandato adicional al presidente Fujimori, que es este, y que no sería posible un tercer mandato continuado. No he cambiado de opinión. Quienes aspiren a un tercer mandato continuado para el presidente Fujimori pueden recurrir a la reforma constitucional de la manera que el texto lo establece. Interpretar la Constitución por una simple ley, y hacerlo en contra de su sentido, es un perjuicio al país y es jurídicamente improcedente. Votaré, señores, en contra.

Era una disidencia más del congresista frente al oficialismo, pero quizás esta fue la que comenzó a marcar un camino de no retorno.

Apenas aprobada la norma, el congresista de Izquierda Unida, Javier Diez Canseco, propuso ir hacia un referéndum que defina si es que Fujimori podía presentarse o no a la reelección. Así, el 2 de septiembre de 1996, Diez Canseco, su colega Lourdes Flores Nano (PPC), el analista político y militante aprista Mauricio Mulder y el abogado Alberto Borea, en representación del Foro Democrático —una agrupación de opositores al régimen—, se presentaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para comprar un kit de firmas para impulsar la consulta popular. Frente a una inicial negativa del jefe de la ONPE, José Portillo, el Jurado Nacional de Elecciones ordenó activar el proceso[133].

Para septiembre, se recompondría nuevamente el entorno presidencial. Luego de diez meses en el cargo, Jaime Yoshiyama dejaba el ministerio de la Presidencia y se apartaba totalmente del gobierno, para dedicarse a actividades empresariales privadas.

Todas las versiones coinciden en señalar que fue Montesinos quien forzó la salida del ministro, sea porque recopiló comentarios de su entorno en su contra cuando estalló el caso «Vaticano» o porque indispuso a Fujimori sobre posibles reuniones de Yoshiyama con militares y otros personajes, en las que se vendía como el posible sucesor del mandatario. Santiago Fujimori señaló que esta última versión era la que se le había dado, pero no tenía evidencia alguna de esos rumores.

Lo cierto es que Yoshiyama ya no era funcional a los fines de Fujimori. No había conseguido neutralizar la popularidad de Alberto Andrade y, dada la Ley de Interpretación Auténtica, no era necesario contar con un posible sucesor en el equipo ministerial.

Por su parte, Montesinos buscó apoyo para su causa en el exterior y la obtuvo. En septiembre de 1996, la embajada de Estados Unidos envió al Departamento de Estado una comunicación en la que señaló que, de acuerdo con sus informaciones, no encontraba «dignas de crédito» las acusaciones emitidas por «Vaticano» en su contra. El Departamento de Estado hizo suya esta versión.

Al mes siguiente, el asesor presidencial aprovecharía una oportunidad de oro. Llegó al Perú el director de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, el general Barry McCaffrey, héroe de la Guerra del Golfo. El militar estadounidense arribó a Palacio de Gobierno para una reunión con Fujimori. Al terminar la visita, en la puerta de la sede presidencial, Montesinos se hizo ver y le extendió la mano a McCaffrey. El funcionario no se la negó. Distintas versiones dan cuenta de que, en privado, el «zar antidrogas» se mostró bastante incómodo por el uso político de las fotos por parte de Montesinos.

Quien comenzó a escalar posiciones en el círculo de poder, ya con Santiago Fujimori y Yoshiyama fuera del mismo, era el exministro de Agricultura Absalón Vásquez. Exmiembro del Partido Aprista Peruano, Vásquez Villanueva era molinero como Fujimori. Se transformó en asesor presidencial para temas agrarios una vez que dejó el ministerio del sector, pero, en la práctica, comenzó a controlar varios de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), así como el nombramiento de autoridades del Poder Ejecutivo en regiones. También empezaría a acercarse a alcaldes distritales y provinciales en distintas zonas fuera de Lima. Así se dio inicio a la construcción de lo más cercano que tendría Fujimori a una base política meridianamente organizada en todo el país[134].

En 1996, Keiko Fujimori ya tenía dos años alternando sus funciones como primera dama con sus estudios de administración

en la Universidad de Boston. Como ya hemos señalado, este cargo honorífico la llevó a presidir la Fundación por los Niños del Perú, creada durante el primer gobierno de Alan García.

Pero la hija mayor de Fujimori buscaría sus propias actividades caritativas. En 1996, creó la Fundación Peruana Cardioinfantil, destinada a apoyar las operaciones de menores de edad con problemas cardiovasculares. Esta organización se sostiene, además, sobre el trabajo de mujeres voluntarias que brindan su tiempo para apoyar a los familiares de los menores que son atendidos por la institución.

La Fundación fue iniciativa de dos mujeres que se transformarían en sus amigas y, años más tarde, en colaboradoras centrales de su futura carrera política.

Ana Rosa Herz Garfias de Vega es una mujer muy devota —como Blanca Nélida Colán, vestía hábito morado en octubre— que, en la práctica, asumió un rol materno para Keiko. Ambas se complementaban: la primera dama se había distanciado de su progenitora y, además, se sentía presionada con el cargo. Mientras que Vega nunca tuvo una hija y sus hijos varones ya eran mayores. Desde allí, tejieron una relación de complicidad —en todos los sentidos de la palabra— que duraría durante las dos siguientes décadas. Herz de Vega pasó a ser asesora personal de Keiko en Palacio de Gobierno.

Quien también ejercía esa labor era otra mujer voluntaria: Adriana Tarazona Martínez de Cortez. Con ella, su relación no era tan estrecha como la de Vega, pero sí adquirió suma confianza. Era como un «ángel guardián» para la joven primera dama.

De acuerdo con las versiones periodísticas más redondas, Vega tuvo la idea de la Fundación Peruana Cardioinfantil, por su trabajo como voluntaria en el Hospital del Niño, entidad estatal a la que llegaban varios casos de menores con cardiopatías congénitas. La exsecretaria conversó con Tarazona, cuyo hijo había sido compañero de promoción de colegio de Keiko Fujimori y las dos llegaron donde la primera dama. Keiko se convenció de la necesidad de la entidad y se puso a disposición de ambas para ser la presidenta.

La Fundación Peruana Cardioinfantil era un espacio con el que Keiko se sintió cómoda. Allí pudo comenzar a hacer su agenda de conciertos, cenas benéficas o espectáculos de ballet, al final de los cuales normalmente llegaba Alberto Fujimori.

Fue en ese espacio donde la relación entre Vega y la joven se volvió en cuasimaternal[135].

A pesar de que 1996 fue un año en el que las reformas económicas se pararon en la práctica, algunas ideas innovadoras surgieron en los últimos meses. Una fue celebrada con cautela y la otra pasaría a ser una de las herencias más controvertidas del periodo.

El 11 de octubre, en medio de una gira por Alemania, Fujimori anunció la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). La noticia fue sorpresiva, a tal punto que pocas personas en el movimiento feminista podían intuir que se venía una organización de este tipo. Era el primer ministerio dedicado a la problemática de género en la región, pero, a la larga, se creó de espaldas a las activistas involucradas en la materia.

El PROMUDEH fue creado mediante un Decreto Legislativo. En la práctica, englobó a varias entidades que venían de otros ministerios, con las que no se sabía qué hacer. Así, las políticas de asistencia alimentaria, protección de la niñez y adolescencia abandonadas, el repoblamiento de comunidades desplazadas por el terrorismo e incluso el deporte pasaron a la nueva entidad. El enfoque del ministerio nuevo priorizó la lucha contra la pobreza antes que la igualdad de género. Aunque las organizaciones no gubernamentales sobre género y derechos de las mujeres no dejaron de vincularse con la nueva cartera, era evidente que no era el ministerio prometido ni, menos aún, el deseado.

En noviembre, el gobierno emitiría el Decreto Legislativo 882. La norma liberalizó el mercado educativo en el Perú, permitiendo la formación de entidades con fines de lucro como promotoras de universidades privadas y colegios. La idea original de la norma era ampliar la oferta de entidades universitarias, a fin de brindar mayores profesionales al mercado de trabajo, así como de colegios

privados al alcance de todos los bolsillos. Primaba la lógica de que la educación privada era, per se, mejor que la estatal.

Sin embargo, el Decreto Legislativo 882 sería una de las normas más criticadas durante las siguientes dos décadas. De un lado, muchos expertos en temas educativos cuestionaron que se deformara la idea de universidad, priorizando su labor como formadora de futuros profesionales, antes que en la creación de nuevo conocimiento a través de la investigación. Otros mencionaban que el afán de lucro era incompatible con una entidad universitaria, dado que subordinaba los ingresos económicos a la búsqueda de conocimiento. De otro lado, buena parte de las universidades creadas al amparo de esta norma no cumplían con estándares mínimos de calidad y tampoco cumplió con la promesa de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior universitaria. El proyecto fujimorista no suponía la creación de ninguna entidad reguladora sobre la materia. Con esta norma, la Asamblea Nacional de Rectores enfatizaría más sus rasgos negativos y devendría, antes que en una organización fiscalizadora, en un club de las principales autoridades universitarias.

Dos décadas más tarde, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) determinaría que varias de las universidades creadas al amparo de esta norma debían cerrar. Y otras tuvieron que hacer una fuerte inversión para permanecer en el mercado.

En lo que se refiere a la educación básica, se amplió el número de escolares en las zonas populares de las grandes ciudades. Sin embargo, el problema de calidad que acompañó a las universidades creadas bajo el Decreto Legislativo 882 se extendía a los colegios privados que no son de élite. En las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), los colegios estatales se encuentran por encima de varios colegios particulares dirigidos a sectores pobres o clase media baja[136].

Durante las últimas cinco décadas, el nombre de César Hildebrandt Pérez–Treviño estaría asociado al periodismo pugnaz y combativo. Formado en la prensa escrita, durante una década en

Caretas haría gala de preguntas agudas a los políticos de turno y de conversaciones intelectualmente estimulantes con escritores y científicos sociales. El estilo, que combinaba a un inquisidor frente a políticos de todas las tiendas con un entretenido y culto interlocutor de figuras de la cultura y el espectáculo, se registró en aquellos años.

Aunque Hildebrandt participó en un programa periodístico televisivo afín con el velascato en los años setenta, sería con el retorno de la democracia que llegarían sus mejores oportunidades. Sus espacios televisivos mezclaron denuncias contra intereses políticos y económicos de todas las tiendas políticas, buena cobertura internacional, comentarios editoriales bastante fuertes y entrevistas en la línea de lo hecho en Caretas. Pero casi todos sus espacios durante la década terminarían en vetos o renuncias, por discrepancias con los dueños de las televisoras en las que trabajó.

Hildebrandt era el periodista más opositor, desde la pantalla chica, a la elección de Fujimori, y su programa En Persona, el más sintonizado de los espacios dominicales en 1990. Cuando el ingeniero fue elegido, continuó con la línea opositora. Como ya mencionamos, en 1991, el espacio salió de las pantallas de América Televisión, debido a que se había difundido un reportaje de la periodista Cecilia Valenzuela sobre un documento militar que autorizaba a ejecuciones sumarias de sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso y al MRTA. El informe mereció la amenaza de un juicio por parte de Clemente Noel, primer jefe político militar de Ayacucho, sindicado como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos. El periodista dejó el canal y partió a España para escribir una novela y notas para el diario ABC.

En 1994, Hildebrandt retornó al Perú y condujo un breve programa de entrevistas políticas e inactuales en el cable. Al año siguiente, fue contratado por Andina de Televisión para tener un espacio similar. Pero sería en 1996 cuando los reflectores volverían a enfocarlo con nitidez. Ese año, desde Global Televisión, condujo y dirigió La Clave, un espacio en el que combinaría comentario opositor, entrevistas políticas y algunos reportajes. Paulatinamente, el espacio se hizo de un público en un año en el que los yerros del

gobierno fueron mayúsculos y la popularidad de Fujimori comenzaba a descender.

En noviembre de 1996, la sede de Global Televisión en Puno fue víctima de un atentado. El general Rodolfo Robles, quien había vuelto desde su exilio en Costa Rica, denunció que, de acuerdo con sus fuentes en el Ejército, habían sido agentes del Servicio de Inteligencia de dicha institución quienes pusieron la bomba y también indicó que Montesinos manejó el Grupo Colina. El 26 de noviembre, Robles fue secuestrado por efectivos de Inteligencia.

Posteriormente, las Fuerzas Armadas señalaron que era acusado ante la justicia militar por «ultraje a los institutos armados e insulto al superior» contra Hermoza Ríos. La acusación era grotesca y, además, Robles no podía ser ya procesado por el fuero castrense por ser oficial en retiro. Su detención era ilegal y mereció la condena de políticos, periodistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. Hermoza dijo que solo acataba órdenes de la justicia militar.

El 29 de noviembre, Fujimori reconoció que hubo un error. Sin embargo, la justicia militar no cumplió con una sentencia de hábeas corpus dictada por la jueza Greta Minaya, que ordenaba la inmediata liberación de Robles. Tal era el escándalo, que el propio mandatario tuvo que enviar una Ley de Amnistía para que el general en retiro fuera liberado. La norma fue aprobada el 5 de diciembre.

Pocos días más tarde, el periodista Edmundo Cruz reveló en el diario La República dos planes de Inteligencia: Bermuda, que implicaría un atentado para acabar con la vida de Hildebrandt, y Narval, que fue el expediente para el atentado contra Global en Puno. La revelación del plan Bermuda terminó salvando la vida de Hildebrandt, quien al año siguiente pasaría a otra televisora. Los autores del atentado fueron absueltos en enero de 1998. Otro plan revelado por Cruz, denominado El Pino, buscaba amedrentar al abogado Heriberto Benítez, que había defendido varios casos de violaciones a los derechos humanos que complicaban al régimen. Según versiones recogidas por el periodista Ricardo Uceda y publicadas en 2020, el plan El Pino habría tenido que ver con Inteligencia contrasubversiva en la empresa Palmas del Espino, de

propiedad de Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del Perú. Romero solicitó esta operación a Vladimiro Montesinos, según su propia confesión, en octubre de 1996, en la primera cita que tuvo con el asesor presidencial, pues sospechaba de presuntos elementos terroristas cerca de su compañía de producción de palma aceitera. Equipos del Servicio de Inteligencia del Ejército fueron al lugar, sin encontrar información relevante. Durante años se sospechó que incluso se podrían haber realizado ejecuciones extrajudiciales, sin que este dato se pudiera comprobar.

Luego de estos sucesos, parecía que el año más complicado para Fujimori acabaría con cierta tranquilidad. No sería así[137].

---

124 Sobre la Defensoría del Pueblo, nos basamos en Bowen (2000: 255) y en el artículo «La Defensoría del Pueblo. La experiencia peruana» de Samuel Abad, abogado que fue adjunto en temas constitucionales en los primeros años de la institución (2010: 481-510). También revisamos Youngers (2003: 324-328) y una columna de homenaje a Jorge Santistevan de Eduardo Dargent, publicada en *Diario 16,* en abril de 2012.

125 Sobre el Tribunal Constitucional, revisamos Murakami (2018: 439) y Landa (2007: 588-601).

126 Para relatar lo ocurrido con la Ley Siura y el referéndum, consultamos Conaghan (2005: 120-125) y Murakami (2018: 439-440).

127 La sección sobre el caso Popular y Porvenir se basa en Quiroz (2019: 323-326), así como en un informe de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros presidida por Javier Diez Canseco (http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/indice.htm). También revisamos los informes de la Comisión Herrera sobre APENKAI y AKEN.

128 En torno a las comisiones ejecutivas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, consultamos los artículos de Dargent (2006: 146-147) y de Belaúnde (1999: 317-322) sobre sistema de justicia, así como el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo III: 265-268). También revisamos Pease (2003: 292-302, 303-307).

129 Revisamos el mensaje presidencial de Fujimori correspondiente a las Fiestas Patrias de 1996 en la página web del Congreso de la República. Sobre el caso del «narco avión», revisamos el reportaje de Romina Mella para *IDL-Reporteros* sobre el devenir del proceso y sus evidencias (https://idl-reporteros.pe/secretos-del-narcoavion/).

130 Sobre la declaración de «Vaticano», nos basamos en Bowen y Holligan (2003: 172-178) sobre Montesinos, y Coya (2018: 19-22) sobre el narcotraficante. Las defensas de Antonio Ketín Vidal y Blanca Nélida Colán aparecen en Paredes (2006: 32-33) y Gamarra (2007: 132-134), respectivamente.

131 Los cambios en la línea editorial de Frecuencia Latina son detallados a partir del libro

de Vargas Llosa (2000: 189-247), así como en los textos de Murakami sobre el gobierno de Fujimori (2018: 499-500) y de Vivas (2008: 361-362, 509).

132 La problemática de los inocentes en prisión es abordada por Youngers (2003: 334-345), Jara (2001), Dargent (2000) y el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VI: 463-471). En torno a la figura de Lanssiers, me baso en mis recuerdos como alumno del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta entre 1988 y 1998. La Obra Recoletana de Solidaridad se mantiene hasta el día de hoy.

133 El relato sobre la «Ley de Interpretación Auténtica» se basa en Bowen (2000: 267-268), Conaghan (2005: 120-123) y Murakami (2018: 484-488), así como en la revisión del *Diario de Debates* de la respectiva sesión del Congreso de la República.

134 La salida de Yoshiyama y el creciente poder de Absalón Vásquez se describen en Murakami (2018: 457-459). El texto de Bowen y Holligan es muy claro sobre el uso político de la primera visita de Barry McCaffrey por parte de Montesinos (2003: 215-219).

135 Sobre la relación de Keiko Fujimori con Ana Vega y Adriana Tarazona nos basamos en Dongo (2009: 66), Caballero (2019: 59) y Sifuentes (2019: 95-96). Los datos sobre la Fundación Peruana Cardioinfantil aparecen en su página web. Complementariamente, hay algunos datos en Vásquez de Velasco (2020: 50-52).

136 La creación del PROMUDEH es descrita en Rousseau (2012: 120-123). Sobre el Decreto Legislativo 882, nos basamos en Cuenca y Reátegui (2016) y Cuenca (2013: 34-40), que forma parte de la Colección Pensamiento Educativo Peruano. El DL 882 fue derogado por la actual Ley Universitaria, vigente desde 2014. Al amparo de esta última norma, la SUNEDU ha hecho un proceso de licenciamiento que culminó en enero de 2021: un tercio de las universidades existentes en 2014, cuyo número comenzó a crecer en la década de los noventa, deberán desaparecer.

137 Las entrevistas de Hildebrandt en *Caretas* se encuentran en *Cambio de palabras* (2018). Sobre su biografía televisiva, apelamos a Vivas (2008: 326-333). En torno a los planes Bermuda y Narval, consultamos Rospigliosi (2000a: 87-88). Sobre el plan El Pino, la anotación aparece en Vargas Llosa (2000: 171-172) y los datos más actuales en Uceda (2020: 149-154). Otro libro de Rospigliosi (2000b: 256-260) da cuenta del caso Robles, al igual que Bowen (2000: 271-272).

REHENES

(Diciembre, 1996 – Abril, 1997)[138]

Todo comenzó la noche del 30 de noviembre de 1995. Cuando nos acercábamos a las últimas horas del día, varios canales interrumpieron su programación habitual para informar que se producía una balacera en La Molina, un distrito de clase alta de la ciudad de Lima.

Horas antes, dos extranjeros —el panameño Pacífico Castrillón y la estadounidense Lori Berenson— y la peruana Nancy Gilvonio habían sido detenidos. Las dos últimas habían sido vistas en el Congreso de la República, con la fachada de pertenecer a un equipo de prensa. El primero de los nombrados confirmó que en una casa de La Molina existía una base del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, donde se alojaban varias personas armadas.

Cerca de mil integrantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas se dirigieron a La Molina. Durante la noche, las balas se sucedieron. Algunos miembros del MRTA huían por los techos. Varios policías fueron heridos y dos subversivos fueron acribillados. Doce de los terroristas, liderados por Miguel Rincón —uno de los pocos miembros de la cúpula de la agrupación que quedaba en libertad—, ingresaron a una vivienda y tomaron como rehenes a una familia. Para la mañana del 1 de diciembre, gracias a la mediación de un sacerdote mexicano y el Comité Internacional de la Cruz Roja, Rincón salió y fue detenido. Se detuvieron a alrededor de doce personas.

Cuando se ingresó a la casa que frecuentaba Castrillón, dieron con un arsenal de sesenta fusiles AKM, granadas, explosivos plásticos y, lo más importante, un mapa y una maqueta del Congreso de la República. El plan para el que se venía entrenando la célula del MRTA era una toma del hemiciclo, con la mayor cantidad de parlamentarios posible, con miras a canjearlos por presos de la organización.

A partir de la captura, se tuvo dos datos centrales. El primero fue que Berenson no solo fungía de espía, sino que también era el principal contacto logístico de la operación. Cuando se le presentó

ante la prensa, sin traje a rayas, ella gritó una proclama en la que consideraba que estaba luchando por la justicia social y contra el hambre y la miseria en el Perú. Fue sentenciada en un proceso a puerta cerrada a cadena perpetua. Su caso complicaría hasta cierto punto las relaciones con Estados Unidos, dado que sus padres consideraron que su juicio no cumplió con los estándares del debido proceso e hicieron un cabildeo incesante ante autoridades peruanas y estadounidenses. Rincón y Gilvonio fueron sentenciados también a cadena perpetua.

El segundo dato, que tuvo menos repercusión periodística, era que el otro miembro de la cúpula del MRTA en libertad, Néstor Cerpa Cartolini, había estado en la casa de La Molina pocos días antes del operativo policial. Su paradero fue desconocido durante un año. Hasta que llegó el golpe que estaba preparando.

Uno de los días festivos más importantes en Japón es el cumpleaños del Emperador. Akihito, quien fue el jefe de Estado japonés entre 1989 y 2019, celebra su natalicio el 23 de diciembre. Dado que en varios países occidentales la fecha es bastante cercana a la Navidad, la recepción por esta celebración, considerada como fiesta nacional, se realizaba unos días antes en las delegaciones diplomáticas.

Para 1996, la recepción fue programada para el miércoles 17 de diciembre. Ese mismo día, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, invitaba a diversas personalidades para un concierto de Navidad donde se presentaría la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando El Mesías de Haendel. Algunas personalidades priorizaron la música clásica. Otras optaron por la recepción del embajador Morhisa Aoki.

El almirante en retiro, Luis Giampietri, presidente del Instituto del Mar del Perú, decidió acudir a la residencia del diplomático nipón en agradecimiento por la donación de un buque científico. El excandidato presidencial Alejandro Toledo había sido becario en la Universidad de Waseda, por lo que también acudió a la velada. El sacerdote, economista y docente universitario Juan Julio Wicht decidió aprovechar la oportunidad para tener conversaciones rápidas con distintas personalidades por motivos de su trabajo académico. A pesar del cansancio, el canciller Francisco Tudela fue

animado por su esposa para asistir a la recepción. Por razones laborales, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera Sally Bowen se dirigió hacia la casa, ubicada en la calle Tomás Edison en San Isidro, uno de los distritos más acomodados de Lima.

Nunca quedó claro si Alberto Fujimori iba a asistir o no a la ceremonia, aunque había invitados que lo esperaban. Quienes sí se encontraban en la residencia eran sus hermanos Juana y Pedro, así como Mutsue, la progenitora del mandatario. Alrededor de seiscientos invitados departían sobre distintos temas, en medio de comida nikkéi, vasos de whisky y sake, cubiertos con un toldo blanco con ribetes rojos.

Algunos invitados se retiraron temprano, como el presidente de la comisión de Constitución del Congreso, Carlos Torres y Torres Lara, o el embajador de Estados Unidos, Denis Jett. Hacia las 8.10 p. m., el parlamentario opositor Henry Pease se dirigió a su casa para preparar una pequeña reunión en su departamento, a la que había invitado a varios amigos, entre ellos, al experto en ciencia y tecnología y habitual colaborador de la revista Caretas, Francisco Sagasti.

Mientras todo esto se producía, a la espalda de la residencia, en la calle Marconi, se estacionaba una ambulancia frente a la sede del Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica. Bajaron dos enfermeros señalando al guardián de la casa que había un enfermo que atender. El hombre de seguridad indicó que solo se encontraba él. Cuando le dieron a firmar un papel que registraba el supuesto error, lo encañonaron. La ambulancia entró a la casa y entraron doce hombres armados con fusiles AKM, lanzacohetes, granadas, minas y cientos de municiones.

Entre las 8.15 y 8.20 p. m. sonó una explosión. Pensando que era un coche bomba en las inmediaciones, rápidamente los invitados se refugiaron en el interior. «Empiezan a aparecer hombres con la cara cubierta», señaló el exjefe del GEIN, Marco Miyashiro. Se desataron los disparos y los invitados comenzaron a tirarse al suelo. Los hombres con la cara cubierta tenían un pañuelo. «Todos adentro y al suelo. Somos del MRTA. No se muevan, mierdas», gritaron a los asistentes a la reunión.

Desde fuera, miembros de la Policía y de seguridad privada comenzaron a disparar hacia el interior de la residencia, así como a lanzar gases lacrimógenos. Esto empeoró el clima alrededor, salvo para los terroristas, quienes tenían máscaras antigases. Continuó la balacera, hasta que, en un rudimentario español, el embajador Aoki se presentó como el dueño de casa. Le alcanzaron un megáfono y dijo «no disparen». Cesó el fuego. A su costado, se presentó un hombre calvo, de mediana edad. Era Michael Minning, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Insistió en que cesara el fuego.

El líder de los terroristas se presentó como «comandante Hemigidio Huerta». Mininng lo buscó para hablar. Le dijo que era necesario que dejara a las mujeres y a los ancianos en libertad, por ser personas en especial estado de vulnerabilidad. «Huerta» accedió.

Cuando entró a la residencia, Giampietri se extrañó de que el único dispositivo de seguridad era la solicitud de su documento de identidad. En julio de 1996, la delegación nipona en Lima redujo el número de personal de seguridad y canceló el registro de domicilios vecinos. En opinión de analistas japoneses, no se había previsto hasta qué punto disminuir las medidas de seguridad, considerando que la embajada había sufrido tres atentados en los primeros años de la década de los noventa.

Era también claro que el Servicio de Inteligencia había fallado en toda la línea. Si bien aún se mantenía la posibilidad de posibles ataques a sedes diplomáticas de países importantes, no existía un trabajo claro de vigilancia para desbaratar cualquier plan. De hecho, quedaba en evidencia que no se había hecho un seguimiento a Cerpa y a lo que quedaba del MRTA. Se pensó equivocadamente que, con la captura de Rincón, Castrillón, Berenson, Gilvonio y los terroristas en entrenamiento, la organización se había desarticulado.

Esto quedó patente al saberse que el propio jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe, se enteró de la toma de la residencia del embajador japonés en un casino.

Apenas enterado de los eventos, Fujimori se dirigió a la sede del SIN para evaluar la situación junto a Montesinos. Allí comenzó a

pensar en un plan militar. Inicialmente, se consideró reventar una ventana del segundo piso con un lanzagranadas, para que, desde una azotea de una casa vecina, ingresaran miembros de las fuerzas armadas. Los disuadió el hecho de que las guardias de los emerretistas eran permanentes, así como el alto costo en vidas de rehenes que conllevaría el plan.

Cuando el primer grupo de mujeres abandonaba la residencia del embajador del Japón, la policía volvió a tirar bombas lacrimógenas. Minning intervino de nuevo para que cesaran las bombas. Asimismo, a pedido del MRTA, entró un camarógrafo para que se ubicara en el jardín frente a la puerta de la residencia y pudiera registrar las liberaciones. El escogido fue Juan Víctor Sumarriva, entonces asistente de cámara en América Televisión. Se quedó por 48 horas.

Gracias a las imágenes de la televisión, los terroristas se percataron de que, entre las liberadas en el primer grupo de mujeres, estaban Mutsue y Juana Fujimori. Minutos más tarde, un rehén desesperado aprovechó la salida de los mozos para poder escapar. Por ello, durante unas horas, no dejaron salir a más personas.

Mientras tanto, Bowen y la periodista francesa Nicole Bonnet fueron conducidas al estudio de la residencia. Allí las esperaba el «comandante Huerta». Se les dijo que la acción buscaba liberar a los presos del MRTA, que no escatimarían costos humanos, y se les pidió que indicaran a los periodistas que solicitaban que el Defensor del Pueblo y el sacerdote Hubert Lanssiers fueran convocados a la residencia para cumplir una labor como negociadores.

A la medianoche, «Huerta» dejó salir a las demás mujeres de la residencia, así como a los adultos mayores, luego de mucha insistencia. Bowen transmitió el mensaje del líder terrorista. Este permitió que algunos rehenes pudieran llamar a sus casas a través de sus celulares, para comenzar a presionar al gobierno peruano para la liberación. Todos los capturados fueron distribuidos en las habitaciones, de acuerdo con lo que los miembros del MRTA consideraban como criterios de importancia.

Durante la madrugada, el alcalde de Miraflores Fernando Andrade —hermano del alcalde de Lima— aprovechó una ventana abierta del baño para poder huir. Sumarriva lo captó con la cámara y Andrade le pidió discreción. Así logró fugarse. Cuando otro militar buscó hacer lo mismo, se cerraron las ventanas de los servicios higiénicos, que habían colapsado rápidamente.

A la mañana siguiente, Wicht dialogó con Javier Diez Canseco, parlamentario de izquierda que estaba entre los rehenes. El congresista le indicó que los terroristas eran, a la vez que aparato militar, mando político. Y que, tal como veía las cosas, el proceso de la toma podía durar varias semanas. Tudela y el ministro de Agricultura, Rodolfo Muñante, los dos prisioneros más importantes, buscaron dialogar con Fujimori a través de un celular, pero no les respondía.

A las 11.00 a. m., «Huerta» reveló su identidad a los rehenes: se trataba de Néstor Cerpa Cartolini. Y luego se dirigió a la puerta de la residencia. Ante la cámara de Sumarriva, indicó: «En vista de que el gobierno no ha brindado ninguna respuesta a las demandas del MRTA, a las doce del día, el canciller Francisco Tudela será ejecutado». Al mediodía, le dio una hora más de vida. Y a la una de la tarde, simplemente no pasó nada. El canciller se había salvado.

Cerpa, ya identificado como tal por los medios, se contactó con Radio Programas del Perú para insistir en la negociación a través de Lanssiers y Santistevan de Noriega. Pero desde el gobierno no acusaron recibo. De hecho, Fujimori no emitió ni una sola palabra durante ese día.

Esa tarde, fueron liberados once rehenes: tres embajadores (Canadá, Alemania y Grecia), así como algunos políticos como Toledo y Diez Canseco. Los tres diplomáticos se dirigieron a Palacio de Gobierno a buscar una negociación, pero no fueron recibidos por nadie al día siguiente. Toledo y Diez Canseco leyeron un comunicado de los rehenes, donde describieron la situación de la residencia. Diez Canseco también presentó el comunicado preparado por Cerpa.

Recién a las 6.00 p. m. del 18 de diciembre de 1996, el gobierno dio muestras de vida: Domingo Palermo, ministro de Educación, fue

nombrado oficialmente como negociador. Al empresario televisivo no se le conocen dotes políticas destacadas, pero sí se sabe que intervino, alguna vez, como negociador en un secuestro.

El núcleo central del comando del MRTA estaba conformado por cuatro personas. La más conocida era Cerpa Cartolini, considerado como el último gran líder de la organización en libertad. Cerpa se convirtió en obrero en la fábrica textil Cromotex, donde haría vida sindical. Cuando la empresa se declaró en quiebra en 1978, lideró la toma de las instalaciones de la fábrica. Luego de 39 días, la policía resolvió el motín a sangre y fuego. Allí falleció Hermegidio Huerta, su mentor en el sindicato, cuyo nombre revindicó en el golpe más importante de su vida.

En 1982, Cerpa participó en las primeras acciones del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la segunda agrupación terrorista, que causaría menos muertos que Sendero Luminoso, pero que cometió diversos atentados en la ciudad y se especializó en la práctica sistemática del secuestro. Se buscaba obtener, con los raptos, dinero para emprender más acciones armadas.

A Cerpa se le adjudicaba, además de la autoría de secuestros, el crimen homofóbico más importante del periodo de violencia: el asesinato de ocho personas homosexuales en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, ocurrido el 31 de mayo de 1989. El terrorista encabezó la construcción de un túnel para liberar a 48 miembros del MRTA, quienes se encontraban en el penal Miguel Castro Castro. La fuga se produjo en las postrimerías del primer gobierno de Alan García.

Originalmente, el segundo al mando del comando era Eduardo Cruz Sánchez, conocido por el apelativo de «Tito». Militante del MRTA desde 1988, fue uno de los fugados en 1990 gracias al túnel construido por Cerpa. Cruz Sánchez contaba con experiencia de combate en el Alto Huallaga y tenía fama de duro. «Tito» se había encargado de conseguir el campo donde los terroristas entrenaron por meses, ubicado en Huachipa, a las afueras de Lima, así como la falsa ambulancia con la que pudieron entrar.

El día de la toma, «Tito» se había herido en la pierna con su propio fusil y tuvo que ser enyesado. A pesar de su escasa

movilidad, era uno de los más duros con los rehenes y, además, era el único que podía plantarle cara a Cerpa para que retroceda en sus posiciones.

Quien asumió las veces de segundo en la organización fue Rolly Rojas, captado por el MRTA cuando estudiaba Sociología. Se especializó en manejo de explosivos y asumió el alias de «El Árabe». El cuarteto dirigente era completado por un terrorista conocido como «Salvador», considerado como otro de los duros, a quien se le encargó la dirección de los terroristas más jóvenes.

Giampietri resumió la situación: «Saber qué iba a hacer el MRTA era siempre una incógnita».

El sábado 21 de diciembre, Fujimori dirigió un mensaje a la nación. Señaló que resultaba increíble que el MRTA buscara negociaciones para un acuerdo de paz «colocando un fusil AKM en la nuca de los rehenes». El mensaje fue bastante duro. Fujimori fue enfático en que no se iba a liberar a nadie que haya perpetrado atentados terroristas o asesinatos. Las condiciones para el diálogo eran la entrega de armas a una comisión de garantes y la evacuación de los rehenes. En ningún momento, el presidente mencionó a su hermano Pedro, quien se mantuvo en cautiverio hasta el final de la crisis. Inmediatamente después, el gobierno cortó la luz, el agua y la señal de comunicaciones en la residencia.

El gobierno continuó meditando la posibilidad de una salida por la fuerza. Desde la Policía, se pensó en un plan denominado Papá Noel, que podría llevarse a cabo en Navidad y Año Nuevo. Se buscaría aprovechar el bullicio de los fuegos artificiales caseros que cientos de limeños lanzan en ambas fechas para tomar la residencia por asalto. Sin embargo, los tiempos de la incursión eran demasiado largos y, como se descubrió, tampoco podría usarse todo el jardín, debido a que los terroristas habían puesto minas antipersonales. Y, por si fuera poco, existía un problema diplomático.

El gobierno japonés había enviado a Lima a una misión de alto nivel, que se encontraba en un hotel de San Isidro, a cargo del embajador Terusuke Terada, para que iniciara el contacto directo con Fujimori. La misión transmitió la posición de Tokio: se buscaba una salida pacífica y, además, una interpretación del derecho

internacional precisaba que solo podría ingresarse por la fuerza en la residencia con autorización japonesa. Fujimori indicó a sus interlocutores que su prioridad era la salida pacífica pero que, en forma supletoria, se evaluaría una acción armada. Sin embargo, en su primera visita al hotel donde estaba la delegación japonesa, el mandatario fue bastante incisivo con la esposa del embajador Aoki sobre la distribución de la casa.

No era la única delegación diplomática con interés en lo que ocurría en la residencia del embajador japonés. Cuando la casa fue tomada por los subversivos, había siete funcionarios de la embajada de Estados Unidos como cautivos. El embajador Jett estaba preocupado porque, de acuerdo con sus previsiones y conocimiento de las fuerzas policiales, estas no estaban preparadas para un rescate de rehenes. Siete agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) llegaron a Perú para recabar información. Allí se enteraron de que los rehenes estadounidenses estaban en una sola habitación. Jett le ofreció al vicecanciller peruano Jorge Voto–Bernales asistencia técnica, que el diplomático aceptó.

Los siete rehenes estadounidenses fueron liberados como parte de un grupo de doscientos veinticinco rehenes que salieron de la residencia el domingo 23 de diciembre. Esa fue la mayor liberación de cautivos que se produjo en toda la crisis. Entre quienes salieron, estaba Francisco Sagasti, quien había hecho una serie de diario sobre su tiempo de cautiverio en varias hojas de papel. Como remate del documento, hizo un certificado de rehén que, como gesto, firmó el propio Cerpa Cartolini. Esta es la anticlimática historia de un evento que sería utilizado 24 años después contra el ingeniero, cuando estaba por ocupar un puesto importante para el país.

Ese día, luego de celebrar misa, el padre Wicht había decidido quedarse hasta el final del cautiverio. Cuando Cerpa lo llamó para anunciar que salía, se produjo el siguiente diálogo:

—Soy sacerdote. ¿Puedo quedarme? Mientras haya otros rehenes, quiero quedarme con quienes estén aquí.

—¡Si quiere quedarse, quédese!

Los rehenes liberados salieron en varios buses. Desde el Departamento de Estado, se ordenó al embajador Jett continuar con el equipo de emergencia. Para Tudela, el objetivo del MRTA era presionar al gobierno japonés y, para no complicarse más la vida, decidieron liberar a los rehenes estadounidenses.

El 24 de diciembre de 1996, ocurrió una de las liberaciones más controvertidas. El MRTA decidió liberar al embajador de Uruguay Tabaré Bocalandro. La decisión se produjo luego de que se conoció que dos miembros de la organización terrorista, Luis Alberto Samaniego y Sonia Gora Rivera, fueron puestos en libertad. Varios rehenes piensan que hubo una decisión política por parte del entonces presidente Julio María Sanguinetti. Lo mismo concluyó el gobierno peruano, que llamó en consulta al embajador en Montevideo, en protesta por lo ocurrido. En el documental Rehenes, dirigido por el cineasta uruguayo Federico Lemos, Sanguinetti negó cualquier tipo de presión suya sobre la decisión judicial en su país.

En las afueras de la residencia, se había empezado a tejer una cierta rutina. Los periodistas peruanos y extranjeros tenían lugares fijos para estar en los alrededores de la casa. Otros alquilaron espacios en los edificios altos más cercanos, para tener una vista preferencial de lo que ocurría en la residencia. Para Navidad, varios pasaron dicha fiesta familiar-religiosa trabajando.

Dentro de la casa, los rehenes tenían a mano dos guitarras proporcionadas por la Cruz Roja. Con ellas, comenzaron a cantar villancicos y otras canciones. Familiares y amigos de los rehenes hicieron lo propio, a pocas cuadras de la residencia.

El 25 de diciembre, a media mañana, llegó sorpresivamente Juan Luis Cipriani, arzobispo de Ayacucho, uno de los pocos miembros de la jerarquía eclesial católica cercano a Fujimori y, además, considerado como un hombre de línea dura frente al terrorismo. Como hemos consignado antes, Cipriani tuvo expresiones favorables a varias de las medidas más controvertidas en materia antisubversiva tomadas por el gobierno.

Palermo llamó a Cipriani para convocarlo a intervenir en la crisis. El prelado le dijo al ministro que debía llamar al nuncio apostólico Fortunato Baldelli. Este le dijo al negociador del gobierno que

consultaría la decisión con el Vaticano. Dos días más tarde, el nuncio respondió: «presente una terna de prelados al MRTA». Cerpa aceptó que Cipriani acudiera. El Vaticano aceptó.

Cipriani se acercó al líder terrorista para dialogar. Logró que se realizara una misa, que concelebró con Wicht. En plena homilía, el arzobispo dijo que tenía llegada a Fujimori y a los altos mandos militares y que esperaba poder dialogar con los mandos del MRTA. Luego de la misa, habló a solas con el estado mayor de los subversivos. Cerpa accedió a dejarlo entrar cuando quisiera. Gracias a las gestiones de Cipriani, los terroristas liberaron a más rehenes durante los días siguientes, incluyendo diplomáticos, empresarios y el secretario de Palacio de Gobierno, José Kamiya Teruya. Para el 28 de diciembre, recién apareció Palermo en la residencia, junto a Cipriani.

El último día del año, Cerpa permitió que periodistas nacionales y extranjeros entrasen a la residencia. El líder terrorista buscó mostrar una imagen de buen trato a los rehenes. Nombró a una comisión de rehenes para que pudieran conversar con los periodistas: Tudela, Aoki, Siura y el empresario japonés Akira Miyashita. Los cuatro mostraron cautela en sus palabras. El embajador nipón fue el más conmovedor, al expresar disculpas a los dos gobiernos involucrados y a sus pueblos por lo ocurrido. Cerpa se quejó del calificativo de «terroristas» empleado por la prensa, así como sobre la actitud del gobierno. Terminó pidiendo una negociación con la intermediación del presidente ruso Boris Yeltsin y del dictador cubano Fidel Castro.

Lo que no sabía Cerpa es que, camuflados entre los periodistas, había algunos agentes de Inteligencia que comenzaron a recabar información de la residencia.

A inicios de enero de 1997, el gobierno decidió encargar a un conjunto de militares la elaboración de un operativo para diseñar un plan de rescate. Desde el inicio de la crisis, se comenzó a construir en un campo cercano a las instalaciones del SIN una réplica en triplay de la residencia.

Asimismo, el personal de Inteligencia alquiló las casas contiguas al lugar de la crisis, a fin de montar un comando de recuperación y

transmisión de operación, a la par que se exploraban las mejores salidas para lo que se bautizó como Plan de Operaciones Nipón 96.

En una de las reuniones que tuvieron Fujimori y Montesinos con los encargados militares del plan, surgió la idea de hacer un túnel desde una de las casas vecinas, a fin de comenzar a dominar la situación. En las siguientes reuniones, se perfiló la idea de hacer un sistema de túneles. Allí el plan se comenzó a llamar informalmente Chavín de Huántar, en honor a una ciudadela prehispánica ubicada en la región Áncash que tiene, hasta el día de hoy, una serie de galerías subterráneas.

Aprobado el plan, fueron traídos grupos mineros desde Cerro de Pasco hacia Lima, con la promesa de un atractivo pago por sus servicios para un túnel en Puno. Los obreros fueron confinados en un cuartel, donde Hermoza Ríos les indicó la tarea real. Algunos de ellos se negaron porque creían que serían estafados. Pero Roberto Huamán Azcurra, el hombre de Inteligencia de confianza de Fujimori y Montesinos, les indicó que, así se rehusaran, tendrían que quedarse confinados hasta la liberación de los rehenes. Los mineros aceptaron participar en la elaboración de los túneles, una vez que se les aseguró que se les pagaría el jornal prometido.

Con los planos de la residencia en manos del gobierno, se dio inicio al trabajo. Aunque las condiciones de un verano intenso no eran las más agradables para una labor de este tipo, Huamán pudo solucionar el descontento inicial de dos formas: la amenaza de muerte y el pago regular del jornal de los obreros. La tierra extraída fue sacada por personal de la UDEX por la madrugada.

En paralelo, los militares comenzaron a entrenar. Primero en la réplica en triplay y, cuando estuvo lista, en una instalación de cemento con características muy similares a las de la residencia

Para el mes de enero, el número de rehenes se estacionó en 72 personas. A partir de allí, se comenzó a establecer una rutina dentro de la residencia. Los cautivos japoneses practicaban gimnasia todas las mañanas. Enterados de ello, desde una estación de radio, Cadena Peruana de Noticias, se colocó una sección especial de 10 minutos con música japonesa especial para que los rehenes pudieran realizar esta práctica, con radios a pilas.

Los alimentos se repartían en cajas de comida que eran registradas por la Policía, la Cruz Roja y los terroristas. En el caso de los rehenes japoneses, se les proporcionó comida nikkéi. El mismo proceso de registro pasaba por la correspondencia. Los cautivos no podían poner detalles exactos de la residencia, pero sí colocaron sus impresiones y daban un mínimo de información de lo que les pasaba a sus familiares más cercanos. Los temas políticos estaban vedados en las cartas.

Para pasar el rato, los rehenes se dedicaron a distintas actividades. Por ejemplo, clases de castellano o japonés. Otros dictaron conferencias o cursos vinculados a sus materias de estudio o de trabajo. Los juegos de cartas, el ajedrez y el go japonés se incluyeron entre las modalidades de esparcimiento. Un grupo se dedicó exclusivamente a la lectura.

Los rehenes policías y militares empezaron a buscar modalidades destinadas a obtener información y transmitirla al exterior. El más entusiasta era Giampietri, quien asumió un rol de liderazgo entre los rehenes que provenían de los institutos armados y, además, tenía coordinaciones políticas con Tudela. Uno de los oficiales cautivos, Alberto Hidalgo, pudo sacar los beepers que los terroristas guardaban en un armario y les extrajo unas pilas. Con ello, pudieron activar uno de estos aparatos, que quedó en custodia de los rehenes militares. Así tuvieron una primera conexión con el exterior.

Giampietri ya había superado una situación de crisis con los terroristas. Le buscaron hacer un «juicio popular» por la muerte de un miembro del MRTA durante los sucesos de los penales en 1986. El almirante adujo que no tuvo posiciones de mando en la operación. Cerpa se dio por satisfecho.

Otra conexión con el exterior fue planeada por Fujimori. Cipriani entró a la residencia con una guitarra. Y tuvo el siguiente diálogo con Giampietri:

—El presidente Fujimori le envía esta guitarra.

—Pero yo no toco guitarra.

Igual la guitarra quedó en poder del almirante. El instrumento tenía un micrófono en uno de los botones del instrumento musical. Giampietri le habló a la guitarra y pidió que, si lo escuchaban,

toquen «La Cucaracha» a través de los parlantes que ya se habían instalado fuera de la residencia. Horas más tarde, una versión en remix de la conocida canción mexicana sonó fuera de la casa. El almirante supo que tenía otro medio de transmisión de mensajes hacia el exterior.

Cipriani ha sostenido, durante los últimos 24 años, que no conocía que algún instrumento que llevó al interior de la residencia tuviera algún micrófono incorporado.

El 12 de enero de 1997, Palermo anunció la formación de una comisión de garantes, con miras a una negociación. Estuvo integrada por Cipriani, Minning y Anthony Vincent, embajador de Canadá. Terada asistiría como observador del gobierno japonés. Las reuniones se realizaron en la casa-oficina de una empresa, a la que se colocó una bandera blanca. Las conversaciones demoraron en iniciar durante semanas, pero un incidente aceleró, finalmente, su inicio.

El 27 de enero comenzaría la colocación de los parlantes con música marcial a todo volumen. A la par, tanques y vehículos blindados empezaron desfilar por la residencia varias veces. Un miembro del escuadrón terrorista envió una señal de victoria, que fue respondida por un gesto obsceno de un policía. El subversivo disparó su ametralladora. Si bien no hubo víctimas, el incidente generó preocupación en Tokio.

Así, el 1 de febrero, se reunieron en Toronto (Canadá) Alberto Fujimori y el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto. En la reunión, el político nipón le planteó al presidente peruano un compromiso por escrito de que se llegaría a una salida pacífica. Hashimoto temía que una salida violenta generara un alto número de víctimas, tanto por el costo humano que tendría, como por el efecto político de la misma.

Fujimori le dijo a su par japonés que no habría negociación alguna sobre la negociación de terroristas y le indicó que las acciones de la Policía buscaban generar un efecto psicológico negativo para el MRTA. Allí mostró sus reales cartas: dijo que daría prioridad a la salida pacífica pero que, en caso de peligro de vida de los rehenes o si la vía pacífica resultaba inviable, podría intervenir militarmente.

Fujimori ya le había adelantado esta posibilidad a Terada en una reunión que tuvo con Palermo en Palacio de Gobierno. El único acuerdo al que se llegó en Toronto fue el inicio del diálogo en el plazo más cercano posible.

La gira de Fujimori continuó luego de este encuentro. El mandatario viajó a Washington para tener un encuentro protocolar con Bill Clinton, donde el gobierno estadounidense le expresó su respaldo.

El 11 de febrero, se produjo la primera reunión de conversaciones. No acudió Cerpa, sino Rolly Rojas. Luego de un diálogo entrampado por posiciones maximalistas, Cipriani distendió las conversaciones, sugiriendo el énfasis en mejorar las condiciones carcelarias para los miembros del MRTA en prisión. Las reuniones proseguirían durante todo el mes.

A inicios de marzo, Fujimori viajó a República Dominicana y a Cuba. Surgió la posibilidad de que los terroristas recalaran en esta última isla, debido a una carta enviada por el propio Fidel Castro, en una fórmula donde los rehenes serían liberados en La Habana y los miembros de la agrupación subversiva no serían perseguidos judicialmente. Santiago Fujimori fue comisionado para negociar esta posible salida con el gobierno cubano. Sin embargo, los terroristas malinterpretaron la misiva. Para Tudela, «la entendieron como un respaldo y un endoso». Varios años después, Peter Cárdenas Schulte, exmiembro del MRTA diría: «Si hubieran aceptado ello, hubiera sido un éxito».

Las tensiones fueron mayores entre el estado mayor de los terroristas cuando Cipriani consiguió que Cerpa redujera la posibilidad de liberación a veinte personas. La principal preocupación para Cerpa era la liberación de su esposa, Nancy Gilvonio. El arzobispo de Ayacucho entendía esto y buscaba que Fujimori accediera a esta propuesta. Pero para los otros miembros del comando emerretista, este pedido era insuficiente.

El 6 de marzo de 1997, las conversaciones se interrumpieron. Había sido un día muy cargado. A primera hora de la mañana, Cerpa tuvo un fuerte intercambio de palabras con el embajador de Bolivia, Jorge Gumucio, pues en la proclama de la mañana había

dicho que su país era «un Estado terrorista». Gumucio se plantó y fue amenazado por Cruz Sánchez y «Salvador». Todos los rehenes dieron vivas a Perú, Bolivia y Japón y arrancaron a entonar el himno nacional. Cerpa y Tudela intervinieron para reducir las tensiones. El líder terrorista le pidió disculpas a Gumucio.

Pero lo peor vendría luego. Cerpa llamó a Tudela, Dante Córdova, Aoki, Muñante y a algunos de los militares. Les hizo pegar el oído hacia el piso del primer piso de la residencia.

—¡Échense al suelo! ¡Escuchen estos ruidos! ¡Están cavando un túnel! ¡Es una traición del gobierno!

Al día siguiente, los diarios El Comercio y La República confirmaron la existencia de los túneles. Sus unidades de investigación habían dado cuenta de la operación de extracción de la tierra. Ambos diarios, sobre todo el dirigido por Gustavo Mohme Llona, bregaban por una salida pacífica. Sin embargo, hasta el día de hoy, se producen intensos debates éticos en las redacciones y aulas universitarias sobre si era conveniente publicar esta noticia. Las tintas se cargan más hacia el diario de centro izquierda en este tipo de discusiones.

Cerpa tomó una decisión clave ese día: todos los rehenes serían subidos al segundo piso de la residencia. En los días siguientes, los terroristas comenzarían a practicar fulbito por las tardes en el primer piso. Giampietri informó sobre esta decisión a través del beeper y el micrófono en la guitarra.

Las conversaciones prosiguieron a la semana siguiente del descubrimiento del túnel. Al final, Cerpa y sus huestes evaluaron que Fujimori no se arriesgaría a una intervención militar, debido a que su hermano Pedro era uno de los rehenes.

Si bien la lista de veinte terroristas a ser liberados seguía sobre la mesa, Fujimori no la aceptó. Cipriani se dio por vencido el 17 de abril. No conseguiría la salida de Nancy Gilvonio, que él pensaba que era la salida a la crisis.

El 19 de abril, hubo una última negociación entre los cabecillas terroristas. Cerpa insistió en la oferta de salir a Cuba. Pero sus tres lugartenientes se negaron. Peor aún, el líder terrorista anunció que las visitas médicas se restringirían a una vez por semana y que las

conversaciones estaban interrumpidas. Para Tudela, «con esa decisión liberaron al gobierno del freno que Japón le había puesto». En efecto, la vía pacífica había quedado cancelada y, además, la vida de los rehenes estaba en mayor riesgo con las restricciones al apoyo médico.

Durante los meses anteriores, la Patrulla Tenaz había entrenado en distintos horarios en una réplica de la residencia. El entrenamiento incluía la técnica del «tiro instintivo selectivo», para poder eliminar al enemigo en apenas dos segundos con tres disparos. Los entrenamientos habían sido filmados por personal del SIN.

El 22 de abril de 1997 había amanecido con la rutina de siempre: las arengas terroristas, charlas de economía a cargo de Wicht, partidas de ajedrez y lecturas. Sin embargo, Cerpa aprovechó un instante para escribir una carta a Cipriani, quien no había podido acudir a la residencia en los últimos días. La misiva la culminó a las 12.53 p. m. Mientras tanto, los miembros de la Patrulla Tenaz comenzaron a entrar en los túneles.

A la 1.15 p. m., el embajador Vincent abandonó la residencia. Había dejado libros, rompecabezas y chocolates para los rehenes. Los militares seguían entrando a los túneles.

Giampietri ya había comisionado a algunos rehenes para que pudieran espiar a los terroristas. A las 2.57 p. m., comenzó el partido de fulbito. A las 3.10 p. m., Giampietri indicó a los militares que ocho de los catorce terroristas estaban en el primer piso. Comenzó a pasar la voz sigilosamente a los demás rehenes sobre el rescate.

A las 3.14 p. m., Giampietri indicó a los oficiales de Inteligencia que estaban listos. Dijo la clave: «Arriba uno, abajo trece. Mary está enferma, Mary está enferma».

Montesinos llamó a Fujimori. El presidente estaba en una diligencia judicial en la que se debía resolver un tema pendiente de su divorcio con Susana Higuchi. Contestó el teléfono:

—¿Ya se está procediendo?

—Ya se está procediendo.

—El conteo.

—Ya está todo en regla. Están abajo toditos.

—¿Los han pesado?
—Están abajo toditos, menos uno.
—¿Quién es el de arriba?
—Un lechoncito (un emerretista joven), nada más.
—¿Varón?
—Sí. Chancho y chanchitos abajo.
—Perfecto, proceda.
Fujimori dio por cerrada la audiencia con un lacónico:
—Estamos liberando a los rehenes.
Eran las 3.23 p. m. cuando sonó la primera explosión.

Las detonaciones no ultimaron a los miembros del MRTA. Cerpa colocó a sus hombres en posición de combate. Por la puerta principal, entró el equipo Delta Cinco, que tenía como misión neutralizar al líder terrorista. Cuando el referido equipo entró, logró ultimar a tres subversivos, entre ellos, a Rolly Rojas. Cerpa subió a la escalera, desde donde disparó a ciegas. Allí se encontró su cadáver.

En el segundo piso, el equipo Delta Seis se encargaba de sacar a los altos funcionarios de gobierno, al embajador Aoki y a Pedro Fujimori. Cuando buscaban entrar por la puerta de la terraza, un terrorista comenzó a disparar. El comando Juan Valer Sandoval buscó cubrir la salida de Tudela, pero las balas le impactaron en la clavícula y en el hígado. La segunda herida fue la mortal. José Williams, el jefe del operativo, le brindó algunas palabras de ánimo, pero ya agonizaba. El canciller había recibido algunos impactos menores. Wicht logró salir con este grupo de rehenes, rampando por la terraza, hasta llegar a la escalera.

En el cuarto H, el terrorista conocido como «Alex» opuso resistencia a los comandos. Entre las balas, una llegó a alcanzar al vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti Acuña, con fama de probidad y rectitud en el Poder Judicial. Con sus pocas fuerzas, Giusti se refugió en el clóset. Allí comenzó a agonizar. En medio de la refriega en la que disparaban cuatro subversivos, fue herido el teniente Raúl Jiménez. Luego recibió otros disparos en la espalda. Quedó la duda si Jiménez murió por bala emerretista o producto de

fuego amigo. Cuando lo encontraron, era cadáver. A Giusti lo lograron sacar con vida, pero murió en el hospital.

La operación terminó en apenas treinta y cinco minutos. Casi todos los rehenes fueron rescatados con vida.

Cuando el operativo aún no concluía del todo, Fujimori llegó a la residencia, en mangas de camisa y con un chaleco antibalas. Quiso entrar al lugar de los hechos, cuando aún había un cadáver sin identificar y el jardín seguía minado. Pasó por el jardín trasero de la residencia. En esa misma zona, fue visto Jesús Zamudio Aliaga, uno de los hombres de confianza de Montesinos.

En el jardín central, Fujimori arengó a los comandos y a los rehenes rescatados. Subió con los cautivos a un bus hacia el Hospital Militar. Durante el trayecto, se escucharon arengas de varios ciudadanos. Alguien le dio una bandera peruana al mandatario. Luego volvió al lugar de los hechos, desde donde dirigió un mensaje que reflejaba su mano dura frente al terrorismo, pero no evitó quebrarse al hablar de los dos militares muertos y el rehén fallecido. Fue la única ocasión en la que se le vio llorar en público.

Fujimori terminó cenando en un restaurante en San Isidro con Alberto Pandolfi —presidente del Consejo de Ministros—, Palermo y Camet. Antes, había conversado con Ryutaro Hashimoto, quien estaba aliviado de que no hubiese ninguna víctima japonesa.

Nunca hubo una investigación sobre las responsabilidades en la carencia de seguridad durante la toma de la residencia del embajador japonés. Poco antes del rescate, habían dimitido el director general de la Policía, Antonio Ketín Vidal y el ministro del Interior, Juan Briones Dávila. A fines de abril, el nuevo ministro, César Saucedo, se presentó ante el Congreso, donde culpó a 19 policías y dejó libre de toda responsabilidad al Servicio de Inteligencia Nacional. La obsecuente mayoría oficialista no criticó nada.

Durante muchos años, se especuló sobre lo que pasó luego de culminado el operativo. Hoy queda claro que, junto a la Patrulla Tenaz, existió otro grupo paralelo, al que el ministro de Defensa entre 2002 y 2003, Aurelio Loret de Mola, bautizó como Los gallinazos. Este equipo se encargó de rematar a los emerretistas

que ya estaban muertos, pero, al menos en un caso, cometió una ejecución extrajudicial.

El encargado de asuntos políticos de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, señaló en 2001 que se habrían producido tres ejecuciones extrajudiciales de miembros del MRTA. De las tres acusaciones, se llegó a corroborar —tanto por el Poder Judicial peruano como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que Eduardo Cruz Sánchez «Tito» fue ultimado de un solo disparo en la cabeza, cuando se encontraba en posición de rendido, de acuerdo con una necropsia practicada por el Equipo Peruano de Antropología Forense.

La permanencia de Cruz Sánchez con vida fue confirmada por los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, quienes lo entregaron al equipo liderado por Zamudio Aliaga. El exministro Rodolfo Muñante declaró a un medio holandés, dos días después del rescate, que un terrorista se había rendido ante los magistrados. De hecho, varios de los jueces liberados fueron testigos de la rendición. Y el cuerpo del terrorista fue encontrado fuera de la residencia.

Durante años, se buscó evitar esta conclusión, porque equivocadamente se pensaba que comprometía a los miembros de la Patrulla Tenaz. El Poder Judicial ha sido claro en no comprometer a los comandos, aunque aún no ha encontrado a los responsables directos e intelectuales de la muerte de Cruz Sánchez, dado que los cuatro acusados iniciales —Montesinos, Hermoza Ríos, Huamán y Zamudio— han sido absueltos por falta de pruebas en su contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos distinguió entre la operación militar de rescate y la ejecución extrajudicial de «Tito». Hoy existe consenso en reconocer el heroísmo de los comandos y en que existió un comando paralelo que cometió un delito cuyos responsables no han sido encontrados hasta la fecha.

---

138 Este capítulo toma como fuentes principales a Jara (2007), Hidalgo (2017) y Wicht (en colaboración con Rey de Castro, 1998). También se consultaron Bowen (2015: 9-17, 220-240) (2000: 275-306), Bowen y Holligan (2003: 250-259), Murakami (2018: 459-483) y Rospigliosi (2000b: 264-277, 283-287). Asimismo, tomamos algunas declaraciones del documental *Rehenes,* dirigido por Federico Lemos, que puede verse

en Netflix. Finalmente, consideramos el *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (tomo VII: 752-768) y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Cruz Sánchez y otros (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf).

ANNUS HORRIBILIS

(Enero – Diciembre, 1997)

Mientras la atención del país se centraba en la crisis de los rehenes, en el Tribunal Constitucional se analizaba el primer gran caso polémico. El Colegio de Abogados de Lima planteó una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Interpretación Auténtica. Dentro del TC, se encargó al magistrado Guillermo Rey Terry que elaborara la ponencia sobre el caso, es decir, el texto base sobre el que discutirían los demás jueces constitucionales.

La ponencia de Rey Terry terminó siendo bastante audaz. A su criterio, en realidad la Ley de Interpretación Auténtica no era una norma de carácter general, sino un dispositivo legal que tenía un único destinatario: Alberto Fujimori. Por tanto, el caso debía resolverse mediante control difuso, es decir, inaplicar la norma para la única persona beneficiaria de la controvertida Ley.

Rey Terry presentó este proyecto porque sabía que no contaban con los seis votos para declarar la inconstitucionalidad general de la norma. Quienes estaban a favor eran él, Delia Revoredo Marsano, Luis Díaz Valverde, Manuel Aguirre Roca y Ricardo Nugent. En contra, los dos magistrados del Tribunal cercanos al gobierno: Francisco Acosta Sánchez y José García Marcelo. Por ello, recogió el control difuso contemplado en la Constitución, a fin de que la norma pudiera ser inaplicada, cuestión que requería mayoría simple.

En los últimos días de diciembre de 1996, se sucedieron varios hechos. Los cinco magistrados en contra de la reelección votaron a favor de la ponencia de Rey Terry. Acosta Sánchez y García Marcelo prepararían sus fundamentos de voto en contra. Pero la ponencia se filtró a la prensa e, inmediatamente, el oficialismo parlamentario presionó para variar el sentido del fallo. Posteriormente, los dos magistrados afines al gobierno dijeron que no había existido quorum para votar la resolución, lo que era falso. Emplazado por sus colegas, García Marcelo debió reconocer que había sustraído la ponencia de Rey Terry.

Pero luego del Año Nuevo de 1997, Díaz Valverde y Nugent pidieron una nueva votación. Acosta Sánchez y García Marcelo se

sumaron al pedido. Los cuatro magistrados adujeron que, en tanto no se había publicado el fallo, se podía cambiar aún la votación. Era claro que los dos jueces que habían solicitado una nueva votación habían sido presionados.

En la segunda votación, Díaz Valverde y Nugent señalaron que se abstendrían, porque se habían pronunciado sobre el caso en sus respectivas clases de Derecho. Los dos magistrados ligados al gobierno también se abstuvieron. Revoredo, Aguirre Roca y Rey Terry mantuvieron sus votos a favor. Con ello, se tenía una sentencia de inaplicación de la Ley de Interpretación Auténtica.

El 14 de enero de 1997, cuarenta parlamentarios oficialistas remitieron una carta al Tribunal Constitucional, para que cumpliera con decir si la norma era o no inconstitucional. El TC la rechazó, por considerarla un acto de presión.

Al día siguiente, la magistrada Delia Revoredo denunció ante el Congreso de la República que habían sustraído documentos de su despacho. También indicó que se habían registrado indebidamente las oficinas de los jueces Díaz Valverde, Aguirre Roca y Rey Terry.

El 16 de enero, se votó por tercera vez la sentencia. Con tres votos a favor y cuatro abstenciones, se dio por aprobada. Pero al día siguiente, García Marcelo y Acosta Sánchez consiguieron que el Diario Oficial publicara como «sentencia» sus votos singulares, declarando que la Ley de Interpretación Auténtica era constitucional. Nugent indicó en un comunicado que este documento carecía de validez legal y eficacia.

Para el 20 de enero, el Colegio de Abogados de Lima pidió una aclaración de la sentencia. Aguirre Roca, Revoredo Marsano y Rey Terry fueron explícitos: «no hay nada que aclarar».

La denuncia de Revoredo tuvo eco en el Congreso de la República el 27 de febrero, cuando se formó una comisión investigadora encabezada por Martha Hildebrandt. Lo que pocos sabrían es que dicho grupo de trabajo sería el instrumento para un legicidio[139].

Mientras que se producía la controversia por la reelección en el Tribunal Constitucional, otra funcionaria buscaba un nuevo periodo en su puesto.

Blanca Nélida Colán postuló nuevamente para ser fiscal de la Nación, sobre la base de las normas que buscaron prolongar sus mandatos. Era su re-reelección, gracias a la Junta de Fiscales Supremos. Logró cumplir su cometido, por pocos días. Esta vez, las protestas de la oposición funcionaron parcialmente.

Colán decidió dimitir el 16 de enero. Y, cuatro días más tarde, Miguel Aljovín Swayne era elegido nuevo fiscal de la Nación.

Pero, en esos tiempos, la trampa era hecha ley. Y días antes, en el Congreso de la República, la mayoría oficialista le ampliaba las facultades al presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Así, este último dirigiría el proceso de reforma, tendría las funciones de gobierno y gestión, asumiría el pliego presupuestal y, además, se le otorgaría la potestad de designaciones provisionales. En la práctica, el cargo de fiscal de la Nación había sido vaciado de contenido.

Si bien Colán dejó de ser fiscal de la Nación, continuaba siendo la presidenta de la Comisión Ejecutiva. Con lo que, en la práctica, mantenía todo el poder en el Ministerio Público. Las protestas de Aljovín por este atropello fueron sistemáticas durante una temporada[140].

En enero de 1997, el Servicio de Inteligencia Nacional elaboró el plan Tigre 96, cuyo objetivo central era detectar quién había filtrado las operaciones Bermuda, Narval y El Pino, supuestamente dirigidos contra César Hildebrandt, Global Televisión y el abogado Heriberto Benítez, respectivamente. Si bien los primeros informes apuntaban a dos agentes de apellido Ibarra y Palomino, rápidamente las miradas se concentraron en una mujer.

Leonor La Rosa trabajó durante buena parte de su vida en entidades castrenses: INDUMIL —la fábrica del Ejército—, la Segunda Región Militar y, a partir de finales de los ochenta, luego de aprobar los cursos de rigor, pasó al Servicio de Inteligencia del Ejército. A inicios de los noventa, trabajó junto con agentes de la Policía en la DINCOTE. De vuelta en el SIE, pasó por los departamentos de electrónica y logística. En esta última unidad, comenzó a acceder a informes secretos.

La Rosa fue la fuente que suministró originalmente la información sobre las operaciones arriba relatadas al periodista José Arrieta, a quien conocía desde inicios de la década de los noventa y que, para ese entonces, trabajaba en Frecuencia Latina. Sin embargo, ante las dudas de su jefe en el canal para dar a conocer estos informes de Inteligencia, el periodista decidió contactar al esposo de La Rosa, el policía Jorge Cantera, con Edmundo Cruz, periodista de La República con quien Arrieta había trabajado en la revista Sí.

Durante enero de 1997, La Rosa fue interrogada por varios de sus compañeros de armas en el SIE con suma dureza. Primero la quisieron vincular sentimentalmente con un coronel para quien iba a hacer un trabajo de reglaje. Luego le preguntaron por Mariella Barreto, una compañera del departamento de logística. Y, finalmente, sobre las filtraciones de información, que ella negó. Todo acabó en golpes y lesiones. La Rosa fue conducida al Hospital Militar. Luego de su recuperación, le dieron unos días de descanso médico.

El 11 de febrero de 1997, La Rosa volvió al SIE y allí fue detenida. Lo que ocurrió en los días siguientes tiene dos versiones contradictorias.

Según la agente, La Rosa fue nuevamente golpeada el 14 de febrero de 1997. Allí la interrogaron sobre el patrimonio de las esposas de oficiales del Ejército. La quisieron hacer firmar el documento donde acusaba a un alto oficial por violación, a lo que se negó. Días más tarde, le aplicaron quemaduras con un cautín, le volvieron a preguntar por las filtraciones y por Barreto. De acuerdo con el testimonio de La Rosa, sus torturadores también la violaron, hasta que sufrió una hemorragia vaginal. La llevaron al Hospital Militar. Quedó con parálisis en las piernas y tiene, hasta el día de hoy, una discapacidad motora severa.

En la versión opuesta, Miguel Mendoza, el médico civil que atendió a La Rosa sostuvo que, si bien la paciente llegó al Hospital Militar por una hemorragia vaginal, la parálisis permanente en las piernas se debió al hecho de que, en la sala de operaciones, hizo un paro cardiorrespiratorio que tuvo secuelas neurológicas. No tuvo golpes en la columna vertebral. Asimismo, la hemorragia no se

habría producido por una violación, sino por un cuadro de estrés agudo. Se encontraron, en efecto, marcas de quemaduras en el cuerpo de La Rosa, pero, de acuerdo con las versiones periodísticas de Ricardo Uceda y Marco Sifuentes, no se conoce claramente cuándo se produjeron.

Los acusados militares de tortura aducen que jamás golpearon a La Rosa y si bien hubo una condena inicial por ocho años en el fuero castrense, fueron absueltos en segunda instancia. Uno de ellos indicó que tenía una lesión en la pierna al momento que habrían ocurrido los hechos, por lo que no habría podido participar en los supuestos eventos de tortura. Lo que resulta claro es que, directa o indirectamente, producto de lo ocurrido, la agente quedó con una grave discapacidad.

En la primera semana de abril, una agente de Inteligencia conocida con el apelativo de «Besitos» llamó a Frecuencia Latina para denunciar que La Rosa había sido torturada y se encontraba en el Hospital Militar. Arrieta contó al comité editorial de Frecuencia Latina la noticia. Baruch Ivcher, presidente del canal de televisión, pidió que se tuviera el testimonio de la persona supuestamente torturada. La periodista Pamela Vértiz se coló en el establecimiento médico vestida de colegiala. La Rosa le contó su testimonio, sin mencionar la violación en aquel momento.

Cuando la cinta llegó al canal, se decidió propalarla en el programa Contrapunto, en su emisión del domingo 6 de abril de 1997. Ese día, el país se estremeció con el reportaje[141].

Mientras el gobierno buscaba neutralizar a Frecuencia Latina, en el Congreso jugaban su propio partido contra tres magistrados del Tribunal Constitucional.

La comisión investigadora de la denuncia presentada por Delia Revoredo debía revisar si es que se había producido la sustracción de documentos. Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca fueron citados a este grupo de trabajo para declarar sobre este evento. Incluso se había señalado claramente que la comisión presidida por Martha Hildebrandt no podía referirse a la labor jurisdiccional de la entidad, en salvaguarda de su independencia.

Por su parte, el presidente del Tribunal, Ricardo Nugent, dio cuenta de que la investigación interna no identificó a un autor de la sustracción, así como la amonestación al magistrado José García Marcelo por el retiro de la ponencia de Rey Terry —que él mismo reconoció—, así como las amenazas que comenzaban a sufrir la única magistrada mujer de la entidad y su esposo, el empresario Jaime Mur.

Todo cambió cuando García Marcelo y Francisco Acosta Sánchez, los dos puntales del gobierno en la institución, acudieron a la comisión Hildebrandt. Y allí imputaron supuestas irregularidades a Revoredo, Rey Terry y Aguirre Roca, por la resolución de control difuso y su aclaración. El grupo de trabajo cambió el foco de sus investigaciones, sin notificar a los tres magistrados sobre ello, para que pudieran ejercer su defensa. Nunca los volvieron a llamar para brindar descargo alguno.

El 5 de mayo de 1997, la comisión presidida por Martha Hildebrandt presentó una acusación constitucional contra Revoredo, Rey Terry y Aguirre Roca por «presentar una ponencia como si fuera una sentencia del Tribunal Constitucional». Sobre la acusación primigenia de Revoredo no dijo nada.

Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la República nombró una Subcomisión Evaluadora de la acusación constitucional y les dio a los magistrados dos días para responder. Ellos señalaron que el plazo era insuficiente y que, además, no se habían podido defender de la acusación.

Días más tarde, el 9 de mayo de 1997, los tres magistrados acusados enviaron al Congreso el acta de sesión del Tribunal Constitucional que los autorizaba a emitir la resolución aclaratoria pedida por el Colegio de Abogados de Lima. Aun así, la Subcomisión decidió acusarlos, primero ante la Comisión Permanente y luego ante el pleno. Se venía una afrenta constitucional.

Durante el fin de semana en el que se emitió el reportaje sobre Leonor La Rosa, la agente «Besitos» le indicó a Arrieta que habían asesinado a su compañera en el Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariella Barreto. La joven había sido vista por última vez el 22 de

marzo de 1997 en una agencia de empleos en Villa María del Triunfo —distrito popular del sur de Lima— a la que había acudido para ofrecerse como agente de seguridad, sin éxito. Al salir de allí, un vehículo con dos personas se la llevó. Un día después, apareció descuartizada en Punchauca, una localidad al norte de Lima.

Barreto había ingresado a la Escuela de Inteligencia en 1989. Al año siguiente, pasó a trabajar en el SIE. Allí conoció a Santiago Martín Rivas, quien sería su jefe en el departamento de operaciones especiales. Martín la llevaría al destacamento Colina, donde iniciarían una relación sentimental tóxica: él la golpeaba y la engañaba con otras agentes. Tuvieron una hija en 1993. Barreto no intervino en las operaciones del escuadrón de la muerte, pues el agente Jesús Sosa, uno de los jefes de equipo, llegó a un acuerdo con el jefe operativo del tristemente célebre destacamento para que las agentes no participen en los operativos. Sin embargo, contaba con información suficiente, dado su vínculo, para ser una de las fuentes de Arrieta sobre el caso La Cantuta.

Se desconocen hasta ahora los motivos por los que Barreto fue asesinada. Algunos adjudican a miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército el hecho, debido al plan Tigre 96 que buscaba deshacerse de los agentes que filtraban información delicada a la prensa. Otros achacan el crimen a Martín Rivas, debido a que Barreto ya tenía una nueva pareja y otra hija. El jefe operativo de Colina le indicó al periodista Umberto Jara que estaba fuera de Lima en ese momento y, más bien, acusa a Vladimiro Montesinos como responsable del hecho. Ambos son dos de los procesados por el caso, que sigue en juicio oral.

El caso de Barreto también apareció como reportaje en Frecuencia Latina. Por su parte, Arrieta decidió tomar mayores medidas de seguridad para él y su familia. El canal para el que trabajaba se volvió aún más peligroso para el Servicio de Inteligencia[142].

En la quincena de abril, Contrapunto propaló otra denuncia bomba. Por primera vez, se daban a conocer los ingresos de Vladimiro Montesinos, en base a las declaraciones juradas que presentó a la SUNAT. Sobrepasaban el millón de soles para 1995,

supuestamente por sus ingresos de abogado. El informe dejaba una gran interrogante para la opinión pública. ¿A razón de qué motivo el asesor presidencial podía facturar como abogado si es que, en principio, tenía un puesto a tiempo completo y dedicación exclusiva? Los ingresos de Montesinos, además, habían sido señalados como secretos por el presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi, en una presentación que tuvo ante el Congreso de la República.

¿Cómo llegó la primicia? Por una mera casualidad. Un empleado de la SUNAT, por diversión, había buscado a Montesinos en los archivos informáticos y halló sus declaraciones juradas. El informe, emitido por Rossana Cueva, desató la tormenta en el Servicio de Inteligencia Nacional. A partir de ese momento, en medios allegados al gobierno, se inició una campaña que buscaba vincular a Ivcher con temas de venta de armas y generar dudas sobre su proceso de nacionalización como peruano.

La revelación sobre los ingresos de Vladimiro Montesinos sacudió el último freno para su injerencia en una institución que había permanecido blindada frente a cualquier intervención: la SUNAT. Las reformas implantadas por Manuel Estela no fueron sustancialmente modificadas por sus dos sucesores: Sandro Fuentes y Adrián Revilla. Ambos contaron con el respaldo de Santiago Fujimori, quien terminó siendo un garante de la continuidad de varias reformas administrativas, entre ellas, la tributaria.

Cuando vino la revelación de Frecuencia Latina, inmediatamente se movieron los hilos del poder. Camet llamó al entonces superintendente de la SUNAT, Jorge Baca Campodónico, para que diera una conferencia de prensa sobre los ingresos del asesor presidencial. Montesinos arregló una entrevista con un medio cercano para que hiciera lo mismo.

Para mayo de 1997, Baca Campodónico creó un sistema de registro de altas autoridades gubernamentales y personas públicas, que no sería accesible a los funcionarios de la entidad. Este sistema se conoció como RUC Sensible y comprendió a 450 personas: personal del Poder Ejecutivo, congresistas de la República y dueños de medios de comunicación fueron los primeros beneficiarios. Pero luego fueron incorporados a este sistema personas que, pocos años

más tarde, aparecerían vinculadas a las distintas redes de corrupción que crecieron durante el régimen.

Esta fue la más grotesca intervención en la SUNAT, pero no fue la única. Montesinos le informó directamente a Baca que pondría a sus propios hombres en la policía fiscal, así como al departamento de contabilidad de la institución. Al mismo tiempo, varias personas opuestas al gobierno comenzaron a denunciar que se les iniciaba —o se les prolongaba— investigaciones tributarias basadas, sobre todo, en su posición política[143].

Sorpresivamente, el domingo 11 de mayo, en pleno Día de la Madre, Alberto Fujimori se hizo una operación de urgencia por la mañana en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

La noticia fue realmente inesperada, dado que el día anterior el mandatario había estado con el primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto, quien vino al país a agradecer lo realizado por el gobierno peruano durante la crisis de la embajada y había visitado a los rehenes de la residencia del embajador de Japón que aún permanecían hospitalizados.

Para el martes 13 de mayo, se tendrían mayores noticias. La intervención fue por una leucoplasia en la lengua, un tumor que suele localizarse en la zona bucal. A Fujimori se le hicieron dos biopsias, arrojando que la lesión extirpada era benigna.

Esta fue la única ocasión en la que se ventilaron temas vinculados a la salud presidencial durante el decenio fujimorista. Antes y después, el mandatario brindó señales de encontrarse en buena forma física.

No se volvería a tocar el tema de las lesiones de Fujimori hasta su retorno al Perú, para cumplir con las órdenes judiciales en su contra.

La sesión del pleno del Congreso de la República del 28 de mayo de 1997 quedará en los anales de la historia. Y no precisamente por constituir una pieza fundamental de respeto al Estado de Derecho.

—Como dijera en ocasión famosa don Francisco de Paula González Vigil en el seno de la Cámara de Diputados del Perú, también quiero repetir las célebres palabras: «Yo debo acusar; yo acuso».

Así comenzaba Enrique Chirinos Soto, congresista electo por Renovación, su alegato en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Revoredo Marsano, Aguirre Roca y Rey Terry. Cuando comenzó a pronunciar sus palabras, buena parte de la oposición, en protesta, abandonó el hemiciclo.

Chirinos Soto era un conservador que había pasado por el APRA, el Partido Popular Cristiano y el movimiento Libertad antes de recalar en Renovación. Desde los tiempos del Congreso Constituyente Democrático, era ya cercano al fujimorismo. Pero esta vez había dado un paso más allá en sus simpatías, a la par que sepultaba su prestigio ganado en su prolongada carrera como abogado y político. Chirinos fue capaz de proferir argumentos como este:

—Entonces, naturalmente, cuando se forma la comisión investigadora, la Comisión Hildebrandt, empezamos a enterarnos de irregularidades distintas de las fantásticas que había denunciado la doctora Revoredo, dicho sea, con todo respeto. La doctora Revoredo encuentra heladeros en su jardín, y esos heladeros son agentes de Seguridad del Estado. De manera que había que echarlos a todos los de Seguridad del Estado, del Servicio de Inteligencia, porque no pueden tener persiguiendo a una señora con unos heladeros que tienen libreta de conscripción en la Marina. Nadie más en el Perú ha sido perseguido por heladeros.

El constitucionalista simplemente repitió, con un mejor lenguaje que sus pares fujimoristas, las acusaciones que la comisión Hildebrandt ya había perpetrado.

La respuesta vino por parte de un abogado cuzqueño, miembro de Acción Popular, exministro de Educación y crítico de la alianza de su partido con Mario Vargas Llosa. Valentín Paniagua hacía su reingreso a la política grande con palabras como esta:

—El artículo 99 de la Constitución, para cualquier lector desapasionado, establece no solamente cuál es el órgano a quien compete acusar, sino que señala de manera clarísima los funcionarios pasibles de acusación; pero, lo que es más importante, también las causas o motivos de acusación. Yo pregunto: ¿dónde está esa responsabilidad política por la cual los señores magistrados

del Tribunal Constitucional serían destituidos e inhabilitados por diez años? La Constitución habla solo de dos causas o motivos de acusación: infracción constitucional o delito cometido en el ejercicio de función. ¿Dónde están estas responsabilidades políticas que ahora, como una suerte de invención, se quiere utilizar como instrumentos para fulminar a quienes se les pretende atribuir responsabilidades jurídicas que no se han podido acreditar o probar?

Paniagua logró demostrar en su alocución las distintas vulneraciones al debido proceso que se habían presentado a lo largo de la acusación contra sus patrocinados. Los abogados Raúl Ferrero Costa y Juan Monroy Gálvez completaron las argumentaciones jurídicas. Posteriormente, los tres magistrados usaron su derecho a la defensa.

Nada de ello sirvió. Los números a favor del oficialismo se impusieron. Nuevamente, Carlos Ferrero no votó con su bancada y se abstuvo. En la práctica, el Tribunal Constitucional solo podría resolver acciones de garantía sobre derechos constitucionales, pero ya no demandas sobre inconstitucionalidad, una de sus principales razones de ser.

En una de sus intervenciones finales, cuando estaba por votarse la acusación, Carlos Torres y Torres Lara mandó la siguiente provocación a la oposición:

—Ustedes son la oposición y los respetamos así, pero no pretendan, pues, manejar el país. ¿Quieren manejarlo? Ganen las elecciones. No vayan a la Plaza Francia; vayan al Paseo de la República. Junten miles de miles de personas. Si tanto hablan acá de que somos un grupo pequeño, vayan a hablar al pueblo. Los políticos arrastran masas, no arrastran palabras. Vayan a sacar a esas masas, y entonces enfréntennos ustedes con el público sobre el razonamiento, sobre la lógica, sobre la manera de manejar el país.

Torres y Torres Lara no sabía en aquel momento que sus palabras sonarían a profecía.

Para mediados de 1997, Keiko Fujimori concluyó los estudios de administración de empresas en Boston University. A la ceremonia de

graduación fue invitado su padre y, como deferencia especial de las autoridades de la casa de estudios, Fujimori le entregó el diploma a su hija. Ninguno de los otros graduados tendría esa misma prerrogativa.

Luego de esa ceremonia, Keiko retornó al Perú para asumir plenamente sus funciones como primera dama. Decidió no ocupar el departamento que su padre tenía en el Servicio de Inteligencia Nacional ni la estancia donde Fujimori y Kenji, por momentos, ocupaban en el Cuartel General del Ejército. Decidió mudarse a la zona residencial de Palacio de Gobierno y allí desarrollar su trabajo humanitario. También allí emprendería una controvertida remodelación de ambientes de la casa de gobierno, que sería criticada años más tarde por el uso de tonos pastel en las paredes.

El equipo de Keiko era integrado inicialmente por dos personas: Guido Lucioni, un abogado arequipeño que había estudiado con ella en Boston, quien se encargaba de elaborarle los discursos, y Liliana Cino, miembro del servicio diplomático. Para las cuestiones de la Fundación Cardioinfantil, se apoyaba en Adriana Tarazona y, sobre todo, en Ana Vega.

Fue en aquel tiempo cuando la hija mayor de Fujimori expresó, por primera vez, sus dudas sobre Vladimiro Montesinos. Le llamó la atención el reportaje de Frecuencia Latina sobre sus ingresos. Cuando le pidió explicaciones a su padre, la respuesta de Fujimori fue lacónica:

—Ese dinero fue obtenido antes del gobierno. Ya he conversado con él del tema.

La joven primera dama comenzaría a hacer sus propias averiguaciones. En público, no decía nada. Cuestión que le generaría malos ratos, como un abucheo en Acho, la plaza de toros, cuando, en la temporada regular, un torero peruano quisiera ofrecerle una de las piezas del ganado que estaba lidiando[144].

Mientras el país estaba convulsionado por los atropellos al orden constitucional, Alberto Andrade libraba sus propias batallas. Su foco de atención estaba en el Centro Histórico de Lima, al que buscaba revalorizar desde una perspectiva que mezclaba la búsqueda de inversión privada y una tradición criolla que él mismo encarnaba,

como exvecino de Barrios Altos, una de las zonas más tradicionales de la ciudad.

Para Andrade era simbólico el retiro de los comerciantes ambulantes del Mercado Central, una de las zonas del centro de la ciudad que había quedado colapsada por la alta cantidad de comerciantes a su alrededor. Sin embargo, no tenía el apoyo de la Policía Nacional del Perú para poder proceder con el desalojo.

En la madrugada del 14 de mayo de 1997, Andrade en persona se dirigió con la policía municipal y el serenazgo para el traslado de los quioscos del Mercado Central. La Policía debía ejecutar el operativo de desalojo. Pero aquí ocurrió lo insólito. Los oficiales y suboficiales de la PNP comenzaron a defender a los ambulantes y atacar a los policías municipales. Al ver la escena, Andrade, walkie talkie en mano, dijo:

—Vamos, adelante, me siguen. ¡Adelante, carajo!

Andrade comenzó a correr en la esquina de Miró Quesada con Abancay. Mientras, un oficial de la Policía buscaba evitar que continuara su carrera, agarrándolo del brazo. Continuaron golpeando a los policías municipales. El alcalde declaró a la prensa:

—Este ha sido un acto político que perjudica a la capital. Como ustedes han visto, la Policía está apoyando al comercio informal, aventando gases lacrimógenos a la policía municipal, apaleándolos, deteniéndolos, echándoles agua. Hemos coordinado todos los días. Tres horas antes dicen que ya no existen las condiciones.

El ministro del Interior, Fernando Dianderas, buscó eludir la responsabilidad de la actuación del cuerpo a su cargo.

Días más tarde, Andrade lograría el desalojo de los ambulantes. También logró hacer lo mismo en la Plaza San Martín, que se reinauguró con la presencia de los exalcaldes Alfonso Barrantes y Luis Bedoya Reyes.

Para el mes de julio, Andrade lograría la salida pacífica de los comerciantes del Campo Ferial Polvos Azules, ubicado a dos cuadras de la Plaza de Armas de la capital, en el que se había producido un incendio en 1993. Paulatinamente, el alcalde lograría reubicar a los ambulantes en distintas zonas de la ciudad, donde ellos mismos comenzaron a formalizarse[145].

En los días siguientes a la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, grupos de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comenzaron a dialogar para realizar una movilización conjunta en contra de la decisión del Congreso de la República.

Si bien ambas casas de estudio tienen sus sedes centrales a pocas cuadras de distancia, había varias diferencias —aún subsistentes— que separaban a sus estudiantes. El alumnado de la PUCP se encontraba en clases altas y medias, mientras que los estudiantes de la UNMSM tenían una fuerte extracción popular. En la Católica, el movimiento estudiantil había estado dormido por varios años, mientras que en San Marcos, a pesar de la intervención militar y gubernamental, se había mantenido incólume.

Estas mismas distinciones se encontraban al momento de definir el tono de la movilización. Los estudiantes de la PUCP enfatizaban en el carácter ético de la protesta, vinculado al restablecimiento del orden democrático y con un énfasis mayor en deslindar con métodos violentos. Desde San Marcos, se compartía la agenda, se enunciaba que había que hacer la diferenciación entre los estudiantes y terroristas, a la que el gobierno ya los tenía acostumbrados, pero varios de sus alumnos pertenecían a partidos y organizaciones que desde la PUCP se rechazaba. Asimismo, los sanmarquinos reivindicaban una agenda más amplia contra el gobierno, que abarcaba el cese de la intervención en las universidades públicas, así como reclamos contra «el modelo económico neoliberal». Estas divisiones fueron clave para que el movimiento se encendiera y apagara por coyunturas, en lugar de forjar un grupo más compacto y constante para generar movilizaciones.

A pesar de estas diferencias, ambos núcleos de estudiantes participaron masivamente en las movilizaciones del 4 de junio de 1997, que se dirigió hacia un hotel en San Isidro, donde se desarrollaba la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También intervinieron alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad de Lima.

—¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La dictadura va a caer!

Los chicos eran claros en su trato con los políticos: vayan a la última parte de la movilización. Remarcaron que la marcha era suya y que tenían total independencia de las agrupaciones políticas que estaban en el Congreso de la República.

—Somos estudiantes, no somos terroristas.

Pese a las contradicciones al interior de la movida juvenil, así como al hecho de que no tenía una organicidad partidaria y poseía un fuerte componente ético y valorativo, fue la primera gran muestra de que el gobierno ya no tenía las calles consigo. Los estudiantes que hoy han pasado —o están en tránsito a— los cuarenta años iniciaron el camino de la movilización en la calle contra el régimen. Al día siguiente, continuaron las protestas frente al Congreso de la República.

El rechazo frente a la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional fue casi unánime. Todos los diarios lo condenaron, incluyendo Expreso. Las protestas del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, y del cardenal Augusto Vargas Alzamora fueron bastante claras[146].

Las represalias contra Frecuencia Latina se hicieron frecuentes desde abril de 1997, cuando fueron difundidos los reportajes sobre La Rosa, Barreto y los ingresos de Vladimiro Montesinos[147]. Comenzaron a desfilar por las instalaciones del canal miembros de la Policía Fiscal, dispuestos a buscar alguna irregularidad en los impuestos. Personajes ligados al gobierno visitaron a Ivcher para presionarlo a fin de que suavizara la línea periodística crítica. Sobrevuelos constantes de helicópteros sobre su fábrica de colchones formaban parte de las presiones. Y la agente de Inteligencia «Besitos» había sido clara en decirle al empresario que, desde la estructura del SIN, se buscaba quitarle su nacionalidad y su canal, e incluso, hasta la vida.

Ivcher decidió salir del país el 13 de mayo de 1997, con destino a Florida (Estados Unidos). Diez días más tarde, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que lo denunciaba por emprender una «campaña difamatoria en contra de las Fuerzas Armadas», sin que pudieran desmentir ninguna de

las acusaciones esgrimidas en Contrapunto. Ese mismo día, en el Diario Oficial El Peruano, se modificó el reglamento de la Ley de Nacionalidad, para flexibilizar la posibilidad de retirar la ciudadanía peruana a un extranjero que la haya adquirido.

El 26 de mayo de 1997, comenzó la campaña difamatoria. La revista Sí, que había cambiado de dueños, comenzaba a tejer la hipótesis de un supuesto vínculo entre Ivcher y Francisco Moncayo, el comandante general del Ejército de Ecuador, personaje al que se le veía con sospecha desde Lima. A la semana siguiente, la misma publicación buscó vincular al empresario con supuestas compras de armas por parte del vecino del norte. Pero Contrapunto logró entrevistar a Moncayo, quien demostró la falsedad de los documentos presentados por el semanario peruano sobre adquisiciones militares.

Otra revista de línea oficialista, Gente, atacó por el otro flanco: la nacionalidad. La publicación señaló que no existía el expediente de naturalización de Ivcher. La campaña fue reafirmada desde los diarios sensacionalistas El Mañanero, El Chino y El Tío, que muy ocasionalmente se ocupaban de temas políticos. Desde la Policía y el Consejo Supremo de Justicia Militar, se advertía que el empresario podía perder su nacionalidad, dado que el expediente perdido contenía su renuncia a la ciudadanía israelí.

El 27 de mayo de 1997, los dos socios de Ivcher en el canal, los empresarios peruanos de origen judío Samuel y Mendel Winter, acudieron al Pentagonito para hablar con la cúpula militar. Allí manifestaron que no tuvieron parte en la elaboración de los informes propalados por el equipo de prensa. Ambos enviaron una carta en ese tenor que fue replicada por los estamentos militares como parte de la campaña contra Ivcher. Era claro que se trataba de una acción coordinada entre los Winter y las Fuerzas Armadas.

El domingo 13 de junio de 1997, todas las líneas confluyeron. Contrapunto publicó un completo reportaje que revelaba las redes de interceptación telefónica manejadas por el Servicio de Inteligencia. Entre los intervenidos estaban periodistas de todos los medios de comunicación, también personajes cercanos al gobierno como el ministro de Salud Marino Costa Bauer y el congresista

oficialista Jorge Muñiz. Asimismo, congresistas opositores, el alcalde del Callao Alexander Kouri —también cercano al gobierno—, asesores parlamentarios y funcionarios del sistema electoral tenían sus conversaciones interceptadas.

Al mediodía de aquel domingo, en una edición extraordinaria de El Peruano, el gobierno publicó la resolución que le retiraba a Ivcher su nacionalidad peruana. Con ello, buscaba que los accionistas minoritarios, los hermanos Winter, asumieran el control del canal, debido a que los extranjeros no podían manejar televisoras de acuerdo con la legislación de aquel entonces.

Al día siguiente, se produjo una manifestación en la puerta del canal, liderada por Viaña, García y Quijandría. Aparecieron congresistas opositores y otros periodistas. También hubo pronunciamientos del Defensor del Pueblo y del embajador de Estados Unidos, Dennis Jett, quien comenzaba a convertirse en un crítico fuerte del gobierno en temas ligados a democracia y derechos humanos.

Fujimori solo atinó a declarar: «Un dictador no permitiría jamás manifestaciones. Esto lo saben todos los políticos que participaron en la manifestación». Pero no dejó de mencionar que, a su criterio, Frecuencia Latina había emprendido una campaña contra el gobierno.

El caso Ivcher trajo una baja en el gabinete. El 16 de julio de 1997, el canciller Francisco Tudela dimitió debido a que consideraba inadmisible el retiro de la nacionalidad al empresario peruano–israelí. Su sucesor fue Eduardo Ferrero Costa, cuyo hermano era el congresista oficialista más disidente. Ferrero señaló en sus memorias que, antes de asumir el puesto, le indicó a Fujimori que rechazaba el despojo de la nacionalidad contra el dueño de Frecuencia Latina.

Para complicar más las cosas, el 22 de julio de 1997, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, fue a explicar al Congreso de la República, junto a otros miembros del gabinete, la posición del gobierno frente al caso Ivcher. En medio del debate, Pandolfi propuso invitar a los altos mandos militares, para supuestamente dar a conocer los efectos que tenía el caso en la

«seguridad nacional». La mayoría oficialista aprobó la moción. Por la noche de aquel día, aparecieron más de treinta altos oficiales de las Fuerzas Armadas en la puerta del Congreso.

La oposición decidió no entrar a la sesión secreta que se iba a iniciar. Pero esta nunca se produjo. El congresista de izquierda Javier Diez Canseco llamó al programa de César Hildebrandt, En Persona, para alertar sobre la presencia de la treintena de altos mandos castrenses en el Congreso. Esto hizo que el oficialismo decidiera levantar la sesión. A Diez Canseco lo suspendieron varios meses sin goce de haber por violar supuestamente la reserva de la reunión, a pesar de que la sesión nunca se llegó a instalar.

En su mensaje de Fiestas Patrias, Fujimori buscó despejar las dudas que se cernían dentro y fuera del país sobre el poder de los militares:

—La predominancia del poder civil sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la subordinación de los institutos armados al presidente de la República es un hecho indudable. Pero hay que tener en cuenta que esa apariencia de ensamble, que puede servir de base a especulaciones, no es sino resultado de una jefatura civil, la del presidente, firmemente enraizada en la pacificación y en la defensa de la soberanía nacional.

Si estas frases parecían fuera de la realidad, las siguientes buscaban apaciguar las críticas al gobierno sobre los problemas en torno a la libertad de expresión. Sin éxito, por cierto:

—Y enhorabuena que así sea, que exista crítica constructiva, pues es una crítica que da frutos en beneficio del país. Y desde luego no es ajena a esa crítica en el más amplio ejercicio de la libertad de prensa. Repetiremos hasta el hartazgo que hay plena libertad de prensa y de expresión y que ello no variará.

Fujimori no se pronunció explícitamente sobre el caso Ivcher. Ni sobre otro tema de nacionalidad que lo involucraba en forma más íntima.

Cuatro días antes de las Fiestas Patrias de 1997, la revista Caretas agitó más las ya movidas aguas políticas. Un informe de Cecilia Valenzuela planteaba una duda que ya se había dejado

entrever en 1990 y sobre la que la publicación había hecho alguna indagación en 1993: ¿Dónde nació Alberto Fujimori?

El semanario dirigido por Enrique Zileri señaló que publicaba el reportaje de Valenzuela por dos razones claves: cualquier resistencia sobre un posible tufo xenofóbico se había disipado con la campaña contra Baruch Ivcher desde el propio gobierno y, además, existía la fuerte sospecha de que Montesinos tenía, entre otros secretos del mandatario, alguna evidencia sobre su supuesto nacimiento en tierras niponas. Y, por supuesto, de por medio se encontraba un delicado tema constitucional: Fujimori no podía ocupar el cargo si no había nacido en territorio peruano.

Valenzuela presentó la partida de bautizo de Fujimori, documento donde su fecha de nacimiento consignada es el 4 de agosto de 1938 y en el que, además, aparece un evidente tachón sobre el lugar de nacimiento. También se dio cuenta sobre algunas presuntas inexactitudes en la narración hecha por Naoichi Fujimori al momento de inscribir a su hijo, así como una ficha de extranjería en la que Mutsue Inomoto de Fujimori declara tener dos hijos. Sobre este último documento, quedaba la duda de si era aquel que la madre del presidente había llenado al momento de su ingreso al país o era una reinscripción.

A la semana siguiente, Caretas afinó la pregunta, ante la intervención del exministro de Trabajo Sandro Fuentes, quien asumió la defensa de Fujimori como abogado y vocero político. Fuentes indicó que la ficha de extranjería de doña Mutsue, en efecto, correspondía a una reinscripción. También apareció un investigador japonés que consignó que habían llegado ocho barcos desde Japón a Perú trayendo a migrantes en 1934, en lugar de los tres consignados en el informe de Valenzuela. Para la revista, las fotos de la infancia del presidente no calzaban con la fecha de nacimiento, por lo que cabía la posibilidad de que hubiera nacido antes de 1938, pero fuera inscrito en aquel año, en medio del ambiente xenófobo contra los japoneses que caracterizaba a nuestro país en esos días.

Finalmente, el 8 de agosto de 1997, Sandro Fuentes exhibió una copia del registro familiar japonés de Fujimori —el koseki— donde

se indicaba que el mandatario había nacido en Lima, pero el 26 de julio de 1938. Con ello, prácticamente se cerró el tema para la opinión pública

Para Caretas, aún subsistían varias inexactitudes en los documentos que se tenían sobre el nacimiento de Fujimori y en los recuerdos de la familia, pero arribó a dos conclusiones. De un lado, el presidente nació en Perú, pero no en la fecha festejada en Palacio de Gobierno por años, aunque se siguió celebrando aparatosamente en Fiestas Patrias. Y, de otro lado, era muy posible que tuviera doble nacionalidad.

Como se verá, tanto Fuentes como Caretas terminarían diciendo la verdad. Con consecuencias que recién se verían tres años más tarde[148].

En agosto de 1997, continuó el acoso contra Frecuencia Latina. El día 5, el juez Percy Escobar, quien resultó cercano al gobierno, suspendió los derechos de Ivcher como presidente del directorio del canal.

Para complicar más las cosas, el empresario había otorgado una presidencia simbólica al abogado Sandro Fuentes. Cuando él salió a defender el nacimiento de Fujimori en el Perú, Viaña lo emplazó para que hiciera lo mismo con Ivcher, sin obtener respuesta. A los pocos días, Fuentes retiró a Ivcher de los créditos de Contrapunto. Allí se acabó todo trato con el abogado. La consigna del equipo fue seguir produciendo destapes periodísticos hasta que los echaran.

En el Servicio de Inteligencia se tenían planes operativos contra periodistas. La matriz era un documento conocido como Plan Octavio, ideado en otubre de 1996. Ivcher era el principal blanco, al igual que los miembros de su equipo de prensa. Pero en la lista de seguimientos estaban Alejandro Miró Quesada Cisneros, subdirector de El Comercio y presidente del Consejo de la Prensa Peruana; Gustavo Mohme Llona (director de La República); César Hildebrandt; e incluso Nicolás Lúcar, director de La Revista Dominical, el programa periodístico estelar de América Televisión, afín al gobierno.

Los periodistas de Frecuencia Latina dormían en el canal. Algunos políticos opositores se alternaban en la vigilia. Para la

noche de tránsito entre el 18 y el 19 de septiembre de 1997, Viaña, Iberico y Quijandría volvieron al canal luego de la recepción por el día nacional de Chile. Los dos últimos se quedaron a dormir allí. Al salir del canal por la mañana, Iberico advirtió cambios en el personal de seguridad del canal.

Los hermanos Winter llegaron al canal junto con un personal de seguridad y el juez Escobar, con una medida cautelar que les permitía tomar el control de la estación de televisión. Juan Subauste, reportero de Contrapunto, comenzó a grabar, ante los gritos de Mendel Winter. Desaforado, el accionista minoritario de Frecuencia Latina encaró a Quijandría por llamarlo genuflexo. Él lo ignoró y le entregó a Samuel Winter su carta de renuncia:

—Eres muy joven, ya te explicaré por qué hicimos esto.

—Las explicaciones nos las debe el gobierno. Este es un lío entre nosotros y ellos.

—Te voy a demostrar quién es Ivcher, tengo un gran número de pruebas contra él.

—No te creemos. Ustedes nos debieron respaldar.

Solo se permitió que Alberto Cabello, gerente general del canal, pudiera ingresar para hacer la entrega formal. Los periodistas renunciantes salieron luego de dos horas, en medio de revisiones de sus cosas que lindaban con el vejamen. Las protestas continuaron en la calle.

Si un diario serio era bastante cercano al fujimorismo, ese era Expreso. El medio fundado por Manuel Mujica Gallo y que tuviera su mayor crecimiento durante la gestión de Manuel Ulloa Elías respaldó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Y, en general, apoyó las opciones de mano dura de Fujimori, así como las reformas económicas emprendidas hasta 1996, sin dejar de hacer algunas críticas puntuales a la actuación del gobierno.

Quien mejor manifestaba esa línea editorial era Manuel D’Ornellas, un hombre ligado a Expreso desde 1965. Fue una de las personas que padeció más las consecuencias de la dictadura de Juan Velasco Alvarado: lo despidieron del periódico una vez que fue expropiado en 1970, lo deportaron y, finalmente, le quitaron la

nacionalidad por «traición a la patria». En 1976, pudo volver al Perú. Desde 1988 fue director de Expreso.

Apoyó a Fujimori como muchos de su generación, porque pensaba que era la derecha popular que desandaría las reformas de Velasco. Juan Carlos Tafur, quien trabajó con él por varios años, considera que también pesó una cuestión personal en dicho apoyo, dado que la pérdida de su nacionalidad y el exilio en Uruguay fueron muy duros para él.

Pero D'Ornellas, si bien era conservador, también era un agudo observador de la realidad. Y se percató muy rápidamente del poder de Vladimiro Montesinos. Condenó casos como La Cantuta, aunque se mostró a favor de que se procesara en el fuero militar. También estuvo en contra de la Ley de Amnistía.

En 1997, el periodista comenzó a denunciar la posibilidad de que un sector de las Fuerzas Armadas estuviera preparando un conflicto armado contra Ecuador, a fin de mejorar las posiciones de negociación con el Perú. Y también criticó la posición de las Fuerzas Armadas en contra de Baruch Ivcher, así como el retiro de su nacionalidad por parte del gobierno.

El 13 de octubre de 1997, el diario El Chino, un periódico popular sensacionalista muy cercano al gobierno, publicó un suplemento de ocho páginas contra D'Ornellas. Este suplemento buscaba tacharlo como un consuetudinario bebedor, al que no se le debía dar crédito por este supuesto vicio personal. La diatriba era tan manida que resultaba claro su origen: sectores militares ligados a Montesinos y Hermoza Ríos, pues muchos de los cuestionamientos contra el editorialista contenidos en el pasquín buscaban desacreditar sus críticas a ambos y a las Fuerzas Armadas. Su esposa, Rosario Abraham, estima que fueron las columnas del periodista contra los «halcones» militares peruanos lo que le valieron las diatribas. Con este suplemento se inauguró una modalidad que se emplearía contra otros críticos del régimen en los siguientes años.

En enero de 1998, D'Ornellas renunció a Expreso. La República, un diario que estaba en las antípodas de su pensamiento, le dio cabida como columnista y, además, fue el único medio que lo defendió frente a los insultos. Al final de sus días, tuvo una breve

reivindicación, al nombrársele embajador en Uruguay. Murió en mayo de 1999[149].

Durante la década de los noventa, el mayor evento deportivo que vivió el país fue la realización de los Juegos Bolivarianos, entre el 17 y el 26 de octubre de 1997. Arequipa recibiría a las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de los atletas peruanos.

Fujimori acudió a la inauguración, que se realizaría el 17 de octubre en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín, el centro deportivo más importante del sur del país. Para asegurar un gran respaldo al presidente en las tribunas en una plaza que no era cercana al fujimorismo, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) encargó la compra de 30 000 entradas a repartir en los sectores más pobres de la segunda ciudad del Perú.

Sin embargo, la portátil nunca se pudo armar. Al final, las entradas recayeron en manos de ciudadanos comunes y corrientes. Y allí Fujimori recibió un golpe de imagen que no esperaría jamás.

El presidente estaba en el palco oficial junto a su hija Keiko, en su calidad de primera dama. Lo acompañaban el entonces rector de la UNSA, Juan Manuel Guillén, así como el alcalde de Arequipa, Roger Cáceres Pérez.

—Declaro solemnemente inaugurados los decimoterceros Juegos Bolivarianos.

Lo que debió ser un discurso de tres minutos se acortó a esa frase. Y es que pocas personas pudieron escuchar a Fujimori. La silbatina en el Estadio de la UNSA era ensordecedora. Keiko trataba de negar lo evidente: «Son solo unas pocas personas, papá». Pero la protesta fue contundente.

En lo que quedó de 1997, Fujimori restringió al mínimo sus viajes fuera de Lima[150].

Si el año había sido terrorífico para el mandatario, el final sería aún peor. Por primera vez, una fisura en las altas esferas del poder se haría pública. Y tendría vínculo con el único suceso positivo para el gobierno en 1997.

Todo comenzó el 28 de octubre. El Hotel Las Américas, perteneciente a la Caja de Pensiones Militar Policial, estaba atestado de altos oficiales de los institutos armados. El perímetro había sido cerrado con fuertes medidas de seguridad. Ese día, Nicolás Hermoza Ríos presentó Operación Chavín de Huántar, su libro en torno al rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón.

Pero la real sorpresa fue la aparición de Vladimiro Montesinos en la ceremonia. Era la primera ocasión en que el asesor presidencial se hacía presente en un evento público, lo que podía ser apreciado como un respaldo al texto de Hermoza, socio de la dupla en el poder.

El libro de Hermoza básicamente resalta sus supuestos aportes sobre la «concepción, elaboración y ejecución» de la exitosa operación militar. Pero también da crédito a Montesinos por la responsabilidad en torno a temas de Inteligencia. Fujimori aparece poco en el texto, vinculado sobre todo a la decisión política. Pero la mayor cantidad de fotografías muestran al comandante general del Ejército y al asesor de la alta dirección del SIN, supuestamente coordinando el operativo. Sin embargo, el general no había participado en las actividades de capacitación de la Patrulla Tenaz y sus versiones, en realidad, partían de lo que el número dos del gobierno y Roberto Huamán le habían transmitido.

Para el mes de diciembre, Hermoza y Fujimori buscarían aprovechar el primer aniversario de la toma de la residencia por parte del MRTA para mejorar sus bonos políticos. Y, de paso, procurarían sepultar cualquier crítica sobre los groseros descuidos en materia de seguridad que ocasionaron una crisis que duró 126 días.

El 9 de diciembre de 1997, durante la conmemoración del Día del Ejército, se mostraron las armas incautadas al MRTA luego del rescate, así como una serie de fotografías de la operación. Fujimori convocó al día siguiente a periodistas nacionales y extranjeros a la réplica de la residencia construida en Chorrillos. El 12 de diciembre, Hermoza llevó a la prensa a la misma instalación y simuló el rescate.

El mayor golpe se produjo el 17 de diciembre de 1997. Ese día, El Comercio publicó una entrevista a Fujimori sobre la negociación y el rescate. El presidente dijo haberse enterado de la toma cuando estaba con su hijo Kenji y ambos se fueron al SIN, donde él analizó la situación con Montesinos. Durante la crisis, las decisiones se concentraron en Fujimori, su asesor y los militares a cargo del operativo, entre quienes no estaba Hermoza. El comandante general del Ejército no apareció para nada en su explicación sobre el plano militar del operativo, del cual Fujimori se jacta de ser su autor intelectual. Para mayor humillación, le confirió mayor participación a Kenji, quien habría proporcionado su telescopio para estudiar el jardín y la azotea de la casa capturada.

A partir de la entrevista, se tejieron una serie de rumores periodísticos sobre la permanencia de Hermoza en la Comandancia General del Ejército. Y el programa En Persona, conducido por César Hildebrandt, transmitió un documental hecho por la televisora japonesa NHK, donde Fujimori y Montesinos son quienes tienen la voz cantante en las coordinaciones del operativo.

La respuesta de Hermoza demoró dos días. En la Escuela de Comandos del Ejército, con el pretexto de festejar el cumpleaños del jefe de la institución, todos los jefes de región militar, los comandantes generales de la Marina y la Fuerza Aérea, los ministros de Defensa e Interior y el director general de la Policía participaron en un desagravio al militar. Los discursos de orden estuvieron a cargo de Carlos Bergamino, jefe de la Primera Región, y José Williams, el jefe de la Patrulla Tenaz. Allí reconocieron su supuesta conducción militar del operativo Chavín de Huántar.

Fujimori decidió no destituir a Hermoza, a pesar de la clara afrenta. Solo atinó a enviar un oficio para que los altos oficiales «se reintegren en el término de la distancia a sus puestos de comando y responsabilidades». Recién dos días antes de Navidad, en Puno, Fujimori indicó que no removería a nadie y que «el Ejecutivo es quien tiene el comando». Un auténtico papelón.

Pero el veterano general no debía sentirse seguro en su puesto[151].

---

139 Para reconstruir el caso del Tribunal Constitucional, nos basamos en la sentencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf), y en Bowen (2000: 309-310), Conaghan (2005: 126-132) y Murakami (2018: 488-490). También revisamos el *Diario de Debates* del Congreso de la República del 28 de mayo de 1997.

140 Sobre la jugada que permitió a Blanca Nélida Colán seguir siendo la mujer fuerte del Ministerio Público, consultamos la cronología política de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como los ya mencionados textos de Dargent (2006: 148) y de Belaúnde (1999: 322-323) sobre la reforma judicial en el fujimorato.

141 En torno al caso Leonor La Rosa, la versión completa de la exagente de Inteligencia se encuentra en Vargas Llosa (2000: 149-187). Las versiones más fidedignas que contradicen su testimonio están en la serie de reportajes de Ricardo Uceda para *El Comercio* publicados en marzo de 2005 y «La Rosa de Espaldas», informe televisivo de Marco Sifuentes para *La Ventana Indiscreta,* difundido en abril de 2005. En su libro sobre el caso Hayduk, aparecido en 2020, Uceda se ratifica en su versión sobre el caso.

142 El relato sobre el crimen de Mariella Barreto se basa en Vargas Llosa (2000: 247-285). Otros datos biográficos sobre ella están en Uceda (2018: 484-485) y Jara (2017: 251-253).

143 Sobre el RUC Sensible y el manejo de la SUNAT en el segundo gobierno de Fujimori, consultamos Durand (2003: 464-465) y Bowen y Holligan (2003: 321-323). Sobre la indagación de los ingresos de Montesinos, véase Vargas Llosa (2000: 241-243).

144 Esta sección se basa en Uceda (2020: 53), Vásquez de Velasco (2020: 35-37) y el mencionado artículo de Saravia y Wiesse.

145 Los intentos de ordenamiento del comercio ambulatorio por parte de Alberto Andrade se hallan reseñados en Cosamalón (Lima: 2018: 401-410). Puede verse el video del desalojo frustrado del Mercado Central en https://youtu.be/RjxtYuC9L1k.

146 En torno a la movilización estudiantil de 1997, revisamos Venturo (2001: 100-113) y Burt (2011: 360-364), y los artículos «¿Demócratas pero antipolíticos? Juventud universitaria y sentidos de lo político entre 1997 y 2000» de Alonso Marañón (http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lacolmena/article/view/20683/20473) e «Hijos de su tiempo: notas sobre jóvenes y participación política» de Alejandra Alayza (http://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/9/06PeruHoy20006B.pdf). En el caso de esta última, ella compartió aulas con Keiko Fujimori en la promoción 1992 del Colegio SS.CC. Recoleta y participó en las movilizaciones de 1997 como estudiante de la PUCP. También apreciamos el documental *El Viento de Todas Partes* de Nora de Izcue, que tiene imágenes de las marchas (https://youtu.be/AQElOgGtEmc).

147 Sobre el caso Ivcher consultamos Vargas Llosa (2000: 189-245, 285-320), Rospigliosi (2000a: 88-101) y Bowen (2000: 312-317, 352), así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf). El dato sobre Eduardo Ferrero aparece en sus memorias como canciller ya citadas (2018: 63-64).

148 Revisamos las ediciones correspondientes de la revista *Caretas* de julio y agosto de 1997 en las que se cubrió el tema del origen de Alberto Fujimori. También hicimos lo

propio con las ediciones de mayo de 1997 del mencionado semanario, para dar cuenta de la enfermedad neoplásica del entonces mandatario.

149 En torno al operativo periodístico contra Manuel D´Ornellas, nos basamos en Rospigliosi (2000a: 134-139). Los datos biográficos del periodista aparecen en el texto compilatorio de sus columnas (2000), así como en uno de los textos de *Archivo expiatorio* de Jochamowitz (2019: 184-185). Otras notas importantes las brinda Tafur (2017: 65-66).

150 En torno a las pifias en la inauguración de los Juegos Bolivarianos, revisamos las ediciones de *La República* y *El Comercio* del 18 de octubre de 1997, así como Murakami (2018: 493-494).

151 La bronca Fujimori–Hermoza por el caso Chavín de Huántar se basa en Bowen y Holligan (2003: 259-261), así como en Rospigliosi (2000b: 230-247).

AGUAS TURBIAS

(Enero – Diciembre, 1998)

Las costas peruanas están bañadas por dos distintas corrientes marinas. Frente a las regiones Tumbes y Piura, circula El Niño, una vía de aguas cálidas que viene de norte a sur. Entre Lambayeque y Tacna, de sur a norte, pasa la corriente de Humboldt, con aguas frías, que termina reduciendo la temperatura promedio de las grandes ciudades costeras, incluyendo Lima.

Cada cierta cantidad de años, el Perú vive el denominado Fenómeno del Niño. Implica un calentamiento de las aguas en la costa sudamericana, lo que causa que los efectos de la corriente de Humboldt se reduzcan. El impacto climático es fuerte, dado que implica la partida de especies marinas que se crían en aguas frías —lo que tiene un efecto directo en la actividad pesquera—, así como una mayor cantidad de lluvias en los meses de verano, lo que puede ocasionar huaicos, derrumbes e inundaciones, con severas consecuencias en la vida de las personas y la infraestructura.

El Fenómeno del Niño de 1983 ha sido considerado como el más severo y dañino de nuestra historia reciente. Murieron 515 personas, hubo 1304 heridos y más de medio millón de peruanos quedaron sin hogar. Se calculan los daños en 1500 millones de dólares, sobre todo en los sectores pesqueros y agrícolas. Peor aún, buena parte de la infraestructura vial del norte del país fue sensiblemente dañada. El Producto Bruto Interno cayó en 12 %. La imagen pública de Fernando Belaúnde Terry, el veterano político que había sido elegido por segunda vez presidente del Perú, se hizo añicos.

Para junio de 1997, las cuatro principales instituciones científicas estatales encargadas de monitorear la presencia del Fenómeno del Niño —el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto del Mar del Perú, el Instituto Geofísico del Perú y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra— coincidieron en señalar que se acercaba a nuestro país un evento climático de este tipo. Fue el SENHAMI la primera entidad en dar la voz de alerta y, además, en señalar que se desencadenaría un Niño muy parecido al de 1983.

En la práctica, el Ministerio de la Presidencia, usado por Fujimori para contener a los principales programas sociales y de construcción de infraestructura, sería el que conduciría las principales obras de prevención, focalizadas en la mejora de los cauces de drenaje y la limpieza de los cauces de los ríos. Daniel Hokama, titular de dicho sector, fue al Congreso a mediados de 1997 a explicar las medidas que se venían tomando. En un inicio, señaló que el Fenómeno no sería tan fuerte como el producido en 1983, pero las labores de prevención se concentraron precisamente en las zonas más afectadas en el evento acaecido durante el gobierno de Belaúnde.

Sin embargo, el gobierno no tomó las mismas previsiones para facilitar la labor de los empresarios pesqueros, que se verían directamente afectados por el Fenómeno, dado que El Niño sacaría las especies de aguas frías. Esta medida no solo dejó de tomarse por la ortodoxia económica, sino también porque, en el presupuesto orientado a paliar la crisis, se priorizaron construcciones pequeñas en las que Fujimori podría lucirse como maestro de obras, con fines estrictamente propagandísticos.

Desde agosto de 1997 y hasta fines del largo verano de 1998, Fujimori buscó aprovechar el evento climático con fines políticos. Comenzó a dirigir las pequeñas obras y, conforme el Fenómeno del Niño hizo estragos, empezó a viajar constantemente para aparecer junto a los damnificados.

En enero de 1998, el Fenómeno del Niño afectó Ica, departamento al sur de Lima que no había sufrido daños en 1983 y que, por tanto, no había sido priorizado en las obras. Las ciudades principales fueron gravemente afectadas con los derrumbes de infraestructura pública y privada. Durante el verano, la inundación llegó a Piura y Tumbes, donde los puentes comenzaron a caerse. Para fines de febrero e inicios de marzo, la emergencia afectó a algunas zonas del Callao y el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado del Perú.

La presencia de Fujimori en la zona de desastre dividió a los peruanos. Tanto en las zonas de emergencia como fuera de las mismas el mandatario cosechaba pifias y aplausos. En el verano de

1998, las cifras de las encuestas le favorecieron, por la presencia en el terreno. Pero esto cambió en el transcurso del año, tanto por los escándalos políticos de 1998 como por el hecho que el Fenómeno del Niño fue otro factor que complicó la recesión que vivía el país. Sin embargo, el Estado avanzó en la reconstrucción de infraestructura vial sobre todo en la zona norte, lo que es redituado por el fujimorismo hasta el día de hoy, en particular en Piura.

Para complicar más las cosas para el gobierno, El Comercio descubrió serios indicios de corrupción en el entonces jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el general Homero Nureña. Una serie de 15 reportajes elaborados por la periodista Liz Mineo mostraron que el militar había hecho obras en zonas que no habían sido afectadas por el Fenómeno del Niño. Peor aún, varias de las empresas constructoras involucradas pertenecían a allegados a Nureña, quien incluso tuvo el descaro de mandar construir una escuela en Cajamarca que tenía el nombre de su madre. Los informes le costaron el puesto a Nureña, quien fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2000[152].

Habíamos dejado a Laura Bozzo como solitaria conductora de Las mujeres tienen la palabra, uno de los espacios que Ricardo Belmont había creado para la campaña electoral de 1995. La abogada cerraba dos ciclos en simultáneo: su periodo como regidora oficialista en una gestión mediocre y su primera aventura televisiva.

Para 1996, Bozzo llegó a Panamericana Televisión con el proyecto de unos documentales. Sin embargo, la convencieron de hacer una audición para un talk show similar a los que, en Frecuencia Latina, mantenían María Teresa Braschi y Jorge Henderson. Aunque en la audición estuvo rígida y nerviosa, sus exabruptos posteriores a su performance convencieron a Genaro Delgado Parker, propietario del canal y un hombre con agudo olfato televisivo, para que pudiera hacer un espacio de este tipo.

Así nació Intimidades, un programa que se transmitía al mediodía de lunes a viernes durante 1997, donde Bozzo comenzaría a cimentar su imagen de defensora de mujeres maltratadas y comenzaría la presentación de dramas humanos. El espacio no era truculento —aunque Bozzo incluyó una edición especial los sábados

por la noche para mostrar temas sexualmente explícitos— y le permitió tener la posibilidad de redefinirse. Comenzaba a ser un monstruo televisivo.

A inicios de 1998, José Enrique y José Francisco Crousillat, padre e hijo que manejaban América Televisión, la convencieron de pasar a sus filas. Así, en febrero de ese año, comenzaría Laura en América, que pronto alcanzó el top del rating.

Pero el espacio vendría con un apoyo populista impulsado por José Francisco y Bozzo. En marzo de 1998, ambos llegaron en el avión privado del empresario a Chiclayo, ciudad natal de la familia Crousillat, afectada por el Fenómeno del Niño. Bozzo presentó allí Solidaridad Familia, una organización no gubernamental de ayuda a los más necesitados. Pero más importante aún, la abogada y conductora recorrería las calles, anotaría los reclamos de los damnificados y se los pasaría a las autoridades. Fue en ese momento que volvió a coquetear con el poder[153].

El suplemento del diario El Chino sobre Manuel D´Ornellas fue un globo de ensayo para lo que sería, a partir de 1998, una avalancha de lodo contra los rostros más visibles de la oposición, así como contra los periodistas más críticos al gobierno.

El 27 de marzo, el mismo periódico sensacionalista publicó un suplemento similar al hecho contra el director de Expreso. El título era «Los rabiosos de la prensa antiperuana: Rospigliosi, Arrieta y Páez». La alusión era a Fernando Rospigliosi, José Arrieta y Ángel Páez. Ya hemos hablado del segundo, por lo que conviene presentar a los otros dos.

Rospigliosi era, en 1998, comentarista central de la revista Caretas, en la que publicaba una columna semanal llamada «Controversias», muy dura contra el gobierno de Fujimori. Antes había sido editor de política y del área de seguridad de la publicación semanal. Además, era sociólogo y, durante los años noventa, publicó varios trabajos vinculados al estudio de las Fuerzas Armadas y sus vínculos con el régimen. Mientras que Páez era periodista de profesión y, en ese momento, jefe de la Unidad de Investigación de La República, diario de línea opositora al gobierno y que tenía buenas fuentes en las Fuerzas Armadas.

Según Rospigliosi, los ataques se debieron a que los tres periodistas habían revelado varias irregularidades en las instituciones castrenses. En particular, las compras de armas hechas para tratar de equilibrar el poderío militar peruano con el ecuatoriano, sobre todo con Rusia y Bielorrusia. A ello se suman las denuncias hechas por ellos sobre violaciones a los derechos humanos, así como el poder de Vladimiro Montesinos dentro de este ámbito de poder.

La novedad era que estos ataques aparecieran en un diario sensacionalista que no tenía como prioridad los temas políticos. Como la mayoría de los tabloides populares peruanos, El Chino concentraba la mayor parte de sus informaciones en notas policiales, deportivas y del mundo del espectáculo. Por ello, llamaba más la atención que tocaran tópicos castrenses muy lejanos del foco de atención del lector habitual de estos medios.

La campaña contra Páez siguió durante los siguientes años en otro pasquín llamado El Tío, pues el periodista fue quien develó las irregularidades en las compras de aviones MIG 29, Sukkhoi 25 y misiles antiaéreos. Como veremos, lo dicho por el jefe de la Unidad de Investigación de La República sobre estas adquisiciones resultó siendo cierto. Los insultos lo acusaban de ser cercano a militares ecuatorianos y, a la par, a Sendero Luminoso y el MRTA.

Para redondear los ataques, en abril de 1998, El Chino publicaría otro suplemento especial donde la víctima central era Gustavo Mohme Llona, director del periódico para el que trabajaba —y aún labora— Páez, y congresista de oposición. Nuevamente, la mayoría de los ataques se vinculaban a los destapes sobre el mundo militar publicados en La República[154].

Una de las instituciones nuevas de la Constitución de 1993 fue el Consejo Nacional de la Magistratura, la cual se forjó bajo dos nociones. La primera era evitar que, a diferencia del modelo anterior, la política interviniese directamente en la aprobación y destitución de jueces y fiscales en todos los niveles de la administración de justicia. La segunda, que la mirada jurídica no era suficiente para evaluar a los magistrados, por lo que se incluyó a profesionales de otras carreras en la conformación original de siete miembros en el CNM.

En 1995, el Consejo inició los procesos de selección y nombramiento de magistrados. Sin embargo, en 1996, tuvo que paralizar estas labores debido a que el Congreso de la República emitió una Ley que obligaba a que los candidatos a jueces y fiscales tuvieran que pasar un curso obligatorio de formación y capacitación ante la Academia de la Magistratura, otro organismo constitucional autónomo. En la práctica, el CNM no podía cumplir una de sus funciones y, además, era una de las más importantes.

Para la segunda mitad de la década de los noventa, uno de los problemas centrales para la administración de justicia era el alto número de magistrados provisionales. Se trataba de abogados llamados por los presidentes de Corte Superior o Fiscales Superiores para cubrir las plazas necesarias a fin de seguir operando. Sin embargo, al no ser nombrados, dependían de la buena voluntad de estos magistrados para continuar en su cargo. Lo mismo pasaba en la Corte Suprema y en la Junta de Fiscales Supremos, donde la sujeción frente al gobierno era aún mayor. Por tanto, la provisionalidad terminaba complotando contra la independencia, en tiempos en los que el sistema de justicia estaba bajo amenaza.

Cuando, en abril de 1998, la Academia de la Magistratura acabó con el curso y tenía a 300 posibles magistrados aptos para postular a plazas titulares, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial desconoció lo hecho y señaló que el programa debía ampliarse a dos años. En suma, se trataba de una forma de seguir dilatando la solución del problema.

Pero no fue la única función afectada. En 1998, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó la posible destitución de magistrados de la Corte Suprema, debido a una polémica sentencia emitida sin cumplir garantías básicas del debido proceso. Frente a ello, el Congreso de la República emitió en marzo una ley por la que el CNM quedaba como segunda instancia en materia de destitución, que solo podría ser propuesta por la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos. La norma era abiertamente inconstitucional. Más aún, se buscó aplicar a los casos en curso.

Por esta razón, Carlos Montoya Anguerry, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y reputado docente universitario, logró convencer a sus colegas titulares de renunciar. Así lo hicieron. Ocurrió lo mismo con la Academia de la Magistratura. Sus puestos fueron ocupados por gente afín al régimen, con facultades sumamente recortadas. Continuaba el copamiento institucional[155]. En consecuencia, el Banco Mundial dejó de apoyar la reforma judicial del régimen.

Cuando se habla del vínculo entre los empresarios y el fujimorismo, habría que introducir algunos matices. Es cierto que, en términos generales, los gremios empresariales aplaudieron al gobierno, porque consideraron que implementó reformas de mercado que eran requeridas por ellos. Otros vieron en Fujimori un sucedáneo de Pinochet que, además de liberalización económica, impuso mano dura frente al terrorismo y los sindicatos. El cambio de reglas, así como el ingreso de marcas y patrones de consumo distintos al país, generaron una sensación de bienestar para los sectores altos y medio altos del país. Y, también hay que decirlo, esos privilegios ganados fueron asociados por algunos, hasta el día de hoy, con un régimen como el fujimorista.

Varios empresarios estuvieron como ministros durante el gobierno de Fujimori. Solo en la Presidencia del Consejo de Ministros, tenían este perfil Alfonso Bustamante, Efraín Goldenberg, Dante Córdova, Víctor Joy Way y Alberto Pandolfi. En el Ministerio de Economía y Finanzas, Hurtado Miller, Boloña y Camet reunían estas características. Y la lista se incrementaría si contamos a los ministerios sectoriales.

Entre los empresarios, se podría decir, a partir de los acuciosos trabajos de Julio Cotler y Francisco Durand, que existían dos círculos de confianza con el gobierno: uno cercano y otro distante. En el primero de ellos, sin duda, se encontraba la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio paraguas de la mayoría de las asociaciones empresariales del país. A ellos se sumaron las asociaciones vinculadas a minería (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), los exportadores más importantes (COMEX), sector financiero (Asociación de Bancos,

Asociación de AFP) y algunas entidades ligadas a pequeña y microempresa que eran cercanas al vicepresidente Ricardo Márquez. En el caso de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), las afinidades eran claras con Camet, por ser un empresario del sector.

Un segundo círculo, mucho más alejado de las decisiones de poder económico, eran básicamente la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores. Se trataba de dos gremios que habían quedado bastante debilitados con las reformas económicas y que buscaban obtener medidas a su favor, aunque con escaso éxito. Su debilidad se debía a que, en general, representaban a medianas empresas.

Pero la SNI y ADEX también tenían su propio pleito interno con la CONFIEP. Ambas instituciones argüían que el gremio de gremios no los respaldaba en sus reclamos y peticiones. Esta era una cuestión que estaba presente en la mesa desde 1995, pero que se agudizó en 1998.

Ese año, la CONFIEP eligió como presidente a Manuel Sotomayor, quien era representante de la Sociedad Nacional de Pesquería. Fue una elección bastante polémica, dado que ganó por un solo voto y la SNI movió cielo y tierra para evitar que fuera designado. Las conexiones entre Sotomayor y Camet eran bastante claras e incluso el ministro de Economía y Finanzas promovió abiertamente su elección.

Para octubre de 1998, se formó la Coordinadora Gremial de la Producción y el Comercio donde estaban la SNI, ADEX y la Cámara de Comercio de Lima. Su visión clara era mejorar el modelo económico, haciendo que otros sectores empresariales pudieran ganar. Pero también proponían una reforma interna en CONFIEP, para darles menor peso a los gremios vinculados a servicios y, además, eliminar la reelección de los presidentes de la entidad. La CGPC no tuvo eco en ninguna de las dos demandas. Sin embargo, consiguió que Sotomayor solo esté un año en el cargo. Fue sucedido por el empresario minero Roque Benavides.

Esta división también se tradujo al campo político. Carlos Bruce, expresidente de ADEX, se acercó a Somos Perú, el movimiento de

Alberto Andrade. Eduardo McBride —también expresidente del mencionado gremio y otrora simpatizante del golpe de 1992— comenzó a militar en Perú Posible, el nuevo grupo que estaba formando Alejandro Toledo. Conforme nos acerquemos a la campaña electoral de 2000, aparecerán más empresarios críticos con el gobierno[156].

Otra agente del Servicio de Inteligencia del Ejército que suministró información a la prensa fue Luisa Zanatta, quien entró al SIE en 1990 y estuvo en diversos departamentos de la entidad. Participó en las escuchas de las llamadas telefónicas de Javier Pérez de Cuéllar en la campaña de 1995, y le indicó a José Arrieta, el jefe de la unidad de investigación de Frecuencia Latina, la existencia del Plan Octavio, un conjunto de operativos de Inteligencia contra diversos periodistas. Zanatta tuvo que salir del país hacia Estados Unidos a fines de 1997, cuando empezaron a sospechar de sus filtraciones.

Arrieta hizo lo mismo en enero de 1998, apenas el círculo de persecución judicial del gobierno comenzó a buscar tocarlo a él. Desde Miami, rearmó una pequeña unidad de investigación financiada por Baruch Ivcher, a la que llegaban, por diversos medios, documentos filtrados por agentes de Inteligencia u otros miembros de las Fuerzas Armadas. A la par, el exsenador Eliot Abrahms fue contratado por Ivcher para hacer las labores de cabildeo sobre su caso en Estados Unidos, lo que comenzó a tener efectos en 1998. El empresario peruano–israelí también presentó su caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.

En marzo de 1998, Zanatta hizo su primera aparición ante la televisión peruana, en el programa Enlace Global, que conducía y dirigía César Hildebrandt, contratado por Genaro Delgado Parker para iniciar una nueva aventura televisiva. Zanatta no solo confesó su participación en el espionaje telefónico contra Pérez de Cuéllar, sino que mostró una fotografía de ella en una de las salas de «chuponeo». La imagen fue publicada en La República. Desde los diarios sensacionalistas vino la venganza: tres de ellos —El Tío, El Mañanero y La Chuchi— presentaron un montaje en el que aparecía Claudia Schiffer, la modelo más importante de la década en el

mundo, en lugar de la agente, para confundir a la opinión pública sobre la veracidad de la imagen.

Sería a fines de 1998 que la unidad de investigación de Arrieta conseguiría, finalmente, los documentos originales del Plan Octavio[157].

En abril de 1998, Barry McCaffrey haría su segunda visita al Perú, en su calidad de «zar antidrogas» del gobierno de los Estados Unidos. Pero antes de su llegada, el funcionario se entrevistó con grupos de protección de derechos humanos en su país. Ellos le previnieron sobre los antecedentes del gobierno en esta materia, así como sobre institucionalidad democrática. McCaffrey les aseguró que no se reuniría con Montesinos.

McCaffrey tuvo varias reuniones con representantes de diversas instituciones. Apenas tres semanas después, el programa Panorama, espacio periodístico dominical de Panamericana Televisión, recibiría un jugoso material: un video de doce minutos de la reunión en la que se evaluó los avances de la cooperación antidrogas entre Perú y Estados Unidos. En el reportaje que se difundió al público, Vladimiro Montesinos aparecía explicando la política antidrogas al visitante estadounidense y altos mandos militares y policiales peruanos.

Las implicancias políticas de la reunión eran de dos tipos. En el plano exterior, Montesinos quería demostrar que seguía siendo un personaje importante para la política antidrogas de Estados Unidos, a pesar de las acusaciones en su contra. En el ámbito interno, el asesor presidencial buscaba que el SIN tuviera facultades extraordinarias para combatir al crimen organizado, que comenzaba a azotar a la ciudad de Lima, a través de una ola de secuestros. Aunque esta última medida no la consiguió, debido a que la oposición logró disuadir sobre ello ante la opinión pública, el régimen logró aprobar un conjunto de normas para endurecer las penas y recortar el debido proceso en estos casos.

El video enfureció a McCaffrey. Dio a conocer que Montesinos no había sido invitado a la reunión y, en un hecho inusual, brindó una conferencia de prensa en Estados Unidos donde se declaró ofendido por la manipulación y explotación indebida de su visita a

Lima. También dio un guiño a los grupos protectores de derechos humanos, señalando que compartía la preocupación por las acusaciones contra el asesor presidencial peruano.

La respuesta de Montesinos fue un amago de retiro de los mecanismos de cooperación en Inteligencia y trabajo policial. Fujimori defendió a su asesor e indicó que gozaba de su entero respaldo.

Esta fue una nueva oportunidad para que el embajador Dennis Jett hiciera, tanto en público como en privado, críticas a la actuación del gobierno en materia de democracia y derechos humanos. Sin embargo, en Washington consideraban que las declaraciones de su representante en Lima y sus percepciones personales sobre el gobierno eran contraproducentes con miras a obtener algunas concesiones por parte del régimen de Fujimori. La administración Clinton —en particular, la CIA y la DEA— siguió considerando a Montesinos un interlocutor válido[158].

Javier Valle Riestra era un aprista de vieja data y singular trayectoria. Abogado graduado en Madrid, fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 e impulsor de varias de las figuras que se incorporaron en la Constitución de 1979: un catálogo de derechos humanos bastante amplio, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la adscripción a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Valle Riestra fungió como parlamentario entre 1980 y 1992. En 1984, fue uno de los pocos apristas que quiso hacer frente a la candidatura presidencial de Alan García, sin éxito. Allí comenzaría una historia larga de discrepancias y reconciliaciones con su partido y con el propio líder aprista.

Durante el periodo fujimorista, Valle Riestra había defendido varias causas justas, como la de los militares sublevados el 13 de noviembre de 1992 y la de los generales en retiro que criticaron la actuación gubernamental durante el conflicto con el Ecuador en 1995. Pero, en los últimos años, se había acercado a posiciones más gubernamentales, como la forma como se venía enfrentando la relación con el país vecino del norte y el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. Incluso Montesinos le mostró

los planes sobre este último caso dos meses antes de que se ejecutara el operativo Chavín de Huántar.

Aun así, sorprendió a todos que el 3 de junio de 1998, Fujimori decidiera que Alberto Pandolfi saldría de la Presidencia del Consejo de Ministros y que, un día después, el 4 de junio, Valle Riestra jurara como la nueva cabeza del gabinete.

A la polémica se sumó la protesta. Ese día, los estudiantes universitarios que habían marchado un año antes por la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional hicieron una movilización por el centro de Lima, que acabó una cuadra antes de Palacio de Gobierno, en el pasaje Olaya, en medio de una feroz represión policial. El presidente del Consejo de Ministros pidió perdón a los estudiantes un día después.

Los primeros días de Valle Riestra en su flamante puesto buscaron marcar un perfil propio. Se pronunció en contra de la reelección presidencial en 2000. Anunció indultos para inocentes encarcelados por terrorismo y se tomó una foto con Yehude Simon, exparlamentario cuya excarcelación no había sido contemplada por Fujimori. Y, al mismo tiempo, buscó ser duro con los militares ecuatorianos.

Cuando se presentó ante el Congreso de la República para el voto de investidura, reafirmó que venía a asumir un compromiso democrático. Anunció el retiro de los militares de los campus de las universidades públicas intervenidas por el gobierno, aunque la intervención se mantuvo hasta 2000. Posteriormente, se manifestó a favor de un referéndum para dilucidar el tema de la reelección presidencial. Al final de un discurso que luego entró a temas sectoriales y económicos, Valle Riestra pidió al Congreso que revisara un conjunto de normas que habían sido cuestionadas por sus daños a la institucionalidad y hasta propuso una comisión ad hoc de juristas para una reforma constitucional. Ocurrió lo previsible: el oficialismo votó a favor de su investidura y la oposición en contra.

Pero la soledad política de Valle Riestra se hizo patente en las semanas siguientes. Era evidente que su línea y la visión del gobierno no sintonizaban. Y que, en realidad, tampoco tenía un poder real para generar, como le pedía la oposición, que Montesinos

dejara su cargo. No tuvo tiempo ni poder real para hacer ningún cambio y, en esencia, el gabinete Pandolfi se mantuvo bajo su mando, como se lo hizo notar Henry Pease en la sesión de investidura.

Una versión gubernamental señaló que el nombramiento del abogado aprista se debió al temor de Fujimori de que la oposición le impidiera dar el mensaje presidencial por Fiestas Patrias y que, luego de esa fecha, ya se vería qué ocurriría con Valle Riestra. La mayoría de los analistas políticos no le daba mucho tiempo al veterano político en ese esquema.

Eso fue lo que ocurrió. Valle Riestra tuvo un desayuno con la prensa extranjera destacada en Lima y allí soltó un comentario polémico sobre las diferencias entre las condiciones carcelarias de Abimael Guzmán y Víctor Polay, a pesar de que ambos se encontraban en el centro de reclusión de la Base Naval del Callao. Eran distintas debido a que Montesinos se había comprometido a mejorar las condiciones de Guzmán a cambio de las conversaciones que habían mantenido por años. Polay, recordemos, había tenido un breve paso por el APRA en los años setenta y no tuvo contacto similar al que tuvo el líder senderista con el gobierno. Desde el Consejo Supremo de Justicia Militar, llegaron furibundas críticas al presidente del Consejo de Ministros. Valle Riestra renunció. Y quien asumió su puesto fue Pandolfi. Parafraseando al recordado locutor Humberto Martínez Morosini: aquí no pasó nada[159].

El 6 de junio de 1998, se produciría el único cambio ministerial durante la era Valle Riestra. Sorpresivamente, luego de cinco años en el puesto, Jorge Camet dejó el Ministerio de Economía y Finanzas. No solo se trataba de una gestión longeva para los estándares del MEF, sino para cualquier entidad pública en el Perú[160].

Quienes han sido amigos cercanos de Camet, o trabajaron con él, resaltan, sobre todo, que se concentró en continuar varias de las reformas emprendidas por Boloña y Hurtado Miller, como la reinserción económica del país, el control de la inflación, la reestructuración de la deuda externa, así como la promoción de la inversión privada, pues fue en su periodo en que se concretaron las

grandes privatizaciones. Incluso algunos han señalado que fue un freno a los avances de Montesinos en áreas económicas y que, además, cauteló que su equipo de asesores pudiera trabajar sin problemas.

Otros analistas económicos más independientes refieren que el Perú, durante la gestión de Camet, no estuvo del todo preparado para enfrentar las crisis externas que impactaron en la economía mundial durante los años noventa (México y Asia, en particular) y que, además, lo terminaron devorando los fines políticos del régimen y, por supuesto, el impacto económico del Fenómeno del Niño. Las cifras de crecimiento económico comenzaron a disminuir a partir de 1996 y el índice de empleo no varió mucho.

Resulta claro que, a partir de 1996, Fujimori decidió frenar cualquier reforma de mercado con alto costo en popularidad, de cara a su proyecto reeleccionista. Al mismo tiempo, Camet decidió «enfriar» la economía, debido al alto gasto que se había hecho durante la campaña de 1995.

A las privatizaciones tampoco les comenzó a ir bien: una de las compras más importantes en 1997 fue la del Complejo de La Oroya, adquirido por Doe Run, una empresa estadounidense. El complejo llegaba con altos pasivos ambientales desde su gestión estatal, pero se fueron agravando en los siguientes años bajo la nueva administración que, además, tuvo problemas financieros pocos años más tarde.

Fujimori decidió no continuar con la privatización de Petroperú, cuestionada por motivos políticos y estratégicos, ni tampoco con la de Sedapal, la empresa que abastece de agua a la ciudad de Lima. A inicios de 1998, dijo: «no soy muy partidario de la privatización». Y también sacó de la posibilidad de concesiones o ventas a la central hidroeléctrica del Mantaro, la principal generadora de luz para el centro del país, incluyendo a Lima. Para muchos, estas reacciones estaban vinculadas a las impopulares alzas de tarifas.

Volviendo a Camet, su legado sigue siendo discutido hasta el día de hoy por varios motivos señalados por sus críticos. Ya hablamos sobre las alegaciones en torno a información privilegiada en torno a las transacciones de deuda externa vinculadas a la privatización de

empresas públicas. Convendría explicar los otros elementos que son materia de cuestionamientos hasta el día de hoy.

Camet constituyó JJC Contratistas Generales, una empresa constructora de tamaño mediano a fines de la década de los ochenta. Durante la gestión de Camet como ministro, pasó a ser una de las principales empresas constructoras con contratos en el país. De acuerdo con el informe de la comisión parlamentaria presidida por Javier Diez Canseco sobre presuntos delitos económicos y financieros, JJC fue la cuarta constructora que tuvo contratos con el Estado durante la década fujimorista. Para muchos, este conflicto de interés era evidente y descalificaba al ministro.

Peor aún, dos décadas después del fin del régimen, seis de las siete constructoras mencionadas por la comisión Diez Canseco estaban en problemas legales: dos empresas brasileñas —Odebrecht y Andrade Gutiérrez— se hallaban involucradas en la trama transnacional de corrupción conocida como Lava Jato y cuatro compañías peruanas —entre ellas JJC— terminaron implicadas en otro caso de corrupción: el denominado «club de la Construcción». De hecho, Odebrecht fue la empresa constructora que más ganó durante el gobierno de Fujimori, según la mencionada comisión parlamentaria. Este último evento no ha sido muy explorado hasta el día de hoy.

La salida de Camet del MEF se explica mucho más por el problema de la recompra de bonos de la deuda externa peruana. Esta operación debió tomar seis meses, pero en realidad duró tres años. La mayor controversia fue la inclusión de una deuda con Rusia, por el material bélico comprado a la Unión Soviética durante el gobierno militar de los años setenta. Camet hizo un viaje secreto a Moscú para continuar las negociaciones sobre este tema. Una vez que la travesía fue difundida, bastaron pocos días para que dejara el gabinete.

Legalmente, la mayor complicación para Camet fue un proceso penal sobre el uso de fondos de la privatización para la adquisición de armamento, con miras a equiparar fuerza militar con Ecuador. Según el exministro, en 1997 Saucedo lo llamó para una reunión con Hermoza Ríos y los comandantes generales de la Marina —

Américo Ibárcena— y la Fuerza Aérea —Elesván Bello—. En esta cita los jefes militares exigieron más dinero para compra de armamento. Camet habría objetado la compra de seis aviones rusos, pero Fujimori la aprobó. En 2011, el exministro fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, pero pocos meses después la sentencia fue anulada. En 2013, una semana antes del fallecimiento de Camet, fue absuelto por la Corte Suprema.

Otro legado con cierta discusión en el periodo de Camet es la creación del Instituto Peruano de Economía en 1994. Se trataba de un think tank de ideas liberales en lo económico, que recibió inicialmente un fondo del Banco Mundial para su impulso, así como de diversas empresas privadas. Para algunos críticos del manejo económico, el IPE es la representación de lo que se conoce como «puerta giratoria», dado que varios de sus directivos o economistas de planta han sido parte de los equipos de asesores del MEF —comenzando en la gestión de Camet— o han terminado siendo incluso ministros. De hecho, Camet fue parte del directorio del IPE a su salida del puesto, que lo ocupó por cinco años. Para otros, con un MEF con una línea claramente liberal desde hace tres décadas, no es de extrañar que termine recurriendo a canteras con las que comparte pensamiento. De hecho, hoy en el IPE hay una renovación generacional, pero el pensamiento liberal sigue primando. Como señala el politólogo Eduardo Dargent, lo que se extrañó en estos técnicos fue algún tipo de cuestionamiento sobre los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, pues dejaron de lado este tipo de cuestiones al momento de servir al régimen. Lo mismo, añadimos nosotros, se ajusta a los jóvenes que hoy les siguen los pasos y que tampoco han hecho una autocrítica seria sobre lo ocurrido en la década de los noventa, no solo en lo que se refiere a aspectos democráticos, éticos y vinculados a la defensa de los derechos humanos, sino también a los económicos.

De hecho, hoy se puede decir que en el campo liberal hay quienes tienen algo más de confianza en el rol que pueda ocupar el Estado en la economía de lo que los muchachos del IPE señalan, lo que ocasiona no pocos choques en columnas de opinión en los

últimos años. Aunque ambos grupos terminan compartiendo cierta tendencia a la preponderancia de la tecnocracia[161].

El sucesor de Camet en el MEF fue Jorge Baca Campodónico, el exjefe de la SUNAT. Su peso político resultó mucho menor al que tuvo su predecesor y, además, tuvo dos complicaciones adicionales. De un lado, la crisis internacional aumentó las presiones sobre su despacho y, de otro lado, los distintos gremios empresariales resintieron que el ministro no tejiera buenas relaciones con ellos.

Desde 1995, con la derrota en la Guerra del Cenepa, el gobierno peruano se lanzó a varias compras importantes de armamento. Confluyeron tres factores fundamentales: el deseo de los militares más duros por cobrarse una revancha con Ecuador, influenciar en la negociación con el vecino del norte con un mayor equilibrio del poderío militar entre ambos países y, por supuesto, posibles beneficios económicos de las negociaciones.

Vladimiro Montesinos comenzó a montar una red de personas de confianza para estas adquisiciones. El empresario Alberto Venero era uno de sus testaferros y fue comisionado para armar una compañía. Se asoció con Enrique Benavides Morales, proveedor de las Fuerzas Armadas y reclutaron a los empresarios Klaus Corpancho (alemán) y Moshe Rothschild (israelí). Establecieron las condiciones de ganancias, la cuota para Montesinos y crearon una red de empresas off shore en Panamá para que la pista del dinero se pierda. El grupo de Venero logró acuerdos en Bielorrusia para la adquisición de armamento.

El precio final fue negociado por Camet, quien no sabía de este acuerdo, pero emitió decretos secretos de urgencia para oficializar la compra. Los pagos usaron dinero de la privatización. Y, para comprometer aún más al Estado peruano, algunos de los aviones comprados tenían serias fallas.

La visita de Camet a Rusia no solo tenía el propósito de renegociar la deuda. También se buscó asegurar el mantenimiento de los aviones MIG 29 y Sukkoi 25 comprados a los bielorrusos. Desde Moscú, se aceptó con dos condiciones: la ya mencionada inclusión de la deuda pendiente por la compra de armamento durante el gobierno de Velasco —lo que le costó la salida a Camet—

y la adquisición de aviones rusos. El gobierno aceptó el trato. Pero esta vez, Montesinos recurrió a otro intermediario, James Stone, peruano–canadiense, que también era proveedor militar y tenía su propio núcleo de traficantes de armas.

El armamento no era el único negocio de Venero con Montesinos. El asesor le encargó crear la red de control de la Caja de Pensiones Militar Policial, bajo su manejo real desde 1992. Para ello, Venero tuvo como asociados a Luis Duthurburu Cubas y Juan Valencia Rosas, quienes también eran testaferros de Montesinos. La Caja comenzó a hacer grandes adquisiciones de bienes raíces, que luego eran vendidas para supuestamente favorecer al personal retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo mismo ocurría con la construcción de edificios y la administración de hoteles. Sin embargo, para 1999, la entidad pensionaria estaba desfalcada y con serios problemas de deudas. Montesinos y su gente fueron quienes ganaron con estas operaciones. Este problema generaría una serie de dificultades para el Estado peruano en las siguientes décadas[162].

En la Constitución de 1993, se redefinió la arquitectura institucional electoral. Hasta ese año, el Jurado Nacional de Elecciones concentraba todas las funciones vinculadas a esta materia. Con el nuevo texto constitucional, se crearon dos nuevas instituciones: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encargaría de la organización de cada una de las elecciones, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que tendría bajo su custodia el padrón electoral. Los jefes de ambas entidades eran nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. El JNE conservaba las decisiones jurisprudenciales sobre materia electoral.

Ya hemos visto en algunos pasajes de este libro el titubeante comportamiento de José Portillo Campbell, el primer jefe de la ONPE, designado en 1995. Pero ahora nos toca detenernos en el Jurado Nacional de Elecciones porque 1998 fue un año clave para su copamiento por el gobierno.

De acuerdo con la Constitución actual, los miembros del JNE son elegidos por la Corte Suprema —cuyo representante preside la entidad—, la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de

abogados, las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas. Cada una de estas personas cumple un mandato de cuatro años y se jubilan automáticamente al cumplir los setenta años.

A fines de 1997, el Congreso de la República aprobó la Ley 26898, que confería la posibilidad a los magistrados provisionales de obtener los mismos derechos que los jueces y fiscales titulares. Esta situación implicaba un aumento de la precariedad en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Peor aún, significaba que jueces y fiscales supremos provisionales pudieran tener la facultad de votar para elegir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Con la aprobación de esa norma, por primera vez, la oposición pronunció en el Congreso la frase «No al fraude», que acompañaría buena parte de su accionar político durante los siguientes años.

Para mayo de 1998, el Congreso varió otra regla del Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier tacha sobre candidaturas debía ser aprobada por cuatro votos de los cinco que componían el pleno de la entidad. Con ello, bastaba con tener dos magistrados afines para evitar que una tacha prosperara. Era una regla destinada a cubrir a Fujimori.

A mitad de año, el Jurado Nacional de Elecciones comenzaría a cambiar su composición. Álvaro Chocano, el presidente de la entidad que había dado el pase para iniciar el proceso de referéndum en contra de la re-reelección, cesó por llegar a los setenta años. Su reemplazo fue Luis Serpa Segura, alguien cercano a Montesinos. Por edad, para 1999, Serpa cedió el puesto a Alipio Montes de Oca, otro vocal supremo fiel al régimen. Los fiscales elegirían a su representante, José Carlos Bringas, en junio de 1998. En el caso de las universidades privadas, Ramiro de Valdivia Cano fue reelegido como su representante y mantuvo cierta imagen de independencia del gobierno.

En 1981, gracias a una norma que brindaba facilidades tributarias a la inversión privada en el sector petrolero, promovida por el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski, la empresa holandesa-británica Shell decidió apostar por hacer

exploraciones en el Perú. Ese año, la compañía suscribiría el convenio de operaciones de los lotes 38 y 42, ubicados en la selva de Cusco.

Seis años más tarde, Shell haría un anuncio inesperado. Luego de realizar cinco pozos exploratorios, se descubrirían abundantes reservas de gas natural en la zona conocida como Camisea, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención. En principio, esto debió cambiar los planes energéticos en el Perú para los próximos años. Sin embargo, entre la crisis económica, la violencia y un gobierno poco animado por la inversión privada, en 1988 se agotó la negociación con la empresa para la explotación del yacimiento.

En 1994, Shell firmó un convenio con Perupetro —la entidad estatal encargada de impulsar la inversión privada en hidrocarburos — para la evaluación y desarrollo del proyecto Camisea. Al año siguiente, la empresa, en consorcio con la compañía estadounidense Mobil, solicitó negociar el contrato de explotación, que se suscribió en 1996. Cuando ello ocurrió, Fujimori indicó que se había firmado «el contrato del siglo».

Pero el 15 de julio de 1998, el consorcio decidió no continuar con la segunda etapa del contrato, por lo que quedó resuelto. ¿Qué ocurrió? El Estado peruano había decidido que el proyecto de desarrollo se realizara en tres sectores: explotación, transporte y venta. Cada uno de los cuales tendría su propia licitación de concesión. Por tanto, Shell–Mobil no tendría el negocio esperado y decidió retirarse.

Existen dos versiones encontradas sobre este resultado. Según la periodista británica Sally Bowen, confluyeron dos elementos. De un lado, la desconfianza de funcionarios de Perupetro hizo que se buscara evitar un monopolio en el proyecto. De otro lado, Shell no pudo adecuarse a los pedidos del gobierno sobre precio y distribución del gas.

Para el politólogo japonés Yuzuke Murakami, la versión más fidedigna es que capitales chilenos, que controlaban las principales empresas vinculadas a energía eléctrica en Lima, hicieron un

cabildeo para evitar que el proyecto Camisea pudiera dotar de luz a la ciudad a tarifas bajas y, además, abastecer el norte de Chile.

Lo curioso es que, si seguimos la tesis de Murakami, una persona habría perdido y ganado al mismo tiempo: Pedro Pablo Kuczynski. El exministro, por aquel entonces, se concentraba en negocios particulares. A la vez, era presidente del directorio de Edelnor —hoy Enel—, empresa distribuidora de luz para la parte norte de la ciudad de Lima y, también, miembro del directorio de Cosapi, empresa constructora peruana. Cosapi había hecho un consorcio con la empresa estadounidense Bechtel —una de las mayores compañías de ingeniería del mundo— y la constructora brasileña Odebrecht —que dos décadas más tarde conmocionaría la política peruana— para suscribir un contrato con Shell y Mobil a fin de llevar el gas desde Camisea a Lima para el año 2001.

La cancelación del contrato puso en problemas económicos a Cosapi, de los que pudo salir vendiendo su participación en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado al este de Lima, y que era visto como un emblema de los nuevos tiempos de apertura económica en Perú[163].

Aunque las negociaciones de paz con Ecuador habían llegado a una fase final para la quincena de julio de 1998[164], a fines de ese mes se suscitó un incidente militar con el Perú. Aunque desde mayo existían algunas escaramuzas en la frontera, en los últimos días de julio, alrededor de 300 efectivos militares del país vecino habían atravesado la Cordillera del Cóndor y se encontraban en territorio peruano.

La invasión era únicamente conocida por las fuerzas de seguridad peruanas. Montesinos se la comunicó al canciller Eduardo Ferrero Costa en una reunión en la que estuvo también presente Víctor Joy Way, en su calidad de presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. El asesor le señaló al ministro que se aprestaba una operación militar de desalojo y que era indispensable ganar los frentes diplomáticos e informativos. Luego de la reunión, Ferrero buscó a Fujimori para presentarle su preocupación, pues consideraba que existían planes mayores de una intervención militar

peruana, lo que podría comprometer el proceso de conversaciones de paz.

En esos días, la situación fue particularmente tensa. El 23 de julio de 1998, Fujimori anunció en la ceremonia por el día de la Fuerza Aérea que habían comprado 18 aviones MIG 16. El 28 de julio, se informó que dos oficiales peruanos habían sido heridos por minas antipersonales. En el tradicional almuerzo con los altos mandos militares del 29 de julio, posteriores al desfile por Fiestas Patrias, Fujimori indicó que, si bien nadie deseaba un conflicto armado exterior, «si se trata de defender la soberanía nacional, no vamos a dudar en hacerlo».

Eduardo Ferrero buscó persuadir a Fujimori para que no autorizara acciones militares. Para ello empleó un documento elaborado por él el año anterior llamado «Hipótesis de conflicto», en el que claramente se señalaba todos los contratiempos diplomáticos, económicos y de imagen que tendría una acción armada peruana. A la vez, el canciller tenía que enfrentar las presiones del ministro de Defensa César Saucedo y del propio Hermoza Ríos.

El 1 de agosto de 1998, Perú le devolvió el golpe a Ecuador y tuvimos, por pocas horas, tropas infiltradas en territorio ecuatoriano. Sin embargo, Fujimori optó por una salida pacífica. Así se lo comunicó a Ferrero. Montesinos les diría a varios interlocutores que él convenció a Fujimori de abandonar cualquier plan militar, por los altos costos que ello supondría. Aunque los argumentos reales habían sido expuestos por el canciller. La Misión de Observación Militar Ecuador Perú (MOMEP) se encargó de separar a las tropas. Fujimori y Ferrero decidieron no acudir a la transmisión de mando entre Fabián Alarcón y Jamil Mahuad, que se celebraría el 10 de agosto. Mandaron a Ricardo Márquez en su reemplazo.

Pero quien quedó en mal pie fue Hermoza Ríos, quien finalmente tuvo un flanco débil sobre su continuidad. La evaluación política de Fujimori era clara: era mejor llegar al acuerdo con Ecuador en 1998 y evitar cualquier golpe que implicara un conflicto armado internacional.

El 20 de agosto de 1998, Nicolás Hermoza Ríos acudió a Palacio de Gobierno. Pensaba que estaría presente en una reunión del Consejo de Defensa Nacional. Previamente, a su llegada, Fujimori anunció a Montesinos y a varios generales presentes:

—He tomado la decisión de hacer algunos cambios importantes en el Comando Conjunto. Entonces, el cambio es el general Hermoza, quedaría relevado de su cargo de la presidencia del Comando Conjunto y —dijo dirigiéndose a Saucedo— le encargaría a usted el mismo cargo.

César Saucedo era un general muy cercano a Hermoza. Luego que Fujimori leyera las resoluciones respectivas a todos los presentes, Saucedo le dijo al presidente:

—Usted sabe la relación de amistad que tengo con el general Hermoza, una relación de muchísimos años; pero usted, con el alto criterio que siempre lo ha caracterizado, ha tomado esta decisión.

Luego de las lisonjas mutuas entre Saucedo y Fujimori, el mandatario se retiró. El comandante general del Ejército, Montesinos y las cabezas de la Marina, Antonio Ibárcena, y de la Fuerza Aérea, Elesván Bello, continuaron con una conversación sobre temas económicos. Acto seguido, Julio Salazar Monroe —el jefe nominal del SIN— y José Villanueva Ruesta —ministro del Interior— se burlaban del estilo de Javier Valle Riestra, sobre quien Villanueva brindó varias quejas. Luego volvieron los demás generales y Fujimori, acompañado de Hermoza. Saucedo leyó la resolución de despido. Fujimori se dirigió al veterano general:

—En realidad, se trata de una reunión especial que he querido hacerla aquí en Palacio, en relevo. Lo usual es que sea el ministro de Defensa quien en su despacho le haga entrega de esta resolución. Pero usted me ha acompañado durante seis años importantes, cruciales en el Ejército y en la época más difícil de la vida nacional y, por eso, le expreso mi pequeño reconocimiento. Yo estoy seguro de que la sucesión que asume el general Saucedo es la que va a garantizar esta continuidad.

Hermoza Ríos respondió, en medio de su sorpresa:

—Yo le agradezco el tiempo que me ha deparado usted su confianza, le agradezco la forma como he coordinado en la

institución. En esta oportunidad, debo agradecer a los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por el gran concurso que han tenido durante mi gestión en el proceso de pacificación. Sin duda que la designación del general Saucedo es lo más apropiado para el gobierno, lo más apropiado para las Fuerzas Armadas. Y yo les felicito desde ya y le ofrezco todo mi concurso para que pueda cumplir de la mejor manera posible.

Saucedo agradeció a Hermoza y, finalmente, Fujimori le dijo:

—Dejemos la formalidad de la presentación de esta transición y ahora, como amigos, como compañeros de ruta durante años. Sinceramente ha sido difícil, pero la labor ha sido extraordinaria, matizada por anécdotas, por dificultades, dificultades grandes y todas estas experiencias, pero hemos seguido adelante.

El presidente se retiró con Hermoza y los demás generales salieron unos minutos después. En un aparte, el mandatario, Montesinos y Saucedo hicieron las coordinaciones para el relevo formal. El asesor presidencial le dijo a Saucedo que haría su discurso de orden para agradecer a Hermoza, en la ceremonia castrense que se haría al día siguiente.

Así acabó el periodo más largo de un comandante general del Ejército en la historia del Perú. En Ecuador, el general César Durán Abad también era relevado. La versión que manejaron Bowen y Holligan es que el retiro de Hermoza y Durán se dio a pedido de la MOMEP.

Cuando Nicolás Hermoza Ríos se jubiló del Ejército, había acumulado poco más de veinte millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza, gracias a los excedentes de montos entregados por el departamento de Economía de la institución que comandó por casi siete años, así como por comisiones cobradas a los traficantes de armas de su confianza, encabezados por James Stone Cohen[165].

En septiembre de 1996, se inició la recolección de firmas para un referéndum que definiera si es que Alberto Fujimori podía postular o no a la reelección en 2000. Para ese entonces, no se sabía si la mezcla de organizaciones políticas diversas y debilitadas y el Foro Democrático —que agrupaba a personalidades civiles en contra del gobierno— podía tener un resultado positivo.

Contra todo pronóstico, así ocurrió. Otras organizaciones como sindicatos y asociaciones civiles se sumaron a los esfuerzos de recolección de firmas. El compromiso personal de Alberto Borea, Javier Diez Canseco, Lourdes Flores Nano, Rodolfo Robles y el congresista aprista Alejandro Santa María fue fundamental para llegar a la meta. La coyuntura de deterioro institucional vivida entre 1997 y 1998 ayudó a que más ciudadanos firmaran los planillones de firmas. Los estudiantes que participaron en las marchas contra la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional también se plegaron a este esfuerzo. Incluso Keiko Fujimori firmó uno de los planillones. Para diciembre de 1997, ya se tenían 900 000 firmas.

El 16 de julio de 1998, los peticionarios llegaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales con miras a que se valide el número de firmas suficientes para continuar con el proceso de la consulta popular. Se presentaron cerca de un millón y medio de firmas. Se requerían un millón doscientas mil rúbricas válidas.

Sin embargo, el 30 de julio de 1998, el exparlamentario fujimorista Manuel La Torre Bardales buscó que se aplicara la norma destinada a enviar la iniciativa de referéndum al Congreso de la República, como quiso hacerse infructuosamente en 1996. Esta vez, el jefe de la ONPE, José Portillo Campbell, le hizo caso al pedido de La Torre. Para Mauricio Mulder, esto era una resolución «dictada desde Palacio». En realidad, había sido hecha en el Servicio de Inteligencia Nacional, como lo discutió Montesinos el 21 de julio de 1998 con Oscar Medelius y el integrante del JNE, Rómulo Muñoz Arce.

El Foro Democrático apeló ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y, apenas tres horas después de la audiencia realizada el 20 de agosto de 1998, el JNE decidió que la iniciativa debía ir hacia el Congreso, por cuatro votos a uno. Con ello contradecía su propia jurisprudencia.

Así, el 27 de agosto de 1998, el Congreso de la República debía definir si es que se alcanzaban los 48 votos necesarios. La oposición contaba con 44 a 45 votos fijos y requerían tres más. Eran los de los congresistas independientes Susy Díaz, Luis Chu Rubio y Miguel Ciccia Vásquez. Ninguno de los tres estuvo presente en el

pleno del Congreso de la República. Mientras se desarrollaba el debate, miles de estudiantes esperaban el resultado en la Plaza Bolívar, frente al edificio central parlamentario.

El debate fue acre, pero el resultado era previsible: el oficialismo impuso sus números. Al final, hubo dos votos desde Cambio 90–Nueva Mayoría que fueron disidentes: Francisco Cardoso y Carlos Ferrero Costa. Los estudiantes en la Plaza Bolívar, enterados del resultado, comenzaron a gritar «esa mayoría es una porquería». La represión policial no se hizo esperar.

Lo que no supo el público hasta años después es que todas estas decisiones se habían concretado el 14 de agosto de 1998. En una reunión donde estuvieron presentes Vladimiro Montesinos y el entonces presidente del Congreso, Víctor Joy Way Rojas, a la que se sumaron después los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Serpa Segura y José Carlos Bringas, el centro fue el referéndum.

En la reunión que aparece en el vladivideo 1196, Montesinos asegura que él había trabajado la resolución de la ONPE en contra del referéndum. El asesor buscó los votos de Serpa y Bringas, pues ya había logrado los de otros dos miembros del JNE —Rómulo Muñoz Arce y Walter Hernández Canelo— a favor de mandar la decisión sobre el referéndum al Congreso. A Serpa, Montesinos le prometió la presidencia de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y de la Corte Suprema. El magistrado accedió. Finalmente, el asesor y Joy Way planearon cómo bajar los votos a la oposición, por lo que mencionaron la necesidad de quitar los votos de los independientes Díaz, Chu, Ciccia y Alfonso Baella Tuesta. En este último caso, se terminó plegando a la posición oficialista, en un alambicado discurso.

Cuando ya no tuvo el poder, Montesinos hablaría de un supuesto pago al congresista Chu, ya fallecido, así como de supuestas presiones con casos legales que mantenía Ciccia. Pero el único caso comprobado de irregularidades en esta votación fue el de Susy Díaz, a quien se le encontró responsable de haber recibido 20 000 dólares por irse a Tacna en esa votación clave. La exvedete es, además, una de las pocas personas que fue corrompida por el

régimen que ha pagado su reparación civil anexa a su sentencia de cuatro años de prisión suspendida[166].

Los helicópteros que sobrevolaron la fábrica en 1997 fueron la primera señal. Productos Paraíso del Perú fue la base de la fortuna de Baruch Ivcher y la venganza del gobierno buscaba doblegar la empresa. Y, sobre todo, a funcionarios clave.

Desde enero de 1998, comenzó una investigación contra Paraíso por una presunta defraudación de rentas aduaneras, es decir, por el pago de las tasas por las importaciones. Las notificaciones llegaron al domicilio de Rosario Lam, una empleada de la empresa que empezó como secretaria y era, para ese año, responsable de la importación de insumos químicos para los productos de la compañía. Lam era parte del personal de confianza de Ivcher y, por ello, el gobierno buscaba amedrentarla.

El 6 de febrero de 1998, Lam fue detenida por la policía. Debido a una enfermedad en la sangre, no fue confinada en una celda del penal de mujeres de Chorrillos, sino en el tópico del establecimiento penitenciario. A la par, el juez instructor del caso, Nicolás Trujillo, envió la orden de detención de Ivcher a INTERPOL, para procurar su captura internacional y posterior extradición con este pretexto. Ninguno de los cargos contra los funcionarios de Paraíso tenía sustento alguno.

Según Álvaro Vargas Llosa, Montesinos envió a un abogado de confianza, Javier Corrochano, a Miami para intentar negociar con Ivcher una venta de sus acciones. El empresario comenzó a buscar un comprador internacional. Su condición era clara: la libertad de Rosario Lam. El gobierno solo accedió a trasladarla a la Clínica San Borja, pero en calidad de detenida. Ivcher no aceptó el trato.

Para octubre de 1998, el juez Trujillo continuó el asedio judicial contra Ivcher. Esta vez, la emprendió contra su esposa, dos exgerentes del canal —Alberto Cabello y Julio Sotelo— y un exabogado de la estación, por presunta adulteración de los libros de matrícula de acciones. Posteriormente, Trujillo colocó una orden de captura contra el empresario, su esposa y una de sus hijas. Cabello huyó del país. A Sotelo lo condenaron a cuatro años de prisión

efectiva y, luego de una semana en la cárcel, lo trasladaron a la Clínica San Borja. Padecía una enfermedad coronaria.

En el caso Paraíso, a la mayoría de los acusados se les reservó la pena, pues tuvieron que huir del país. El día que se dictó la sentencia, el 22 de septiembre de 1998, un año después de la toma de Frecuencia Latina, la presidenta de la sala y el fiscal del caso terminaron compartiendo mesa en un restaurante de comida oriental en La Molina. Ante las cámaras, huyó en un auto sin placa.

En noviembre de 1998, Lam sería sentenciada a cuatro años de prisión condicional[167].

Para 1998, el Servicio de Inteligencia Nacional se había convertido en el auténtico hogar de Vladimiro Montesinos. Un espacio en el que no solo despachaba como socio principal del régimen, sino que también ejercía su vida personal.

De lo que se ha podido conocer sobre la vida personal del exasesor, es que en 1998 mantenía tres vínculos sentimentales estables. Trinidad Becerra era su esposa oficial, a cuyo domicilio en San Isidro iba en contadas oportunidades, básicamente para ver a sus dos hijas. En otras ocasiones, Montesinos mandaba a traer a su familia al SIN, sobre todo, para no perderse alguna celebración familiar. El asesor buscó compensar económicamente sus ausencias con lo que era su familia legal.

En paralelo, desde 1994, Jacqueline Beltrán se había convertido en su principal pareja extramatrimonial. La conoció como secretaria, primero en Palacio y luego en el SIN. Poco a poco, Montesinos le brindaría casas y negocios a ella y a su familia. Para 1996, el asesor la llevó a vivir a una casa de veraneo en la playa Arica, en Lurín, que convirtió en un auténtico búnker, con decoración de dudoso gusto y una enorme piscina. El asesor también aprovecharía los viajes de Fujimori para tomar cortas vacaciones con ella.

Más complejo era el vínculo con Matilde Pinchi Pinchi. Migrante desde Tarapoto a Lima, comenzó una carrera en la importación de bisutería desde Estados Unidos en los años setenta. El negocio comenzó a rendirle amplias ganancias y a brindarle ascenso social, pero también problemas vinculados a posibles casos de contrabando y subvaluación de mercadería. Es allí donde conoció a

Montesinos, quien le resolvió sus problemas judiciales y, a partir de ese momento, tejió una relación que comprometió aspectos profesionales, amicales y sexuales. Mientras los negocios de Pinchi Pinchi seguían creciendo, Montesinos comenzó a involucrarla en dos aspectos claves: el manejo administrativo de la caja chica del Servicio de Inteligencia Nacional y su conversión en ama de llaves de su oficina, que era el verdadero hogar de Montesinos.

El local del SIN, al mismo tiempo, buscó ser utilizado por Montesinos para una expansión de sus intereses en otras partes de la región. Colaboró con la CIA para operaciones de monitoreo de actividades cubanas y vinculadas a Medio Oriente. Al mismo tiempo, logró colocar un conjunto de agentes en Colombia, país fronterizo que mantenía un conflicto armado interno sin resolución desde 1964. La ambición del asesor era convertir al SIN en una suerte de gran central de Inteligencia para Sudamérica.

Asimismo, Montesinos mantenía un importante equipo legal para la elaboración de normas, resoluciones judiciales y administrativas. Al fiel Rafael Merino se sumó otro abogado de confianza, Pedro Huertas Caballero. Desde Chorrillos, se tenía un ojo en lo que ocurriera en el mundo jurídico peruano[168].

Entre octubre y noviembre de 1998, los televidentes del programa de César Hildebrandt, Enlace Global, serían testigos de las conversaciones que, en aquel tiempo, serían las más reveladoras de los manejos del gobierno frente a los medios de comunicación. En particular, con América Televisión, el canal más visto del país por aquellos años.

En 1992, el gigante televisivo mexicano Televisa compró América, que se encontraba en problemas económicos. Según dos biógrafos de Emilio Azcárraga Milmo, el hombre fuerte de la televisora mexicana en aquellos años, habría sido Fujimori mismo quien le habría sugerido la compra de la estación de televisión. De acuerdo con esta versión, «El Tigre» habría pagado un precio menor al original, debido a los atentados terroristas de aquellos meses en Lima.

Sin embargo, la Asociación de Radio y Televisión, un ente gremial de propietarios que presidía Genaro Delgado Parker, se opuso a la

medida e interpuso un amparo ante el Poder Judicial para establecer si una empresa extranjera podía ser accionista de una televisora peruana. Para 1993, Televisa trajo como principal directivo a José Enrique Crousillat, un peruano que había sido socio de Genaro Delgado Parker en Argentina y, durante los años ochenta y noventa, había producido telenovelas en Argentina y Estados Unidos. Crousillat era socio de Televisa en varios proyectos. A la par, la empresa mexicana enfrentaba problemas laborales, debido a que el Poder Judicial peruano evitó el despido de más de 200 trabajadores de la empresa.

Para cuando llegó la sentencia judicial, desfavorable a sus intereses, Televisa había traspasado las acciones del canal a Crousillat, a través de un préstamo hecho por la propia empresa mexicana. A partir de entonces, la estación de televisión comenzó a hacer gastos fuertes en la contratación de estrellas por montos elevados, al mismo tiempo que seguía adquiriendo programas al gigante azteca. El canal se posicionó como el líder en audiencia. El hijo de Crousillat, José Francisco, aparecía como la cara más amable y joven frente a la opinión pública. Las otras hijas del patriarca televisivo intervenían en la producción de programas y en la estación de radio para jóvenes que relanzaron en 1995.

La línea política de América era notoriamente cercana al gobierno. No llegaban a los extremos de Frecuencia Latina en la era de los Winter, pero era evidente que tenían sus simpatías puestas en Fujimori. Lo que no se conocía era que existían coordinaciones con el régimen para determinadas noticias.

El martes 15 de septiembre de 1998, Daniel Borobio, el publicista de Fujimori, llamó airado a José Francisco Crousillat. Ese día, Vladimiro Montesinos había dado, inusualmente, unas declaraciones a la salida de una instalación policial. El avance informativo de América Noticias había resaltado, en particular, lo más importante: que el asesor no iba a renunciar. Borobio le reclamó a Crousillat por esto y él le dijo que le transmitiera a Montesinos que esa parte de la noticia no iba a ser colocada en la edición central del noticiero. Crousillat le aseguró al publicista que estaba «desahuevando» a la gente, para que no tuvieran libertad de actuación.

Dos días más tarde, Borobio le indicó a Crousillat que levantaran una noticia sobre la llegada de un soldado herido por minas ecuatorianas en la cordillera del Cóndor, en detrimento de una marcha de estudiantes universitarios contra el gobierno. El empresario televisivo se comprometió a ello y, además, a colocar en el comentario de Humberto Martínez Morosini el tema de los soldados afectados por las minas. Así ocurrió. No apareció nada de la protesta estudiantil.

Cuando estas primeras grabaciones fueron difundidas, Borobio negó su voz, a través de un comunicado en Expreso. Crousillat también negó todo. Hildebrandt se ratificó en la noticia y, para noviembre, presentó nuevos audios.

Antes de las elecciones municipales del 11 de octubre de 1998, Borobio y Crousillat tuvieron otra conversación. El publicista aludió a las deudas de los canales, lo que el empresario buscó minimizar. Posteriormente, trataron sobre cuánto le tocaría a América sobre la pauta publicitaria contratada con la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller, el candidato oficialista a la alcaldía de Lima. Crousillat admitió al final del diálogo que le habían dado menos cabida a los spots de Alberto Andrade.

Finalmente, el 29 de septiembre de 1998, es el propio Montesinos quien llama a Crousillat. El asesor protestó sobre Borobio, tanto por su falta de interés en la campaña de Hurtado Miller como por las dudas tributarias del publicista. Posteriormente, Montesinos le pidió minimizar una nueva protesta contra el gobierno, sin desaparecerla y, además, aplaudió un reportaje en La Revista Dominical, el espacio periodístico más importante del canal, donde se habló de un supuesto complot terrorista para asesinar a la dupla central en el poder. La conversación acabó con la promesa de Montesinos de hablar con Crousillat sin intermediarios.

Esta vez, ya no hubo desmentidos. Pero, como veremos, la realidad quedaba corta[169].

Cuando César Hildebrandt dejó Andina de Televisión, luego de su exitosa temporada en 1998, Julio Vera Abad decidió reforzar su equipo con personas del mismo perfil opositor. Jaló a Luis Iberico

como nuevo director del noticiero central, donde colocaría a Gonzalo Quijandría como conductor.

Mientras que las noches de lunes a viernes serían ocupadas por Cecilia Valenzuela, quien había sido reportera de Caretas y otros espacios televisivos. Valenzuela había ganado notoriedad el año anterior por el reportaje que volvió a colocar la pregunta sobre el lugar de nacimiento de Fujimori en la mente de los peruanos. El espacio de entrevistas y chismes políticos, llamado Aquí y Ahora, duró unos meses.

En simultáneo, ATV preparó un espacio matutino dominical para competir con Contrapunto. Sin Censura sería conducido por Quijandría y tendría en sus filas a algunos reporteros del equipo que hizo historia en Frecuencia Latina, así como a otros novatos en el oficio. El programa tenía garra, pero también era evidente la escasez de recursos económicos. Quijandría se iría a mitad de año, pues obtuvo una beca para hacer estudios de maestría en Estados Unidos.

Frente a esta situación, la decisión de Vera fue traer de nuevo a Valenzuela y mover a Sin Censura al horario nocturno. Sin embargo, la aventura apenas duró dos meses. El espacio tuvo su última emisión el día de las elecciones municipales de 1998. Al día siguiente, cesaron a Luis Iberico como director del noticiero.

El Instituto Prensa y Sociedad, una asociación de periodistas fundada en 1993 para defender la libertad de expresión, publicó una alerta sobre la salida de ambos periodistas. Iberico declaró para IPYS que, días antes de la decisión de despido, Daniel Borobio había visitado a Vera Abad para ofrecerle un apoyo económico al canal, que tenía problemas de deudas, mediante la colocación de paquetes publicitarios a cambio de sacarlos del aire.

Como se verá, el trato terminó siendo mayor que un paquete publicitario.

El triunfo de Alberto Andrade en las elecciones municipales en Lima en 1998 era bastante predecible. El alcalde de la capital del Perú tenía una popularidad galopante, había hecho una importante inversión en la mejora del Centro Histórico de Lima y presentaba obras de infraestructura vial como oferta clave para el siguiente

periodo. Para la mayoría de los analistas, la discusión no era si iba a ganar, sino el margen de distancia con su competidor.

Andrade, además, consiguió la mayoría de las alcaldías distritales en la ciudad de Lima, sobre todo, en los sectores medios y altos, así como 21 alcaldías provinciales con su nuevo partido, Somos Perú. Este era un mérito, considerando que su organización era debutante en materia electoral y que, además, la cobertura periodística sobre su postulación fue menor a la que se esperaría con un candidato de su importancia. Andrade había seleccionado a sus candidatos entre empresarios y políticos que habían militado anteriormente en otros partidos, a partir de sus hojas de vida, brindándoles autonomía para decidir sus listas de regidores y equipo de campaña. Para octubre de 1998, era claro que Andrade sería un contendiente relevante en las elecciones presidenciales de 2000.

Para enfrentar a Andrade, el fujimorismo colocó como candidato a Juan Carlos Hurtado Miller, el primer presidente del Consejo de Ministros del régimen. La campaña de Hurtado se basó, sobre todo, en su carácter técnico y en la posibilidad de empatar los programas sociales del gobierno con la labor municipal. Obtuvo 32 % de los votos, nada mal para un candidato con poco carisma y cuya derrota estaba pronosticada de antemano.

No todo fue derrota para el gobierno. Por primera vez, el fujimorismo buscó construir un aparato proto–partidario de verdad. A partir de las redes creadas desde su trabajo como ministro de Agricultura en provincias, Absalón Vásquez formó un nuevo movimiento político: Vamos Vecino. Presentaron candidatos en casi todos los distritos y provincias del país y la apuesta les dio réditos. En votación absoluta, obtuvo 25.2 % en todo el país, cuatro puntos porcentuales por debajo de Somos Perú. Pero Vamos Vecino ganó más alcaldías distritales y provinciales que el partido liderado por Andrade.

El movimiento de Vásquez logró juntar a personajes con cierto ascendente en su región, con sobrevivientes políticos que venían de otras agrupaciones. Pero también tenía todo el apoyo del Estado. El caso más notorio era el del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), entidad vinculada al desarrollo de

proyectos locales de infraestructura. Durante varios años, FONCODES había trabajado técnicamente, gracias a la labor de Alejandro Afuso, un técnico que había llegado gracias a los buenos oficios de Santiago Fujimori. Afuso renunció en 1998, cuando el gobierno buscaba escoger con criterios políticos las localidades para estos programas. A partir de allí, el uso político de la institución sería clave para remontar la mala imagen de Fujimori en zonas urbanas[170].

Las conversaciones de paz entre Perú y Ecuador habían tenido un ritmo lento entre 1995 y 1997. Si bien hubo reuniones periódicas de los representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, era evidente que, durante los primeros dos años de diálogo, las dos naciones habían mantenido sus posiciones irreductibles, sobre todo el vecino del norte. Perú señalaba que la frontera a demarcar era aquella establecida por el Protocolo de Río de Janeiro, mientras que Ecuador seguía desconociendo el tratado y buscaba una «salida soberana» a los ríos Marañón y Amazonas, un viejo anhelo de dicho país.

Recién en noviembre de 1997, ambos países asumirían los diálogos en un grado más serio y menos confrontativo. Los países garantes facilitaron este cambio. La posición peruana era clara: la demarcación se haría en base al Protocolo de Río de Janeiro y se contemplaba la posibilidad de un Tratado de Comercio y Navegación con Ecuador para que el país del norte pudiera navegar en los ríos de la cuenca del Amazonas, sin cesión de soberanía. Ecuador accedió a que estos temas fueran dos de los puntos del diálogo y, además, se ampliaron a dos tópicos más: planes de integración fronteriza y medidas de confianza y seguridad mutua. En Brasilia, ambos países accedieron a conformar cuatro comisiones y, en enero de 1998, se aprobó un cronograma de trabajo. La idea era llegar a un acuerdo sobre los cuatro temas en mayo.

En junio de 1998, se culminó con la negociación del acuerdo de comercio y navegación. Ecuador terminó cediendo sobre sus posibilidades de acceso soberano a los ríos de la cuenca del Amazonas. Mientras que, en el tema demarcatorio, el grupo técnico jurídico le daba la razón al Perú en la mayor parte de los

argumentos señalados durante décadas frente a Ecuador. Las conversaciones se vieron interrumpidas por el proceso electoral en Ecuador y, como hemos visto antes, por los incidentes militares producidos entre julio y agosto de 1998, que culminaron en la salida de los presidentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ambos países.

El 16 de agosto de 1998, Fujimori y el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad se encontraron en Asunción, para la ceremonia en la que Raúl Cubas asumiría como presidente de Paraguay. Ambos se reunieron durante dos horas, sin testigos. Allí comenzaron a tejer una relación de confianza mutua, lejos de las posibles influencias de sus cancilleres. Con ello, el proceso de diálogo realmente se reanudó, en momentos en los que estaba pendiente algunos puntos del Tratado de Comercio y Navegación y la aceptación por parte de Ecuador de la demarcación establecida por el grupo técnico–jurídico. Para fines de agosto e inicios de septiembre, Mahuad y el canciller ecuatoriano José Ayala aceptaban en público que el Protocolo de Río de Janeiro era parte del marco de solución de las controversias con Perú. Era un cambio sustancial de la posición histórica de Ecuador.

El 4 de septiembre, Fujimori y Mahuad se volvieron a reunir, esta vez en Panamá, aprovechando una cumbre del Grupo de Río. El mandatario declaró que la intención era firmar el acuerdo global con Ecuador a fines de 1998 en Brasil. La reunión se produjo nuevamente a puerta cerrada. Una vez finalizada, Fujimori le dijo al canciller Eduardo Ferrero que se había logrado cerrar el tema del Tratado de Comercio y Navegación sin haber concluido aún con los temas demarcatorios. Ferrero había recomendado que se debatiera lo segundo para dar paso a lo primero, como había sido la estrategia peruana original. A criterio del entonces canciller, se perdió un arma de negociación.

El 26 de septiembre de 1998, Fujimori le informó a Ferrero que se habían desarrollado dos reuniones secretas en las que estaban comprometidos el abogado Fernando de Trazegnies, como representante personal de Fujimori, y Álvaro Guerrero, un banquero convocado por Mahuad. En esas reuniones apareció un tema

delicado: la posibilidad de entregar a perpetuidad un kilómetro cuadrado en Tiwinza a Ecuador, con la finalidad de que se haga un monumento en recuerdo a los soldados caídos en la Guerra del Cenepa en 1995. Las tratativas habían sido hechas a espaldas de Ferrero, quien estuvo durante unos días en Nueva York. Luego de su reunión con el canciller, Fujimori comunicó estas negociaciones a los altos mandos militares, sin mayor discusión. En realidad, el mandatario lo había hecho un día antes junto a Trazegnies, tampoco sin alguna alusión patriótica tan cara a los altos mandos castrenses. La ceremonia era una pantalla frente a su ministro de Relaciones Exteriores.

Ante la prensa, Fujimori solo hizo alusión a la posibilidad de «dos parques nacionales a cada lado de la frontera». Incluso llegó a decir que Tiwinza no era parte de las negociaciones, lo que faltaba a la verdad. Posteriormente, partió a Brasilia a una reunión con Mahuad y el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Allí se ajustaron algunos temas pendientes sobre comercio y navegación, el retiro de minas antipersonales y, por último, el tema del famoso kilómetro cuadrado.

Ferrero no estaba de acuerdo con la cesión de Tiwinza como propiedad ecuatoriana a perpetuidad. A su criterio, se trataba de un enclave en territorio nacional. Como fórmula de transacción, propuso una cesión en uso del país norteño en forma temporal y por un plazo determinado. Para el canciller, este elemento no era imprescindible para sellar la paz con Ecuador. Dado que no logró disuadir a Fujimori, buscó a Trazegnies, pero tampoco tuvo éxito.

Aunque Ferrero pensaba en renunciar por el tema de Tiwinza, su dimisión la terminó gatillando un tema de derechos humanos. Fujimori lo llamó para decirle que había instruido a la embajadora de Perú en Italia para que no suscribiera el Estatuto de la Corte Penal Internacional, un organismo jurisdiccional de procesamiento de individuos por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio y agresión. Para el canciller, esto era una afrenta y una cuestión que afectaba sus convicciones personales.

Ferrero fue al despacho de Alberto Pandolfi y presentó su carta de dimisión, señalando que había una divergencia sobre política

exterior, sin indicar la misma. Decidió no dar explicaciones a la prensa sobre el tema. La única reacción por parte de Fujimori fue que «se había pasado a un nivel de diálogo directo porque las conversaciones entre los cancilleres no avanzaban». También dimitió el vicecanciller Hugo Palma. Trazegnies fue nombrado en reemplazo de Ferrero.

El 3 de octubre de 1998, hubo una cuarta reunión entre Fujimori y Mahuad, esta vez en Nueva York. No hubo resultados, de acuerdo con lo informado a la prensa. Se decidió acudir a los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro para que brindaran una fórmula final, lo que Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos aceptaron a condición de que el documento fuera aprobado en forma vinculante por los Congresos de Ecuador y Perú. Versiones peruanas y ecuatorianas señalan que, en realidad, ambos presidentes decidieron que, para que la opinión pública de ambas naciones aceptara el acuerdo, era mejor que el mismo apareciera como validado por estos cuatro países.

Los debates parlamentarios se realizaron los días 14 y 15 de octubre de 1998. En la madrugada del día 16, el Congreso peruano aprobó la propuesta con 87 votos a favor. No se indicó que Tiwinza era parte del acuerdo a la representación nacional. Parte de la oposición votó con el gobierno en este tema. Recién el 23 de octubre se conoció el acuerdo y, al día siguiente, Eduardo Ferrero Costa informó al país que había renunciado por el kilómetro cuadrado concedido y por el estilo de Fujimori para manejar este tema. Varios diplomáticos, políticos y periodistas estuvieron de acuerdo con el excanciller.

En Loreto, se desataron las protestas, tanto por Tiwinza como por el acuerdo de comercio y navegación. En la capital de la región, Iquitos, un sentimiento generalizado era que se había cedido demasiado y que, además, los intereses de los armadores fluviales de Nauta —ciudad en la que nace el río Amazonas— iban a estar en peligro con las nuevas disposiciones. Las protestas generaron seis fallecidos.

El 26 de octubre de 1998, finalmente se selló la paz entre Perú y Ecuador. Para muchos, el hecho de que Fujimori y Mahuad —

descendiente de libaneses— hayan sido hijos de migrantes les brindó mucho pragmatismo para poder cerrar un acuerdo. Sin duda, es quizás el mayor legado positivo del decenio fujimorista, pero, dado el estilo del mandatario, no dejó de generar polémica. Hasta el día de hoy, Ecuador no ha tenido acceso real a Tiwinza ni ha aprovechado en la medida de sus posibilidades el acuerdo de comercio y navegación. Lo que resulta un auténtico logro es que, luego de sellada la paz, no se han suscitado mayores incidentes entre ambos países.

Para fines de 1998, Laura Bozzo era el personaje televisivo más polémico de la televisión peruana. Su programa seguía siendo el más visto en todos los hogares del país, por la exhibición de casos cada vez más truculentos, a tal punto que algunos comenzaron a sospechar que no todos eran verdaderos.

A pesar del discurso oficial de su programa, donde Bozzo pretendía aparecer como la «abogada de los pobres» y, además, como una emancipadora de las mujeres, en el fondo tenía un fuerte componente machista. Como enuncia la crítica cultural —y hoy congresista— Rocío Silva Santisteban, el espacio seguía perpetuando estereotipos de género, así como un rol femenino confinado a un ser digno de tutela. Es decir, muy lejos de cualquier real cambio en la vida de miles de mujeres en el Perú.

Al mismo tiempo, los juicios populares de la Bozzo, que acababan en regalos de carritos sangucheros para los panelistas de turno, condensaban dramas y miserias humanos en una sola hora. Peor aún, con cada vez mayor producción: cámaras y micrófonos ocultos eran destinados a presentar la vida privada de la gente para consumo nacional. No importaba si el caso era verdadero o no —durante dos décadas, aparecieron reportajes y testimonios sobre la falsedad de varios casos, algo que Bozzo no ha reconocido nunca—, sino el show en sí mismo. Y para condimentar el espectáculo, al ser el espacio estelar del canal con más rating del país, Bozzo pudo tener a las mayores figuras latinoamericanas de la música popular en su set.

Sin embargo, con todo lo criticable que era su espacio, hasta los últimos meses de 1998, Bozzo no había mentado la política en el

set. De hecho, sus temporadas de incursión en el talk show habían sido, claramente, una limpieza de la ríspida política antifujimorista que alguna vez fue.

Todo cambió el 13 de noviembre de 1998. Ese día, José Francisco Crousillat invitó a Bozzo a almorzar. Pero el destino no fue un restaurante con vistas al mar, como la animadora esperaba, sino el Servicio de Inteligencia Nacional. Allí conoció a Vladimiro Montesinos. Como ocurría en el SIN, la comida fue espléndida y de alto nivel, mientras que la conversación fluyó hacia temas políticos. Al igual que con otros interlocutores, Montesinos le habló sobre sus diálogos con Abimael Guzmán y su versión en torno a la derrota del terrorismo.

Cuando Bozzo regresó al canal, no se contuvo y mandó saludos a Montesinos, de quien dijo era «el hombre más inteligente de este país».

Días más tarde, Montesinos la llevó a la réplica de la residencia del embajador japonés y allí le hizo una exhibición de tropas y vehículos militares. Así comenzó el deslumbramiento de la conductora por el asesor.

El programa de César Hildebrandt marcaba la pauta política opositora y comenzaba a ser el más visto en los sectores más acomodados del país. A la par, el conductor de Enlace Global se convirtió en el primer periodista en aparecer entre los diez primeros de la tradicional Encuesta del Poder, un sondeo hecho por el Grupo Apoyo entre las élites del país. Algo que era bastante incómodo para el gobierno. El espacio daba tribuna a políticos de oposición, reportajes de impacto y comentarios del propio Hildebrandt que eran bastante duros con Fujimori. El periodista también tenía este tipo de intercambios en entrevistas con personajes del gobierno, que no dejaban de acudir a su programa.

Para octubre de 1998, las relaciones con Red Global comenzaron a deteriorarse. Hildebrandt, quien siempre ha defendido posiciones nacionalistas frente a Chile y Ecuador, criticó furibundamente durante semanas el acuerdo de paz con este último país. En particular, criticaba la cesión del kilómetro cuadrado en Tiwinza. Gisela Valcárcel, la popular animadora de televisión, defendió esta

cesión en su programa, que se propalaba en el mismo canal, lo que le valió la mofa y la crítica del periodista en su espacio nocturno.

El propietario de la estación de televisión, Genaro Delgado Parker, dejó a los dos expresarse, pero para rebajar tensiones con el gobierno, se presentó en el programa de Hildebrandt para dejar en claro que la posición editorial del canal era apoyar los esfuerzos para cerrar las fronteras con el país vecino.

A fines de noviembre de 1998, un pleito doméstico alteró más las relaciones. Hildebrandt denunció en su programa que un colaborador no recibía su pago, lo que generó una crítica a Delgado Parker. En represalia, Genaro no permitió que el siguiente programa del periodista saliera al aire y colocaron un concurso de belleza. La explicación dada a Hildebrandt fue que se trataba de un espacio contratado que permitiría, precisamente, cubrir las urgencias económicas por las que comenzaba a pasar el canal.

El martes 1 de diciembre, el programa no volvió a salir al aire. Esta vez, el pretexto era una supuesta falla en el transmisor del canal, ubicado en el Morro Solar. Un miembro del equipo de Hildebrandt indagó con gente del equipo técnico de la televisora y puso en duda la versión que se había dado.

Así, el miércoles 2 de diciembre, el estudio donde se emitía el programa de Hildebrandt, ubicado en San Borja, contaba con la presencia de varios periodistas. Se les había convocado desde la producción del programa. Hildebrandt inició el espacio acusando una censura por parte de Delgado Parker, en un monólogo extenso en el que se sucedieron las diatribas tanto contra el propietario del canal como contra el gobierno.

Gustavo Delgado Cafferata, hijo de Genaro y gerente del canal, fue hacia San Borja una vez que le avisaron lo que estaba sucediendo en vivo. Pidió entrar al set y, en forma educada, reiteró los argumentos que antes se le habían dado al periodista sobre sus dos abruptas salidas del aire. Mientras, Genaro era alertado de lo que pasaba y dejó una cena en Miami para ponerse al teléfono. Y allí se produjo el siguiente diálogo:

—Son absolutamente ridículas tus expresiones acerca de que nadie pueda tener la responsabilidad de haberte cortado un

programa. Primeramente, ese es un derecho de la estación. La estación puede colocar el programa cuando quiera y sacarlo cuando quiera. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de esta. Tu contrato dice que podemos grabar el programa previamente o emitirlo directamente a nuestro solo juicio. El hecho de que esto último te lo hayamos permitido siempre, con el mayor respeto, no te da derecho a decir todas estas cosas que estás diciendo. Yo quiero respaldar a mi hijo Gustavo por su actuación demasiado cortés contigo, porque te estás portando mal con la empresa que te da cobijo y te da trabajo. Te estás pasando de la raya y estás llevando las cosas a un nivel de ruptura. Te hemos contratado con la buena intención de darle al país otra versión de las cosas, una versión diferente de lo que piensa mucha gente. Eso es una cosa y otra darte explicaciones por fallas técnicas que ocurren en cualquier parte del mundo y, sobre todo, porque estamos cambiando todos los transmisores de la empresa, que son bastante antiguos. Yo te reclamo que seas congruente, que seas serio y que reconozcas que hemos sido responsables y hemos actuado con un criterio de amplitud contigo.

—Muy bien. Los televidentes se habrán podido dar cuenta de la personalidad verdadera, cuando está sometida a los humos de su carácter, del señor Genaro Delgado Parker. Yo soy su empleado, yo soy su vasallo, yo soy una pieza intercambiable, un comodín de su ajedrez de poder y de dinero y yo debo someterme. Él tiene el poder, él tiene el dinero y yo soy un asalariado que tiene que callar. Yo debo aceptar esta imposición. El zar de las telecomunicaciones muestra su verdadero rostro. Muy bien, Genaro, así es la cosa.

—Esa es otra insolencia de tu parte.

—No es una insolencia porque, sabes qué, aquí no hay mayorazgos, ni hay principados.

—Bueno, ¡lanza tu candidatura nomás!

—Y tú defiende Tiwinza, Genaro, como has querido. Muy bien, última pausa para el final del programa.

En el bloque final, Hildebrandt continuó con su perorata. Dio pase a un par de comentarios sobre sindicatos, anunció su renuncia al aire y luego presentó una encuesta de Analistas y Consultores

donde Alberto Andrade duplicaba en intención de voto a Fujimori para las elecciones generales de 2000 y, además, le ganaba con cuarenta puntos de diferencia en una probable segunda vuelta. También Fujimori perdía en segunda vuelta con Luis Castañeda Lossio, el expresidente del Instituto Peruano de Seguridad Social. Las cifras tampoco eran favorables al acuerdo de paz con Ecuador. La última cifra era feroz: el 95 % de encuestados pensaba que el gobierno, a través de Vladimiro Montesinos, controlaba los medios de comunicación.

Para terminar su programa, Hildebrandt hizo una nueva alusión al incidente con Genaro. Y luego aludió al gobierno:

—No arriemos la bandera de la independencia, sigamos luchando. Este es un gobierno sórdido, que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como coartada. Inventarán otra o no inventarán otra. Esto no es gratis. El corte del programa dos días, las groserías de Genaro, no son gratis. Esto es un mensaje, lo que se viene es duro. Es duro y es bravo.

Gustavo Delgado entró al set nuevamente para dialogar. Y allí Hildebrandt dijo su última línea:

—Yo ya no estoy dispuesto a entrar en esta jugarreta en la que Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Si tú quieres quedarte, te quedas.

Con 50 puntos de rating en el sector AB, acabó el programa de Hildebrandt. Y tuvo razón en su intervención sobre el gobierno[171].

---

152 Sobre el Fenómeno del Niño, véase Zapata y Sueiro (1999), Bowen (2000: 329-331), Murakami (2018: 511), Parodi (2012: 169-170) y el artículo «PPK, sus mandamientos y el general Nureña» de Miguel Ramírez publicado en *Trome* (http://blogs.trome.pe/historias-nunca-contadas/2016/08/ppk-sus-mandamientos-y-el-general-nurena/).

153 Sobre Laura Bozzo, nos basamos en Sifuentes, Migoya y Montes (2015: 58-61, 65-81), Coya (2011: 114-115), Vivas (2008: 475-477) (2018: 66-69) y «La conductora», de Robles en Gamarra (2007: 229-233). Voces académicas sobre su conducta televisiva y política son las de Silva Santisteban (2008: 145-147, 151-153) y Degregori (2012 108-111).

154 Los ataques contra Mohme, Páez, Arrieta y Rospigliosi son documentados en el libro de este último (2000a; 139-146). La hipótesis del sociólogo y periodista es que estos suplementos difamatorios eran elaborados en el mundo militar, lo que resultó siendo

cierto.

155 Sobre el recorte de facultades contra el Consejo Nacional de la Magistratura, véase Bowen (2000: 311), «El Consejo Nacional de la Magistratura» de Francisco Eguiguren (http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17012) y Dargent (2006: 149-150).

156 La sección sobre las fisuras empresariales puestas en evidencia durante 1998 se basa en Durand (2003: 406-408) y Cotler (1998: 29-40) (1998: 17-37). También consultamos Murakami (2018: 495). En 2001, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y ADEX dejaron CONFIEP. ADEX volvió en 2002 y nuevamente se apartó en 2014, hasta el día de hoy. Las otras dos entidades no volvieron al gremio paraguas de los empresarios.

157 En torno al caso Zanatta, véase Conaghan (2005: 158-159) y Vargas Llosa (2000: 325-357).

158 Sobre el incidente entre Barry McCaffrey y Vladimiro Montesinos, revisamos Bowen y Holligan (2003: 216-221) y McClintock y Vallas (2005: 213-214).

159 El relato sobre el breve paso de Javier Valle Riestra por la Presidencia del Consejo de Ministros se basa en Bowen (2000: 362-363), Murakami (2018: 494) y el *Diario de Debates* del Congreso de la República.

160 En torno al controvertido legado de Jorge Camet, consultamos sobre todo Parodi (2019a: 121-125), Bowen (2000: 327-329), Durand (2003: 380-381) (2006: 316-317), Murakami (2018: 420-422) y Quiroz (2019: 340–342), así como varios artículos periodísticos aparecidos al fallecimiento del economista, en 2013.

161 Nuestro comentario sobre las diferencias de matiz entre el Instituto Peruano de Economía con la tecnocracia económica actual se basa en Grompone (Gálvez 2017: 143-202). Sobre el breve periodo de Baca Campodónico en el MEF, revisamos Dargent (2014: 100). Otro texto de este último, *Demócratas precarios,* sustenta una crítica a tecnócratas y empresarios que se acercaron al régimen sin cuestionar sus aspectos más controvertidos o deliberadamente delictivos (2019: 94-95).

162 Las compras de armamento en forma irregular a Rusia y Bielorrusia están documentadas Bowen y Holligan (2003: 234-247) y Quiroz (2019: 343–346). De este último también se desprende el relato sobre los malos manejos de la Caja de Pensiones Militar Policial.

163 Las compras de armamento en forma irregular a Rusia y Bielorrusia están documentadas en Bowen y Holligan (2003: 234-247) y Quiroz (2019: 343 – 346). De este último también se desprende el relato sobre los malos manejos de la Caja de Pensiones Militar Policial.

164 La discusión en torno al proceso de paz con Ecuador se basa en Bowen (2000: 239-246), Ferrero Costa (2018: 125-318) y McClintock y Vallas (2005: 144-151).

165 La salida de Nicolás Hermoza Ríos de su puesto como comandante general del Ejército es descrita por Bowen y Holligan (2003: 262-266) y en los videos 1168 y 1169 de la colección Montesinos, cuya transcripción está en el volumen VI de *En la sala de la*

corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998–2000) (2004: 3175-3240). Complementariamente, revisamos Ferrero Costa (2018: 226). Sobre los robos de Hermoza Ríos, nos basamos en Gamarra (2007: 27-30, 43-47).

166 Nuestro relato sobre el rechazo al referéndum sobre la inconstitucional reelección de Fujimori se basa en Bowen (2000: 366-367), Conaghan (2005: 132-138) y Murakami (2018: 491-492). También revisamos el *Diario de Debates* del Congreso de la República. El video 1196 es transcrito en el volumen III de *En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos* (1998–2000) (1727-1767). Consultamos también el documental *Su nombre es Fujimori* de Fernando Vílchez.

167 El asedio contra Productos Paraíso del Perú y los funcionarios de confianza de Baruch Ivcher está documentado en Vargas Llosa (2000: 359-415) y en la sentencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

168 La vida cotidiana de Montesinos en el SIN se basa en Jochamowitz (2019a: 190-202) y Bowen y Holligan (2003: 267-288, 290-292).

169 Las conversaciones entre Crousillat, Borobio y Montesinos se encuentran en Rospigliosi (2000a: 101-115). Nos basamos en su relato para reconstruir los hechos. La historia de América Televisión durante los años noventa se basa en Vivas (2008: 501-505). La salida de periodistas críticos de ATV se sustenta en ambas fuentes. Los datos mexicanos sobre Televisa y los Crousillat aparecen en Fernández y Paxman (2013: 449, 468, 509-511).

170 En torno a las elecciones municipales de 1998, véase Barr y Dietz (2006: 74-75), Bowen (2000: 367-368), Degregori (2012: 80-85), Murakami (2018: 509-510) y Planas (2000: 381-383). Complementariamente, revisamos Zavaleta (2014: 58-59), quien cataloga a Somos Perú y Vamos Vecino como las primeras «coaliciones de independientes» de alcance nacional. Sobre la salida de Alejandro Afuso de FONCODES, consultamos una completa nota del *Clarín* de Argentina: https://www.clarin.com/ediciones-anterioresfujimori-manipula-fondos-sociales-reeleccion_0_SJwWgGgyLhe.html.

171 La salida del aire de César Hildebrandt se basa en Coya (2011: 158-159), Rospigliosi (2000a: 120-121), Vivas (2008: 335) y los videos del programa final del 2 de diciembre de 1998, en el que Hildebrandt protagonizaría la más sonada de sus renuncias.

CON TODO EL APOYO

(Enero – Diciembre, 1999)

1998 había sido un año de mucho desgaste político para el gobierno de Fujimori. La era Pandolfi estaba agotada y se requería un cambio de equipo. Así, el 5 de enero de 1999, juramentaría un gabinete remozado, con varias figuras técnicas y otras más políticas.

La sorpresa de la jornada fue la presentación como ministra de la Mujer de Luisa María Cuculiza, enfermera con una carrera en temas de bienestar infantil, conocida en Lima por sus dos gestiones al frente de la alcaldía de San Borja, distrito de clase media alta cuyos servicios mejoraron ostensiblemente durante sus mandatos. Cuculiza había sido elegida para un tercer periodo en su distrito por las filas de Somos Perú. Rápidamente, aplicó su estilo bronco y directo al servicio del régimen. La ministra mantuvo alta popularidad por un tono confrontativo frente a la violencia de género, que se focalizaba básicamente en la punición, sin resolver los problemas de fondo vinculados al machismo.

Otras figuras convocadas eran Belisario de las Casas, criador de caballos de paso —y excompañero de promoción de Fujimori en la UNALM—, al que se le dio la cartera de Agricultura, y César Luna Victoria, abogado socio del estudio Muñiz —cuya principal cabeza era congresista oficialista—, quien pasó a ser ministro de Industria. A Pandolfi lo mandaron de regreso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Para abril, el equipo se reforzaría con Edgardo Mosqueira, un abogado proveniente del Instituto Libertad y Democracia, con un perfil tecnocrático pero que gustaba de ensuciarse los zapatos en el campo.

Fujimori puso a la cabeza del gabinete a Víctor Joy Way, alguien de suma confianza. Lo que no se sabía para ese entonces es que el flamante presidente del Consejo de Ministros había montado una red de corrupción para la compra a precios sobrevalorados de medicinas, tractores y otros equipos provenientes de China, país de sus ancestros. Las empresas importadoras de Joy Way ganaron millones de dólares. Algunos de estos elementos adquiridos habían sido repartidos durante las campañas electorales de 1993 y 1995.

A Joy Way también se le encargó la cartera de Economía. Desde allí, ofreció una reactivación económica que, en realidad, constituía gasto focalizado para los sectores más pobres, con fines políticos. Aunque no se perdieron ciertos fundamentos macroeconómicos, Joy Way se terminó de deshacer de los asesores que provenían desde la gestión de Camet y que se habían quedado con Baca Campodónico.

No solo hubo cambios en las esferas civiles. Para 1999, la promoción «Centenario del Combate del Dos de Mayo» de la Escuela Militar de Chorrillos tenía ya varios generales encaramados en la cúpula. Se trataba de los hombres que habían egresado junto a Vladimiro Montesinos en 1966. El principal era José Villanueva Ruesta, ministro del Interior. Para agosto de 1999, Villanueva pasaría a ser comandante general del Ejército, mientras que su antecesor, César Saucedo, ocuparía su puesto en el edificio de la urbanización Corpac. La promoción Montesinos comenzó a comandar varias regiones militares y a ocupar los puestos más altos de comando. Oficiales destacados de otras promociones, como Carlos Tafur Ganoza y Roberto Chiabra, fueron enviados a misiones diplomáticas o al retiro, por ser incómodos. El asesor llegó a colocar a su cuñado, Luis Cubas Portal, como jefe de la estratégica Segunda Región Militar, con sede en Lima.

En abril de 1999, Julio Salazar Monroe, quien había dejado la jefatura nominal del SIN en 1998, abandonaba el Ministerio de Defensa y se le buscó un puesto diplomático en Venezuela. Su reemplazo era Carlos Bergamino Cruz, quien sería el último ministro de la cartera en el régimen. Salazar Monroe había dejado su despacho en Chorrillos al almirante Humberto Rozas, sin mayores cambios en la real cadena de mando en Inteligencia[172].

El 8 de enero de 1999, el gobierno recibió una buena noticia. Juan Luis Cipriani sería nombrado nuevo arzobispo de Lima, en reemplazo de Augusto Vargas Alzamora, quien cumplió la edad de jubilación obispal de 75 años.

Aunque las relaciones de Cipriani con el gobierno se habían enfriado un poco —Cipriani había dejado el directorio de FONCODES en 1998—, no dejaba de ser el prelado más cercano al

régimen. El nuevo arzobispo pertenecía al Opus Dei, prelatura personal del papa que había adquirido fuerte poder en España desde los tiempos de la dictadura integrista de Francisco Franco y cuyo crecimiento global había sido bendecido por el entonces pontífice —y luego santo— Juan Pablo II.

El Opus Dei tiene una posición conservadora bastante peculiar: confina a las mujeres a un rol secundario, condena el divorcio, el aborto y la homosexualidad y, además, tiene una fuerte ética del trabajo que combina la caridad cristiana con los fines de lucro. Estas características se alían con fuertes medidas de secretismo alrededor de la entidad.

En el caso del régimen de Fujimori, esta organización católica tenía dos figuras de peso en el gobierno: la polémica congresista Martha Chávez, defensora de las principales abominaciones del régimen, y Federico Prieto Celi, periodista que fue asesor durante cuatro años en el Ministerio de Educación.

Además de las coincidencias con Fujimori, Cipriani tenía una agenda particular y lo hizo notar desde el inicio de su gestión. En marzo de 1999, Fernando Rospigliosi dio a conocer en su columna semanal en Caretas que el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres, estaba sosteniendo reuniones con los docentes de dicha casa de estudios para enfrentar la arremetida del arzobispo. De acuerdo con los estatutos de la PUCP en 1999, la cabeza de la Iglesia Católica en Lima debía ser nombrado Gran Canciller, es decir, presidente honorario de la universidad, un cargo sin mayores prerrogativas ejecutivas. Sin embargo, Cipriani había solicitado una ampliación de sus facultades para tener injerencia directa en la elección del rector, autoridades y docentes y, además, en el currículo. Para la PUCP, esta era una clara amenaza a su autonomía.

El arzobispo buscaba aprovechar una añeja diferencia entre la Universidad Católica y la Santa Sede. Desde 1969, la PUCP se regía bajo la Ley Universitaria peruana, que establecía un sistema de cogobierno entre docentes y alumnos, así como la independencia en sus acciones. El estatuto de la PUCP mantuvo un nombramiento de rector que combinaba las obligaciones de la legislación peruana

con una ratificación en Roma. Pero para los sectores más conservadores no era suficiente. Esta disputa, en la que Cipriani pondría toda su atención, recién acabaría en 2016, en otro pontificado y con el poder desgastado del entonces flamante arzobispo[173].

En medio de estas disputas, el nombre de Alan García volvió a pronunciarse en 1999. El expresidente brindó una entrevista a Contrapunto, el programa periodístico dominical de Frecuencia Latina, ya en manos de los Winter, a mediados de febrero de ese año. Allí calificó a la oposición de «demasiado legalista» y ni siquiera hizo un guiño a lo ocurrido dos años antes con Ivcher.

Para Fernando Rospigliosi y la revista Caretas, la declaración de García sonaba a un posible arreglo con el gobierno. En opinión del sociólogo:

—¿Por qué al gobierno le interesaría un rival hábil al frente? Porque además de dividir los votos de la oposición García tiene una característica clave: no puede ganarle a Fujimori. No solo porque el lastre de su pasado le impediría alcanzar una mayoría electoral ahora, sino porque es un candidato al Congreso, que no compite por el cargo con el reeleccionista presidente. Y, más importante, porque el gobierno tiene todas las cartas en la mano. Puede permitirle o no candidatear, puede permitirle o no el acceso a la TV que controla, puede permitirle o no regresar si es que es candidato y, con seguridad, elegido congresista.

En realidad, García ya había comenzado los aprestos para un posible regreso político en 1995. Ricardo Pinedo era asesor parlamentario de Agustín Mantilla cuando recibió un correo suscrito por el expresidente. Pinedo no le dio crédito. Dos minutos después, Alan llamó. Mantilla no quiso saber nada de su compañero, apestado dentro de su propio partido. Pero Pinedo sí. Y allí comenzaron un plan: grabar discursos de García vía telefónica, que luego serían replicados en pequeñas estaciones de radio fuera de Lima. Sería la forma de mantener vivo el recuerdo de Alan para sus partidarios.

Meses más tarde, comenzaron a aparecer pintas en las calles de Lima: «Alan Vuelve». Para muchos, en efecto, era el cuco perfecto

para un gobierno que necesitaba inocular el miedo sobre un posible regreso al pasado. Una aventura que, como veremos, tendría varias aristas. Sin embargo, más allá de las voces que señalaban un posible «tongo» entre Alan y Fujimori, al final, el gobierno aprobó una norma que le impidió postular a García en agosto de 1999. El expresidente, como tantas otras cosas, se llevó a la tumba si realmente hubo algún tipo de arreglo o si el régimen, como a tantos otros, lo terminó usando[174].

En abril de 1999, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) presentó un informe elaborado por la abogada feminista Giulia Tamayo. El documento se llamaba «Nada Personal. Reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú». Algunos de sus hallazgos se publicaron en El Comercio y La República durante los meses anteriores, pero el texto completo resulta sobrecogedor.

Para 1996, el gobierno había implantado el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). En noviembre de ese año, Tamayo había encontrado las primeras irregularidades en torno a su aplicación. En una campaña de anticoncepción quirúrgica en Huancabamba, localidad de la sierra de Piura, se encontró en un consultorio médico un documento con las metas numéricas esperadas y ejecutadas en dicha zona del país.

Las denuncias prosiguieron durante los años posteriores, tanto al equipo de Tamayo como a otras organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo, que tenía una adjuntía para derechos de la mujer. Los reportes indicaban que existían presiones sobre el personal médico para el cumplimiento de las cuotas sobre esterilizaciones, lo que conducía a actos como ofrecimiento de dinero a médicos y enfermeras, promesas de promociones y amenazas de despido, y el inicio de ferias y campañas destinadas básicamente al público femenino.

Las afectaciones eran aún mayores. Muchas de las operaciones de esterilización forzada se hicieron mediante engaños, coacciones o graves amenazas. Dentro de los testimonios recogidos por

Tamayo y la Defensoría del Pueblo, se encontraron operaciones realizadas aprovechando otras intervenciones, con el consentimiento de los esposos ante la negativa de las mujeres, o con engaños sobre la reversibilidad de la operación. En otros casos, se humilló a las pacientes, se les presentó como única opción la ligadura de trompas, no se mostró la información completa sobre riesgos quirúrgicos, como tampoco se brindó, en muchos casos, acompañamiento psicológico.

Para completar el cuadro de vulneraciones a los derechos humanos, muchas de estas intervenciones se realizaron en condiciones insalubres, lo que generó afectaciones a la salud de las pacientes y, en ciertos casos, algunas de las mujeres intervenidas fallecieron.

Tal fue el escándalo que Juan Luis Cipriani, defensor del régimen en varias materias, tomó distancia del gobierno en relación con este tema. No solo brindó declaraciones públicas en contra de lo ocurrido, sino que renunció al directorio de FONCODES en 1998.

El caso emblemático, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el de María Mamerita Mestanza Chávez, a la que se sometió a diversas formas de hostigamiento en La Encañada (Cajamarca) para que se practicara una operación de esterilización. Las amenazas incluyeron mentiras sobre posibles sanciones para las personas que tuvieran más de cinco hijos. Mestanza fue operada en marzo de 1998, sin exámenes médicos preoperatorios. Falleció una semana después de la operación debido a una infección generalizada.

¿Esto fue casualidad? Según el denominado Plan Verde elaborado a inicios de la década de los noventa, se contemplaba que era «conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados». Las campañas, según pudieron verificar las indagaciones de Tamayo y de la Defensoría, se focalizaron en los sectores más pobres de la sociedad peruana.

Tamayo tuvo que huir del país hacia Uruguay, debido a las amenazas en su contra por esta investigación. La Defensoría del Pueblo continuó con el examen del caso. Los hallazgos de la

entidad estatal arrojaron que los sesgos de género eran claros: entre 1996 y 2001 se hicieron más de 272 000 ligaduras de trompas en el marco del PNSRPF, frente a poco más de 20 000 vasectomías. Aunque no se puede comprobar hasta el momento un componente étnico marcado, sí queda claro que el programa no presentaba toda la información completa para que una mujer que no hablara castellano pudiera tomar una decisión meditada.

Una coalición de organizaciones no gubernamentales vinculadas al enfoque de género, el Grupo Impulsor Nacional, hizo eco de las denuncias sobre prácticas abusivas. Pero también planteó que el PNSRPF se estaba concentrando en promover operaciones quirúrgicas antes que en la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Sin embargo, hubo una división tanto entre las organizaciones feministas como entre las congresistas mujeres, pues se pensaba que los avances en materia de planificación familiar podían colocarse en peligro con estas denuncias. Fujimori respondió duramente a las críticas en un discurso brindado en la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1999. Quienes quedaron en la vanguardia de la protesta fueron las integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, surgido en 1996 como uno de los espacios feministas opuestos claramente al régimen.

Con excepción de las violaciones a la libertad sexual durante el conflicto armado interno, se trata de la violación sistemática de derechos de las mujeres más grave de la historia contemporánea peruana. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay una sanción penal por estos eventos, ni tampoco una indemnización a las afectadas. Fujimori y los exministros de Salud Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer son investigados por estos hechos. Una muestra de lo poco que el país se compromete con los derechos de las mujeres[175].

La Revista Dominical nació en 1991 como el programa dominical de reemplazo al espacio de César Hildebrandt en América Televisión. Desde su inicio, la conducción estuvo a cargo de Nicolás Lúcar, periodista formado por su exjefe y que había tenido un pasado trotskista. Con los años, Lúcar formaría parte de la familia

propietaria del canal, por su matrimonio con una de las hijas de José Enrique Crousillat.

Desde que nació, LRD se convirtió en un espacio que prefirió la nota sobre hechos sociales que impactaban a la opinión pública antes que la noticia política. Y cuando esta se tocaba, implicaba espacios de negociación con el gobierno para obtener primicias como notas en la cárcel con mandos senderistas y entrevistas con voceros del oficialismo, incluyendo al propio Fujimori. Es lo que Fernando Vivas llamó, con razón, «programa políticamente negociado». Lo mejor del programa fue que varios reporteros pudieron cuajar un lenguaje televisivo propio que luego exhibirían, con mayor brío y menor cortapisa política, en otros espacios. El rating siempre le favoreció.

Este espejismo se rompió el 25 de abril de 1999, cuando La Revista Dominical emitió una entrevista hecha por Álamo Pérez Luna a Fujimori y Montesinos. Sería la primera, única y última vez que ambos personajes aceptarían aparecer ante cámaras, por propia voluntad, en conjunto. El motivo de la entrevista era el segundo aniversario de la operación Chavín de Huántar, con la que culminó la toma de la residencia del embajador japonés por parte del MRTA. La conversación fue francamente lamentable. No solo no hubo ni una sola repregunta sobre el rol de Montesinos, sino que, en realidad, la entrevista parecía un publirreportaje. Peor aún, para escarnio opositor, Fujimori y Montesinos vestían ternos y corbatas tan similares que parecían hermanos gemelos, lo que reforzó la imagen de sociedad en el poder.

La entrevista de Pérez Luna no había sido pactada por Lúcar. Fue grabada en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, gracias a los buenos oficios de José Francisco Crousillat. Él y su padre José Enrique estaban en la comitiva que acompañó al periodista a hacer la entrevista. También estuvo presente Abraham Levy, un comunicador que se había hecho famoso en América por ser el «hombre del tiempo» durante el Fenómeno del Niño.

Según consta en el vladivideo rotulado como «Álamo», la conversación con Fujimori y Montesinos fue grabada en dos tomas. Allí también aparece Levy dando indicaciones a la dupla que

gobernaba el Perú. El comunicador negó que haya sido asesor de alguno de ellos, pero reconoció que acudió al SIN en 1998 para hablar con Montesinos sobre temas climáticos.

Lo ocurrido generó un terremoto en América Televisión. Lúcar renunció junto a la mayor parte de su equipo y brindó varias entrevistas en las que señalaba que no compartía la línea editorial de La Revista Dominical. Según su versión, había permanecido en el canal por lealtad y sus vínculos familiares con los Crousillat. Lúcar dijo que las presiones fueron aún más fuertes luego de la reelección de Fujimori en 1995. Varios de los reporteros que lo acompañaban afirmaron que existía un clima de autocensura sobre temas políticos en el espacio. Ellos señalaron que estaban avergonzados por lo ocurrido.

Durante lo que quedó de 1999, La Revista Dominical fue reemplazada por distintos especiales, conducidos por Pérez Luna, Levy y Laura Bozzo[176].

Entre los meses de marzo y julio de 1999, el diario El Tío volvió a emprender una nueva campaña política. Esta vez, la víctima fue Gustavo Mohme Llona, director de La República y congresista opositor.

Los ataques contra Mohme respondían a dos distintos objetivos políticos. La República fue, durante los años del régimen, el periódico opositor más duro, no solo en opiniones, sino también en la presentación de denuncias bien fundamentadas sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos. El diario dirigido por el parlamentario fue bastante crítico del accionar de la cúpula militar.

Pero Mohme también era un convencido de que la oposición debía tener una candidatura única para enfrentar a Fujimori. Durante varios años, buscó que todos los partidos opuestos al régimen llegaran a acuerdos sobre gobernabilidad y contemplaran la posibilidad de una elección primaria.

Desde El Tío, durante cuatro meses, la campaña contra Mohme fue feroz y nefanda. Se le inventaban historias sobre una supuesta orientación homosexual, vinculándolo al líder sindical de Construcción Civil José Luis Risco. Los ataques incluían falsas historias sobre supuestas orgías. Al congresista también se le

inventó nexos con Sendero Luminoso, que eran inexistentes. Sin duda, debe haber sido el pico máximo de concentrado de lodo contra una figura pública durante los años del régimen.

Pero allí no se detuvo la campaña contra Mohme y La República. A fines de mayo apareció un pasquín con el nombre de Repúdica, imitando la tipografía y el tamaño del diario. El periodista y parlamentario era atacado por supuestos vínculos con Alan García y, además, se reproducían adjetivos contra Ángel Páez y Edmundo Cruz, los reporteros estrella de la unidad de investigación del periódico, quienes hacían frecuentes destapes sobre el mundo militar. Para Mohme, la autoría de los ataques correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. El diario que dirigía descubrió que el pasquín fue distribuido por la empresa vinculada a los diarios sensacionalistas El Mañanero y La Chuchi, involucrados en campañas de desprestigio contra los opositores al fujimorato. De hecho, en la empresa que imprimía ambos periódicos se hallaron varios ejemplares de Repúdica.

A partir de noviembre de 1999, se hizo otro pasquín con la misma modalidad: Repudio. El Ministerio Público archivó las investigaciones por delito de plagio sobre Repúdica. La doctora Blanca Nélida Colán seguía siendo eficiente para los fines del régimen.

Un último ataque contra Mohme se registró a fines de noviembre de 1999. Se había suscrito un acuerdo de gobernabilidad entre los principales partidos de oposición al gobierno. Desde las portadas de El Chino y El Tío se buscaba desprestigiar el pacto como controlado por el APRA y el comunismo, dos de los cucos preferidos del régimen para combinar a los candidatos del 2000 con un pasado que, en la construcción narrativa del fujimorismo, había sido derrotado por el entonces mandatario.

La campaña sistemática contra Mohme tenía otra razón detrás, además de las arriba anotadas. La República reveló un fax que llegó a las oficinas del diario El Tío, con el contenido de una noticia difamatoria. El documento había sido enviado desde las oficinas de Augusto Bresani León, un publicista y relacionista público vinculado al régimen, quien en realidad era la persona encargada de hacer las

coordinaciones entre el SIN y los diarios sensacionalistas. Como se supo después, los pagos por noticia iban de 3000 a 5000 dólares. Posteriormente, en octubre de 1999, trabajadores del pasquín El Chato revelaron a El Comercio que se recibía dinero del SIN por las portadas en contra de Andrade y Castañeda, así como la participación de Bresani en estos manejos irregulares y el proceso de formulación de las noticias inventadas[177].

Para 1999, Laura Bozzo no solo tenía el programa más visto del país, sino que comenzó a cruzar otras líneas. La política volvió a su vida y comenzó a teñir de tono naranja su programa. Esta transformación no solo comprendió su espacio cotidiano, sino que empezó a cumplir otros encargos.

La conductora mantenía su admiración por Montesinos. Bozzo ha referido tres versiones distintas sobre su vínculo personal con el asesor. Lo cierto y comprobable es que comenzó a ser parte de la estrategia del gobierno. Bozzo condujo un primer especial en América un domingo a fines de mayo de 1999 sobre la lucha contrasubversiva, alabando al régimen. Tuvo un gran impacto en rating.

Desde la competencia se tenía preparada una respuesta. Carlos Paredes, reportero de Panorama —el programa dominical de Panamericana—, había hurgado en los archivos de RBC Televisión y América para hacer el contrapunto entre la Bozzo opositora y la oficialista. El reportaje era contundente y se iba a emitir el 6 de junio de 1999, pero no salió al aire debido a un veto de Ernesto Schutz, el dueño del canal, quien censuró el informe luego de una llamada de José Francisco Crousillat. Dos días más tarde, Eduardo Guzmán, director de Panorama, presentó su renuncia, pero la retiró una vez que Schutz le aseguró que el informe de Paredes se pasaría esa semana. Salió al aire, pero sin las partes del archivo de RBC sobre la otrora crítica del régimen.

Esa misma semana, Bozzo presentó en su reality show el caso de un menor de edad, supuestamente maltratado y explotado laboralmente por su padre, un suboficial de la Policía Nacional. El menor fue llevado al espacio televisivo sin consentimiento de ningún adulto. Hernán Guerra, el policía en cuestión, pudo demostrar que

los cargos eran falsos y denunció a la conductora por varios posibles delitos. Este caso cambiaría la vida de la animadora. Un fiscal logró que se le impusiera una multa de 5000 soles, que se mantuvo a pesar de que Bozzo fue absuelta. Dicha caución fue pagada por el Servicio de Inteligencia Nacional, a través de Pedro Huertas Caballero, uno de los asesores jurídicos de Montesinos. Este caso, documentado por el propio abogado e investigado por Miguel Ramírez para El Comercio en 2002, le valdría a Bozzo una condena judicial de cuatro años de prisión suspendida por complicidad en peculado.

Pero volvamos a los tiempos en los que Laura era todopoderosa. A los pocos días que presentaba el caso arriba mencionado, el propio Alberto Fujimori se presentó en su programa. Allí se despacharía contra el sistema interamericano de derechos humanos. Días antes, el presidente había llamado al programa de Bozzo desde Japón, para anunciar una donación de 200 000 dólares a Solidaridad Familia, la organización no gubernamental de la conductora.

Posteriormente, Bozzo presentó nuevos especiales en América Televisión. El primero, emitido el 18 de julio de 1999, se trató sobre la captura de Óscar Ramírez Durand «Feliciano», el líder de la facción senderista que buscaba proseguir la lucha armada, que fue atrapado casi por una casualidad por una agente de la Policía. Sin embargo, el gobierno buscó usar esta captura con fines propagandísticos y emitir una historia en la que Fujimori y Montesinos, junto a fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, eran los artífices de la captura. De hecho, el día que se conoció que «Feliciano» estaba ya en manos de la Policía Nacional, Bozzo felicitó en su programa habitual al asesor presidencial.

Según el vladivideo 1607, rotulado «Dr.-Crousillat-Sr. Wo-Sr. Bertini», Crousillat y Montesinos conversaron sobre el éxito del espacio y, como comprobó años más tarde el periodista Johnny Sánchez Sierra, lo dicho por el asesor presidencial en ese diálogo con el vicepresidente de América Televisión fue exactamente el grueso del relato enunciado por Bozzo durante el especial sobre

«Feliciano». Esta reunión se produjo al día siguiente del programa dominical de la conductora.

En ese mismo video, Montesinos y Crousillat acordaron hacer un especial sobre el tema de Colombia. En agosto, Bozzo condujo el especial «Colombia al borde del abismo». Para 1999, el gobierno de Andrés Pastrana había iniciado conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo alzado en armas desde 1964. Montesinos y Fujimori jugaron en pared con los sectores más conservadores colombianos, con dos mensajes claros: con terroristas no se negocia y existe la posibilidad de que el conflicto se pueda expandir al Perú. Era evidente que se buscaba mantener una «memoria de salvación» en torno a la lucha contrasubversiva, en la que la dupla en el poder y las Fuerzas Armadas habían derrotado al terrorismo, con mano dura. El especial de Bozzo iba, precisamente, en esa línea.

El 27 de noviembre de 1999, Bozzo emitiría su programa más polémico, denominado «Haría cualquier cosa por dinero». En el espacio, la animadora azuzaría al público de los sectores populares a caer en pruebas que lindaban con el vejamen a cambio de unos dólares. De todos los retos, los más abyectos fueron obligar a personas a comer gusanos, una señora que lamió las axilas y los pies a un hombre que había estado haciendo ejercicio durante todo el programa y disfrazar a un hombre de gallina. Según se ve en la pauta del espacio, la mayor cantidad de avisos publicitarios pertenecían a entidades estatales. Luego de este programa, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) le puso «luz roja» al espacio, con lo que recomendaba que sus integrantes no colocaran pauta en el mismo. El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, pidió lo mismo a las entidades estatales, sin éxito.

Así, ad portas del año 2000, Bozzo mantenía un amplio núcleo de seguidores, pero ya tenía a buena parte de la ciudadanía en su contra, por razones éticas y políticas[178].

En 1978, durante el régimen de facto de Francisco Morales Bermúdez, el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tratado sobre la materia más importante de la región. Este documento internacional contempla un amplio catálogo de

derechos —sobre todo en materia civil y política—, así como la creación de dos organismos encargados de velar por el respeto de estos en la región: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para estar bajo la competencia de esta última entidad, se debía firmar un documento adicional; cuestión que se cumplió cuando el país volvió a la democracia en 1980.

La Corte Interamericana emitió su primera sentencia en 1988. No procesa individuos, sino que establece la posible responsabilidad internacional de los Estados, por acción u omisión. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio, aunque no existe una entidad que coaccione a los países sometidos a su competencia para el cumplimiento. La primera sentencia sobre Perú —el país que mantiene el más alto número de sentencias ante la entidad— fue emitida en 1995 y se vinculó con la matanza de los penales ocurrida en 1986.

Las dos siguientes sentencias fueron algo más incómodas para el gobierno peruano. En 1997, la Corte Interamericana ordenó al Perú la liberación de la docente universitaria María Elena Loayza Tamayo, a la que se había condenado por 20 años por terrorismo en 1994, a pesar de que no había evidencias en su contra. Loayza había sido torturada durante los interrogatorios policiales. El gobierno tuvo que cumplir a regañadientes con la orden. Ese mismo año, Perú fue condenado por la responsabilidad estatal en la desaparición forzada del estudiante de la PUCP, Ernesto Castillo Páez, capturado por miembros de la Policía Nacional en octubre de 1990, y cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy. Ambos casos se habían producido durante el gobierno de Fujimori.

Paulatinamente, Perú se convirtió en el país con más casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto por los crímenes cometidos en el marco de la lucha contrasubversiva, así como por los atropellos cometidos por el gobierno de Fujimori. Los abogados locales —en particular, los vinculados a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— vieron en el sistema interamericano una oportunidad de obtener justicia pronta y obligar al régimen a cumplir con sus responsabilidades en esta materia.

Para el gobierno, la preocupación central estaba en cuatro casos: los injustamente defenestrados magistrados del Tribunal Constitucional, las vulneraciones al debido proceso contra Gustavo Cesti —un exmilitar que había sido procesado en el fuero militar por delitos comunes y que, además, se había convertido en denunciante sobre las corruptelas en la compañía estatal de seguros Popular y Porvenir—, el retiro de la nacionalidad a Baruch Ivcher y la posibilidad de revisar la Ley de Amnistía a partir de la denuncia sobre la matanza de Barrios Altos.

Inicialmente, la línea del régimen fue buscar una negociación sobre estos casos. Para ello, nombró una Comisión de Alto Nivel para mejorar la defensa ante la Corte Interamericana. El grupo estuvo integrado por los abogados Edgardo Mosqueira (quien fue nombrado ministro de la Presidencia), Alberto Bustamante Belaúnde, Aníbal Quiroga (quien renunció tiempo después) y Milagros Maraví. Ante una comisión parlamentaria en 2002, Maraví reconoció que, para tratar algunos de los temas abordados por esta comisión, vinculados a materias militares, acudieron al Servicio de Inteligencia Nacional para entrevistarse con Montesinos.

Pocos meses más tarde, el gobierno obtuvo un pretexto para patear el tablero del sistema. El 30 de mayo de 1999, la Corte Interamericana emitió una resolución que ordenaba un nuevo proceso judicial contra Jaime Castillo Petruzzi, María Pincheira Sáez, Lautaro Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, cuatro chilenos condenados por traición a la patria, debido a su pertenencia al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La resolución de la Corte no exculpaba a los miembros de la organización subversiva, sino que era clara en recordar que la lucha contra el terrorismo no era incompatible con el respeto a los derechos humanos. La Corte señaló varias vulneraciones al debido proceso en el caso de los cuatro chilenos.

La defensa del gobierno no fue jurídica sino política. Fujimori anunció que no se haría un nuevo juicio, pues sería «arriesgar mediante leguleyadas» la pacificación del país. También advirtió que el fallo podría llevar a nuevos casos similares. El mandatario también retó a los jueces de la Corte Interamericana a que

«sobrevivieran en una de las cárceles del pueblo del MRTA». En su visita al programa de Laura Bozzo, Fujimori fustigó a la Corte, acompañado de palabras duras de la animadora.

Otras voceras del fujimorismo fueron aún más duras. Martha Chávez llegó a calificar como «izquierdistas que se han puesto del lado de los terroristas» a los miembros de la Corte Interamericana. Luisa María Cuculiza los llamó «decrépitos» y calificó como «remacho» a Fujimori por oponerse al fallo.

El 8 de julio de 1999, la mayoría oficialista aprobó una resolución legislativa para retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la mayoría de los abogados especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos coincidían en que el documento carecía de validez legal, pues la única forma de retirarse válidamente de la competencia de la Corte IDH era denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuestión que demoraría un año en concretarse. Esta fue la interpretación que sostuvo la Corte para seguir conociendo casos sobre el Perú, a pesar de las pataletas del gobierno fujimorista.

Para el régimen, resultó una oportunidad para impulsar nuevamente una narrativa en la que era el único responsable de la derrota militar del terrorismo. Se hizo una campaña con spots televisivos y programas especiales en el canal del Estado, en los que todas las víctimas del periodo fueron consideradas como víctimas del terrorismo, sin contemplar que, en esa cifra, se incluía a quienes habían sido asesinados o desaparecidos por agentes estatales. En cada ceremonia que podía, Fujimori acusaba a sus rivales de debilidad frente al terrorismo. Y para el 9 de diciembre de 1999, Día del Ejército, se convocó a un minuto de silencio y un homenaje en un parque cercano al Pentagonito en San Borja. Era una de las nuevas batallas por la memoria.

Desde las organizaciones de defensa de derechos humanos, se hizo una campaña internacional en defensa de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se reunieron con ministros de Relaciones Exteriores y embajadores, con miras a que

persuadieran al gobierno peruano de que variara su decisión. Consiguieron que instancias de la Organización de las Naciones Unidas vinculadas a esta materia instaran al Perú de retroceder en la salida de la Corte. Los argumentos centrales de los representantes de las organizaciones no gubernamentales eran que los ciudadanos peruanos perdían una instancia legal, y también se daba un golpe al sistema interamericano. El usualmente tibio secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente colombiano César Gaviria, se pronunció a favor de que se respetara la jurisdicción obligatoria de la Corte[179].

El 4 de julio de 1999, apareció en las pantallas de Cable Mágico —hoy Movistar TV— Canal N, un canal de noticias producido por el Grupo El Comercio que jugaría un rol clave en los años finales del régimen fujimorista.

El lanzamiento se produjo con ocasión de las elecciones municipales complementarias convocadas para el distrito de Miraflores, pues los comicios realizados en 1998 en ese distrito, a criterio del Jurado Nacional de Elecciones, habían tenido irregularidades y fueron anulados. La competencia se centró entre Fernando Andrade, actual alcalde del distrito y hermano del burgomaestre de Lima, y Luis Bedoya de Vivanco, hijo del fundador del Partido Popular Cristiano y que postulaba como independiente. Ganó el segundo de los nombrados.

Canal N fue una iniciativa de Bernardo Roca Rey y la gerencia de Nuevos Negocios del Grupo El Comercio. Se trató de un proyecto que demoró dos años en hacerse, sobre el que también recayeron las disputas familiares dentro del clan Miró Quesada. Aprovechando un viaje de Roca Rey, su prima, Martha Meier Miró Quesada estuvo a cargo del plan televisivo, pero no pudo avanzar mucho, debido a que su primo periodista e ingeniero químico había diseñado un canal que operaría con pocas personas, pues sería el primer medio digital del país.

La estación de televisión por cable estableció un libro de estilo y ética escrito por Gilberto Hume (editor general) y Benjamín Sevilla (productor general). Las bases eran la independencia y veracidad, así como la defensa de la democracia y los derechos humanos. Otro

aporte del equipo fundador era la inversión en equipos de alta calidad, y la contratación de un equipo joven para la presentación de noticias y reportajes, a fin de evitar cualquier sesgo oficialista.

Desde el inicio, la cobertura en vivo fue la clave del canal. Allí ya se marcaba una diferencia, dado que la estación de televisión por cable pudo informar sobre actividades de la oposición y organizaciones de la sociedad civil que no eran transmitidas por los noticieros y programas periodísticos de las televisoras de señal abierta. Asimismo, durante los primeros meses, el canal optó por contar con una parrilla plural de editorialistas, que abarcaba desde Luz Salgado hasta Fernando Tuesta. Los fines de semana, se tenían programas de polémica como Dos por Dos, conducido por Carlos Ferrero y Lourdes Flores Nano, y de análisis, como Rueda de Prensa, con Juan Paredes Castro (El Comercio), Mirko Lauer (La República), Fernando Rospigliosi (Caretas) y Augusto Álvarez Rodrich (Semana Económica).

La pluralidad era la distinción de N, en momentos en que la misma se acortaba en el país[180].

Para mediados de 1999, las encuestas de opinión pública mostraban que dos candidatos eran capaces de derrotar a Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 2000: Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. Ya hemos presentado al primero, por lo que convendría detenernos en el segundo.

Castañeda Lossio fue elegido regidor metropolitano en 1980, bajo las filas de Acción Popular, partido que ganó la alcaldía de Lima, teniendo como candidato a Eduardo Orrego, quien sería años más tarde parte de la plancha presidencial de Mario Vargas Llosa. Desde dicha gestión, Castañeda comenzó una carrera en la administración pública, desempeñándose como gerente en empresas municipales y en otras entidades. Para 1990, se convirtió en el presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social, una entidad que manejaba un conjunto de hospitales destinados a trabajadores públicos y privados y sus familias. Durante los años en que fue la cabeza del IPSS, proyectó una imagen de gestor eficiente, que le comenzó a traer réditos políticos. Luego de seis años, dejó la institución para pasar a dirigir por un año la Caja del Pescador, una entidad que

manejaba los fondos de retiro de los pescadores artesanales. Posteriormente, formó un partido llamado Solidaridad Nacional, cuyo símbolo tenía una tipografía similar al logo del IPSS. A tal punto llegaba la similitud que Fujimori le cambió el nombre a la institución, que se llamó ESSALUD desde ese entonces.

Andrade y Castañeda comenzaron a enfrentar distintos tipos de dificultades en sus campañas electorales. En el caso del alcalde de Lima, durante los meses de agosto y septiembre de 1999, sufrió la renuncia de 23 alcaldes distritales que habían sido electos bajo las filas de Somos Perú en las elecciones del año anterior. Las misivas, dirigidas a la prensa, tenían un patrón común: acusaban a Andrade de haberles «dado la espalda». Mientras que, en septiembre de 1999, Castañeda denunció que era hostigado en sus actividades públicas por la policía y personal de Inteligencia en varias de sus actividades políticas. Incluso llegó a retener a un agente que había comenzado a hacer seguimiento a su familia más cercana.

Donde ambos postulantes recibieron mayores ataques fue en la prensa sensacionalista. A Andrade lo tacharon como corrupto por una denuncia contra un regidor de Somos Perú, por presunto tráfico de influencias supuestamente vinculado a las licencias para paneles de publicidad. También los caricaturizaron como «pituco» —rico y lejano de las clases populares— por sus acciones de ordenamiento de la ciudad. Castañeda fue vinculado con presuntos casos de corrupción en la Caja del Pescador y calificado como nervioso, proterrorista —por señalar que Perú debía cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los miembros chilenos del MRTA—, homosexual y enfermo mental. La campaña también incluía supuestos vínculos de ambos candidatos con Alan García.

Aunque era clara la vocación obstruccionista del gobierno, no dejaba de ser cierto que las organizaciones de Andrade y Castañeda eran bastante débiles y no pudieron afrontar estos ataques sistemáticos. Ello sería más evidente durante el año siguiente[181].

Versiones cercanas a Alberto Fujimori señalan que, entre 1997 y 1998, el mandatario meditó la posibilidad de no postular a la

reelección en el año 2000. Las causas sobre esta decisión varían según la fuente consultada. Según Catherine Conaghan, personas vinculadas al presidente le indicaron que la razón era su estado de salud, que le obligó a recortar viajes al interior del país en esos años. Para Yuzuke Murakami, era la baja de su popularidad lo que preocupaba a Fujimori, quien comenzó a considerar a Francisco Tudela como posible candidato para el año 2000.

Sin embargo, para 1999, con la popularidad recuperada, Fujimori decidió postular una vez más. Pero el nombre de Tudela aparecería en una fórmula que Murakami denomina «aterrizaje suave». La idea era que el exministro de Relaciones Exteriores postulara como primer vicepresidente y que, un año más tarde, se convirtiera en el presidente ante la renuncia de Fujimori. El mandatario comenzó a sondearlo, de acuerdo con esta versión, en el viaje que hizo a Nueva York para conversar con Jamil Mahuad sobre el proceso de paz con Ecuador, en octubre de 1998. Pocos meses después, Tudela sería nombrado representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas.

Otro factor importante para Fujimori, según indica en sus memorias escritas en japonés, era que Tudela le podía ganar adeptos en los sectores altos y medios, donde la popularidad del mandatario bajó con mayor notoriedad a fines de la década.

El excanciller, ya lo hemos mencionado, estaba ligado a sectores conservadores. Y parte de su visión sobre el mundo la brindó en una conferencia ofrecida en el Congreso de la República, en agosto de 1999. En ella, la perspectiva de Tudela era que el Estado veía debilitada su libertad de actuación internacional, debido a que los derechos humanos imponían un paradigma «políticamente correcto». En su opinión, estas demandas podrían generar insatisfacción porque serían imposibles de cumplir y llevarían a una situación violenta. Para Tudela, el responsable de esta situación está en las organizaciones no gubernamentales. En forma bastante refinada, el exministro de Relaciones Exteriores inoculó los argumentos que esgrimiría el fujimorismo durante las siguientes dos décadas, en forma menos pretenciosamente culta.

Por ello, a pesar de su renuncia por el caso Ivcher, no debía sorprender a muchos que Tudela retornara a la senda fujimorista[182].

Para 1999, solo había dos grandes formas de acceder a internet en el Perú. La primera, pensada para los bolsillos más llenos, era contratar el servicio a alguna de las empresas autorizadas para brindarlo. La segunda, más popular, era acceder desde alguna cabina pública, que crecieron en número durante los años finales del fujimorato. Las cabinas eran, a la vez, negocio de sobrevivencia o complemento de ingresos y espacio de socialización.

Por ello, no sorprendió que, ante el creciente número de usuarios de internet, el gobierno fujimorista pusiera su atención en las páginas web, en lo que hoy podríamos caracterizar como un antecedente directo de las fake news que pululan en las redes sociales. A fines de 1998, El Comercio dio cuenta de la existencia de una página web denominada «Asociación Pro Defensa de la Verdad», cuyas siglas eran APRODEV, nomenclatura muy parecida a la de APRODEH, la reconocida organización no gubernamental de defensa de derechos humanos.

La página de APRODEV tenía, como gancho principal, una sección llamada «Personajes en blanco y negro». Quienes aparecían «en blanco» eran peruanos reconocidos, cuya trayectoria era compartida como heroica o relevante por la mayoría de los ciudadanos. Pero quienes figuraban «en negro» eran periodistas críticos del fujimorismo y políticos opositores. En dicha sección, aparecían las reproducciones de los suplementos creados en los diarios sensacionalistas, sobre los que ya hemos dado cuenta, pero también figuraban artículos propios contra estas personas. Las principales víctimas eran César Hildebrandt, Ángel Páez, Cecilia Valenzuela, Gustavo Mohme Llona, Alberto Borea, Alberto Andrade, Manuel D'Ornellas, Delia Revoredo, Edmundo Cruz, Fernando Rospigliosi y Baruch Ivcher.

En abril de 1999, se conoció que la persona detrás de APRODEV era Héctor Faisal Fracalossi, un ciudadano argentino que había sido subteniente del Ejército argentino hasta 1977. Durante la década de los ochenta, se desempeñó como astrólogo y, en todos sus círculos, aparecía como crítico de las atrocidades de la dictadura militar que

gobernó su país entre 1976 y 1983. En ese mismo decenio, conoció a Vladimiro Montesinos, quien había huido a Argentina tras el reinicio del juicio por traición a la patria en su contra, debido a que era la fuente de una revista que ventilaba varios entretelones del mundo castrense nacional.

Faisal viajó por primera vez a Lima en 1995 y se estableció en Perú en 1997. Dio como dirección ante las autoridades la sede del Círculo Militar del Perú, un club para oficiales del Ejército, ubicado en el mesocrático distrito limeño de Jesús María. Allí lo visitaron sus hermanas en las Fiestas Patrias de 1998. El astrólogo llegó a Lima cuando en su país tenía pendientes varios procesos judiciales.

Para Páez y Cruz, el material publicado por Faisal provenía del Servicio de Inteligencia. La familia del astrólogo señalaba que, según sus referencias, había sido asesor de Nicolás Hermoza Ríos, pero la exesposa del representante de APRODEV indicaba que tenía vínculos con Montesinos.

Para la quincena de abril de 1999, siete personas —Mohme, Páez, Cruz, Rospigliosi, Valenzuela, Luis Iberico e Ivcher— querellaron a Faisal por difamación. Las dos demandas llegaron ante las magistradas Elba Greta Minaya y Antonia Saquicuray —la misma que buscó inaplicar la Ley de Amnistía—, quienes ordenaron a Faisal que retire la web difamatoria. Sin embargo, Minaya y Saquicuray fueron sacadas de sus cargos y reemplazadas por jueces provisionales que revocaron las órdenes. En uno de los casos, se absolvió al astrólogo y, en la sala donde llegó la apelación, se cambió rápidamente a dos de los magistrados. Allí se confirmó la supuesta inocencia de Faisal. La protección judicial se extendió a la negativa para extraditar a la cabeza visible de APRODEV a Argentina, donde tenía varios procesos penales.

En 1999, el periodista Bruno de Olazábal descubrió que el celular de Faisal tenía registradas 11 llamadas al Círculo Militar, 33 llamadas al local del Servicio de Inteligencia Nacional y había recibido otras 17 comunicaciones desde un teléfono asignado al SIN.

La única defensa de Faisal era que reproducía material de otros medios. Fujimori dijo que no lo conocía y que sabía que Montesinos

tampoco lo reconocía. Para el presidente, esta página era parte de la libertad de expresión[183].

Canal N tenía competencia al momento de salir al aire. Cable Canal de Noticias surgió en 1998, como un proyecto de Jaime de Althaus, quien comenzaba a tener diferencias al interior del diario Expreso en torno al proyecto reeleccionista de Fujimori. Althaus consideraba que sería buena idea tener un espacio más plural, que pudiera hacer frente al proyecto televisivo de El Comercio, del cual ya se hablaba.

Así, se fundó la estación donde inicialmente tenían accionariado Eduardo Calmell del Solar (director de Expreso desde 1998), Manuel Ulloa von Perborg (propietario del diario), el abogado Vicente Silva Checa —quien había sido asesor de ministros del gobierno— y Jaime Yoshiyama. Posteriormente, el exministro se apartó del proyecto.

Althaus fue nombrado director del canal y conducía el espacio político central. Juan Carlos Tafur se encargaba del espacio económico y Pedro Salinas, conocido periodista liberal opuesto al régimen, tenía a su cargo un programa sobre municipalidades. Posteriormente, en los últimos meses de 1998, la abogada Rosa María Palacios haría su debut periodístico reemplazando a Salinas. El canal tenía un solo set y salía al aire en condiciones bastante precarias.

Althaus trabajó con autonomía hasta mediados de 1999. Los problemas comenzaron cuando le pidieron que hiciera un bloque de debate junto a Jorge Morelli Salgado, un periodista muy cercano al gobierno. Según Althaus, las discusiones eran bastante ásperas. A Tafur lo sacaron del programa económico y lo confinaron a Expreso. En octubre de 1999, le dijeron a Palacios que el canal había sido vendido a un «grupo minero», cuya identidad se mantenía en secreto, y luego le pidieron que su programa pasara a la tarde y tuviera un coconductor. La abogada, quien ya trabajaba en RPP y había demostrado cierto filo crítico al gobierno, decidió renunciar. Althaus se quedó un mes más, hasta que renunció al canal y a Expreso cuando le vetaron una entrevista a Francisco Morales

Bermúdez. El otrora dictador había devenido en uno de los principales críticos de Fujimori y Montesinos.

De allí, en adelante, Cable Canal de Noticias tendría como principal figura a Morelli Salgado. Silva Checa ya era el hombre fuerte de la televisora.

¿Qué había pasado? En septiembre de 1999, Fujimori convocó a Montesinos a Palacio de Gobierno. Allí ordenó que los comandantes generales de los tres institutos armados dispusieran dinero de la reserva de cada una de estas instituciones para comprar las acciones de Ulloa en Cable Canal de Noticias, así como alquilar la línea editorial de Expreso a Calmell del Solar. Se simuló una compra de acciones ficticia, pero, en realidad, era el gobierno quien terminó adquiriendo la estación de televisión.

Esta operación se concretó, como consta en los vladivideos rotulados «Dr. Calmell Vicente General Delgado A.», el 6 de noviembre de 1999. La transacción supuso la entrega de dos millones de dólares y estuvieron presentes Montesinos, Calmell del Solar, Silva Checa y el general Luis Delgado Arenas, quien era asesor jurídico del Ministerio de Defensa.

Con Calmell, la transacción supuso un pago total de 1 750 000 dólares, así como la suscripción de un contrato denominado «Compromiso de Colaboración y Apoyo». En sus diálogos, además de las entregas de dinero, hablan de política internacional —el conflicto en Colombia, Pinochet—, las maniobras contra Baruch Ivcher, así como de las coordinaciones para las informaciones que Expreso debería levantar a favor del gobierno. En uno de los diálogos, Calmell le dice a Montesinos que Morelli es «absolutamente fujimorista». A nadie le quedó duda alguna[184].

Como en la mayoría de los países de América Latina, el fútbol es el deporte más popular en Perú. Nuestra selección ha tenido generaciones destacadas en las décadas del treinta, del setenta y del decenio que acaba de concluir, lo que coincide con nuestros máximos logros: cinco clasificaciones a la Copa Mundial de Fútbol, así como dos títulos y un subcampeonato en la Copa América.

La relación de Fujimori con el fútbol fue bastante compleja. Aunque se reconoció vagamente como hincha de Alianza Lima —

cuestión repetida en varios de los últimos presidentes peruanos—, no fue un asiduo concurrente a partidos de dicho club o de la selección peruana. De hecho, de niño y adolescente no era un aficionado al deporte rey. Fue un periodo, además, en que la mayoría oficialista en el Congreso de la República aprobó una norma que permitió que la Federación Peruana de Fútbol adecuara sus estatutos a la normativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), con lo que, en la práctica, este deporte salía de la política estatal sobre la materia. De hecho, se puede afirmar que el gobierno no tuvo una visión deportiva estructurada.

Durante la década de los noventa, se obtuvieron algunos resultados importantes, producto del ordenamiento del torneo local de Primera División y del ingreso de la inversión privada como auspiciadora de clubes y de la Federación Peruana de Fútbol. Dichos hitos fueron el subcampeonato de Sporting Cristal en la Copa Libertadores de América y la meritoria campaña para el Mundial Francia 1998, donde Perú quedó fuera por diferencia de goles. Este último evento generó, según encontraron el periodista Jaime Cordero y el economista Hugo Ñopo, una relación estadística entre los buenos resultados de la selección e hipos de alza de la popularidad presidencial en años en los que esta fue baja. Sin embargo, la precariedad institucional de los clubes y el clientelismo siguieron siendo moneda corriente en el balompié peruano.

A diferencia de lo que ocurrió con el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, Fujimori solo buscó entrometerse en el deporte en contados momentos. Para la Copa América 1993, celebrada en Ecuador, Fujimori «indultó» al futbolista Andrés «Balán» Gonzales, quien había sido sancionado por la FPF al negarse a jugar un encuentro con Chile por la Copa América de 1991 aduciendo «falta de motivación para jugar». El regreso de Gonzales a la selección no auguró los resultados esperados: solo anotó un gol frente a Bolivia en un partido amistoso.

Pero sería en septiembre de 1999 cuando el populismo fujimorista se daría la mano con el deporte rey. El día 2 de aquel mes, Fujimori tomó juramento en Palacio de Gobierno a Teófilo Cubillas como flamante presidente del Instituto Peruano del Deporte. Cubillas es

considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol nacional por una carrera brillante que incluye diez goles en dos mundiales (México 1970 y Argentina 1978), una Copa América, así como varios títulos nacionales con Alianza Lima y un desempeño impecable en clubes en el exterior. El futbolista aceptó el puesto cuando era evidente que el gobierno tenía planes de perpetuación.

No fue la única jugada en torno al deporte bajo el pie de Fujimori. En septiembre de 1999, convocó a Palacio de Gobierno a Cubillas y a los presidentes de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal —los tres clubes con mayor cantidad de seguidores y títulos— para que puedan arribar a un consenso a fin de que la FPF contrate a Francisco Maturana como entrenador de la selección, con miras a la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol a celebrarse en Corea del Sur y Japón en 2002. La campaña de Maturana al frente del equipo nacional fue un desastre. Apenas duró un año en el cargo y fue despedido días antes que comenzara la crisis final del régimen.

Vladimiro Montesinos, a quien tampoco se le conocían simpatías por el fútbol, también intentó usar a una figura legendaria con fines políticos. Héctor Chumpitaz, capitán de la selección donde Cubillas brilló y uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol sudamericano, fue convocado por el asesor al Servicio de Inteligencia Nacional para que sea parte de los candidatos a regidores de la fórmula municipal de Juan Carlos Hurtado Miller, el postulante del gobierno a la alcaldía de Lima en 1998. Montesinos dijo que le pagó 30 000 dólares para su campaña política. Chumpitaz aceptó que había recibido el dinero, pero negó su conocimiento de que proviniera de una fuente ilícita. El exfutbolista pasó algún tiempo en arresto domiciliario y, finalmente, fue condenado a dos años de prisión suspendida por complicidad en peculado.

La más polémica definición sobre Fujimori desde el mundo del fútbol provino de Argentina, luego de concluido su gobierno. Cuando Diego Armando Maradona (1960-2020) fue impedido de ingresar a Japón en 2002 por sus adicciones, expresó, en una de sus frases discutidas: «Quiero recordarles que los americanos tiraron dos

bombas nucleares y pueden pasear tranquilamente por Tokio. Fujimori hizo desastres en Perú y hoy está en Japón. Yo no maté a nadie, a ningún japonés, solo me hice mal a mí y no me dejan entrar»[185].

El 15 de noviembre de 1999, salió un nuevo diario a la venta: Liberación. Se trataba de una aventura en la que confluyeron César Hildebrandt como director y varios críticos al régimen como accionistas. Además del periodista, los socios de la empresa editora eran los abogados Alberto Borea y Ángel Delgado, y los periodistas Luis Iberico y Fernando Viaña.

La línea del diario era crítica y se marcaba desde el primer titular: «Surgen nuevas pruebas sobre corrupción en el Ejército y en Popular y Porvenir», recogiendo evidencias presentadas por el congresista Fernando Olivera. Se trataba, nítidamente, de un diario de trinchera, cuya posición editorial era clara y no tenía ambages.

En las siguientes semanas, el congresista aprista Jorge del Castillo se acercó a la oficina de Hildebrandt, en San Borja. Allí le mostró unos documentos bomba: los estados de una cuenta que mantenía Vladimiro Montesinos en el Banco Wiese Sudameris. La reacción del periodista fue clara:

—¡Carajo! ¿Cómo has conseguido esto?

Del Castillo le reveló que una funcionaria del banco, Carmen Haas, había copiado el registro de documentos de la cuenta de ahorros en dólares de Montesinos Nro. C424778. Haas es cuñada del parlamentario. En un año, Montesinos había ingresado en dicha cuenta poco más de dos millones de dólares.

El titular del día siguiente de Liberación fue «Descubrimos las cuentas millonarias de Vladimiro Montesinos». Desatado el escándalo, Fujimori buscó justificar al asesor: «Es la cuenta de su estudio de abogados». La respuesta del diario al día siguiente fue contundente: la cuenta correspondía a una persona natural y su único titular era el asesor presidencial.

La nueva excusa de Fujimori fue señalar que «el doctor Montesinos recibe honorarios importantes de empresas extranjeras. Él es un consultor muy cotizado en materia de seguridad y de inversiones. Estoy seguro de que eso explica la existencia de esa

cuenta». Y desde el diario dirigido por Hildebrandt le recordaron que, no hacía poco, Fujimori y Montesinos habían afirmado que el jefe real de Inteligencia trabajaba todo el día para el gobierno.

Las represalias no se hicieron esperar. Haas fue hostilizada en su centro laboral, recibió amenazas telefónicas y, finalmente, tuvo que irse a Estados Unidos. Al mismo tiempo, se buscó embargar la maquinaria de la empresa donde se imprimía Liberación, basándose en un proceso contra el dueño del local de la imprenta, quien no tenía vínculo alguno con la maquinaria. Hildebrandt e Iberico señalaron que se trataba de una represalia por publicar las cuentas de Montesinos[186].

Para 1999, el gobierno estrenó nuevo lema: «Perú: País con Futuro». El logo estaba en letras rojas dentro de un rectángulo con bordes del mismo color. Y ese sería el nombre de la canción que Rossy War, la cantante popular del momento, estrenaría en la serenata por el cumpleaños de Fujimori que se realizó el 27 de julio de 1999 en San Juan de Miraflores. Eran los tiempos en que la tecnocumbia invadía todas las radios del país. Si bien la tecnocumbia —una variante del género tropical andino que se hizo popular a fines de los años noventa en el Perú— no era impulsada por el régimen, cantantes como War y Ana Kohler intervinieron en mítines de Fujimori entre 1999 y 2000. El género se popularizó a partir de 1999 a través de la radio y la televisión, medios que propalaban los éxitos de cantantes provenientes de la selva peruana, así como de orquestas e intérpretes de la costa norte del país. Más allá de la participación de War y Kohler en los mítines fujimoristas de 1999 y 2000, otros exponentes de la cumbia en sus distintas variantes decidieron tomar distancia de la política en aquellos años.

El cumpleaños 61 de Fujimori se transmitió en vivo por Frecuencia Latina y América Televisión. Fue una de las primeras ocasiones en las que se notó que las manifestaciones del mandatario requerían el uso de la movilización de beneficiarios de los programas sociales para su éxito. La actividad había sido organizada por Absalón Vásquez, quien estaba ganando poder en el entorno de Fujimori.

Un terreno más hostil tuvo el mandatario en su mensaje de Fiestas Patrias de 1999. La oposición aprovechaba el momento para gritar «no al fraude» en varios pasajes del discurso. El mandatario fue cauteloso en un mensaje que no tuvo mayores anuncios. Para graficar el momento económico, la congresista de Unión Por el Perú, Anel Townsend, aprovechó una pausa de la intervención del mandatario para colocar, delante del podio donde estaba Fujimori, una olla vacía.

A la economía no le iba tan bien. La recesión continuaba y el crecimiento económico era exiguo. Aumentó la morosidad bancaria. Desde ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias continuaban las críticas a la política económica de Joy Way. No hubo muchas privatizaciones en 1999. Para complicar más las cosas, una de las empresas privatizadas, Aeroperú, entró en quiebra por malos manejos de su compradora, Aeroméxico.

Peor aún, el gobierno dispuso cuantiosos salvatajes financieros para que los bancos Latino y Wiese no quebraran: al primero le destinó 402 millones de dólares y al segundo le otorgó 250 millones de dólares. Esta política implicó una modificación de la Ley de Bancos, que impedía el apoyo estatal a entidades financieras con problemas. En ambos casos, los problemas se debían a préstamos otorgados a las empresas que pertenecían a los grupos Picasso y Wiese, propietarios de los bancos. La situación de dichas entidades financieras recién se salvó cuando fueron vendidas a los grupos Interbank y Sudameris, respectivamente. Joy Way se encargaría de firmar los decretos de salvataje.

Sin embargo, el gobierno recuperó puntos en las encuestas gracias a un agresivo espacio de programas sociales en agua y desagüe, infraestructura escolar y básica en varios sitios alejados del país. Fujimori retomó las visitas a provincias y zonas populares de Lima, con miras a la campaña electoral de 2000, en forma muy parecida a la realizada en 1994, para la primera reelección. Mientras, el Estado se convirtió en el principal anunciante de la televisión de señal abierta, ahogada en varias deudas, producto de la recesión y del dispendio que hubo en ciertas empresas en aquellos años. Ese año, el Estado invirtió cerca de 69 millones de

dólares en publicidad en medios de comunicación. Los spots y avisos que culminaban con el logo «Perú: País con Futuro» se multiplicaron.

El 13 de octubre de 1999, Fujimori decidió hacer una renovación parcial de su gabinete. Juan Carlos Hurtado Miller volvió a ser convocado, esta vez, como ministro de Industrias. Joy Way saldría para afrontar su campaña de reelección como congresista y sería reemplazado en el Ministerio de Economía y Finanzas por un viejo conocido: Efraín Goldenberg. Para la Presidencia del Consejo de Ministros, el mandatario convocó a uno de los abogados que había estado en la Comisión de Alto Nivel sobre los litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Alberto Bustamante Belaúnde. También asumiría la cartera de Justicia. Para contrarrestar las fuertes críticas al gobierno en Estados Unidos, fueron contratadas dos firmas de cabildeo para buscar mejorar su imagen.

Internamente, la imagen de competencia desequilibrada con miras a las elecciones presidenciales del 9 de abril de 2000 continuaba. La Asociación Civil Transparencia comenzó a emitir, desde el mes de noviembre, una serie de boletines con los minutos de cobertura que les daban los canales de señal abierta a los candidatos. La diferencia entre Fujimori y los demás postulantes era abismal. El secretario general de Transparencia, el sociólogo Rafael Roncagliolo, señaló que el proceso electoral era el más desbalanceado de la historia del Perú. Fujimori devolvió el golpe, acusando a algunos de los miembros del consejo directivo de la entidad de haber trabajado para el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

Para diciembre de 1999, llegó la primera misión de observación electoral, un equipo conjunto del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata. La misión era encabezada por el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle. Su primer reporte señaló severas fallas que debían ser corregidas por el gobierno para que la elección tuviese estándares internacionales adecuados: cobertura de la oposición en los medios, violación a la libertad de expresión, problemas con la autoridad electoral, uso de recursos públicos para la campaña de

Fujimori y poca confianza en el sistema de justicia. Bustamante indicó en público que se habían producido errores en el pasado, pero que la percepción era distinta a la realidad. En privado, el ministro de Justicia no confiaba en varios de los miembros de la misión conjunta Carter Center–NDI.

A la par, el presidente del Consejo de Ministros buscaba avanzar en materias complicadas para el gobierno. De un lado, volvió a proponer a Fujimori la posibilidad de indultar a Yehude Simon, como lo había recomendado la comisión ad hoc presidida por el padre Hubert Lanssiers. El presidente se negó e incluso le dio un golpe bajo a Bustamante, pues le señaló que una de las personas que le pedía por el indulto de Simon «vivía bajo su techo», en alusión clara a Rosa Mujica, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y esposa del ministro. De otro lado, Bustamante insistió en que Fujimori diera luz verde al proceso de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el más importante del país, que los ministros en materia económica buscaban impulsar y el gobierno seguía difiriendo. El presidente simplemente no le hizo caso y ese proceso recién pudo tomar impulso en los últimos meses del gobierno. De hecho, la concesión fue otorgada cuatro días antes de la renuncia de Fujimori.

Transcurrida la Navidad, el 27 de diciembre de 1999, a las 5.25 p. m., se emitió por cadena nacional un mensaje grabado por Fujimori. Allí dijo que «hubiera preferido un escenario político distinto», pero que la oposición no brindaba verdaderas alternativas al país. Y anunció que presentaba su candidatura para un tercer mandato. Sus ofertas centrales eran creación de empleo y acabar con los rezagos del terrorismo. Su fórmula presidencial era integrada por Tudela y Ricardo Márquez. El membrete presentado era el de la Alianza Electoral Perú 2000, con un logo similar al de «Perú: País con Futuro» e integrado por Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino y un nuevo movimiento con nombre similar al del frente. El mensaje fue grabado por un hasta entonces desconocido productor, Carlos Raffo Arce, en la casa limeña de Víctor Aritomi, el cuñado–embajador del presidente. Fue el propio Absalón Vásquez quien presentó la postulación en el Jurado Nacional de Elecciones.

Acto seguido, Carlos Ferrero Costa presentó su renuncia al oficialismo, luego de años de disidencias en el voto y en las opiniones. Su decisión se debía a su postura en contra del intento reeleccionista de Fujimori.

Durante los días siguientes, se presentaron 18 tachas contra la postulación de Fujimori, por ser inconstitucional. Los peticionarios fueron escuchados en las primeras horas del 31 de diciembre de 1999. Para las ocho de la noche, cuando la mayoría de los peruanos comenzaba a movilizarse a sus reuniones por Año Nuevo, el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundadas todas las tachas.

Alberto Fujimori podría postular. Sería el primer gran error de su carrera política[187].

---

172 Las notas sobre el gabinete Joy Way se basan en Bowen (2000: 369-371) y Quiroz (2019: 326-327). Los cambios militares se advierten en Rospigliosi (2000b: 40-42).

173 Sobre Juan Luis Cipriani, consultamos Pásara, Indacochea, Cisneros Hamann y Álvarez Rodrich (2015: 66-77). También el artículo de Fernando Rospigliosi, «El Vaticano a la conquista de la Católica», publicado por *Caretas* en marzo de 1999 (https://web.archive.org/web/20100817014705/http://www.caretas.com.pe/1999/1558/controversias/controversias.htm). El autor de este libro ingresó a la PUCP ese año como alumno de pregrado y ha mantenido su relación con dicha casa de estudios hasta la actualidad, primero como personal administrativo y luego como docente, por lo que conoce de primera mano buena parte de los hechos narrados en esta sección.

174 La declaración de Rospigliosi aparece en una columna publicada en *Caretas* en febrero de 1999 (https://web.archive.org/web/20090502030129/http://www.caretas.com.pe/1999/1555/controversias/controversias.htm). Los datos sobre Pinedo son recogidos por Daniel Alarcón y Rafaella León en *El Código García* (2020: 15-16, 31).

175 Pueden revisar «Nada Personal», el valiente informe de Giulia Tamayo en la página web de CLADEM (https://1996pnsrpf2000.files.wordpress.com/2011/07/cladem_nada-personal.pdf). El caso de María Mestanza Chávez está en la web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm). El párrafo del Plan Verde citado aparece en Rospigliosi (2000b: p. 79). En la web de la Defensoría del Pueblo pueden consultarse los informes sobre las esterilizaciones forzadas (https://www.defensoria.gob.pe/grupos_de_proteccion/mujer/). También recomiendo un completo artículo de Ana María Vidal, exsecretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que resume el caso y sus dificultades para alcanzar justicia (http://debatesindigenas.org/30-esterilizaciones-forzadas-en-peru.html). Rousseau (2012: 126-128, 204-206) brinda algunos datos sobre la respuesta del movimiento de mujeres frente a las denuncias de esterilizaciones forzadas. Al cierre de

este libro, se había frustrado una audiencia de control de acusación contra Fujimori y otros exfuncionarios de su gobierno por este caso, debido a que no había traductores de una variedad de quechua en la audiencia virtual. Un signo de lo poco que ha avanzado la justicia cuando se trata de mujeres pobres, quechuahablantes y víctimas de violencia sexual.

176 Sobre el fin de *La Revista Dominical,* consultamos Vivas (2008: 364-366) y Rospigliosi (2000a: 121-128). También la transcripción del vladivideo «Álamo» en el tomo I de En la Sala de la Corrupción: videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998 – 2000) (2004: 781-797). Sobre el rol de Abraham Levy en la famosa entrevista a Fujimori y Montesinos, revisamos nuestro propio archivo digital de informes sobre este personaje en 2007 (https://josealejandrogodoy.wordpress.com/category/abraham-levy/) así como el reportaje de Marco Sifuentes, «El Niño viene con premio», para el programa *La Ventana Indiscreta* (https://www.dailymotion.com/video/x1vu3m).

177 Los ataques contra Mohme Llona están registrados en Rospigliosi (2000a: 147-149, 174-177) y Degregori (2012: 139-140). La información sobre Augusto Bresani y su rol con los diarios sensacionalistas aparece en Fowks (2015: 79-80) y Conaghan (2005: 159-160).

178 La sección sobre Laura Bozzo durante 1999 se basa en Vivas (2018: 88-95), Sifuentes, Migoya y Montes (2015: 87-98, 132), Degregori (2012: 192, 323-324) y Santisteban (2008: 147-151). En este último texto, se puede encontrar la pauta completa de «Haría cualquier cosa por dinero», el programa más impúdico de la conductora (182-195). La transcripción del vladivideo mencionado se encuentra en el tomo I de *En la Sala de la Corrupción: videos y audios de Vladimiro Montesinos* (1998–2000) (2004: 223-231).

179 El retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en Bowen (2000: 378-380), Degregori (2012: 191-193, 324), Youngers (2003: 396-398), y en la revisión de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para los elementos de contexto, nos basamos en Salmón (2019: 21-47, 103-203) y en nuestro propio manejo adquirido durante el trabajo en el IDEHPUCP por una década. También revisamos el informe de la comisión parlamentaria que investigó las actividades de Montesinos, presidida por Anel Townsend (https://es.scribd.com/doc/55458599/INFORME-FINAL-SOBRE-FUJIMORI-MONTESINOS-CORRUPCION?fbclid=IwAR0Sz3Jsbs5ZYFMUTkAMP38U05UHWtyFU1DijqRQJ9EHy0Gohg_qCT9jtKs).

180 En torno a Canal N, consultamos (Vivas: 518-519), la tesis de Ricardo Reátegui, *Imágenes de legitimidad: Canal N y la lucha por la hegemonía mediática de finales de los años 90,* que puede leerse en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4421 y mi libro sobre *El Comercio* (2019: 105-107).

181 El perfil de Luis Castañeda Lossio se basa en «El partido del silencio. Castañeda Lossio y la evolución de una organización personalista» de Meléndez para *Anticandidatos. Guía analítica para unas elecciones sin partidos* (2011: 24-26), cuyo editor es el mencionado politólogo, así como en «De Lucho falta saber mucho», un perfil de Vivas para *El Comercio* (https://elcomercio.pe/politica/de-luis-castaneda-lossio-falta-

saber-mucho-por-fernando-vivas-solidaridad-nacional-investigacion-lava-jato-prision-preventiva-noticia/). Los ataques contra Andrade y Castañeda y la debilidad de sus organizaciones aparecen en Bowen (2000: 372-373, 383), Conaghan (2005: 170-173), Degregori (2012: 130-140, 149-150), Murakami (2018: 508-509, 517-518), Planas (2000: 387-393) y Rospigliosi (2000a: 149-162).

182 Las divagaciones de Fujimori sobre su reelección aparecen en Conaghan (2005: 163-164) y Murakami (2018: 505-507). Sobre Tudela y su pensamiento, consultamos Degregori (2012: 241-251).

183 La sección sobre APRODEV y Héctor Faisal se basa en un reportaje de Bruno de Olazábal, que originalmente iba a ser propalado en Global Televisión en 1999 y, ante la toma hostil de dicho canal, se difundió en Canal N. Véase: https://youtu.be/j8YKuwB3NR0, https://youtu.be/CLKVfSoAqVI, https://youtu.be/-oDicizMj0A y https://youtu.be/MoqQaMOZq8o. También revisamos Rospigliosi (2000a: 162-171), Bowen (2000: 357-358) y Degregori (2012: 101-102).

184 Sobre Cable Canal de Noticias, consultamos un reportaje de Heidi Grossman para *La Ventana Indiscreta* en torno a la historia de la televisora (https://youtu.be/YysFvsG2yEs), así como Vivas (2008: 517) y Palacios, Tafur y Álvarez Rodrich (2017: 27-31). Los dos primeros participaron en ese proyecto. También utilizamos la sentencia contra Alberto Fujimori por este caso y la transcripción de los vladivideos sobre CCN y *Expreso* que aparecen en el tomo I de *En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos* (1998–2000) (2004: 471-631).

185 La injerencia de Fujimori en el fútbol se basa en Yrigoyen (2018: 25-26, 54-55, 292, 295 y 321) y Panfichi, Vila, Chávez y Saravia (2018: 228-250). También consultamos el artículo de Alberto Vergara «¿Es distinto el Perú del fútbol peruano?» (https://vergarapaniagua.com/2009/06/01/es-distinto-el-peru-del-futbol-peruano/). Otros datos aparecen en Cordero y Ñopo (2018: 40-41). La frase de Maradona aparece en Burgo y Wall (2014: 90). Otros presidentes que se confesaron hinchas de Alianza Lima son Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Valentín Paniagua era hincha de Cienciano, de su natal Cusco. Martín Vizcarra era aficionado del Huracán, un equipo moqueguano. El actual mandatario, Francisco Sagasti, es simpatizante confeso de Universitario de Deportes, el equipo con más títulos en el Perú.

186 Sobre la revelación de la cuenta de Montesinos, nos basamos en los artículos de César Hildebrandt: «El ladrón y el encubridor» (https://web.archive.org/web/20010310000816/http://stucchi.tripod.com/politica/ladron.htm) y «La madre del chacal» (https://web.archive.org/web/20080521091219/http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?ID), publicados en *Liberación* en 2000, y *La Primera* en 2008, respectivamente. Asimismo, consultamos Mendoza Michilot (2013: tomo II: 392-395)

187 Los meses finales de 1999 son relatados por Bowen (2000: 381-386), Degregori (2012: 86-87, 326-325, 331-332), Conaghan (2005: 169-178) y Murakami (2018: 511-516). Sobre los salvatajes de los bancos Latino y Wiese, consultamos los informes de la Comisión Investigadora de delitos económicos y financieros presidida por el congresista Javier Diez Canseco, así como Quiroz (2019: 335-336). Sobre Bustamante Belaúnde, varias de sus anécdotas están en *Del diablo su país* (2003: 29-32, 253-260). Datos

complementarios sobre el lanzamiento de Fujimori aparecen en la edición de *Caretas* del 30 de diciembre de 1999.

EL MUNDO DE ABAJO

(Enero, 1998 – Diciembre, 1999)[188]

Durante los años noventa, las inversiones chilenas llegaron a Perú con gran intensidad. Aunque el vecino del sur nunca fue el país con mayor cantidad de dinero invertido por parte de fuente extranjera, lo hizo en rubros bastante visibles para el público: bancos, AFP, retail y empresas de energía eléctrica. Y también alimentos.

En la primera década del siglo XX, nació en Chile la empresa La Proveedora, creada por descendientes de italianos para fabricar pasta. A partir de 1910, se unió Leopoldo Lucchetti a la fábrica y, con el tiempo, la empresa adoptó su apellido como marca principal. A partir de 1968, pasó a manos del grupo Lukzic, uno de los conglomerados más importantes del país sureño.

Para la década de los noventa, Lucchetti expandió sus intereses en América Latina. En 1994, entró al mercado argentino y pocos años después comenzaría su avanzada en Perú. En 1997, Lucchetti adquirió un terreno para hacer una fábrica de fideos. El problema era que estaba ubicado en la zona de impacto de un área natural protegida en la ciudad de Lima: los Pantanos de Villa, un lugar al sur de la capital donde miles de aves residen o anidan como parte de su proceso de migración.

La construcción de la planta se inició en junio de 1997, gracias a un permiso de la Municipalidad de Chorrillos, sin que existiera un estudio de impacto ambiental. Luego de las protestas de vecinos y grupos ambientalistas, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, paralizó las obras de construcción en octubre de 1997. La empresa a cargo de la edificación era JJC, la constructora del ministro de Economía y Finanzas Jorge Camet.

Para enero de 1998, Lucchetti interpuso un amparo para revertir la decisión de Andrade. Por ello, los directivos de la empresa chilena viajaron a Perú para buscar apoyo político y judicial. El 8 de enero, el publicista Daniel Borobio llevó a Gonzalo Menéndez Duque, presidente del directorio de la empresa, ante Montesinos. Menéndez no escatimó elogios para Camet y Fujimori, y buscó que Montesinos los ayudase en su lucha contra Andrade. El presidente de la

empresa señaló que «se trata de un problema de inversión» y fue claro en su solicitud: «yo quiero una guerra corta, sangrienta y decisiva, como se ganan las batallas». El empresario aseguró que había tenido un contacto con Vicente Silva Checa para llegar a los congresistas del gobierno y así lo pudieran apoyar.

Montesinos le aseguró a Menéndez que no debía trabajar ni con Silva Checa ni con Jaime Yoshiyama. Acto seguido, contactó a Edgar Solís Cano, viceministro del Interior, para que averiguara qué magistrado tenía la demanda. Solís era uno de los operadores de Montesinos en el sistema de justicia. Y, de hecho, en primera instancia, la empresa ganó la demanda de amparo.

El 10 de febrero de 1998, Montesinos almorzó con un directivo de la compañía no identificado. Allí le mostró la resolución favorable. El asesor le recomendó que hiciera una donación importante de fideos a los afectados por el Fenómeno del Niño para mejorar su imagen ante la opinión pública. Montesinos le aseguró al directivo de Lucchetti que no habría problema con la apelación porque el presidente de la sala era Sixto Muñoz Arce y haría la resolución favorable a sus intereses. Así ocurrió.

El 6 de marzo de 1998, Andronico Ludzic Craig, el jefe del grupo económico detrás de Lucchetti, acudió al SIN para entrevistarse con Montesinos. En el diálogo, Montesinos le hizo recomendaciones sobre la estrategia legal y, en particular, achacó la oposición a la construcción de la fábrica a los intereses del Grupo Romero, dado que Alicorp, la fábrica de abarrotes del conglomerado peruano, se vería afectada por la entrada de Lucchetti al mercado peruano. Luego de hablar de varios temas políticos, vinculados sobre todo con la lucha contrasubversiva en Perú, Montesinos le entregó al magnate chileno la resolución de segunda instancia a su favor.

Lucchetti tuvo un problema adicional de imagen: se convirtió en el principal auspiciador privado del programa de Laura Bozzo. Conforme el espacio ganaba en sensacionalismo y preferencias políticas por el gobierno, el costo reputacional fue mayor para la empresa chilena[189].

Alexander Kouri Bumachar inició su carrera política en 1985, cuando se inscribió en el Partido Popular Cristiano. A inicios de los

noventa, fue director municipal y luego presidente de la Beneficencia Pública del Callao. Para 1993, era uno de los miembros de la bancada de dicha agrupación política en el Congreso Constituyente Democrático. En 1995, renunció a su partido y armó la lista independiente Chimpum Callao, con la que fue elegido alcalde de dicha provincia constitucional. Kouri adquirió el perfil de autoridad eficiente y con fuerte contacto popular, a la par que, ante el público, buscaba mantener cierta imagen equidistante del gobierno y de la oposición. Pero, como veremos, en realidad sus preferencias políticas se acercaban mucho más al régimen.

El 15 de enero de 1998, Absalón Vásquez, Luz Salgado y Vladimiro Montesinos se reunieron en el Servicio de Inteligencia Nacional. Luego de hablar unos minutos sobre cuestiones parlamentarias, el asesor fijó la agenda: habían llamado a Kouri para conversar sobre las elecciones municipales que se realizarían en octubre de ese año y deseaban saber si se quería presentar a la alcaldía de Lima para rivalizar con Andrade. Dentro del plan, Montesinos tenía la idea de que, si perdía, le pudieran brindar algunas alternativas para obtener un cargo importante que le permitiese tener proyección política hacia el futuro.

Kouri llegó a la conversación con ideas. Para él, «sería un error si el gobierno participa de una manera o indirecta» en las elecciones municipales de 1998. A su criterio, «se estaría adelantando un eventual referéndum, con un desgaste innecesario» y, además, Andrade estaría fortalecido frente al gobierno para una posible postulación opositora en 2000. Para él, lo mejor era armar una candidatura que congregara tanto a los opositores a Andrade como a quienes se muestran afines al gobierno, con lo que la elección dejaría de ser un plebiscito sobre Fujimori. En esa línea, se sentía más cómodo postulando a la reelección en el Callao y ganar las alcaldías distritales del primer puerto a Somos Perú, para tener los alcaldes de 10 a 15 distritos en Lima, sobre todo, en las zonas periféricas.

El joven político redondeó la idea señalando que era mejor que Andrade corriera solo para Lima y que él le arrebataría alcaldes distritales llevando a gente de otros partidos de la oposición. El

alcalde chalaco fue claro: «si yo eventualmente voy a Lima podemos perder las dos cosas, en las funciones y en las posibilidades: perder la candidatura en Lima y no lograr consolidar el Callao». Montesinos le planteó la opción de postular, aprovechando una posible reducción de la popularidad de Andrade en las encuestas. Kouri retrucó que «si hay un avance importante, nadie se corre ni elude una posible candidatura en Lima Metropolitana». Luego de que el alcalde chalaco se retiró, Montesinos, Salgado y Vásquez llegaron a la conclusión de que, si bien Kouri podía ser un buen candidato, ya había tomado su decisión.

Apenas trece días más tarde, Kouri regresó al SIN, acompañado por el comandante general de la Marina, Américo Ibárcena, quien solo permaneció pocos minutos. En el diálogo entre Montesinos y Kouri, el alcalde del Callao planteó dos propuestas. La primera era que un parlamentario oficialista presentase un proyecto de Ley contra los derechos del Callao —específicamente retirar el canon aduanero—, que sería aprobado por la mayoría en el Congreso, frente a lo cual Kouri encabezaría protestas y el Poder Ejecutivo observaría la norma. Con ello, tanto el presidente como el alcalde serían aplaudidos. Montesinos no se mostró muy entusiasmado con la idea. La segunda implicaba que alguna entidad estatal que le debiera plata a la Municipalidad Provincial del Callao hiciera un desembolso urgente, dado que existía una brecha financiera por cubrir para el pago de remuneraciones, pensiones y proveedores. Montesinos llamó a la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) para resolver este tema. Kouri se mostró muy agradecido. Al final de la cita, cuando el alcalde se había retirado. Montesinos y Huamán tuvieron el siguiente intercambio:

—Oye, ¿se dio cuenta?

—No.

—¿No se dio cuenta de la cámara?

—No.

—Puta, me preocupé de que se haya dado cuenta.

—Yo también estaba medio preocupado.

—Pero está oscura, no se ve ni mierda.

—No se ve nada, no se nota, pues.

Kouri volvió al SIN el 8 de septiembre de 1998, cuando ya postulaba a la reelección para la alcaldía del Callao. Pero no llegó para hablar de política, sino sobre un proceso judicial que involucraba a un primo suyo en tráfico ilícito de drogas. Montesinos le recomendó que su familiar indicara quiénes eran las personas que le suministraban drogas para su consumo y buscar la exención de la pena. El asesor le prometió a Kouri la facilidad de reunirse con él en el SIN para solucionar el problema. Al día siguiente, se concretó la cita y el alcalde pidió a su primo que colaborase con la policía usando la coartada sugerida por Montesinos. Posteriormente, Kouri se quejó con el asesor sobre una tacha interpuesta por Somos Perú por el uso del símbolo del corazón —que identifica a la organización fundada por Andrade— por parte de Chimpum Callao. Montesinos le dijo que no se preocupara porque en el Jurado Nacional de Elecciones se resolvería todo a su favor.

El 10 de septiembre de 1998, Kouri acudió por tercera vez en la misma semana a la oficina de Montesinos. El alcalde del Callao se quejó por el maltrato que le brindaban funcionarios de la Corporación de Desarrollo de Lima y Callao (CORDELICA). El asesor lo tranquilizó diciéndole: «Yo tengo su perfil de personalidad y el análisis que ha hecho usted, yo sé sus proyecciones futuras y me las ha dado usted perfectamente. Dice que no es para el 2000, probablemente a partir del 2005 para adelante están sus alternativas». Montesinos le indicó que Alberto Pandolfi declararía a CORDELICA en emergencia y destituiría a los funcionarios que estuvieran incordiando a Kouri y, frente a ello, le recomendó que aplaudiera la acción del gobierno y aprovechase para atacar a Alberto Andrade. Ambos acordaron lo conversado y el asesor le aseguraría la cobertura correspondiente en los canales afines al gobierno.

En abril de 1998, se produjo en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional una reunión reveladora. Dieciséis miembros de la bancada Cambio 90–Nueva Mayoría se dieron cita en un salón de reuniones de dicha dependencia para conversar con Vladimiro Montesinos. La reunión, presidida por la parlamentaria Edith Mellado, se produjo en un momento clave: el proyecto reeleccionista

estaba en marcha. Al mismo tiempo, el grupo parlamentario sufrió un duro golpe: Carlos Torres y Torres Lara partió al extranjero por unos meses, para tratarse un cáncer en el cerebro. También estuvo presente en el cónclave el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi.

Mellado convocó la cita inicialmente por un tema puntual. El fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, buscaba desconocer la antigüedad de tres fiscales supremos provisionales nombrados por Blanca Nélida Colán, quien encabezaba la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Existía, por tanto, la posibilidad de una acusación constitucional contra Colán. Mellado y Pandolfi le pidieron a Montesinos que haga una exposición sobre el marco político sobre este caso en particular, que terminaría siendo una suerte de guía sobre los temores y acciones del fujimorismo en los siguientes meses.

El asesor presidencial anotó que, para mayo de 1998, se producirían los nombramientos de los delegados del Ministerio Público y el Poder Judicial para el Jurado Nacional de Elecciones. En la percepción de Montesinos, para ese entonces tendrían en esta última entidad a tres miembros «negativos» y dos «positivos», por lo que era necesario variar esta correlación y que, para ello, se había emitido una norma para que los jueces y fiscales supremos provisionales pudieran votar en estos comicios.

Montesinos también mencionó los cambios hechos en las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, generados para evitar que se perdiera la correlación de fuerzas favorable en el JNE hacia el futuro. En esa línea, se inscribía el nombramiento de tres fiscales supremos provisionales por parte de Colán, pues se mantendría un margen a favor del gobierno. Montesinos señalaba que: «si nosotros hemos logrado ese objetivo hemos pasado la valla y estamos en condiciones de anticiparnos al 2000 al tema de la reelección. Entonces, estamos ya ante un objetivo político de gobierno fundamental y para la supervivencia del régimen y de la continuación del señor presidente en el periodo del año 2000».

Posteriormente, ante las preguntas de los congresistas, Montesinos bajó la línea política y jurídica sobre cómo responder a

la acusación constitucional contra Colán. El asesor fue bastante claro: «Acá hay una cosa fundamental, nosotros tenemos que conjugar con la psicología de nuestra gente; ¿y cuál es nuestra gente?, o sea Blanca Nélida y la Comisión Ejecutiva es nuestra gente. A la hora que nosotros vamos al Congreso, entonces están perdiendo fe en nosotros».

En otro pasaje, el asesor fue aún más explícito en el copamiento de las instituciones: «Miren, nosotros estamos en el año 98, estamos ahora en abril del 98, el gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público; teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá. Mi pregunta es —y siempre lo digo así— llegamos al 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa en este momento, nosotros no sabemos si tenemos mayoría en el Congreso?, ¿qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de la Magistratura en contra? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo?». Las respuestas de los interlocutores lo decían todo:

—Nos matan.

—Nos sacan la mugre.

—Otro 5 de abril.

—Nos cuelgan.

Queda claro que el oficialismo no tenía otra forma de gobernar más que el copamiento institucional.

En el resto de la reunión, Montesinos y los parlamentarios debatieron sobre otros temas, en particular, la nueva legislación sobre seguridad ciudadana que buscaba sacar el gobierno en esos meses. En otro pasaje, la congresista Luz Salgado se mostró preocupada por el estado de salud de Rosario Lam, funcionaria de Productos Paraíso, que padecía una enfermedad, como ya indicamos en capítulos anteriores. Montesinos, a regañadientes, accedió a que sea trasladada a una clínica, pero sostuvo ante los presentes que Lam no era inocente y que la fábrica de colchones de

Baruch Ivcher mantenía doble facturación. La sesión terminó con discusiones políticas.

El 29 de abril de 1998, el gobierno tuvo un primer acercamiento político con Luisa María Cuculiza. Aquel día, ella acudió a una reunión en el SIN con Montesinos, acompañada por Juan Briones Dávila, exministro del Interior del régimen.

La idea de Montesinos era que Cuculiza abandonara su postulación a la reelección a la alcaldía de San Borja por las filas de Somos Perú, para que postulara a la alcaldía de Lima por Vamos Vecino. El asesor se mostró zalamero y le dijo a la alcaldesa que Fujimori «le tiene, usted sabe, un gran aprecio, una gran simpatía y una gran admiración en la doble función, primero de dama y después de representante del pueblo». Cuculiza le siguió la corriente y comenzó a despotricar de varias de las personas que eran parte del entorno de Andrade e incluso del candidato que la invitó: «Tiene expresiones tan grotescas, burlonas, como usted dice, cachaciento, trata de rebajar a la persona como persona y esas cosas».

Posteriormente, Montesinos y Cuculiza coincidieron en enfrentar con mano dura a la delincuencia. En su estilo bronco, la alcaldesa indicó que los delincuentes comunes debían ser llevados a los penales de máxima seguridad de Challapalca y Yanamayo, ubicados en zonas de altura de Tacna y Puno, respectivamente.

Ambos personajes continuaron conversando sobre las posibilidades políticas de Cuculiza. Ella señaló que había llegado a un techo en San Borja y que, en caso de perder las elecciones en Lima, «yo me quedo con ustedes para trabajar». Montesinos le ofreció la alternativa de ser ministra y la alcaldesa mostró su deseo de entrar a la cartera de la Mujer. Para mostrar que iban a trabajar en equipo, el asesor hizo una llamada para facilitar la entrega de una donación hecha por la Municipalidad de San Borja a Piura por el Fenómeno del Niño.

Luego de tocar diversos temas y referirse en malos términos a personajes de la oposición, a periodistas críticos e incluso al arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, los interlocutores recibieron a Alberto Fujimori. El presidente felicitó a Cuculiza en su

gestión en San Borja y recordó su época de empresario constructor. La alcaldesa agradeció el apoyo que el gobierno brindó en el distrito por un atentado ocurrido años atrás y luego ella le indicó: «Usted tiene que seguir. Una de las cosas que me ha acercado a usted es el haber visto en el doctor Andrade un enfrentamiento (…). Usted nunca habrá escuchado de mí nada, nada negativo suyo. (…) Él está rodeado, como le digo al doctor Montesinos, de gente totalmente negativa que odia, grupos incapaces, entonces se han mezclado. Creo que usted conoce más que yo quiénes son. Lo perturban porque Andrade es un hombre inteligente y no es malo, pero se ha embrutecido de tal manera que ya se siente presidente y eso está mal totalmente».

Cuculiza fue clara en mencionarle a Fujimori que «no quisiera quedar como Pablo Gutiérrez», en alusión al exalcalde de Chorrillos que fue un frustrado postulante a la alcaldía de Lima por Cambio 90, al que tuvieron que retirar. Ambos concuerdan que, de postular a la alcaldía de Lima, no sería bueno que Cuculiza tuviera una campaña parecida a la que se tuvo en 1995 con Jaime Yoshiyama, donde se remarcaba que el alcalde tendría todo el apoyo del gobierno. La alcaldesa señaló que era mejor mostrarse como independiente.

Sin embargo, el pase de Cuculiza no se concretó. Juan Carlos Hurtado Miller fue el candidato por Vamos Vecino y la alcaldesa de San Borja fue reelecta por Somos Perú. Pasaron algunos meses para que ella se incorporase al fujimorismo.

Como se ha visto en este capítulo y en secciones anteriores, 1998 fue un año clave para el control del sistema de justicia. Un conjunto de videos y audios filmados en el Servicio de Inteligencia Nacional confirmarían esta impresión, a partir de varias decisiones tomadas por el gobierno y la bancada oficialista.

El 3 de mayo de 1998, Montesinos citó al entonces vocal de la Corte Suprema de Justicia, Alipio Montes de Oca. Allí le comunicó que había decidido retirar a José Dellepiane Massa de la secretaría de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, por haber nombrado como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima a Sergio Salas Villalobos, un magistrado independiente, y al constitucionalista Francisco Eguiguren, otro crítico del régimen, como secretario de la

Academia de la Magistratura. Montesinos le ofreció a Montes de Oca un viaje a Colombia para tratarse un tema ocular, así como la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones con una bonificación adicional a su sueldo y otras prerrogativas. El magistrado aceptó y le llegó a decir «Políticamente, yo soy tu amigo». Posteriormente, llegaron otros dos miembros de la Corte Suprema: Luis Serpa Segura y Víctor Raúl Castillo. Con ellos volvieron a discutir sobre el rol de Dellepiane y se alinearon para extender la reforma judicial hasta el año 2005.

Dos días más tarde, Dellepiane fue convocado al SIN. Montesinos le comunicó directamente que le pedían la dimisión, lo que el marino en retiro aceptó. El asesor le planteó a Dellepiane que el gobierno lo podía colocar en el puesto que deseara —en particular, en el extranjero—, con el sueldo que él mismo coloque, así como una bonificación. El secretario de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial firmó allí mismo su renuncia, pero no dijo nada sobre el ofrecimiento del hombre fuerte del régimen. Un año más tarde, sería el presidente de la Corporación de Desarrollo de Lima y Callao (CORDELICA).

Muy cerca de la ciudad de Cajamarca, se encuentra el mayor yacimiento de oro de Sudamérica. En 1992, se constituyó Minera Yanacocha, que comenzó las etapas de exploración y desarrollo de dicha veta. El accionariado original de la compañía estaba compuesto por Compañía de Minas Buenaventura (empresa peruana de la familia Benavides, con 32.3 %), Newmont Mining (empresa estadounidense, con 38 %), Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM, empresa estatal francesa, con 24.7 %) y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (5 %).

Para 1994, Yanacocha inició las operaciones de explotación de la mina. Ese mismo año, BRGM fue privatizada, por lo que el Estado francés determinó que sus intereses en la empresa minera sudamericana debían pasar a Normandy Mining, una empresa australiana. Tanto Buenaventura como Newmont indicaron que tenían un derecho de preferencia sobre la adquisición de las acciones, por ser socios originales de BRGM. No se llegó a un

acuerdo y las partes se fueron a juicio en el Poder Judicial peruano. Según el historiador Alfonso Quiroz, los gobiernos de Estados Unidos y Francia cabildearon ante el gobierno de Fujimori a favor de las empresas de sus connacionales.

El 19 de mayo de 1998, Montesinos se reunió con el vocal provisional de la Corte Suprema, Jaime Beltrán Quiroga, en el Servicio de Inteligencia Nacional. El asesor presidencial fue bastante claro en señalar que tenían un interés especial en Estados Unidos —léase, Newmont— debido a que ese país es garante del Protocolo de Río de Janeiro y, para ese momento, se estaba negociando el Acuerdo de Paz con Ecuador. Montesinos fue explícito en señalar que había conversado con otros dos vocales de la Suprema, quienes coincidieron en que su posición sería «la defensa de los intereses nacionales». Asimismo, el jefe real del SIN argumentó que con Francia no tenían intereses reales y que autoridades del gobierno estadounidense habían hablado con Fujimori sobre este tema.

Posteriormente, Montesinos le reveló a Beltrán que el Congreso de la República extendería el mandato de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Púbico hasta el 31 de diciembre. Luego de una larga conversación sobre relaciones de paisanaje —ambos son arequipeños—, el asesor le prometió a Beltrán un puesto fijo en la Corte Suprema.

Al día siguiente, Beltrán falló a favor de Newmont y Buenaventura. Newmont le pagó finalmente a Normandy 80 millones de dólares. En 2002, Newmont adquirió a la minera australiana. A pesar de que hubo denuncias sobre posibles sobornos a Montesinos por este caso, estas no llegaron a comprobarse en la sede judicial peruana.

En 2005, un reportaje del legendario periodista Lowell Bergman —quien es el protagonista real de la película The Insider, interpretado por Al Pacino— dio a conocer que Lawrence Kurlander, directivo de Newmont, se había reunido con Montesinos el 26 de febrero de 1998. El funcionario de la empresa minera negó cualquier pago de soborno al asesor presidencial, pero sí mostró un audio en el que reconoció su promesa a Montesinos para poner a su disposición contactos para parar a Baruch Ivcher, quien hacía labores de

cabildeo sobre su caso en Estados Unidos. Este es el audio que se conocía en Perú como «Reunión Montesinos–Señor Americano», en el que no se había identificado a Kurlander. Roque Benavides refirió que no conoció las reuniones del representante de su firma socia con Montesinos[190].

Estas citas ante el SIN para resolver los problemas societarios de Yanacocha se convertirían en uno de los baldones para la empresa minera. Durante las siguientes dos décadas, la empresa cumpliría todo lo que no se debe hacer en materia de relaciones comunitarias con su entorno en Cajamarca, lo que no solo afectaría su reputación ante la opinión pública, sino que cerraría en la práctica dos proyectos mineros controvertidos: Cerro Quilish y Conga. Parte de la mala imagen de la compañía tuvo su génesis en estas conversaciones.

Al día siguiente de la conversación con Beltrán, Montesinos cumplió 52 años. En esa fecha, recibió en el Servicio de Inteligencia Nacional, acompañado por el ministro de Salud, Marino Costa Bauer, al embajador de Estados Unidos en Perú, Dennis Jett. Como hemos anotado antes, el diplomático era uno de los críticos más fuertes al gobierno de Fujimori en materia de democracia y derechos humanos.

Para mayo de 1998, las relaciones entre Estados Unidos y Perú se habían deteriorado por el uso político de un video en el que el asesor presidencial supuestamente exponía la política antidrogas peruana ante Barry McCaffrey, el «zar antidrogas» estadounidense.

Costa Bauer, sin rodeos, focalizó la primera parte de la cita en brindar una explicación sobre el video. Indicó que ya había conversado con McCaffrey al respecto. Según el ministro de Salud, la edición correspondió a Panamericana Televisión, canal en cuyo programa dominical se había expuesto la cita y que, en el diálogo con el «zar antidrogas», ambas partes habían visto por conveniente que el tema se cerrara con un comunicado de la embajada estadounidense en Lima. Costa Bauer ya tenía un borrador del documento. Montesinos hizo un recuento de la relación de cooperación en materia de lucha antidrogas. Jett contestó en

monosílabos y, al final, señaló a sus interlocutores que el comunicado debería ser mucho más general.

Montesinos negó ante Jett cualquier participación del SIN en violaciones a los derechos humanos, lo que hoy sabemos que era mentira. Al final, Costa Bauer mencionó que era cumpleaños de Montesinos y Jett se vio obligado a saludarlo por la fecha. Luego de que el embajador se retiró, Montesinos concluyó que si el comunicado «es muy gaseoso no dice nada».

Mientras Javier Valle Riestra daba la apariencia de un independiente desmarcado de los aspectos más oscuros del régimen, durante las primeras semanas de su breve estadía en la Presidencia del Consejo de Ministros se reunió en dos ocasiones con Vladimiro Montesinos.

El 12 de junio de 1998, los dos personajes se juntaron en el Servicio de Inteligencia Nacional, con la compañía de Oscar Tino Santander, asesor de la PCM. Montesinos, como en otras charlas, buscó colocarse como el vencedor de Abimael Guzmán, mientras que Valle Riestra anotó cada una de sus defensas al gobierno en una entrevista que tuvo con Cecilia Valenzuela en ATV. Ambos comentaron una reciente marcha de estudiantes contra el gobierno, donde dispusieron a personal policial femenino, ante las críticas que se había tenido por la represión en la protesta anterior, realizada mientras Valle Riestra juramentaba en Palacio de Gobierno.

Montesinos felicitó a Valle Riestra por el esquema de trabajo, donde el presidente del Consejo de Ministros hacía las autocríticas del gobierno. El veterano político se quejó de que la PCM tuviera varios organismos técnicos adscritos sobre los que le podrían preguntar en el Congreso, y sobre los que no se sentía cómodo para hablar. El asesor presidencial logró informarle de los alcances de algunas de estas entidades.

Al día siguiente, Santander se reunió por separado con el asesor presidencial. Allí le reiteró el pedido de Valle Riestra para colocar a una persona técnica que viese los temas con los organismos reguladores. Montesinos asintió, pero le recordó que el presidente del Consejo de Ministros «también tiene que defender la obra del gobierno». De igual modo, le dijo a Santander que Fujimori iba a

buscar la reelección. El asesor del presidente del Consejo de Ministros abogó por una persona de seguridad que iba a trabajar con él, la cual había colaborado con Agustín Mantilla, frente a lo que Montesinos no tuvo problema. Ambos acordaron las líneas ejes del discurso de Valle Riestra ante el Congreso. En un momento dado, Santander y Montesinos elogiaron a Santiago Martín Rivas y Miguel «Chito» Ríos, por «jugársela». El asesor llegó a referir que Ríos trabajaba como informante en el Ministerio del Interior.

En la siguiente reunión, también realizada en junio de 1998, Montesinos le dijo a Valle Riestra que había que remarcar que el principal problema del país era el empleo y no la institucionalidad. Posteriormente, Montesinos, el presidente del Consejo de Ministros y Santander vieron los puestos vacantes y ocupados en la PCM. El asesor presidencial y el veterano político también coordinaron ataques contra Alberto Andrade. Valle Riestra insinuó que Blanca Nélida Colán debía ser destituida, pero Montesinos le dijo que, por lo menos, se iba a quedar hasta el 31 de diciembre de 1998 en la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Con ello, quedaron muy claros los límites de su encargo, que apenas duró dos meses.

El viernes 24 de julio, en el Hotel Bolívar, Juan Carlos Hurtado Miller fue presentado como el candidato de Vamos Vecino, la tercera agrupación fundada por el fujimorismo, a la alcaldía de Lima. Nueve días más tarde, el expresidente del Consejo de Ministros acudió al SIN, junto con Daniel Borobio, encargado de la estrategia de su campaña, para conversar con Montesinos.

La primera parte de la discusión se centró en un análisis electoral. En particular, Borobio estaba expectante por la candidatura independiente de Luis Bedoya de Vivanco contra Fernando Andrade en Miraflores, así como por la posibilidad de reclutar al exmiembro del PPC Ricardo Amiel. El publicista señaló que la recomendación de Fujimori era atacar a Alberto Andrade por el presupuesto de la ciudad.

Borobio recomendó que se invisibilizara el nombre Vamos Vecino en la campaña, se confinara al alcalde reeleccionista a la imagen de «preocupado únicamente por el Centro Histórico», y se le criticara por sus supuestos escasos avances en limpieza y seguridad

ciudadana. Hurtado también sugirió atacar a Andrade por el caso Lucchetti, para remarcar que él estaba a favor de la inversión privada, a lo que Borobio asintió. Esta estrategia se trazó con miras a una entrevista que brindaría el candidato en La Revista Dominical.

Montesinos se mostró de acuerdo con la estrategia y aconsejó remarcar el símbolo del tractor. Borobio comenzó a crear el eslogan de campaña: «Con la fuerza de un tractor». Cuando Hurtado criticó los focus groups como técnica, aludiendo a la campaña de Yoshiyama, Borobio buscó deslindar del fracaso electoral anterior aludiendo a la existencia de un «boicot interno» dentro del fujimorismo a la campaña y que, además, el postulante de la elección municipal de 1995 se puso nervioso.

Luego de un largo diálogo entre Borobio y Hurtado Miller sobre diversos temas, el candidato se quedó con Montesinos en la sala de reuniones. El asesor presidencial le hizo entrega de dos sobres de manila con dinero para la campaña electoral. Así se manejó la campaña a la alcaldía de Lima del gobierno.

Una de las filmaciones hechas por Montesinos que sorprendió más a la opinión pública fue la que involucró al congresista Ernesto Gamarra Olivares, miembro del Frente Independiente Moralizador y pugnaz opositor del régimen. Se trata de uno de los pocos videos que no se filmó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional.

Según Gamarra, el video se grabó el 22 de septiembre de 1998 en una oficina en el Callao, perteneciente a Manuel Tafur Ruiz, empresario que había apoyado sus campañas políticas en el pasado. Días antes, el congresista le había comentado sobre las dificultades económicas que tenía la postulación de Pilar Brescia —actriz y esposa de Gamarra— a la alcaldía de Miraflores como independiente, para las elecciones municipales de 1998. Tafur se comprometió a conseguir algún tipo de apoyo. Días más tarde, el empresario le indicó que un amigo suyo le daría un apoyo para la campaña y citó a Gamarra en su oficina.

Como se apreció en las primeras imágenes del video, antes que Gamarra llegase, Tafur dejó la oficina y allí se vio a Luis Venero Garrido, hermano del testaferro central de Montesinos, ensayando

posiciones y posturas de entrega de dinero con Roberto Huamán Azcurra, el encargado de las grabaciones de Montesinos. Tafur retornó a la escena y también intervino en el diálogo para sugerir que Venero le recomendara a Gamarra que contase el dinero en voz alta, a fin de que quede atestiguado el monto.

Una vez que el congresista llegó, le preguntó a Tafur por el empresario amigo y las razones por las que lo conocía. Venero apareció y le comentó a Gamarra sus preocupaciones por informes que se venían propalando en el programa Sin Censura, conducido y dirigido por Cecilia Valenzuela, acerca de su familia y sus entonces presuntos vínculos con Montesinos. En todo momento, Venero buscó deslindar sobre las actividades de su hermano Víctor Alberto, mientras que el congresista le restó importancia al reportaje. Posteriormente, hablaron sobre problemas en el emporio textil de Gamarra por el ingreso de importaciones de ropa desde China y Corea.

Acto seguido, Venero le preguntó a Gamarra sobre la campaña de su esposa. El congresista hizo referencia a una encuesta aparecida en El Comercio —a la que no le dio mucha credibilidad—, donde Brescia aparecía en cuarto lugar. Como había acordado con Huamán, Luis Venero le entregó a Gamarra el dinero para la campaña electoral. El parlamentario, al final, hizo vagas promesas para que la investigación periodística y parlamentaria sobre el tema de su familia no lo afectase. En su libro de defensa, Gamarra esgrimió como evidencia los testimonios de varios periodistas, quienes señalan que nunca fueron presionados por el parlamentario sobre el caso Venero[191].

En octubre de 1998, Andina de Televisión despidió a Cecilia Valenzuela y Luis Iberico de su equipo periodístico, aduciendo problemas económicos. Como referimos, el exdirector de ATV Noticias consideró la posibilidad de presiones del Servicio de Inteligencia Nacional. El periodista no se equivocó.

El 12 de octubre de 1998, Julio Vera Abad, uno de los propietarios de ATV, acudió al SIN para hablar con Montesinos, con la presencia del publicista Daniel Borobio quien, como hemos señalado, fungía como intermediario con empresarios de medios de comunicación.

Al inicio de la conversación, Vera Abad hizo alusión al difícil divorcio de sus padres, que había impactado en los negocios de la familia, incluyendo el canal. Luego de una larga charla al respecto, Borobio centró el diálogo con Montesinos:

—Yo ya hablé con él, quedamos en un acuerdo que busca la salida de…

—De la famosa, de la doña, de la Chichi….

—Del discípulo de… Baruch.

—De Iberico.

—De Iberico y de tener un proceso de coordinación…

—Permanente, directo.

En la conversación entre los tres hombres, acordaron incluso que, de vez en cuando, se hiciera alguna crítica al gobierno. Vera Abad llegó a decir que «en esto no solamente hay que serlo sino también hay que aparentarlo». Posteriormente, Borobio aludió a las entregas de dinero y, finalmente, Montesinos le dio a Vera Abad cinco fajos de dinero a cambio del acuerdo. Recibió 50 000 dólares por los despidos.

Montesinos afirmó sobre Valenzuela: «De pronto ya salió la mujercita que es conflictiva, una tipa obsesionada, o sea, no es nada, no es objetiva, está apasionada (…) Acuérdate lo que le hizo al presidente con lo de la nacionalidad, una patraña, ¡carajo!, de la peor especie. Y lo peor es que ella se cree que lo que hizo tiene la razón, fue allá y se tiró hasta los documentos». Luego Vera Abad aludió a una revancha pendiente con César Hildebrandt, debido a que había dejado su canal en 1997 para pasar a Red Global, frente a lo que Montesinos se mostró interesado para direccionar una demanda en contra del periodista.

El empresario también se refirió a sus problemas de dinero en el canal, lo que para Montesinos sería un pretexto perfecto para despedir a Valenzuela. Y, cual gamonal, el empresario afirmó: «Mañana me tiro a medio departamento de prensa, con lo cual no solamente sale Iberico sino la gente que está jodiendo». Al final del diálogo, Borobio reiteró que la voz que aparece en las llamadas con José Francisco Crousillat difundida en el programa de Hildebrandt no era la suya. Vera Abad continuó siendo funcional al gobierno. En

1999, comenzó una disputa por el control de Red Global. En junio de ese año, gracias a una medida cautelar, entró al canal y levantó todos los espacios periodísticos. La medida fue ejecutada justo cuando iba a lanzarse al aire un programa crítico al régimen conducido por los periodistas Pedro Salinas y Beto Ortiz, y el economista aprista Hernán Garrido Lecca[192].

Mientras Vera Abad, Borobio y Montesinos conversaban en el SIN, Alberto Fujimori tenía una reunión en Palacio de Gobierno con el congresista Jorge Trelles. El presidente le comenzó a dictar al parlamentario una carta dirigida a Jamil Mahuad, presidente de Ecuador, en la que le indicó que Trelles le daría el detalle de una conversación con un personaje no identificado que deseaba ayudar en las tratativas de paz con el vecino del norte.

Trelles y Fujimori también dialogaron sobre las dificultades para aprobar el Acuerdo de Paz por parte de los congresos peruano y ecuatoriano. El parlamentario criticó a su colega Carlos Ferrero por solicitar más información sobre los tratos con Ecuador. Fujimori sentenció sobre el congresista disidente: «¡Cuán traidor es!».

Jorge Trelles le sugirió a Fujimori que hablara por teléfono con Rafael Rey y Agustín Mantilla para comprometer su apoyo en el tema ecuatoriano. Fujimori le dijo a su congresista: «A Rey le puede hablar De Trazegnies, a Mantilla le puedo hablar yo, o si no, le puede hablar el señor Montesinos». El parlamentario también le propuso una reunión reservada con los directores de los medios de comunicación para que no quedara la imagen de que el Congreso simplemente convalida lo que dice Fujimori.

Hacia el final de la conversación, Fujimori habló por teléfono con Mahuad y le indicó que Trelles iría como emisario a Quito.

La conversación de Trelles con Fujimori, así como la sesión en la que se acordó el relevo de Nicolás Hermoza Ríos, fueron grabadas en 1998 en Palacio de Gobierno. Hasta el día de hoy, no se conoce cuántos videos grabados en la sede presidencial tenía Montesinos en su poder. Y si es que Fujimori, en algún lugar del mundo, guarda aún una copia digital de las grabaciones que lo conciernen.

Uno de los principales visitantes al Servicio de Inteligencia Nacional durante los años finales del régimen de Fujimori fue José

Francisco Crousillat, vicepresidente del directorio de América Televisión. Como se verá en este capítulo y ya se apreció en algunos pasajes anteriores, el empresario cumplió una función importante como nexo para nuevos visitantes de Montesinos. Pero también acudió a la sede del SIN en Chorrillos por sus intereses económicos y políticos.

El 14 de octubre de 1998, Crousillat y Montesinos se reunieron para hacer un control de daños de los audios que había sacado César Hildebrandt sobre las conversaciones que el broadcaster había tenido con Borobio. El asesor le indicó que Fujimori recomendó que en La Revista Dominical se hiciera un informe sobre cómo se pueden imitar voces, sugerencia que Crousillat descartó. Ambos personajes pensaron en impulsar una ofensiva en conjunto con Frecuencia Latina para desprestigiar a Hildebrandt, quien ya había expresado su opinión contraria a la cesión del kilómetro cuadrado en Tiwinza como condición para el Acuerdo de Paz con Ecuador. En esa misma reunión, Montesinos le entregó a Crousillat un 1 800 000 soles en efectivo por su apoyo al gobierno.

El 26 de febrero de 1999, acudieron al SIN José Enrique Crousillat, presidente de América, y su hijo José Francisco. Al iniciarse la grabación, sobre la mesa central de la sala acostumbrada donde Montesinos atiende a sus visitantes, había una importante cantidad de billetes. En 2001, se conoció que, a cambio del dinero entregado por Montesinos, existía un contrato firmado sobre la negativa de publicidad a los candidatos opositores, así como la coordinación de contenidos periodísticos con el SIN. Un contrato similar había sido suscrito por Samuel y Mendel Winter, una vez que estuvieron en control de Frecuencia Latina.

El 19 de julio de 1999, José Francisco Crousillat acudió a hablar con Montesinos. El centro de la conversación era la deuda de América con el Banco Wiese. El asesor trajo a Eugenio Bertini, uno de los principales directivos de la entidad bancaria, para buscar una reestructuración de la acreencia. Montesinos buscó dar un argumento de peso para que se acceda al pedido de Crousillat: «El canal se está jugando por el gobierno, por el presidente y la

reelección, hermano. Todos estamos en ese objetivo». En dicha sesión, no se llegó a un acuerdo entre la entidad bancaria y el canal.

Recién el 11 de noviembre de 1999, en una nueva reunión con Bertini, gracias a un esquema diseñado por Carlos Boloña, se llegó a un arreglo de la deuda con América Televisión. Lo mismo se hizo con Samuel Winter para el caso de Frecuencia Latina.

En total, los Crousillat recibieron una suma cercana a los diez millones de dólares por poner la línea editorial de América Televisión al servicio del régimen. Por hacer lo mismo, Samuel y Mendel Winter tuvieron a su disposición tres millones de dólares por un contrato de sujeción entre noviembre de 1999 y abril de 2000, así como otros tres millones en diciembre de 1999 para un incremento de capital al interior de Frecuencia Latina, con miras a licuar las acciones de Baruch Ivcher.

La escena del pop y rock peruanos se conmocionó a fines de 1991 por un tema que se volvió emblemático. Las Torres era una burla a la clase política derrotada en las elecciones del año anterior, así como a Sendero Luminoso y el MRTA, sobre la base rítmica de la canción infantil Un elefante se balanceaba. Para muchos, era la expresión de cierta apatía política —o alpinchismo, en jerga peruana — que los jóvenes expresaban luego de dos décadas de identificación ideológica muy fuerte. El grupo que colocó este tema en el top de recordación se llamaba Nosequién y los Nosecuántos. El tema destacaba en medio de una escena de pop y rock que, en sus manifestaciones más requeridas por los medios masivos, era básicamente apolítica.

Si bien Las Torres fue interpretada por Alfredo Sillau, guitarrista de la banda, el cantante principal era Raúl Romero, quien provenía de una familia donde destacaba el arte. Sus hermanas Elena y Bárbara eran cantantes y su hermano Óscar, fallecido tempranamente por el VIH, era actor. Aunque intentó estudiar Derecho en Barcelona y en la PUCP, lo suyo era la performance.

Si bien NSQ y los NSC fue una banda emblemática para los jóvenes de una generación, la popularidad de Romero se incrementó cuando se convirtió, en 1994, en el conductor de De Dos a Cuatro, un programa concurso en Andina de Televisión, dirigido a

un público familiar y juvenil, donde su hermana Elena tenía el rol de coanimadora. El espacio se constituyó en representativo de cierto sentido común noventero en algunos sectores de las clases medias limeñas: diversión mientras la economía se recupera, creación de nuevos espacios de entretenimiento —que hoy nos parecerían inocentes— y hacerse de la vista gorda sobre los atropellos del régimen. Romero, en sí mismo, encarnaba todo ello y no ocultó nunca sus simpatías con el gobierno.

Para 1997, Romero concluyó su ciclo en ATV y, en 1998, pasó a América a hacer un programa similar, pero con frecuencia dominical. Sin embargo, Feliz Domingo no fue tan aceptado en una época en la que la televisión dejó cualquier tipo de candor: apenas duró dos meses.

Precisamente, mientras hacía su nuevo espacio, José Francisco Crousillat lo llevó a «conocer a alguien muy importante». Esa persona era Vladimiro Montesinos. En esa primera reunión, los tres conversaron sobre los problemas del país. Según Romero, la cita duró aproximadamente cinco horas.

En una segunda conversación, Montesinos fue más directo. Quería que NSQ y los NSC hiciera campaña con miras a la reelección. Como lo hizo con otros interlocutores, el asesor presidencial habló de la continuidad de lo avanzado, que podría ser destruido por los políticos tradicionales. Montesinos le propuso la realización de catorce conciertos. Romero rechazó hacer una canción sobre lo hecho por el gobierno durante el Fenómeno del Niño 1997–1998 y le mostró un tema inédito de la banda (Lechuza Gorda) sobre la captura de Abimael Guzmán. Montesinos quería que la canción hiciera mención explícita a Fujimori. El frontman de la banda dijo que había que discutir ciertos límites. Luego de la reunión, el cantante habló con otro miembro del grupo que también era simpatizante del gobierno y le comentó el diálogo.

Romero comentó en 2001 a la revista Caretas que la tercera reunión en el SIN se produjo con otro miembro de su banda. La propuesta que le presentó a Montesinos era hacer catorce conciertos, con control total sobre los contenidos y sin presencia de ningún político. El monto que colocó por el paquete de shows fue de

un millón y medio de dólares. Sin embargo, Crousillat le indicó días después que al asesor la suma le parecía excesiva y tenía que rebajarla. Montesinos le reiteró esto en la cuarta reunión y, al culminar la misma, Romero le dijo a Crousillat que no aceptaría la propuesta del gobierno. Hubo una cita más en la que el cantante acudió con su esposa, quien quería conocer a Montesinos.

Pero lo que produjo un quiebre entre Romero y parte de su público fue una frase que pronunció al final de su extensa entrevista con la revista Caretas: «Carolina (la esposa de Romero) y yo consideramos a Montesinos un tipo que se sacrifica por el país. Y si se hablaba de La Cantuta, de Barrios Altos y de cierto control del Poder Judicial, a muchos de nosotros, desgraciadamente, nos parecía tolerable. Que me perdonen las víctimas, pero desde el punto de vista macropolítico, nos parecía que era un precio a pagar». Tres días más tarde de publicada la entrevista, en febrero de 2001, cuando Romero iba a acudir a otro diálogo con Mónica Delta en Panorama, un grupo de manifestantes lo encaró y le lanzó huevos a su auto. El animador y cantante tuvo que pedir disculpas por sus expresiones[193].

En el último día de 1998, Carlos Ferrero Costa llegó sorpresivamente al Servicio de Inteligencia Nacional. Antes de su llegada, Montesinos estaba con otro interlocutor no identificado para desmentir un supuesto arresto domiciliario contra Nicolás Hermoza Ríos, quien se encontraba fuera del país por un tratamiento médico.

Ferrero acudió al SIN con el pretexto de agradecer una canasta enviada por Montesinos a su domicilio, al tiempo que le reclamó al asesor que no le hubiese brindado una audiencia desde hacía un año y medio. Montesinos se excusó señalando que Carlos Torres y Torres Lara no deseaba que los congresistas concurrieran al Servicio de Inteligencia Nacional. El parlamentario le indicó que el expresidente del Congreso de la República buscaba no perder el control de la bancada y recordó que había estado en dos de las cinco reuniones que Ferrero y Montesinos tendrían.

La agenda de Ferrero era clara. Buscaba que Montesinos saliera más ante la opinión pública y le sugirió que concurriera al Congreso de la República, específicamente a las comisiones de Defensa y

Relaciones Exteriores. Montesinos dio algunos indicios de aceptar una sesión en la comisión de Defensa para hablar de la política de inteligencia hacia el siglo XXI, pues el grupo de trabajo era presidido por Martha Chávez, defensora de los temas más polémicos del régimen.

En otro pasaje de la conversación, Montesinos eligió a Ferrero por su inteligencia y honestidad, a pesar de que emitía posiciones discrepantes con el gobierno. El parlamentario le señaló: «Yo soy leal al Congreso para apoyar a Fujimori, pero yo no puedo, por ejemplo, ir contra la Constitución porque es algo que yo he jurado respetar y hay cosas que, en mi opinión, no concuerdan con eso».

De hecho, Ferrero volvió a la carga y señaló que resultaba necesario recibir a otros sectores opuestos al gobierno y fue aún más allá: «Nos conviene que de 2000 a 2005 haya una fuerza política estructurada como para hacer un aporte a su país». Incluso le comentó a Montesinos que había escuchado rumores sobre la formación de Perú 2000 por parte de Absalón Vásquez. También le recomendó al asesor que transparentase su declaración jurada de Impuesto a la Renta y, además, independizara su estudio de abogados.

La discusión derivó a otros temas políticos en los que se notaron las discrepancias entre ambos personajes: el caso Ivcher, la falta de previsión del gobierno sobre la inicial oposición de la opinión pública a los términos del Acuerdo de Paz con Ecuador, el trato diferenciado que sufría Ferrero al interior del oficialismo, la posibilidad de reunirse con los sectores opositores más radicales, las frustraciones frente al trunco proceso de descentralización y el control de los medios de comunicación. Ferrero buscó que el gobierno brindara pasos de mayor apertura e incluso contempló la posibilidad de que perdiera en las elecciones del año 2000, pero Montesinos le dio largas a las propuestas y se resistió a asumir cualquier tipo de compromiso ante los tópicos planteados.

Un año después, Carlos Ferrero dejó la bancada Cambio 90–Nueva Mayoría.

Ya hemos señalado que Luisa María Cuculiza llegó sorpresivamente al equipo ministerial encabezado por Víctor Joy

Way en enero de 1999, apenas tres meses después de haber obtenido la reelección como alcaldesa de San Borja en las filas de Somos Perú. Lo que no conocíamos era que el mismo día que juró al cargo de ministra de la Mujer, el 5 de enero de ese año, acudió con Joy Way al Servicio de Inteligencia Nacional para hablar con Montesinos.

Al iniciarse el diálogo, Cuculiza recordó que no era la primera vez que acudía al SIN. Acto seguido, le reveló al asesor y al presidente del Consejo de Ministros que Tomás Gonzales Reátegui, quien era el ministro de la Presidencia en ese entonces, la había acosado sexualmente e, incluso, le había ofrecido un viaje al Caribe, cuestión que ella había rechazado a su estilo.

Posteriormente, Montesinos le indicó a Cuculiza que había sido convocada para ser parte del equipo ministerial. Aludió a las relaciones de paisanaje entre Joy Way y la alcaldesa —ambos son de Huánuco— y le recomendó que hiciera el deslinde frente a Somos Perú. La política manifestó su acuerdo y su disposición a servir al gobierno.

Una vez que aceptó, Cuculiza dijo que los asesores de Andrade «han hecho en él un ambiente de odio, de revanchismo». En particular, Montesinos hizo referencia al almirante Alfonso Panizo, a quien sacó de la Comandancia General de la Marina el mismo día que Fujimori asumió el mando.

Posteriormente, el asesor le ofreció continuar con su labor a favor de la mujer en el Congreso de la República. Cuculiza le preguntó a boca de jarro a Montesinos si Fujimori se iba a lanzar y tanto el asesor como el presidente del Consejo de Ministros asintieron. La ministra se mostró muy favorable a postular como parlamentaria en 2000 y, para demostrar su lealtad, enunció una frase que se haría célebre con los años: «No actuar como Ferrero. A ese hijo de perra yo lo desaparecería ahorita. Ese es el hombre más ruin, peor que la oposición, porque prefiero a un Zumaeta, prefiero a un Breña Pantoja, prefiero a Diez Canseco, pero esta es una malagua de mierda». La alusión a Carlos Ferrero era clara, pues hacía tiempo que tenía votos singulares en temas claves para el gobierno.

Acto seguido, Cuculiza y Montesinos se refirieron en malos términos a Javier Diez Canseco, Fernando Olivera, Henry Pease y Ernesto Gamarra, a quienes calificaron como personas con odio. Finalmente, Montesinos la comprometió para «los dos tramos», tanto en el ministerio como en el Congreso. Pero la política no postuló para cargos parlamentarios sino hasta 2006.

Durante más de tres décadas, Gisela Valcárcel ha sido una presencia importante en la televisión peruana. Su historia de éxito y ascenso social fue vista como emblemática por mujeres de varias generaciones: chica que crece en el popular distrito limeño de La Victoria, vedete presente en las revistas cómicas de Panamericana y los café teatros de moda en la década de los ochenta, madre soltera que tuvo la oportunidad de su vida gracias a una audición hecha por Genaro Delgado Parker para hacer un programa de mediodía dirigido a las amas de casa. Valcárcel tuvo altas y bajas en su carrera, pero se había consolidado como animadora, productora y empresaria de éxito, a la vez que tenía ciertos rasgos conservadores que haría más evidentes en sus más recientes temporadas.

Para 1998, Gisela tuvo un año complicado. Su programa Gisela Contigo en Global Televisión no fue un éxito de sintonía. Mantuvo una diferencia pública con César Hildebrandt, quien trabajaba en el mismo canal, debido a que ella sí estaba a favor de la cesión del kilómetro cuadrado en Tiwinza para lograr la paz con Ecuador. Y, para complicar más las cosas, Carlos Vidal, exmodelo que había sido su pareja durante varios años, publicó un libro llamado La Señito, donde exhibió detalles íntimos de su vida en común. En ese momento, Valcárcel estaba casada con el futbolista Roberto Martínez.

El 27 de febrero de 1999, José Francisco Crousillat llevó a Gisela al Servicio de Inteligencia Nacional. Casi de inmediato, la animadora señaló que había obtenido una medida cautelar que había parado la publicación y distribución del libro de Vidal. Al mismo tiempo que la grababa sin su consentimiento, Montesinos se mostró solidario con una invasión a su privacidad e incluso recomendó que denunciara al exmodelo por difamación. Paulatinamente, el asesor buscó

impresionar a Valcárcel con su supuesto manejo y conocimiento en materia de seguridad, sobre todo, frente a la ola de secuestros que asolaba Lima entre 1998 y 1999. Incluso llegó a decirle que conocía que Osama bin Laden tenía actividades delictivas en América Latina.

En varios momentos, Montesinos alardeó ante Valcárcel sobre su supuesto servicio al país: «Yo no saco nada de esto, al contrario, saco cólera, odios, pasiones, intrigas, resentimientos, lo hago por una vocación de servicio a la nación, sacrificando mi vida, mi tiempo, mi familia, mis energías. Se me han ido diez años de mi juventud, de mi vida, acá encerrado, porque yo vivo acá diez años sin salir».

Luego que Gisela se fue, el asesor y Crousillat se quedaron hablando sobre la posibilidad de mejorar su carrera. Pero el broadcaster, inmediatamente, sacó cara por Laura Bozzo: «Laura es otra cosa, porque Laura lo que tiene es que es auténtica». Resultaba claro que el asesor buscó congraciarse con Crousillat, quien quería demostrar su poder ante una estrella de la televisión.

Si bien Vladimiro Montesinos ya contaba con varios miembros de su promoción en los puestos más altos del Ejército para 1999, le era claro que, si quería tener continuidad en su proyecto político, debía comprometer a los oficiales de alta graduación que les seguían a sus condiscípulos. Por ello, planeó la ceremonia más vergonzosa de la historia de las Fuerzas Armadas peruanas.

El 13 de marzo de 1999, en el auditorio José Ruiz de la base aérea de Las Palmas, se congregaron oficiales con rango de general del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En la mesa central, estaban Julio Salazar Monroe (ministro de Defensa), José Villanueva Ruesta (ministro del Interior), César Saucedo (presidente del Comando Conjunto), Américo Ibárcena (comandante general de la Marina), Elesván Bello (comandante general de la Fuerza Aérea), Fernando Dianderas (director general de la Policía Nacional), Humberto Rozas (jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional) y Montesinos. Luego del saludo protocolar de Salazar Monroe, Saucedo se dirigió a los oficiales:

—Nos hemos reunido, como ha manifestado el señor ministro de Defensa, en una, valga la redundancia, en una reunión histórica en el hito de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para tratar dos asuntos de la mayor importancia. El primero, tiene relación con la decisión unánime de apoyo institucional que adoptaron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional a la decisión tomada por el señor presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el 5 de abril de 1992. Y que actualmente viene siendo objeto de la crítica y manipulación de elementos interesados en dañar nuestro prestigio e imagen, atribuyendo responsabilidades individuales a sus más altos mandos para de esta manera conseguir, mediante el amedrentamiento, la inhibición de nuestras instituciones para adoptar decisiones esenciales para la vida y desarrollo del país. (…) En segundo lugar, también es de sumo interés tratar un asunto que tiene relación con una campaña de desprestigio y arteros ataques contra las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, en la cual se nos acusa de violaciones de los derechos humanos, desconociendo maliciosamente la política respetuosa sobre el particular que hemos seguido con convicción y fidelidad.

Luego de aludir a la existencia de la Ley de Amnistía dictada en 1995, Saucedo puso como pretexto para lo que vendría después una denuncia presentada por el excongresista de izquierda, Genaro Ledesma, contra Nicolás Hermoza Ríos por diversos delitos ligados al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, así como una conferencia dictada por el general Jaime Salinas Sedó sobre la interrupción del orden democrático. Para la cúpula militar, esto era el «comienzo de una campaña sistemática que, inserta dentro de la lucha preelectoral que está desarrollándose en el país, pretendería involucrar a las instituciones tutelares y a quienes en su momento las comandaron con relación a decisiones trascendentales que se tomaron en su momento, con el claro propósito de dañar la imagen y prestigio institucional, atribuir responsabilidades individuales a sus más altos mandos y conseguir, vía el amedrentamiento, la inhibición

de dichas instituciones para adoptar decisiones que son esenciales para la vida y el desarrollo del país».

Por esta razón, se emitió un pronunciamiento indicando que la decisión de apoyar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue «la expresión de la voluntad institucional unánime» de las instituciones castrenses, sin que primaran criterios individuales y que las Fuerzas Armadas defenderían a sus miembros en caso exista algún intento de responsabilidad individual sobre dicha decisión. Si algún miembro decidiera desacatar estos acuerdos, sería sometido a sanción disciplinaria y a una corte de honor.

En ese mismo pronunciamiento, se rechazó las declaraciones de personal en retiro que «encierran el claro propósito de individualizar supuestas responsabilidades» sobre el golpe, lo que, para la cúpula castrense, era una «conducta infraterna con sus compañeros de armas».

Asimismo, se destacó el papel de las instituciones castrenses en la derrota de la subversión, en pleno cumplimiento de los derechos humanos, pero, contradictoriamente, se aludió a la existencia de la Ley de Amnistía «en plena vigencia». También se mencionó la necesidad de un compromiso de honor para defenderse frente a posibles responsabilidades individuales.

Finalmente, se puso en conocimiento de los oficiales un conjunto de documentos en los que sindicaban a Baruch Ivcher como supuesto proveedor de información y vendedor de armas a Ecuador, lo que sería, en su concepto, el verdadero motivo de una «campaña de desprestigio y calumnia contra las Fuerzas Armadas». Y consideraban que el empresario era «un elemento de alta peligrosidad» para el país en la actualidad y en el futuro.

Luego de indicarles a los oficiales que la sesión era secreta y que su contenido era reservado, los miembros de la mesa los hicieron pasar a firmar el acta donde constaba el pronunciamiento sobre el golpe del 5 de abril de 1992 y la Ley de Amnistía, así como el documento sobre Ivcher.

Se trataba, en la práctica, de un acta de sujeción de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al proyecto político de Fujimori y Montesinos.

Seis días más tarde, se repitió la misma ceremonia, con los oficiales que tenían grado de coronel.

Durante las tres primeras décadas de la televisión en el Perú, Panamericana Televisión se había convertido en el canal líder. Las innovaciones en programación, su cobertura a escala nacional y las importaciones de atractivos programas hicieron que la estación se convirtiera en líder en sintonía desde su aparición en 1959. Buena parte del trabajo fue emprendido por dos hermanos: Genaro y Héctor Delgado Parker. El primero colocaba las ideas y la visión, mientras que el segundo se encargaba de conseguir el dinero.

Un socio menor era Manuel, el otro hermano varón de la familia, abocado desde 1963 a construir Radio Programas del Perú, convertida desde 1980 en una estación estrictamente informativa. Mientras que un importante aporte de capital en el canal lo tenía la familia Lindley, dueña de la embotelladora que producía Inca Kola, la gaseosa que impedía que Coca Cola fuera la más poderosa en su rubro en el Perú.

Para finales de la década de los ochenta, dos hechos cambiaron la correlación de fuerzas en la familia. De un lado, las discrepancias políticas entre Genaro —más cercano a la derecha— y Héctor —amigo personal de Alan García— terminaron en un sonoro puñetazo. De otro lado, los Lindley vendieron sus acciones en partes iguales a los hermanos Delgado Parker, con lo que Héctor y Manuel, en la práctica, comenzaron a manejar el canal, prescindiendo de Genaro. Si bien los hermanos se reconciliaron cuando el segundo de ellos fue secuestrado por el MRTA durante cuatro meses, entre 1989 y 1990, lo cierto es que las discrepancias políticas generaron la toma de caminos distintos en el ámbito empresarial.

Genaro se abocó al negocio de los celulares con gran éxito durante la década de los noventa, a partir de licencias obtenidas inicialmente por las empresas de la familia, pero que pasaron a la empresa constituida por Delgado Parker, Tele Móvil. En diciembre de 1995, Héctor falleció. Para 1997, Genaro logró vender la mayoría de las acciones de Tele Móvil, la compañía de celulares, a la empresa estadounidense Bell South. Al año siguiente, vendió el

paquete accionario que le quedaba a sus socios. Y allí comenzó una disputa judicial con sus hermanos.

Un segundo pleito paralelo se presentó cuando Genaro obtuvo el dinero de Bell South y buscó hacer un aumento de capital en Panamericana Televisión, donde aún mantenía acciones, con miras a manejar la televisora. Sin embargo, Manuel Delgado Parker y los herederos de Héctor se opusieron y buscaron a un socio capitalista. Manuel llamó a su consuegro, el empresario peruano–suizo Ernesto Schutz Landázuri, quien había hecho su fortuna en la industria del papel, para que les prestara el dinero para hacer ellos el aumento de capital. La condición era que Schutz manejara el canal. En 1998, Schutz compró las acciones de Manuel y los hijos de Héctor, cuando Genaro no pudo adquirirlas.

En 1998, Genaro pasó a controlar Global Televisión a través de su empresa productora Astros. Reclutó a Gisela Valcárcel y César Hildebrandt, con los resultados ya relatados. Sin embargo, en junio de 1999, una disputa entre Delgado Parker y el empresario mexicano Ángel Gonzales, cuyos intereses en Perú estaban representados por Julio Vera Abad, terminó en una acción judicial que sacó al magnate peruano del canal.

El 4 de abril de 1999, Genaro Delgado Parker visitó las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Allí no conversó con Montesinos, sino con Víctor Joy Way, presidente del Consejo de Ministros. Ambos tenían casas de playa en Santa María del Mar, uno de los balnearios más exclusivos de Lima. Genaro le refirió que quería salir del negocio televisivo y que, para ello, requería arreglar los problemas judiciales con sus hermanos. Al mismo tiempo, indicó que César Hildebrandt aún tenía contrato con Red Global y que le seguía pagando, a pesar de que no salía al aire. Joy Way le insinuó que el periodista no volviese al aire y Genaro aseguró que estaba dispuesto a hacerlo.

Tres días más tarde, Genaro acudió con Joy Way nuevamente al SIN, esta vez para hablar con Montesinos. El empresario le contó con lujo de detalles los problemas legales con sus hermanos, así como su historia en los negocios de la televisión y los celulares.

Genaro señaló que ya no quería seguir peleando más con sus familiares. Y luego emitió la siguiente declaración sobre Hildebrandt:

—Yo no creo que la crítica haga daño, al contrario, yo creo que es bueno. Pero lo que vende Hildebrandt básicamente es una fórmula más bien de oposición y del APRA con la izquierda. Y eso no es lo que yo pienso ni lo que yo creo. Entonces, yo no puedo avalar una cosa que no pienso ni creo. Está bien que sea un buen periodista, que hace cosas interesantes, pero el mensaje, su mensaje, es nocivo para mi modo de ver el país y menos aun tratándose de gente que está en el gobierno como Víctor. (…) No lo quiero anunciar todavía, pero lo anunciaré pronto. Mientras tanto, yo tengo contratado a Hildebrandt. Él está contratado y no puede moverse, no puede irse sin que tenga que pagarme por romper el contrato una multa muy grande. Está viendo que es casi como 700 000 dólares que tiene que pagar si rompe el contrato. Entonces, él está quietecito, gritando, diciendo, presionando, tratando de hacer, pero no puede hacer. Entonces, yo ya decidí que eso no va.

Luego de entregar la cabeza de Hildebrandt, Delgado Parker resumió sus demandas: no pagar a sus hermanos el dinero de la venta de Bell South y mantener su porcentaje de acciones en Panamericana. Le indicó a Montesinos que el estudio de Fernando de Trazegnies, el entonces canciller, lo patrocinaba. Ante el ofrecimiento hecho por Genaro, Montesinos decidió tomarlo y ofrecerle ayuda judicial a cambio de que garantizara que Hildebrandt no apareciera en pantalla. El asesor le ofreció detener una medida cautelar y luego le refirió que trazarían una estrategia para ver todos los temas judiciales.

Al final de esa conversación, Genaro le dijo que era un placer verlo y reanudar sus buenas relaciones. No iba contra la verdad. Delgado Parker ya había visitado varias veces el SIN para conversar sobre política nacional y lucha contrasubversiva. Tanto Luis Felipe Gamarra como Hugo Coya señalan que, en 1996, para contrarrestar las denuncias de Demetrio Chávez Peñaherrera, se hizo en Panorama un informe para dejar en alto a Montesinos, que fue coordinado por Genaro desde Miami.

El 21 de abril de 1999, Genaro acudió nuevamente al SIN para conversar nuevamente con Montesinos. El asesor le recordó que había detenido la medida cautelar por veinte días, con miras a que Delgado Parker pudiera negociar con su hermano un acuerdo por los litigios que tenían. El empresario le volvió a pedir otro favor judicial vinculado al divorcio tormentoso de su hija Patricia. Montesinos accedió a ayudarlo «nada más con la palabra que Hildebrandt no va», a lo que el broadcaster asintió.

Al periodista Hugo Coya, Genaro Delgado Parker le diría: «No pedí nada, no obtuve nada, pero esas reuniones con Montesinos fueron un error del cual me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida»[194].

En 1888, un empresario español llamado Calixto Romero Hernández llegó a la norteña ciudad de Piura para establecer un negocio de venta de sombreros de paja y, posteriormente, expandió sus intereses al comercio y el cultivo de algodón. Al final de la Primera Guerra Mundial, compró un paquete accionario en el Banco Italiano, hoy Banco de Crédito del Perú. Así se inició uno de los imperios empresariales más importantes del país.

Desde 1965, el jefe del Grupo Romero era el nieto del fundador: Dionisio Romero Seminario. Gracias a él, el conglomerado tuvo alcance nacional. Desde la década de los setenta, mostró su sagacidad política, negociando con el gobierno encabezado por el general Juan Velasco Alvarado un buen pago por la expropiación de sus haciendas a cambio de continuar con sus negocios industriales. Para fines de esa década, gracias a un conjunto de alianzas internas, se convirtió en el principal directivo del Banco de Crédito del Perú. Su influencia política fue más evidente en los años ochenta, al oponerse al intento de estatización de la banca y confesar que había financiado varias campañas electorales. Romero Seminario fue, además, uno de los principales benefactores de la Universidad de Piura, casa de estudios privada ligada al conservador Opus Dei, grupo con el que su familia tiene una relación particular.

En los años noventa, el Grupo Romero continuó creciendo gracias a la expansión de sus inversiones en los sectores financiero,

seguros, industrias alimentarias, agroexportación y puertos. Sin embargo, la recesión económica que afectaba al Perú desde 1996 comenzó a impactar en el conglomerado a partir de 1998. Además de las afectaciones al clima general de negocios, el conglomerado había adquirido la compañía harinera Nicolini, que se encontraba en mala situación administrativa y financiera, lo que impactó a Alicorp, la empresa del grupo dedicada a la fabricación de abarrotes. A la par, el BCP tenía problemas de liquidez, porque la crisis económica terminó afectando a todo el sistema financiero. Y había varias empresas pesqueras que tenían deudas con el banco, pero no podían pagarlas porque estaban con embargos judiciales por investigaciones penales.

El 14 de junio de 1999, Romero se dirigió al SIN para conversar con Montesinos. Estaban presentes también los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas —Saucedo, Ibárcena y Bello—, el director general de la Policía, Fernando Dianderas, y el ministro del Interior, José Villanueva Ruesta. El contacto de Romero para la reunión había sido este último.

Montesinos planteó como punto central de la reunión exponerle a Romero que la posición de la cúpula militar era apoyar la reelección de Fujimori, pues consideraba que se había puesto orden en el país y que los dos candidatos alternativos, Alberto Andrade y Luis Castañeda, no representaban una viabilidad hacia el futuro. Romero planteó al grupo castrense que le había enviado un memorándum a Joy Way con catorce puntos para mejorar la economía, lo que consideraba clave para la reelección. También se mostró escéptico sobre las posibilidades de la reelección de Fujimori y consideró que la única forma para ganar era eliminar la segunda vuelta mediante una reforma constitucional, lo que para Montesinos era imposible.

Romero no dejó de hacer críticas a Joy Way y lo comparó con Jorge Camet, quien era su amigo personal y había pasado a ser miembro del directorio del BCP. En varios pasajes, comentó que los empresarios no se mostraban tan contentos con Fujimori como lo estaban en el pasado y sugirió un cambio de timón, con un retorno de Camet. Montesinos reconoció que se trataba de dos estilos distintos de manejo económico, pero no accedió a un cambio.

Para el asesor, el segundo punto importante de la reunión era concertar que Dionisio Romero Seminario expresara alguna declaración en contra de Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. Montesinos pensaba que el empresario podría dar una entrevista a El Comercio o a Expreso, a lo que Romero respondió que preferiría que fuera el primer medio. El socio de Fujimori planteó que se le pasara el cuestionario por escrito al empresario, a lo que este accedió. Al final de la conversación, Romero sugirió como posible ministro de Economía y Finanzas a Javier Silva Ruete, quien era parte del equipo económico de Alberto Andrade, lo que no fue bien aceptado por Montesinos. Al final, acordaron que la entrevista saliera en Expreso.

Una segunda reunión en el SIN se produjo el 22 de junio de 1999. En esta cita, solo estuvieron Romero y Montesinos. Ambos revisaron documentos que contenían las hojas de vida de posibles administradores judiciales del Grupo Hayduk. El principal directivo de dicha empresa pesquera, Eulogio Martínez, había sido acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, al igual que sus hijos. Montesinos estuvo de acuerdo con los nombres propuestos por Romero. Hayduk era una de las pesqueras que le debía dinero al BCP y, por ello, el principal directivo del banco estaba interesado en saber quién entraría a administrarla y, con ello, aseguraría los pagos de la deuda. Como veremos un poco más adelante, el caso tendría consecuencias posteriores para Montesinos, Romero y Keiko Fujimori.

Romero insistió en un giro en la política económica y volvió a sondear con la posibilidad de colocar en el MEF a Silva Ruete. Montesinos vagamente ofreció una cartera y luego afinó el plan: enviar al economista como embajador en Estados Unidos y de allí dar el salto a un ministerio. Esta propuesta terminó siendo del agrado del millonario, pero jamás se concretó.

Otro tema que colocó Romero en la mesa, aclarando que era «de su interés de bolsillo», fue la reducción del arancel al trigo a la mitad. El asesor coincidió con que la tasa del arancel (25 %) era alta y le pidió al empresario que le enviara «una hojita» con la explicación para que se concretara dicha rebaja. Al final de la cita,

acordaron que un fotógrafo de Expreso le hiciera unas tomas para la entrevista que saldría al día siguiente. Romero accedió, a pesar de que confesó que no era tan partidario de las fotos.

La entrevista de Romero en Expreso fue publicada los días 23 y 24 de junio de 1999. Allí, en efecto, se despachó contra Andrade y Castañeda. Fujimori respaldó las declaraciones del empresario. Roque Benavides, presidente de CONFIEP desde hacía pocos meses, dijo que se sentía muy identificado por lo dicho por el dueño del BCP. Desde la oposición, Castañeda y Manuel Masías —vocero de Somos Perú— criticaron a Romero por sus declaraciones. Analistas independientes como Mirko Lauer y Santiago Pedraglio sospecharon que los problemas del Grupo Romero habían hecho que Dionisio saliera a expresar opiniones políticas con demasiada franqueza.

Según el politólogo Francisco Durand, hubo otras tres reuniones con Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. La primera se desarrolló en noviembre de 1996, a solicitud de Romero, quien le pidió a Montesinos que interviniera en la zona de producción de Palmas del Espino, la empresa de palma aceitera del Grupo Romero, pues se habían producido ataques terroristas. Esto ha sido corroborado por una reciente investigación de Ricardo Uceda. Una segunda cita se produjo en 1997 a solicitud de Montesinos, para hablar sobre el rescate de la residencia del embajador japonés en Lima. En ambas ocasiones, Romero acudió con Arturo Woodman, amigo personal, gerente de varias empresas del Grupo, expresidente de CONFIEP y que fuera, durante el régimen fujimorista, presidente del Instituto Peruano del Deporte y director de FONCODES. La tercera reunión, según Durand, se produjo en junio de 1998, para tratar tanto el Acuerdo de Paz con Ecuador como el caso Ivcher. También acudió con Woodman a dicha cita. Allí Romero salió convencido de la necesidad de un acuerdo de paz, pues Montesinos le indicó que el ejército ecuatoriano efectuaría nuevamente un ataque contra nuestro país, el cual nunca se produjo[195].

Habíamos señalado que las elecciones municipales en Miraflores de 1998 fueron anuladas por presuntas irregularidades y debían

realizarse el 4 de julio de 1999. Los candidatos principales eran Fernando Andrade, hermano del alcalde de Lima y en ese momento alcalde del mencionado distrito, y Luis Bedoya de Vivanco, quien competía como independiente con la lista Lucho por Miraflores. Estos comicios pequeños eran clave para Somos Perú porque Alberto Andrade había comenzado a bajar en la intención de voto electoral para las elecciones presidenciales de 2000. El gobierno estaba interesado en una derrota del alcalde de Lima para golpearlo políticamente.

Pocas semanas antes de las elecciones, el 12 de junio de 1999, Bedoya de Vivanco fue a hablar con Montesinos, acompañado de Tomás Gonzales Reátegui, exministro de la Presidencia. El objetivo de la reunión para el asesor presidencial era claro: impedir que ganaran Fernando Andrade o Jaime Salinas López–Torres, hijo del general Jaime Salinas Sedó, quien había intentado el contragolpe contra Fujimori en noviembre de 1992.

Montesinos se despachó con un monólogo sobre seguridad nacional, que incluyó terrorismo, narcotráfico e incluso la supuesta presencia de la organización de Osama bin Laden en Lima para llegar a una conclusión: Fujimori debía seguir. Acto seguido, insistió en que ni Andrade ni Castañeda Lossio serían garantía de buen gobierno y tampoco tendrían buenas relaciones con las Fuerzas Armadas.

El asesor le aseguró a Bedoya de Vivanco cobertura favorable en América y Panamericana. Bedoya señaló que, en sus encuestas, Andrade seguía arriba y que comenzaba a hacer un trabajo por zonas para tratar de restarle votos. Agregó que buscar la idea de optar por Salinas sería un «voto perdido». Montesinos se mostró de acuerdo y añadió que continuaran con la campaña de ligar al hijo del general con Alan García.

En una siguiente reunión, Montesinos indicó que levantarían una encuesta en la que Bedoya de Vivanco aparecía primero. El candidato se quejó sobre el poco espacio que le daban en los canales de televisión y el asesor le prometió apoyo con ello. Posteriormente, Montesinos le entregó 25 000 dólares a Bedoya

para los gastos de campaña y le reiteró su respaldo en materia de seguridad ciudadana. Gonzales Reátegui estuvo presente en la cita.

Un día después de la elección, que Bedoya de Vivanco ganó ajustadamente —por apenas poco más de 1000 votos—, los tres personajes se volvieron a reunir en el SIN. Allí hicieron una evaluación sobre el resultado, y señalaron la necesidad de que el alcalde hiciera un buen trabajo en Miraflores para que luego pudiera postular a la alcaldía de Lima. Bedoya de Vivanco le reiteró a Montesinos el pedido de apoyo en materia de seguridad ciudadana, a lo que el asesor accedió. El objetivo se había cumplido[196].

Para el 22 de julio de 1999, Montesinos citó en el SIN a César Saucedo (entonces comandante general del Ejército), Carlos Bergamino (ministro de Defensa), José Villanueva Ruesta (ministro del Interior), Fernando Dianderas (director general de la Policía Nacional) y Elesván Bello (comandante general de la Fuerza Aérea). El motivo de la reunión era la ejecución de cambios en el gabinete, a pedido de Víctor Joy Way.

Montesinos les indicó a Saucedo y Bergamino que había un tema castrense que generaba problemas con la oposición: la Ley de Situación Militar sobre los comandantes generales. Por ello, Fujimori había tomado la decisión de colocar nuevamente a Saucedo como ministro del Interior. Les pidió que mantuvieran el tema en reserva y que «el equipo va a seguir siendo el mismo». Villanueva sería nombrado comandante general del Ejército y el asesor les adelantaba que Martha Hildebrandt ocuparía desde el 26 de julio la presidencia del Congreso.

Posteriormente, llegaron Villanueva, Dianderas y Bello. El asesor presidencial les comunicó el enroque entre Saucedo y el compañero de promoción de Montesinos. Dianderas se comprometió a trabajar con el nuevo ministro de la misma forma como se había hecho con Villanueva.

A continuación, todos los militares se enfrascaron en una discusión contra los organismos de derechos humanos, pues habían criticado la posición del gobierno para considerar a todas las víctimas del periodo de violencia como afectados por el terrorismo, sin considerar que varios habían sido muertos o asesinados por

agentes del Estado. Montesinos insistió en que allí se daría un flanco de ataque contra las Fuerzas Armadas. La conversación resultó clave para entender cuáles eran las preocupaciones castrenses en esos momentos.

El 25 de agosto de 1999, Montesinos se reunió con Manuel Delgado Parker y Ernesto Schutz Landázuri, principales accionistas de Radio Programas del Perú y Panamericana Televisión, respectivamente, además de consuegros. El asesor presidencial comenzó la cita indicándole a Schutz toda una serie de pasos con miras a salvar una medida cautelar que había solicitado el empresario y se la habían denegado, en uno de los procesos judiciales que tenía pendientes con Genaro Delgado Parker.

Posteriormente, Schutz y Montesinos hablaron sobre la programación de la televisión y, en particular, en torno al carácter complicado de Laura Bozzo. Para el asesor, era claro que la animadora ya no debía hacer especiales televisivos a favor del gobierno, pero que sí podría contribuir desde su programa diario. Los tres interlocutores también se refirieron a los problemas económicos que enfrentaba América Televisión. Schutz se ufanó de no tener tantas deudas como los Crousillat.

Acto seguido, Manuel Delgado le expuso a Montesinos su posición en torno al pleito que mantenía con su hermano Genaro en torno a Bell South. El asesor le indicó que, del otro lado, las presiones eran fuertes, debido al peso que tenía Fernando de Trazegnies —cuyo estudio patrocinaba a Genaro— en el Poder Judicial. Montesinos les recomendó hacer un solo bloque judicial para enfrentar al broadcaster, así como presionarlo con sus juicios para que, por temas familiares, tuvieran una mejor posición judicial y de negociación.

Hacia la mitad de la conversación, Montesinos giró la discusión hacia la campaña presidencial. Como en otras charlas, señaló que a Estados Unidos no le convendría, por los temas de seguridad en la región, que fuese elegido otro presidente en Perú que no sea Fujimori. La mira para el asesor era ganar en primera vuelta.

Montesinos reveló sus verdaderas intenciones a Manuel Delgado: «comprarle los espacios entre 6 de la mañana y 9 de la mañana».

En otras palabras, quería tener un trato con RPP parecido al de los canales de televisión, copando las horas de mayor sintonía de la radio más importante del país. El socio de Fujimori tenía claro que, dentro de la radio, el periodista Enrique Vidal sería una persona fiable para ello, pero no Rosa María Palacios, quien ya trabajaba en Ampliación de Noticias, el espacio central de entrevistas. En enero de 2000, Alex Kouri aludió a Vidal como alguien «ligado a un trabajo en conjunto» ante Montesinos. El asesor habló de un posible contrato por un año. Manuel Delgado eludió cualquier tipo de trato, aunque le declaró sus preferencias por Fujimori.

En realidad, como comentó Manuel Delgado Parker a Mávila Huertas años después:

—Dentro de una visión de desarrollo continuo, los tres últimos presidentes elegidos por el voto popular han sido, en mi criterio, los mejores en por lo menos los últimos cien años de nuestra vida republicana. Es decir, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García Pérez.

RPP no asumió nunca un compromiso ni a favor ni en contra de ningún gobierno[197].

Quien sí asumió ese compromiso fue Ernesto Schutz. En fecha aún sin precisar, el propietario de Panamericana Televisión se reunió con Víctor Joy Way y Montesinos en el SIN. Allí volvió a hablar de sus problemas judiciales con Genaro Delgado Parker. Schutz y Montesinos coordinaron la pauta de los noticieros, a fin de que la cobertura, aunque favorable al gobierno, tuviera algunos signos de pluralidad.

Montesinos salió de la sala de reuniones y regresó con un maletín con dinero. Schutz había acudido al SIN con una bolsa para llevarse el dinero. Mientras el asesor le entregó los fajos con dólares, ambos señalaron que el abono correspondía a cuotas de dos meses. Schutz, posteriormente, le pidió a Montesinos que arreglara los problemas que tenía Panamericana con la SUNAT y el seguro social, y le suministrara algunas primicias para Panorama.

En total, Schutz recibió 10 600 000 dólares, como parte de un contrato firmado entre él y Montesinos, para poner la línea editorial de Panamericana Televisión al servicio del gobierno.

El 26 de noviembre de 1999, el Servicio de Inteligencia Nacional acogió una reunión vinculada a la campaña electoral de 2000. Estuvieron presentes Montesinos, Carlos Boloña, los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas —José Villanueva Ruesta, Américo Ibárcena y Elesván Bello—, así como los hermanos Samuel y Mendel Winter, quienes mantenían el control de Frecuencia Latina.

Minutos antes, Villanueva, Ibárcena y Bello se reunieron con Montesinos. El asesor pretendía dar una imagen de unidad entre los institutos armados, colocando la clausura de las escuelas de oficiales para el mismo día, y organizando una ceremonia conjunta para el Día del Ejército. También les contó a los comandantes generales que Boloña y Alex Kouri eran los nombres en los que pensaba para la continuidad del régimen en 2005. Sobre el exministro de Economía, indicó que estaría dando ideas para mejorar la economía. Asimismo, les refirió sobre un supuesto diálogo con el nuevo embajador de Estados Unidos, John Hamilton, en el que el diplomático habría comprometido su neutralidad frente a las elecciones de 2000.

Montesinos les contó a los militares que se iba a adquirir un equipo para que Cable Canal de Noticias hiciera enlaces microondas como Canal N y, además, se jactó del control de los medios de comunicación: «todos están alineados ya, todos están con papel firmado. Están todos, todos alineaditos, todos los días yo tengo reunión a las doce y media del día y planificamos lo que sale en el noticiero de la noche». Para esas semanas, desde los medios controlados, se buscaba desprestigiar el acuerdo de gobernabilidad de la oposición, así como a los equipos técnicos de Castañeda y Andrade. A la vez, se remarcó un viaje de Fujimori a Chile, y el tema del terrorismo, con miras a la ceremonia de recordación del 9 de diciembre de 1999.

El asesor presidencial les comunicó a los altos mandos castrenses que el 15 de diciembre estaría inscrita la agrupación Perú 2000, que apoyaría a Fujimori. Montesinos señaló que se organizarían polladas para apoyar a la nueva agrupación que, en realidad, serían financiadas por el gobierno. También refirió que

colocarían a personas con cierto poder adquisitivo —Raúl Modenesi, Joaquín Ormeño, la familia Rodríguez Banda (dueña de la empresa de productos lácteos Gloria)— para que aparecieran como donantes a la campaña. El socio de Fujimori reveló que los medios adictos al régimen no pasarían publicidad de ningún candidato y que los ataques contra la Asociación Civil Transparencia provenían desde el gobierno.

Los Rodríguez Banda mantuvieron buenas relaciones con Fujimori durante todo su periodo, formaron parte de delegaciones de negocios que viajaron con el mandatario a otros países e incluso compraron la casa de Fujimori en la urbanización Perinolo en Santiago de Surco. Ellos reconocieron que aportaron cerca de un millón de dólares a la campaña electoral del reeleccionista en 2000[198].

Una vez que llegaron Boloña y los Winter, todos los asistentes comenzaron a criticar el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito por varios partidos de la oposición. El exministro de Economía llegó a decir que «lo único que faltaba también en ese lapso de la amabilidad que inviten a Polay y a Abimael Guzmán». También se mostró dispuesto a salir a criticar el Acuerdo, ligándolo al APRA y la izquierda y, en general, al pasado.

Posteriormente, Boloña se centró en la parte económica y señaló a los asistentes que hablaría con el entonces ministro de Economía, Efraín Goldenberg, para transmitirle ideas que no debería saber que se arman en el SIN. Asimismo, el exministro pensó en rescatar la década de los noventa a partir de los logros económicos obtenidos, contraponerlos con lo ocurrido en los años ochenta y, finalmente, plantear algunas ideas para la campaña electoral. El economista y el asesor presidencial debatieron sobre la manera cómo difundir estos contenidos. Para Montesinos, esta era una forma de dar un «golpe de timón» económico, para tener mejores condiciones a las que se tenían en esos momentos de recesión. Acto seguido, el asesor les transmitió a los concurrentes que la mejor época para anunciar la candidatura de Fujimori sería entre Navidad y Año Nuevo.

Boloña señaló que otra línea maestra del plan contra los demás candidatos era confrontarlos para que digan cómo es que van a

cumplir con sus ofertas electorales. Para que esto no vaya en contra de Fujimori, el economista planteó que se le preparen mensajes sobre lucha contra la pobreza, agro y desempleo.

Al final de la cita, Elesván Bello le sugirió a los Winter «Sáquenlo a Castañeda y Andrade, y a Toledo, porque ahora está subiendo». Si bien uno de los hermanos señaló que a Toledo ya no le daban pantalla en Frecuencia Latina, Montesinos estimó que el líder de Perú Posible no tendría tiempo para crecer. Otro grave error de apreciación.

No fue la única reunión política que se tuvo en esos días por la campaña electoral en el SIN. El 10 de noviembre de 1999, el exministro de Educación, Domingo Palermo, fue a conversar con Montesinos. Para ese entonces, Palermo había alquilado la señal de RBC Televisión para pasar su propia programación, con espacios de entretenimiento y periodísticos. Luego de una conversación inicial sobre Juan Luis Cipriani y su entorno, Montesinos fue claro en la intención de la reunión: Fujimori va a la reelección y, por ello, quiere referirse a la programación periodística de Canal A. Palermo le aseguró que, en su equipo periodístico, había buscado gente identificada con el gobierno. Mencionó incluso nombres que no habían tenido cercanía con el régimen, como Guido Lombardi y Beto Ortiz. Sobre Ortiz, Montesinos indicó que era «el más discutible del grupo». En este caso, el asesor no hizo ninguna propuesta sobre pago de dinero, pero sí habló de la posibilidad de coordinar invitados a los programas periodísticos de la estación de televisión.

El 3 de diciembre de 1999, Enrique Chirinos Soto acudió a hablar con Montesinos para ofrecerse como candidato del oficialismo, previas conversaciones con Fujimori y Carlos Torres y Torres Lara. En su opinión, el electorado se había polarizado y era necesario fijar una posición. El abogado constitucionalista se jactó de que «se tiró el Tribunal Constitucional» y propuso su número para el voto preferencial: «13 es como la puta madre». Montesinos aceptó y, en efecto, el abogado obtuvo dicho número, aunque no salió elegido congresista.

En plena Navidad de 1999, Montesinos convocó al SIN a Antonio Ketín Vidal, el exdirector de la DINCOTE durante la captura de

Abimael Guzmán y exdirector general de la Policía Nacional. El expolicía comenzó a hablar sobre todas las llamadas que había recibido para postular a algún cargo político, siendo la propuesta más concreta la que recibió de Rafael Rey, quien venía armando su propia lista con Federico Salas como candidato presidencial. El asesor le hizo una propuesta para que participase en la fórmula presidencial de Perú 2000 junto con Fujimori y Tudela. Planteó además la posibilidad de que fuese ministro del Interior. Vidal le dijo que iba a conversar con su esposa, pero que había cuestiones de orden familiar que tendría que priorizar. El asesor apeló a los años que se conocían y resaltó sus méritos profesionales. Sin embargo, horas más tarde, el policía en retiro le comunicó a Montesinos que había decidido dedicarse a la vida familiar y que por ello no aceptaría la propuesta del gobierno, pero que tampoco ingresaría a ninguna lista de oposición «porque no he visto consistencia». De este último diálogo, se puede inferir que la plancha presidencial de Fujimori recién se terminó de definir en las cuarenta y ocho horas previas al lanzamiento hecho por el propio mandatario.

---

188 Las escenas de los vladivideos se basan en la monumental obra *En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos* (1998–2000) (2004), editada por el Fondo Editorial del Congreso de la República, con la curaduría de Antonio Zapata. Se trata de seis tomos en los que constan las transcripciones más exactas de los videos grabados en el Servicio de Inteligencia Nacional. El orden de los hechos presentados es el siguiente: Videos caso Lucchetti (tomo I: 5-141). Videos Alex Kouri 1998 y 1999 (tomo II: 1125-1170, 1229-1335; tomo III: 1687-1726). Video Cambio 90-Nueva Mayoría (tomo IV: 2053-2092). Videos Luisa María Cuculiza (tomo II: 1337-1412; tomo III: 1939-1964). Video Alipio Montes de Oca, Luis Serpa, Víctor Raúl Castillo (tomo II: 1019-1083). Video José Dellepiane (tomo II: 1085-1092). Video Yanacocha–«Señor Americano» (tomo II: 1003-1019). Video Yanacocha–Jaime Beltrán (tomo II: 1093-1123). Video Dennis Jett (tomo V: 2837-2857). Videos Javier Valle Riestra y Óscar Santander (tomo II: 805-961). Videos Juan Carlos Hurtado Miller–Daniel Borobio (tomo III: 1473-1686). Video Ernesto Gamarra (tomo IV: 2117-2133). Video Julio Vera Abad (tomo I: 315-343). Video Alberto Fujimori y Jorge Trelles (tomo V: 2683-2692). Videos José Francisco y José Enrique Crousillat (tomo I: 223-293, 345-376). Video Carlos Ferrero (tomo IV: 2135-2201). Video Gisela Valcárcel (tomo II: 1171-1223). Videos Acta de Sujeción Fuerzas Armadas (tomo V: 3491-3559). Videos Genaro Delgado Parker (tomo I: 377-469). Videos Dionisio Romero Seminario (tomo I: 143-222). Videos Luis Bedoya de Vivanco (tomo III: 2003-2048). Video Cambios en cúpula militar (tomo II: 963-998). Videos Manuel Delgado Parker y Ernesto Schutz (tomo I: 633-736). Video Boloña–Winter–Generales (tomo IV: 2235-2279). Video Domingo Palermo (tomo I: 737-769). Video Enrique Chirinos Soto

(tomo IV: 2281-2289). Videos Antonio Ketín Vidal (tomo IV: 2291-2350).

189 Sobre los casos Lucchetti y Yanacocha, véase Quiroz (2019: 337–338). En torno a la fábrica de fideos chilena, también consultamos el portal chileno Interferencia (https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-el-video-que-luksic-no-queria-que-se-viera-en-chile).

190 En 2005, *The New York Times* dio a conocer la reunión entre Kurlander y Montesinos ligada al caso Yanacocha, que fue resumida en Perú por *La República* (https://larepublica.pe/archivo/

293489-the-new-york-times-revive-el-caso-yanacocha/).

191 La versión de Ernesto Gamarra sobre su caso aparece en su libro *Los ojos oscuros de la justicia* (2004: 127-133).

192 La trayectoria de los personajes ligados a la televisión —Genaro Delgado Parker, Ernesto Schutz, Manuel Delgado Parker, Julio Vera Abad, Gisela Valcárcel— aparece en varios pasajes de Vivas (2008: 24-26, 400-409, 497-501, 510-511).

193 En el caso de Raúl Romero, cantante del grupo de rock Nosequién y los Nosecuantos, sus videos nunca aparecieron, pero dio cuenta amplia de sus conversaciones en una entrevista con Martín Mucha para *Caretas* en febrero de 2001. Algunos datos biográficos sobre el artista son extraídos de Cornejo Guinassi (2018: 119) y Vivas (2008: 422-425).

194 En el caso de Genaro y Manuel Delgado Parker, véase Coya (2011: 30-41, 55, 117-136, 141-147, 166-172), Gamarra (2007: 78-80) y Bustamante (2012: 503-504, 600-602).

195 El contexto de los vladivideos de Dionisio Romero Seminario se encuentra documentado en Durand (2013: 331-369). Datos complementarios aparecen en Uceda (2020: 5-12, 64-65).

196 Cuando se conoció este video en 2001, Luis Bedoya Reyes, padre del protagonista del video, diría: «mi hijo no ha delinquido, ha pecado». Un dato curioso: el teniente alcalde de Bedoya de Vivanco era German Kruger Espantoso, presidente del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), quien luego se volvió muy amigo de Alberto Fujimori.

197 La cita de Manuel Delgado Parker sobre Fujimori, Toledo y García pertenece a Huertas (2009).

198 El dato sobre la relación entre los Rodríguez Banda, dueños de Gloria, y la familia Fujimori, está en Durand (2017: 222-224).

NI LIMPIAS, NI JUSTAS, NI TRANSPARENTES

(Enero – Junio, 2000)

El 25 de noviembre de 1999, se firmó el Pacto de Gobernabilidad que congregó a la mayoría de los partidos opuestos al gobierno de Fujimori: Somos Perú, Solidaridad Nacional, Perú Posible —el nuevo grupo político de Alejandro Toledo—, Partido Aprista Peruano, Unión Por el Perú, Acción Popular y Coordinadora Democrática. Otros grupos que no tenían inscripción, como el Partido Popular Cristiano o sectores de la izquierda, también firmaron el documento. Quien congregó a los opositores fue Gustavo Mohme Llona, director de La República.

Los cinco puntos sobre los que estas agrupaciones políticas convergieron fueron institucionalidad y democracia, política económica, políticas sociales, impulso de la reforma del Estado y la descentralización, modernización e institucionalización de las Fuerzas Armadas. Sobre estos puntos, hubo algunas concesiones y diferencias. Se tranzó en respetar los procesos de privatización ya celebrados —algo que no era del agrado de algunos sectores de izquierda— y no se alcanzó consenso para proponer una Comisión de la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos, una demanda que provenía desde las organizaciones no gubernamentales.

Según informó la revista Caretas, Toledo fue el más entusiasta con el acuerdo y Castañeda quien ponía más reparos. El semanario se opuso a una candidatura única de la oposición, por considerar que sería un blanco nítido para el gobierno, pero sí se mostró de acuerdo con pactos entre agrupaciones. Los partidos políticos pensaron lo mismo, sobre todo, de cara a obtener representación parlamentaria.

En el caso de Acción Popular y el APRA, las dos agrupaciones políticas que gobernaron el país entre 1980 y 1990 optaron por candidatos presidenciales en procesos cerrados a través de sus cúpulas. Los elegidos fueron personas de confianza de sus líderes: Víctor Andrés García Belaúnde no era solo sobrino del patriarca de AP, sino que también había sido secretario de Palacio de Gobierno

en el segundo periodo de Fernando Belaúnde. Mientras que Abel Salinas fue ministro de Economía y del Interior en el primer gobierno de Alan García. En el caso de García Belaúnde, los compañeros de fórmula eran el constitucionalista Valentín Paniagua y el dirigente partidario Pedro Morales. Junto a Salinas, la plancha aprista estuvo conformada por Jorge del Castillo y la actriz y militante Elvira de la Puente.

Sin embargo, durante los últimos días de diciembre y primeros días de enero, se iniciaron una serie de conversaciones entre Andrade, Castañeda y Toledo con miras a una postulación única. Los acercamientos los comenzó Toledo con ambos postulantes. Para la víspera de Navidad, el diálogo estaba en punto muerto: Castañeda señaló a sus pares que no declinaba en su postulación presidencial.

Para la primera semana de enero, a pesar de que Toledo hizo una oferta final de desistir en pro de una candidatura única, sus dos competidores decidieron ir por su cuenta. Otro esfuerzo unitario que se puso sobre la mesa fue una alianza entre Acción Popular y Unión Por el Perú, que no cuajó. Daniel Estrada y José Vega, dirigentes de UPP, también buscaron a Toledo, pero tampoco hubo concreción. Al final, el líder de Perú Posible reclutó a Carlos Ferrero Costa, el disidente fujimorista, e incorporó en su fórmula presidencial a David Waisman, proveniente de la mediana empresa.

Las planchas presidenciales reflejaron los jales que habían hecho cada uno de los candidatos y sus equipos. UPP se quedó con su ala izquierda, luego de la renuncia de Javier Pérez de Cuéllar a la agrupación en 1999, así como de la salida de varios parlamentarios, algunos de los cuales terminaron en Somos Perú y otros en Solidaridad Nacional. Henry Pease logró la postulación de Máximo San Román, que el parlamentario acompañó junto al exdirigente gremial médico Maximiliano Cárdenas. Castañeda apostó por una fórmula más técnica, con el empresario Eduardo Farah y la economista Graciela Fernández Baca. Andrade hizo una alianza estratégica con Perú Ahora, una pequeña agrupación de alcaldes opositores, que colocó a Luis Guerrero como primer vicepresidente. Su fórmula se completó con la parlamentaria Beatriz Merino.

Finalmente, dos postulaciones completaron el arco de presidenciables. Renovación y Coordinadora Democrática de Rafael Rey y José Barba Caballero, respectivamente, concretaron una alianza electoral llamada Avancemos, que se mostró equidistante tanto del gobierno como de la oposición. Avancemos convocó como candidato a Federico Salas, exalcalde de Huancavelica quien, en 1997, había encabezado una cabalgata que puso brevemente en agenda el tema de la frustrada descentralización. Mientras que el FREPAP se sumergió, con Ezequiel Ataucusi a la cabeza, en una nueva aventura electoral[199].

Si nos atenemos a su versión de los hechos, Keiko Fujimori habría comenzado a tomar distancia de Vladimiro Montesinos en 1998. Según algunos de sus biógrafos, la primera dama llegó a tener una discusión fuerte con su padre sobre la presencia de Montesinos, que terminó en una fulminante frase de Alberto:

—Keiko, es mejor que te vayas a estudiar tu máster de una vez.

Una persona determinante en ese giro fue Juan Luis Cipriani. Según el periodista Marco Sifuentes, «Cipriani ha sido, desde muy joven, un mentor para ella». Keiko misma confirmó esta versión al periodista Ricardo Uceda. En un libro reciente, ella confesó que el arzobispo de Lima le dijo que sus conversaciones estaban siendo grabadas y que «Montesinos es un diablo». Nunca se supo por qué un hombre tan cercano al régimen como Cipriani, quien había llegado a ser bastante condescendiente con las violaciones a los derechos humanos por las que el mandatario y su asesor habían sido condenados, tenía ese concepto y lo proclamaba en privado dentro del círculo cercano.

El punto de quiebre fue lo que se conoce como el caso Hayduk. En marzo de 1993, se descubrió droga en uno de los embarques de harina de pescado de la empresa. El caso supuso una investigación recaída, sobre todo, en una de las dos familias propietarias de la empresa: los Martínez. Este tema se complicó por dos aristas: Dionisio Romero Seminario había tenido una reunión con Montesinos sobre la administración judicial de la empresa y, a su vez, el asesor presidencial había manifestado interés en el caso. Todos los testimonios apuntaron a que buscó que la familia Martínez

no sea defendida por el abogado José Ugaz, socio de un prominente estudio y notorio opositor del régimen, sino que su caso fuese tomado por un abogado afín a la telaraña montesinista. Varias versiones señalan que Montesinos se habría involucrado en el caso para luego extorsionar a los Martínez. De hecho, es lo que sostiene la familia.

Keiko conoció del caso, según su propia versión, por una solicitud de Rafael Rey. Las dos hijas de Eudocio Martínez, Ana y Miriana, hablaron de ello con la primera dama en Palacio en 1999. Meses más tarde, ambas fueron encarceladas y, ya en prisión, le contaron a la hija del presidente sobre el pedido de extorsión de Montesinos, a través de sus operadores. Según la ahora política, se fue al SIN a hablar sobre el tema con el asesor, quien minimizó la acusación y señaló que no saldría a aclarar nada sobre la misma.

Según el testimonio de Keiko, ella acudió a su padre y a Alberto Bustamante para buscar una salida al problema, por lo menos, en el caso de las hermanas Martínez. Posteriormente, convocó al abogado Domingo Orézzoli, quien había patrocinado a Alberto Fujimori en el juicio de divorcio con Susana, para encontrar una vía legal. Y la encontraron: el derecho de gracia para personas investigadas. Así consiguieron su salida a inicios de marzo de 2000.

Pero si bien el caso Hayduk separó a Keiko de a quien, hasta hacía pocos años, llamaba tío, nunca quedó claro un tema: ¿cómo ella y sus hermanos financiaron sus estudios universitarios en Estados Unidos, cuando su padre había declarado que percibía una remuneración de 3000 soles mensuales y ninguno de ellos había sido becado por sus casas de estudio? Según las biografías sobre Keiko Fujimori, existen ocho versiones sobre el origen del dinero: a) ahorros de un fondo común universitario hecho por el matrimonio Fujimori-Higuchi antes de acceder al poder, b) un préstamo hecho por Rosa Fujimori a su hermano Alberto por 150 000 dólares, c) Fujimori le dio a su hija el dinero en efectivo entre 1996 y 1999, d) la venta de la casa familiar de los Fujimori en Surco, e) un préstamo de Mutsue Fujimori, f) un presunto préstamo del exministro y compañero de colegio de Alberto Fujimori, Antonio Paucar, g) la herencia brindada por Tomas Higuchi al fallecer y h) dinero en

efectivo entregado por Montesinos en el SIN y que luego llegaba a los hermanos Fujimori Higuchi. Según Montesinos, en algunas ocasiones, él mismo entregaba el dinero a los chicos.

Si bien el caso del dinero para financiar los estudios universitarios de los Fujimori Higuchi se terminó archivando, nunca quedó claro cómo fueron financiados. Sigue siendo uno de los grandes misterios de esa década[200].

Mientras los candidatos opositores calentaban motores para la campaña electoral, Alex Kouri mantuvo reuniones políticas con Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional[201].

El 27 de enero de 2000, Kouri y José Francisco Crousillat se reunieron con Montesinos. Al inicio del diálogo, Kouri comentó como una buena señal del gobierno hacia la inversión privada la futura firma de un contrato en Palacio de Gobierno para la concesión de un tramo de la avenida Faucett, rumbo al Aeropuerto Jorge Chávez. Pero más importante fue la precisión en la transcripción que hizo, en 2007, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Crousillat y Kouri dialogaban así:

—¿Y qué… y qué... cuál es el negocio?

—El peaje, pues.

La obra, que se conocería como Vía Expresa del Callao, iba a tener un peaje para que los usuarios pagaran el mantenimiento de la avenida. Kouri presentó varios de los detalles sobre la concesión a Crousillat.

Ambos personajes debatieron sobre una invasión de terrenos en Villa El Salvador. Para Kouri, tanto Andrade como el gobierno actuaban mal, debido a que se culpaban mutuamente por este evento. Pero, para el alcalde del Callao, lo más preocupante es que la tolerancia hacia la apropiación de propiedad privada se sumaba a otros mensajes populistas de Fujimori en materia económica, con lo que podría perder parte de su electorado. Crousillat le echó la culpa de la invasión a Andrade, sosteniendo que buscaba generar inestabilidad en el país.

Montesinos arribó a la reunión y los tres comenzaron a hablar sobre las elecciones. Para el asesor, estas estaban resueltas a favor de Fujimori, pero para 2005 su ciclo ya se agotaba y se requería

constatar la continuidad del proyecto. A criterio de Montesinos, Kouri, Rafael Rey, Boloña y Tudela podrían ser posibles sucesores del mandatario. El asesor le propuso al alcalde chalaco dos líneas de acción: cómo iba a ser la cooperación para las elecciones del 9 de abril y una posible candidatura a la alcaldía de Lima en 2002 y a la Presidencia en 2005. Kouri le dijo que había planteado muchas veces la continuidad del proyecto político, pero también reconoció que había conversado con candidatos de oposición sobre postulantes al Congreso para el Callao para que luego pudiera formarse una mayoría sólida. Entre los nombres que mencionó estaba el de su hermano Alberto, quien postulaba por Perú Posible.

Kouri también dijo que podía colaborar con el gobierno indirectamente a través de dos actividades: un evento por el Día Mundial de los Humedales y el contrato de la Vía Expresa del Callao. La idea era salir junto con autoridades del gobierno, sin hablar de política, para tener un efecto sobre la imagen de Andrade. Luego le confesó a Montesinos que deseaba postular a la alcaldía de Lima y, en base a su gestión, tentar una candidatura presidencial en 2005. El asesor estuvo de acuerdo con ambas afirmaciones. Kouri también aceptó dar declaraciones contra Andrade y Castañeda, luego que limara asperezas con Montesinos, porque sentía que se «había interrumpido la comunicación».

Días más tarde, el 2 de febrero de 2000, Kouri volvió al SIN. Para él, era claro que la campaña contra Andrade debía incrementarse y de nuevo planteó el uso del Día de los Humedales para atacar al alcalde de Lima. Asimismo, recomendó que Fujimori fuera a una premiación de estudiantes ubicados en los primeros puestos de los colegios nacionales en el Callao. Montesinos, en principio, aceptó las dos ideas, pero también indicó que no había que descuidar a Castañeda y propuso explotar los posibles casos de corrupción vinculados a la Caja del Pescador, así como las pugnas internas en Solidaridad Nacional. El asesor sugirió a Kouri hacer un documento para coordinar las acciones para las siguientes semanas de campaña.

Desde la década de los noventa, la Organización de Estados Americanos comenzó a enviar misiones de observación electoral a

los distintos países de la región, para cada uno de los procesos. Se trató de un sistema que tuvo fallas al inicio, sobre todo, cuando existían Estados que, bajo el manto de la democracia, en realidad eran autoritarios. Los informes no eran tan rápidos para la detección de irregularidades y, por tanto, gobiernos como los de Fujimori podían pasar piola.

Sin embargo, la situación para el año 2000 fue distinta. Fujimori era un reto para la OEA desde el golpe del 5 de abril de 1992 y varias de las innovaciones que se habían registrado se debían a un gobierno como el suyo. Pero también fue clave que países importantes presionaran al interior de la paquidérmica organización para que la Misión de Observación Electoral que se envió a Perú no fuera simplemente una formalidad.

A pesar de las contradicciones internas existentes en el gobierno de Estados Unidos, que llevaba a cierto pragmatismo frente al gobierno fujimorista, dicha administración decidió impulsar una misión real. Canadá, uno de los principales financistas de estos grupos de trabajo, coincidió en ello. Se sumaron Costa Rica, país que tiene la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Argentina, cuyo nuevo gobierno, encabezado por Fernando de la Rúa, tenía mayor distancia con Fujimori. Así, la OEA decidió que el excanciller de Guatemala, Eduardo Stein, fuera el jefe de la MOE para Perú. La misión se constituyó a fines de febrero y llegó a Lima para inicios de marzo.

Por su parte, la Asociación Civil Transparencia continuó denunciando las posibles irregularidades en el proceso electoral. Desde octubre de 1999, la institución presentó el boletín Datos Electorales, con información precisa sobre las desigualdades existentes en el proceso: cobertura de medios de comunicación, uso de recursos públicos, una verificación independiente del padrón electoral para establecer si es que habían fallecidos e incluso todos los kilómetros de pintas con la frase «Perú: País con Futuro».

Los Datos Electorales fueron visibilizados por la prensa crítica con el régimen, pero también supuso el inicio de una campaña contra Transparencia por parte de los medios cercanos al fujimorismo. A partir de mediados de enero, Frecuencia Latina emitió informes

durante sus noticieros donde la asociación era colocada como parte de una «telaraña roja», compuesta por simpatizantes de izquierda para supuestamente acusar en forma falsa al gobierno de fraguar la elección. Otras organizaciones no gubernamentales y académicos también fueron involucrados en esta campaña que buscaba enlazar la oposición con Fujimori con simpatías por la izquierda.

Paulatinamente, la «telaraña roja» colocada por Frecuencia Latina también comprendió al Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, así como a la institución y las supuestas simpatías izquierdistas de parte de su personal. La Defensoría hizo labores de seguimiento al proceso electoral, gracias al apoyo de la cooperación internacional. Aunque hubo una breve disputa con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, quien consideró que esta labor no estaba dentro de las funciones de la entidad, la Defensoría logró emitir varios informes que corroboraban las diversas irregularidades en el proceso.

En enero de 2000, tres representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicaron al embajador de Estados Unidos, John Hamilton, que no se reunirían con Montesinos, como había sugerido a fines de 1999 a través del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan. Para la Coordinadora, esta reunión beneficiaba políticamente al asesor. El embajador retrucó que podrían obtener beneficios como la liberación de inocentes en prisión, a lo que los representantes de los organismos de derechos humanos le respondieron que querían reformas democráticas.

La Coordinadora cumplió un papel importante durante la campaña electoral. Presentó una plataforma de puntos básicos sobre derechos humanos, que dejaban en claro los déficits que tenía el gobierno en esta materia, así como sobre institucionalidad democrática. Los organismos que formaban parte de la Coordinadora comenzaron a hacer denuncias sobre irregularidades en todo el país. A la par, se aprovechó los espacios ganados en los medios de comunicación, así como las redes de radio locales en todo el país. Buena parte de los activistas en derechos humanos ejercieron como observadores de Transparencia.

APRODEH, una de las organizaciones no gubernamentales más importantes del país, logró que una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos llegara al Perú en febrero de 2000. Dentro del grupo de activistas se encontraba Bianca Jagger, exesposa del vocalista de The Rolling Stones, conocida por su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. La FIDH fue clara en señalar el enorme poder del Servicio de Inteligencia Nacional, el uso de fondos públicos para la campaña de Fujimori, así como la intención del gobierno de perpetuarse en el poder. Fujimori respondió rechazando los términos empleados por la FIDH. Un programa humorístico transmitido por el canal del Estado colocó a una actriz representando a Jagger como una mera consumidora de marihuana. Martha Chávez llegó a decir que «No podemos tomarnos tan en serio los informes de la exesposa de un rockero y de izquierdistas que se camuflan en ONG norteamericanas».

En su reporte de febrero de 2000, la misión conjunta del Centro Carter y del Instituto Nacional Demócrata señaló que solo se constataban sustantivos avances en la presencia de observadores internacionales. Ambas entidades criticaron que la resolución de las tachas en torno a la postulación de Fujimori se resolviera en poco tiempo, cuestionaron que no existieran acciones concretas para impedir que la televisión de señal abierta no recibiera la publicidad de candidatos opositores y la cobertura desigual de los medios de comunicación. Asimismo, calificaron de irregularidades las campañas de difamación contra candidatos e instituciones de la sociedad civil y denunciaron el uso de inauguraciones para proselitismo político[202].

Mientras las irregularidades en el proceso electoral ocupaban las primeras planas, la campaña proseguía[203], con un candidato-presidente con una agenda de presentaciones muy escueta y que buscaba aprovechar algunas ventanas de oportunidad en actividades oficiales, y otros postulantes que trabajaban duro, a pesar de que los medios de comunicación no los cubrían.

Fujimori contaba con un importante nivel de popularidad, pero no había refrescado su mensaje. En términos de oferta electoral, su

postulación se concentró principalmente en las mismas ofertas que había planteado en 1995: acabar con los rezagos del terrorismo, brindar mejores resultados en política social y mantener los buenos resultados electorales. Su popularidad en sectores populares y en algunos sectores altos le era suficiente para mantenerse como líder en las encuestas.

Las apariciones del presidente–candidato fueron puntuales. No hizo tantas inauguraciones como en 1995, pero sí visitas de inspección y apariciones ante la prensa. Sin embargo, la dicotomía se prestó para la parodia en algunos espacios. Fernando Armas, un conocido imitador que integraba el elenco cómico conocido como «Los Chistosos», hacía parodias en radio y televisión donde representaba a Fujimori siendo entrevistado «como presidente y como candidato». Para rematar la parodia, decía que hablaría como «el dueño» del medio de comunicación. Entre carcajadas, se ocultaba cierto tono de verdad.

Un ejemplo de la falta de renovación del mensaje fujimorista fue descrito por el politólogo Yuzuke Murakami. El analista japonés encontró que, en las elecciones de 2000, Fujimori repitió para Puno la oferta de desarrollar la central hidroeléctrica de San Gabán, que había sido una promesa hecha por el mandatario en 1995.

La campaña de Alberto Andrade navegaba en aguas movidas. De un lado, concretó la presencia técnica y como candidato al Congreso del expresidente de ADEX, Carlos Bruce Montes de Oca, quien había sido en el pasado un defensor del régimen. La presencia de empresarios en los equipos de Andrade, Castañeda y Toledo marcaba una diferencia con la campaña de 1995, tanto por el malestar económico existente como por la división de los gremios empresariales frente al gobierno. De hecho, el mensaje de Bruce enfatizaba en cómo este se había concentrado más en beneficiar a los grandes empresarios antes que en crear un auténtico libre mercado. De otro lado, el primer vicepresidente de la plancha de Somos Perú, Luis Guerrero, soportaba los ataques de Frecuencia Latina. El domingo 16 de enero, desde el programa Contrapunto, era acusado de un asesinato sin pruebas, así como de presuntos vínculos pasados con la subversión, a pesar de ser una víctima de

Sendero Luminoso. Uno de los acusadores era un exaprista cercano a Absalón Vásquez.

Entre el 20 y el 22 de enero de 2000, se desarrolló la Conferencia Anual de Ejecutivos organizada por IPAE en el Hotel El Pueblo, a las afueras de Lima. Como ocurre en periodo electoral, fueron invitados los postulantes a la Presidencia de la República. Fujimori declinó la convocatoria, lo que motivó una pifia del auditorio, tradicionalmente cercano a sus posiciones. Se presentaron Andrade, Castañeda, Toledo, Salas y San Román. Para el auditorio, el preferido fue el candidato de Avancemos, a quien notaron más articulado en su alocución. Más bien fueron decepcionantes las presentaciones de Andrade —a quien notaron repetitivo en sus planteamientos frente a otras presentaciones— y la de Castañeda, quien no midió bien sus tiempos. Toledo pasó tranquilo, pero sin mayores aplausos.

Para el 25 de enero, hubo un relevo en la Fiscalía de la Nación. Mejor dicho, un sinceramiento de la situación en esa entidad. Ese día, Blanca Nélida Colán fue nuevamente electa en ese puesto, con los votos de los fiscales supremos provisionales a su favor. Y la opaca gestión de Miguel Aljovín terminó con un baldón: el último día de su periodo decidió enterrar la acusación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Vladimiro Montesinos, usando el mismo argumento que reiteró la prensa cercana al régimen: la presunta violación del secreto bancario del asesor presidencial. Aljovín no reparó en las claras irregularidades en los ingresos del otro hombre fuerte del gobierno. Un papelón.

Durante las últimas semanas de enero y las primeras de febrero de 2000, se produjeron una serie de invasiones de tierras en varias zonas de Lima y Callao.

En Villa El Salvador, un área de cerca de 70 hectáreas donde aún había cultivos fue invadida por varios grupos de personas. Según indagó Caretas, grupos de varios distritos se pasaron la voz para hacer las invasiones. El dueño del terreno indicó al semanario que, según le habían informado, personas del gobierno estaban ligadas a las tomas de terrenos. Algunos de los dirigentes visibles apoyaron la reelección de Fujimori. El alcalde de Villa El Salvador pertenecía a Somos Perú.

En La Molina, en una de sus urbanizaciones más recientes, La Capilla, se produjo otra invasión a inicios de febrero. Seiscientas personas fueron repelidas por las fuerzas del orden y los vecinos. Se trataba de otro distrito cuyo alcalde, Paul Figueroa, pertenecía al partido de Alberto Andrade. Junto a estas dos invasiones, se produjeron otras en Pamplona, urbanización de San Juan de Miraflores.

Para la segunda semana de febrero, los invasores fueron trasladados a la ciudad satélite Pachacútec, ubicada en Ventanilla, donde se ubicaron temporalmente, en principio. La gestión fue hecha por José Dellepiane, convertido en el nuevo presidente de CORDELICA, la entidad del gobierno encargada de las funciones de las regiones Lima Metropolitana y Callao.

El 13 de febrero de 2000, Fujimori inició el denominado Programa de Lotes Familiares (PROFAM), destinado a otorgar títulos provisionales a los invasores. En apenas dos semanas, más de 250 000 personas habían recibido un lote. Para la oposición, con ello quedó claro que las invasiones estaban siendo planeadas por el gobierno. En una encuesta de opinión pública, el 77 % de los peruanos se mostraba a favor del programa, pero el 60 % aceptaba que era una medida llevada por cálculo electoral. La situación era más grave debido a que, en su decenio, el gobierno no había implementado una política seria sobre vivienda[204].

Las listas al Congreso de la República supusieron una discusión aparte. Para el oficialismo, implicó resolver diversos tipos de intereses y disputas a su interior. En las listas opositoras, se buscaba la mayor cantidad de representación posible de distintos sectores. Veamos el resultado.

La principal sorpresa en la lista de Perú 2000 fue la inclusión del historiador Pablo Macera. Se trataba del primer intelectual de peso que se acercaba nítidamente al fujimorismo. Macera tenía una larga y prolífica carrera como académico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, durante años, no escondió sus simpatías por la izquierda. En los años setenta y ochenta se convirtió en un entrevistado capaz de colocar líneas provocadoras como «El Perú es un burdel» o de defender que el camino irremediable del país era

el autoritarismo. Dos décadas más tarde, se conoció que la real motivación de Macera para aceptar el puesto era acceder a una pensión digna como excongresista, dado que su sueldo como docente de San Marcos no le alcanzaría para ello. Al historiador le dieron el número 4 de la lista.

Fue Absalón Vásquez la persona que tuvo mayor poder de decisión al momento de armar la lista. También acompañaron la tarea Montesinos, Víctor Joy Way y el congresista y notario, Óscar Medelius. Fujimori tuvo la última palabra. Pero fue el exministro de Agricultura quien llevó la voz cantante para impulsar tanto a Vamos Vecino como al Frente Independiente Perú 2000 en los primeros puestos de la lista.

Como parte de VV, Vásquez incluyó al abogado y comentarista político Fernán Altuve; los parlamentarios María Jesús Espinoza, Erland Rodas, Adolfo Amorin, Anselmo Revilla y Helbert Salmavides (parte del núcleo provinciano de la bancada 1995–2000); el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Guzmán Aguirre Altamirano, y la hermana de la mártir de Villa El Salvador, Martha Moyano. En el Frente Independiente Perú 2000, se ubicaron algunas de las figuras nuevas como Macera, Tudela, Cecilia Martínez del Solar (viuda del asesinado dirigente aprista Rodrigo Franco), Beatriz Alva Hart (exviceministra de Trabajo), Moisés Wolfenson (dueño de varios diarios sensacionalistas), Guido Lucioni (asesor de Keiko Fujimori) e Isaac Sarmiento (cantante vernacular). También estaba el médico Daniel Chuán, quien aparecía como el fundador del frente. Los parlamentarios «históricos» fueron relegados y ubicados desde el puesto 14 en adelante en la lista.

La preferencia de Vásquez por su núcleo en la campaña generó varias fricciones, sobre todo, en lo que se refiere al apoyo económico a sus campañas. Los signos de división comenzaron a notarse en el oficialismo[205].

Perú Posible colocó a sus dos vicepresidentes —Carlos Ferrero y David Waisman— en puestos expectantes. Pero la lista era encabezada por el médico Luis Solari de la Puente, uno de los acompañantes sobrevivientes de la aventura emprendida por Alejandro Toledo en 1995 y quien desde sus primeras

intervenciones apareció como un vocero articulado. Un invitado notorio fue Ántero Flores Aráoz, dirigente del Partido Popular Cristiano, que había quedado sin inscripción. La lista de Toledo tenía empresarios (Eduardo McBride, Marcial Ayaipoma), deportistas (Cecilia Tait), militares en retiro (Marciano Rengifo) y otros nombres que, para ese entonces, eran desconocidos.

Somos Perú hizo un reclutamiento muy parecido al hecho por Javier Pérez de Cuéllar cinco años atrás. De hecho, su lista se parecía en mucho a Unión Por el Perú. Estaba encabezada por el abogado y hombre de confianza de Andrade, Manuel Masías. Otras personas del entorno del alcalde de Lima presentes en la lista eran su prima Nora Bonifaz y el abogado Ernesto Blume. Estaban dos congresistas que se presentaban a la reelección —Gustavo Mohme y Anel Townsend—, el exalcalde de Cajamarca Luis Guerrero, el empresario Carlos Bruce, el exministro Jorge Mufarech, los economistas Javier Silva Ruete y Luis Arias Minaya, el general retirado Walter Ledesma, así como otros exalcaldes y abogados cercanos a la línea democrática.

Solidaridad Nacional tuvo una lista con menos peso. La cabeza era el empresario Eduardo Farah. Había personalidades de centro derecha como Graciela Fernández Baca (quien estuvo en la plancha de Pérez de Cuéllar en 1995), otras más cercanas a la izquierda como Javier Sota Nadal y Humberto Campodónico, y otros empresarios como Jorge Pollack (dueño de Radio Libertad) y José Luna Gálvez, dueño de un emporio universitario y disidente del Partido Aprista Peruano. Otro empresario educativo reclutado provenía del norte y había sido candidato por la izquierda a fines de la década de los ochenta: César Acuña Peralta.

La lista de Avancemos, la alianza que postulaba a Federico Salas a la presidencia, tenía como líderes a los jefes de la coalición: Rafael Rey y José Barba Caballero. Otros nombres incluidos eran los periodistas Humberto Martínez Morosini y Arturo Salazar Larraín, el medallista olímpico Juan Ghía y el economista Guillermo Castañeda. Tenía un tinte más conservador.

El polo opuesto era Unión Por el Perú, donde el ala izquierda original de la agrupación tomó el control de la lista. A los

congresistas Henry Pease y Daniel Estrada se sumaron la exministra Gloria Helfer, los sindicalistas Juan José Gorriti y José Luis Risco, y los generales Carlos Mauricio y José Pastor Vives. Tanto el APRA como Acción Popular optaron por listas de militantes, con la excepción del general Jaime Salinas Sedó, que postuló por el partido de la lampa.

Finalmente, Fernando Olivera Vega buscó su quinto periodo consecutivo como parlamentario, encabezando la lista del Frente Independiente Moralizador. Las sorpresas en su lista eran la inclusión de Luis Iberico, el periodista de los mejores años de Frecuencia Latina, y Susana Higuchi, la exesposa de Alberto Fujimori.

La primera pista sobre una falsificación de firmas por parte del Frente Independiente Perú 2000 estuvo a vista de litoral. Desde su departamento, Bernardo Roca Rey pudo ver cómo el Morro Solar —un cerro en la bahía de Lima que, además, fue escenario de una batalla en la Guerra del Pacífico— comenzaba a tener una pinta gigante de Perú 2000. Roca Rey, quien era director general de Canal N, llamó a la estación de televisión por cable para que indagaran sobre la pinta. Los periodistas pudieron hablar con las personas que estaban arruinando el morro, que también es un monumento histórico. Una de las personas, con la cámara apagada, le dijo al reportero encargado: «yo también hago planillones para un partido vinculado al gobierno». Esa pista le fue informada a Roca Rey y este la transmitió a El Comercio.

El 4 de febrero de 1992, un joven llamado Carlos Rodríguez Iglesias se acercó al diario más antiguo del país con el siguiente mensaje: «Quiero conversar con un periodista de la Unidad de Investigación. Tengo información sobre las pintas de Perú 2000. El regidor que controla todo se llama Luis Alejandro Navarrete. Yo sé dónde está el depósito con las pinturas y las planchas porque yo hice pintas hasta hoy». Dejó un número celular. Lo citaron el lunes 7. Rodríguez fue nuevamente al periódico y aceptó declarar siempre que no se le grabara y que pudiera mantener su identidad en reserva. Allí comenzó a contar una historia sorprendente.

Rodríguez vivía con dos de sus hermanos en una habitación en Chacra Ríos Sur, un barrio de clase media baja en el centro de la ciudad de Lima. Todos se dedicaban a empleos eventuales. En agosto de 1999, un familiar le dijo a Carlos y a su hermana Marita que el regidor por Vamos Vecino, Luis Alejandro Navarrete, necesitaba personal de confianza para un trabajo de copiado de nombres. Marita fue la primera en aceptar, pues le pagarían 500 soles por dos semanas de trabajo. En el primer día, se dio cuenta de que había que falsificar firmas en la casa de Navarrete, ubicada en San Martín de Porres. Continuó por la paga. Lo mismo hicieron otros familiares del regidor. Cuando la madre de Navarrete les indicó que se requería más personal, Marita llamó a Carlos. Trabajaron durante un mes y les pagaron solo parte de lo acordado. Ella decidió irse, él se quedó colaborando en otras labores con los Navarrete.

Dos meses después, el mismo regidor Navarrete convocó a más personas, incluyendo al equipo original, para un trabajo más masivo de falsificación de firmas. Las anteriores se habían hecho mal. Se trataría de trabajo más intensivo, con mejor paga y mejores condiciones. Quien también convocó a su personal de confianza fue el regidor de Los Olivos, Migdonio Bellota. Carlos Rodríguez accedió a participar y así continuó en estas labores. El centro de operaciones era un edificio a pocos pasos de la notaría del congresista fujimorista Óscar Medelius, en Bellavista (Callao), donde fueron citados los convocados para este segundo tramo. Se tenían tres turnos de 150 personas trabajando las 24 horas del día, con horas claras de trabajo y refrigerio. Los nombres se escogían al azar, a partir de los padrones de la ONPE. Se ensayaba media hora para poder falsificar cada firma. Así fue como Perú 2000 obtuvo su inscripción.

Como ya indicamos, Rodríguez fue convocado para hacer las pintas en los cerros, pero, cuando no cumplieron con los pagos, rompió toda relación con Navarrete. Y decidió hablar. Su testimonio fue corroborado por los periodistas de la Unidad de Investigación de El Comercio y Canal N.

¿Por qué se hizo una operación de falsificación de firmas en forma industrial? El entonces jefe de la unidad de investigación de El

Comercio, Ricardo Uceda, ensayó una respuesta: contar con un grupo político sin compromisos anteriores, en el que Absalón Vásquez pudiera manejarse de igual a igual con las figuras políticas históricas del fujimorismo.

Para que la denuncia fuera redonda, El Comercio decidió buscar a la Defensoría del Pueblo para darle un tamiz más institucional a la revelación. Para ello, los hermanos Rodríguez Iglesias decidieron brindar su testimonio ante notario público y ante grupos de observación nacionales e internacionales. Ellos también decidieron que, una vez estuvieran a buen recaudo, sus nombres se darían a conocer. Jorge Santistevan de Noriega hizo las labores pertinentes para que salieran del país y envió un pedido a la ONPE para que se indagara sobre el caso.

Así, el 29 de febrero de 2000, estalló una bomba en la campaña de Perú 2000.

No era la primera. Días antes, La República había descubierto que un conjunto de polos de Perú 2000 elaborados en el emporio comercial de Gamarra —ubicado en el distrito de La Victoria— eran enviados directamente al Servicio de Inteligencia Nacional. El gobierno respondió diciendo que la noticia era falsa y luego argumentó que los polos eran donativos de empresarios. Pero como apreciamos en un vladivideo, todo era cierto y se le estaba dando una apariencia de donativo. El entonces congresista Luis Delgado Aparicio se refirió al principal involucrado en este tema, el general de la Policía Fernando Gamero Febres: «El general Gamero es un general en retiro y si estaba en La Victoria no era necesariamente para comprar polos. Él puede hacer lo que quiera, podía estar comprando un helado, por ejemplo».

Sin embargo, el caso de la falsificación de firmas fue el golpe más fuerte que había recibido la campaña de Perú 2000 hasta el momento. Fujimori tuvo que reconocer que existía un grave problema que debía ser investigado. Sin embargo, el caso cayó en una fiscal, Mirtha Trabucco, cuyo trabajo principal fue archivar cualquier indagación sobre los miembros más prominentes del régimen y hacer dormir el tema lo más que se pudiera. Desde las páginas de Expreso, buscaron desacreditar a los hermanos

Rodríguez. Como saldo político, el Frente Independiente Perú 2000 fue formalmente separado de la alianza, al igual que su líder nominal, Daniel Chuán[206].

Los espacios para hacer periodismo independiente durante la campaña de 2000 fueron escasos, pero cumplieron un rol fundamental para que cientos de ciudadanos pudieran estar informados, más allá del coro oficial que, como sabemos, tenía millones de razones para callar o informar únicamente sobre un lado de la moneda.

En televisión, además de Canal N, el único espacio político independiente que quedó fue «Beto a Saber», un programa conducido por Beto Ortiz, exreportero de La Revista Dominical quien, como hemos visto, no era de la simpatía de Montesinos. Entre secuencias frívolas y entrevistas a personajes culturales, la política fue metiéndose en el espacio, dando cabida a las figuras de la oposición que no estaban en otros programas, pero sin dejar de darle tribuna al gobierno. Era la única hora realmente libre en la señal abierta.

La radio tenía un poco más de tribuna en el dial para voces disidentes. Radio Santa Rosa, una emisora pastoral de la orden dominica, brindaba espacios con presencia de opositores y hacía coberturas en vivo a los candidatos que no eran fujimoristas. Al mismo tiempo, el Instituto de Defensa Legal, una organización no gubernamental vinculada a defensa de los derechos humanos, empezó una red nacional de emisoras que transmitían noticias de todo el país. Durante la campaña de 2000, la red de Ideeleradio comenzó a denunciar irregularidades en el proceso.

La estación más sintonizada del país, RPP, dedicada al rubro informativo, tendía a buscar un precario equilibrio, cierto tono neutral que, para muchos, era señal de obsecuencia. Para los varios observadores de la campaña, algo de crítica se obtenía en las preguntas que hacía Rosa María Palacios en Ampliación de Noticias, el espacio estelar de entrevistas de la emisora, que cumplía con presentar todas las voces. Eso le daba credibilidad. Sin embargo, analistas de los medios de comunicación como Jacqueline Fowks plantean que la estación tendía a darles demasiada cabida a

las fuentes oficiales y no daba tanta prioridad a las denuncias de la oposición.

Mayor margen de maniobra política tenía Cadena Peruana de Noticias, una estación que pertenecía a la corporación Gestión, cuyo producto principal era un diario económico también crítico con la parte política del gobierno. La emisora fue mucho más independiente para decir muchas cosas que no se podían decir en RPP. Zenaida Solís, Santiago Pedraglio y Alberto Ku King fueron las voces emblemáticas en ese periodo.

Para el año 2000, Genaro Delgado Parker había conseguido la administración de la frecuencia de radio 1160, una emisora dedicada a la música que, en ese año clave, pasaría a ser electoral. Reconciliado con su familia a través de un arreglo extrajudicial, Delgado buscó nuevamente algo de equilibrio informativo. Y volvió a llamar a César Hildebrandt para que condujera la hora estelar llamada Ondas de Libertad. Pero, a los pocos días de iniciado el espacio, el Poder Judicial embargó el transmisor. El problema se volvió escándalo internacional, debido a que fue recogido por la misión del Centro Carter y del Instituto Nacional Demócrata. En marzo, Delgado Parker obtuvo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le devolvieran el transmisor, que no fue acatada. Consiguieron uno de repuesto. Hildebrandt no regresó al aire, sino que se abocó de lleno en el diario Liberación. Otras voces como Pedro Salinas y Bruno de Olazábal buscaron llenar el dial con otro tipo de contenidos, en medio de la precariedad de la estación.

Y, como hemos visto, la prensa escrita tenía a El Comercio, La República, Gestión y Caretas como los medios más independientes. Pero, al mismo tiempo, eran los más caros para los peruanos.

Ante las críticas a los medios de comunicación más cercanos al gobierno, Panamericana Televisión —cuyo rol, dentro del compromiso con el gobierno, era ofrecer algo más de apertura— brindó 15 minutos a los candidatos al Congreso, incluyendo a la oposición, pero lo hizo a las once de la noche, horario en el que el encendido de las pantallas chicas es más bajo que en el horario estelar. Para marzo, los demás canales optaron por una fórmula

similar. Sin embargo, el desbalance en la cobertura, tanto en minutos como en calidad de noticias, continuó en los noticieros y en los programas periodísticos[207].

Una vez que apareció la serie de reportajes sobre la falsificación de firmas de Perú 2000, El Comercio estuvo bajo ataques de la prensa sensacionalista pagada por el gobierno. Entre el 2 y el 7 de marzo de 2000, los diarios El Mañanero, El Chino, El Men, Diario Más, La Chuchi y El Chato comenzaron una campaña en contra del diario.

Los ataques buscaban sindicar al periódico como manejado por «comunistas», en alusión a la militancia que décadas atrás tuvo Ricardo Uceda, jefe de la Unidad de Investigación. También indicaban que la denuncia era falsa, sin mayores pruebas. Y trataron como mentiroso al Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, quien era atacado en América Televisión por supuestamente «distraerse de sus verdaderas obligaciones». La moledora de honras en forma de diario popular se concentró en el periódico más antiguo e importante del país.

El diario era dirigido por Alejandro Miró Quesada Cisneros desde el 18 de marzo de 1999. Representaba a una mayoría de accionistas agrupados en lo que se conoció internamente como Grupo 21, formado para un manejo pro-periodismo dentro del diario. Miró Quesada Cisneros caracterizó su gestión en un delicado equilibrio entre audacia y prudencia, en un medio en el que se calcula bien cada palabra y fotografía.

Frente al gobierno, El Comercio mantenía una línea clara: apoyo en materia económica, lucha contra el terrorismo y cierre de los problemas fronterizos, y crítica en las cuestiones políticas, los atentados contra la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Miró Quesada Cisneros tenía clara esta postura. El diario llegó a editorializar en contra de la re-reelección.

Pero existían posiciones minoritarias a favor de Fujimori dentro de la familia propietaria. Martha Meier Miró Quesada no solo era amiga personal de Martha Chávez, sino que también terminó como candidata al Congreso de la República por Perú 2000. Según refirió Meier Miró Quesada en una entrevista que le hicimos en 2016, fue

el propio Fujimori quien la convenció de participar en la lista. Ella era, además, una de las cabezas visibles de la oposición al Grupo 21 en El Comercio. Su facción se denominaba 4 de mayo, en alusión a la fecha de fundación del diario más antiguo del país.

Precisamente, esta división de intereses en la familia propietaria buscó ser aprovechada por el gobierno. El domingo 12 de marzo de 2000, el programa Contrapunto de Frecuencia Latina —bajo la administración de los hermanos Winter— presentó un informe cuya principal fuente era Luis García Miró Elguera, exgerente general de Empresa Editora El Comercio. Allí, el exdirectivo acusó a la entonces junta directiva del periódico por la supuesta apropiación de sus acciones y por no pagarles sus beneficios sociales, y revivió la versión de que, supuestamente, se había utilizado indebidamente el dólar MUC —un tipo de cambio especial— por parte de funcionarios de la empresa durante el primer gobierno de Alan García.

En realidad, García Miró Elguera había salido de la gerencia con posibles problemas judiciales, que buscaron ser cerrados mediante una conciliación. Meier Miró Quesada, en 2016, respaldó estas acusaciones de su primo.

La respuesta de El Comercio fue clara. Un comunicado publicado en sus páginas indicaba que las afirmaciones de García Miró eran falsas. Peor aún, alertaba que tenían la información sobre una supuesta acción judicial para poner el diario en control de la facción minoritaria favorable al gobierno. Esta versión, señalaba el comunicado, ya había sido puesta en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta alerta internacional detuvo la amenaza, según Miró Quesada Cisneros. A ello se sumó el pronunciamiento a favor de los periodistas de El Comercio desde la embajada de Estados Unidos.

Fujimori tuvo que intervenir. Lamentó el reportaje de Contrapunto e indicó que esta crisis había sido responsabilidad de «ayayeros con mayúsculas». Una vez que habló el presidente–candidato, cesaron las amenazas contra El Comercio. El caso se cerró en abril, cuando las acusaciones por supuesto mal uso del dólar MUC prescribieron,

a la par que la empresa presentó las declaraciones de bienes importados con el tipo de cambio especial[208].

Para fines de febrero de 2000, las tendencias eran claras. Fujimori seguía puntero, pero con tendencia a estancarse. Mientras que las campañas de Andrade y Castañeda ya no tenían mayor empuje.

En el caso de Andrade, a pesar de los jales en su equipo, la campaña en su contra lo terminó demoliendo. Muchos ciudadanos creyeron en varias de las mentiras que se publicaron contra él durante 1999 y 2000. Pero la campaña del alcalde de Lima tampoco pudo salir del estancamiento por errores propios. Si bien tuvo dos reconocidos consultores políticos en la asesoría —Mario Elgarresta y Ralph Murphine—, para un exasesor de Andrade, Oswaldo Carpio, ambos demostraron «desconocimiento de la realidad política del país», dado que invirtieron mucho en spots en medios de comunicación que no tuvieron gran difusión, debido al control del aparato mediático que tenía el gobierno. Al mismo tiempo, Andrade no terminó de cuajar una candidatura con un perfil atractivo para los electores y concentró la mayor parte de su tiempo en defenderse de los ataques de sus oponentes.

Algo similar ocurrió con Luis Castañeda Lossio. Careció de discurso para hacer frente a las críticas y ataques de la prensa alineada con el gobierno. Buscó hacer campaña en sectores populares con ciertos visos de asistencia social, pero no resultó. La carencia de organización le terminó pasando factura al candidato.

Es en ese momento cuando aparece Alejandro Toledo, quien partía con desventaja en las encuestas. ¿Cómo comenzó a crecer?

En principio, Toledo supo aprovechar las pocas ventanas de oportunidad que le abrieron los medios de comunicación. Ya no se solazó en sus trabajos académicos en Stanford y Harvard, sino que fue mucho más efectivo en vender la historia de una persona que había aprovechado las oportunidades que tuvo y encarnaba el éxito profesional. Supo presentar la historia del cholo exitoso.

Asimismo, aprovechó otra virtud no explotada en 1995: sus habilidades como economista y docente. Se concentró hábilmente en el desarrollo de mensajes ligados al empleo, punto flaco de la década fujimorista, que se había acentuado con la recesión de los

últimos años. De hecho, el lema original de la campaña de 2000 era «Toledo Trabajo».

Un tercer factor que entró en campaña fue Eliane Karp, la pareja de Toledo. Se habían conocido en Stanford hacia la mitad de los años setenta y se casaron a fines de esa década. Volvieron a Lima a inicios de los ochenta, y tuvieron a su única hija, Chantal —quien también estuvo presente en algunos momentos de la campaña—. Para 1986, el matrimonio se hizo trizas entre denuncias mutuas de abandono de hogar y maltratos. Recién se divorciaron en 1993. Volvieron a juntarse en 1996, sin casarse, luego que Toledo fuera liberado de la residencia del embajador japonés en Lima, secuestrada por el MRTA. Karp, por tanto, no estuvo presente en la campaña de 1995. En esta ocasión, pudo exhibir algunas de sus virtudes: inteligencia, visión política y carisma.

Finalmente, la campaña del candidato de Perú Posible también aprovechó las falencias de los demás. Mientras Andrade y Castañeda terminaban ahogados en la avalancha de insultos derramados por la prensa comprada por el gobierno, Toledo enunciaba propuestas. Y, cuando Fujimori comenzó a estancarse por las denuncias en su contra, apostó por los temas institucionales. Para mediados de marzo, cuando ya era segundo en las encuestas, Perú Posible lanzó un spot en el que Toledo, desde un balcón de la Plaza de Armas, con el fondo de Palacio de Gobierno, le hablaba a su principal rival:

—Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno. Combatió al terrorismo y la inflación. Y yo le aplaudí. Pero ya es hora de que usted descanse. No se preocupe. Sus obras buenas serán continuadas, pero mejoraré aquellos aspectos que usted ha descuidado, como trabajo y libertad. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo.

El spot cerraba con Toledo, mirando hacia Palacio, y despidiéndose con sarcasmo:

—Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando[209].

El 13 de marzo de 2000, el congresista aprista Agustín Mantilla se dirigió al Servicio de Inteligencia Nacional para conversar con

Montesinos. Desde el inicio, Mantilla fue bastante condescendiente en su diálogo con el asesor: «Disculpe que lo venga a molestar en momentos tan fastidiosos, pero que espero los tome con alegría». Montesinos era claro en señalar que ya conocía del problema que quería hablar gracias a un amigo en común, al que llamó «don Enrique». Mantilla fue directo: «Nosotros estamos en una situación muy difícil. No podemos hacer campaña electoral y esto afecta, creo, a todo el esquema; porque nuestra gente, al ver que no estamos presentes, comienza a buscar una opción con la tesis del voto perdido». La postulación casi simbólica de Abel Salinas no había logrado prender ni siquiera en el pueblo aprista.

El diálogo entre el exministro del Interior y el asesor prosiguió así:

—Necesitamos reforzar y, perdone la franqueza, pero ese es el problema.

—¿Cuánto necesitan?

—De aquí a la campaña, con 50 o 100 nos defendemos.

—Ya, perfecto. Yo les voy a apoyar, no hay ningún problema. La otra cosa es..., sabemos que Jorge del Castillo es un tipo peligroso.

—Así es.

—No lo vamos a poder eliminar porque de todas maneras va a salir.

—Pero sí podemos hacer con alguien que no sea conveniente.

—Sacarlo.

Dentro del APRA, Jorge del Castillo representaba la voz más clara en contra del régimen y marcaba la línea del partido en contra de la posibilidad de cualquier negociación con el gobierno. Era evidente que Mantilla representaba una posición minoritaria. Alan García oscilaba entre ambas. Como ya hemos visto, en febrero de 1999, había dado una entrevista a Contrapunto, cuando Frecuencia Latina ya andaba secuestrada, para disparar contra la oposición, calificándola de jurídica. Para medios como Caretas, existía la posibilidad de un acuerdo entre Alan y el gobierno fujimorista para postular al Congreso, pero esta posibilidad se desvaneció cuando García lanzó nuevos dardos contra el régimen y, finalmente, se aprobó una norma para evitar que personas con procesos abiertos

pudieran postular, lo que era una violación al principio de presunción de inocencia.

Mantilla buscaba que la bancada aprista fuese más afín a una línea de diálogo con el régimen. Otro hombre al que Montesinos calificó como peligroso fue César Zumaeta, congresista de la línea dura contra el gobierno. El asesor se comprometió a darle espacios a Mantilla en el canal del Estado y en Frecuencia Latina. Ambos dialogaron sobre la posibilidad de buscar una nueva opción para 2005 y que hubiera una coincidencia entre las bancadas aprista y fujimorista en el Congreso. Mantilla estaba a favor de no abrir la Ley de Amnistía, porque era uno de los beneficiados.

Al final del diálogo, Montesinos le entregó a Mantilla 30 000 dólares.

El 15 de marzo de 2000, se registró una última cita entre Kouri y Montesinos. El asesor se disculpó por no haberse comunicado con él en las últimas semanas, así como por la demora de una hora para arribar a la cita. Kouri planteó como primer punto en la agenda el problema judicial de su primo, Fernando Kouri, que finalmente había llegado a juicio oral. Montesinos le aseguró que el proceso saldría sin problemas.

Kouri reconoció ante el asesor que cometió un error en una declaración, que se lo hizo notar José Dellepiane —quien luego de dejar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pasó a ser presidente de CORDELICA—: en RPP; ante una pregunta de Enrique Vidal, señaló que sus posibles opciones de voto eran Alejandro Toledo y Federico Salas. Dellepiane asoció este tema con el crecimiento de ambos candidatos, sobre todo del economista.

Kouri y Montesinos se percataron del alza de Toledo en las encuestas, a lo que el alcalde chalaco sentenció: «Hay que dinamitarlo por dentro». Señaló que dos candidatos al Congreso, Jorge D'Acunha y Roberto Vidal, estarían dispuestos a tomar distancia del economista. Kouri indicó que el publicista Oscar Dufour y el periodista Enrique Vidal serían los encargados, respectivamente, de contactar a ambos candidatos.

El político señaló a Montesinos que el candidato de Perú Posible no solo estaba creciendo en los sectores más acomodados, sino

también en provincias, por lo que sugirió levantar a Federico Salas, para restarle votos tanto en el segmento AB como en zonas populares.

Asimismo, el alcalde se quejó con Montesinos por el hecho de que Fujimori no aceptara acudir a la suscripción del convenio sobre la Vía Expresa del Callao, lo que fue una oportunidad perfecta para hacer una sutil propaganda a favor del candidato. Kouri sugirió otra actividad, a una semana de las elecciones, lo que Montesinos aceptó, al igual que el contacto con los candidatos parlamentarios mencionados. Sin embargo, el asesor declinó apoyar a Federico Salas, porque podía generar una mayor confusión, a pesar de que consideraba que «es una persona con la que se podría dialogar en algún momento». Finalmente, Montesinos le indicó a Kouri que buscaría que Fujimori fuera a la suscripción del convenio sobre la Vía Expresa del Callao, para tener una foto de respaldo.

Carlos Raffo era un joven comunicador que había vivido sus años de adolescencia y juventud en Arequipa. A mediados de los ochenta, llegó a Lima y comenzó su escalada en la capital como presentador de música en radio Studio 92, una estación dedicada a pasar música pop y rock en aquellos años. Posteriormente, pudo hacer una carrera en el mundo publicitario. Para fines de 1997, trabajaba en Chroma, una empresa de producción de programas de televisión y comunicación empresarial. Le habían comisionado hacer un especial de Navidad para el Jockey Plaza, el centro comercial emblema de esa década. Pero los directivos del mall cambiaron de idea: dedicarían su espacio contratado a una actividad de la Fundación Por los Niños del Perú, presidida por Keiko Fujimori.

Raffo continuó a cargo del proyecto y se esmeró en que el producto fuera bueno y efectivo. Tuvo su sello característico: una balada sensiblera como fondo, cierta textura en la imagen para dulcificar a sus clientes y la presencia de Keiko, Papa Noel y el logo del centro comercial en casi todo momento. El publicista se hizo amigo de la primera dama y le confesó que buscaba conocer a su padre. Ella le dijo que dejarían eso para más adelante. Raffo siguió trabajando para la Fundación y mantuvo su amistad con Keiko.

Para marzo de 1999, Raffo tuvo su oportunidad. Le hizo llegar a Fujimori, a través de Keiko, el reel de una posible miniserie llamada El Día del Emperador, sobre la toma de la residencia del Embajador de Japón y la operación Chavín de Huántar. Al mandatario le gustó la propuesta, pero puso a prueba al comunicador y le encargó, a través de su hija, un spot sobre la paz con el Ecuador. Raffo cumplió con un producto que tenía otros atributos que serían su marca de fábrica: uso de imágenes duras, fondo musical épico, empleo de niños para las cuestiones más dulces y énfasis en la imagen de su posible cliente. Fujimori lo convocó a Palacio de Gobierno y decidieron trabajar juntos. Así realizó los videos para el Ministerio de la Presidencia con el logo «Perú: País con Futuro».

Meses más tarde, estuvo encargado de la producción del lanzamiento del mandatario para su tercer mandato. Y luego armaría un equipo personal de la campaña de Fujimori. Uno aparte del que Montesinos tenía con sus publicistas de confianza: Daniel Borobio y Daniel Winitzky. Keiko estaba de acuerdo[210].

Mientras tanto, Montesinos tenía sus propios planes conspiradores. Cuando comenzó a notar que Fujimori podría perder las elecciones, puso en marcha la posibilidad de un golpe militar. Algunas versiones señalan que se realizaría el 31 de marzo de 2000, otras indican que se buscaba como posible fecha la segunda semana de abril, luego de la primera vuelta electoral.

El asesor presidencial y miembros de la cúpula militar llegaron a redactar un manifiesto y un decreto ley que enmarcaría al supuestamente transitorio gobierno de facto. El pretexto para la aventura militar sería la serie de irregularidades en las elecciones presidenciales.

Para evitar que el golpe pueda ser descalificado ante la comunidad internacional, Montesinos colocó como posible presidente al exministro de Economía Carlos Boloña quien, como hemos visto, brindaba análisis económicos a la cúpula militar y, para la campaña de 2000, jugaba en pared con el asesor presidencial. La convocatoria de los militares a Boloña se fundamentaría en su capacidad y solvencia moral. Según las periodistas Sally Bowen y

Jane Holligan, el exministro llegó a grabar un mensaje a la nación en el que fundamentaba su adhesión a este plan.

¿Por qué nunca se produjo el golpe? Las versiones apuntan a dos posibilidades. La primera es que Montesinos no consiguió todo el apoyo castrense que esperaba, sobre todo, por parte de la Marina de Guerra. La segunda es que, al final, los mandos militares confiaron en que Fujimori podría, pese a todo, ganar las elecciones, lo que desestimó los planes golpistas.

La campaña de Fujimori cambió hacia inicios de marzo de 2000. Hasta ese entonces, el mandatario había hecho presentaciones de sus programas sociales e inauguraciones. Con el crecimiento de Toledo en las encuestas, comenzó a hacer declaraciones políticas mucho más fuertes y críticas, sobre todo, contra el candidato de Perú Posible.

Parte de esta estrategia se debió a la influencia de José Luis Sanchís, un consultor español contratado para la campaña fujimorista. Sanchís llegó para el tramo final de la contienda y cambió el acento de la campaña: a los ataques a los opositores se sumaría una serie de mítines y giras por todo el país. El asesor solo trabajó el mes anterior a la primera vuelta electoral con el mandatario.

Pero la consecución final de las giras y su estilo no serían obra de Sanchís, sino de Carlos Raffo.

En un viaje de campaña, Fujimori tuvo la idea de apelar al género musical de moda, la tecnocumbia, para hacer una canción dirigida a los sectores C y D. Raffo le dijo que el título debía denotar «avance y empuje». Fue así como surgió El Ritmo del Chino. La letra le perteneció al propio mandatario. La música fue encargada por Raffo a un estudio especializado en jingles. Y, a pesar de la leyenda que se hizo en torno a la canción, no fue interpretada por ninguna conocida cantante del género, sino por una voz característica de los temas diseñados para publicidad: Mónica Cevallos. El tema tenía la siguiente estrofa inicial:

Este es el baile, este es el ritmo, que a todos encanta, el Ritmo del Chino. Ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva, el Ritmo del Chino. Y se baila así, y se mueve así, el Ritmo

del Chino es del Perú 2000. Y te gusta a ti y me gusta a mí, el Ritmo del Chino es del Perú 2000.

En paralelo, se contrató a cantantes y grupos de tecnocumbia para los mítines de Fujimori. La primera parte de las concentraciones era musical. En la segunda, llegaba Fujimori con polo naranja a enunciar ofertas electorales, acompañado de un grupo de bailarinas. Las alocuciones del mandatario duraban pocos segundos y eran constantemente interrumpidas por El Ritmo del Chino. Así, podían apreciarse escenas del siguiente tipo:

En los siguientes cinco años, mi gobierno creará mayores ofertas de trabajo para todos los peruanos.

Chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino.

Vamos a hacer frente a los rezagos del terrorismo y combatiremos la inseguridad ciudadana.

Chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino.

Los «chino lotes» del PROFAM les están dando oportunidades de vivienda digna a todos los peruanos.

Chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino.

Para escarnio del público fujimorista y no fujimorista, el candidato a la primera vicepresidencia Francisco Tudela era obligado por el propio presidente–candidato a hacer gala de sus pocas habilidades para el baile. «Siga, siga», le decía Fujimori, cuando Tudela buscaba, luego de una primera vuelta al escenario, evitar el ridículo.

Apenas Toledo comenzó a subir en las encuestas, se inició la campaña en su contra. Quien dio el play de honor fue el propio Alberto Fujimori. En la inspección de una obra, el mandatario declaró durante seis minutos a un tema ya tratado por la prensa cinco años atrás: las presuntas conexiones entre Alejandro Toledo y Carlos Manrique Carreño, el condenado por estafa por el caso CLAE.

Así, en la primera semana de marzo, los medios adictos al régimen comenzaron a atacar a Toledo por este tema. América Televisión, Expreso, El Chino y El Tío fueron los medios más encarnizados. Pero quien propinó el ataque más fuerte fue Laura Bozzo. La emisión de su programa Laura en América del 3 de marzo de 2000 se transmitió desde el establecimiento penal de mujeres

conocido como Santa Mónica, en Chorrillos. El espacio duró, a diferencia de otros, tres horas, y una de las entrevistadas fue Violeta Mori, la esposa de Manrique Carreño, también involucrada en el caso CLAE y condenada por el mismo. En su testimonio, Mori indicó a Bozzo que Toledo sí había trabajado con su esposo, en un testimonio que duró cuarenta minutos.

Días más tarde, Mori negó en una carta dirigida a Bozzo que Toledo hubiera sido asesor económico de su esposo. Al mismo tiempo, Toledo presentó documentación que negaba algún tipo de vínculo de asesoría con Manrique. El candidato reconoció que le envió la carta al empresario abogando por la recuperación del dinero invertido por uno de sus hermanos, sin éxito.

Otro flanco contra Toledo fueron sus declaraciones en torno a los programas sociales del gobierno. Para el candidato, había un uso asistencialista y político de las políticas públicas del régimen frente a los más pobres, así como un chantaje político al que estaban siendo sometidas madres de comedores populares o beneficiarias de raciones de víveres del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Sin embargo, la campaña de la prensa adicta al régimen indicaba que Toledo buscaba cerrar los programas sociales, lo que era falso. En varias ocasiones, el líder de Perú Posible resaltó que jamás había sugerido tal cosa.

Para fines de marzo, Toledo advirtió que se venía un ataque sobre una supuesta hija no reconocida. Y, en efecto, el 28 de marzo de 2000, Laura en América presentó el testimonio de Lucrecia Orozco, una ciudadana con la que Toledo había tenido una relación sentimental, producto de la cual habría nacido una niña, entonces de doce años, que sería hija del candidato. Toledo había ganado la demanda por paternidad en el Poder Judicial. Aunque la denuncia resultó siendo cierta a la larga —en octubre de 2002, luego de un fuerte desgaste de su imagen y de una lucha titánica de la menor y su madre, el entonces presidente reconoció a Zaraí Toledo Orozco como su hija y cumplió con sus obligaciones paternas—, la presentación del caso en el programa de Bozzo terminó siendo contraproducente para su causa. Más aún, cuando el programa en cuestión tuvo, como anunciantes, a varias entidades públicas.

Aunque la conductora alegó que el testimonio de Lucrecia Orozco se presentó a instancias de su hermano Librado, muchos pensaron que era una denuncia armada por el gobierno. Si a ello se le suma la lenidad con la que hace veinte años —y aún hoy— se encaraban los procesos de reconocimiento de paternidad de personajes conocidos en parte de la sociedad peruana, este tema no afectó a Toledo como sus oponentes hubieran esperado.

Lo que sí comenzó a demostrarse, con creces, era que Toledo tenía una seria tendencia a contradecirse y, para decirlo elegantemente, a mantener una relación complicada con la verdad. Se le descubrieron mensajes encontrados sobre diversos temas, comenzando por su propia relación con Karp, a quien presentaba como su esposa, aunque estaban legalmente divorciados. Aun así, muchos pasaron por alto este detalle. Como en 1990, un sector de peruanos había inventado su propio candidato[211].

Los últimos días de campaña electoral se centraron en dos escenarios. De un lado, las críticas al proceso electoral por parte de los observadores nacionales e internacionales. De otro lado, la pugna de votos entre Fujimori y Toledo[212].

La misión de observación electoral de la OEA, encabezada por Eduardo Stein, inició sus labores en marzo. Aunque al principio de sus funciones, las declaraciones del representante guatemalteco eran un tanto ambiguas, conforme fueron pasando los días se hicieron cada vez más fuertes, dentro del tono acostumbrado por este tipo de misiones. Stein buscó el diálogo con todas las partes involucradas y, paulatinamente, cuando fue reuniéndose con personalidades de la sociedad civil, se fue dando cuenta de lo que venía ocurriendo en el Perú desde hacía varios años.

La MOE-OEA condenó la falsificación de firmas de Perú 2000 y le pareció uno de los temas más llamativos de la campaña electoral. También lamentó que los organismos electorales y judiciales no tuvieran tanto interés en aclarar esta denuncia, pues se ponía bajo manto de sospecha a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargada de velar por el proceso. En particular, a Stein y su equipo le preocupó la sustracción del padrón electoral, así como las fallas evidentes en el proceso de verificación de firmas. Asimismo, Stein

insistió con la ONPE en la necesidad de auditar el programa de conteo de votos, cuestión que no se pudo lograr.

Hacia la quincena de marzo, Stein estaba convencido de que no había mayores avances en varios temas: cobertura informativa, manejo de fondos públicos, y difusión de la publicidad de los candidatos opositores.

El 22 de marzo de 2000, Toledo, Castañeda y Andrade se presentaron en Creatividad Presidencial, un evento de exposición de planes de gobierno organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. No fue un debate y no hubo público, pero se pudo tener una pequeña ventana para conocer las propuestas de los candidatos. Fujimori se excusó en participar del evento. Ya para ese entonces, Toledo había superado el 30 % en las encuestas y comenzaba a concentrar el voto opositor.

Para el 24 de marzo, la misión conjunta del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata concluyó que «El ambiente electoral en Perú se caracteriza por la polarización, la ansiedad y la incertidumbre. No se han establecido las condiciones para una campaña electoral justa. Ya se han hecho daños irreparables a la integridad del proceso electoral, pero aún se pueden y se deben hacer mejoras porque los candidatos y los partidos están compitiendo, los ciudadanos participan en el proceso y los resultados electorales no están asegurados». El informe era contundente sobre las irregularidades del proceso electoral.

En su último pronunciamiento antes de las elecciones, la MOE–OEA sostuvo que «las condiciones del proceso electoral que la Misión había observado no permitían una contienda justa y equitativa, y que exhibían un cuadro reiterado de insuficiencias, obstáculos, irregularidades, y abusos que impedían a la ciudadanía contar con las condiciones suficientes para una competencia electoral acorde a los fundamentos y prácticas de un ejercicio efectivo de la democracia». Era bastante claro lo que se quería decir.

Mientras tanto, Toledo y Fujimori se enfrascaron en una serie ininterrumpida de mítines en diversas partes del país. El candidato de Perú Posible enfatizaba aún más en sus propuestas de trabajo,

democracia y, fuera de Lima, hacía alusiones a la necesidad de un proceso de descentralización. Mientras que Fujimori acudía a sus ofertas ya conocidas, acompañadas de El Ritmo del Chino.

En la última semana, Toledo hizo mítines en Trujillo, Lima —en la plaza Manco Cápac—, Arequipa y cerró en la ciudad de Cusco. A la par, los equipos técnicos de los demás candidatos opositores comenzaban a coordinar el apoyo a Perú Posible hacia una posible segunda vuelta. En particular, Somos Perú era el más animado con una confluencia de este tipo.

Fujimori realizó también varias concentraciones con grandes multitudes, en algunos casos voluntarias, en otros llevadas con buses y bajo presiones de retiro de apoyo desde los programas sociales. La campaña fujimorista cerró con un gran mitin en el Paseo de la República, transmitido en cadena nacional por todos los canales de señal abierta. Los diarios sensacionalistas adictos al régimen resaltaron el mitin y le dieron portadas a doble página. Según Ricardo Uceda, hubo un incidente previo al mitin. En un accidente de tránsito, había fallecido Jorge Vélez, fotógrafo de la campaña. Convencido por Keiko y Raffo, Fujimori pensaba en cancelar el mitin. Montesinos, quien estaba reunido con Borobio y Vicente Silva Checa, le dijo que era un error político. Al final, por propio pedido del hermano del fotógrafo, se hizo el mitin. La hija de Fujimori decidió ir de negro[213].

Las encuestas que no podían difundirse señalaban que Toledo iba al alza y que los endosos a favor de Fujimori no eran tantos. El escenario de una segunda vuelta, para la mayoría de las empresas de investigación en opinión pública, era el más probable cuando se acercaba la elección.

El 9 de abril de 2000, Fujimori continuó con la costumbre del desayuno electoral. En la mesa ubicada en la casa de Francisco Tudela, para beneplácito de los periodistas, el presidente estaba junto a su candidato a primer vicepresidente, a Márquez, y sus respectivas esposas. También lo acompañaban sus hijas Keiko y Sachi, con quienes concurrió a votar. Fueron las únicas apariciones públicas que el mandatario tuvo ese día. Desde allí, no se le vio más en la jornada.

Toledo continuó con la costumbre del desayuno, esta vez, en su casa familiar en Camacho, junto a Karp, Chantal y su padre Anatolio. Luego de votar, se fue hacia la sede del Hotel Sheraton, en el centro de Lima, a esperar los resultados electorales.

La cobertura nuevamente fue desigual: mientras que la votación de Fujimori fue seguida por los medios más cercanos al mandatario por 20 minutos, estos mismos canales de televisión no hicieron lo mismo con las votaciones de Toledo y Andrade —transmitidas en forma recortada—, así como con la de Castañeda, difundida en diferido. A diferencia de años anteriores, América Televisión y Frecuencia Latina no optaron por hacer grandes coberturas electorales, sino transmisiones cortas que privilegiaban el punto de vista oficialista. Panamericana sí hizo una cobertura amplia, aunque sin presentar necesariamente las denuncias de la oposición.

Mientras esto ocurría, en Transparencia la actividad era frenética. El segundo piso de su local tenía a la asamblea de miembros reunida para cualquier pronunciamiento, mientras que el primer piso albergaba intermitentemente a los representantes de los partidos y delegaciones diplomáticas. Los voluntarios comenzaban a recopilar los datos que venían desde los distintos centros de votación. En una casa cuya ubicación se guardaba bajo siete llaves, se preparaba todo para el conteo rápido, una muestra de actas hecha por la institución, con miras a obtener un resultado relativamente certero de la elección.

En el colegio San Agustín, donde me tocó observar las elecciones, los voluntarios de Transparencia detectamos varias irregularidades. Personas fallecidas en el padrón electoral, cierta demora para la instalación de algunas mesas de votación, preferencias en los almuerzos para los personeros de Perú 2000, cierta hostilidad de miembros de la ONPE. Aun así, los ciudadanos fueron a votar masivamente y los observadores voluntarios pudimos cumplir con nuestras actividades con relativa normalidad.

En Transparencia se brindó un primer informe sobre la jornada electoral, hacia las 2.00 p. m. Se informó sobre la instalación de mesas y algunas irregularidades que habían sido detectadas en la

propia jornada electoral. Estuvieron presentes los candidatos opositores.

A las 4.00 p. m., se desató la sorpresa. Las encuestas a boca de urna contratadas por tres canales de televisión señalaban que Alejandro Toledo encabezaba la elección. Datum le daba 48.5 %, Apoyo 45.2 % y CPI 46.7 %. Fujimori estaba segundo, aunque dentro del margen de error. Para esa hora, ya había un buen número de personas en las afueras del Hotel Sheraton, quienes aplaudieron y lanzaron gritos de algarabía cuando se conoció el resultado a boca de urna. Y comenzó a llegar aún más gente. Toledo dijo que esperaría el conteo rápido de Transparencia. Inmediatamente, arribaron los candidatos opositores a coordinar acciones.

Mientras tanto, en la televisión comprada por el régimen, la elección dejó de existir. En las pantallas de América Televisión y Frecuencia Latina, transmitían películas de diversos géneros y programas cómicos. Panamericana continuó con su programa electoral especial. Solo Canal N tenía en vivo lo que estaba pasando en los centros neurálgicos de la información: el centro de operaciones de la ONPE en la Feria del Pacífico, el Hotel Sheraton y las oficinas de Transparencia.

En este último local, la situación se tornó tensa. Diversos factores comenzaron a retrasar el conteo rápido: un corte de luz, intentos de sabotaje y hasta virus informáticos. Recién para las 7.00 p. m. hubo un primer corte de muestra: Fujimori 48 % - Toledo 42 %. Pero los representantes de Transparencia indicaron a los candidatos opositores reunidos que no tendrían una muestra estabilizada para las 8.00 p. m., como se tenía previsto.

Entre las 7.00 y 9.00 p. m., los canales de televisión anunciaron los conteos rápidos de las compañías encuestadoras. Todos coincidieron con la tendencia inicial de Transparencia. Si bien los directivos de las empresas que miden la opinión pública señalaron, en términos estadísticamente correctos, que existía un «voto vergonzante» por Fujimori y que había un empate técnico que llevaba a una segunda vuelta, para la mayoría de los opositores este cambio representaba un fraude en el conteo de votos[214]. Pero la

situación era más complicada, pues había un escuadrón del SIN en el centro de operaciones de la ONPE y, como hemos visto, el sistema no era del todo fiable. El conteo rápido de la OEA confirmó la tendencia: Fujimori iba adelante, Toledo segundo, habría segunda vuelta.

La ONPE comenzó a dar resultados en forma lenta, señalando que Fujimori iba adelante. Toledo salió a la explanada superior del Sheraton junto con los candidatos opositores e indicó que iba a defender los votos de la gente. Las masas lo vitorearon. Para las 10.30 p. m., Transparencia señaló que su conteo rápido arrojaba que Fujimori y Toledo debían ir a una segunda vuelta.

Para las 11.00 p. m., Toledo volvió a salir ante las masas señalando que no iba a permitir un fraude. La gente pedía ir hacia Palacio de Gobierno. Luego de calmar un poco al gentío, el líder de Perú Posible y los demás candidatos opositores encabezaron una marcha. A Toledo lo cargaron en hombros. No llegaron a la Plaza de Armas, porque la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos. Volvieron al Sheraton y, de allí, todos partieron a sus casas. Fue una larga noche.

Y nada de lo que ocurrió en esas últimas horas se vio por televisión. Excepto por Canal N.

¿Hubo un fraude en el conteo de votos en el año 2000? No existe, dos décadas después, evidencia concluyente de ello. Sin embargo, una historia conocida de cerca por el autor coloca, en este texto, la posibilidad de que ello pudiera ocurrir[215].

En el año 2000, como toda familia de clase media que afrontaba la recesión, buscábamos nuevas formas de obtener ingresos. Mi madre se asoció con otras tres personas vinculadas a su trabajo estable para colocar un negocio de moda: una cabina de internet, ubicada en el Centro Comercial La Fontana, en plena avenida Javier Prado Este.

Hacia el mediodía del 10 de enero de 2000, un sujeto llamado José Enrique Mejía llegó a la cabina y pidió que le dieran tiempo libre. En sus manos tenía varias actas de sufragio. La dirección que apretó remitía a un servidor en Nueva Zelanda que lo conducía a una página en la que ingresó una serie de resultados electorales,

similar a la que tenía la ONPE para registrar sus resultados. No había mucha gente a esa hora, por lo que pensaba que tendría discreción para sus labores.

Sin embargo, un cliente avispado pudo ver lo que ocurría. Salió a hacer una llamada a un teléfono público y, en cuestión de minutos, llegaron las cámaras de Canal N y lo pescaron al tipo con las manos en el mouse. Mejía salió raudamente y tomó un taxi. Los reporteros de N lo persiguieron por la avenida Javier Prado y el auto se dirigió a un local en la cuadra 10 de la avenida Rosa Toro, en San Borja, donde funcionaba un local de Perú 2000.

Según descubrió la revista Caretas, Mejía había sido expulsado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por alterar boletas de pago y notas. Otra persona cercana a él trabajaba en la ONPE. La investigación de la periodista Paola Ugaz abrió la posibilidad de que el portal alojado en un servidor en Oceanía pudiera ser una posible puerta de entrada al sistema del organismo electoral. La denuncia nunca pudo ser profundizada.

Mientras esto ocurría, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en el gobierno se producían dos dramas paralelos. Los resultados procesados durante el lunes 10 y el martes 11 de abril de 2000 daban como primer lugar a Fujimori y, peor aún, el mandatario se acercaba al 50 % de los votos suficientes para ganar en primera vuelta[216].

Para Eduardo Stein, había algo raro, dado el hermetismo que se mantenía alrededor del centro de cómputo de la ONPE. En esos mismos días, universitarios y ciudadanos comenzaron a marchar en varios puntos de la ciudad de Lima. El destino de algunos fue la Feria del Pacífico, donde la ONPE instaló su cuartel general. Otros fueron al centro de Lima, donde Toledo continuaba coordinando los esfuerzos opositores desde el Hotel Sheraton. En otras partes del país, también se produjeron movilizaciones destinadas a hacer valer el resultado de las urnas: debía haber segunda vuelta. Para el martes, Fernando Olivera, Rafael Rey y José Barba Caballero, quienes no habían estado presentes en las protestas del domingo, se alinearon con la posición de Toledo.

Las movilizaciones estudiantiles se habían iniciado en marzo, cuando los universitarios retomaron las clases. Sin embargo, fue en abril cuando alcanzaron su pico máximo, con miras a protestar frente a un posible triunfo de Fujimori en primera vuelta. En estos momentos, prevaleció un trabajo unitario dentro de los grupos estudiantiles, a fin de tener una plataforma común. Esto no estuvo exento de tensiones, tanto por la diversidad étnica y de clase de los manifestantes, como por el hecho de que algunos grupos y líderes podían aprovechar la coyuntura para impulsar su futuro político.

Para el lunes 10, Estados Unidos señaló al gobierno peruano, en forma pública, que debían respetarse los resultados. En privado, Madelaine Albright y Barry McCaffrey comenzaron a presionar con llamadas a diversos personajes del gobierno. Lo mismo ocurría de parte de los gobiernos europeos. En algún momento, un funcionario peruano le dijo a un diplomático extranjero que no pensaban hacer caso a las presiones internacionales.

En una conferencia para la prensa extranjera celebrada en la casa de la madre de Alberto Fujimori, el mandatario buscó evadir los cuestionamientos. Pero fue Francisco Tudela quien comenzó a levantar los adjetivos en contra de los observadores y gobiernos extranjeros. Nuevamente esgrimió argumentos supuestamente nacionalistas para defender al régimen. Un papelón.

Por su parte, la prensa adicta al régimen dirigía sus baterías contra Toledo, acusándolo de radical y agitador. Mientras que en Cable Canal de Noticias decidieron pasar las manifestaciones de la oposición, pero enfocándolas desde atrás, para dar una imagen de convocatoria escasa. Este tipo de cobertura se mantuvo durante los meses siguientes.

El miércoles 12 de abril, Toledo trasladó su cuartel general al Hotel Bolívar. Prosiguieron las protestas en diversas partes del país. Los equipos opositores se comenzaron a integrar en un solo bloque. Los universitarios marcharon hacia la Plaza San Martín. A las 4.00 p. m., Toledo dio un primer mensaje señalando que la segunda vuelta tenía el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y los observadores internacionales. Allí también indicó que esperarían movilizados los resultados de ONPE.

A las 6.45 p. m., José Portillo, jefe de la ONPE, anunció que habría una segunda vuelta. La gente en la Plaza San Martín estalló en júbilo.

Un audio sin rótulo de la colección de Montesinos apuntaba a que los aprestos golpistas continuaron luego de la primera vuelta electoral.

Junto a un interlocutor sin identificar, en una comunicación que se produjo aparentemente el 12 de abril, el asesor indicó que tendrían de 10 a 15 días para concretar un golpe de Estado, aprovechando supuestos desórdenes públicos que buscarían atribuir a Alejandro Toledo. También buscarían atribuirle a Toledo alguna posible conducta delictiva.

Asimismo, Montesinos reveló un diálogo que tuvo con Fujimori en aquellos días. Según el asesor, el mandatario habría barajado varias opciones luego de conceder la posibilidad de una segunda vuelta: renunciar a esta y culminar su mandato sin contratiempos, o «bajar al llano» y dedicarse por completo a la campaña electoral.

El asesor presidencial, ante ese escenario, planteó hacer la interrupción del orden constitucional antes de Semana Santa y señaló que había que volver a redactar el manifiesto golpista. Ambos interlocutores pensaron en sacar videos de Toledo, para ubicarlo ante la opinión pública como dipsómano y cercano al APRA. Incluso Montesinos llegó a plantear quemar un local de Perú 2000 para atribuirle a Toledo la autoría de una manifestación violenta.

La campaña para la segunda vuelta comenzó luego de la Semana Santa. Toledo inició nuevas movilizaciones y empezó a recibir adhesiones de diversos sectores de la oposición. Raúl Ferrero y Diego García–Sayán se incorporaron a su equipo. En el caso del director de la Comisión Andina de Juristas, alternó estas labores con un nuevo trabajo. A fines de abril, falleció Gustavo Mohme Llona, director de La República y congresista. Su plaza vacante dentro del parlamento debió ser cubierta por García–Sayán, quien era su accesitario. Carlos Ferrero y Luis Solari fueron nombrados voceros, y este último sirvió además como enlace con los equipos técnicos de Somos Perú y Solidaridad Nacional.

En tienda fujimorista, también hubo cambios. Absalón Vásquez fue relegado como principal líder de la campaña y pasó a ser jefe de organización. El estado mayor del fujimorismo estaba integrado por el mandatario, Keiko, Montesinos y Tudela. Se nombraron a cinco voceros: el candidato a vicepresidente, Luz Salgado, Pablo Macera, Jorge Trelles y Martha Hildebrandt. Esta vez, los mítines eran más sobrios y las ofertas en provincias mucho más puntuales.

A mediados de abril, comenzó a circular el rumor de que existía un presunto video sexual de Toledo, en el que se le veía junto a prostitutas. Nunca fue difundido. Un año más tarde se conoció que, en 1999, Karp había denunciado su desaparición y que, cuando Toledo fue encontrado, se registraron movimientos en su tarjeta de crédito que indicaban consumos en farmacias y hostales. Por consejo de sus asesores, este tipo de denuncias se dejó de lado, para buscar mejoras de los procesos en la ONPE. A la par, Toledo hizo una rueda de entrevistas con directivos de organizaciones multilaterales, para reducir la contracampaña en su contra como radical. La web de APRODEV comenzaba a reproducir en internet la campaña contra Toledo, que continuaba en las sentinas que Montesinos manejaba desde los quioscos.

Para el gobierno, una preocupación fundamental era el Congreso de la República. Los resultados electorales habían señalado que ningún grupo había obtenido mayoría parlamentaria. Peor aún, Perú 2000 consiguió apenas 52 congresistas. El plan de Montesinos fue obtener esa mayoría parlamentaria como fuere: presiones judiciales y tributarias, chantajes y, por supuesto, sobornos.

El 5 de mayo de 2000, Montesinos recibió en su despacho a José Francisco Crousillat, el publicista Oscar Dufour y el congresista electo Luis Alberto Kouri, de las filas de Perú Posible y hermano del alcalde del Callao. Crousillat le confesó al asesor que ya había hablado con Beto Kouri para que «pueda trabajar» en equipo e incluso dijo que Alex Kouri había mencionado que ya estaban jugando «en una liga mayor».

Montesinos señaló que se haría un tratamiento personal para Kouri. El congresista electo refirió que la idea era presentar una carta, previa queja a Carlos Ferrero, sobre su marginación de las

decisiones políticas en Perú Posible y su desacuerdo con la estrategia que tenía la agrupación política. Beto Kouri dijo que su intención era entrar al Congreso «por un grupo inocuo» y que incluso estuvo en conversaciones con Avancemos. Otro interés para el parlamentario era consolidar una imagen propia a partir de su posible intervención en programas sociales.

Luego que Crousillat y Dufour se retiraron, Montesinos y Kouri ultimaron los detalles de su pase a las filas de Perú 2000. El asesor le indicó que, si bien suscribirían un documento de compromiso privado en mayo, ya para agosto tenía que quedar claro que era parte del gobierno. Kouri, inicialmente, buscó dilatar el pase a octubre, por cuestiones de imagen. Al final, ambos dejaron abierta la fecha de incorporación.

Cuando cerraron este punto, Montesinos y Kouri concretaron los asuntos crematísticos:

—¿Cuánto quiere usted? Acá hay diez. Usted dígame.

—No, yo veo la posibilidad de quince, veinte.

—Bueno.

—¡Quince!

—Diez y cinco, quince.

Posteriormente, Kouri contempló la posibilidad de que el SIN cubriera sus gastos de campaña pendientes. Montesinos le refirió que «verían el tema en el transcurso de la semana». Finalmente, el asesor aconsejó a Kouri «producir su deslinde en forma progresiva».

Esta conversación fue crucial y decisiva cuatro meses después. Pero no como lo esperaba el gobierno.

Para inicios de mayo de 2000, había un empate técnico en las encuestas entre Fujimori y Toledo. El candidato opositor reconfiguró su equipo de campaña con nuevos jales: Gustavo Gorriti dejó su exilio en Panamá para sumarse a lo que consideraba una lucha decisiva por la democracia. Carlos Bruce llegó con la venia de Alberto Andrade para ser el nuevo jefe nacional de movilización. Y se trajo a un asesor francés, Eric Fliman, que había trabajado con la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile.

Las giras de Toledo por provincias continuaron y para el Día de la Madre se hizo una actividad en el coliseo Amauta, donde estuvo

presente Susana Higuchi, congresista electa por el Frente Independiente Moralizador y exesposa de Fujimori. Ambas candidaturas comenzaron a disputarse los sectores populares. Comités del vaso de leche y clubes de madres se dividieron en el endose a alguna de las dos postulaciones.

Perú Posible y Perú 2000 comenzaron a dialogar con miras a desentrampar algunos temas de la campaña electoral. Ferrero, Solari y García-Sayán se encontraban con Salgado, Tudela y Ricardo Marcenaro, para discutir el rol de los organismos electorales, el papel de los medios de comunicación y la posibilidad de un debate presidencial.

Por esos días, el ánimo opositor cobró nuevos bríos con la llegada a Lima de Mario Vargas Llosa. El destacado escritor llegó a presentar su novela La fiesta del Chivo, considerada como una de las piezas máximas del escritor. El nuevo texto de Vargas Llosa presentaba en tres líneas argumentales una obra maestra sobre una de las satrapías más prolongadas de la historia latinoamericana: la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Este tema le permitía hacer algunos enlaces con la realidad peruana de aquel entonces. El escritor concedió diversas entrevistas donde endosó la postulación de Toledo, fustigó al régimen y a sus defensores e incluso fue claro en criticar a varios de los medios de comunicación que le dieron tribuna por su conducta en la campaña electoral.

Sin embargo, paulatinamente la estrategia de campaña debió ceder paso a las preocupaciones propias del proceso y las garantías mínimas para ello.

Sorpresivamente, el 12 de mayo de 2000, la Oficina Nacional de Procesos Electorales comunicó al país que descartaba el programa informático con el que había procesado los resultados de la primera vuelta y que, por tanto, presentaría uno nuevo. La Misión de Observación Electoral de la OEA pidió a la ONPE una verificación del sistema. Sistemáticamente, la entidad electoral se negó a ello.

Este problema se volvió tan crucial que llevó a que Alejandro Toledo tomara la decisión, el 18 de mayo, de retirarse de la contienda electoral, al considerar que no estaban dadas las

garantías para llevar un proceso electoral justo. Agregó que seguiría en campaña contra el fraude e hizo un mitin para movilizar a la oposición. El gobierno inició una contracampaña fuerte contra Toledo para tildarlo de indeciso y agitador.

Para Fujimori, las cosas se complicaron el 22 de mayo de 2000. Ese día hizo un mitin en Arequipa y, en medio de ello, comenzó una contramanifestación con una lluvia de piedras. El mandatario tuvo que cortar su manifestación. Toledo rechazó el acto de violencia.

En la noche del 22 de mayo, otro evento remeció al país. Fabián Salazar era un periodista que colaboraba con la página editorial de La República, extrabajador del Congreso y, además, jefe de relaciones públicas de Productos Paraíso del Perú. Ese día, Salazar había recibido un paquete con un material explosivo: un lote de vladivideos. Entre las anotaciones hechas por el periodista, indicó que había reuniones con Javier Valle Riestra, los Crousillat, los Winter, Jorge Morelli, Héctor Faisal, Dionisio Romero y Marcello Gullo, panelista frecuente de Cable Canal de Noticias. Contactó a una persona para que llevase el material a Miami, a fin de que Baruch Ivcher pudiera difundirlo. Sin embargo, su llamada fue interceptada. No llegó su contacto, sino un conjunto de desconocidos que se llevó el material, no sin antes torturarlo con una sierra eléctrica. Salazar se salvó gracias a sus gritos. Tuvo que ser internado en la Clínica San Felipe, desde la que explicó con mayor detalle sus denuncias. Aunque la prensa adicta al régimen buscó desprestigiarlo, lo cierto es que la acusación de tortura era real. Salazar tuvo que dejar el país, días más tarde.

El 23 de mayo de 2000, la MOE-OEA pidió al gobierno un aplazamiento de las elecciones por unos días, para que pudiera verificar el sistema de cómputo para la segunda vuelta electoral. Stein insistió en esa alternativa a través de intermediarios, a la par que le mencionaba al gobierno que Estados Unidos podría convencer a Toledo de volver a la lid electoral. Sin embargo, Fujimori indicó a los mediadores que no habría marcha atrás. Ese mismo día, a través de un pronunciamiento público, Transparencia informó que «al no existir condiciones técnicas mínimas para llevar a

cabo una competencia libre y limpia, se abstendrá de observar las elecciones del 28 de mayo».

El Jurado Nacional de Elecciones decidió, el 25 de mayo, rechazar los pedidos de postergación. A Stein no le quedó otra decisión: la Misión de Observación Electoral de la OEA se retiró del país. Era el golpe final al proceso. Lo mismo hicieron las demás misiones similares. Solo se quedó la misión del Parlamento Andino, afín al gobierno.

Así, llegamos a una elección en la que se corrió con candidato único, el porcentaje de votos viciados fue el más alto de la historia y, a pesar de su retiro, Toledo tuvo un significativo número de votos. El día de las elecciones, Fujimori hizo un nuevo desayuno electoral, así como una conferencia de prensa al acabar de votar. Pero, como en la primera vuelta, volvió a desaparecer luego del anuncio cantado de su «triunfo». A pesar de que se le había armado un mitin de victoria en San Martín de Porres, nunca apareció por el show.

Toledo convocó para una amplia manifestación que se llevó a cabo en la Plaza San Martín. Allí señaló que no cejaría en la lucha por recuperar la democracia. Y convocó a una manifestación nacional para los días 26, 27 y 28 de julio, a la que denominó la Marcha de los Cuatro Suyos, para que ciudadanos de todas partes del país se manifestaran contra el tercer periodo presidencial de Fujimori. La idea de la movilización y del nombre de la misma habían surgido del congresista de izquierda Javier Diez Canseco.

Como reacción, Fujimori dio una declaración al día siguiente de las elecciones, manifestando que buscaría impulsar la «democratización» de su gobierno. Según una fuente cercana al mandatario, recogida por el politólogo japonés Yuzuke Murakami, esta declaración buscó evitar sanciones y críticas internacionales.

Junto con los militares, el único gran grupo que le brindó soporte al régimen era el gran empresariado. El entonces presidente de CONFIEP, Roque Benavides, no fue especialmente crítico con la reelección de Fujimori y todos los problemas vinculados a la institucionalidad del país. Al mismo tiempo, Benavides buscó impulsar un gremio empresarial peruano–estadounidense, con miras a mantener el apoyo económico de la principal potencia mundial[217].

El lunes 29 de mayo, Vladimiro Montesinos encabezó una cena de celebración, junto al alto mando militar, en el Servicio de Inteligencia Nacional. Allí pronunció un discurso que mostraba su propio pensamiento sobre lo que había ocurrido en los meses anteriores y lo que vendría después. Por ello, merece reproducirse en forma completa.

—Señor ministro de Defensa, señor ministro del Interior, presidente del Comando Conjunto, comandante general del Ejército, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señor comandante general de la Fuerza Aérea, señor director general de la Policía Nacional, señor almirante jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional:

Quiero en primer lugar expresar mi especial agradecimiento a los señores ministros aquí presentes y a los señores oficiales, generales y almirantes que representan a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, así como al director general de la Policía Nacional del Perú, quienes haciendo un alto en las recargadas labores y dedicación absoluta que el momento actual exige en el país, han aceptado concurrir esta noche a esta sencilla comida, para poder compartir y reafirmar una vez más los profundos e indisolubles vínculos que nos hermanan y, a la vez, intercambiar algunas reflexiones sobre la etapa tan especial y compleja que está viviendo nuestro querido país.

El Servicio de Inteligencia Nacional los acoge como siempre con afecto y en verdad se siente honrado con la presencia de ustedes en esta oportunidad. Como todos sabemos y hemos sido testigos de excepción, con la elección presidencial de este pasado domingo 28 de mayo ha terminado una etapa de singular importancia que marca un hito trascendental en la historia de la República, no solo por las características políticas y sociales que configuraron esta coyuntura difícil en el país, sino básicamente porque en esta oportunidad por primera vez las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Servicio de Inteligencia Nacional han actuado unidos como en esta década última, en un pool en estrecha y permanente coordinación, se convirtieron en un pilar fundamental para la defensa de la

gobernabilidad del país, de la institucionalidad y de la supervivencia de la democracia. Como todos conocemos y todos hemos sido testigos de excepción, grupos políticos tradicionales de diversos colores y de ideologías, incluso antagónicas y contrapuestas, que hasta hace poco tenían diferencias irreconciliables, se unieron en torpe alianza con el fatuo propósito de impedir que el país continúe su marcha hacia el progreso y el bienestar, y para ello no vacilaron en recurrir a la calumnia, a la mentira, a mancillar honras, a tergiversar hechos, a torpes montajes para desprestigiar personas y a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, al convertir la libertad de expresión e información en un vehículo para mentir, insultar y desnaturalizar los hechos e, incluso, en un desesperado afán desestabilizador, no vacilando en recurrir a la violencia, financiando la acción de grupos lumpenescos, y explotando la rebeldía de algunos sectores estudiantiles engañados.

Hoy, mirando nuestra perspectiva, observamos con claridad que la etapa vivida ha sido una de las más peligrosas para la supervivencia democrática. Desde el momento en que se desconoce la vigencia de las leyes y se pretende, mediante la violencia de las masas y las presiones internas e internacionales, obligar a que la nación actúe acatando sus sesgados designios, prácticamente estos grupos estaban creando conscientemente un clima de desestabilización y de quiebra de la institucionalidad democrática del país, cuyas consecuencias, de haberse concretado sus designios, hubieran sido funestas por el daño irreparable que se hubiera ocasionado a un país como el nuestro, que viene luchando por más de veinte años con la mayor decisión y sacrificio por un futuro mejor.

Felizmente, en este escenario, al igual que en los momentos más dramáticos y cruciales de nuestra historia reciente, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia y la Policía Nacional del Perú supieron estar a la altura de su misión y, demostrando el más alto profesionalismo, espíritu de sacrificio, férrea e indestructible cohesión y amor por la patria, supieron hacer frente exitosamente a este torpe concierto de malignas voluntades que pretendían quebrar la unidad del país, crear un clima de violencia y de caos.

En este accionar patriótico en defensa de la democracia quiero resaltar el hecho sólido, macizo e incontrastable de que la Constitución y el Estado de Derecho fueron preservados sin que hubiera una sola denuncia sobre violaciones de derechos humanos por parte de nuestras instituciones. Así ha quedado demostrado ante la ciudadanía y el mundo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Servicio de Inteligencia son capaces de actuar con la mayor decisión en la defensa de nuestro derecho a vivir en paz, y organizadamente, sin incurrir en ningún exceso, sin el uso inmoderado de la fuerza, aplicando siempre el criterio de la racionalidad. En ese sentido, podemos decir con justificado orgullo que nuestras instituciones representadas por ustedes en este momento han demostrado una vez más en la historia de la nación ser los pilares básicos de la gobernabilidad de un país.

Sin embargo, amigos míos, si bien ha terminado exitosamente una etapa de importancia trascendental, ingresamos ahora a una nueva coyuntura, a un nuevo escenario, que igualmente estará marcado por la lucha política tenaz, ruda y fuerte, pero que tendrá otras características y, por tanto, habrá de requerir un manejo mucho más complejo y exigente que el anterior.

Los grupos políticos derrotados en la reciente contienda electoral, como podrán imaginar por la forma como han venido actuando, no se resignan y aceptan democráticamente que el Perú les dijo basta.

A partir de lo que llaman resistencia pacífica han diseñado una estrategia destinada a desconocer los resultados de las elecciones del 28 de mayo y vienen acumulando fuerzas y recursos económicos, con el propósito de desarrollar desde ahora hasta el 28 de julio una serie de marchas, mítines y movilizaciones y enfrentamientos ante la comunidad internacional, y un cuadro de gobierno que va a ser presentado en el exterior donde la violencia generalizada como objetivos directos pudiera ser mostrada ante el escenario internacional como que un gobierno libre y democráticamente elegido careciera de legitimidad y viabilidad.

Estos grupos que representan a la antipatria, en la medida que anteponen sus intereses personales o de grupo a los altos intereses de la nación, gracias al financiamiento interno y externo al que no

son ajenos, por supuesto, los intereses del narcotráfico corruptor con la colaboración de algunos medios de expresión que les son afines y desinforman, utilizando las técnicas de desinformación clásicas, satanizando personas e instituciones, con la participación de diversos organismos no gubernamentales conocidos como ONG, integrados en su mayoría por elementos de la extrema izquierda marxista y pro senderista, y utilizando como masa de maniobra a estudiantes y grupos desclasados y delincuenciales, se han propuesto crear un gran frente de oposición con el desembozado propósito de desestabilizar al país e impedir que el gobierno recientemente elegido lleve a la práctica los planes para el desarrollo social y económico que el país requiere en este nuevo milenio.

Dentro de estos propósitos, como es fácil comprender, los blancos fundamentales de sus ataques van a ser obviamente nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Servicio de Inteligencia Nacional, no solo por el rol importantísimo que les ha tocado jugar en la estrepitosa derrota de sus planes anteriores, sino porque ahora, como en ninguna otra oportunidad en la historia, han percibido con la más absoluta claridad que somos nosotros los pilares fundamentales para garantizar la gobernabilidad del país, la preservación de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Ante este nuevo escenario que implica un nuevo reto para nosotros debemos demostrar ante nuestro pueblo y la comunidad internacional que estamos más unidos y cohesionados que nunca, que tenemos la mayor decisión de empeñar nuestra dedicación, capacidad y esfuerzo en forma redoblada ante los desafíos que el frente interno presente a la coyuntura que próximamente se avecina.

En la medida que, como estoy seguro, afrontaremos exitosamente una vez más los nuevos retos que se nos presentan, no solamente estaremos dando una contribución fundamental y decisiva para la preservación de la democracia, la defensa de la Ley y la vigencia de la Constitución, sino que en gran medida aportaremos también a mostrar ante el mundo que el Perú es suficientemente adulto para solucionar sus propios problemas, y que las Fuerzas Armadas, la

Policía Nacional y la Comunidad de Inteligencia del Perú han demostrado ante el país y ante el mundo que la unidad es la esencia para mantener la estabilidad en el país.

Por ello yo quiero levantar esta copa y brindar con ustedes por el gran esfuerzo y sacrificio demostrado el día 28, las malas noches que han pasado y en las comunicaciones permanentes que han tenido con sus respectivos comandos y con quien habla. He sido testigo de excepción del profesionalismo, de la alta calidad no solamente personal sino profesional de todos y cada uno de ustedes. Por eso, le solicité a usted señor ministro de Defensa, al señor ministro del Interior, señor presidente del Comando Conjunto, a los señores comandantes generales, al director de la Policía Nacional, tener la gran oportunidad de recibirlos conjuntamente con el almirante Rozas, aquí en nuestra casa, la casa de ustedes, para poder compartir esta noche y decirles muchas gracias, señores, y sigamos adelante unidos, que es la única garantía de que nuestro país podrá prosperar y lograr los objetivos y las metas que nos hemos propuesto con el apoyo firme y decidido de todos nosotros. Por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestra Policía Nacional y por nuestra Comunidad de Inteligencia, señores, salud[218].

En la misma semana de esa ceremonia de celebración, Montesinos convocó a la cúpula militar a su despacho en el Servicio de Inteligencia Nacional. Al inicio de la reunión, el asesor presidencial señaló a sus interlocutores que era necesario enfatizar que la gente fue a votar, así como la necesidad de controlar las protestas de Toledo.

Montesinos les confesó a sus interlocutores que ya había sobornado a Alberto Kouri, así como las escenas de regateo por el monto a pagarle. También habló sobre otros posibles miembros de la oposición a quienes iban a buscar para hacerlos pasar a las filas de Perú 2000.

Acto seguido, discutieron sobre la necesidad de contar con apoyo internacional para enfrentar lo que se venía en la Organización de Estados Americanos. Allí indicó que traerían a Enrique Gros Espiell, un excanciller uruguayo, para armar un documento a favor del gobierno.

Montesinos y los jefes militares hablaron, posteriormente, sobre los montos que cada institución castrense estaba dando al Servicio de Inteligencia Nacional.

Finalmente, el asesor presidencial se refirió a los modos de contrarrestar la protesta opositora, y a las secuelas del caso Fabián Salazar. En medio de planes inconexos, terminó la cita.

El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Eduardo Stein, tenía una conclusión general lapidaria, en los términos diplomáticos en los que se enuncian este tipo de documentos: «De acuerdo a los estándares internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo». Stein calificó la elección peruana de 2000 como irregular, cuestión que repitió en la exposición que hizo el 31 de mayo de ese año ante la Comisión Permanente de la OEA, que se congregó en una reunión de emergencia.

La embajadora del Perú ante la OEA, la internacionalista Beatriz Ramacciotti, llegó a expresar sobre Stein que «no respetó a cabalidad el principio de neutralidad y objetividad que debe caracterizar a toda misión. La OEA, en vez de haber permanecido en un marco de neutralidad y de haber facilitado el diálogo entre ambos candidatos, contribuyó a polarizar las posiciones políticas y a generar una opinión inadecuada». César Gaviria, usualmente llano a salidas de compromiso, defendió a Stein.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo, planteó aplicar a Perú la Resolución 1080, aprobada en 1991 por la organización para casos de interrupción del orden democrático. Costa Rica y Canadá acompañaron el pedido. Para algunos analistas, este fue un movimiento táctico con miras a llevar el caso ante la Asamblea General de la institución, que se llevaría a cabo en Windsor (Canadá) los días 4 y 5 de junio de 2000. El gobierno tenía como aliados a México —que estaba en pleno proceso electoral para salir de 71 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional—, Venezuela —donde Hugo Chávez iba a una nueva elección luego de aprobar la Constitución Bolivariana— y Brasil, que obraba con cautela en estos temas. Al final, se aprobó llevar el caso

a Windsor. El gobierno consideró que había ganado y un sector de la oposición creyó que había perdido. En realidad, se había derivado el tema a la instancia más alta de la institución.

La posición de Lauredo también expresaba lo que pensaba un sector del Departamento de Estado. En una declaración informal, un representante de la entidad encargada de la política exterior estadounidense dijo que «ningún presidente elegido en un proceso tan defectuoso puede exigir legitimidad». Las declaraciones formales de la institución fueron más cautas.

Entre Washington y Windsor, se produjeron dos cabildeos en paralelo. De un lado, organizaciones de la sociedad civil se entrevistaron con sus pares latinoamericanos y canadienses, con miras a presionar para una fuerte condena del proceso electoral peruano. De otro lado, Lourdes Flores Nano, Henry Pease y Diego García–Sayán comenzaron a hacer una tarea política. En particular, este último dialogó con el canciller canadiense Lloyd Axworthy, con miras a buscar un espacio de apertura democrática, calculando que no todos los países iban a condenar el proceso electoral peruano y que la OEA tomaba decisiones por consenso, por lo que sería inviable la posibilidad inmediata de repetir las elecciones.

Fue así como surgió la idea de una Mesa de Diálogo entre el gobierno y la oposición democrática, bajo la vigilancia de la OEA. Para ello, el paso previo sería una misión de alto nivel que encabezaría Gaviria junto a Axworthy, prevista para fines de junio de 2000.

Aunque la Organización de Estados Americanos no condenó abiertamente la elección, señaló en la resolución que creaba la misión de alto nivel que «la credibilidad del proceso y del resultado de esas elecciones ha sido menoscabada por persistentes informes de irregularidades que no se han examinado satisfactoriamente, incluidos los problemas del proceso electoral en sí y las deficiencias institucionales existentes».

La misión de Gaviria y Axworthy llegó a Lima el 29 de junio de 2000 con una agenda de 29 puntos agrupada en cinco temas: administración de justicia y separación de poderes, libertad de expresión, reforma electoral, equilibrio de poderes, control civil de

las actividades del Servicio de Inteligencia. Fujimori aceptó todos los puntos de discusión, a pesar de la oposición de Montesinos a algunos de los puntos, sobre todo, los vinculados a las Fuerzas Armadas y sistema de justicia.

Era la consecuencia lógica de un proceso ni limpio, ni justo, ni transparente[219]

---

199 Sobre el Pacto de Gobernabilidad y las negociaciones para las fórmulas presidenciales, resultan interesantes las crónicas de *Caretas* entre diciembre de 1999 y enero de 2000. Otros datos aparecen en Murakami (2018: 516). Sobre las fórmulas presidenciales, recurrimos a Requena (2011: 241-276). En torno al rol de UPP, consultamos la crónica de Fernando Vivas «UPP, de Javier Pérez de Cuéllar a Antauro Humala», publicada en 2020 en *El Comercio.*

200 El caso Hayduk es contado, sobre todo, desde la perspectiva de la familia Martínez, por Uceda (2020: 189-193). La referencia sobre la mentoría de Cipriani aparece en Sifuentes (2019: 90). Los datos sobre el financiamiento de los estudios universitarios de los Fujimori Higuchi se encuentran en Dongo (2009: 73-74) y Vásquez de Velasco (2020: 37, 45-48)

201 Los videos de Alex Kouri, Agustín Mantilla, Alberto Kouri y grupos de militares aparecen en los tomos IV (2203-2227, 2351-2425, 2449-2487) y VI (3427-3466) de *En la Sala de la Corrupción: videos y audios de Vladimiro Montesinos* (1998–2000). A partir de las transcripciones, reconstruimos los hechos. El dato sobre la precisión en la transcripción del vladivideo Kouri–Crousillat–Montesinos en que se hace alusión a la Vía Expresa del Callao lo extraemos de *Útero.pe* (http://utero.pe/2007/05/30/el-vladivideo-perdido-de-alex-kouri/).

202 Sobre el rol de los observadores electorales y la sociedad civil durante el proceso electoral de 2000, revisamos Conaghan (2005: 179, 182-184), Murakami (2018: 522-528), Youngers (2003: 404-417), y el libro de la Comisión Andina de Juristas *Perú 2000: un triunfo sin democracia* (2000). Asimismo, consultamos el archivo de *Caretas* del año 2000 y los informes sobre el trabajo de Transparencia para las elecciones 2000 hechos por Marcia Bernbaum, Rafael López Pintor y Cynthia Sanborn (https://www.ndi.org/sites/default/files/1562_pe_vigilance_july2001_0.pdf y https://www.ndi.org/sites/default/files/1563_pe_moriliza_july2001_0.pdf). También revisamos los informes de la misión de la Organización de Estados Americanos (https://www.oas.org/sap/publications/2000/moe/peru/pbl_26_2000_spa.pdf) y del Instituto Nacional Demócrata–Centro Carter (https://www.cartercenter.org/news/publications/election_reports.).

203 El relato de lo ocurrido con los candidatos se basa en Murakami (2018: 518-522, 528-535), Conaghan (2005: 170-173, 186-188, 195-197), Burt (2011: 376-388), Bowen y Holligan (2003: 371-391), así como en las crónicas de *Caretas* durante el proceso electoral. Una fuente indispensable para ver la cobertura mediática es Fowks (2015: 103-116), que también tiene datos sobre los candidatos.

204 Sobre el Programa de Lotes Familiares, consultamos el texto de Carrión «Public Opinion, Market Reforms and Democracy», en *The Fujimory Legacy,* editado por este académico (143-144).

205 Acerca de la lista de Perú 2000 y los candidatos electos, revisamos Degregori y Meléndez (2007: 95-114).

206 La denuncia de la falsificación de firmas de Perú 2000 apareció en *El Comercio* a partir del 29 de febrero de 2000. Revisamos las ediciones de esa semana y complementamos con el relato de Murakami (2018: 521-522), Conaghan (2005: 180-182), y mi libro (2019: 119-123).

207 La sección sobre medios independientes se basa en Fowks (2015: 60-68, 99-101, 117), Vivas (2008: 466-468) y Bustamante (2012: 650-653, 655-657).

208 Las repercusiones sobre la denuncia de la fábrica de firmas de Perú 2000 se basan en Degregori (2012: 146, 148) y en mi texto sobre *El Comercio* (2019: 123-126).

209 Datos sobre la biografía de Alejandro Toledo los encontramos en Bowen (2015: 259), Vivas (2018: 141-145) e Hidalgo (2019: 219-233). Sobre la campaña de Andrade, un texto interesante es el de Oswaldo Carpio, «Campañas electorales: a propósito de JJ Rendón», publicado en 2011 (http://sjl.pe/archivo/noticia.asp?id=2357).

210 Nos basamos en la versión dada por Carlos Raffo en su blog El Panda Cuenta, lanzado en 2011, cuando se apartó del fujimorismo partidario (https://elpandacuenta.lamula.pe/). Parte del trabajo hecho por Raffo a fines de 1997 para la Fundación por los Niños del Perú se aprecia en https://youtu.be/TxSJ2hm7NKo. El *reel* de *El Día del Emperador* se ubica en https://youtu.be/i6oIlprufu0, mientras que el *spot* final sobre la paz con Ecuador se aprecia en https://youtu.be/i6oIlprufu0.

211 La sección en torno a la contracampaña contra Toledo se basa en Fowks (2015: 88-93, 127-129), Degregori (2012: 146-149), Bowen y Holligan (2003: 379-381) y Vivas (2018: 141-143), así como en la revisión de la prensa de la época. También nos basamos en Sifuentes, Migoya y Montes (2015: 98).

212 Sobre el tramo final de la campaña de Perú 2000 en primera vuelta, revisamos Bowen y Holligan (2003: 381-382) y el artículo de *Caretas* «La sombra de Fuji», del 27 de abril de 2000.

213 Esta versión aparece en Uceda (2020: 240-241).

214 La explicación de Alfredo Torres (2020: 39), presidente de Apoyo Opinión y Mercado, hoy Ipsos Perú, va en esta línea y añade que los votantes antifujimoristas eran más entusiastas en dar a conocer su intención de voto que los simpatizantes de Fujimori. También reconoce que el proceso no fue democrático.

215 La historia sobre lo ocurrido en una cabina de internet de La Molina en relación con el posible ingreso de resultados electorales en las elecciones de 2000 se basa en mi texto «Una historia del fraude 2000», publicada en mi blog en 2007 (https://josealejandrogodoy.wordpress.com/2007/09/28/una-historia-del-fraude-2000/), así como en la investigación hecha por Paola Ugaz para la revista *Caretas,* en la edición del 27 de abril de 2000.

216 En torno a los días siguientes al 9 de abril de 2000, consultamos Bowen y Holligan (2003: 382-390), Conaghan (2005: 190-203), Murakami (2018: 530-538), McClintock y Vallas (2005: 262-263), así como la edición de *Caretas* del 14 de abril de 2000.

217 El dato sobre la posición de la CONFIEP y su presidente respecto a las elecciones presidenciales de 2000 aparece en Durand (2017: 155-156).

218 El discurso de Montesinos posterior a la segunda vuelta electoral se conoció en la última semana de vida del régimen. Fue publicado íntegramente por el diario *Liberación* el 14 de noviembre de 2000.

219 Una visión sobre lo que ocurrió con el informe de la Misión de Observación de la OEA y las decisiones tomadas en la Asamblea General de dicha institución aparecen en Conaghan (2005: 204-207), Murakami (2018: 538-539), McClintock y Vallas (2005: 265-266), Youngers (2003: 417-419) y García–Sayán (2017: 49-52).

CUATRO SUYOS Y MUCHOS NUESTROS

(Junio – Septiembre, 2000)

Mientras la OEA se reunía en Washington y Windsor, Alejandro Toledo estaba de gira por España. Gracias a una gestión de Mario Vargas Llosa, se reunió con el presidente del gobierno, José María Aznar. Allí le expresó su punto de vista sobre lo que venía ocurriendo en el Perú. Dos días antes, había estado en Madrid Alberto Bustamante, para marcar la posición del gobierno. Según los testigos de ambas reuniones, los gestos de Aznar fueron más efusivos con Toledo, quien también recibió el respaldo de Felipe González, el líder histórico del Partido Socialista Obrero Español y antecesor de Aznar.

En paralelo, diversos artistas comenzaron a hacer performances y presentar piezas de artes plásticas para expresar su rechazo al régimen y su perpetuación en el poder. Un grupo de ellos, denominado «Colectivo Sociedad Civil», realizó un acto que llamó la atención: «Lava la bandera». Se trataba de un rito de lavado del símbolo patrio nacional en unas bateas con agua y jabón, debido a la suciedad a la que la había sometido el régimen. Otro grupo de artistas llamado La Resistencia creó el «Muro de la Vergüenza», donde se colocaron fotos de Fujimori, Montesinos y otros personajes cercanos al régimen y la gente escribía epítetos de diverso calibre contra ellos.

Con Toledo nuevamente en Lima, su cuartel general se desplazó al Cesar's Hotel, ubicado en Miraflores, perteneciente al empresario Luis León Rupp, quien se había mostrado interesado en apoyar la lucha por la democracia, a la par que enfrentaba serios problemas para mantener sus negocios. Allí se realizaron las reuniones con miras a coordinar la Marcha de los Cuatro Suyos. En aquel momento, el estado mayor del excandidato estaba conformado por Eliane Karp, Carlos Bruce, Fernando Yovera, Gustavo Gorriti y Álvaro Vargas Llosa.

Las coordinaciones iban más allá de este núcleo. Carlos Bruce convocó a todos los partidos políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como a los diversos núcleos de

universitarios. La idea de la marcha era que llegaran personas de todos los lados del país y se sumaran diversos colectivos en Lima. Se hizo una distribución de cuatro comandos y, en Lima, existía un coordinador para conseguir alimento y hospedaje a quienes vinieran.

Se contrató a algunos jóvenes para que armaran una web con miras a presentar entrevistas e información, de manera de contrarrestar la contracampaña del gobierno. Esos mismos jóvenes armarían una estación por internet, a la que llamaron Radio Democracia, donde se colgarían de la señal de Canal N y colocarían canciones bajadas desde Napster, el software de descarga ilegal de música que cambió la historia de dicha industria.

Toledo acudió en la tercera semana de junio a un foro en Varsovia (Polonia) para exponer sobre la situación de la democracia en el Perú. Pero, cuando llego Baruch Ivcher a la capital polaca, fue detenido en el aeropuerto por unas horas, ante la activación de la orden de detención que había hecho el gobierno peruano vía Interpol. Alberto Bustamante dijo que todo había sido un montaje, pero la evidencia lo desmentía.

Junto a Toledo e Ivcher, en ese foro sobre la democracia en Varsovia estaban Álvaro Vargas Llosa y Gustavo Gorriti. Y uno de los principales ponentes era George Soros, magnate estadounidense de origen húngaro que se había convertido, a través de su fundación Open Society, en uno de los principales financistas de causas ligadas a la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo que también le ha valido convertirse en protagonista involuntario de teorías de la conspiración esgrimidas desde la extrema derecha. Hubo un mutuo interés de ambas partes en conocerse. En la reunión que sostuvieron, Soros comprometió un millón de dólares para las actividades de movilización para recuperar la democracia en el Perú. Toledo se encargaría del manejo de ese dinero.

A fines de junio, cuando llegó la Misión de Alto Nivel de la OEA, diversos colectivos salieron a protestar. Por la avenida Javier Prado, el colectivo Mujeres por la Democracia hizo una performance con cientos de mujeres vestidas de luto por la muerte del sistema

democrático. La policía les tiró gases lacrimógenos. En el centro de Lima, Toledo encabezó un mitin en el que volvió a invitar a la Marcha para Fiestas Patrias[220].

El gobierno armó sus preparativos para asumir el mando. A Fujimori no le bastó con la ceremonia de entrega de credenciales, armada por un solícito Jurado Nacional de Elecciones y que se realizó el 13 de junio de 2000. La parafernalia se habilitó en Palacio de Gobierno.

Una semana antes, en el Cuartel General del Ejército, en forma adelantada, se hizo una ceremonia de reconocimiento de Fujimori como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Era un acto sin precedentes, pues se realizaba con un mes de anticipación a la culminación del periodo presidencial. Vladimiro Montesinos se hizo presente. Los dueños de los medios de comunicación no ocultaron sus simpatías y asistieron a la ceremonia: José Francisco y José Enrique Crousillat, Ernesto Schutz y Eduardo Calmell del Solar fueron algunos de los asistentes. Asimismo, estuvieron periodistas cercanos al régimen como Jorge Morelli y Patricio Ricketts, presentadores de Cable Canal de Noticias, y Guillermo Thorndike, director general de prensa de la Frecuencia Latina capturada. También fue invitado Carlos Boloña.

Un plan concreto del gobierno era obtener la mayoría en el Congreso que las urnas le habían negado. Así se puso en marcha la «Operación Reclutamiento», manejada por Montesinos bajo las órdenes de Fujimori. Como se vio con Alberto Kouri, la táctica era traer, a través de emisarios, a congresistas electos por la oposición que podrían ser persuadidos de pasar a las filas de Perú 2000. A cambio, Montesinos les podía ofrecer dinero o algún tipo de favor. En otros casos, no fue necesario un estímulo, sino que las propias convicciones de los congresistas electos, quienes preferían mantenerse equidistantes de la pugna entre gobierno y oposición, los llevarían a inclinarse por un lado de la balanza —porque, en el fondo, eran culturalmente fujimoristas— o a alejarse de la oposición y permanecer como independientes.

A quienes se apartaban del gobierno, se les hacía firmar dos documentos: una carta de alejamiento del partido de origen y un

«compromiso de honor» con Perú 2000. Quienes recibieron dinero, además, firmaban el recibo respectivo.

Entre junio y julio de 2000, el gobierno logró la adhesión de doce parlamentarios: Alberto Kouri, Mario Gonzales Inga, Antonio Palomo, Edilberto Canales Pillaca (Perú Posible), Eduardo Farah, Jorge Pollack, Enrique Mendoza del Solar (Solidaridad Nacional), José Elías Ávalos (Avancemos), Ruby Rodríguez de Aguilar (APRA), Gregorio Ticona Gómez (Somos Perú) y los dos parlamentarios electos por el FREPAP: Luis Cáceres Velásquez y Roger Cáceres Pérez. En el caso de Cáceres Velásquez, resultó beneficiado por una sentencia judicial que le permitió acceder al Congreso, pues fue absuelto en un juicio penal que le hubiera impedido obtener una curul. De todos ellos, solo se comprobó judicialmente la entrega de dinero en los casos de Kouri, Palomo, Ticona y Cáceres Pérez.

Otros parlamentarios dejaron sus bancadas en ese mismo lapso, pero sin pasarse al oficialismo. Estos fueron César Acuña Peralta y José Luna Gálvez (Solidaridad Nacional), Waldo Ríos (Frente Independiente Moralizador), Carlos Burgos Montenegro, Ítalo Marsano, José Villena Vela y Daniel Núñez Castillo (Perú Posible). En el caso de los dos últimos, adujeron que estaban en contra del nuevo perfil de Toledo, y de la Marcha de los Cuatro Suyos. La situación de Acuña fue distinta: tres miembros del staff de Montesinos recuerdan haberlo visto en el SIN e incluso la propia Matilde Pinchi declaró que había pedido un ministerio. Sin embargo, Montesinos no corroboró esa versión y no hubo un video que la cotejara. Acuña no fue acusado por este caso[221].

En el Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos hacía diversos planes. Entre junio y julio, convocó a Francisco Tudela a conversar en su oficina[222].

Inicialmente, dialogaron sobre la posición de Estados Unidos frente al gobierno. A criterio de ambos, el embajador John Hamilton, a pesar de su posición contemporizadora, estaría predisponiendo al Departamento de Estado en contra del régimen.

Tudela se concentró en lo que quería obtener: el apoyo de Montesinos para poder postular a la presidencia del Congreso de la

República. Sin embargo, el asesor presidencial le dijo que «se podía quemar» porque este iba a ser un parlamento con mucha confrontación interna y que era mejor tener una persona neutra, tanto para manejarse frente a la oposición como frente al núcleo encabezado por Absalón Vásquez. Por ello, optó por Martha Hildebrandt. Tudela se mostró de acuerdo y deslizó la posibilidad de ser presidente del Consejo de Ministros, lo que no fue rechazado por el asesor.

El vicepresidente electo y Montesinos pasaron a hablar de Prom Perú, entidad orientada a mejorar la imagen del país en el exterior y que era dirigida por Beatriz Boza, una reconocida abogada que también era presidenta de Indecopi, la entidad encargada de velar por la defensa de la competencia entre empresas, derechos del consumidor y propiedad intelectual. El asesor le indicó que, luego de una conversación con Fujimori, coincidió con su juicio de que era una «persona negativa» y que buscarían sacarla de su puesto. Boza era de las personas consideradas más eficientes dentro del régimen. Salió de sus puestos en agosto de 2000.

En otro momento, Montesinos le confesó al abogado que el hermano de Kouri ya estaba «con ellos». También le dijo a Tudela que era necesario tener una política de acercamiento con las Fuerzas Armadas, debido a que las relaciones entre los militares y el vicepresidente habían quedado dañadas por su posición en el caso Ivcher. El abogado internacionalista le manifestó que fue «una posición de momento» y se mostró de acuerdo con mejorar dicho vínculo.

Finalmente, coincidieron en tener una estrategia en el plano internacional, para contrarrestar las protestas y cabildeos de la oposición, así como las críticas de diversos gobiernos extranjeros.

Tudela no llegó a ser presidente del Consejo de Ministros. Según indicó Caretas, se fue a Holanda y renunció a ser el presidente de la Junta Preparatoria del Congreso de la República, cuestión que le correspondía por ser el parlamentario más votado en la bancada más votada.

Mientras todo ello ocurría, la Marcha de los Cuatro Suyos aceleró su organización. Toledo alternó convocatorias en distintas

universidades con mítines en diversas partes del país, espacios en los que invitó a participar en la protesta masiva. A la vez, hacía algunos viajes fuera del país para enfatizar que el Perú vivía una seria crisis democrática. A mediados de julio, el líder de Perú Posible se fue a México para felicitar a Vicente Fox, el presidente electo en los primeros comicios limpios en siete décadas.

Bruce continuó con las coordinaciones para la movilización. Los partidos designaron como intermediario a Javier Morán, un joven dirigente aprista. El entonces secretario general de Construcción Civil, José Luis Risco, hacía lo propio con las organizaciones de la sociedad civil.

El núcleo más cercano a Toledo coordinaba en el Cesar's Hotel junto al resto de los líderes de la oposición. Se debatían, además, diversos planes para el día 28 de julio. Se pensó en dos posibilidades para acampar en la Plaza de Armas, pero ambas fueron finalmente descartadas por cuestiones logísticas y prácticas.

Se alistaron tambos en diversas partes de la ciudad de Lima, con miras a ser puntos de concentración de quienes llegaban desde varios lugares del país. Y los ciudadanos comenzaron a desplazarse desde distintos puntos del Perú para llegar a la capital para las Fiestas Patrias.

Para julio de 2000, Montesinos citó a un grupo de altos mandos policiales sobre las protestas que se venían produciendo contra el régimen.

Inicialmente, el asesor felicitó a los jefes policiales por su reacción frente al tema de las invasiones de terrenos producidas a inicios de año y por enfrentar adecuadamente un motín senderista en el penal de Yanamayo. Acto seguido, inició su perorata conta Toledo:

—¿Qué va a hacer Toledo? Va a continuar con la política de ir asistiendo primero a las universidades. Y ¿por qué a las universidades? Porque en las universidades está el caldo de cultivo; por la vehemencia de la juventud, los estudiantes por naturaleza son rebeldes. (…) Él está haciendo una campaña de motivación a la juventud, para que pueda salir a las calles y unirse a los otros elementos que son sindicales, junto a construcción civil y, en una

simbiosis, producir actos de fuerza que nos obligan a nosotros a intervenir drásticamente.

Para Montesinos, se ingresaba a «una nueva fase de la guerra política». Uno de sus planes era negarles el permiso a Toledo y los opositores para hacer manifestaciones, a través de las prefecturas. Otro plan alternativo constaba en la organización de una contramanifestación de 200 personas en cada lugar en el que Toledo se presente. Al asesor ya no le importaba el costo humano: «nosotros al margen del tema, que se mechen, que se peguen, no interesa». Indicó que se emplearía personal civil para ello, al que se le detendría inicialmente y luego se le sacaría libre.

Montesinos delineó sus planes para sabotear la Marcha de los Cuatro Suyos. Refirió la necesidad de hacer contramanifestaciones que evitasen que los buses pudieran llegar a tiempo desde distintas partes del país. También se preparó a contrarrestar a los manifestantes con gases lacrimógenos arrojados desde los techos, tanto en Lima como en Arequipa.

El lunes 24 de julio juramentaron los parlamentarios electos, en una ceremonia bastante accidentada. Desde las bancadas de oposición, tenían preparadas monedas para lanzarles a los tránsfugas, dado que ya se voceaba que sus pases habían sido comprados por el gobierno. Algunos de los congresistas aludidos declinaron responder, pero otros, como Luis Cáceres Velásquez, arrojaron de vuelta las monedas a la oposición. Su hijo, Roger Cáceres Pérez, respondió haciendo una grosería con la mano.

Desde el oficialismo, devolvieron la moneda. Pablo Macera jugaba en pared con el absalonismo y fingía aplaudir a Jorge del Castillo, riéndose. Martha Chávez vociferó cuando Carlos Ferrero y Ernesto Gamarra juraron a sus cargos.

La nota anecdótica la protagonizó el parlamentario Cruz Saavedra Mesones, perteneciente a las filas de Perú Posible. Así fue su ceremonia de juramentación:

—¿Jura usted por Dios y por la Patria cumplir con sus deberes, respetar la Constitución y las leyes, observar el principio constitucional de no sujeción a mandato imperativo y guardar secreto sobre los asuntos tratados en las sesiones secretas?

—Por Dios, por la plata, digo, por la patria.

Las carcajadas se escucharon en todo el hemiciclo.

Ya sin ese buen humor, la Junta Preparatoria decidió adelantar las elecciones de la mesa directiva del Congreso para el martes 25. Originalmente, este proceso se iba a celebrar al día siguiente, pero coincidía con el día inicial de la Marcha de los Cuatro Suyos, que tenía como objetivo para el miércoles 26 llegar a la Plaza Bolívar para rechazar a los tránsfugas.

Ese martes 25, con 64 votos, Martha Hildebrandt venció a Luis Solari y asumió un segundo periodo consecutivo como presidenta del Congreso.

—De ahora en adelante, la agenda de la primera dama, Keiko Sofía Fujimori, tendrá lugar para las entrevistas periodísticas. Ella lo ha decidido así —¿o tal vez sus asesores?—, pues considera que la labor social que realiza debe ser conocida y difundida.

Así empezaba una entrevista hecha por la periodista Teresina Muñoz Najar a Keiko Fujimori, que salió publicada en la edición del 26 de julio de 2000 de la revista Caretas. La primera dama fue acompañada por dos de sus asesores a dicha conversación: Ana Vega y Guido Lucioni, su jefe de prensa, quien había postulado al Congreso sin éxito.

Keiko trató de marcar cierta opinión propia dentro del gobierno. De hecho, en 1997, firmó uno de los planillones para que se llevase a cabo el referéndum para decidir si su padre podía postular. Sobre ello y su posición sobre la inconstitucional reelección, dijo lo siguiente:

—¿Por qué, en 1998, suscribió el referéndum? ¿Quería recuperar a su padre?

—Como hija, claro que sí, pero, ya lo dije aquella vez, como ciudadana estaba de acuerdo con todas las reformas que había hecho, inclusive con el programa económico. Ustedes saben que yo no participé para nada en la campaña de la primera vuelta y en la segunda solo me quedaban dos opciones. Naturalmente, opté por mi padre. Hay muchas cosas que se deben terminar.

—Pensando así y si consideramos que nunca se terminan de hacer las cosas, tendría que quedarse de presidente eternamente...

—Lo que se necesita es que se sienten las bases para que este proceso se lleve a cabo y tengamos la certeza de que todo esto prosiga. Obviamente se va a democratizar e institucionalizar el país.

Pero la respuesta que fue más elocuente sobre la posición de Keiko sobre el gobierno era esta:

—¿Qué opina usted de Vladimiro Montesinos?

—Creo que él ha hecho un buen trabajo respecto a la erradicación del terrorismo y del narcotráfico, pero también creo que ya cumplió su trabajo. Estoy contenta porque mi padre ha dicho que el doctor Montesinos debe pasar a ocupar un cargo público. Así lo van a poder fiscalizar y tantos rumores que existen sobre él van a desaparecer.

Como ya hemos visto, la ruptura de relaciones entre Keiko y su tío Vladi se produjo con el caso Hayduk. Complementariamente, debemos señalar que Alberto Bustamante habló del tema con Montesinos, quien le dijo que la hija de Fujimori era «envenenada» por Juan Luis Cipriani, Rafael Rey y Beatriz Boza. Cipriani ya le había expresado sus diferencias con el asesor a Keiko y ya se ha visto la animadversión de Montesinos hacia Boza.

Sobre su padre, Keiko esbozó solo una mínima autocrítica:

—También quisiera aclarar que mi padre es muy abierto y tolerante. Tuvo que ser duro, es cierto, para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, pero creo que el oficialismo es menos tolerante y más duro que mi padre. Si alguna crítica debo hacerle al oficialismo es que no se comunica bien con la prensa.

Esta respuesta manifestaba que la posición de Keiko sobre su progenitor siempre tuvo límites bien definidos[223].

¿Las declaraciones de Keiko Fujimori eran la expresión de una hija descontenta con el asesor de su papá o la verbalización de un malestar mayor en el gobierno? El argumento de Yuzuke Murakami apuntaba, de acuerdo con sus fuentes, a que había algo de ambas. Esta impresión es reforzada por la narración novelada que hace Alberto Bustamante sobre el último año del régimen.

Según Murakami, ya en 1999, Fujimori comenzó a tomar sus propias precauciones sobre las interceptaciones telefónicas de Montesinos. Sobre este hecho, en varios pasajes de su libro, el

expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, refirió que Fujimori empezó a hablar con algunos funcionarios de confianza en ambientes de Palacio de Gobierno donde sabía que no había micrófonos. Luis Jochamowitz complementa a esta hipótesis el hecho de que Fujimori tenía sus propias grabaciones en su oficina, tanto telefónicas como en video. De hecho, en 2003, el programa Cuarto Poder presentó un video de Fujimori en su despacho tomando un fajo de billetes e introduciéndolo en un sobre.

El segundo factor de diferencia entre ambos fue Keiko Fujimori. Bustamante narró que, en algún momento, Montesinos le comentó que la hija del presidente venía repitiendo una misma rutina con varios altos funcionarios del gobierno: obligarlos a retirar la batería del celular, bajo el pretexto de que estaban siendo grabados a pesar de que el teléfono estaba apagado, para luego hablar mal del asesor presidencial. Como sabemos, Keiko fue el enlace para que Carlos Raffo se convirtiera en el publicista de su padre en la campaña de 2000, en detrimento del equipo encabezado por Daniel Borobio, más ligado a Montesinos. Y ya hemos visto sus declaraciones sobre el socio de su padre.

Según el periodista Marco Sifuentes, Keiko no estuvo sola en esta empresa, pues tuvo como aliado vital a Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Lima, con quien comenzó a tejer una relación de amistad. De hecho, aunque fue invitado, Cipriani no se apareció en la ceremonia de reconocimiento hecha por los militares a Fujimori en junio de 2000.

Otro posible punto de alejamiento entre Fujimori y Montesinos —señala Murakami— fue la denuncia de la falsificación de firmas de Perú 2000. De acuerdo con una persona que vio continuamente a Fujimori durante su estancia en Japón, en alguna conversación el expresidente le deslizó que la revelación de este tema, en el que él creía estaba directamente involucrado el asesor, había liquidado sus posibilidades de ganar en primera vuelta en sus últimas elecciones como candidato.

Para el politólogo japonés, otro punto de inflexión en la relación entre ambos fue la propuesta que le hizo Fujimori a su asesor para que dejara las sombras y ocupara el Ministerio de Defensa a partir

de julio de 2000, a lo que Montesinos se negó. Bustamante refiere que notó la distancia entre presidente y consejero en un momento anterior: la toma de decisión de no aplazar la segunda vuelta, hecha en un comité reducido integrado por Fujimori, Montesinos, Tudela, De Trazegnies, Edgardo Mosqueira y él.

Jochamowitz sugirió más bien que la distancia entre el presidente y Montesinos fue gradual. De un lado, el presidente comenzó a sentirse más a gusto en soledad en Palacio, una vez que todos sus hijos partieron a estudiar sus carreras universitarias en el extranjero, lo que le dio mayor independencia. De otro lado, Montesinos dejó de contestarle inmediatamente las llamadas y estaba irritado por las bromas adolescentes que los hijos de Fujimori —sobre todo Kenji— le jugaban. Asimismo, los planes de Montesinos pasaban, antes que por un puesto público, por convertirse en un conferencista internacional sobre temas de Inteligencia. En esta versión, antes que sucesos puntuales, primaba el desgaste natural de la complicidad forjada en una década.

La Marcha de los Cuatro Suyos se inició con una visita desde el extranjero[224]. Por pocas horas, el expresidente argentino y líder histórico de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, estuvo en Lima para expresar su respaldo a la manifestación. Este gesto no solo debía interpretarse como parte de las convicciones personales del político, sino también como un mensaje del gobierno argentino, encabezado por el radical Fernando de la Rúa.

Dado que se había frustrado la manifestación hacia el Congreso del día 26 de julio, los colectivos de mujeres organizaron una marcha multitudinaria para ese día. Partieron desde la avenida Arequipa y terminaron en el Paseo Colón. Hubo discursos de Eliane Karp, Mercedes Cabanillas y Fernando Belaúnde Terry. Participaron miles de personas. En el caso de los colectivos feministas, la participación de sus miembros fue a título individual, para no comprometer a sus organizaciones. La representación fue diversa.

El día central de la marcha fue el 27 de julio. Desde los tambos y otras partes de Lima, las distintas delegaciones comenzaron a marchar hacia el Paseo de los Héroes Navales, al inicio de la avenida Paseo de la República. El plan del gobierno se cumplió

parcialmente: algunos grupos no pudieron llegar desde sus provincias, otros sí lo hicieron. La movilización fue pacífica, multitudinaria y amplia en su convocatoria: escolares, estudiantes universitarios, amas de casa, madres beneficiarias de comedores populares, jubilados, sindicatos, colectivos diversos, partidos políticos y ciudadanos de a pie. Era una fiesta popular amenizada con bandas y donde las arengas confluían en un solo pedido: democracia.

Con el sonido de los pututos, se dio inicio al mitin central. Luego de una estruendosa entonación del Himno Nacional, llegó el juramento tomado a todos los presentes por la adolescente Lucía Arias Urizar, representando a la Patria:

—¡Peruanos! ¡Peruanas!, ¿juráis por Dios y por la Patria, por nuestros héroes y mártires, por nuestros ancianos y por nuestros niños; juráis por el pasado glorioso y por el futuro pacífico, grande, justo y democrático, que habremos de construir, luchar sin descanso hasta que la dictadura que asola nuestra tierra sea derribada?

—¡Sí, juro!

Los discursos también expresaron la confluencia de grupos muy distintos. Desde una joven estudiante de La Cantuta que lanzó un «saludo clasista y combativo» hasta Fernando Belaúnde Terry dando la última gran arenga de su carrera política. Toledo remató con la convocatoria a un Frente Democrático de Unidad Nacional y remarcó la idea de un «gabinete en la sombra», a la usanza británica, para fiscalizar al gobierno.

La gente se quedó hasta la medianoche. La marcha había sido un éxito hasta ese día. Solo Canal N la pasó completa.

En paralelo, Fujimori alistó un nuevo gabinete el 27 de julio de 2000. Convocó a las once de la mañana a Alberto Bustamante a su despacho en Palacio de Gobierno. El presidente del Consejo de Ministros intuía que se venían cambios y así se lo expresó. El mandatario le dijo:

—El señor Federico Salas ha sido convocado y ha aceptado ser el presidente del Consejo de Ministros, ¿qué le parece?

Bustamante arrancó con una larga intervención. Saludó la llegada de Salas, por haber sido un candidato presidencial con cierto perfil

opositor, lo que sería consistente con los mensajes de apertura democrática que se habían dado. El saliente presidente del Consejo de Ministros también le dijo al mandatario que lo más recomendable era que se hiciera un relevo total del gabinete. La respuesta de Fujimori lo sorprendió.

—Mi llamada para que venga a conversar está vinculada a su pregunta, porque va a ser un cambio solamente parcial del gabinete.

Para el abogado, esta posición era un error. Fujimori retrucó que varios de los ministros habían hecho un buen trabajo. También añadió que pocas personas le contestaban las llamadas para integrar el nuevo gabinete. Le ofreció permanecer en el equipo como ministro de Justicia. Pese a todo, Bustamante aceptó.

Federico Salas había negado hasta inicios de julio cualquier participación en el gabinete que se instalaría el día 28. Pero su perfil pertenecía a aquellos que, entre la disyuntiva entre apoyar al gobierno por el plan económico y pasar a la oposición, optaban por lo primero. Salas no había estado presente en casi ninguna manifestación posterior a la primera vuelta electoral. A la PCM, sumó la cartera de Educación.

Un retorno marcó al gabinete: Carlos Boloña regresaba luego de siete años al equipo ministerial, a pesar de que era parte de los planes golpistas de Montesinos. Para ese entonces, el país no solo enfrentaba una recesión, sino también problemas de déficit fiscal, producto de los gastos de campaña hechos por el régimen para el tercer periodo de Fujimori. Por ello, el programa de Boloña tenía dos frentes claros: recortes fuertes en el gasto público y reimpulso del programa de privatizaciones.

Llegaron rostros nuevos. El agroexportador José Chlimper relevó a Belisario de las Casas como ministro de Agricultura. Provenía de los sectores más beneficiados de las políticas del régimen en esta materia. Para Industria, fue convocado otro empresario, Gonzalo Romero de la Puente, cercano en años anteriores al FREDEMO y a Somos Perú.

Algunas carteras demoraron unos días en tener las designaciones listas, como Presidencia, Pesquería y Transportes y Comunicaciones. En esta última, designaron a Augusto Bedoya

Cámere, un ingeniero industrial y empresario, quien era esposo de Milagros Maraví, anterior miembro del equipo que lidió con los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos[225].

El viernes 28 de julio de 2000, quienes seguían la transmisión de Canal N pudieron presenciar la historia de dos Perú paralelos. De un lado, Alberto Fujimori en las ceremonias protocolares por las Fiestas Patrias y el inicio de su tercer mandato. De otro lado, la protesta desbordada en la calle, así como la infiltración de elementos del Servicio de Inteligencia Nacional. Fue un día trágico.

9.00 a. m. En la Catedral de Lima, se inició la misa y Te Deum por el aniversario de la Independencia Nacional. Fujimori llegó junto a Keiko y se encontró con su gabinete saliente. Allí, Juan Luis Cipriani dirigió a los presentes una homilía en la que comenzó hablando del rol subsidiario del Estado, para luego hacer una advocación que sorprendió a varios de los presentes y a muchos en sus casas:

—Y si añadimos a estos posibles errores la presencia actual de un inmenso poder tutelar sobre el que la gente no tiene apenas control y que actúa sin responder por sus actos de manera pública, entonces se genera una opresión asfixiante contra la que debemos reaccionar. Es inaceptable la presencia de tal poder, y menos aún su continuidad, porque se le pueda querer justificar en nombre de una llamada «eficacia». Este fenómeno del inmenso poder tutelar está en la raíz de muchos problemas de nuestra situación actual y merece, a mi entender, una decisión firme y clara.

Cualquier buen entendedor sabía que Cipriani se estaba refiriendo a Vladimiro Montesinos.

Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes significativamente menor al de la noche anterior comenzó a avanzar desde el Paseo de los Héroes Navales por el jirón Lampa, con miras a llegar al Congreso o a la Plaza de Armas. Pero en la intersección de Lampa y Cusco, la Policía se plantó para evitar cualquier tipo de manifestación. Mientras se realizaba la misa solemne, hubo tres intentos de forzar un repliegue policial, sin éxito. Las fuerzas del orden arrojaron chorros de agua y bombas lacrimógenas. Al desorden, se sumó el hecho de que la prefectura de Lima no había autorizado una ruta alternativa que los organizadores de la Marcha

de los Cuatro Suyos propusieron a las autoridades. Los gases fueron tantos que su impacto llegó hasta la Catedral.

10.25 a. m. Concluyó la misa y Fujimori volvió a Palacio de Gobierno. Nuevos enfrentamientos surgieron en la esquina de Carabaya con Cusco. Piedras de un lado, gases lacrimógenos tirados al cuerpo del otro. Mientras, Bustamante llegó con los ministros para la juramentación de Fujimori.

10.32 a. m. Se produjo el primer incendio del día en una fábrica de ollas, ubicada en la cuadra seis del jirón Puno, a dos cuadras de un local del Poder Judicial que antes fue sede del Ministerio de Educación.

10.33 a. m. En una camioneta 4x4, Alejandro Toledo llegó junto a Álvaro Vargas Llosa al Paseo de los Héroes Navales. Varios de los manifestantes lo saludaron. Toledo descendió del vehículo y fue flanqueado por Carlos Bruce y Gustavo Gorriti. Comenzó a marchar por el jirón Lampa, con miras a ir hacia el Parque Universitario, a pocas cuadras del lugar. Llevaba una bandera peruana. En eso, se inició el segundo incendio en el exlocal del Ministerio de Educación y se vio a personas con el rostro cubierto haciendo destrozos en el primer piso de dicha entidad.

10.45 a. m. Toledo estaba por llegar a la avenida Abancay y fue detenido por los gases lacrimógenos. Él y parte de su equipo llevaban máscaras, pero tuvieron que retroceder. Toledo presentó problemas para respirar y su seguridad lo introdujo en una camioneta.

10.50 a. m. Arribaron al Congreso de la República los únicos presidentes que habían aceptado ir a la ceremonia de Fujimori: Gustavo Noboa (Ecuador) y Hugo Banzer (Bolivia). El resto de los mandatarios latinoamericanos había declinado la invitación. El aislamiento de Fujimori era claro.

10.52 a. m. Fujimori comenzó a leer su juramento al cargo por tercera vez. La oposición manifestó su rechazo mediante gritos y, además, se retiró en pleno del hemiciclo del Congreso de la República. Algunos, como Jorge del Castillo, lucían máscaras antigás. Los parlamentarios salieron por la avenida Abancay, listos para unirse a los manifestantes, gritando «no a la represión». Otros,

como Henry Pease, tuvieron que irse rápidamente por la asfixia de los gases lacrimógenos.

El mensaje de Fujimori fue el más anodino de su decenio. Aunque reconoció que tenía pasivos en materia democrática y económica, su discurso era un cúmulo de promesas en torno a programas de reactivación que no explicó cómo resolver. Más allá de alusiones genéricas, no dijo mucho sobre cómo enfrentar los problemas de gobernabilidad que tenía encima y que eran evidentes en las calles, mientras él leía su alocución ante la diezmada representación parlamentaria.

Mientras tanto, Canal N pasaba las imágenes de lo que ocurría en el centro de Lima. Nuevamente se registraron bombas lacrimógenas y policías golpeando en el piso a algunos manifestantes. Algunos vándalos le pegaron a un policía desarmado. Las calles donde existía el círculo de seguridad registraron varios incidentes.

11.52 a. m. Fujimori salió del Congreso hacia Palacio de Gobierno. Fue la última vez que se le apreció durante el día.

Mientras el gobernante regresaba a la casa presidencial, los disturbios y enfrentamientos seguían en buena parte del centro de Lima.

12.00 m. Los policías comenzaron a dejar desguarnecidos varios puntos del centro de la ciudad. En particular, la Plaza de Armas y el jirón de la Unión, vía peatonal central. Quince minutos después, ingresó un grupo de personas con una caseta de información turística que fue llevada hasta la altura de la Municipalidad de Lima.

12.15 p. m. Nuevos incidentes se registraron en el frontis de Palacio de Justicia. Un grupo de personas buscó romper una de las puertas del edificio central del Poder Judicial. En una de las oficinas, se inició un incendio de pequeñas proporciones. La Policía replegó al grupo con gases lacrimógenos.

12.25 p. m. Toledo inició un mitin improvisado en la Plaza San Martín, que se encontraba llena hasta la mitad de su capacidad. Lo acompañaban Bruce, Gorriti, Carlos Ferrero y David Waisman. A los pocos minutos, la intervención de Toledo acabó abruptamente en medio de los gases lacrimógenos. Minutos después, los

manifestantes buscaron reagruparse en el mismo lugar, con similar resultado.

Mientras, en la puerta lateral de Palacio de Gobierno que da al jirón Carabaya, algunos pocos manifestantes comenzaron a hacer destrozos, sin que la Policía Nacional hiciera nada.

12.35 p. m. Un sujeto no identificado lanzó una bomba incendiaria a una de las oficinas del Palacio de Justicia que sufría un pequeño incendio, avivando las llamas. El fuego fue rápidamente controlado. Luego de arrojar más gases lacrimógenos, la Policía volvió a controlar la zona.

12.47 p. m. Toledo regresó al Paseo de los Héroes Navales. Se encontró con el escultor Víctor Delfín, quien se hallaba herido por una bomba lacrimógena. Con un pequeño grupo, el líder de Perú Posible decidió dar una vuelta simbólica al Paseo. Ocho minutos después, el grupo fue nuevamente dispersado por las bombas lacrimógenas.

En la Plaza de Armas, la caseta de información turística que había sido movida allí horas atrás fue colocada por un pequeño grupo de personas frente a la puerta de Palacio de Gobierno. Comenzaron a quemarla.

1.00 p. m. Se iniciaron dos incendios en paralelo en dos edificios ubicados uno al frente del otro: la sede del Jurado Nacional de Elecciones y la oficina principal del Banco de la Nación. Esta última sufrió mayores daños en sus estructuras y allí se desató la tragedia: los vigilantes Guillermo Manuel Angulo Concha, Antonio Ludgardo Gonzales Dávalos, Víctor Humberto López Asca, Hugo Fernando Miranda Suárez, Miguel Antonio Pariona Gonzales y Pedro Alberto Valverde Baltazar fallecieron en el incendio, intentando sofocarlo. Se habían lanzado bombas incendiarias al banco desde distintos flancos.

Como demostraron los videos exhibidos días más tarde, en todas las zonas donde se desataron desmanes e incendios, la Policía había dejado la custodia libre. Varios de los vigilantes sobrevivientes se dieron cuenta del repliegue de las fuerzas del orden. Incluso pidieron ayuda y no se la dieron.

Los bomberos demoraron en llegar. En ciertos puntos de la ciudad, algunas personas la emprendieron contra las unidades del cuerpo voluntario, lo que retrasó el control del incendio y, con ello, los daños personales y materiales fueron mayores.

2.00 p. m. La Policía finalmente reaccionó y despejó la Plaza de Armas, a punta de gases lacrimógenos. En dos minutos, la zona fue liberada. Lo mismo ocurrió en la Plaza San Martín. Sin embargo, se registraron excesos por parte de la Policía en algunas de las detenciones.

2.30 p. m. Recién comenzó a atenderse el incendio en la sede del Banco de la Nación. Según el Colegio de Ingenieros del Perú, la forma como se había concebido las estructuras de los primeros pisos del edificio generó que las mismas colapsaran.

6.00 p. m. Con todo más calmo, en Palacio de Gobierno se realizó una cena por el cumpleaños de Fujimori.

8.30 p. m. Toledo brindó una conferencia de prensa en el Cesar's Hotel. Denunció que hubo cien agentes infiltrados del Servicio de Inteligencia quienes provocaron los actos de violencia.

En paralelo, en Cable Canal de Noticias se hizo un programa de emergencia de Mesa Política donde se responsabilizó por completo a Toledo por lo ocurrido.

En esas horas, se brindaron ofrecimientos de asilo político a Toledo y a otros miembros de la organización de la Marcha de los Cuatro Suyos. Ninguno de los involucrados aceptó las ofertas.

Al día siguiente, el desfile militar que se iba a realizar en el Campo de Marte fue trasladado al Cuartel General del Ejército. Culminado el mismo, Fujimori ofreció un almuerzo en Palacio de Gobierno, donde culpó por completo a la oposición democrática por lo ocurrido. En el discurso de orden, José Villanueva Ruesta incluyó en sus saludos protocolares a Vladimiro Montesinos.

Mientras, los diarios sensacionalistas y canales al gobierno encabezaron una campaña durante días para culpabilizar por los desmanes del 28 de julio a Toledo. Durante las siguientes semanas, los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos tuvieron pocas ventanas para responder a los ataques y presentar la evidencia

sobre el ingreso de infiltrados. Continuaron algunas protestas, pero el gobierno cumplió el objetivo de aminorar su número e impacto.

Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que, en los alrededores del Banco de la Nación, se hospedaron un centenar de agentes de Inteligencia, como había afirmado Toledo. También se demostró la contratación de delincuentes comunes. El local del Banco de la Nación fue demolido y dio paso a la Plaza de la Democracia, inaugurada el último día de mandato de Alejandro Toledo.

Para agosto de 2000, Montesinos colocó como asesor de la bancada de Perú 2000 a un personaje que requiere una detallada presentación. Decía tener título de odontólogo, pero no lo era. Y se ufanaba de sus conexiones con el número dos del régimen. Se llamaba Óscar López Meneses.

Hijo de un dentista aprista y una señora moqueguana con conexiones en el Opus Dei, López Meneses tuvo un pasado juvenil en el partido de su padre durante la década de los ochenta. A inicios del decenio siguiente, contrajo matrimonio con Liliana Maribel, hija del entonces ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva. Hacia la mitad de esa década, su padre, decano de la facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres —ya en manos cercanas al APRA—, lo contrató como director de la clínica de dicha especialidad, ubicada en San Luis.

Desde 1995, López Meneses ya circulaba con un auto de lujo, escolta policial y tenía dos pistolas ametralladoras en su poder. Había conocido tres años antes a Montesinos, debido a las acciones cívicas que hacía la USMP en conjunto con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1999, la tenencia de las indicadas armas en forma irregular le generó un problema legal, del que salió librado en tiempo récord. El 11 de junio de 1999, una sala presidida por el juez William Paco Castillo lo exoneró de cualquier responsabilidad. Luego se haría célebre una foto en la que ambos personajes posan juntos. Quince años más tarde, Castillo, ya alejado del mundo judicial, sería por un tiempo abogado de Alberto Fujimori.

Ese mismo año, hizo la maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, dependiente de

las Fuerzas Armadas. Su promoción en el CAEN tendría algunos nombres conocidos para la época: José Carlos Bringas y Walter Hernández Canelo (miembros del Jurado Nacional de Elecciones), Delia Vergara (alcaldesa de Chaclacayo), Julián Cortez (exdirector de prensa de Frecuencia Latina), Ricardo Flores (corredor de autos y empresario, quien postuló al Congreso por Avancemos), así como los futuros congresistas tránsfugas Luis Alberto Kouri y Jorge Pollack.

De hecho, Matilde Pinchi Pinchi declaró años más tarde que fue López Meneses quien llevaría a Pollack para que pudiera pasar a la bancada de Perú 2000. Ella atestiguó entregas de dinero por parte de Montesinos al supuesto odontólogo, a quien también se le otorgó un vehículo adicional de seguridad y teléfonos celulares.

López Meneses trabajó en el Congreso de la República hasta el 26 de septiembre de 2000[226] .

En los primeros días del tercer mandato de su padre, Keiko Fujimori buscó alianzas en los nuevos miembros del gabinete ministerial. A su criterio, había que enfrentar a Montesinos con respaldo en dicho cuerpo colegiado.

Por lo menos cuatro ministros fueron citados por Keiko a almorzar fuera de Palacio de Gobierno, por separado. A cada uno de ellos les repitió que Montesinos era un simple asesor. Solo se conoce la identidad de uno de ellos: José Chlimper. Él señaló que conversó con la primera dama en un chifa, y ella le dijo que Montesinos era mentiroso, corrupto y que esperaba que los nuevos ministros no se dejaran cooptar por él. Para el empresario, esa advertencia le impidió acudir a una reunión con el asesor en su casa de playa en Lurín.

La estrategia también contempló solidificar los lazos con las esposas de los ministros y con las ministras. La primera dama comenzó a organizar lonches en los que se tocaban diversos problemas sociales. En uno de ellos, se habló de la violencia contra la mujer y Keiko se refirió a una experiencia personal bastante dolorosa: el maltrato que habría tenido por parte de una expareja. Años más tarde, la hija de Fujimori negaría dicho episodio de

violencia. Los lonches se realizaron tanto en Palacio como en las casas de los ministros.

Para redondear la faena, Keiko apeló a la religión. Durante el tramo final del gobierno de su papá, la primera dama organizó tres misas en la capilla de la sede presidencial, donde fueron invitados los ministros y sus esposas. Por lo menos una de ellas fue oficiada por Juan Luis Cipriani.

Según el Departamento de Estados Unidos, la situación llegó a extremos complicados para mediados de agosto de 2000. De acuerdo con fuentes recogidas por la delegación diplomática en Lima, Alberto Fujimori le ordenó a Keiko detener la campaña contra Montesinos y le indicó que había decidido mantenerlo en el cargo. Las fuentes que manejaba la embajada estadounidense señalaban que Fujimori supo de las reuniones de Keiko por boca de Federico Salas. El gobernante, de acuerdo con este cable diplomático, le dijo a su hija que Montesinos le había salvado de, por lo menos, tres atentados contra su vida en el último año y que, si no estaba de acuerdo con la decisión, podía dejar Palacio de Gobierno[227].

Mientras tanto, en algún momento de agosto de 2000, Montesinos volvió a activar el plan de golpe contra Fujimori. Una breve conversación con Carlos Boloña dio cuenta de ello. El asesor ideó hacer una marcha de apoyo al golpe, con madres de comedores populares. Le ordenó al ministro de Economía que pensara los planes económicos para el nuevo gobierno. Pero el plan no llegó a ejecutarse, como los intentos anteriores de derrocar a Fujimori.

En paralelo, Absalón Vásquez tenía sus propios proyectos. A mediados de agosto, en una casa en la urbanización Camacho en La Molina, organizó el primer encuentro nacional de Vamos Vecino. Según algunos asistentes al ágape, Vásquez proclamó sus intenciones para ser el sucesor de Fujimori en 2005 y comenzó a preparar la campaña para las elecciones municipales de 2002, donde Vamos Vecino buscaba obtener un gran triunfo. El mensaje al resto del fujimorismo era claro: tenemos bases y vamos a utilizarlas.

¿Por qué Vásquez hacía una exhibición de poder tan explícita? Era notorio que había dos bloques dentro de la bancada fujimorista. Los más antiguos, agrupados en Cambio 90 y Nueva Mayoría, eran

quienes tenían mayor nivel de coordinación con el Poder Ejecutivo, así como una mayor posibilidad de colocar sus temas en agenda. Al mismo tiempo, estos parlamentarios tenían una posición excluyente frente a sus pares de Vamos Vecino. Factores de clase, raza y dinero también se mezclaron en esta división[228].

El 20 de agosto de 2000, Montesinos salió de viaje. Su destino era su ciudad natal: Arequipa. Partió en un avión militar junto a Matilde Pinchi y miembros de su equipo de seguridad. En la Ciudad Blanca, Montesinos volvió a ver la derruida casa de su infancia y adolescencia, ubicada en el barrio de Tingo y, posteriormente, estuvo en el colegio militar donde hizo la secundaria. Luego de un almuerzo aderezado por los platos típicos de una de las mejores gastronomías del país, fue al turístico mirador de Yanahuara a contemplar la tierra que lo vio nacer. Algunos de sus acompañantes lo notaron nostálgico. Para otros, fue un viaje de relax previo a lo que vendría al día siguiente.

Al mediodía del 21 de agosto, Fujimori, Montesinos y la cúpula militar brindaron una conferencia de prensa acompañados de varios mapas y fotografías. El mandatario anunció que, gracias a un operativo de Inteligencia llamado Plan Siberia, el SIN desarticuló una organización criminal que se encargaba de traficar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según Fujimori, los traficantes compraron 10 000 fusiles de fabricación rusa en Jordania y los lanzaron en paracaídas a las zonas selváticas donde tenía sus campamentos el grupo subversivo. El gobernante también indicó que no se había indicado nada a los servicios secretos colombianos por «confidencialidad». Fujimori anunció, además, que los líderes de la operación de tráfico de armas eran dos oficiales retirados del Ejército, José Luis y Luis Frank Aybar Cancho.

El contexto de la revelación llamó la atención de muchos: ese mismo día, se iniciaba formalmente la labor de la Mesa de Diálogo convocada por la Organización de Estados Americanos. Y, al mismo tiempo, el operativo supuso un paso adelante en una de las estrategias que el régimen tenía desde el año pasado: petardear el proceso de paz en Colombia para beneficio del gobierno peruano.

Para la embajada de Estados Unidos, esto no era normal, al igual que las alusiones hechas a la secretaria de Estado, Madelaine Albright.

La conferencia de Fujimori y Montesinos constituyó un craso error. Jordania admitió que hubo una venta de armas, pero a representantes oficiales del Ejército peruano, con confirmación desde Lima. Y desde Colombia, se indicó que ellos ya conocían la operación. El presidente Andrés Pastrana comenzó a sospechar de la conducta de Fujimori. Según Alfredo Torres, la periodista Cecilia Valenzuela —su esposa desde 2016— había estado investigando el caso y, para abril de 2000, ya tenía una indagación completa, que puso en conocimiento de los enlaces de Inteligencia de las embajadas colombiana y estadounidense en Lima.

En realidad, el tráfico de armas había sido ideado por Montesinos. No solo se trataba de aprovechar el complejo proceso de paz en Colombia para vender la imagen de Fujimori como duro frente a la subversión. También estaba la opción de hacer negocios mediante una posible extensión del conflicto a otras partes de la región, tanto con la compra de armas como con la posibilidad de que el SIN fuera aliado de Estados Unidos en la lucha contra las FARC.

Los Aybar Cancho eran, además, viejos conocidos. Fueron proveedores de las Fuerzas Armadas durante los años noventa y habían conocido ocasionalmente a los Fujimori. José Luis ya había sido capturado y sometido a torturas. Luis Frank fue capturado en septiembre y soltó audios a diversos medios de comunicación donde señalaba que era una pieza de un operativo de Montesinos.

Otras revelaciones publicadas por El Comercio e Imedia Perú —un portal dirigido por Cecilia Valenzuela y financiado por Luis León Rupp— dieron cuenta de los nexos de los Aybar Cancho con parte del entorno de Montesinos y las Fuerzas Armadas peruanas. Al asesor le salió el tiro por la culata[229].

A pesar del desvío de atención, la Mesa de Diálogo de la OEA inició funciones el 21 de agosto de 2000. La instancia comenzó a operar en el sótano del Hotel Country Club, uno de los más tradicionales de la ciudad. Eduardo Latorre, el excanciller

dominicano que lideraría la instancia, se había impuesto un plazo de seis meses para sacar adelante la agenda.

Además de los representantes del gobierno y la oposición democrática, se convocó a una serie de organizaciones de la sociedad civil: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la Central General de Trabajadores del Perú, la CONFIEP y el Consejo por la Paz. Transparencia cumplió una tarea de observación, formalmente por fuera de la Mesa.

Para mejorar la comunicación y facilitar las conversaciones, miembros de la oposición concertaron con el gobierno mantener reuniones previas para la metodología de los debates, a fin de que las conversaciones fluyeran. Aquí fueron clave García–Sayán y Bustamante. Luego de algunas semanas, la oposición le pidió al gobierno que reforzara su equipo con parlamentarios de Perú 2000, dado que varios de los acuerdos suponían cambio de normas en el Congreso de la República. El régimen aceptó.

Del lado de la sociedad civil, fue la Coordinadora quien asumió un rol más activo y llevó demandas de otras organizaciones no representadas en la Mesa.

Sin embargo, las tres primeras semanas de negociaciones no dieron mucho fruto. Por ello, la representación opositora decidió acudir solo a las sesiones del pleno del Congreso de la República que sirvieran para debatir y aprobar los proyectos que se consensuaran en la Mesa de Diálogo. Las coordinaciones opositoras se hacían, sobre todo, en la casa de Henry Pease. Era Valentín Paniagua, congresista por Acción Popular, el encargado de los temas constitucionales y de convencer a los más duros en el gobierno de que había que ceder[230] .

A inicios de septiembre, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se encontraban en regiones distintas del mundo, buscando opciones diversas para sus respectivos futuros.

Fujimori estuvo la primera semana de septiembre en New York, con motivo de la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Aprovechando ese viaje, el 8 de septiembre de 2000 fue a Washington para conversar con la secretaria de Estado,

Madelaine Albright, y el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Samuel Berger.

Albright no fue con rodeos. Le dijo a Fujimori que era necesario que cooperase para que la Mesa de Diálogo tuviera éxito. Hizo énfasis en garantizar la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y, sobre todo, en reestructurar el Servicio de Inteligencia Nacional. La cita fue áspera y duró media hora. Estuvieron presentes como testigos Keiko y Alberto Bustamante.

Los diez últimos minutos de conversación fueron aún más duros. Berger, quien por su cargo podía ser más frontal, fue aún más explícito que la jefa de la diplomacia estadounidense:

—Señor presidente, siempre lo admiré. Usted combatió el terrorismo y puso en orden a su país. Pero ha puesto en peligro su legado por la forma como se manejaron las últimas elecciones. No fueron democráticas.

—Soy un demócrata —dijo Fujimori, elevando la voz.

—Si quiere seguir contando con nuestro apoyo, tiene que hacer cambios al más alto nivel. Tiene que pedirle a Vladimiro Montesinos que se vaya.

Montesinos ya sabía que Estados Unidos le había dado la espalda, a raíz del tráfico de armas a las FARC. Así que decidió viajar a Rusia con Matilde Pinchi Pinchi y Jacqueline Beltrán. Era un viaje con apariencia de vacaciones, pero se volvió una travesía de posibles nuevos negocios.

El asesor presidencial se entrevistó con el jefe de los servicios secretos rusos, con miras a comenzar a suministrarles información, en lo que era claramente una ruptura de su añeja relación personal con la CIA, cultivada desde los años setenta. No era la primera vez que buscaba una relación con la KGB. También lo hizo en la época del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, sin éxito.

Cuando ambos retornaron a Lima, se desató una pequeña tormenta. Absalón Vásquez continuaba su rebeldía frente a sus pares de Cambio 90–Nueva Mayoría. Decidió que Vamos Vecino participase de forma individual en las elecciones municipales de 2002 y se retiró del Consejo Directivo del Congreso.

Ninguno sabía que se vendría un cataclismo[231].

220 La previa a la Marcha de los Cuatro Suyos y la respuesta del gobierno se basa en Conaghan (2005: 207-211, 214-219), Murakami (2018: 539-540), Burt (2011: 390-392), Rousseau (2012: 108-109, 211), Youngers (2003: 419-423) y Degregori (2012: 195-197, 217-220), así como en reportajes de *Caretas* publicados entre junio y julio de 2000. Algunas anécdotas aparecen en la columna «Flashbacks de los cuatro suyos» de Marco Sifuentes (http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2010/08/flashbacks-de-los-cuatro-suyos.html). Otros elementos se encuentran en el suplemento especial publicado por *La República* en 2010 y en una crónica de Fernando Vivas publicada en *El Comercio* en julio de 2020 (https://elcomercio.pe/politica/justicia/marcha-de).

221 Sobre los tránsfugas, utilizamos el artículo «Transfuguismo y crisis postelectoral en el proceso de reinstitucionalización democrática» de César Delgado–Guembes publicado en *Derecho PUCP* (http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6558) y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 sobre transfuguismo (https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00006-2017-AI.pdf), así como publicaciones de *Caretas* y los libros de Murakami (2018: 543-544) y Conaghan (2005: 211-214). También la sentencia contra Fujimori por este caso. El dato sobre César Acuña, hoy un político bastante poderoso, aparece en la completa biografía no autorizada del empresario hecha por Acosta (2021: 133-139).

222 Las reuniones de Montesinos con Tudela, Boloña y los jefes policiales aparecen en los tomos IV (2427-2448, 2489-2494) y VI (3427-3490) de *En la Sala de la Corrupción: videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998–2000)* (2004). El dato sobre César Acuña, hoy un político bastante poderoso, aparece en la completa biografía no autorizada del empresario hecha por Acosta (2021: 133-139).

223 La entrevista completa de Teresina Muñoz Najar a Keiko Fujimori *ad portas* del tercer mandato de su padre puede verse en https://web.archive.org/web/20110429200248/http://www.caretas.com.pe/2000/1629/articulos/keiko.phtml. Información complementaria se basa en Bustamante (2003: 261-266, 341-350) y Murakami (2018: 541-544). Como se indica en el texto, estas dos últimas fuentes fundamentan la relación complicada entre Fujimori y Montesinos para el año 2000, al igual que Jochamowitz (2019a: 203-205, 219-221) y Sifuentes (2019: 88).

224 En torno a la Marcha de los Cuatro Suyos, además de los textos arriba mencionados, revisamos el documental *El Viento de Todas Partes* de Nora de Izcue y el especial 28 de Julio. *Minuto a minuto* de Canal N.

225 Sobre el gabinete Salas, nos basamos en Bustamante (2003: 179-183), y en la edición de *Caretas* del 3 de agosto de 2000. Véase también Dargent (2014: 100).

226 La historia de Óscar López Meneses se basa en Sifuentes (2018: 170-176) y Ugaz (2014: 259-265), y en los reportajes de *Caretas* «López y compañía» (https://web.archive.org/web/20120323182019/http://www.caretas.com.pe/2001/1658/articulos/lopez.phtml) y de *IDL–Reporteros:* «De la cárcel al Pentagonito» (https://idl-reporteros.pe/de-la-carcel-al-pentagonito/) e «Intrigas de inteligencia, saunas regalados» (https://idl-reporteros.pe/intrigas-de-inteligencia-saunas-regalados/).

227 El cable puede verse en

https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/documento/pdf/318.pdf

228 La estrategia de Keiko Fujimori contra Montesinos aparece en Dongo (2009: 57-62). La admisión de José Chlimper acerca de las reuniones de Keiko con ministros la señala el exministro en León (2019: 85). Las disputas de Absalón Vásquez al interior del fujimorismo se basan en informaciones de *Caretas* y *El Comercio* correspondientes a agosto y septiembre de 2000. También revisamos Degregori y Meléndez (2007: 123-127).

229 Sobre el tráfico de armas a las FARC y el Plan Siberia, consultamos Bowen y Holligan (2003: 393-418) y Murakami (2018: 547-548). También apelamos a Jochamowitz (2019a: 23, 43, 47) y Torres (2020: 42).

230 Las primeras semanas de la Mesa de Diálogo de la OEA están reflejadas en García–Sayán (2017: 56-58, 61-63) y Pease (2009: 25-28). Otros aspectos aparecen en Youngers (2003: 423–424).

231 Las reuniones de Fujimori con funcionarios del gobierno de Estados Unidos aparecen en Bowen y Holligan (2003: 419-420), Murakami (2018: 549) y McClintock y Vallas (2005: 267-268). Las citas de Montesinos en Moscú son relatadas en el primero de los libros nombrados, así como en Jochamowitz (2019a: 24-25, 255-256).

EL DERRUMBE

(14 septiembre – 22 noviembre, 2000)[232]

Nadie sabe con exactitud cuándo fue sustraído el video en el que Vladimiro Montesinos apareció sobornando a Alberto Kouri. Y, por lo menos, dos versiones han circulado sobre cómo se sustrajo del Servicio de Inteligencia Nacional[233].

Un primer relato apuntó a que fueron mandos medios militares quienes sustrajeron la cinta, preocupados e indignados por el nivel de corrupción que se había extendido por los institutos armados.

La segunda versión correspondió a Matilde Pinchi Pinchi. Ella señaló que sustrajo el video en su cartera, sin que fuera advertida por el personal de seguridad del SIN, dado que era la mujer de confianza del asesor presidencial. La exama de llaves del Servicio de Inteligencia Nacional sostuvo que robó el video debido a que la magnitud de la corrupción era enorme y debía conocerse.

¿Cómo llegó el video al Frente Independiente Moralizador? La versión más sólida sostiene que la cinta fue proporcionada por Germán Barrera, un amigo del chofer de Pinchi. Barrera contactó al congresista Luis Iberico y le indicó que tenía un material explosivo. Días más tarde, a inicios de septiembre, el intermediario le mostró al parlamentario el contenido y pidió 100 000 dólares para entregárselo, monto que le serviría para ponerse a buen recaudo.

Al día siguiente, Iberico acudió donde el líder de su partido, Fernando Olivera, para contarle la conversación con el tenedor del video. Ambos acordaron conseguir el dinero y buscaron en diversas fuentes. Olivera se puso en contacto con el empresario Francisco Palacios Moreyra, tío de la periodista Rosa María Palacios. Él se ofreció a pagar la suma ofrecida, que entregó en un departamento desocupado al costado de la vivienda de Olivera, en San Isidro. Fueron testigos Iberico y Gonzalo Carriquiry, otro miembro del FIM. La periodista también conocía la transacción, pero guardó silencio sobre la misma.

Se sacaron cuatro copias del video, por medidas de seguridad. Ante las amenazas, los miembros del Frente Independiente Moralizador convocaron una conferencia de prensa el jueves 14 de

septiembre de 2000. Para despistar, indicaron que se trataba de la posibilidad de retirarse de la Mesa de Diálogo de la OEA.

Antes del mediodía de aquella fecha, Fernando Olivera, Luis Iberico y una persona más arribaron a Canal N. Se entrevistaron con Benjamín Sevilla, productor de Canal N, y le dijeron que tenían un material que iba a ser de interés para Gilberto Hume, el director general de la estación de televisión por cable. Sevilla se mostró interesado y les preguntó de qué se trataba:

—Tenemos un video de Montesinos. Pero tenemos un problema, no se escucha muy bien.

—¿Qué es lo que vas a hacer?

—Lo vamos a presentar en una conferencia de prensa. Pero te pedimos que nos ayudes con el tema del audio. Y si nos pasa algo, queremos que ustedes tengan una copia.

Sevilla llamó al ingeniero Marco Maezato para limpiar el audio. Sin que nadie del canal se enterase, el responsable de sonido hizo una copia del video, mejorando la calidad del audio. Los demás estuvieron satisfechos con el resultado y se retiraron.

A la una de la tarde, Hume regresó de una reunión sin teléfonos celulares. Sevilla le contó lo ocurrido. Hume le dijo: «Has hecho lo que se tenía que hacer» y le ordenó avisar a El Comercio. Enterados de todo, desde Madrid, Bernardo Roca Rey y Alejandro Miró Quesada —directores generales de Canal N y el diario decano de la prensa nacional— comenzaron a hacer las coordinaciones para la cobertura de ese día. En la redacción del periódico, la clave era que «tenían al hombre de shopping». En la televisora, Jaime de Althaus le dijo al joven presentador Raúl Tola:

—Han traído una bomba que se va a tirar abajo al gobierno.

Para las seis de la tarde, la noticia más importante del día era la suspensión de todas las competencias deportivas de Universitario de Deportes por parte de la FIFA, debido al presunto involucramiento de su entonces presidente, Alfredo González, en el intento de soborno a un jugador. A esa hora comenzó la conferencia en el Hotel Bolívar. En primera fila estaban Olivera, Iberico y Susana Higuchi. Luego de cantar el Himno Nacional, Iberico dijo, blandiendo una cinta de VHS:

—Lo que vamos a ver aquí en esta cinta que vamos a propalar íntegramente muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana, un congresista de la República recibiendo dinero que le pertenece a todos los peruanos, a cambio de traicionar la voluntad del pueblo. Y como él lo han hecho otros tantos.

Luego de la intervención del parlamentario, Olivera señaló:

—Señores periodistas, este video que ustedes van a ver es solo una muestra. Pero por sí solo es suficiente y contundente para el pedido de captura de Vladimiro Montesinos y para el pedido de renuncia inmediata de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República.

En simultáneo, Canal N lanzó el video íntegramente, sin editar. La bomba había estallado.

Vladimiro Montesinos sabía para la mañana del 14 de septiembre de 2000 que se venía un golpe contra él. Durante el transcurso del día, se enteró de que era uno de sus videos, pero no tenía claro cuál.

Para complicar más las cosas, durante el almuerzo tuvo una reunión desagradable con Gustavo Jaramillo, jefe del Servicio de Inteligencia de Colombia. La conversación ya venía cargada por todas las aristas del Plan Siberia y el escándalo posterior. Pero se complicó más cuando Jaramillo se percató de que estaba siendo grabado. Incluso le señaló a Humberto Rozas dónde estaba la cámara.

Por la tarde, Montesinos se reunió con su personal de confianza para preparar un plan de contingencia. También llamó a Rafael Merino, Daniel Borobio y Vicente Silva Checa. Cuando las imágenes más impactantes salieron, el asesor dijo:

—Nos jodimos, carajo.

Montesinos se quedó con Merino, Borobio y Silva Checa pensando en los posibles escenarios. Todos estaban callados y estupefactos. Borobio rompió el hielo y comenzó a delinear un plan de respuesta: el allanamiento de Montesinos a una posible investigación judicial, la minimización de daños ante los medios de comunicación y esperar que todo se olvide para que, finalmente, el caso se archive.

Luego de esta cita, el asesor se reunió con los dueños de los medios de comunicación. La orden fue clara:

—Ustedes minimizan esto, no lo sacan, porque si yo me jodo, todos ustedes se joden.

Posteriormente, Montesinos entró a una reunión con los congresistas oficialistas. Había división de opiniones entre ellos. Los parlamentarios de Cambio 90–Nueva Mayoría tenían claro que era el final y que el asesor debía renunciar, mientras que la gente de Absalón Vásquez pensaba que podía encarar la crisis.

Culminada la sesión, Montesinos mandó llamar a Roberto Huamán. Había que comenzar la destrucción de cualquier material incriminador.

A las 11.00 a. m. del 14 de septiembre de 2000, Bustamante recibió una llamada. Era el edecán del presidente. Le indicó que Fujimori había convocado a dos reuniones para ese día. La segunda de ellas era el Consejo de Ministros, programado para las 3.00 p. m., con un par de puntos en agenda bastante insignificantes.

Cuando Bustamante llegó, ya estaba la mayoría de sus colegas. Ninguno sabía el motivo real de la convocatoria. La primera reunión, correspondiente a la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros, no se inició y los ministros, pasado un tiempo prudente, solicitaron que se les sirviera el almuerzo.

Hacia las 3.30 p. m., Bernardo Furman, asesor de prensa de Bustamante, lo llamó al celular. Allí le indicó que se venía una conferencia del Frente Independiente Moralizador y que se presentaría «un video que me han dicho que es terrible». Mientras eso ocurría, Fujimori recibía a un funcionario de Argelia. Bustamante prendió el televisor hacia las 5.30 p. m. en Canal N. Previamente, le había contado a un grupo de ministros lo que iba a ocurrir. Cuando se pasó la escena del soborno, Carlos Bergamino dijo:

—Esta vez sí se jodió el Doctor.

Federico Salas estaba en una sala contigua, para poder ver el video y a la vez fumar, cuestión que Luisa María Cuculiza no permitía en su presencia. Varios ministros lo acompañaron. El rostro de Salas era de gravedad.

En el despacho presidencial, Fujimori llamó a Montesinos y sostuvieron una conversación bastante acalorada. Por primera vez, dejaron de tratarse de usted. Ese día, la relación de diez años se terminó de romper, entre amenazas mutuas.

A las 7.30 p. m., Salas fue llamado a la oficina de Fujimori. El presidente le preguntó qué opinaba. Lacónicamente, el presidente del Consejo de Ministros dijo:

—Es un desastre.

Luego de varios minutos en silencio, Salas le dijo que era necesario arrestar a Montesinos. Fujimori le pidió unos minutos a solas. El presidente del Consejo de Ministros reingresó al despacho con Keiko. La primera dama insistió en la salida del asesor.

A las 10.30 p. m., convocaron a los ministros a la oficina de Fujimori. Antes, Bustamante recibió una llamada de Montesinos para que buscara neutralizar a Salas, porque lo ocurrido no configuraba ningún delito. El ministro de Justicia inventó una excusa y cortó la comunicación. En el despacho, las sillas estaban en media luna. Allí los esperaba Fujimori, Keiko, José Kamiya —secretario general de Presidencia— y Carlos Orellana —asesor de prensa del presidente.

Luego de un intermedio para relajarse, Fujimori les pidió sus opiniones. Boloña fue el más ardoroso defensor de Montesinos, pues creía que un gobierno no podía caer por un soborno de 15 000 dólares. Fujimori habló por primera vez de renunciar, lo que fue rechazado por buena parte del gabinete. Orellana propuso una tercera vía, sin especificar claramente a qué se refería.

Montesinos llamó para saber de qué se trataba eso de «la tercera vía» y Salas le respondió el teléfono, asustado. Allí le transmitió el sentir del gabinete: debía renunciar. El jefe real del SIN le dijo:

—Ya verás cómo el asunto se arreglará en los próximos días.

Luego de una nueva insistencia, el asesor perdió los papeles:

—Yo tengo tres mil hombres armados hasta los dientes que puedo movilizar. Si me da la gana, puedo dar un golpe de Estado. Ningún presidente ni ningún presidentillo de Consejo de Ministros me va a decir lo que tengo que hacer.

Montesinos colgó el teléfono. Salas quiso ir al SIN, pero el presidente lo detuvo: «Hoy no, está muy ofuscado». Fujimori dejó que los ministros hablaran, a la par que ellos lo notaban entre nervioso y deprimido.

A las afueras de Palacio de Gobierno, un grupo de manifestantes gritaban desde que salió el video que la dictadura había caído.

Mientras el FIM daba su conferencia de prensa, se realizaba una sesión del Congreso de la República. Víctor Joy Way estaba exponiendo sobre un tema tributario, cuando los parlamentarios de oposición pidieron la palabra. Martha Hildebrandt lo negó sistemáticamente

Una vez que todo estalló, los parlamentarios iban de uno en uno a ver lo que ocurría. En su escaño, Luis Alberto Kouri recibió una llamada y salió subrepticiamente de su escaño. Quiso huir por la puerta trasera del Congreso, pero allí lo esperaban los periodistas. Ensayó una respuesta: «Varias veces me he reunido con el señor Montesinos». Y dijo que la acusación sobre recepción de dinero le parecía excesiva.

En el hemiciclo, la oposición pedía la destitución de Montesinos a viva voz, así como interrumpir la exposición de Joy Way. Lo hicieron también por la vía reglamentaria. Al final, la presidenta del Congreso dijo:

—No habiendo el clima adecuado en la Sala, se levanta la sesión.

Mientras los parlamentarios oficialistas se iban con cara de circunstancia, la oposición cantó el Himno Nacional.

Por la noche, Beto Kouri fue a una entrevista en América Noticias. Allí ensayó una nueva defensa: acusó a Olivera de estar bajo los efectos de las drogas y dijo que el dinero entregado por Montesinos serviría para comprar un camión para repartir pescado a los ciudadanos más pobres. En la mayoría de los hogares, la gente se debatía entre la carcajada y la indignación al escuchar al congresista. Para mayor vergüenza, Kouri tenía un audífono dictándole las respuestas. Cabe recordar que la entrevista se hizo en el canal cuyo vicepresidente había sido una de las personas que llevó al congresista al SIN.

Camino a su casa, cuando pasaba por el parque Kennedy con su vehículo, Kouri recibió cientos de mentadas de madre.

La reacción de Martha Chávez fue un clásico instantáneo: «Se debe someter el video a una pericia para verificar su autenticidad. No aseguro que el video sea trucado, pero hay que considerar todos los adelantos que se hacen en las filmaciones, donde aparecen actores dándoles la mano a presidentes muertos». La alusión era a Forrest Gump, la cinta donde Tom Hanks interpretó a una persona con discapacidad mental presente en varios de los momentos significativos de la historia contemporánea estadounidense. Con efectos de edición, el personaje de Hanks apareció junto a varios presidentes ya fallecidos.

Al día siguiente, 15 de septiembre, Olivera y otros parlamentarios se presentaron en la performance habitual de «Lava la bandera», que se hacía todos los viernes en la Plaza de Armas. Desde el oficialismo, solo se pronunció el congresista Luis Delgado Aparicio: «El doctor Montesinos se pone a derecho. Y explicará lo que ha pasado el día de ayer». Salas añadió por la noche: «Estoy seguro de que el ingeniero Fujimori, en las próximas horas, hará declaraciones».

El mandatario no apareció por segundo día consecutivo.

En su sección «Sin Confirmar», donde colocaba chismes y datos sueltos, la sección Política de El Comercio del sábado 16 de noviembre indicó que tenía la versión que esa noche Fujimori dirigiría un mensaje a la nación sobre lo ocurrido.

Mientras se preparaba para el matrimonio de su hija, a realizarse en la iglesia San Francisco, en el centro de Lima, Bustamante recibió una llamada del edecán del presidente. Lo convocaban para una reunión en Palacio a las ocho de la noche. El ministro de Justicia le recordó sobre su compromiso familiar. Fujimori tomó el teléfono para disculparse y lo exoneró de asistir.

Varios ministros acudieron al llamado del presidente. Lo mismo algunos de sus congresistas, los más leales. A las 9.15 p. m., Fujimori entró con Keiko a la sala del Consejo de Ministros. Luego de saludarlos, les dijo:

—He grabado un mensaje a la nación y se los voy a mostrar. Debo asumir la responsabilidad política de lo ocurrido. Voy a recortar mi mandato presidencial al 28 de julio del siguiente año.

Inmediatamente, las congresistas más leales y algunos ministros discreparon de la medida. Fujimori encendió el televisor y pidió silencio. Nadie supo que, en realidad, el mensaje se estaba pasando en cadena nacional.

—Esta semana, a través de un video se ha hecho una grave denuncia, ante la cual mi posición, clara y tajante, no es otra que la de respaldar una severa investigación para determinar responsabilidades ante la ley. Ello, no obstante, quiero señalar que este es, por, sobre todo, un hecho político que, obviamente, ha tenido un fuerte impacto en la estabilidad de mi gobierno y del país. Mi candidatura a la Presidencia de la República tenía el legítimo propósito de representar a un importante sector de la ciudadanía, con pleno derecho a coincidir con nuestra propuesta de gobierno, así como otros peruanos tienen el derecho a disentir de ella. El clima de tensión se prolongó más allá de los comicios, incluso con acciones de extrema violencia que, sin embargo, no pudieron impedir que el 28 de julio se instalara el nuevo gobierno.

Mientras Fujimori aludía en el video a que no lo dejarían gobernar, las congresistas más cercanas a él comenzaron a llorar.

—Es mi obligación moral como presidente de la República tomar una decisión ante esta situación que, además de frenar el proceso de recuperación económica, atenta contra las legítimas expectativas de progreso de los peruanos. A pesar de haber sido elegido por una mayoría ciudadana, no quiero constituirme en factor de perturbación y, menos, en obstáculo para fortalecer el sistema democrático. Por ello, tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional, y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones

congresales. El pueblo, estoy seguro, sabrá, con prudencia, escoger el mejor destino.

Boloña musitó: «Se ha hecho el harakiri».

Culminada la transmisión, varios de los presentes protestaron. Fujimori les indicó que ya el mensaje había salido al aire y, mirando a los ministros militares y los comandantes generales, quienes no habían expresado palabra, añadió: «Tengo que asumir que el silencio de las Fuerzas Armadas es una señal de su aceptación».

En varias partes del país, comenzaron contenidas celebraciones. En Lima, los lugares de reunión fueron la Plaza de Armas y el parque Kennedy de Miraflores, lugar de concentración habitual de las celebraciones futbolísticas. Lo mismo ocurrió en varios lugares del país, pero con la sensación de que aún nada estaba definido. Varios canales hicieron una transmisión ininterrumpida con entrevistas a miembros de distintas tiendas políticas.

El fin había empezado, pero muchos dudaban de que Fujimori quisiera realmente juzgar a Montesinos.

Para el domingo 17 de septiembre, la actitud de Fujimori se mostraba vacilante. Ese día, convocó a una reunión de la bancada oficialista para discutir la crisis política. Para sorpresa de todos, había cámaras grabando la sesión. Otra novedad, aún más ingrata: Alberto Kouri estaba entre los presentes.

Fujimori estuvo en la mesa central acompañado por Keiko, Martha Hildebrandt y Marianella Monsalve, segunda vicepresidenta del Congreso. El mandatario hizo algunas bromas para relajar la atmósfera, de por sí tensa.

A pesar de la oposición del día anterior, Fujimori logró que los parlamentarios oficialistas aprobaran la medida. Sin embargo, fue más controvertido cuando dijo sobre el parlamentario sobornado:

—Sé que es difícil de entender, pero el señor Kouri ha cumplido un deber patriótico y debemos respaldarlo.

Allí se acabó el consenso. Cecilia Martínez del Solar, la viuda de Rodrigo Franco, novel en la bancada, pidió la palabra para decir:

—Señor presidente, lo siento, pero no puedo aceptar lo que me pide —y señalando a Kouri añadió—: deberíamos expulsar a este señor.

Dado que sus demás compañeros de bancada se mostraron aquiescentes con Fujimori, Martínez del Solar renunció a Perú 2000. Hizo pública la decisión dos días más tarde.

La incoherencia de Fujimori continuó unos días más. El martes 19 encabezó una conferencia de prensa junto a Bustamante y Salas. Fujimori dijo que Montesinos había cometido «algunos errores». Bustamante fue más allá y señaló que «aunque supieran dónde estaba Montesinos, no lo entregarían».

Terminada la conferencia, Fujimori y Keiko se subieron, populistamente, a una reja de Palacio de Gobierno. Había un pequeño grupo favorable al gobierno en la Plaza de Armas. Cuando padre e hija saludaron a la gente, ambos estaban con las manos sucias.

En paralelo, el gobierno comenzó a negociar con Montesinos. El viernes 15 de septiembre, Fujimori envió a Salas, De Trazegnies y Mosqueira al SIN. El asesor aceptó la reunión. Cuando los ministros arribaron, vieron a un buen grupo de oficiales y suboficiales con traje comando. Llegaron a la oficina y allí ya estaba instalado Boloña. El ministro de Economía insistió en su argumento de la noche anterior, lo que envalentonó a Montesinos: «Deben saber que, si es necesario, puedo incendiar la pradera».

Para el martes 19, el asesor se mostró más receptivo. Salas había comenzado a coordinar con De Trazegnies, Bustamante y el embajador de Estados Unidos, John Hamilton, la posibilidad de enviar a Montesinos al extranjero, en calidad de asilado. El jefe real del SIN aceptó la oferta. Ese mismo día, se expidió el Decreto de Urgencia 081–2000, que otorgó una ampliación presupuestal al Ministerio de Defensa por cerca de setenta millones de soles.

Al día siguiente, Salas y otros ministros fueron a hablar nuevamente con Montesinos en Chorrillos. El aún asesor le dijo a De Trazegnies que tenía dos opciones principales para su nuevo domicilio: Brasil y Ecuador. Ante la insinuación de un destino lejano en Asia —una idea de Fujimori—, Montesinos respondió que era mejor quedarse en América Latina. Ninguno de los dos países mencionados quiso considerar el asilo.

Horas más tarde, se abrió la opción de Panamá, donde otros personajes polémicos de la vida política latinoamericana terminaron alojados. Montesinos aceptó, con la condición de irse con su séquito de seguridad y, además, de que se emitiera una resolución que le brindase las gracias por los servicios prestados a la nación. Fujimori aceptó ambas condiciones.

Entre tanto, la presidenta panameña Mireya Moscoso se mostraba dubitativa sobre acoger a Montesinos. Quería limpiar la imagen de su país, maltrecha por haber recibido en el pasado a personajes francamente impresentables. Tuvo que mediar tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, así como una serie de llamadas de distintos presidentes latinoamericanos. Finalmente, Moscoso aceptó, pero señalando que el asesor debía llegar con un número reducido de acompañantes y le otorgó una visa por tres meses.

En paralelo, el gobierno y el asesor pujaron por la entrega de una recompensa económica, lo que en jerga laboral peruana se conoce como Compensación Por Tiempo de Servicios. La suma acordada fue de 15 millones de dólares. Así, el Ministerio de Defensa, a cuenta del Decreto de Urgencia 081–2000, retiró la suma de 52 millones y medio de soles. Fue el general Luis Muente Swartz quien entregó el dinero a Montesinos en el SIN, el viernes 22 de septiembre. A su vez, el asesor se lo dio al traficante de armas James Stone para que lo depositara en una cuenta en el exterior.

Definidos estos temas, el gobierno presionó a Montesinos para que saliera cuanto antes del país. Allí intervino Carlos Boloña. A través de David Saettone, miembro del gabinete de asesores del MEF, contactó a Dionisio Romero Seminario, jefe del Grupo Romero, para que pudiera facilitarle un avión que permitiese la huida del asesor. El millonario aceptó el pedido y puso a disposición una nave de ATSA, su empresa de vuelos chárter. Antes de partir, su esposa y sus hijas fueron a despedirse de Montesinos en el SIN. Fujimori mandó un edecán para cerciorarse de que su ahora exsocio abordara el avión. En el jet, lo esperaba Jacqueline Beltrán.

A las 11.30 p. m. del sábado 23 de septiembre, Montesinos huía del país y todos lo podíamos ver a través de Canal N[234].

Luego de la aparición del video Kouri–Montesinos y el mensaje presidencial del 16 de septiembre de 2000, la Mesa de Diálogo alcanzó mayor dinamismo. Sin embargo, tuvo que superar antes un obstáculo interno.

Tanto Alberto Bustamante como Diego García–Sayán coincidieron en señalar que Fernando Olivera se había vuelto un problema, pues tendía a brindar declaraciones a la prensa sobre lo tratado en las reuniones, sea ante un micrófono o como fuente de diversos periodistas. Por ello, decidieron abrir una instancia informal de diálogo para poder generar consensos rápidos a partir de lo que cada grupo concluyera. En casa de García–Sayán esperaban Jorge del Castillo y Aurelio Loret de Mola —quienes habían tratado previamente los temas con los representantes de la oposición en casa de Henry Pease— a Bustamante y los otros representantes del gobierno: Fernando de Trazegnies y Edgardo Mosqueira.

Así, se llegaron a acuerdos sobre varias materias importantes: la devolución de la nacionalidad a Baruch Ivcher, el final de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la ley de desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. También se logró consensuar el nombre de Marcial Rubio Correa, docente de la Facultad de Derecho de la PUCP, para integrar la comisión encargada de desactivar el SIN. Asimismo, se logró aprobar el recorte de la legislatura para hacer reformas constitucionales, con miras a viabilizar el anuncio de recorte de mandato de Fujimori y del Congreso.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de otras turbulencias. Cuando se produjo la huida de Montesinos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se apartó unos días de la Mesa de Diálogo, en protesta por el rol jugado por Gaviria para que el asesor no rindiera cuentas a la justicia. Posteriormente, se reintegró, al considerar que no podía perderse el espacio de diálogo.

Por su parte, el gobierno comenzaba a perder congresistas. Entre el 14 y el 27 de septiembre, se marcharon de Perú 2000, además de Cecilia Martínez del Solar, Eduardo Farah, Joaquín Ormeño, Jorge Pollack, Moisés Wolfenson, Gregorio Ticona, Fernán Altuve y Mario

Gonzales Inga. De ellos, al menos cuatro eran tránsfugas que apenas estuvieron dos meses en la bancada.

A inicios de octubre, la oposición planteó una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso encabezada por Martha Hildebrandt, basada en la necesidad de tener una representación multipartidaria en un cuerpo que estaba sufriendo cambios a ritmo acelerado y que requería la aprobación de las reformas planteadas. Esta moción se votó el 12 de octubre y fue rechazada. Quien logró salvarle la cabeza a Hildebrandt fue Absalón Vásquez, quien no solo movió a sus propios parlamentarios para continuar en el bloque fujimorista, sino a varios de los que se fueron. Sería la última vez que Vamos Vecino coordinó iniciativas dentro del oficialismo.

Envalentonada, Hildebrandt anunció una prórroga de la primera legislatura corta, lo que fue visto por muchos como otra medida de obstaculización desde el gobierno. Este fue uno de los factores que llevó a que la oposición se retirara nuevamente de la Mesa de Diálogo.

En la calle, se mantenían las movilizaciones. Para el 17 de octubre, Toledo convocó a otro mitin en la Plaza San Martín, donde asistió toda la oposición, con excepción de Olivera. Mientras que todos los viernes continuaban los lavados de la bandera en distintas plazas de la ciudad. Otra medida de protesta se planteó por esos días. El colectivo Sociedad Civil creó unas bolsas negras con los rostros de Fujimori y Montesinos vestidos como presidiarios con el logo «Pon la basura en la basura». Y paulatinamente se fueron haciendo performances dejando esas bolsas en varios lugares públicos ligados al régimen y, conforme la situación se fue deteriorando más, en casas de algunos políticos fujimoristas.

Al mismo tiempo, existían diferencias de opinión sobre quién debía conducir la transición. En un tono contemporizador, Lourdes Flores Nano esgrimió que Fujimori debía quedarse como presidente hasta el 28 de julio de 2001, para mantener cierta estabilidad. Toledo y Andrade tenían una opinión distinta. Ambos consideraban que una garantía para nuevas elecciones era que Fujimori no controle el aparato de poder. El problema estaba en la sucesión constitucional: dos vicepresidentes y un presidente del Congreso

afines al régimen impedían un relevo pronto. Por lo menos, por el momento.

Montesinos llegó a Panamá el domingo 23 de septiembre. Tenía varias ventajas en ese país: empresas de fachada que manejaban parte de sus finanzas constituidas en ese país bajo la forma de off shore, acceso a varias de sus cuentas bancarias, así como contactos políticos que había cultivado en los años anteriores. A estas ventajas se sumaba un embajador peruano afín, el exministro Alfredo Ross Antezana, así como la amistad de un militar retirado y empresario llamado Amadís Jiménez.

Una vez en Panamá, Montesinos tuvo una vida acomodada. Pudo pasear a sus anchas, estuvo hospedado en departamentos de lujo e incluso comenzó a sondear negocios conjuntos con Jiménez. Además, consiguió rápidamente un staff de abogados para que lo apoyaran en conseguir su asilo político en dicho país. Un grupo de activistas de derechos humanos, encabezado por Miguel Antonio Bernal, era su principal dolor de cabeza dentro de su estadía relajada.

Pero el gobierno panameño tenía claro que no quería a Montesinos durante mucho tiempo en su suelo. Las encuestas de opinión pública mostraron un fuerte rechazo a la permanencia del exasesor presidencial peruano. Y ya se había pagado un precio alto con el asilo a Raoul Cédras, el dictador haitiano instalado desde 1994. A la par, presiones de organismos de derechos humanos y del propio Parlamento Europeo eran bastante duras.

Montesinos seguía comunicado con Perú a través de su teléfono satelital, tanto con Fujimori y Carlos Boloña, como con altos mandos militares. No brindó entrevistas a ningún medio, pero sí dejó que el diario Panamerica publicara una foto suya leyendo. Durante años se pensó que, junto al texto, tenía un video, como mensaje a sus antiguos amigos.

El comunicado más duro en contra de la presencia de Montesinos en el istmo fue el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitido el 20 de octubre de 2000. Allí «recomienda a los Estados miembros de la OEA que se abstengan de otorgar asilo a presuntos autores materiales o intelectuales de crímenes

internacionales». Sin mencionarlo, señalaba claramente que Panamá tenía responsabilidades claras en materia de protección de derechos fundamentales. Bernal había interpuesto demandas para procesar a Montesinos en su país, argumentando la jurisdicción universal sobre derechos humanos. Era claro que Panamá iba a tener serios problemas si otorgaba el asilo.

Consciente de esta situación, Montesinos preparó su retorno al Perú.

Por una extraña casualidad, hacia la quincena de octubre, Enrique Zileri Gibson, el legendario director de Caretas, almorzaba en el mismo restaurante donde se encontraba Santiago Fujimori. Luego de reconocerse, el periodista le preguntó si podía tener una breve charla con él, con miras a que se publique en el semanario. El hermano del presidente aceptó.

Santiago no quiso enfatizar mucho en las circunstancias en las que salió del círculo de confianza de Alberto en 1996, aunque sí señaló que «hubo una conjura proveniente de algunos grupos de poder». Aunque negó conocer el peso que tenía Montesinos en las decisiones presidenciales, se mostró crédulo frente a las versiones de su sobrina Keiko sobre la influencia del asesor presidencial en el gobierno.

Lo central del diálogo entre ambos fue lo siguiente:

—¿Cómo reaccionó ante el video?

—Sentí vergüenza. Después me dio indignación.

—¿Ha regresado a Palacio, como se vocea? ¿Asesora a su hermano en estos momentos tan cruciales? ¿Cuál es su labor específica?

—No he regresado, pero siempre he apoyado a mi hermano en momentos difíciles, aunque muchas de mis sugerencias no hayan sido aplicadas en su oportunidad, aun cuando los hechos posteriores me dieran la razón. Tras la crisis desatada por la exhibición del video, el presidente me llamó, conversamos muchas veces, pero creo que poco es lo que puedo hacer. En realidad, fue un paso muy fugaz y creo que sin retorno.

—¿Qué pensó cuando Vladimiro Montesinos se fue del país? ¿Lo alegró porque dejaba el entorno de su hermano?

—Pensé que el país entero se había librado de un peso.

Luego de solicitar un gabinete de unidad nacional y eludir la pregunta sobre su futuro luego del final del gobierno de su hermano, Santiago se despidió. Así concluyó la única entrevista que brindó en ese decenio.

El 21 de octubre de 2000, Montesinos empezó sus preparativos para salir de Panamá. Ross Antezana consiguió un avión perteneciente a Marc Harris, un ciudadano estadounidense que alquilaba su aeronave. En la noche de ese día, el exsocio de Fujimori recibió una llamada clave: Panamá no iba a aceptar la solicitud de asilo. Debía acelerar la huida.

Al día siguiente, Amadís Jiménez le organizó un almuerzo de despedida, pero la atmósfera no fue distendida. El exasesor presidencial dialogaba frecuentemente por su celular. Posteriormente, le aseguró a su anfitrión que Fujimori lo recibiría en Perú. Jiménez lo acompañaría en el retorno al país.

En la tarde del domingo 22 de octubre de 2000, Montesinos emprendió la vuelta. Gracias a sus fuentes en Panamá, Gustavo Gorriti pudo anunciar la noticia en medios peruanos. Con la partida de Montesinos, Mireya Moscoso pudo cerrar el caso y su gobierno decidió no otorgarle ningún tipo de visa al asesor.

El vuelo del exasesor hizo una breve escala para recargar combustible en Ecuador. En esa escala, Fujimori se comunicó con Montesinos:

—No es momento oportuno para que regreses al Perú.

El presidente estaba junto al embajador de Estados Unidos en ese momento, en Palacio de Gobierno.

A pesar de la advertencia de Fujimori, Montesinos decidió ir hacia Lima. Sin embargo, desde los aeropuertos de Guayaquil y Lima advirtieron a la nave que transportaba al exasesor que no se acercase al espacio aéreo peruano. Cuando estaban por llegar a Lima, la comunicación era aún más contundente: «abandonen el espacio aéreo o disparamos». El exasesor se comunicó:

—Coordinen con el «supremo» en Palacio.

Minutos después, llegó la respuesta: podían aterrizar. Montesinos decidió que el vuelo culminara en Pisco, a 200 kilómetros al sur de

Lima. Eran las primeras horas del lunes 23 de octubre de 2000.

La llegada de Montesinos coincidió en el tiempo con un incidente que era el principal desencadenante de la interrupción de la participación de la oposición en la Mesa de Diálogo.

A mediados de octubre, el gobierno llegó con una propuesta sorpresiva: mantener la Ley de Amnistía por violaciones a los derechos humanos para personal militar y policial, así como ampliarla a casos de narcotráfico y delitos de corrupción. Aunque la propuesta fue colocada sobre la mesa por Bustamante, su proponente real era Alberto Fujimori.

Para la oposición, esto era inaceptable, tanto por razones de forma, como de fondo. Latorre había evitado que se presentaran mociones al margen de los acuerdos señalados, pero, en esta ocasión, si lo permitió. Y las amnistías resultaban inaceptables para los miembros de la oposición, no solo porque cubrían a Montesinos, sino porque algunos de ellos ya conocían que, en pocos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1995, como en efecto ocurrió.

El arribo sorpresivo de Montesinos también motivó que César Gaviria decidiera salvar la Mesa de Diálogo. Voló a Lima el martes 24 de octubre para hablar con Fujimori. Aún se mantenía en sus trece con el proyecto de amnistía.

Al final, fueron las propias contradicciones internas del gobierno las que decidieron la suerte de la terrible iniciativa legal. Para el miércoles 25, Bustamante, Mosqueira y Augusto Bedoya lograron convencer a Fujimori de que la norma no era conveniente. Para reforzar el pedido, Walter Chacón, ministro del Interior, y Carlos Bergamino, ministro de Defensa, le dijeron al mandatario que no había un clamor en los institutos armados por una norma de este tipo. Luz Salgado transmitió el mensaje al arzobispo de Chimbote, Luis Bambarén: el gobierno retiraría el proyecto.

En paralelo, Gaviria conversaba con la oposición. Sus integrantes aseguraron su presencia en la Mesa de Diálogo, con la condición de que la OEA no permitiría ningún condicionamiento del gobierno. El expresidente colombiano asintió.

Así, en la sesión del 25 de octubre, Bustamante formalizó el retiro del proyecto de Ley de Amnistía. Pero además se dieron avances en varios procesos: convocatoria de las elecciones generales para el 9 de abril, confirmación de la segunda votación para recorte de mandato el 2 de noviembre, así como el compromiso para solucionar lo antes posible el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional.

La Mesa de Diálogo se había desentrampado[235].

El primer efecto de la llegada de Montesinos fue la renuncia de Francisco Tudela a la primera vicepresidencia de la República. Tanto el proyecto de Ley de Amnistía como el retorno al país del exasesor presidencial motivaron su dimisión. Algunos comenzaron a ver en él la posibilidad de un «fujimorismo sin Fujimori». El mandatario respondió en público a su retiro: «Yo lamento que se haya producido cuando la situación y las papas queman». Esas palabras serían recordadas algunas semanas después.

Mientras esto ocurría, Montesinos y Amadís Jiménez eran recibidos por Elesván Bello, comandante general de la Fuerza Aérea. Salieron en un auto viejo de la Base Aérea de Pisco rumbo al puesto de comando de Cabeza de Toro. Desde allí, Montesinos tuvo el apoyo de fuerzas leales para poder ir en helicóptero al SIN. Después, el asesor enrumbó a una vivienda en Surco que pertenecía a Juan Valencia Rosas, uno de sus testaferros.

A la 1.40 p. m., RPP difundió una entrevista hecha por el periodista Jesús Miguel Calderón a Montesinos. El diálogo tuvo muchas críticas, pues el periodista no hizo muchas repreguntas o interrogantes incómodas al asesor presidencial, lo que Calderón atribuyó a la propia emoción del momento.

Montesinos manifestó en RPP que huyó del país porque su presencia podía ser motivo de conflicto para el proceso de desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y que había pedido asilo porque había luchado contra el terrorismo y el narcotráfico. Este último argumento también lo esgrimió como causa central de su retorno al Perú. El asesor negó tener algún vínculo con los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta e indicó que se dedicaría a su profesión de abogado, sin ningún vínculo político[236].

El asesor envió a su amigo panameño a una habitación en el Hotel Las Américas, acompañado por Roberto Huamán. Sin embargo, el experto electrónico del SIN fue capturado en un supermercado pocas horas más tarde. Lo había retenido personal policial a instancias de Fujimori. Lo mismo había ocurrido con varios de los oficiales que servían como secretarios de Montesinos. Jiménez pudo salir del país 48 horas después.

Fujimori dio un mensaje a la nación la noche del 23 de octubre que aumentó más el nerviosismo. Desde allí, los ministros se turnarían en acompañarlo, para evitar cualquier decisión bizarra.

El comportamiento de Fujimori se volvió más extraño durante esa semana. El mandatario comenzó a encabezar, en persona, una serie de operativos de búsqueda de Montesinos en diversas partes de la ciudad, sobre todo, en Chaclacayo, un distrito ubicado a 25 kilómetros del centro de la capital, donde había varias casas de campo. A la par, seguía buscando a los lugartenientes de Montesinos, como Oscar López Meneses, quien había sido destacado a trabajar en la Comandancia General del Ejército, a pesar de la oposición de José Villanueva Ruesta.

Para los más suspicaces, antes que a su exsocio, Fujimori estaba tratando de ubicar los videos que lo comprometían directamente en actos criminales. La búsqueda fue infructuosa y, además, no existía orden de detención en contra de Montesinos. Fue un momento especialmente patético.

Según le confesaría días más tarde a Alberto Bustamante y José Ugaz, Fujimori se concentró en Chaclacayo, basado en lo que le dijo una persona que se dedicaba a la astrología, a quien, según la versión del abogado penalista, el mandatario le consultaba varias de sus decisiones. Así se manejaba el Perú a fines de octubre de 2000.

Esa misma semana, Fujimori comenzó a destituir a altos mandos policiales y militares. Salieron el jefe de Migraciones y el director de Control Migratorio, ante la noticia de que Alberto Kouri había huido a los Estados Unidos. También sacó a Humberto Rozas, el jefe nominal del SIN.

Pero el paso mayor lo dio el sábado 28 de octubre. Ese día, por la tarde, anunció que los comandantes generales del Ejército (José

Villanueva Ruesta), la Marina (Américo Ibárcena) y la Fuerza Aérea (Elesván Bello) dejaban sus puestos y pasaban a situación de retiro. El reemplazo de Villanueva era Walter Chacón, quien hasta ese entonces era ministro del Interior. Ese puesto sería ocupado por Fernando Dianderas, quien había sido durante un tiempo el director general de la Policía Nacional. Minutos más tarde, Fujimori en persona relevó al jefe de la Segunda Región Militar, Luis Cubas Portal, cuñado de Montesinos.

Lo que pocos sabían era que el exasesor estaba huyendo esa misma noche. En la casa de Juan Valencia Rosas, se despidió nuevamente de su familia. Para la noche, estaba en el Yacht Club de La Punta, abordando un yate llamado Karisma, propiedad del empresario José Lizier. Según su versión, lo habían contratado inicialmente para un paseo turístico, pero, ya con Montesinos por abordar, quiso echarse para atrás. El empresario argumentó que fue presionado con sus deudas tributarias para proseguir la travesía. Otros señalan que fue más solícito cuando se le requirió la nave y se le invitó a hacer la travesía.

Junto con el exasesor, Lizier, el capitán del barco y un asistente, abordaron la nave una chica joven para que el viaje aparentara ser por motivos de turismo, Manuel Tullume —el encargado de manejar el teléfono satelital— y los dos militares a cargo de su seguridad, Javier Pérez Pezo y Alejandro Montes.

En la madrugada del domingo 29 de octubre, Vladimiro Montesinos volvió a huir del país.

Ollanta Humala Tasso entró al Ejército peruano en 1980, como parte del arma de Artillería. Egresó en la promoción «Héroes de Pucará y Marcavalle», que salió de la Escuela Militar de Chorrillos en 1984, en un puesto intermedio. Su hermano Antauro egresó al año siguiente, en un puesto bajo, dentro del arma de Infantería.

Los siete hermanos Humala Tasso fueron criados bajo un esquema estricto de lecturas impuesto por su padre, Isaac, un abogado que había tenido un pasado comunista y la idea fija de que alguno de sus vástagos gobernara el Perú. Para ello, impulsó a que los hijos varones ingresaran al Ejército. Lo logró con dos de ellos. Paulatinamente, el patriarca de los Humala había adquirido ideas

que emparentaban a Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la resistencia en la Guerra del Pacífico, con la reivindicación de la raza cobriza, lo que denominó como «etnocacerismo». De sus hijos militares, Antauro sería el más cercano a sus ideas.

Tanto Ollanta como Antauro, al igual que la mayor parte de militares de su generación, combatieron en el conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el MRTA. Durante varios años, se ha investigado a Ollanta por la presunta comisión de desapariciones forzadas en la base de Madre Mía en 1992. Antauro pasó al retiro en 1998 y volvió indirectamente al obtener un puesto en el Instituto Sanmartiniano, mientras que su hermano ascendió a comandante a fines de 1999.

Luego de dos planes frustrados evaluados por Isaac, los Humala planearon una asonada contra el gobierno en el año 2000. Ollanta era encargado de los reservistas del Ejército —personas que habían hecho el servicio militar voluntario— a escala nacional y estaba destacado en Tacna, la región fronteriza con Chile. Antauro vio en este grupo gran potencial para difuminar sus ideas. Isaac planteó un nuevo golpe de Estado a cargo de los dos hermanos antes de las elecciones presidenciales, pero también se frustró. Ningún general quería asumir el liderazgo requerido por otros oficiales.

El video Kouri-Montesinos impulsó nuevamente los planes. Esta vez, Nadine Heredia, la esposa de Ollanta, se integró en forma más activa, buscando —sin éxito— apoyo en las esposas de los oficiales, así como contactos en medios y con el Defensor del Pueblo, con quienes tuvo mayor fortuna.

Para el sábado 28 de octubre, Ollanta y Antauro, junto a un puñado de reservistas y suboficiales, se reunieron frente al Fuerte Arica, en el camino entre Tacna y Moquegua. Convencidos de que ningún oficial se plegaría y que el SIN iría tras sus pasos, decidieron ejecutar el plan original: tomar el campamento de la empresa minera Southern Perú en Toquepala, en la frontera entre ambas regiones y, desde allí, soltar una proclama pidiendo la renuncia inmediata de Fujimori. Allí tenían un contacto clave: Víctor Gómez Rodríguez, jefe de seguridad del yacimiento, quien había sido compañero de promoción de Ollanta en el Ejército.

El domingo 29 de octubre, en Toquepala, los Humala leyeron la proclama y se comunicaron con RPP. Así el país se enteraría de que un grupo de militares se había sublevado y solicitado la renuncia de Fujimori. Durante ese día, llegaron al Fuerte Arica al menos cuatro llamadas desde el teléfono satelital de Montesinos, quien ya estaba huyendo del país. El exasesor ha señalado que el levantamiento sirvió para que él pudiera escapar. Tanto Ollanta como Antauro han defendido la legitimidad y realismo de su rebelión. Ya en la tarde, junto a un pequeño grupo de rehenes, dejaron el campamento y se internaron en la sierra de Moquegua.

Para el 30 de octubre, Ollanta decidió separar a la gente en dos grupos y liberar a los cautivos. También dejó en libertad a los soldados. Sin embargo, varios grupos de reservistas comenzaron a levantarse en varias partes del país y viajaron hacia Moquegua. Allí la rebelión se bifurcó y, mientras Antauro continuaba con una asonada popular en varios pueblos del pequeño departamento sureño en nombre de su hermano, Ollanta se alojó en casa de una pariente en esa región. Solo sabían su paradero su hermano mayor Ulises, Nadine y Santistevan de Noriega.

El Ejército dejó de buscarlos. No solo porque los soldados que acompañaban a los Humala habían vuelto y, además, no hubo heridos. También porque el propio gobierno profundizaba aún más su crisis. Antauro seguía sus peripecias, mientras su hermano estaba en su propio refugio. El mito de la rebelión se alimentó en esas tres semanas de noviembre[237].

El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, es un feriado religioso en varias partes de América Latina. Perú no es la excepción. Aquel día, en el año 2000, el abogado José Ugaz estaba descansando cuando recibió una llamada del edecán de Alberto Bustamante. Lo citaba para una reunión en el término de la distancia. Ugaz se dirigió en la tarde de aquel día a una casa vecina a la del ministro de Justicia[238].

Luego de resolver una reciente desavenencia —Bustamante se disculpó con Ugaz por atribuirle falsamente la autoría de la amnistía para militares—, el ministro le planteó al abogado el motivo de la reunión. Fujimori le había encargado una estrategia legal para la

captura de Montesinos, para lo cual se requería un experto penal. En principio, se planteó que Ugaz fuera un asesor ad honorem del ministro en esta materia. Ambos acordaron que la estrategia se basaría en construir un buen caso alrededor del soborno a Alberto Kouri.

El abogado no era precisamente un personaje de las simpatías de Fujimori y Montesinos. Si bien había cooperado con contados procesos penales vinculados al Estado, las opiniones de Ugaz sobre el régimen eran públicamente críticas.

Posteriormente a su primera reunión con Bustamante, Ugaz tuvo dos citas. La primera con el director del Instituto de Defensa Legal, Ernesto de la Jara, a quien le planteó ayuda para denunciar al asesor. De la Jara declinó, porque consideraba que la fórmula planteada por el ministro de Justicia podría entrañar algún riesgo de trampa o manipulación. En la segunda, el fiscal Víctor Cubas Villanueva le hizo ver a Ugaz que él y la fiscal, Ana Cecilia Magallanes, dos personas probas, serían fiscales de turno próximamente, con lo que podían ser los encargados de ver la denuncia contra Montesinos.

Al día siguiente, cambiaron los planes. Bustamante convocó a Ugaz a su despacho. El canciller de Trazegnies le había informado que el gobierno de Suiza había detectado cuatro cuentas vinculadas con Montesinos por 48 millones de dólares. Era la prueba final de corrupción del asesor. Ugaz le recomendó que hiciera una conferencia de prensa anunciando esta noticia. Bustamante lo discutiría con Fujimori.

Minutos más tarde, el ministro llamó al abogado: lo convocaba para ser procurador ad hoc en el caso contra Montesinos. Ugaz le indicó que, en principio, aceptaría, pero que debía consultar con sus socios. Solo uno de ellos estuvo disponible y le recomendó tomar el cargo, por la trascendencia que tenía para el país. Finalmente, el abogado aceptó.

Bustamante hizo el anuncio de las cuentas y del nombramiento de Ugaz a las 9.00 p. m. del 2 de noviembre de 2000.

Durante los primeros días de travesía en el Karisma, Montesinos no subió a cubierta. Los mareos y males estomacales lo invadieron.

Apenas probó comida y bajó casi cinco kilos. Recién al culminar la primera semana de viaje, se sintió mejor y pasó mucho más tiempo en la cubierta.

Siete días después de zarpar, el 4 de noviembre de 2000, llegaron a las islas Galápagos, un archipiélago frente a las costas ecuatorianas. El exasesor pudo ser atendido por una enfermera, así como descansar y comer. En este tramo, se unió al grupo Emma Aurora Mejía, una de las personas que había ayudado a la nueva fuga de Montesinos. Y la joven que los había acompañado para aparentar un viaje de placer desertó.

Mejía planteó al exasesor la posibilidad de ir desde la isla Isabela en una avioneta hacia Venezuela, destino final de estadía del prófugo. Sin embargo, Montesinos se negó debido a que el vuelo haría una escala en Guayaquil. Mientras urdían un nuevo plan, todos tomaron algunos días de descanso en Galápagos.

Para el 12 de noviembre, Montesinos dio una nueva orden: partir a la Isla de Cocos, frente a las costas de Costa Rica. Desde allí le sería más fácil ir hacia Caracas.

Al día siguiente de su nombramiento, José Ugaz organizó su despacho: nombró a los abogados Luis Vargas Valdivia —socio de su estudio— y César Azabache como procuradores adjuntos. Asimismo, le pidió a Bustamante que ampliara sus facultades, dado que la resolución original hablaba únicamente del delito de enriquecimiento ilícito.

Ese mismo día, Ugaz tuvo un primer encuentro con Fujimori. Allí le planteó que requería de total autonomía, pues era claro que había otros funcionarios públicos que estaban en complicidad con él. El mandatario insistió en la necesidad de capturar al exasesor, debido a que varios de sus ministros habían sido chantajeados. Precisamente, la llamada de Federico Salas, asustado por haber sido filmado recibiendo dinero de Montesinos, interrumpió brevemente la cita. Luego de darle posibles pistas sobre el supuesto paradero del prófugo, así como la garantía de autonomía, acabó la reunión.

Sin embargo, Fujimori tenía preparada una celada al procurador. Lo hizo pasar, sin previo aviso, a dos conferencias de prensa: una

para periódicos y otra para radio y televisión. El mandatario se despachó con excusas y justificaciones sobre el accionar de Montesinos. Ugaz estaba incómodo y, a sugerencia de la periodista Laura Puertas, convocó a una conferencia de prensa, haciendo hincapié en que sus investigaciones se harían «caiga quien caiga» y, además señalando que no existía orden de captura contra Montesinos, como Fujimori lo había afirmado.

Ese día, Fujimori le pidió a Bustamante la renuncia del procurador, a lo que el ministro se negó.

En la madrugada del 7 de septiembre de 2000, Fujimori, usurpando funciones, ordenó el allanamiento del departamento de Montesinos ubicado en San Isidro, donde residía su esposa Trinidad Becerra y sus hijas. Para ello, envió a Manuel Ubillús Tolentino, oficial del equipo jurídico de la Fuerza Aérea, para que se hiciera pasar por un fiscal.

Al no ubicar a Montesinos allí, los militares y policías presentes forzaron la puerta de otro departamento propiedad del exasesor, ubicado en el mismo edificio, que era usado como depósito. Allí encontraron 75 cajas, 5 maletines y 63 maletas.

Por órdenes de Fujimori, todo el cargamento debía ser llevado a la suite presidencial del Grupo Aéreo 8, desde donde salen los vuelos oficiales del Estado peruano. Intervino personal de seguridad de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Allí los esperaba el mandatario, quien estaba acompañado de su cuñado Víctor Aritomi, embajador de Perú en Japón.

Dos días más tarde, Fujimori y Bustamante dieron una conferencia de prensa donde mostraron las joyas de Montesinos y, además, indicaron que se habían incautado cientos de videos. Ambos refirieron que las pruebas serían entregadas a las autoridades judiciales.

Por ello, es bastante verosímil que el mandatario se haya quedado con alguna parte del arsenal probatorio, incluyendo videos incriminatorios. Fujimori nunca se ha pronunciado sobre este hecho.

Para el 6 de noviembre de 2000, la fiscal Ana Cecilia Magallanes había calificado la denuncia contra Montesinos por diversos delitos, vinculados a las cuentas suizas. Ese mismo día, el juez Jorge

Vargas Infante abrió un proceso penal con mandato de detención contra el exasesor. Era el primer gran logro de la Procuraduría Ad Hoc.

En paralelo, Ugaz y su equipo comenzaron a armar un organigrama de una asociación ilícita para delinquir, en cuya cúspide estaba el socio de Fujimori y que tenía varias ramificaciones. Este sería el modelo inicial para lo que luego se conocería como «organización criminal Fujimori–Montesinos». Esta estructura sería fundamental para ir armando los siguientes paquetes de casos: derechos humanos, narcotráfico, tráfico de armas a las FARC y el caso Kouri-Montesinos. Este último había sido archivado en tiempo récord por una fiscal provisional, Nina Rodríguez, nombrada por la todopoderosa Blanca Nélida Colán.

A diferencia de lo que ocurre en el caso Lava Jato, aquí la Procuraduría Ad Hoc tuvo un papel central por dos razones. La primera se vincula con el tipo de modelo de proceso penal vigente. Para fines de 2000, el proceso era fundamentalmente escrito, dirigido a que el juez determine las medidas correspondientes y la sentencia. Hoy el proceso penal es nítidamente oral, con un mayor protagonismo del Ministerio Público, donde el magistrado o la sala toma su criterio a partir de lo presentado en las audiencias. La segunda tenía que ver con la situación institucional de la Fiscalía de la Nación. Cuando Ugaz fue nombrado, Colán aún era la fiscal de la Nación —dimitiría días después— y, luego de su salida, a la institución le costaría un tiempo poder asumir un rol más activo.

Sin embargo, Ugaz estuvo a punto de renunciar en esos días. El sábado 11 de noviembre, tuvo una áspera discusión con Bustamante. El ministro de Justicia trajo el mensaje de Fujimori de que debía suavizar sus declaraciones públicas, dado que Ugaz había rechazado en público y en privado el allanamiento irregular a la casa de Montesinos. El abogado caviló que, si bien Bustamante había planteado su renuncia si es que Fujimori le volvía a pedir su cabeza, esta situación no sería sostenible, dado que era bastante probable que la Procuraduría, en un momento cercano, comenzara a tomar a Fujimori como investigado.

Para arribar a ese escenario, solo mediaron unas horas. Por la tarde de ese día, Canal N difundió una entrevista de la televisión colombiana a Roberto Escobar Gaviria, el hermano de Pablo Escobar, el fallecido jefe del cartel de Medellín. El también narcotraficante hizo una revelación sorprendente: había sido testigo de la llamada hecha por Montesinos a su hermano, agradeciéndole la cooperación por el apoyo a la campaña electoral de 1990 e, incluso, el propio Fujimori habló con el legendario delincuente.

Esa noche, Ugaz anunció que el lunes 13 de noviembre presentarían una denuncia contra Fujimori por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Fue un lunes 13 de noviembre bastante movido. Sin que ninguna cámara en vivo lo captara, Alberto Fujimori se subió en horas de la mañana al avión presidencial en el Grupo Aéreo 8. Su destino era la cumbre del Foro Económico Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), al que Perú pertenecía desde 1998. La reunión se realizaría en el sultanato de Brunéi. El avión partió desde Lima para hacer escala en Acapulco y, posteriormente, en San Francisco.

A las 11.00 a. m., Ugaz presentó la denuncia contra Fujimori anunciada dos días antes. El caso Escobar era la primera acción de la Procuraduría Ad Hoc contra el mandatario.

Pero el centro de la atención estaba en el Congreso de la República. Días antes, la oposición había interpuesto una moción de censura contra Martha Hildebrandt, la presidenta de ese poder del Estado, dado que se había obstaculizado la formación de una comisión investigadora contra Vladimiro Montesinos. La moción debía debatirse esa mañana.

Los congresistas de oposición eran claros en su pedido: no querían mayor debate de la moción, dado que se sustentaba por sí sola y, a diferencia de lo ocurrido un mes atrás, sabían que tenían los votos. Desde el lado del oficialismo, buscaban dilatar el debate lo más posible. Y los congresistas que habían salido de Perú 2000 o se habían mantenido como independientes, finalmente le dieron la espalda a Hildebrandt.

A la 1.00 p. m., Martha Hildebrandt fue censurada como presidenta del Congreso de la República.

El martes 14 de noviembre, Fujimori voló desde San Francisco a Manila, en un avión comercial. Llegó a la capital de Filipinas en la madrugada del miércoles 15. De allí se dirigió a Brunéi.

Aquel miércoles, a la salida de una reunión más de la Mesa de Diálogo de la OEA, el congresista José Barba Caballero advirtió que, en realidad, Fujimori se había fugado con muchas maletas y que no volvería al Perú, pues buscaría alguna figura de asilo en un país de Asia. Muchos tomaron como exagerada la versión del parlamentario. El tiempo le daría la razón.

Para el jueves 16 de noviembre, estaba pautada la votación para el nuevo presidente del Congreso. Por ello, dos días antes, los representantes de la oposición sostuvieron reuniones con miras a ver quién podía encabezar dicho poder del Estado, un puesto clave en materia de sucesión constitucional. Los cálculos de la oposición eran que, ante una eventual renuncia o vacancia de Fujimori, el segundo vicepresidente Ricardo Márquez no podría sostener el régimen.

Dos eran las personas que se vislumbraban como posibles presidentes del Congreso. Era conocido que Carlos Ferrero sería la carta de Perú Posible. La bancada conjunta de Acción Popular y Unión Por el Perú presentó como candidato a Valentín Paniagua.

Pero la postulación del abogado casi no llegó a realizarse. A las 7.00 a. m. del miércoles 15, Henry Pease recibió una llamada de Paniagua, en la que pedía que retirara su postulación, porque consideraba que Ferrero había sido uno de los parlamentarios más votados de la bancada más votada de la oposición. Pease lo escuchó, pero, a la hora de la siguiente reunión en su casa, no hizo caso.

¿Qué primó para que fuera Paniagua y no Ferrero? Si bien Ferrero tenía la fuerza de los votos a su favor —Paniagua había sido el segundo parlamentario con menor votación preferencial—, era muy claro que el fujimorismo podría boicotear su gestión, al haber pertenecido a esa bancada por siete años. También se adujo resistencias del FIM hacia Ferrero. Culminada la reunión en casa de Pease, ya de madrugada, Luis Solari convocó a sus compañeros de partido Marcial Ayaipoma y Marciano Rengifo para debatir la

posición de Perú Posible. Frente a tres caldos de gallina, plato recurrente de amanecidas de trabajo o de juerga, los tres se percataron de que el nuevo presidente del Congreso, que podría ser el nuevo mandatario, no podía provenir de sus filas. Llamaron a Toledo y le dijeron que era mejor que la lista fuera encabezada por Paniagua. Toledo aceptó[239].

El oficialismo presentó una candidatura de compromiso: Ricardo Marcenaro, un parlamentario que ya había reemplazado antes a Carlos Torres y Torres Lara, cuando se fue a Estados Unidos para tratar el cáncer que finalmente fue la causa de su fallecimiento. Pero los fujimoristas sabían que no tendría los votos para reemplazar a Martha Hildebrandt.

Paniagua ganó gracias a los votos de 64 congresistas. En su primer discurso, señaló:

—A todos quisiera decirles que es posible un tiempo nuevo y que, detrás de las pasiones que ahora agitan a vastos sectores del país, hay un reclamo perentorio de justicia, verdad y unión para hacer del Perú un hogar cálido en el que todos los peruanos podamos vivir con dignidad. Sé que es muy breve el tiempo de nuestro mandato y no ignoro, además, que debemos acometer nuestra tarea en medio de la tempestad.

Por la tarde, se aprobó la restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca. Al día siguiente, volvieron a los puestos de los que nunca debieron ser destituidos.

En algún momento del jueves 16 de noviembre, Alberto Fujimori llamó a su hija Keiko. Había dejado la cumbre de la APEC para arribar a Tokio. Allí le dijo:

—Me voy a quedar a vivir en Japón. Ven a vivir conmigo.

Keiko se negó y trató de hacer entrar en razón a su padre. Él persistió en su decisión irreductible. Fujimori colgó el teléfono y ella lloró. Durante los siguientes dos días, ella insistió en discutir el paso que iba a dar su padre, pero el mandatario no admitió contradicciones.

Originalmente, durante ese fin de semana, Fujimori debió estar en Panamá, para una cumbre de presidentes iberoamericanos. Declinó

ir. Indicó que estaba en Japón gestionando créditos para el Perú. Luego, adujo que tenía un resfriado y que iba a volver el martes a Lima.

Por la noche del viernes 17 de noviembre —mañana del sábado 18 en Tokio—, Bustamante, Mosqueira y Bedoya llamaron a Fujimori. Keiko les había dado el teléfono. Bustamante le hizo saber a Fujimori los rumores de su posible fuga. El mandatario les dijo:

—Tienen que decir que no es así, que estoy agripado.

—Ese cuento no se lo creerá nadie.

—No tengo otro cuento —dijo Fujimori en un último rapto de honestidad.

Ante el pedido unánime de los tres ministros, el presidente les confesó:

—El domingo voy a remitir una carta codificada que les pido lean minuciosamente.

Bustamante tenía claro que les remitiría su carta de renuncia y se lo sacó en cara. Fujimori respondió:

—Doctor, no se adelante, pero este no es el momento de regresar al Perú.

El ministro de Justicia insistió en obtener una respuesta. El gobernante respondió que no podía hablar por teléfono sobre el tema. Bustamante se pasó el dedo por el cuello, señal universal de «estamos muertos». Sus colegas entendieron. Colgó el teléfono. Los adjetivos calificativos a la actitud de Fujimori fueron duros por parte de los tres ministros.

Era cuestión de días. Comenzaba la cuenta regresiva.

El segundo tramo del viaje en barco para Montesinos y sus acompañantes, entre las islas Galápagos y la isla de Coco, no fue placentero. Las provisiones compradas por Emma Aurora Mejía eran escasas y de baja calidad, lo que hizo que los lugartenientes de Montesinos tuvieran que dedicarse improvisadamente a la pesca, para que todos los pasajeros pudieran comer dignamente.

Al mismo tiempo, las relaciones entre los oficiales leales a Montesinos se comenzaron a resquebrajar, y también se deterioraron los vínculos con el resto de los pasajeros. Esta situación se agudizó cuando llegaron las noticias desde Lima: las

cuentas en Suiza, el allanamiento de la casa de Montesinos y la huida de Fujimori a Asia.

Para el exasesor presidencial, tampoco el viaje fue grato. Jacqueline Beltrán se negó a ir hacia Caracas, su destino final. Peor aún, en las comunicaciones que tenía con Montesinos, solo le transmitía preocupaciones domésticas. El exsocio de Fujimori tenía cada vez menos éxito en que alguien en Lima le contestara una llamada. Incluso se echó a llorar delante de sus acompañantes.

El 20 de noviembre de 2000, el Karisma llegó a la Isla de Coco, territorio costarricense. Allí encontraron provisiones, pero las condiciones climáticas les hicieron permanecer en el barco. Finalmente, los tres lugartenientes de Montesinos decidieron irse. El exasesor tuvo que dejarlos en libertad.

Para el 22 de noviembre, Montesinos entraría a Costa Rica con un nombre falso. De allí haría su travesía a Caracas. Como tantas veces en su vida, emprendería un plan de escape.

A las 7.00 a. m. del domingo 19 de noviembre de 2000, los ministros fueron llamados desde Palacio de Gobierno. El mensaje era claro: en el término de la distancia, se les enviaría las cartas certificadas prometidas por Fujimori el viernes. En paralelo, Fujimori envío por fax —hecho sin precedentes ni sucedáneos en la historia mundial— la siguiente comunicación al Congreso de la República:

Tokio, 19 de noviembre del 2000

Sr. Dr. Valentín Paniagua

Presidente del Congreso de la República

Presente

De mi mayor consideración:

En primer término, deseo expresar a usted mis felicitaciones por su reciente elección como presidente del Congreso de la República.

Soy el primero en reconocer que hay un nuevo escenario político en el país, una de cuyas expresiones recientes es una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. Consciente soy, asimismo, de posiciones e intereses en ese Poder del Estado, que podrían conducir a una confrontación de poder a pesar de mi iniciativa para acortar el mandato presidencial y convocar a elecciones en estricto cumplimiento de la promesa que hiciera en mi mensaje de

septiembre y de los acuerdos alcanzados por el gobierno y la oposición en la mesa de diálogo promovida por la OEA.

A lo largo de estos últimos diez años y como consta al país entero, a pesar de errores que reconozco, he actuado sin cálculo político, mucho menos preocupado por la popularidad, circunstancias que hubieran impedido la exitosa ejecución de un programa económico antiinflacionario, el proceso de pacificación interna y, luego, alcanzar la paz definitiva con Ecuador y Chile, entre otros logros fundamentales de mi gobierno.

Jamás pensé en todas estas oportunidades, sino en los sagrados y permanentes intereses de la República. Actué a pesar de la resistencia ofrecida por el negativismo, la demagogia, el chauvinismo inconsciente e intereses personales o de grupo. Nada de ello me detuvo.

En esa línea principista se inscribió mi decisión de acortar mi mandato de gobierno y de convocar a elecciones generales para abril del 2001, objetivos ya cumplidos. Aún, sin embargo, no se ha recuperado la estabilidad política necesaria para llevar a buen término este periodo de transición que culminará con la elección de un nuevo gobierno. Abrigo la esperanza de que bajo la honorable presidencia suya esta estabilidad pueda alcanzarse en breve.

He vuelto entonces a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar formalmente a la Presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía.

Formulo, pues, ante usted, señor presidente del Congreso, mi renuncia formal a la Presidencia de la República, en concordancia con el artículo 113 inicio 3 de la Constitución Política del Perú.

Hago fervientes votos por el éxito de su gestión, porque eliminada la supuesta causa de desavenencias y desencuentros entre gobierno y oposición todos se avengan a buscar con serenidad y patriotismo las formas más adecuadas de garantizar para el Perú,

para su pueblo, un futuro de verdadera democracia, es decir, un sistema político que se traduzca en bienestar y desarrollo para la mayoría de los peruanos.

Muy atentamente

Ing. Alberto Fujimori.

Para las 8.00 a. m., Federico Salas confirmaba al país que su jefe había dimitido.

Las cartas certificadas de Fujimori tenían mensajes distintos para sus ministros, junto a su renuncia. Todos fueron convocados por Carlos Boloña a su domicilio. Salas estaba atendiendo a la prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

El ambiente, claramente, no era festivo y los asistentes representaban las distintas etapas del duelo. Luisa María Cuculiza y Alejandro Aguinaga aseguraban que Fujimori retornaría, lo que demostraba que estaban en la fase de negación. El dueño de casa ya estaba en la aceptación:

—Olvídense del tema. Esto no es una mecida. No va a regresar.

Salas llegó, pero dijo que estaría poco tiempo, debido a que tenía que ir a casa de Ricardo Márquez, el segundo vicepresidente. Allí les dijo que Fujimori lo llamó el sábado 18 por la noche para decirle que iba a renunciar y él decidió comunicarlo al país.

Para sorpresa de todos, Salas les dijo a los miembros del gabinete presentes en la casa de Boloña que él y Márquez alistaban un nuevo gabinete. El presidente del Consejo de Ministros dejó la casa miraflorina. Según confesó veinte años más tarde, el vicepresidente tenía pensado convocar a Roque Benavides, entonces presidente de la CONFIEP, como cabeza de su gabinete.

Luego del estupor general y la furia de Boloña, Salas llamó por teléfono. Márquez convocaba a una reunión en su casa en San Isidro. Los ministros pidieron que ellos dos vinieran a casa de Boloña, que ya tenía a varios periodistas en las afueras. «Márquez les responderá pronto», dijo el presidente del Consejo de Ministros.

Quienes estaban reunidos en casa de Boloña discutieron las alternativas que les quedaban. Bustamante tenía claro que una presidencia de Márquez era inviable y que lo iban a vacar. En esa línea, conformar un gabinete con él sería, para ellos, el festín de la

oposición. Una llamada del embajador de Estados Unidos, John Hamilton, le confirmó que en la principal potencia mundial tenían la misma apreciación política.

El consenso entre los ministros era que todos debían dimitir, sin intervenir en la definición de la sucesión presidencial. Concordaron, además, expresar su indignación frente al acto final de quien, hasta esa mañana, ejerció la Presidencia de la República. Todos firmaron un pronunciamiento conjunto con ese contenido.

Salas llegó nuevamente a casa de Boloña y leyó el documento. Lo firmó y les dijo a sus colegas que leería el comunicado en una conferencia de prensa. Hubo discrepancias entre los ministros y, al final, obligaron al aún presidente del Consejo de Ministros a firmar una segunda copia. Gonzalo Romero la filtró a RPP. Igual todos los ministros acudieron a la PCM para el acto final.

Márquez llegó tardíamente. Al regreso a su casa, se encontró con un grupo de manifestantes poniendo las bolsas negras de «Pon la basura en la basura» en su domicilio. Pudo entrar por la cochera.

Mientras, en la oficina que tenía Paniagua en Jesús María, la oposición estaba reunida para definir las siguientes acciones, alertada desde el día anterior sobre la posibilidad de renuncia de Fujimori. Jorge del Castillo llamó a Walter Chacón, con quien había hecho buena relación desde que el militar desmintiera una supuesta agresión del parlamentario a un policía durante la Marcha de los Cuatro Suyos. Le pasó el teléfono a Paniagua. El mensaje del comandante general del Ejército fue claro:

—Las Fuerzas Armadas acatarán lo que decida el Congreso de la República.

El lunes 20 de noviembre por la mañana, luego de un intento fallido de convocatoria al Consejo de Ministros, Márquez les facilitó la vida a todos. En una conferencia de prensa, anunció su renuncia.

Desde Tokio, Fujimori soltó su última bomba: había activado su nacionalidad japonesa. Por tanto, los planes para una posible extradición se complicaban, dado que Japón tradicionalmente no permite que sus nacionales sean procesados por poderes judiciales de otros países. A ello se sumaba el hecho de que su sistema

judicial no reconoce algunas instituciones y delitos que sí se admiten en otras partes del mundo.

El martes 21 de noviembre, los ojos del país estaban puestos en el Congreso de la República. Allí se tendría la sesión para aceptarle o no la renuncia a Alberto Fujimori.

Previamente, se debatió la dimisión de Francisco Tudela. Luego de la lectura de su carta, el congresista fue claro en despejar cualquier rumor de las semanas pasadas y, sobre todo, de los días anteriores:

—No me interesa la Presidencia de la República, no sufro de fiebre presidencial; y aprovecho mi presencia en el Hemiciclo para decir que no solo mantengo mi renuncia, sino que, más allá de las especulaciones, tampoco seré candidato a la Presidencia de la República.

Con 103 votos, el Congreso aprobó la partida de Tudela. Y comenzó a debatir el proyecto multipartidario de vacancia presidencial por incapacidad moral presentado por Olivera, Pease, Solari, Martínez del Solar, Pollack, Barrón, del Castillo y Rafael Rey. A continuación, una selección de los argumentos más duros de todas las partes:

Manuel Vara Ochoa (Perú 2000):

—El país, de acuerdo con lo que he podido ver, sigue queriendo al presidente de la República. Él reconoce sus errores; no es ningún delincuente para que declaremos su incapacidad moral.

Anel Townsend (Somos Perú):

—Quiero recalcar que un acto de dignidad era renunciar en nuestro país; el no haberlo hecho ha agravado aún más la situación y marca una gran diferencia con quienes hemos discrepado todo este tiempo, como ha sido el primer vicepresidente, señor Tudela van Breguel Douglas, o el segundo vicepresidente, señor Márquez Flores; pues ellos, que son también nuestros contendores políticos, han renunciado en nuestro país, y esa es una gran diferencia.

Henry Pease (Unión Por el Perú):

—Señor presidente, yo he luchado durante diez años contra el fujimorismo, y también he reconocido sus éxitos y no lo he insultado jamás. No me interesa hacer leña del árbol caído; pero tengo que

llamar pan al pan y vino al vino; y, por tanto, tengo que llamar moralmente incapaz a quien miente al país, a quien no tiene la valentía de dar la cara y renunciar en su propio despacho, a quien se va fuera del país para mandarnos una carta desde Tokio, cuidando no sé qué tesoros; ciertamente, no el tesoro del aprecio de la ciudadanía ni el de la dignidad del cargo ejercido, porque ha dejado a los peruanos humillados ante todo el mundo. Los peruanos no podemos pensar que, con ese comportamiento, van a decir en el mundo que somos demócratas, ciudadanos que nos respetamos, cuando él, que ha ejercido diez años la Presidencia de la República, no ha sido capaz de representar a los ciudadanos que lo eligieron, ni a sus propios ministros siquiera.

Jorge del Castillo (APRA):

—¿Quién va a creer que alguien pueda enriquecerse al lado del presidente de la República y que este diga que no se daba cuenta ni sabía nada? ¿Acaso no se le advirtió de los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta? ¿Acaso no se le advirtió de las cuentas millonarias de su asesor en un banco de Lima, y salió el propio presidente a defenderlo? ¿Acaso no se le advirtió del lavado de dinero y del narcotráfico?

Carmen Lozada de Gamboa (Perú 2000):

—No se puede juzgar a un presidente por un solo hecho, o porque desde Japón envía una carta de renuncia. Hay que juzgar a un presidente por los hechos, por el trabajo realizado, por las obras dedicadas al pueblo, por los permanentes viajes al interior del país. Eso es lo que nosotros venimos a apoyar en este Congreso y por eso no renunciamos a nuestra bancada.

Martha Moyano (Perú 2000):

—Aquí se ha dicho que al presidente Fujimori se le aflojaban los pantalones. Yo quiero decirle a la ciudadanía que me está escuchando que a él no se le aflojaron los pantalones para poner orden en el país en 1992; como tampoco para que se aprese y se condene a cadena perpetua a los líderes del terrorismo, o para firmar el Acuerdo de Paz con el Ecuador.

Martha Chávez (Perú 2000):

—Para su mal, algunos creen que han venido aquí a presenciar la muerte del fujimorismo; no es cierto, porque el fujimorismo está en el alma de millones de peruanos que se han beneficiado con el trabajo honesto, sincero y dedicado del presidente de la República.

Luis Solari (Perú Posible):

—Si quien recibió el encargo del pueblo se comporta de esa manera, perdiendo totalmente el sentido del bien en sus actos, y vamos a pasar la página de lo que ocurrió en el proceso electoral para ceñirnos al acto de su partida del país, con el consecuente abandono de lo que he mencionado y, sobre todo, sustracción de las esperanzas de ese grupo humano, lo que ha hecho es llevarse el alma de los pobres del Perú.

Fernando Olivera (Frente Independiente Moralizador):

—Pero nosotros tenemos que sancionar el cinismo, la antipatria, la inmoralidad. Tenemos que dar un ejemplo en este Congreso de la República, porque en una democracia se gobierna con el ejemplo. Y por eso venimos aquí a pedir una respuesta de los congresistas del Perú, para rechazar esa renuncia que es una ofensa a la peruanidad y para tomar la firme decisión de destituir a Alberto Fujimori por incapacidad moral comprobada. Hay que destituirlo, para que los peruanos y el mundo entero sepan bien que ni Fujimori ni Montesinos representan al Perú.

Hacia las diez de la noche, concluyó el extenso debate. La bancada fujimorista buscó un último ardid: botar primero la renuncia de Fujimori. Lo rechazaron. Buena parte de los miembros de Perú 2000 se fueron. Con 64 votos, se aprobó la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

A las 10.45 p. m., con la entonación del Himno Nacional, el gobierno de Alberto Fujimori concluyó.

Keiko Fujimori fue la única integrante de su familia que dio la cara en la hora final. Sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji fueron alertados el domingo 19, vía telefónica, de la renuncia de su padre. Ninguno de ellos brindó declaraciones a la prensa.

En Palacio de Gobierno, el clima era de funeral. Un funcionario de la Presidencia de la República se acercó a Carlos Raffo y le preguntó a boca de jarro:

—Carlos, ¿qué vas a hacer ahora?

—Esperar la llamada del presidente Fujimori.

—Estás loco. Esto ya se terminó[240].

Sin embargo, Keiko se tuvo que encargar de la mudanza de los enseres familiares de la residencia presidencial. Quienes fueron sus acompañantes en esos días señalaban que se mantuvo reservada y callada. Se iba a vivir a la casa de su tía Juana.

Cuando ya todas sus pertenencias estaban empacadas, la primera dama convocó a todo el personal de la Presidencia de la República. Les agradeció y les indicó que se vendrían tiempos difíciles. Se despidió uno a uno de los miembros de su staff.

Ante la prensa, Keiko fue lacónica y expresó su sentir en una frase:

—Yo sí me quedo.

Terminadas las fotos en Palacio, Keiko subió al auto de Ana Vega. Pensaba hacer una nueva vida lejos de la política.

Dado que el país no puede esperar más tiempo para recibir un mensaje de estabilidad que permita recuperar la confianza en sus instituciones y en sus gobernantes, es imprescindible que la ciudadanía se sienta segura de que el manejo y los destinos del país se llevan a cabo con absoluto orden, de manera tal que las elecciones generales previstas para el próximo año puedan realizarse de manera satisfactoria.

Ese fue el sustento de la carta de renuncia de Ricardo Márquez a la segunda vicepresidencia de la República y que debía debatirse en la mañana del miércoles 22 de noviembre de 2000.

Martha Chávez insinuó que el vicepresidente había sido obligado a renunciar, argumento basado en una entrevista en la que Rafael Rey indicó que el renunciante no hubiera tenido el apoyo del empresariado.

Rey le aclaró a la parlamentaria fujimorista que jamás señaló la existencia de presiones empresariales y que su declaración correspondía a un básico análisis político. Hasta quienes fueron aliados por años del gobierno le daban la espalda.

Luego de ese incidente, se aceptó la renuncia de Márquez[241].

—Yo, Valentín Paniagua Corazao, juro por Dios y por la Patria que ejerceré fielmente las funciones propias de la Presidencia de la República que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2001; que defenderé la soberanía y la integridad de la República; que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las Leyes del Perú; y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos.

A las 1.25 p. m., Valentín Paniagua juró como presidente del Perú. Luz Salgado, como presidenta encargada del Congreso, le colocó la banda presidencial. Era el símbolo de la inaugurada transición.

—Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión, acaso excesiva, sacude a todos los peruanos.

En uno de los balcones, Alejandro Toledo compartía lugares con Luis Bedoya Reyes y Diego García–Sayán. En otro, estaba la familia del mandatario. Y en un tercer balcón, los comandantes generales sobrevivientes de la era Fujimori, mientras que en la fila posterior se encontraba el general Jaime Salinas Sedó. Alberto Andrade se hallaba junto a otras autoridades, el futuro ministro de Economía Javier Silva Ruete y el entonces rector de la PUCP —y luego presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación—, Salomón Lerner Febres. En la parte baja del hemiciclo, se ubicaron los, para entonces, expresidentes vivos con domicilio en el Perú: Fernando Belaúnde Terry y Francisco Morales Bermúdez.

—Esa ilusión no es fruto de ninguna pasión política de circunstancia ni de una ensoñación demagógica. Por extraño que parezca, son sentimientos nacidos de una profunda convicción nacional: la necesidad de exaltar, afirmar y consolidar la Constitución como norma de vida y de convivencia diaria.

El discurso de Paniagua fue breve y apeló a los valores republicanos. Su anuncio de impacto fue el nombramiento de Javier Pérez de Cuéllar como presidente del Consejo de Ministros. Era una reivindicación al candidato que perdió las elecciones en 1995, así como un reconocimiento de que el país necesitaba recuperar, rápidamente, credibilidad internacional.

—Estoy absolutamente persuadido, señores representantes, de que en este clima tal vez podamos iniciar el proceso de enrumbar el país por la senda del progreso, haciendo que sea verdad el lema que acuñaron los próceres fundadores como promesa y apuesta para el futuro del Perú: firme y feliz por la unión.

Concluido el discurso, Paniagua salió del Congreso y llegó en auto con varios de los parlamentarios que habían estado en la oposición durante ocho años. En la Plaza de Armas, lo esperaba una manifestación que gritaba «Y ya cayó, y ya cayó, la dictadura ya cayó». El flamante presidente de la República saludó a la multitud y dio otro breve discurso en el balcón de Palacio de Gobierno. La multitud terminó cantando el Himno Nacional.

Como dijo el periodista Marco Sifuentes:

—Ese día nació el Perú como lo conocemos ahora. Ese día los peruanos recuperamos al Perú[242].

Veinte años después, pese a todo, el Perú vive en el más largo periodo democrático de su historia.

---

232 Los sucesos que generan la caída del régimen fujimorista aparecen en Bowen y Holligan (2003: 420-467), Jochamowitz (2019a: 25, 147-150, 259-266), Bustamante (2003: 183-214, 229-242, 353-362), Conaghan (2005: 220-242) y Murakami (2018: 551-563), así como en ediciones de la revista *Caretas* entre septiembre y noviembre de 2000. También consultamos Dongo (2009: 57-66)

233 Sobre la propalación del video Kouri Montesinos, consultamos el artículo de *El Comercio* «El día que se difundió el primer vladivideo que provocó la caída del régimen fujimorista» (https://). También una entrevista brindada por Matilde Pinchi Pinchi a César Hildebrandt () y otra entrevista de Jaime Chincha a Benjamín Sevilla, exproductor de Canal N (). Cuestiones complementarias son tomadas de mi libro (2019: 127-128) y de un *post* de la periodista Rosa María Palacios ().

234 En torno a la compensación a favor de Vladimiro Montesinos, tomamos en consideración la sentencia contra Alberto Fujimori por este caso. Sobre la colaboración de Dionisio Romero Seminario para su salida del país, consultamos Durand (2013: 367).

235 Acerca de la Mesa de Diálogo de la OEA y el comportamiento de los actores nos basamos en García–Sayán (2017: 63-69), Bustamante (2003: 313-320), Youngers (2003: 424–427) y Pease (2009: 28-31). El texto de Pease también ayuda a ver cómo se llegó al consenso sobre la postulación de Valentín Paniagua a la presidencia del Congreso (2009: 31-32).

236 La entrevista de Montesinos a RPP aparece completa, junto a los descargos de Jesús Miguel Calderón, en Bustamante (2012: 659-663).

237 Sobre el levantamiento de Ollanta y Antauro Humala, tomamos la versión contenida en Sifuentes (2018: 127-145).

238 La formación de la Procuraduría Ad Hoc y los sucesos judiciales de noviembre de 2000 se basan, sobre todo, en Ugaz (2014: 9-80). Asimismo, consideramos la sentencia contra Alberto Fujimori por el allanamiento irregular a la casa de Montesinos.

239 La conferencia del caldo de gallina y otros detalles de las negociaciones finales de la transición son expuestos por Fernando Vivas en su crónica «Paniagua: los secretos de la transición», publicada el 24 de noviembre de 2020 en *El Comercio*. Véase en https://elcomercio.pe/politica/los-

240 Este diálogo aparece en el relato de Raffo en su blog ya citado.

241 Los discursos de Fujimori y Paniagua son tomados de la página web del Congreso de la República, al igual que las cartas de renuncia de Fujimori, Tudela y Márquez.

242 La frase final de Marco Sifuentes aparece en el «Video Kouri Montesinos: la verdadera historia»: https://youtu.be/b4ucGVHdP6w.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El 7 de octubre de 2010, a veinte años de perder la elección presidencial, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura. Se trataba del primer y único peruano en recibir este galardón, el más importante del mundo en su campo.

Vargas Llosa continuó publicando novelas, ensayos, piezas teatrales y artículos periodísticos. Durante las últimas tres décadas, ha alternado sus residencias en Madrid y Lima con estancias de trabajo en distintas partes del mundo. En promedio, entre tres a cuatro ocasiones al año se pronuncia sobre la política peruana. Respaldó a todos los candidatos que ganaron las elecciones presidenciales desde 2001. Sigue siendo un opositor férreo y fuerte frente al fujimorismo. Ha continuado generando polémica con sus posiciones, algunas más liberales, otras más conservadoras.

El escritor se divorció en 2015 luego de casi cincuenta años de matrimonio con Patricia Llosa. Su pareja actual es Isabel Preysler, publicista y socialité hispano–filipina.

Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, es hoy un consolidado periodista, analista político y asesor financiero. Vive en Washington. Sus opiniones siguen marcando polémica en diversos países. De hecho, en 2001 impulsó el voto en blanco contra Alejandro Toledo, por la convicción de que no había reconocido a su hija menor. En 2011, apoyó entusiastamente la candidatura de Ollanta Humala. Sigue siendo un liberal consumado y opuesto al fujimorismo.

Mark Malloch Brown dejó Sawyer & Miller en 1994 y tuvo su propia carrera exitosa en la política: fue vicesecretario general de la Organización de las Naciones Unidas y ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido en la gestión de Gordon Brown. Hoy es miembro de la Cámara de los Lores.

Frederick Cooper volvió a la arquitectura luego de apoyar la campaña de su primo Mario Vargas Llosa. Actualmente, es docente a tiempo completo en la PUCP. Miguel Cruchaga hizo el mismo camino profesional y académico, pero en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su colega Luis Miró Quesada Garland falleció en 1994.

Francisco Igartua tuvo que cerrar la revista Oiga en 1995, luego de las presiones tributarias recibidas por el régimen de Fujimori. Fue columnista en diversos medios hasta su fallecimiento en 2004.

Fernando de Szyszlo fue un claro opositor al gobierno de Fujimori desde que devino en autoritario. Aunque no participó en las actividades artísticas de sus colegas al final de la década de los noventa, siempre brindó declaraciones en contra del régimen. Cercano amigo de Alan García en sus últimos años, falleció en un accidente doméstico en octubre de 2017.

Genaro Delgado Parker no fue sentenciado por los favores judiciales que pidió a Vladimiro Montesinos, debido a que el plazo de prescripción de su caso fue más corto, por cuestiones de edad. Recuperó Panamericana Televisión entre 2003 y 2009, pero el canal entró en un claro deterioro por problemas económicos atribuibles a su gestión. Perdió todos sus intereses en Red Global en 2010. Su salud sufrió una ostensible merma en los últimos años, tanto por un cáncer como por una caída grave en su casa. Murió en 2017.

Hernando de Soto continúa al frente del Instituto Libertad y Democracia. Sigue asesorando a gobiernos de distinto tipo en todo el mundo, incluyendo a varios regímenes autoritarios. Sin embargo, se ha quedado atrapado en las ideas de su libro inicial, sin mayores innovaciones. Busca ser presidente del Perú en 2021, por Avanza País.

Pedro Vílchez Malpica continuó siendo pastor evangélico y muy cercano con el fujimorismo. Murió en enero de 2020.

Carlos García y García continuó con sus labores religiosas y, en 2002, fue condecorado por el Congreso de la República, debido a sus contribuciones a la democracia. Falleció en mayo de 2016.

Ernesto Yoshimoto fue parte del directorio de APENKAI, la ONG cuestionada por sus manejos de las donaciones japonesas.

Alfonso Barrantes se retiró de la vida política en 1992. Dio contadas entrevistas donde manifestó su oposición a Fujimori. Falleció en La Habana en diciembre de 2000, cuando estaba tratándose un cáncer.

Henry Pease coronó su carrera como parlamentario al ser presidente del Congreso de la República en 2003. En 2006, dejó la

vida congresal y, en 2011, postuló nuevamente al parlamento por Perú Posible, sin éxito. Dedicó los últimos años de su vida a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, así como a la producción académica. Falleció en agosto de 2014.

Fernando Belaúnde Terry se retiró de la vida pública en 2001. Su compañera de las últimas décadas, Violeta Correa, falleció en junio de ese año. Cuando murió, el arreglo floral que le dejó decía lacónicamente: «Espérame. Fernando».

Su última aparición pública se produjo para la toma de mando de Alejandro Toledo. Murió el 4 de junio de 2002. Se le recuerda como un hombre demócrata y honesto, a pesar de los yerros de sus dos gobiernos.

Luis Bedoya Reyes es el último patriarca político que le queda al Perú. Cumplió 100 años en 2019. Mantiene su lucidez y, esporádicamente, brinda entrevistas a los medios de comunicación, así como consejos a los militantes del Partido Popular Cristiano.

Luis Alva Castro fue elegido parlamentario entre 2001 y 2011. Tuvo un polémico paso por el Ministerio del Interior entre 2007 y 2008, durante el segundo gobierno de Alan García. Actualmente, tiene impedimento de salida del país, pues se le sindica como presunto receptor de donativos irregulares de campaña por parte de Odebrecht en 2006.

Manuel Moreyra siguió oponiéndose al régimen fujimorista hasta su fallecimiento en 2000.

Javier Silva Ruete se convirtió en ministro de Economía y Finanzas de los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, siendo uno de los principales artífices del crecimiento económico del Perú en las últimas dos décadas. Murió en 2012.

Juan Incháustegui también participó en el gabinete de Paniagua y estuvo muy ligado a dos importantes proyectos educativos: TECSUP y la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Partió de este mundo en febrero de 2019.

Ricardo Belmont Cassinelli fue invitado por el Frente de Centro, encabezado por Valentín Paniagua en 2006, para participar como candidato al Congreso de la República. Aunque inicialmente no obtuvo una curul, se convirtió en parlamentario cuando falleció

Alberto Andrade en 2009. Mantuvo la propiedad de RBC Televisión hasta hace pocos años, cuando ingresó en disputas legales con uno de sus hijos. Postuló a la alcaldía de Lima en 2018 por Perú Libertario, con mensajes abiertamente xenofóbicos. De cuando en cuando reaparece con algún mensaje político en Facebook. Hoy es candidato al Congreso de la República con Unión Por el Perú, grupo que sirve a los intereses de Antauro Humala.

Máximo San Román continuó con su negocio de máquinas para la industria panificadora, con gran éxito. Postuló nuevamente a la vicepresidencia en 2006, con el pastor Humberto Lay (Restauración Nacional) y, en 2011, con el economista Pedro Pablo Kuczynski (Alianza Por el Gran Cambio). Cuando Kuczynski fue electo como presidente en 2016, lo acompañó como consejero. Renunció en 2017 cuando PPK le otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Hoy está dedicado a su empresa. Amagó con postular a la Presidencia de la República con Contigo, el partido sucedáneo del grupo que llevo a Kuczynski a ese puesto, pero terminó declinando en ese intento.

Diego García–Sayán se convirtió en ministro de Justicia en el gobierno de Paniagua y, posteriormente, en canciller durante la administración Toledo. Tuvo dos mandatos como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a presidir. Fue también el presidente de la comisión de alto nivel para la creación del Lugar de la Memoria, un museo sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Sigue siendo el director de la Comisión Andina de Juristas y consultor internacional sobre derechos humanos.

Enrique Chirinos Soto dejó la política luego de su derrota parlamentaria en 2000. En sus últimos años, dictó conferencias sobre temas jurídicos e históricos. Murió en 2007.

Rafael Rey continuó en el Congreso de la República hasta 2006 y fue parlamentario andino entre 2006 y 2016. Fue ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García y tuvo que renunciar en septiembre de 2009, cuando emitió una norma que era una Ley de Amnistía apenas disfrazada para militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Postuló en la

fórmula presidencial de Fuerza Popular en 2011. Es miembro del directorio del Banco Central de Reserva desde 2016.

Francisco Tudela se mudó a Chile luego de culminado el régimen fujimorista. Allí cumplió actividades académicas y como abogado. Volvió al Perú en el segundo gobierno de Alan García y, durante años, ocupó espacio en los medios por una disputa alrededor del manejo del patrimonio de su padre. Desde 2012, es comentarista habitual en varios medios de comunicación. Su hija postula al Congreso de la República en la lista de Avanza País, que respalda la candidatura presidencial de Hernando de Soto. Él es asesor de dicho candidato.

José Barba Caballero continuó como socio político de Rafael Rey durante dos décadas. Fue embajador del Perú en Panamá durante el segundo gobierno de Alan García.

Rey y Barba conducen desde hace algunos años un programa de comentarios políticos en Willax, un canal de cable, con contenidos bastante conservadores. Tudela participó en dicho espacio hasta abril de 2020, cuando dejó el programa.

Víctor Paredes Guerra volvió a postular al Congreso de la República en 2020, por Fuerza Popular. Reconoció que fue llamado como candidato por el propio Fujimori desde la prisión. No fue electo. Tienta suerte nuevamente en 2021 por el fujimorismo.

Luz Salgado fue reelecta en 2001. Sin embargo, tuvo que dejar el Congreso de la República ese mismo año, junto a Carmen Lozada de Gamboa, debido a que fueron acusadas, junto a otros parlamentarios, por infracción a la Constitución, gracias al video del «plenito» con Montesinos, donde hablan sobre las instituciones judiciales en 1998. En 2008, fue absuelta de un proceso que se le siguió por una no probada recepción de dinero por parte de Montesinos. Salgado volvió al Congreso en 2011 y se quedó allí hasta 2020. Fue presidenta de ese poder del Estado en 2016. Lozada de Gamboa ha trabajado como asesora parlamentaria en los últimos años y hoy es parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Ambas siguen siendo defensoras a ultranza de Alberto Fujimori.

Martha Chávez volvió a ser electa parlamentaria en 2001. Fue procesada por una declaración de Montesinos, en la que la sindicó

como receptora de dinero ilegal y estuvo fuera del Congreso entre 2002 y 2005. Fue declarada inocente y retomó su curul.

Postuló a la presidencia de la República por una nueva agrupación fujimorista, Alianza Para el Futuro, en 2006. Fue parlamentaria entre 2011 y 2016 y asesora del Congreso de la República desde 2016.

Fue electa parlamentaria en 2020 por Fuerza Popular. Luego de los eventos de noviembre de aquel año, decidió renunciar al fujimorismo. No ha variado su estilo.

Luisa María Cuculiza fue elegida parlamentaria entre 2006 y 2016 por el fujimorismo. Mantuvo el mismo estilo que la caracterizó durante la década de los noventa, con sus mismos acentos en lo que se refiere a la lucha para enfrentar la violencia contra la mujer. No postuló en 2016 por Fuerza Popular y, a pesar de que otras agrupaciones le ofrecieron postular por sus filas, no aceptó. En 2018, decidió retirarse de la política, luego de enfrentar un grave problema de salud. De vez en cuando es entrevistada aún por algunos medios, para hablar sobre el fujimorismo y temas de género.

Abimael Guzmán Reynoso tiene ochenta y seis años. Debido a una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó buena parte de la legislación antiterrorista dictada en el gobierno de Alberto Fujimori, fue sometido a un nuevo proceso penal por sus crímenes. Ha sido condenado en dos ocasiones a cadena perpetua.

Su ahora esposa Elena Iparraguirre también fue sentenciada a la misma pena. Cumplen su carcelería en dos prisiones distintas de Lima, con máxima seguridad.

Guzmán ha escrito sus memorias, De puño y letra, publicadas en 2014 por sus seguidores fuera de prisión. Nunca ha expresado arrepentimiento alguno por sus crímenes. Es uno de los personajes más repudiados en el país.

El testimonio de Iparraguirre consta en el libro La guerra senderista, escrito por el historiador Antonio Zapata, a partir de conversaciones que tuvo con la lideresa de la agrupación subversiva. Lo último que se supo de Iparraguirre es la cuenta que

tenía conjuntamente con Nelly Evans en Suiza, desde la década de los noventa.

Laura Zambrano y María Pantoja, capturadas junto a Guzmán, fueron también condenadas a cadena perpetua. A la misma pena han sido sentenciados Óscar Ramírez Durand, Osman Morote Barrionuevo, Margot Liendo, Edmundo Cox y Florentino Cerrón.

Carlos Incháustegui dejó la prisión. Cumplió su pena de 22 años de prisión en 2014. No se arrepintió de su permanencia en Sendero Luminoso.

Maritza Garrido Lecca salió en libertad en 2017, luego de cumplir 25 años de condena. Pagó parte de la reparación civil. No ha mostrado arrepentimiento por sus actos. La última vez que se le vio, a inicios de 2020, estaba en una reunión social en la sede de playa del Club Regatas Lima, junto a un familiar.

Una facción de Sendero Luminoso, dirigida por los hermanos Quispe Palomino, sigue alzada en armas en la zona del valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), ligada a actividades de custodia del narcotráfico, aunque diezmada en los últimos años por deserciones y éxitos militares del Estado peruano. La facción que estaba en el Alto Huallaga, liderada por Florindo Flores Hala «Artemio», fue desarticulada en 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Aunque muchos de los sentenciados por terrorismo han abandonado cualquier contacto con Sendero, otros condenados y sus familiares se encuentran agrupados en el denominado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), que postula una amnistía general vinculada al periodo de violencia. MOVADEF buscó su inscripción como partido político en 2011, pero su solicitud fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones por ser un movimiento contrario a la democracia.

Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue condenado, en los nuevos juicios que se le siguió, a 35 años de prisión. Actualmente, cumple su pena en el penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

Lori Berenson fue sometida a un nuevo proceso judicial que culminó en 2001, siendo condenada a 20 años de prisión, por colaboración con el terrorismo a través del MRTA. Su caso llegó

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado peruano fue declarado responsable de violaciones al debido proceso por su primer juicio, pero fue exonerado de responsabilidad por el segundo proceso. Berenson salió en libertad condicional en 2012 y cumplió su pena en 2015, tras lo cual fue expulsada del Perú a Estados Unidos. Ha reconocido a medias su responsabilidad.

Otros exmiembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como Alberto Gálvez Olaechea y Peter Cárdenas Schulte ya cumplieron sus penas. Gálvez Olaechea ha hecho un deslinde mayor con su pasado armado y ha escrito varios libros sobre su experiencia en prisión y como militante de una agrupación subversiva. Cárdenas mantiene ideas radicales, aunque se ha alejado de la violencia.

Para todo fin práctico, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru dejó de existir el 22 de abril de 1997.

Benedicto Jiménez dejó la Policía Nacional del Perú. Se dedicó a actividades como abogado. En 2006, postuló frustradamente a la alcaldía de Lima por el APRA y, en 2007, fue jefe del Instituto Nacional Penitenciario por breve tiempo. En 2014, terminó en prisión por sus presuntos vínculos con una red de tráfico de terrenos liderada por el abogado Rodolfo Orellana. En 2017, fue conducido al Hospital de Policía por un mal cardiaco, a la par que era condecorado como héroe de la democracia por el Congreso de la República. Hoy está procesado por el caso Orellana, pero ya en libertad.

Marco Miyashiro llegó a ser director general de la Policía Nacional. Entre 2016 y 2019, se convirtió en congresista por Fuerza Popular, con posiciones crecientemente conservadoras. Hoy es parte del equipo de campaña de Hernando de Soto.

Antonio Ketín Vidal fue ministro del Interior durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. En 2006, el periodista Carlos Paredes publicó un libro donde expuso varias acusaciones en contra del general retirado. Paredes fue querellado en varias oportunidades por Vidal, siendo absuelto en todas las ocasiones. Hoy está retirado de la vida pública.

Hugo Otero volvió a intervenir como publicista y asesor en las campañas presidenciales de Alan García en 2006 y 2016, así como en la de Pedro Pablo Kuczynski en 2011. Fue embajador en Chile (2006–2008) y Ecuador (2016–2018). En 2019, se mostró autocrítico de la línea conservadora que tuvo el APRA desde 2006. Mantiene dichas críticas ahora que la añeja agrupación electoral ha perdido su inscripción electoral.

Ezequiel Ataucusi murió en junio de 2000, víctima de una insuficiencia renal. Aunque sus fieles esperaron su resurrección, esta nunca se produjo. Desde entonces, su movimiento religioso y su partido político, el FREPAP, eran dirigidos por su hijo Jonás, con un perfil bastante bajo.

Tanto la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal como el Frente Popular Agrícola del Perú han estado marcados por disputas internas durante las últimas dos décadas.

El FREPAP volvió a las primeras planas políticas cuando obtuvo 15 congresistas en las elecciones parlamentarias de 2000, por su identificación como una fuerza política honesta, aunque conservadora. Al cierre de este libro, mantiene opciones de pasar la valla electoral y obtener representación parlamentaria en 2021.

Jaime Bayly remeció al país en la década de los noventa, con un conjunto de novelas en que se hablaba abiertamente de su bisexualidad y donde se aludía a personajes de la vida real con seudónimo. Bayly mantuvo una carrera como escritor y entrevistador de televisión, entre Perú y Estados Unidos, donde actualmente reside. Sus posiciones políticas son crecientemente conservadoras.

César Hildebrandt sigue siendo uno de los periodistas más influyentes en el Perú. Tuvo algunos programas televisivos en Red Global, Frecuencia Latina y RBC Televisión durante la década de 2000. Desde 2011, es director del semanario Hildebrandt en sus Trece, cuyos reportajes y editoriales son poco indulgentes con todos los sectores de la política peruana. Este medio vive exclusivamente de sus ventas. Es invitado ocasionalmente a programas de radio y televisión.

Francisco Loayza Galván fue consultado por muchos periodistas durante los años finales del régimen fujimorista, así como a su caída, por ser la persona que introdujo a Montesinos al círculo del poder. Falleció hace algunos años.

Carlos Boloña Behr fue candidato presidencial en 2001 por Solución Popular, el grupo formado por Absalón Vásquez, una vez que salió del fujimorismo institucional. Obtuvo 1.69 % de los votos y un parlamentario. Fue condenado por corrupción de funcionarios y falsedad ideológica por la entrega de los 15 millones de dólares de compensación a Vladimiro Montesinos, así como por el intento de golpe de Estado contra Fujimori en 2000. Cumplió prisión suspendida. Falleció en Miami en 2018.

Juan Carlos Hurtado Miller estuvo prófugo de la justicia durante diez años, hasta que se entregó en 2011. Sus procesos judiciales ya fenecieron. Sus últimas apariciones públicas se debieron a los aniversarios del shock que anunció en agosto de 1990. «Que Dios nos ayude» sigue siendo una de las frases más recordadas de la política peruana.

Jorge Camet murió en 2013, una semana después de ser absuelto en su último juicio.

Jorge Baca Campodónico fue detenido en 2003 en Argentina, cuando se desempeñaba como asesor del Fondo Monetario Internacional en ese país. Baca se terminó allanando a la extradición. Fue condenado en algunos de los procesos en su contra, en particular, por el salvataje del Banco Latino y el caso del RUC Sensible. Fue absuelto en otros juicios. Es consultor económico y columnista del diario Expreso, así como miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori en 2021.

Carlos Torres y Torres Lara no fue reelecto como parlamentario por las filas de Perú 2000. Falleció víctima de cáncer al cerebro en junio de 2000.

Alfonso de los Heros volvió a la práctica privada del Derecho en el estudio Echecopar, del cual hoy es consejero. Presidió la Asociación de AFP. Sigue siendo un ejemplo como demócrata.

Óscar de la Puente Raygada fue absuelto del juicio por el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, al igual que Boloña, Augusto

Antonioli, Jaime Yoshiyama, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Alfredo Ross Antezana, Víctor Paredes Guerra y Jaime Sobero Taira. Sin embargo, se le retiraron las condecoraciones otorgadas por la Cancillería, luego de la investigación interna sobre la purga de diplomáticos de 1992.

Augusto Blacker Miller fue detenido en Estados Unidos y en Albania, con fines de ser extraditado al Perú, pero logró eludir la acción de la justicia nacional. Fue condenado en el mencionado país europeo en 2017 a ocho años de prisión, por un caso de estafa.

Alfonso Bustamante y Bustamante continuó en la actividad empresarial luego de su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue presidente de Telefónica del Perú y miembro del directorio de varias compañías.

Efraín Goldenberg fue procesado por enriquecimiento ilícito, peculado y asociación ilícita. Las denuncias en su contra fueron archivadas.

Dante Córdova se dedicó a la actividad empresarial y hoy es miembro del Consejo Nacional de Educación.

Alberto Pandolfi fue inhabilitado para la función pública por diez años en 2003. En 2007, el gobierno de Alan García lo nombró jefe de un programa para enfrentar el Fenómeno del Niño, pero fue cesado por su inhabilitación. En 2012, fue absuelto por la Corte Suprema.

Javier Valle Riestra se volvió a reconciliar con el APRA y fue elegido congresista en 2006. Decepcionado del nivel del debate parlamentario, planteó renunciar, sin éxito. Es invitado ocasionalmente a comentar la vida política y jurídica peruana. Sigue postulando las leyes de amnistía como una posibilidad de reconciliación en el Perú.

Víctor Joy Way fue condenado por defraudación tributaria, así como por complicidad en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Cumplió siete años en prisión. Salió de la cárcel en 2008. Está retirado de la actividad pública. Tiene 75 años.

Alberto Bustamante Belaúnde fue absuelto de todos los procesos en los que se vio involucrado. Su relato novelado del fin del régimen, Del diablo su país, buscó conferirle mucho crédito en la salida del

régimen fujimorista. En sus últimos años, fue asesor de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Murió en 2008, víctima de un mal cardiaco.

Federico Salas Guevara fue condenado a tres años de prisión suspendida. En 2006, resultó electo gobernador regional de Huancavelica. Postuló nuevamente a ese puesto en 2014 y 2018, sin éxito.

Jaime Yoshiyama Tanaka volvió a la vida política en 2011, como parte de la fórmula presidencial de Keiko Fujimori. Fue secretario general de Fuerza Popular y una de las personas que más influencia política tuvo en Keiko Fujimori durante varios años. Hoy se encuentra en arresto domiciliario, debido a sus supuestos vínculos con el manejo de dinero de campaña otorgado irregularmente por Odebrecht.

Alfonso Panizo fue dos veces cabeza de la Comisión Nacional de Inteligencia, el reemplazo del Servicio de Inteligencia Nacional, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Filtraciones de información de la institución lo alejaron del puesto definitivamente en 2003. Pasó sus últimos años alejado de la vida pública. Falleció en octubre de 2019.

Jaime Salinas Sedó tiene ochenta y tres años. Él y sus compañeros siguen bregando por la nulidad de la sentencia por la acción del 13 de noviembre de 1992. El Ejército revindicó a los militares implicados en una ceremonia desarrollada al caer el régimen de Fujimori.

Rodolfo Robles Espinoza sigue dedicando su vida a compatibilizar la acción militar con el respeto a los derechos humanos. No solo fue llamado como testigo en el juicio a Alberto Fujimori, sino que se ha desempeñado como perito militar en procesos por violaciones a los derechos fundamentales en Centroamérica y en el Perú.

Leonor La Rosa vive en Suecia. Se separó de su esposo. Fue condecorada e indemnizada por el Estado peruano durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Carlos Vidal Layseca fue rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre 1994 y 1999. Falleció en 2017. La Facultad de Salud Pública y Administración de dicha casa de estudios lleva

su nombre y se le reconoce como el artífice de la respuesta peruana frente a la epidemia de cólera de 1991.

Felipe Osterling murió a los ochenta y dos años en 2014. Hasta el final de sus días, defendió la democracia y condenó el golpe del 5 de abril de 1992. Su hija Madelaine postuló por Fuerza Popular a la alcaldía de San Isidro ese mismo año. En su última entrevista, el expresidente del Senado se pronunció a favor de un arresto domiciliario para Fujimori, por razones de edad.

Roberto Ramírez del Villar falleció en abril de 1995. La casa donde vivió sus últimos años hoy es la sede institucional del Instituto de Defensa Legal.

Jorge del Castillo fue reelecto como parlamentario entre 2001 y 2011. Fue presidente del Consejo de Ministros entre 2006 y 2008, cuando tuvo que dejar el puesto al verse involucrado en el escándalo de los Petroaudios. Entre 2011 y 2016, brindó labores de asesoría empresarial a compañías mineras. Fue nuevamente congresista entre 2016 y 2019. Es investigado por un supuesto pago irregular a una asesora en su último periodo parlamentario. Hoy es conductor de un programa semanal en el canal de televisión de su hijo Miguel.

Samuel Dyer Ampudia encabezó desde 2001 el grupo DC, dedicado a la agroexportación y la pesca. Se trata de un conglomerado empresarial importante en el país. Dyer ha mantenido buenas relaciones con los gobiernos de Toledo —de quien ha sido amigo personal e incluso jefe de personeros—, García y Kuczynski. Hoy sus hijos manejan conjuntamente su negocio con él.

Carlos Ferrero Costa fue presidente del Congreso luego de la asunción de Paniagua como presidente. Continuó en ese cargo hasta 2003. Fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo entre 2003 y 2005. Hoy está retirado de la actividad pública.

Daniel Mora pasó a hacer política desde las filas de Perú Posible. Fue jefe del Consejo Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Alejandro Toledo. Fue congresista entre 2011 y 2016. Su gran triunfo fue la nueva Ley Universitaria, vigente desde 2014. Se alejó de las filas toledistas en 2015. Integró posteriormente el Partido Morado,

pero, a pocas semanas de la elección parlamentaria de 2020, una acusación de violencia contra su esposa sepultó su carrera política. Tuvo que renunciar a la agrupación política y a su candidatura al Congreso.

Susana Villarán dejó una carrera en el mundo de los derechos humanos para hacer política. En 2006, postuló a la presidencia de la República por el Partido por la Democracia Social, sacando una votación exigua. En 2010, postuló a la alcaldía de Lima por Fuerza Social, un conglomerado de grupos de izquierda, ganando ajustadamente la elección. Su gestión estuvo marcada por la búsqueda de políticas públicas más allá del cemento, la impericia política y, finalmente, la recepción de fondos de campaña por parte de empresas brasileñas contratistas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cumplió prisión preventiva por este motivo. Actualmente, está en arresto domiciliario.

Yehude Simon no fue indultado por el gobierno de Fujimori. Tuvo que ser el gobierno de transición de Valentín Paniagua el que procediera a otorgarle dicho derecho de gracia. Tuvo un exitoso retorno a la política, al ser elegido dos veces como presidente regional de Lambayeque. Entre 2008 y 2009, ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García y tuvo que renunciar por el conflicto social en Bagua, que costó la vida de 33 personas y la desaparición de un policía. Simon fue electo como congresista entre 2011 y 2016. Actualmente está investigado por sus presuntas conexiones con el caso Lava Jato.

Luis Giampietri se convirtió en primer vicepresidente de la República y congresista entre 2006 y 2011, cuando fue invitado a participar por Alan García en el APRA. Desde su puesto, asumió posiciones conservadoras y contrarias a las organizaciones no gubernamentales.

Francisco Sagasti es congresista de la República desde 2020, por el Partido Morado. Durante los últimos años, tuvo una carrera vinculada al impulso de las políticas públicas en ciencia y tecnología. Desde noviembre de 2020, es el presidente de la República del Perú.

Javier Diez Canseco estuvo en el Congreso entre 2001 y 2006. Postuló a la presidencia por el Partido Socialista en 2006 con exiguos resultados. Para 2011, fue convocado por Ollanta Humala para participar en su lista al Congreso. Sin embargo, la desconfianza entre el nuevo presidente y el veterano parlamentario fue creciendo. Para 2012, había dejado la bancada del Partido Nacionalista. En 2013, una falsa imputación de un supuesto conflicto de interés generó una suspensión de sus funciones como parlamentario. Antes de volver, falleció víctima de un cáncer. Sigue siendo recordado con cariño y respeto por sus compañeros de izquierda.

Sally Bowen tuvo que padecer un calvario en el Poder Judicial, cuando el entonces investigado por narcotráfico, Fernando Zevallos, la querelló por una mención hecha por un informante de la DEA en el libro El Espía Imperfecto. Bowen fue absuelta y Zevallos terminó siendo condenado por narcotráfico. Sin embargo, el proceso la desgastó al punto que dejó el Perú en 2008. Hoy está retirada del periodismo.

Dennis Jett dejó la diplomacia y pasó al mundo académico. Es actualmente docente en la Universidad Estatal de Pennsylvania.

Carlos Bruce permaneció en Perú Posible desde 2000 hasta 2011. Fue un exitoso ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo. Pasó a ser parlamentario en 2006 y candidato a la vicepresidencia en 2011. Sin embargo, ese mismo año, fue expulsado del partido debido a que se mostró en contra de apoyar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Bruce continuó como congresista independiente en 2011. En 2014, dio a conocer al país que era homosexual, convirtiéndose en el primer parlamentario abiertamente gay de la historia peruana. En 2016, resultó reelecto congresista por Peruanos Por el Kambio y fue brevemente ministro de Vivienda en los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra. Hoy se dedica a sus negocios gastronómicos y es parte del equipo técnico de la candidatura de George Forsyth, el hijo del diplomático Harold, quien fue repuesto como embajador luego de la caída de Fujimori.

Alejandro Afuso volvió al Estado, para trabajar en temas de ciencia y tecnología. Sigue siendo reconocido como un funcionario

eficiente y honesto.

Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry volvieron a sus puestos como magistrados del Tribunal Constitucional en noviembre de 2000. Aguirre Roca y Rey Terry fallecieron en 2004, cuando estaban por cumplir su periodo en el TC. Revoredo cumplió su periodo como magistrada hasta 2005 y es una de las dos mujeres que ha ocupado una plaza en esta institución. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Academia Peruana de Derecho y fue llamada para la Comisión de Reforma de la Administración de Justicia en 2018 por el presidente Martín Vizcarra.

Los vladivideos de Dionisio Romero Seminario aceleraron el proceso de transición hacia un nuevo jefe en el grupo empresarial familiar que encabezaba. En 2003, pasó la posta a su hijo, Dionisio Romero Paoletti. En 2009, su vástago asumiría la presidencia de Credicorp, el brazo financiero del grupo. Fue absuelto de todos los cargos judiciales en su contra. Está retirado de la vida pública. El Grupo Romero sigue siendo uno de los más importantes en el Perú.

Andrónico Luczic se salvó de la prisión. Su caso por presunto tráfico de influencias terminó en 2006 por prescripción. Sigue siendo uno de los hombres más ricos y poderosos de Chile. Sin embargo, la fábrica de Lucchetti en Lima cerró en 2003, por decisión de la Municipalidad de Chorrillos, lo que ocasionó el cierre de las operaciones de la empresa de fideos en el Perú. Luczic buscó una compensación en instancias internacionales, sin éxito.

Augusto Vargas Alzamora falleció el 4 de septiembre de 2000. En 2001, la colaboradora eficaz, Matilde Pinchi Pinchi, señaló que era posible que hubiera sido envenenado. Las investigaciones fiscales no confirmaron dicha versión.

Juan Luis Cipriani permaneció como arzobispo de Lima hasta el 25 de enero de 2019. Su periodo duró exactamente veinte años. Durante esas dos décadas, continuó generando polémica por sus posiciones conservadoras, sobre todo, en materia de género y sexualidad. También prosiguió con sus posturas políticas cercanas al fujimorismo. Buena parte de ese periodo lo dedicó a la disputa por el control de la Pontificia Universidad Católica del Perú, zanjada por

la Santa Sede en 2016. En 2015, se le encontraron plagios en artículos de opinión en El Comercio, lo que motivó que ese diario dejara de contar con él como colaborador eventual. Desde su jubilación, ha perdido la notoriedad política y mediática que adquirió durante su periodo. Vive en Roma desde 2020, sin que se sepan los motivos.

Hubert Lanssiers murió en 2006, víctima de una enfermedad pulmonar. La Obra Recoletana de Solidaridad continúa hasta el día de hoy. Su nombre bautiza el auditorio principal del Lugar de la Memoria.

Juan Julio Wicht volvió a la docencia en la Universidad del Pacífico, luego de su cautiverio. Pocos años más tarde, tuvo problemas de salud que le hicieron dejar la vida académica y pastoral. Falleció en marzo de 2010, por un coma diabético. Hoy el teatro de la UP lleva su nombre en su honor.

Ángel Páez sigue siendo el jefe de la Unidad de Investigación de La República. Continúa publicando reportajes incómodos para los poderosos de ayer y hoy.

Edmundo Cruz ya se jubiló de dicho diario y hoy hace colaboraciones eventuales para Ojo Público, un portal de periodismo de investigación, así como talleres para la Fundación Gustavo Mohme Llona.

Ricardo Uceda escribe una columna semanal de opinión e investigación para La República, llamada «El Informante», además de dirigir el Instituto Prensa y Sociedad.

Fernando Rospigliosi fue dos veces ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo, así como jefe del Consejo Nacional de Inteligencia. Apoyó la candidatura de Toledo en 2011 y fue brevemente asesor de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Fue columnista de El Comercio durante varios años, con posiciones cada vez más conservadoras. Luego de haber sido ferviente antifujimorista, hoy postula al Congreso con Fuerza Popular.

Cecilia Valenzuela hizo una carrera interesante en televisión como directora de programas periodísticos en Canal N, Frecuencia Latina y Willax. Pasó de posiciones de centro izquierda a la derecha en el

lapso de una década. Hoy, un poco más al centro, dirige Perú.21, tabloide serio del Grupo El Comercio.

Rosa María Palacios hizo una carrera periodística interesante en radio y televisión. Hoy es una de las periodistas más seguidas en redes sociales en el Perú. Conduce un programa en Radio Santa Rosa y en la plataforma digital de La República.

Bernardo Roca Rey sigue siendo accionista del Grupo El Comercio y mantiene otros negocios al margen de su familia. Es reconocido como el fundador de Canal N.

José Arrieta volvió al Perú. Alternó labores periodísticas con trabajo en comunicación corporativa. Hoy hace consultorías sobre comunicación y se dedica a la docencia universitaria. En 2019, publicó junto al periodista Víctor Tipe un libro acerca de las acciones de Sendero Luminoso en el VRAEM, El Valle de la Muerte.

Gonzalo Quijandría volvió al periodismo desde Semana Económica y, una vez recuperado el canal, a través de Frecuencia Latina. Posteriormente, pasó a trabajar en asuntos corporativos de empresas mineras, hasta el día de hoy.

Luis Iberico hizo carrera política. Luego de su paso por el Frente Independiente Moralizador, se inscribió en Alianza Para el Progreso y trabajó en el consorcio universitario de César Acuña. Fue nuevamente electo congresista en el periodo 2011–2016, siendo presidente del Congreso en 2015. Fue embajador del Perú en Italia entre 2016 y 2018. En 2019, volvió a las labores parlamentarias brevemente, como accesitario del congresista Edwin Donayre, condenado por corrupción. Es miembro de APP y candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por Acuña en 2021.

Acuña, luego de ser un casi anónimo parlamentario en 2000, es hoy uno de los políticos más poderosos del país y tienta la Presidencia de la República por segunda vez. Su polémica trayectoria ha sido reseñada en un completo libro del periodista Christopher Acosta, publicado por esta misma casa editorial.

Jaime de Althaus condujo el programa de entrevistas La Hora N durante 18 años. Sus posiciones a favor del libre mercado son aplaudidas por unos y caricaturizadas por otros. Volvió a tener cierta

cercanía con posiciones cercanas al fujimorismo. Es columnista de El Comercio hasta el día de hoy y animador del portal Lampadia.

Pedro Salinas continuó haciendo programas en radio y televisión, a la par que fundó una consultora de comunicación corporativa. Desde hace diez años, investiga los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización fundamentalista católica a la que perteneció en su juventud. Las revelaciones de Salinas y la periodista Paola Ugaz constituyen el mayor escándalo en la historia reciente de la Iglesia Católica peruana. Mantiene una columna semanal sobre política y religión en La República.

Umberto Jara continúa escribiendo libros periodísticos sobre temas de actualidad política, social y deportiva. Es consultor en temas legales y comunicacionales. Mantiene posiciones políticas conservadoras.

Fernando Viaña realizó un tránsito hacia la otra vereda. En 2002, asumió la dirección periodística de Panamericana Televisión, controlada por los Schutz. En 2006, se convirtió en candidato de Alianza para el Futuro, la lista fujimorista en dicha elección. En 2013, dirigió El Diario de Hoy, un periódico ligado al APRA. Reapareció en 2016, como conductor del programa Las cosas como son, espacio electoral producido por la Universidad San Martín de Porres para Panamericana, que se vio envuelto en una polémica sobre unos audios trucados que buscaron desacreditar a un testigo que había declarado contra el empresario Joaquín Ramírez, cercano a Keiko Fujimori.

Nicolás Lúcar pasó la mayor vergüenza de su vida cuando presentó un reportaje armado sin pruebas contra Valentín Paniagua, en su programa Tiempo Nuevo, a inicios de 2001. El entonces presidente le respondió en forma firme y terminó colgándole el teléfono. José Enrique Crousillat lo hizo renunciar. Sin embargo, fue nuevamente contratado por sus cuñadas, durante el breve lapso en el que ellas manejaron América Televisión. Luego de algunos años sin pantalla, Lúcar volvió presentando noticias inactuales en programas de ATV y Frecuencia Latina. Hoy ha vuelto al periodismo político, como conductor en Exitosa.

Álamo Pérez Luna hizo un programa en Canal A en 2001 llamado Mea Culpa, donde lo primero que hizo fue pedir disculpas por la entrevista hecha a Fujimori y Montesinos. Su carrera ha estado más cerca del mundo del entretenimiento y los programas de farándula durante los últimos años.

Beto Ortiz tuvo una carrera irregular. Cuando hizo política en serio, logró muy buenas entrevistas, sobre todo, en la campaña electoral de 2011. Cuando le ganó el lado farandulero, terminó haciendo programas para el olvido, como la emisión inicial de El valor de la verdad, en el que una joven reveló dedicarse al ejercicio de la prostitución a cambio de una alta suma de dinero y, semanas después, fue asesinada por su expareja. Su número de seguidores y de detractores es parejo en redes sociales. Hoy, cercano a posturas conservadoras, tiene un programa diario en Willax.

Abraham Levy continuó con su carrera como comunicador vinculado a temas climáticos en varios medios de comunicación. En 2007, volvió a la luz pública cuando se detectó que venía presentando informes que alarmaban sobre un Fenómeno del Niño que nunca se produjo y que, además, su empresa consultora ganó un contrato con el Estado durante el gobierno de Alan García. Levy tiene una fuerte presencia en Twitter y otros espacios mediáticos.

César Luna Victoria dejó el estudio Muñiz y hoy es socio del estudio Rubio Leguía & Normand. Ha seguido ligado al fujimorismo, como parte de su equipo técnico. Es conocido como uno de los mejores tributaristas del país.

Edgardo Mosqueira, a pesar de su paso por el gobierno de los años noventa, hizo una carrera en el Banco Mundial como funcionario de esta entidad. Estuvo cercano a Keiko Fujimori en sus campañas electorales en 2011 y 2016.

Belisario de las Casas también se mantuvo junto al fujimorismo durante los siguientes años. Incluso ha figurado como financista de Alberto Fujimori cuando estuvo diez meses en libertad. Continuó con la crianza de caballos de paso.

José Chlimper volvió a su negocio como agroexportador. Pasó a la primera fila de Fuerza Popular desde 2011. Actualmente es director del Banco Central de Reserva. Está siendo investigado por

el origen de los fondos de campaña de su agrupación política, así como por los audios trucados para tratar de exculpar a Joaquín Ramírez, difundidos en Panamericana Televisión en la campaña de 2016. Su apellido sirvió para bautizar una norma que impulsó al final del régimen de Fujimori, en la que se brindó beneficios tributarios y un régimen especial laboral a las empresas agroexportadoras. Dicha norma fue derogada en diciembre de 2020.

Alejandro Aguinaga es el médico personal de Alberto Fujimori y ha sido congresista entre 2006 y 2016. Al igual que Cuculiza, tuvo que dejar la lista fujimorista en 2016 por renovación. Está siendo investigado en el Ministerio Público por el caso de las esterilizaciones forzadas. Actualmente, es presidente del Jockey Club del Perú y candidato al Congreso por el fujimorismo.

Gonzalo Romero de la Puente se presentó como candidato al Congreso por el fujimorismo en 2011, representando al Callao. No fue elegido. También aportó a dicha campaña electoral.

Lourdes Flores Nano asumió el liderazgo del Partido Popular Cristiano a partir de 2001. Postuló a la presidencia de la República en 2001 y 2006, encabezando la alianza Unidad Nacional. No pudo pasar a segunda vuelta en ambas ocasiones, siendo encasillada como una postulante poco cercana a los intereses populares o demasiado cercana a los ricos.

En 2010, se presentó como candidata a la alcaldía de Lima, siendo la favorita durante varios meses. Perdió nuevamente ante Susana Villarán. Esta nueva derrota supuso un retiro de la primera fila de la política y de su liderazgo en el PPC.

En 2016, dejó su retiro de la política para postular como primera vicepresidenta de la fórmula electoral de Alan García, en una alianza sui generis entre el APRA y el PPC. Quedó en quinto lugar.

Flores Nano es investigada por haber recibido fondos de campaña provenientes de Odebrecht en 2006 y 2010. Reconoció la recepción del dinero, pero argumentó que no era delito. Está llevando su proceso en libertad. Continúa con sus labores como abogada y consejera en el PPC.

José Ugaz continuó como procurador ad hoc para el caso Fujimori–Montesinos hasta el 31 de enero de 2002. Renunció

debido a la ambivalencia que tuvo el entonces presidente Alejandro Toledo para defenderlo de los ataques de algunos congresistas oficialistas.

Fue sucedido en el cargo por Luis Vargas Valdivia, quien se quedó en el puesto hasta diciembre de 2004, cuando fue cesado por diferencias con el gobierno, dado que su mandato se amplió a indagaciones anticorrupción en general, que comenzaron a implicar a personas vinculadas a la administración Toledo.

Las gestiones de Ugaz y Vargas Valdivia fueron exitosas en el impulso a buena parte de los casos vinculados a la red de corrupción Fujimori–Montesinos. Gracias a su trabajo, así como al de fiscales y jueces, se logró condenar a varios de los integrantes de la red, sobre todo, a funcionarios públicos.

Vargas Valdivia fue sucedido en el puesto por el abogado Antonio Maldonado, quien asumió el puesto en enero de 2005 y fue el encargado de preparar, junto con un equipo de la Cancillería peruana, los expedientes para la extradición de Alberto Fujimori.

Hasta la permanencia de Maldonado en el puesto, la Procuraduría Anticorrupción mantuvo el impulso, que se terminó perdiendo paulatinamente durante el segundo gobierno de Alan García.

Ugaz y Vargas Valdivia siguen siendo socios en el mismo estudio de abogados. Maldonado se dedica a labores de consultoría.

A Demetrio Chávez Peñaherrera se le anuló la sentencia por traición a la patria. Solo quedó vigente su condena a 22 años de cárcel por narcotráfico. Salió de prisión en 2016. Desde esa fecha no ha brindado entrevistas.

César Saucedo Sánchez fue condenado a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Ya cumplió su pena. Tiene setenta y ocho años.

Blanca Nélida Colán fue condenada a 10 años de prisión en 2003 por enriquecimiento ilícito, al no poder acreditar cómo compró una casa en la exclusiva urbanización Camacho. Salió cinco años más tarde por buena conducta. También apareció un vladivideo suyo en el que se le ve festejando junto a Montesinos y el traficante de armas James Stone el cumpleaños de la hija menor del exasesor en el SIN. Falleció hace algunos años.

Miguel Aljovín Swayne fue procesado luego que se descubriera que Montesinos le dio un reloj, pasajes aéreos y una bolsa de viaje para que pueda ir a Estados Unidos con su esposa, a cambio de archivar la investigación por sus cuentas en el Banco Wiese. Falleció en 2005, sin que haya recibido sentencia. Montesinos sí fue condenado por soborno en este caso.

Absalón Vásquez fue procesado por los casos de falsificación de firmas de Vamos Vecino y por los «vladipolos». Fue absuelto en ambos juicios. Postuló en tres ocasiones a la gobernación regional de Cajamarca: en la primera fue retirado por no acreditar su domicilio en la región, mientras que en las otras dos no tuvo buenos resultados. Aunque revindica a Fujimori, está alejado del fujimorismo actual.

Juan Briones Dávila fue condenado por el golpe del 5 de abril de 1992. Tiene ochenta y dos años.

José Villanueva Ruesta intentó huir a Ecuador en diciembre de 2000. Fue capturado. Tuvo sentencias por enriquecimiento ilícito, así como por apoyar la fuga de Montesinos y por forzar a altos oficiales a firmar el acta de sujeción. En total, tuvo once sentencias en su contra.

Américo Ibárcena también fue condenado por enriquecimiento ilícito. Para 2019, aún se seguían repatriando sus fondos desde Suiza y Luxemburgo al Estado peruano. La compra de un caballo pura sangre fue la pista para comenzar a hallar sus fondos.

Elesván Bello fue condenado por el desvío de fondos para la campaña de la reelección de Alberto Fujimori en 2000, así como por otros cuatro casos, entre ellos, la compensación a Montesinos y el intento de golpe de Estado contra Fujimori al final del régimen.

Alberto Venero, Juan Valencia Rosas, James Stone, Luis Duthurburu y la mayor parte de traficantes de armas y testaferros de Montesinos fueron condenados a diversas penas de prisión.

Julio Salazar Monroe fue condenado por compras ilegales en el SIN, así como por usurpación de funciones. A ello se sumó una larga condena por los casos del destacamento Colina, que lo mantiene en prisión.

Fernando Dianderas fue condenado por tres casos: la firma del acta de sujeción, el allanamiento ilegal de la casa de Montesinos en 2000 y el plan golpista conjunto con Carlos Boloña.

Carlos Bergamino fue sentenciado por el caso del pago de la compensación a Montesinos a tres años de prisión suspendida. También recibió una condena por un caso de una licitación irregular en el Ejército.

Los jueces Alipio Montes de Oca, Alejandro Rodríguez Medrano, Víctor Raúl Castillo y Luis Serpa Segura fueron sentenciados por sus vínculos con Montesinos. Lo mismo ocurrió con el fiscal José Carlos Bringas y con el magistrado del Tribunal Constitucional, José García Marcelo. En el caso de Rodríguez Medrano, fue central el testimonio de Javier Corrochano como colaborador eficaz. Corrochano hoy ha vuelto a su profesión de abogado.

José Dellepiane Massa murió en 2008, víctima de cáncer. Su muerte cerró sus procesos judiciales. Nunca fue condenado.

Oscar Tino Santander volvió a tener notoriedad en 2015, cuando apareció como colaborador en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el sur del país. Postuló al Congreso por el partido Contigo en 2020, sin éxito. Actualmente está en una asociación de usuarios de bancos, buscando nuevamente futuro político y mediático.

Ernesto Gamarra Olivares fue condenado a seis años de prisión. Salió de la cárcel por buena conducta en 2005. Ha escrito dos libros defendiendo su inocencia y señalando que fue víctima de una trampa. Se dedica a su profesión de abogado. Su hija Patricia es candidata al Congreso de la República por el Partido Morado.

Luis Bedoya de Vivanco fue hallado culpable de peculado. Su padre, Luis Bedoya Reyes, llegó a decir «que no había delinquido, sino que había pecado». Fue condenado a 5 años en prisión, de los cuales cumplió dos tercios de su pena en la cárcel. Abandonó la vida pública luego de su excarcelación en 2005. Murió en 2015, víctima de un mal renal.

Luego de su paso por el Congreso de la República, Pablo Macera postuló a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por Carlos Boloña por la alianza Solución Popular. También volvió a

postular al parlamento. Falló en ambos intentos. Volvió a su cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incidiendo en investigaciones sobre historia popular. Concedió muy contadas entrevistas en los últimos años. Falleció en enero de 2020.

Héctor Faisal fue capturado en noviembre de 2001. Fue condenado a tres años de prisión efectiva por recibir dinero de Montesinos para la página web de APRODEV. Cumplió su pena de cárcel, pero no ha pagado su reparación civil. Vive en Lima. En 2019, volvió a la luz pública por una denuncia puesta por su casera, a quien le debía el alquiler.

Augusto Bresani León fue detenido en Miami en 2002. Fue expulsado de Estados Unidos por vencimiento de su visa. Luego de una estadía en la cárcel, pasó a tener arresto domiciliario por razones de salud. Lanzó un libro llamado Ocaso y persecución, donde se defendía de lo que consideró un injusto proceso judicial, a la par que acusaba a otros personajes por sus presuntos vínculos con el régimen. Murió en 2007, sin sentencia. Hasta su fallecimiento juró ser inocente.

Veintinueve personas fueron condenadas por el manejo de la prensa sensacionalista a favor del régimen. Las penas variaron entre 4 y 8 años de prisión. Fueron comprendidos militares, publicistas y los dueños de estos medios de comunicación.

Agustín Mantilla fue condenado a 6 años de prisión por haber recibido 30 000 dólares de Montesinos. Salió por buena conducta en 2005. Su amigo Óscar López Meneses le colocó custodia policial al salir de la cárcel.

Se descubrieron sus nexos con uno de los traficantes de armas con los que el exasesor había hecho negocios, el israelí Zvi Sudit, pero no fue procesado por ello.

A Mantilla también se le descubrieron cuentas en Estados Unidos, por seis millones de dólares. El dirigente partidario vivió siempre con frugalidad, por lo que se sospechó que no era el real beneficiario del dinero. Guardó silencio sobre el real destinatario de los fondos. Varios apristas aplaudieron esa actitud.

Mantilla falleció en 2015, cuando era procesado por los presuntos crímenes del comando paramilitar al que se le atribuyó su liderazgo.

Jamil Mahuad fue destituido de su puesto como presidente de Ecuador en enero de 2000, luego de una serie de protestas por la crisis de los bancos desatada a fines de 1999. Reside en los Estados Unidos. Fue condenado en ausencia en su país.

Fernando de Trazegnies está retirado de la vida pública. Ante la protesta de los alumnos, debió tomarse un tiempo sabático como docente de la Facultad de Derecho de la PUCP, al culminar el régimen. Continuó sus labores como abogado y académico durante los años siguientes. Siguió defendiendo la inocencia de Fujimori.

Eduardo Ferrero Costa fue revindicado luego de la caída de Fujimori. Fue representante permanente del Perú ante la OEA y embajador en los Estados Unidos. Continuó su carrera como abogado y académico.

Carlos Raffo se convirtió en el principal escudero de Alberto Fujimori. Fue su vocero en el Perú y una de las personas que más influyó en su carrera política durante los últimos veinte años.

En 2006, fue elegido congresista de la República. Durante cinco años, defendió con vehemencia al fujimorismo y a sus líderes.

Sin embargo, en 2011, renunció a la agrupación fujimorista. Sus discrepancias con Jaime Yoshiyama fueron el detonante. Lo cierto es que a partir de entonces comenzó a tener una relación complicada con Keiko Fujimori. Fue sentenciado en dos instancias por recibir dinero de Montesinos para la campaña de 2000. La pena final fue de 4 años de prisión suspendida.

Como en Facebook, Raffo tiene una «relación complicada» con el fujimorismo. Aunque no pertenece a Fuerza Popular y ha asesorado a otros candidatos fuera de la agrupación en los últimos años, sigue defendiendo a Alberto Fujimori. Es consultor en comunicación, especialmente sobre causas pro inversión privada y a favor de sectores conservadores.

Raffo confesó, en febrero de 2021, que le brinda consejos políticos a Keiko Fujimori.

Fernando Olivera Vega postuló a la presidencia de la República en 2001, quedando en cuarto lugar. Para cerrarle el paso a Alan García, firmó con Perú Posible un «acuerdo de gobernabilidad y

moralidad», lo que le permitió al gobierno de Alejandro Toledo tener mayoría parlamentaria en sus primeros años.

Olivera fue nombrado ministro de Justicia durante un año, sin tener un paso sobresaliente. Luego fue designado embajador en España, sin dejar de tener presencia política en el Perú. Su performance en ese gobierno le ocasionó un serio desgaste político y en su imagen.

El 11 de agosto de 2005, Toledo nombró ministro de Relaciones Exteriores a Olivera, una decisión polémica y con alto costo político. Carlos Ferrero, quien era presidente del Consejo de Ministros, no estaba de acuerdo. En una de las mayores jugadas políticas de la historia política contemporánea peruana, Ferrero lo dejó juramentar. Pero apenas acabó el acto, envió su renuncia, con lo que todo el gabinete cayó. A pesar de que Olivera asumió formalmente su cargo, nunca pudo tomar ninguna decisión. Duró tres minutos en el puesto. Tuvo que dimitir.

En 2006, Olivera postuló al Congreso con el Frente Independiente Moralizador. El público lo castigó con su voto. Partió nuevamente a España a atender sus negocios.

En 2016, retomó su carrera política, postulando a la presidencia por el Frente Esperanza. Lo más saltante de su candidatura fue que, por azar, le tocó enfrentar a Alan García en el debate presidencial de primera vuelta. Finalmente, ante los ojos de todo el país, le pudo recordar todo el rosario de acusaciones en contra del expresidente. Fue su momento estelar y, en el fondo, el cierre de la carrera política de ambos.

Olivera amenazó con postular al más alto cargo del país en 2021. Sin embargo, por no cumplir con requisitos formales, el Jurado Nacional de Elecciones se lo impidió.

Alex Kouri tuvo una carrera política importante. Fue reelecto como alcalde del Callao en 2002, a pesar de sus vladivideos y, en 2006, ganó la gobernación regional del primer puerto. En 2010, decidió postular a la alcaldía de Lima, pero fue retirado de carrera por no poder acreditar su domicilio en la capital del país. En 2011, buscó una curul en el Congreso, pero su lista no pasó la valla electoral. Finalmente, en 2016, «el negocio del peaje» de la Vía Expresa del

Callao le pasó la factura y fue condenado a 5 años de prisión efectiva por colusión desleal. La pena fue ratificada por la Corte Suprema. Cumple su pena en el penal de Ancón.

Luis Alberto Kouri volvió al Perú en febrero de 2001 y fue arrestado. Fue condenado a 6 años de prisión. Se encuentra hace varios años en libertad. Se volvió escritor de libros y consultor empresarial. Considera que lo ocurrido fue «un hipo» en su vida.

Enrique Vidal dejó RPP luego de la caída del régimen fujimorista. Fue cercano a Alex Kouri durante varios años. En la última década, trabajó para el empresario Antonio Camayo, quien se vio involucrado en el caso «Los Cuellos Blancos» ligado a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura, así como para la Universidad San Ignacio de Loyola, de propiedad de Raúl Diez Canseco.

José Enrique y José Francisco Crousillat huyeron del país una vez que se difundieron sus videos. Recalaron en Argentina. Quisieron huir a Chile en 2005, para evitar el proceso de extradición, pero no lo consiguieron.

En 2006, Argentina concedió la extradición. Padre e hijo fueron condenados a 8 años de prisión.

Sin embargo, el 11 de diciembre de 2009, Alan García concedió un indulto humanitario a José Enrique Crousillat, alegando su condición de salud. Sin embargo, diversos informes periodísticos dieron cuenta de que, una vez que salió de la cárcel, el empresario gozaba de buena salud.

Para marzo de 2010, Crousillat se embarcó en una ofensiva para tratar de recuperar América Televisión. Luego de dejar el canal en la quiebra, la administración de la televisora pasó a sus acreedores. En 2003, un grupo integrado por El Comercio, La República y —hasta 2007— Valores Bavaria adquirió las acreencias. Crousillat alegaba supuestas irregularidades y presiones del gobierno de Toledo para ello. El Grupo El Comercio se defendió a través de sus medios. Al mismo tiempo, IDL-Reporteros puso en evidencia los vínculos entre personajes cercanos a Alan García y la familia Crousillat.

La maniobra fue conjurada. El gobierno anuló el indulto a Crousillat, lo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Luego de un año, el empresario fue capturado y llevado nuevamente a un establecimiento penal. América Televisión culminó su proceso de reestructuración patrimonial en 2011 y hoy continúa en manos de El Comercio y La República.

José Francisco Crousillat salió de prisión en 2013. Dijo estar arrepentido de lo ocurrido. Buscó hacer un emprendimiento de televisión digital años más tarde. No resultó.

José Enrique Crousillat cumplió su pena en 2014. Vive en Buenos Aires.

Teófilo Cubillas y Héctor Chumpitaz siguen siendo futbolistas queridos por la mayor parte de la hinchada local. Sin embargo, en los últimos años, la imagen del ídolo de Alianza Lima se enturbió por sus audios con el controvertido magistrado César Hinostroza, vinculado al caso «Los Cuellos Blancos», así como por denuncias por no dar dinero para la manutención de su última hija. Cubillas vive en Miami y Chumpitaz en Lima. El «capitán de América» padeció Covid 19 en 2020. Salió airoso de la enfermedad.

Raúl Romero continuó con su carrera como animador y cantante, orientado sobre todo a un público juvenil. Nunca más volvió a dar declaraciones políticas. Sus shows, ahora en solitario, son una repetición de los mismos espectáculos que presentaba hace un cuarto de siglo.

Gisela Valcárcel se arrepintió de ir al Servicio de Inteligencia Nacional. Reconoció que tuvo otra reunión con Montesinos, en la que hablaron sobre temas vinculados a la televisión. Fue absuelta de todos los cargos. Tiene más de tres décadas en pantalla y es una productora y empresaria de gran éxito.

Manuel Delgado Parker fue delegando paulatinamente el manejo cotidiano de RPP en sus hijos. La radio sigue siendo la más escuchada del país y un medio con alta credibilidad, sin dejar de tener detractores quienes señalan que la estación no asume posiciones más claras. Murió en septiembre de 2019.

Rafael Merino Bartet se convirtió en un testigo importante de los procesos contra la organización criminal Fujimori–Montesinos. No

fue condenado por ningún caso.

Daniel Borobio se refugió en Chile y evitó ser extraditado, debido a que ese país no contemplaba actos de corrupción cometidos por privados en la década de 2000. En 2017, trabajó en la campaña del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast.

Similar destino al de Borobio corrieron Julio Vera Abad y Eduardo Calmell del Solar, quienes nunca regresaron al Perú. Calmell falleció en 2014, víctima de cáncer.

Ernesto Schutz Landázuri fue capturado en Argentina en 2001. Cuando iba a concluir su proceso de extradición, huyó a Suiza en 2004, país en el que permanece hasta hoy, debido a que ostenta doble nacionalidad. El Estado peruano buscó su procesamiento en el país europeo, lo que fue rechazado por la justicia suiza en 2014. Su hijo, Ernesto Schutz Freundt, es el principal accionista de Panamericana Televisión desde 2009.

El paradero de Augusto Miyagusuku Miyagui es desconocido hasta el día de hoy.

Víctor Malca Villanueva murió en noviembre de 2015, víctima de cáncer a la piel, en un balneario brasileño. Estuvo prófugo durante quince años, sin ser capturado.

Su exyerno, Óscar López Meneses, fue capturado y condenado por sus vínculos con Montesinos. Mantuvo una red de contactos con abogados y policías desde la prisión. En 2006, se dijo que estaba convocando gente desde la cárcel para apoyar la campaña de Ollanta Humala. Salió en libertad en 2007 y se le vio almorzando con Agustín Mantilla y un magistrado electo del Tribunal Constitucional, lo que se trajo abajo ese proceso de elección. Durante los años siguientes, se volvió hombre de confianza de Roberto Letts Colmenares, dueño de una de las principales mineras del país, así como una persona que buscaba brindar la imagen de que tenía buenas conexiones, sobre todo en los institutos armados y la Policía. En 2014, protagonizó un escándalo político, cuando se descubrió que varios vehículos policiales custodiaban su vivienda, sin que se haya establecido hasta el día de hoy las razones de dicho resguardo. Lanza mensajes conspirativos y fake news desde su cuenta en Twitter.

Alberto Andrade continuó su gestión como alcalde de Lima hasta 2002. En ese año, buscó un tercer mandato y se enfrentó a Luis Castañeda Lossio. Andrade pagó el precio de eludir un debate municipal y, cuando este se presentó, no lo ganó.

En 2006, hizo una alianza con Acción Popular. Fue electo congresista de la República. Fue el más votado de la lista del Frente de Centro.

Falleció el 19 de junio de 2009 en Washington, víctima de una fibrosis pulmonar.

Hoy es considerado como el mejor alcalde de Lima de los últimos treinta años.

La Asociación Civil Transparencia lleva más de un cuarto de siglo observando procesos electorales. Ha extendido en los últimos años su trabajo a la consolidación del sistema democrático en general. Su actual secretario general es el politólogo Iván Lanegra. Se trata de una institución muy respetada en el país.

Perú volvió formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001. Ese mismo año, dicha entidad ordenó la derogación de la Ley de Amnistía de 1995. Sus sentencias han marcado importantes precedentes en materia de protección de la dignidad humana. Si bien algunos de sus fallos vinculados al periodo de violencia continuaron generando controversia, no ha prosperado ningún nuevo intento de dejar su competencia.

Eduardo Stein fue vicepresidente de Guatemala entre 2014 y 2018, durante el periodo de Óscar Berger. Postuló a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos sin éxito. Fue condecorado con la Orden del Sol del Perú en el gobierno de transición.

Eduardo Latorre falleció en Miami en 2003, víctima de cáncer.

Samuel y Mendel Winter fueron condenados como cómplices de peculado a 5 años de prisión. En el proceso judicial, reconocieron que recibieron 3 millones de dólares por parte de Montesinos. En 2012, Baruch Ivcher compró las acciones incautadas de los Winter puestas a la venta en remate judicial.

Ivcher recuperó la propiedad de Frecuencia Latina en diciembre de 2000, en cumplimiento de la sentencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. Durante varios años, discutió el monto de la reparación civil que le debía otorgar el Estado peruano, hasta que la misma se fijó en 20 millones de dólares.

Entre 2012 y 2013, el empresario peruano-israelí transfirió sus acciones en Frecuencia Latina al fondo de inversión Enfoca, encabezado por el empresario Jesús Zamora. Ya no tiene ningún vínculo con el canal.

A sus ochenta años, Ivcher sigue viendo el día a día de Productos Paraíso del Perú. Tiene hoy posiciones políticas conservadoras.

Luis Castañeda Lossio fue alcalde de Lima entre 2003 y 2010 y, posteriormente, entre 2015 y 2018. Sus primeras gestiones se concentraron en servicios municipales para los sectores populares —escaleras en los cerros de los barrios más pobres, consultorios médicos—, así como en grandes obras de infraestructura. Enfatizó una visión donde el cemento era lo más valorado, antes que las políticas públicas. Los limeños le dieron sus votos en tres ocasiones.

En 2011, postuló sin éxito a la presidencia de la República. Quedó en quinto lugar. Desde allí, se convirtió en el principal impulsor de la revocatoria contra Susana Villarán, su sucesora en el cargo. También fracasó.

Su tercera gestión fue penosa. No dejó una obra de infraestructura digna de mencionar, la mediocridad de sus políticas públicas fue enfatizada por los medios de comunicación y perdió los papeles en más de una ocasión.

Ha sido involucrado en el caso Lava Jato. Cumplió durante algunas semanas prisión preventiva y hoy se encuentra bajo arresto domiciliario, por razones de salud.

Laura Bozzo dejó América Televisión a fines de 2000. Para el año 2001, comenzó a grabar su programa en Perú para la cadena Telemundo, dirigida al público hispano de los Estados Unidos.

En 2002, a Bozzo se le dio una orden de arresto domiciliario, que terminó cumpliendo en el estudio de televisión donde grababa sus programas. Allí pasó 1096 días. De todos los casos por los que fue imputada, solo fue condenada en 2006 por el pago de la caución por el caso del policía de Huacho, a cuatro años de prisión suspendida.

Hasta hoy, le echa la culpa de sus problemas legales a Alejandro Toledo.

En mayo de 2006, Telemundo no renovó su programa. Su versión es que deseaba un cambio de aires. Otras fuentes señalan que se acumularon varias denuncias sobre abusos laborales de su equipo.

Desde 2007, Bozzo reside en México, donde ha trabajado para las dos principales cadenas televisivas de ese país, haciendo su formato de reality show. Ha publicado un libro de memorias y, según confesión propia, decidió alejarse de la política.

En 2020, prepara nuevos formatos para plataformas digitales.

Ricardo Márquez, quien fue dos veces vicepresidente de Fujimori, dejó la política luego de noviembre de 2000. Se dedicó a sus actividades empresariales y residió entre Munich y Lima. Al cierre de este libro, es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

Trinidad Becerra y Jacqueline Beltrán tuvieron que cumplir penas bajas de prisión, por ser beneficiarias del dinero acumulado por Montesinos. Beltrán también fue sentenciada por un caso de tráfico de influencias, por tramitar un beneficio judicial a favor de un familiar. No se conoce nada sobre la vida actual de Becerra. Beltrán vive en Estados Unidos desde hace varios años y dice estar arrepentida de lo ocurrido.

Matilde Pinchi Pinchi se convirtió en la principal colaboradora eficaz del proceso Fujimori–Montesinos. Buena parte de sus declaraciones fueron corroboradas por documentación y otros testigos.

Gustavo Gorriti continuó asesorando a Alejandro Toledo durante la campaña electoral de 2001. Declinó cualquier puesto público durante su gobierno.

Luego de un breve paso por la televisión, escribió columnas mensuales para la revista Ideele y, entre 2005 y 2006, fue subdirector de La República.

Gorriti se ligó en forma permanente al Instituto de Defensa Legal desde 2007, cuando comenzó a dirigir la unidad de la institución ligada a seguridad ciudadana. A partir de 2010, encabezó IDL–Reporteros, un grupo de investigación que publica sus notas en forma digital.

Desde 2015, Gorriti está abocado casi exclusivamente a la investigación del caso Lava Jato en el Perú. IDL–Reporteros es el portal que mayores y mejores primicias ha dado sobre este megaproceso, que involucra a buena parte de la clase política peruana.

Alan García retornó al Perú el 27 de enero de 2001, una vez que las acusaciones por casos de corrupción de su primer gobierno prescribieran. Ese mismo día, encabezó un mitin multitudinario donde pronunció un discurso recordado hasta ahora por el pueblo aprista. Postuló a la presidencia en 2001 y protagonizó el mayor caso de resurrección política de la historia contemporánea peruana. Con una campaña concentrada en las críticas a los aspectos económicos del gobierno fujimorista, García pudo pasar ajustadamente a segunda vuelta. Fue derrotado por Alejandro Toledo con 5 % de diferencia.

Entre 2001 y 2006, durante el periodo de Toledo, osciló entre brindar una imagen de estadista, forzar sin éxito una vacancia presidencial y comenzar su conversión en un ortodoxo económico.

Para la campaña de 2006, pudo ubicarse en el centro entre el exmilitar Ollanta Humala, con imagen radical, y la abogada Lourdes Flores Nano, demasiado a la derecha. Pasó nuevamente a la segunda vuelta y esta vez derrotó a Humala, basado en el miedo a que impusiera en el Perú un sistema parecido al que Hugo Chávez había instaurado en Venezuela.

Así fue como García volvió a gobernar el Perú, contra todo pronóstico, entre 2006 y 2011. Aunque su segundo gobierno fue sustancialmente mejor que el primero en lo económico, con altas cifras de crecimiento, políticamente se volvió conservador. Durante su mandato, García empleó un discurso confrontacional y discriminador contra toda persona que no pensara como él en cuanto al modelo de desarrollo que debía tener el país. Esto se hizo patente con el conflicto social en Bagua, donde fallecieron 33 personas.

Su nuevo periodo, además, estuvo signado por graves casos de corrupción, que fueron investigados por una comisión del Congreso de la República presidida por el parlamentario Sergio Tejada. Allí se

encontró, entre otros hallazgos, que García había emitido más de 5000 indultos y conmutaciones de pena, de los cuales, más de la mitad fueron otorgados a condenados por tráfico ilícito de drogas. Algunos de ellos, como se demostró en sede judicial, implicaron entrega de coimas a algunos funcionarios del gobierno. Sin embargo, el informe del grupo de trabajo no pudo ser discutido en toda su amplitud, debido a que García ganó una serie de amparos en el Poder Judicial, gracias a jueces que fueron cuestionados años más tarde por otros casos de corrupción.

Investigado por el caso Lava Jato, García buscó un asilo político en Uruguay a fines de 2018, estatus que le fue denegado por ese país. El 17 de abril de 2019, cuando iba a ser detenido, Alan García se suicidó.

Luego de su muerte, dos de sus hombres de confianza, Miguel Atala y Luis Nava Guibert, han declarado sobre las entregas de dinero ilícito supuestamente dadas por Odebrecht a su favor.

García dejó como obra póstuma sus Metamemorias, donde hizo un examen poco autocrítico de su mandato. En 2020, el Partido Aprista Peruano no pasó la valla electoral y dejó de estar en el Congreso de la República luego de varias décadas. En 2021, entre disputas internas y errores en la inscripción de su lista, el APRA perderá su registro electoral.

Alejandro Toledo volvió a postular en 2001 a la presidencia de la República. Si bien era el favorito para ganar las elecciones, la campaña se le complicó tanto por la llegada de Alan García —que le robó parte del voto hacia la izquierda— como por sus propios errores. El caso de su hija no reconocida fue exhibido, esta vez, desde un espacio más serio. Sus contradicciones fueron más notorias. Y su conducta personal se caracterizó por su frivolidad.

Ganó las elecciones de 2001 tanto por el empuje que le dio su lucha a favor de la recuperación de la democracia como por la confianza económica que generó frente a García.

Hasta hace pocos años, el balance del gobierno de Toledo no era del todo negativo. Dejó trabajar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, inició un proceso de descentralización con ciertas complicaciones pero que cambió la faz política del Perú. La

economía empezó a andar con mucha fuerza y fue manejada con responsabilidad. Logró el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, los logros de su gobierno eran opacados por la frivolidad de su conducta, sus escándalos personales y los de su familia, así como por su falta de pericia política.

Sin embargo, hoy sabemos que Toledo también sucumbió a la corrupción. De todos los involucrados en el caso Lava Jato en el Perú, su caso es el más redondo para establecer posibles imputaciones sobre cohecho y lavado de activos, vinculados a la Carretera Interoceánica, hecha durante su gobierno, por parte de empresas constructoras brasileñas.

Toledo volvió a postular a la presidencia en 2011 y 2016, sin éxito. Su partido, Perú Posible, perdió la inscripción. Ninguna de las personas a las que llevó a la política lo acompaña hoy. Culminada su última campaña, regresó a residir a San Francisco (Estados Unidos).

Actualmente, Toledo enfrenta un proceso de extradición en la principal potencia mundial. Luego de algunos meses en una prisión federal, en marzo de 2020 pasó a régimen de arresto domiciliario. Como dijo alguna vez Gustavo Gorriti, pudo ser nuestro Benito Juárez. Pero pasó a ser un capítulo más de la historia de la corrupción en el Perú.

Ollanta y Antauro Humala fueron beneficiarios de una Ley de Amnistía expedida el 21 de diciembre de 2000. Ollanta volvió al Ejército, mientras que Antauro continuó movilizando reservistas y publicó un quincenario con ideas bastante radicales empaquetadas bajo el membrete de etnocacerismo. La publicación tenía el nombre del militar en actividad, aunque este buscó deslindar con la publicación.

Ollanta fue pasado a retiro a fines de 2004, luego de dos estadías como agregado militar en Francia y Corea del Sur. El 1 de enero de 2005, Antauro tomó la comisaría principal de la ciudad de Andahuaylas con un grupo de reservistas, liderando una asonada en contra del gobierno de Toledo. Su hermano inicialmente respaldó su levantamiento, pero luego buscó que se rinda. Después de tres días,

Antauro fue detenido y finalmente condenado a 20 años de prisión. Murieron seis personas en la asonada.

Ya en el retiro, Ollanta formó el Partido Nacionalista Peruano como vehículo electoral, aprovechando la estructura armada por Antauro. En 2005, empezó sus vínculos con el gobierno de Hugo Chávez. Cuando no obtuvo las firmas necesarias para inscribirse, decidió aliarse con Unión Por el Perú, devenido en un membrete con inscripción. Humala asumió una postulación ubicada en el espectro radical de izquierda. Pasó a segunda vuelta con Alan García, pero sus nexos con el modelo bolivariano le restaron los votos para ganar. Obtuvo 46 congresistas, pero su alianza con UPP se rompió en el Congreso.

En 2011, volvió a postular, esta vez por el Partido Nacionalista. La estructura era más dependiente de él y de su esposa, Nadine Heredia. Acogió a varios invitados de la izquierda local. Esta vez ganaron, por el miedo al retorno del fujimorismo y aceptando que no variarían lo sustancial del modelo político y económico.

Si bien se mantuvo el crecimiento económico y se impulsaron políticas públicas interesantes —sobre todo, en lo que se refiere a educación y programas sociales—, el manejo político fue bastante pobre y mediocre. Heredia asumió un poder bastante fuerte dentro del gobierno, a tal punto que se hablaba de la «pareja presidencial». Su desconfianza en los demás actores políticos hizo que, al final del régimen, se quedaran prácticamente solos.

Durante nueve meses, entre julio de 2017 y abril de 2018, Humala y Heredia permanecieron en prisión preventiva, investigados por presunto lavado de activos de dinero irregular en sus campañas electorales. A los fondos venezolanos, se sumaron las declaraciones sobre recepción de dinero de Odebrecht. Hoy se les investiga en libertad por este caso, así como por presuntas irregularidades en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Ollanta es, por tercera vez, candidato a la Presidencia de la República en 2021.

Antauro continúa en prisión, sin posibilidad de ser indultado. En las últimas elecciones parlamentarias, parte de sus huestes postularon por Unión Por el Perú. El grupo político obtuvo 13

congresistas. Se calcula que la mitad de la bancada responde a las órdenes del líder etnocacerista. Sigue manejando dicho partido desde la cárcel.

Santiago Fujimori fue electo parlamentario entre 2006 y 2011 por Alianza Para el Futuro. Hoy está retirado de la vida política. Sus hermanos Pedro, Rosa y Juana se fueron a vivir a Japón desde la renuncia de su hermano, para evitar la acción de la justicia. Lo mismo ocurrió con Víctor Aritomi, cuñado del expresidente. En el caso de Juana Fujimori, ella y su esposo tuvieron tratos comerciales con Enrique Benavides Morales, uno de los vendedores de armas ligados a Montesinos. A Rosa Fujimori y Víctor Aritomi se les descubrieron grandes fondos en sus cuentas bancarias.

Mutsue Fujimori falleció en Japón en marzo de 2009, a los noventa y siete años, por causas naturales.

Javier Pérez de Cuéllar fue el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Valentín Paniagua. Fue su último gran servicio al país y lo desempeñó con eficiencia y honor. A la par, fue ministro de Relaciones Exteriores. Durante este periodo, el país pudo reincorporarse a la comunidad internacional en materia de democracia y derechos humanos, labor que le cupo al extraordinario diplomático.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue nombrado embajador del Perú en Francia entre 2002 y 2004.

Residió entre Lima y Europa desde ese entonces. Desde hace algunos años, la Academia Diplomática del Perú lleva su nombre.

Pérez de Cuéllar falleció por causas naturales el 4 de marzo de 2020, a los cien años. Hubo unanimidad en el reconocimiento por su larga y fructífera trayectoria de servicio al Perú. Fue enterrado con honores de jefe de Estado, el único puesto que le faltó ejercer.

Nicolás Hermoza Ríos fue detenido el 5 de abril de 2001, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Seis días más tarde, la Oficina Federal de Justicia y Policía de Suiza, encabezada por la fiscal Cornelia Cova, encontró cuentas vinculadas a Hermoza Ríos por 22 millones de dólares.

Ante la evidencia, Hermoza Ríos confesó sus robos sistemáticos al Ejército y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Fue

condenado por estos hechos a 8 años de prisión en 2005.

En 2010, fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, imputados al destacamento Colina. En 2012, una sentencia de una sala de la Corte Suprema, presidida por el controvertido vocal Javier Villa Stein, le redujo la condena a 20 años. Dicho fallo fue revocado ante un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2013, la pena a 25 años fue ratificada.

En 2016, Hermoza fue condenado a 22 años de prisión por el caso Sótanos SIE, que comprendió la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Justiniano Najarro, Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo.

Desde 2018, su abogado, César Nakazaki, ha pedido al Estado peruano un indulto humanitario para Hermoza. Alega que el general en retiro tiene arterioesclerosis, una enfermedad degenerativa, así como un deterioro de salud por razones de edad. Actualmente, tiene ochenta y siete años.

Nicolás Hermoza Ríos es el único comandante general del Ejército cuyo retrato y nombre han sido retirados del cuadro de honor de su institución.

Santiago Martín Rivas fue capturado el 13 de noviembre de 2002 en un departamento en San Miguel, un distrito mesocrático de Lima. Estaba junto al periodista Umberto Jara, con quien dialogaba para el libro que este iba a sacar sobre los crímenes del destacamento Colina. Martín Rivas imputó en el texto a Fujimori directa responsabilidad en estos hechos. Así consta en los videos de Jara que sirvieron como material probatorio.

Jesús Sosa Saavedra fue capturado en 2008 en Barranco, luego de años de mantenerse en la clandestinidad.

Varios miembros del destacamento Colina decidieron acogerse a la colaboración eficaz, para poder reducir sus penas.

El grueso de los miembros del escuadrón de la muerte liderado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, así como sus superiores jerárquicos, está condenado a penas que van entre los 15 y 25 años de prisión.

En el caso de Sosa, sigue siendo procesado por otros crímenes que cometió en años anteriores a su pertenencia a dicho destacamento.

El gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao fue visto por los historiadores y politólogos como ejemplar.

En su periodo, se apoyó los esfuerzos para el procesamiento de la organización criminal Fujimori–Montesinos. Se creó el Consejo Nacional de Educación, que monitorea los avances del Plan Educativo Nacional. Formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, destinada a investigar los sucesos vinculados al periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000. Estabilizó la economía que se encontraba en recesión. Llevó a cabo elecciones libres y justas. Y le devolvió esperanza al Perú.

La autoridad moral de Paniagua se hizo más fuerte cuando, en 2001, ante un reportaje del programa Tiempo Nuevo que buscaba involucrarlo con la red de Vladimiro Montesinos, tuvo una reacción clara frente al conductor del espacio, Nicolás Lúcar. El hecho generó las reacciones de respaldo en vivo de Alberto Andrade y Carlos Ferrero. Una marcha se convocó al día siguiente para respaldarlo, con gran apoyo de la ciudadanía.

Paniagua salió del poder con más de 80 % de aprobación.

Fue presidente de Acción Popular entre 2001 y 2004. En esos años, no dejó de opinar sobre la actualidad política. Y aunque creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación y estuvo de acuerdo con la mayor parte de sus conclusiones, no dejó de esgrimir algunas críticas sobre el tratamiento que tuvo el gobierno de Acción Popular en el Informe Final de este grupo de trabajo.

Ya enfermo de un mal cardiaco, aceptó postular a la presidencia de la República en 2006, por el Frente de Centro, una alianza entre su partido, Somos Perú y Todos Por el Perú. Solo obtuvo 7 % de los votos.

Falleció el 16 de octubre de 2006. Su entierro fue multitudinario.

A la luz de lo que ocurrió después con los demás expresidentes, el recuerdo de Paniagua es el más grato que ha tenido una persona que ha ejercido la Presidencia de la República en el último medio siglo.

Susana Higuchi permaneció como congresista hasta 2006 por el Frente Independiente Moralizador. Luego de esa participación, dejó cualquier aspiración política y se concentró tanto en sus labores hogareñas como en sus negocios.

Recién en la década pasada, pudo recuperar la relación con sus hijos, que se mantiene bien en términos generales hasta el día de hoy.

Nunca volvió a casarse. En 2016, confesó que habló algunas veces con Alberto Fujimori en prisión. Sus apariciones ante los medios de comunicación son bastante esporádicas.

Mientras Paniagua juraba como presidente del Perú, Vladimiro Montesinos llegaba a Costa Rica, con un pasaporte falso a nombre del ciudadano español Manuel Antonio Rodríguez Pérez. El 23 de noviembre de 2000, se trasladó en avión a Aruba y, luego de algunas semanas, gracias a algunos amigos, ingresó a Venezuela.

En el país caribeño, cuando se iba a someter a una cirugía plástica, supo que sus exguardaespaldas lo habían delatado en Lima. Emma Mejía, quien lo había acompañado en el trayecto hasta Caracas, decidió entregarse a las autoridades peruanas. Montesinos fue conducido a la casa de José Guevara, un exagente de seguridad venezolano que le brindaba protección en la capital venezolana y, posteriormente, a la casa de la hermana de otro de sus custodios, José Luis Núñez.

El gobierno venezolano negó oficialmente tener noticias de Montesinos. El gobierno peruano, empeñado en capturarlo, presionó a sus pares en Caracas.

La periodista Patricia Poleo, opositora al régimen de Hugo Chávez, obtuvo las imágenes de Montesinos tomadas en forma previa a su operación. Al ministro del Interior Luis Miquilena no le quedó otro remedio que aceptar que el exasesor presidencial peruano había estado en Venezuela. Poleo siguió varias pistas para ubicar al prófugo, pero no dio con su paradero. El tema se volvió un incidente diplomático serio entre las administraciones Paniagua y Chávez.

La situación de paradero desconocido de Montesinos se vino abajo ante la falta de dinero. La policía peruana encontró una serie

de cuentas ligadas al asesor en el Pacific Industrial Bank. Montesinos envió comunicaciones que fueron encontradas por los policías peruanos, en las que buscaba la forma de mover el dinero. Guevara fue enviado el 22 de junio a Miami, bajo el nombre de «Arturo Omaña», para tratar de movilizar los miles de dólares que tenía el exasesor en la referida entidad bancaria. Pero el FBI ya estaba tras esos pasos y capturó en la Florida a Guevara, quien reveló que Montesinos se ocultaba en la casa de José Luis Núñez en Caracas.

Al día siguiente, Núñez aparentó un cambio de vivienda de refugio para que Montesinos saliera a las calles de Caracas en un vehículo. A las 10.00 p. m., fueron interceptados por la Inteligencia venezolana. El exasesor se entregó a las autoridades en ese país. En la mañana del 24 de junio de 2001, Hugo Chávez anunció en la ciudad de Valencia, durante una conferencia de la Comunidad Andina, que Montesinos había sido capturado. Javier Pérez de Cuéllar, presente en la reunión, expresó su beneplácito.

El 25 de junio de 2001, Vladimiro Montesinos arribó al Perú, expulsado por el gobierno venezolano. Nunca se aclaró si autoridades de ese país fueron garantes de su refugio durante casi siete meses en Caracas.

Cuando Montesinos llegó al país, se pensó que abriría una caja de Pandora sobre muchos personajes. No fue así. Aunque frente a las comisiones investigadoras del Congreso hizo varias afirmaciones, algunas eran falsas y otras nunca fueron comprobadas. En sede judicial, decidió hablar poco y, en no pocos de sus juicios, reconoció su responsabilidad, en particular, en los casos de corrupción.

Montesinos fue condenado por los crímenes del destacamento Colina a 25 años de prisión. En principio, debería salir de la cárcel el 24 de junio de 2026. Aún sigue manteniendo procesos judiciales por diversos tipos de delitos.

Podríamos resumir las siguientes dos décadas de Alberto Fujimori en pocas líneas.

Vivió en Japón entre noviembre de 2000 y noviembre de 2005, con el apoyo de personajes cercanos a la derecha extrema.

Decidió volver al Perú, pensando que sería llevado por las masas a Palacio de Gobierno. Terminó en un coche de la Interpol.

Estuvo inmerso por cerca de dos años en un proceso de extradición en Chile, que vivió diversas etapas. Se volvió a casar por representación con una política japonesa. Buscó postular al Senado de la tierra de sus ancestros y fracasó. Y, finalmente, el país del sur lo envío de vuelta al Perú, con varios expedientes bajo el brazo.

Fue juzgado y condenado en procesos judiciales modélicos en América Latina para el procesamiento de exgobernantes. Su pena más alta fue de 25 años de prisión, por violaciones a los derechos humanos.

Buscó infructuosamente el indulto en varias oportunidades. Lo consiguió en forma irregular durante la Navidad de 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski requería votos parlamentarios para salvarse de la vacancia presidencial. Meses más tarde, el mandatario renunció y Fujimori volvió a prisión, donde permanece hasta hoy.

Pero esta historia, así como la de su estirpe política, ha seguido marcando la vida nacional. Y merece contarse en un libro aparte.

BIBLIOGRAFÍA

Abad Yupanqui, S. (2010). La Defensoría del Pueblo. La experiencia peruana, en *Teoría y realidad constitucional,* **núm. 26.**

Abraham D'Ornellas, R. (compiladora) (2000). *Manuel D'Ornellas. Una antología de sus artículos.* **Lima: Instituto Apoyo.**

Acosta, C. (2021). *Plata como cancha. Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña.* **Lima: Aguilar.**

Alayza, A. (2006). Hijos de su tiempo: notas sobre jóvenes y participación política, en Toche, E. (compilador). *Perú hoy: nuevos rostros en la escena nacional.* **Lima: Desco.**

Angulo Daneri, T. (2004). *Llámalo amor si quieres. Nueve historias de pasión.* **Lima: Aguilar.**

Asencios, D. (2017). *La ciudad acorralada. Jóvenes y Sendero Luminoso en Lima de los 80 y los 90.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Balbi, M. (2015). Hurtado Miller: «En 25 años, no hubo necesidad de otro *shock***», en** *El Comercio,* **9 de agosto de 2015. Recuperado de:** https://elcomercio.pe/politica/actualidad/hurtado-miller-25-anos-hubo-necesidad-shock-386424-noticia/

Bákula Patiño, J. M. (2002). *Perú: Entre la realidad y la utopía. 180 años de política exterior.* **Lima: Fondo de Cultura Económica-Academia Diplomática del Perú.**

Bákula Patiño, J. M. (2006). *El Perú en el reino ajeno. Historia interna de la acción externa.* **Lima: Universidad de Lima.**

Barr, R. y Dietz, H. (2006). Fujimori and the mayors of Lima, 1990-2001: The impact and legacy of neopopulist rule, en Carrión, J. F. (editor). *The Fujimori Legacy. The rise of electoral authoritarism in Peru.* **University Park, The Pennsylvania State University Press.**

Bausó, M. (2018). *78. Historia oral del Mundial.* **Buenos Aires: Sudamericana.**

Bernbaum, M. (2001). *Transparencia. La sociedad civil peruana observa las controvertidas elecciones del 2000. Estudio de caso sobre movilización ciudadana.* **Lima: Asociación Civil Transparencia.**

Bernbaum, M.; López Pintor, R.; Sanborn, C. (2001). *Transparencia. La sociedad civil peruana observa las controvertidas elecciones del 2000. Estudio de caso sobre vigilancia.* **Lima: Asociación Civil Transparencia.**

Blacker Miller, A. (1993). *La propuesta inconclusa.* **Lima: Consorcio La Moneda.**

Boloña, C. (1993). C*ambio de rumbo: el programa económico para los 90s.* **Lima: Instituto de Economía de Libre Mercado.**

Bowen, S. (2000). *El Expediente Fujimori. El Perú y su presidente.* **Lima: Perú Monitor.**

Bowen, S. (2015). *Periodista al fin y al cabo. 20 años de investigación: Sendero, narcotráfico y política en el Perú (1988-2008).* **Lima: PEISA.**

Bowen, S. y Holligan, J. (2003). *El Espía Imperfecto. La telaraña oculta de Vladimiro Montesinos.* **Lima: PEISA.**

Bromley, R. (1998). Informalidad y desarrollo: interpretando a Hernando de Soto, en *Sociológica.* **Vol. 13 Nro. 37 (Mayo-Agosto), pp. 15-39.**

Bruce St. John, R. (1999). *La política exterior del Perú.* **Lima: Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú.**

Burgo, A. y Wall, A. (2014). *El último Maradona. Cuando a Diego le cortaron las piernas.* **Buenos Aires: Aguilar.**

Burt, J. M. (2011). *Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori* **(segunda edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Bustamante, E. (2012). *La radio en el Perú.* **Lima: Universidad de Lima.**

Bustamante Belaúnde, A. (2003). *Del diablo su país.* **Lima: Grupo Editorial Norma.**

Caballero, V. (2019). *Mototaxi. Auge y caída de Fuerza Popular.* **Lima: Ediciones B.**

Carrión, J. F. (2006). Public opinion, Market Reforms and Democracy in Fujimori's Peru, en Carrión, J. F. (editor). *The Fujimori Legacy. The rise of electoral authoritarism in Peru.* **University Park, The Pennsylvania State University Press.**

Carrión Mena, F. (2008). *La paz por dentro: Ecuador-Perú: testimonio de una negociación.* **Quito: Dinediciones.**

Cateriano, P. (2017). *El caso García.* **Lima: Planeta.**

Cateriano, P. (2021). *Sin anestesia. Una década de lucha por la democracia.* **Lima: Planeta.**

Centro de Investigación Universidad del Pacífico (1990). *El debate: versión completa del debate realizado entre los candidatos a la presidencia de la República, en el Centro Cívico de Lima, el 3 de junio de 1990.* **Lima: CIUP.**

Cisneros, R. (2015). *La distancia que nos separa.* **Lima: Planeta.**

Comisión Andina de Juristas (2000). *Perú 2000: un triunfo sin democracia.* **Lima: CAJ.**

Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). *Informe Final.* **Lima: CVR.**

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (1999). *Nada Personal. Reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú 1996-1998.* **Lima: CLADEM.**

Conaghan, C. (2005). *Fujimori's Peru. Deception in the public sphere.* **Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.**

Congreso de la República del Perú (2004). *En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000).* **Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.**

Congreso de la República del Perú (2021) Mensajes presidenciales. Recuperado de http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes-presidenciales/

Cordero, J. y Ñopo, H. (2018). *La fórmula del gol. Secretos numéricos del deporte rey.* **Lima: Aguilar.**

Cornejo Guinassi, P. (2018). *Alta tensión. Breve historia del rock en el Perú.* **Lima: Contracultura.**

Cornejo Ramírez, E. (2013). *La segunda oportunidad.* **Lima: Aguilar.**

Cortázar, J. C. (2002). *Oportunidades y limitaciones para la Reforma del Estado en el Perú de los 90.* **Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social.**

Cosamalón, J. (2018). *El apocalipsis a la vuelta de la esquina. Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000).* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Cotler, J. (1998a). *Los empresarios y las reformas económicas en el Perú (Documento de Trabajo Nro. 91).* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Cotler, J. (1998b). *La articulación y los mecanismos de representación de las organizaciones empresariales* **(Documento de Trabajo Nro. 97). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Coya, H. (2011). *Genaro.* **Lima: Planeta.**

Coya, H. (2018). *Polvo en el Viento. Vaticano: esplendor y miserias de un narcotraficante.* **Lima: Planeta.**

Cuenca, R. (2013). *Cambio, continuidad y búsqueda de consenso 1980-2011* **(Colección Pensamiento Educativo Peruano Nro. 15). Lima: Derrama Magisterial.**

Cuenca, R. y Reátegui, L. (2016). *La (incumplida) promesa universitaria en el Perú* **(Documento de Trabajo Nro. 230). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Cueto, M. (2020). *El regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XX* **(Segunda Edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Daeschner, J. (1993). *La guerra del fin de la democracia. Mario Vargas Llosa versus Alberto Fujimori.* **Lima: Perú Reporting.**

Dargent, E. (2006). La reforma judicial en el Perú (1990–2005), en Crabtree, J. (editor). *Construir instituciones: democracia, desarrollo y desigualdad.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú–Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico–Instituto de Estudios Peruanos.**

Dargent, E. (2014). *Technocracy and Democracy in Latin America: The Experts Running Government.* **New York, Cambridge University Press.**

Dargent, E. (2019). *Demócratas precarios. Élites y debilidad institucional en el Perú y América Latina* **(Tercera edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Dargent, E. y Vergara, A. (2000). *La batalla de los días primeros. Sendero y sus consecuencias en dos ensayos jóvenes.* **Lima: El Virrey.**

De Belaúnde, J. (1999). Justicia, legalidad y reforma judicial en el Perú (1990-1997), en Crabtree, J. y Thomas, J., *El Perú de Fujimori 1990-1998.* **Lima: Universidad del Pacífico–Instituto de Estudios Peruanos.**

De la Jara, E. (2001). *Memoria y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Degregori, C. I. (2012). *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos* **(Obras Completas 2). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Degregori, C. I. y Meléndez, C. (2007). *El nacimiento de los otorongos: El Congreso de la República durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000).* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Delgado–Guembes, C. (2000). Transfuguismo y crisis postelectoral en el proceso de reinstitucionalización democrática, en *Derecho PUCP.* **Nro. 53.**

Dongo, P. (2009). Keiko Fujimori. La dama del presidente, en Carranza, G.; Dongo, P.; Kawamura, E.; Shinno, T.; Valencia, R. *Yo Presidente. Cinco políticos en su ruta al poder.* **Lima: Planeta–Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.**

Durand, F. (2003). *Riqueza económica y pobreza política. Reflexiones sobre las élites del poder en un país inestable.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Durand, F. (2006). Dinámica política de la corrupción y participación empresarial, en Portocarrero Suárez, F., *El Pacto Infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú.* **Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.**

Durand, F. (2013). *Los Romero: Fe, fama y fortuna.* **Lima: Ediciones El Virrey–Desco.**

Durand, F. (2017). *Los doce apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Eguiguren Praeli, F. (2001). El Consejo Nacional de la Magistratura, en *Derecho & Sociedad.* **Nro. 16, Lima.**

Estela, M. (2000). Fortaleciendo la honestidad en la administración de impuestos: el caso de la SUNAT en el Perú, en *Revista Moneda,* **noviembre.**

Fernández, C. y Paxman A. (2013). *El Tigre. Emilio Azcarraga y su imperio Televisa.* **México D. F.: Grijalbo.**

Ferrero Costa, E. (2018). *Perú-Ecuador: el proceso para lograr la paz.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Fowks, J. (2015). *Chichapolitik: la prensa con Fujimori en las elecciones generales 2000 en el Perú* **(Segunda edición). Lima: Fundación Friedrich Ebert.**

Fukumoto, M. (1997). *Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú.* **Lima: Asociación Peruano Japonesa del Perú.**

Gálvez, A. y Grompone, A. (2017). *Burócratas y tecnócratas: la infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Gamarra, L. F. (con textos de Robles, J. M. y Paredes, C.) (2007). *Pequeños Dictadores. Seis personajes que (también) gobernaron un país.* **Lima: Ediciones Atenea.**

Gamarra Olivares, E. (2004). *Los ojos oscuros de la justicia.* **Lima: Artegrafía Impresiones.**

García, A. (2019). *Metamemorias.* **Lima: Planeta.**

García-Sayán, D. (2017). *Cambiando el futuro.* **Lima: Lápix Editores.**

Gasparini, J. (2002). *Mujeres de dictadores.* **Barcelona: Ediciones Península.**

Godoy, J. A. (2019). *El Comercio y la política peruana del siglo XXI. Pugnas entre liberales y conservadores detrás de las portadas.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Gorriti, G. (2008). El caso de Buenavista en: *Caretas* **Nro. 2010. Recuperado de** http://betamorsa.blogspot.com/2008/01/el-caso-de-buenavista-gustavo-gorriti.html

Gotuzzo, E. (1991). El cólera en el Perú, en *Revista Médica Herreriana,* **volumen 2, número 3. Recuperado de** https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/304

Hidalgo, D. (2017). *Sombras de un rescate. Tras las huellas ocultas en la residencia del embajador japonés.* **Lima: Planeta.**

Hidalgo, D. (2019). El presidente que no podía dejar de mentir, en Caparrós, M. y Fonseca, D. (editores). *Perdimos: ¿Quién gana la Copa América de la corrupción?* **Buenos Aires: Planeta.**

Huertas, M. (2009). *Los Reyes del Mambo.* **Lima, Planeta.**

Jara, U. (2005). *Historia de dos aventureros. La política como engaño.* **Lima: Grupo Editorial Norma.**

Jara, U. (2007). *Secretos del Túnel. Lima, Perú. 126 días de cautiverio en la residencia del embajador del Japón.* **Lima: Grupo Editorial Norma.**

Jara, U. (2017). *Ojo por ojo. La verdadera historia del Grupo Colina.* **Lima: Planeta.**

Jara, U. (2018). *El outsider. El origen de los aventureros en la política peruana.* **Lima: Planeta.**

Jochamowitz, L. (2018). *Ciudadano Fujimori.* **Lima: Planeta.**

Jochamowitz, L. (2019a). *Vladimiro: vida y tiempo de un corruptor.* **Lima: Planeta-El Comercio.**

Jochamowitz, L. (2019b). *Archivo expiatorio.* **Lima: Planeta.**

Landa Arroyo, C. (2007). *Tribunal Constitucional y Estado Democrático* **(Tercera edición corregida y aumentada). Lima: Palestra Editores.**

León, R. (2019). *Vizcarra. Retrato de un poder en construcción.* **Lima: Debate.**

Levitsky, S. y Way, L. (2010). *Competitive Autoritarianism. Hybrid regimes after the Cold War.* **New York: Cambridge University Press.**

Marañón, A. (2017). ¿Demócratas pero antipolíticos? Juventud universitaria y sentidos de lo político entre 1997-2000, en *La Colmena.* **Nro. 10, Lima.**

Meléndez, C. (2011). El partido del silencio. Castañeda Lossio y la evolución de una organización personalista, en Meléndez, C. (compilador). *Anticandidatos.* **Guía analítica para unas elecciones sin partidos. Lima: Mitin Editores.**

Meléndez, C. (2019). *El mal menor. Vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Mendoza Michilot, M. (2013). *100 años de periodismo en el Perú.* **Lima: Universidad de Lima.**

McClintock, C. y Vallas, F. (2005). *La democracia negociada: las relaciones Perú-Estados Unidos (1980-2000).* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Morimoto, A. (1999). *Los japoneses y sus descendientes en el Perú.* **Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.**

Murakami, Y. (2018). *Perú en la era del Chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador* **(Tercera edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Murakami, Y. (2019). *Sueños distintos en un mismo lecho. Desencuentros entre Perú y Japón durante la década de Fujimori* **(Segunda edición). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Ortiz, B. (2000). Yo trabajé para Alan García. Recuperado de https://web.archive.org/web/20071205065740/http://www.betoortiz.com/index. php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=116

Palacios, R. M.; Álvarez Rodrich, A. y Tafur, J. C. (2017). *Fuera del aire.* **Lima: Planeta.**

Panfichi, A.; Vila, G.; Chávez, N.; Saravia, S. (2018). *El otro partido: la disputa por el gobierno del fútbol peruano.* **Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.**

Paredes, C. (2006). *La caída del héroe. La verdadera historia del general Ketín Vidal.* **Lima: Planeta.**

Paredes, C. (2017). *La hora final. La verdad sobre la captura de Abimael Guzmán.* **Lima: Planeta.**

Parodi Trece, C. (2012). *Perú 1960-2000: políticas económicas y sociales en entornos cambiantes.* **Lima: Universidad del Pacífico.**

Parodi Trece, C. (2019a). *Perú 1995-2012: cambios y continuidades.* **Lima: Universidad del Pacífico.**

Parodi Trece, C. (2019b). *Los laberintos de América Latina. Economía y política, 1980-2018.* **Lima: Universidad del Pacífico.**

Pásara, L. (2019). *De Montesinos a los Cuellos Blancos. La persistente crisis de la justicia peruana.* **Lima: Planeta.**

Pásara, L.; Indacochea, C.; Cisneros Hamann, L. J.; Álvarez Rodrich, A. (2015). *Cipriani como actor político* **(Segunda edición aumentada). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Pease, H. (1994). *Los años de la Langosta: la escena política del fujimorismo.* **Lima: Ipadel.**

Pease, H. (1995). *Remando a contracorriente.* **Lima: Congreso Constituyente Democrático.**

Pease, H. (2003). *La autocracia fujimorista: del estado intervencionista al estado mafioso.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo de Cultura Económica.**

Pease, H. (2008). *La oposición democrática al fujimorato. Valentín Paniagua en su momento culminante.* **Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Pérez de Cuéllar, J. (2013). *Memorias. Recuerdos personales y políticos.* **Lima: Aguilar.**

Planas, P. (2000). *La democracia volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú contemporáneo.* **Lima: Fundación Friedrich Ebert.**

Quiroz, A. W. (2019). *Historia de la corrupción en el Perú* **(Tercera edición). Lima, Instituto de Estudios Peruanos.**

Reátegui Marchesi, R. (2013). *Imágenes de legitimidad: Canal N y la lucha por la hegemonía mediática de finales de los años 90.* **Tesis**

para obtener el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rénique, J. L. (2003). *La voluntad encarcelada. Las «luminosas trincheras de combate» de Sendero Luminoso del Perú.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Rénique, J. L.. (2016) *La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos.* **Lima: La Siniestra Ensayos – Universidad Nacional de Juliaca.**

Requena, J. C. (2010). *«Una gran ingenuidad». El Movimiento Libertad 1987-1989.* **Lima: Mitin Editores.**

Requena, J. C. (2011). No eres tú, soy yo. Partidos políticos y planchas presidenciales 1980-2011, en Meléndez, C. (compilador). *Anticandidatos. Guía analítica para unas elecciones sin partidos.* **Lima: Mitin Editores.**

Reyna, C. (2000). *La Anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990.* **Lima: Desco.**

Robles Espinoza, R. (1996). *Crimen e impunidad. El Grupo Colina y el poder.* **Lima: Asociación Pro Derechos Humanos.**

Rospigliosi, F. (2000a). *El arte del engaño. Las relaciones entre los militares y la prensa.* **Lima: Tarea Asociación Educativa.**

Rospigliosi, F. (2000b). *Montesinos y las fuerzas armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Rousseau, S. (2012). *Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Rubio Correa, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad**

Católica del Perú.

Ruiz Caro, A. (2007). Las privatizaciones en el Perú: un proceso con luces y con sombras, en *Nueva Sociedad.* **Nro. 203, enero-febrero.**

Salmón, E. (2019). *Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.* **Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.**

Schmidt, G. D. (1999). Crónica de una reelección, en Tuesta Soldevilla, F. (editor). *El juego político. Fujimori, la oposición y las reglas.* **Lima: Fundación Friedrich Ebert.**

Sifuentes, M. (2018). *H&H. Escenas de la vida conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia.* **Lima: Planeta.**

Sifuentes, M. (2019). *K.O. P.P.K. Vida secreta y caída pública de Pedro Pablo Kuczynski.* **Lima: Planeta.**

Sifuentes, M.; Migoya, H.; Montes, R. (2015). *Señorita Laura.* **Lima: Planeta.**

Silva Santisteban, R. (2008). *El Factor Asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo.* **Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.**

Soifer, H. y Vergara, A. (editores) (2019). *Politics after violence. Legacies of the Shining Path conflict in Peru.* **Austin: University of Texas Press.**

Sosa, P. (2016). ¿El despertar de la Fuerza Popular? Keiko Fujimori y el partido de las paradojas, en Meléndez, C. (editor). *Anticandidatos. El thriller político de las elecciones* **2016. Lima: Planeta.**

Soto, H. de (en colaboración con Ghersi, E.; Ghibellini. M. y el Instituto Libertad y Democracia) (1986). *El otro sendero. La*

Revolución Informal. **Lima: Editorial El Barranco.**

Starn, O. y La Serna, M. (2019). *The Shining Path: love, madness and revolution in the Andes.* **New York: W. W. Norton & Company Inc.**

Tanaka, M. (1998). *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Tanaka, M. (1999). *Los partidos políticos en el Perú, 1992-1999: estatalidad, sobrevivencia y política mediática.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos-Japan Center for Area Studies.**

Torres, A. (2010). *Opinión pública 1921-2021. Un viaje en el tiempo para descubrir cómo somos y qué queremos los peruanos.* **Lima, Aguilar.**

Torres, A. (2020). *Elecciones y decepciones. Historia de una democracia en construcción.* **Lima: Planeta.**

Torres y Torres Lara, C. (1995). *Hito 1324: el Pacto de Caballeros.* **Lima: Congreso de la República.**

Uceda, R. (2018). *Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército peruano.* **Lima: Planeta.**

Uceda, R. (2020). *La extorsión.* **Lima: Planeta.**

Ugaz, J. (2014). *Caiga quien caiga.* **Lima: Planeta.**

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (1995). *Uno de los dos. Los candidatos explican sus propuestas.* **Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.**

Urrutia, A. (2011). Que la Fuerza (2011) esté con Keiko: el nuevo baile del fujimorismo. El fujimorismo, su organización y sus estrategias de campaña, en Meléndez, C. (compilador).

Postcandidatos. Guía analítica de sobrevivencia hasta las próximas elecciones. **Lima: Mitin Editores.**

Valencia, R. (2009). Yehude Simon. El esclavo de las palabras, en Carranza, G.; Dongo, P.; Kawamura, E.; Shinno, T. y Valencia, R. *Yo Presidente. Cinco políticos en su ruta al poder.* **Lima: Planeta-Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.**

Vargas Llosa, A. (1991). *El diablo en campaña.* **Madrid: El País-Aguilar.**

Vargas Llosa, A. (2000). *En el reino del espanto.* **México D. F.: Grijalbo.**

Vargas Llosa, M. (2005). *El pez en el agua.* **Lima: Alfaguara.**

Vásquez de Velasco, V.; Lira, A.; Llanos, B.; Huertas, M. (2020). *Señora K.* **Lima: Página Once.**

Venturo, S. (2001). *Contrajuventud: ensayos sobre juventud y participación política.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Vivas, F. (2008). *En vivo y en directo: una historia de la televisión peruana* **(Segunda edición). Lima: Universidad de Lima.**

Vivas, F. (2018). *Mis monstruos favoritos.* **Lima: Aguilar.**

Vivas, F. (2020) Un *shock* **de verdad, en** *El Comercio,* **10 de agosto de 2020. Recuperado de** https://elcomercio.pe/politica/gobierno/un-shock-de-verdad-una-cronica-de-fernando-vivas-juan-carlos-hurtado-miller-alberto-fujimori-javier-perez-de-cuellar-mario-vargas-llosa-noticia/

Wicht, J. J. (con la colaboración de Rey de Castro, L.) (1998). *Rehén voluntario: 126 días en la residencia del Embajador de Japón.* **Lima: Alfaguara.**

Youngers, C. (2003). *Violencia política y sociedad civil en el Perú. Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.* **Lima:**

Instituto de Estudios Peruanos.

Yrigoyen, J. C. (2018). *Con todo, contra todos. Una historia de la selección peruana 1968-2018.* **Lima: Debate.**

Zapata, A. (2006). La corrupción bajo el fujimorato, en Portocarrero Suárez, F. *El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú.* **Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.**

Zapata, A. (2017). *La guerra senderista. Hablan los enemigos.* **Lima: Taurus.**

Zapata, A. y Sueiro, J. C. (1999). *Naturaleza y política: el gobierno y el Fenómeno del Niño en el Perú 1997-1998.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

Zavaleta, M. (2014). *Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política peruana.* **Lima: Instituto de Estudios Peruanos.**

AGRADECIMIENTOS

Este libro no sería posible sin el equipo de Penguin Perú. En particular, sin el arduo trabajo de Jerónimo Pimentel y Johann Page. Ambos creyeron en este proyecto desde el inicio, ayudaron a darle su forma final y, por supuesto, son los responsables principales de que llegue a las manos (o las pantallas) de los lectores. Este libro tampoco sería posible sin el invalorable trabajo de Luis Yslas Prado en la edición y corrección de estilo.

También agradezco a todos los autores que, desde diversos ángulos, han dedicado su valioso tiempo de investigación y escritura a la vida y el gobierno de Alberto Fujimori.

Baruch Ivcher me facilitó el acceso a su archivo personal, quizás uno de los más completos sobre la segunda mitad de los años noventa y la primera mitad de la década de dos mil. Le agradezco a él por las facilidades brindadas. Lo mismo a los eficientes trabajadores de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, donde consulté mucho del material para este libro.

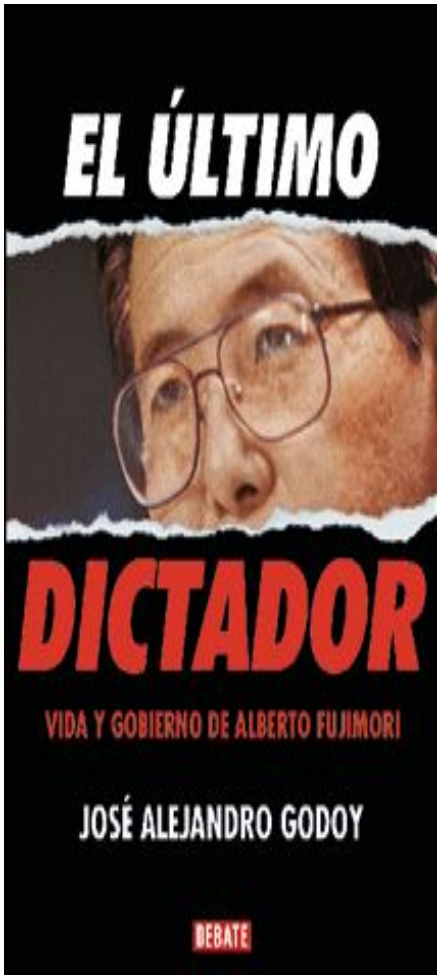
Alberto Vergara, Laura Grados, Marco Sifuentes y Ricardo Cuenca —antes de su nombramiento como ministro de Educación— brindaron recomendaciones sobre estilo, datos y bibliografía que ayudaron a la composición de este trabajo. A ellos, mi reconocimiento y el cariño de siempre. Debo anotar que cualquier error u omisión es entera responsabilidad mía.

Finalmente, a Romy Guardamino Báskovich, compañera y cómplice de la vida y de los tiempos de pandemia. Por su gran amor y paciencia, así como por algunos pequeños aportes que enriquecieron este libro. Y, por supuesto, por seguir construyendo, día a día, nuestro camino en común.

JOSÉ ALEJANDRO GODOY

Magister en Ciencia Política y Gobierno, y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Periodismo Político y Análisis Cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Docente en la PUCP, la Universidad del Pacífico, y ESAN Graduate School of Business. Consultor en Análisis y Comunicación Política. Ha sido columnista y colaborador para diversos diarios y revistas en el Perú. Autor de El Comercio y la política peruana del siglo XXI (2019).

© Carlos Wertheman



Los diez años en que Alberto Fujimori ejerció la presidencia del Perú (1990-2000) constituyen un capítulo crucial para entender nuestra historia contemporánea, a la luz de un periodo que dio pie a lo que se ha calificado como el último gobierno autoritario del siglo XX en el país.

Así lo entiende el autor de este libro, José Alejandro Godoy, quien, mediante una pormenorizada investigación periodística y bibliográfica, da cuenta de los manejos del poder durante una década de violencia, corrupción y autoritarismo, cuyos efectos pueden rastrearse aún en nuestra época. Más que un análisis político de los años

noventa en el Perú, El último dictador está concebido como un exhaustivo relato de los hechos más significativos de la vida y del gobierno de Alberto Fujimori. Un ejercicio de memoria histórica donde los lectores serán quienes saquen sus propios juicios de valor sobre los diez años en que nos extraviamos del camino hacia la democracia.

EL ÚLTIMO DICTADOR
VIDA Y GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

© 2021, JOSÉ ALEJANDRO GODOY
© 2021, PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S. A.
AVENIDA RICARDO PALMA 311, OFICINA 804, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
DEBATE ES UN SELLO EDITORIAL DE
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S. A.
DISEÑO: PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL / MANUEL GÓMEZ BURNS
ISBN E-BOOK: 978-612-4272-77-6
PRIMERA EDICIÓN: MARZO DEL 2021
CONVERSIÓN E-BOOK: MÓNICA CÁRDENAS
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTA PUBLICACIÓN NO PUEDE SER REPRODUCIDA, NI EN TODO NI EN PARTE, NI REGISTRADA EN O TRANSMITIDA POR, UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN, EN NINGUNA FORMA NI POR NINGÚN MEDIO, SEA MECÁNICO, FOTOQUÍMICO, ELECTRÓNICO, MAGNÉTICO, ELECTROÓPTICO, POR FOTOCOPIA, O CUALQUIER OTRO, SIN EL PERMISO PREVIO POR ESCRITO DE LA EDITORIAL.